# INFORMES DE ADMISIBILIDAD EN MATERIA DE GÉNERO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

José Israel Herrera
Rina Ma. Basora Trejo
Geofredo Angulo López

Editores y compiladores

UADY
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN



# INFORMES DE ADMISIBILIDAD EN MATERIA DE GÉNERO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

José Israel Herrera
María Basora Trejo
Geofredo Angulo López

Editores y compiladores



*INFORMES DE CASOS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: INFORMES DE ADMISIBILIDAD EN MATERIA DE GÉNERO*

D.R.© UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN, 2014

Obra con derechos reservados, prohibida
su reproducción parcial o total sin el
permiso escrito del titular de los derechos.

SECRETARÍA DE RECTORÍA
Departamento Editorial
Calle 61 núm. 526 entre 66 y 68 CP 97000
Tel. (999) 9-24-72-60, Fax (999) 9-23-97-69
Mérida, Yucatán, México

Compilador, editor y diseño gráfico
José Israel Herrera
Rina María Basora Trejo
Geofredo Angulo López

www.editorial.uady.mx
editorial@uady.mx ISBN:
ISBN: 978-607-8191-97-0

Impreso y hecho en Mérida, Yucatán, México.
Printed and made in Merida, Yucatan, Mexico.

**Índice**

Índice ..... 5

Introducción ..... 9

MARÍA EUGENIA MORALES DE SIERRA V. GUATEMALA, CASO 11.625, INFORME NO. 4/00, OEA/SER.L/V/II.111 DOC. 20 REV. EN 929 (2000). ..... 11

INFORME Nº 92/98. CASO 11.837. TRINIDAD Y TOBAGO. INDRAVANI PAMELA RAMJATTAN. 3 DE NOVIEMBRE DE 1998 ..... 26

INFORME Nº 71/99 CASO 11.656 MARTA LUCÍA ÁLVAREZ GIRALDO COLOMBIA 4 DE MAYO DE 1999. ..... 32

INFORME Nº102/99 CASO 11.307 MARÍA MERCIADRI DE MORINI ARGENTINA 27 de septiembre de 1999. ..... 38

INFORME Nº 129/99 CASO 11.565 ANA, BEATRIZ Y CELIA GONZÁLEZ PÉREZ MÉXICO 19 DE NOVIEMBRE DE 1999. ..... 46

INFORME NO 66/00. CASO 12.191. MARÍA MAMÉRITA MESTANZA CHÁVEZ. PERÚ. 3 DE OCTUBRE DE 2000. ..... 60

INFORME N° 73/01. CASO 12.350. MZ. BOLIVIA. 10 de octubre de 2001. ..... 66

INFORME Nº 118/01. CASO 12.230. ZOILAMÉRICA NARVÁEZ MURILLO. NICARAGUA. 15 de octubre de 2001 ..... 74

INFORME Nº 51/02. ADMISIBILIDAD. PETICIÓN 12.404. JANET ESPINOZA FERIA Y OTRAS. PERÚ. 10 DE OCTUBRE DE 2002. ..... 84

INFORME Nº 59/03. PETICIÓN 71/01. ADMISIBILIDAD. SONIA ARCE ESPARZA. CHILE. 10 DE OCTUBRE DE 2003 ..... 96

INFORME Nº 25/04. PETICIÓN 12.361. ADMISIBILIDAD. ANA VICTORIA SÁNCHEZ VILLALOBOS Y OTROS. COSTA RICA. 11 DE MARZO DE 2004. ..... 106

INFORME N° 16/05. PETICIÓN 281-02. ADMISIBILIDAD. CLAUDIA IVETTE GONZÁLEZ. MÉXICO. 24 DE FEBRERO DE 2005. ..... 120

INFORME N° 17/05. PETICIÓN 282-02. ADMISIBILIDAD. ESMERALDA HERRERA MONREAL. MÉXICO. 24 DE FEBRERO DE 2005. ..... 130

INFORME N° 18/05. PETICIÓN 283-02. ADMISIBILIDAD. LAURA BERENICE RAMOS MONARREZ. MÉXICO. 24 DE FEBRERO DE 2005. ..... 142

INFORME Nº 92/06. PETICIÓN 95-04. ADMISIBILIDAD. MARÍA ISABEL VÉLIZ FRANCO. GUATEMALA. 21 DE OCTUBRE DE 2006. ..... 154

INFORME N° 32/06. PETICIÓN 1175-03. ADMISIBILIDAD. PALOMA ANGÉLICA ESCOBAR LEDEZMA Y OTROS. MÉXICO. 14 de marzo de 2006. ..... 168

INFORME Nº 31/06. PETICIÓN 1176-03. ADMISIBILIDAD. SILVIA ARCE Y OTROS. MÉXICO. 14 de marzo de 2006. ..... 180

INFORME Nº 93/06. PETICIÓN 972-03. ADMISIBILIDAD. VALENTINA ROSENDO CANTÚ[1] Y OTROS. MÉXICO. 21 DE OCTUBRE DE 2006. ..... 192

INFORME Nº 94/06. PETICIÓN 540-04. ADMISIBILIDAD. INÉS FERNÁNDEZ ORTEGA[1] Y OTROS. MÉXICO. 21 DE OCTUBRE DE 2006. ..... 204

INFORME Nº 52/07. PETICIÓN 1490-05. ADMISIBILIDAD. JESSICA GONZÁLES Y OTROS. ESTADOS UNIDOS(*). 24 DE JULIO DE 2007. ..... 214

INFORME Nº 48/07. PETICIONES 261-03, 397-03 Y 1377-04. ADMISIBILIDAD. KARINA MONTENEGRO Y OTRAS. ECUADOR. 23 DE JULIO DE 2007 ..... 232

INFORME N° 29/07. PETICIÓN 712-03. ADMISIBILIDAD. ELENA TELLEZ BLANCO. COSTA RICA. 26 DE ABRIL DE 2007. ..... 248

INFORME Nº 38/07[1] PETICIÓN 12.263. ADMISIBILIDAD. MARCIA BARBOSA DE SOUZA. BRASIL. 26 DE JULIO DE 2007. ..... 264

INFORME Nº 40/08. PETICIÓN 270-07. ADMISIBILIDAD. I.V.[1]. BOLIVIA. 23 DE JULIO DE 2008. ..... 276

INFORME NO. 76/08. ADMISIBILIDAD. PETICIÓN 1055-06. PAOLA DEL ROSARIO GUZMÁN ALBARRACÍN Y FAMILIARES. ECUADOR. 17 DE OCTUBRE DE 2008. ..... 296

INFORME Nº 8/08. CASO 11.426. ADMISIBILIDAD. MARCELA ALEJANDRA PORCO. BOLIVIA. 4 DE MARZO DE 2008. ..... 312

INFORME Nº 42/08. ADMISIBILIDAD. PETICIÓN 1271-04. KAREN ATALA E HIJAS. CHILE[1]. 23 DE JULIO DE 2008. ..... 328

INFORME NO. 3/09. PETICIÓN 4408-02. ADMISIBILIDAD. V.R.P. Y V.P.C.[1]. NICARAGUA. 11 DE FEBRERO DE 2009. ..... 350

INFORME NO. 93/09. ADMISIBILIDAD. PETICIÓN 337-03. SAMANTA NUNES DA SILVA[1]. BRASIL*. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009. ..... 366

INFORME No. 7/10. PETICIÓN 12.378. ADMISIBILIDAD. FÁTIMA REGINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA Y MAURA TATIANE FERREIRA ALVES. BRASIL. 15 DE MARZO DE 2010. ..... 382

INFORME No. 110/10. PETICIÓN 1560-07. ADMISIBILIDAD. CLAUDINA ISABEL VELASQUEZ PAIZ Y OTROS. GUATEMALA. 4 de octubre de 2010. ..... 390

INFORME NO. 149/10. ADMISIBILIDAD. PETICIÓN 1147-05. M.P.C. Y FAMILIARES. PERÚ. 1 DE NOVIEMBRE DE 2010. ..... 400

INFORME NO. 154/10. ADMISIBILIDAD. PETICIÓN 1462-07. LINDA LOAIZA LÓPEZ SOTO Y FAMILIARES. VENEZUELA*. 1º DE NOVIEMBRE DE 2010. ..... 412

INFORME NO. 156/10. PETICIÓN 1368-04. ADMISIBILIDAD. DANIEL GERARDO GOMEZ, AIDA MARCELA GARITA Y OTROS. COSTA RICA. 1º DE NOVIEMBRE DE 2010. ..... 428

INFORME NO. 122/11. PETICIÓN 454-06. ADMISIBILIDAD. DIANORA MALENO. VENEZUELA. 19 DE OCTUBRE DE 2011. ..... 444

INFORME NO. 158/11 . PETICIÓN 512-08. ADMISIBILIDAD. MARIANA SELVAS GÓMEZ Y OTRAS. MÉXICO. 2 DE NOVIEMBRE DE 2011. ..... 458

INFORME NO. 20/12. PETICIÓN 1119-02. ADMISIBILIDAD. AURA DE LAS MERCEDES PACHECO BRICEÑO Y BALBINA FRANCISCA RODRÍGUEZ PACHECO. VENEZUELA. 20 DE MARZO DE 2012. ..... 472

SOBRE LOS COMPILADORES Y EDITORES ..... 482

## Introducción

El presente documento denominado "*INFORMES DE CASOS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: INFORMES DE ADMISIBILIDAD EN MATERIA DE GÉNERO*", se ha realizado con la intención de proporcionar al lector interesado en el tema de género, cuáles son los argumentos que maneja la CIDH, previo a los informes de fondo.

Para este documento se ha hecho una selección cuidadosa de aquellos en los que la CIDH, ha revisado elementos y conceptos, relacionados con Género, y en los que sus valoraciones se han convertido en la justificación principal para que el procedimiento continue.

Los conceptos, argumentos y alegatos presentados, son útiles para conocer los debates futuros de la CIDH, y mantener el interés en su desarrollo y resoluciones futuras, o bien, en los debates e informes que dieron origen a los casos más famosos de la CIDH, y que se han convertido actualmente en el sustento de la CIDH en materia de género.

**MARÍA EUGENIA MORALES DE SIERRA V. GUATEMALA, CASO 11.625, INFORME NO. 4/00, OEA/SER.L/V/II.111 DOC. 20 REV. EN 929 (2000).**

I.HECHOS DENUNCIADOS

1,El 22 de febrero de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Comisión") recibió una petición de fecha 8 de febrero de 1995 en la que se alegaba que los artículos 109, 110, 113, 114, 115, 131, 133, 255 y 317 del Código Civil de la República de Guatemala (en adelante, "el Código Civil"), que definen el papel de cada cónyuge dentro del matrimonio, establecen distinciones entre hombres y mujeres que son discriminatorias y violatorias de los artículos 1(1), 2, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "la Convención Americana").

2.Los peticionarios, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y María Eugenia Morales de Sierra, indicaron que el artículo 109 del Código Civil confiere al marido la representación conyugal, en tanto que el artículo 115 establece las instancias excepcionales en las que esta autoridad puede ser ejercida por la esposa. El artículo 131 faculta al esposo para administrar el patrimonio conyugal, en tanto que el artículo 133 dispone las excepciones limitadas a esta norma. El artículo 110 se refiere a las responsabilidades dentro del matrimonio, confiriendo a la esposa "el derecho y la obligación" especial de cuidar de los hijos menores y del hogar. El artículo 113 dispone que una mujer casada sólo puede ejercer una profesión o tener un empleo cuando ello no perjudique sus funciones de madre y ama de casa. Afirman que, de acuerdo con el artículo 114, el marido puede oponerse a las actividades fuera del hogar de la mujer toda vez que la sustente y tenga razones justificadas. En caso de controversia respecto a lo anterior, corresponderá la decisión a un juez. El artículo 255 confiere al marido la responsabilidad primaria de representar a los hijos de la unión matrimonial y de administrar sus bienes. El artículo 317 dispone que, por virtud de su sexo, la mujer puede ser eximida del ejercicio de ciertas formas de tutela.

3.Los peticionarios declararon que la constitucionalidad de estas disposiciones jurídicas se había impugnado ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en el caso 84-92.En respuesta a ello, la Corte había dictaminado que las distinciones eran constitucionales pues, entre otras cosas, ofrecían certeza jurídica en la asignación de las funciones dentro del matrimonio. Los peticionarios solicitaron que la Comisión determinara que esas disposiciones del Código Civil son incompatibles in abstracto con las garantías dispuestas en los artículos 1(1), 2, 17 y 24 de la Convención Americana.

4.La Comisión señaló a los peticionarios que identificaran víctimas concretas, ya que ello era requerido bajo su sistema de casos. El 23 de abril de 1997 los peticionarios presentaron por escrito a María Eugenia Morales de Sierra como la víctima concreta en el caso.

## II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5.De conformidad con la presentación de la petición del 14 de marzo de 1995, los peticionarios enviaron a la Comisión una copia de la sentencia pronunciada por la Corte de Constitucionalidad en el caso 84-92.La Comisión inició el caso 11.625 el 6 de mayo de 1996, enviándose las partes pertinentes de la petición a la República de Guatemala (en adelante, "el Estado" o "el Estado guatemalteco"), solicitándole que remitiera información dentro de un plazo de 90 días.

6.El Estado solicitó prórroga del plazo para responder mediante una nota del 6 de agosto de 1996.En una nota del 7 de agosto de 1996, la Comisión indicó que concedía una prórroga de 30 días.

7.La respuesta del Estado fue recibida el 10 de diciembre de 1996 y se enviaron las partes pertinentes de la misma a los peticionarios, solicitando sus observaciones.

8.De acuerdo con la solicitud de los peticionarios, la Comisión concedió una audiencia para abordar la admisibilidad del caso 11.625 en el curso del 93º período ordinario de sesiones. Al concluir esa audiencia, celebrada el 10 de octubre de 1996 en la sede de la Comisión, las partes acordaron que aquélla examinaría la materia en el próximo período de sesiones para abordar los desarrollos y evaluar la viabilidad de resolver el caso mediante el procedimiento de solución amistosa iniciado.

9.La información adicional que aportaron los peticionarios durante la audiencia fue transmitida formalmente al Estado mediante una nota del 15 de octubre de 1996, solicitándole sus observaciones.

10.El 13 de diciembre de 1996, el Estado transmitió un informe a la Comisión sobre las acciones pendientes para la reforma del Código Civil, así como el texto de la "Ley para prevenir, sancionar y castigar la violencia intrafamiliar", aprobada por el Congreso por decreto número 97-96, que entraría en vigor el 28 de diciembre de 1996.Esta información fue remitida a los peticionarios por nota del 9 de enero de 1997.

11.De acuerdo con la solicitud presentada por los peticionarios el 24 de enero de 1997, la Comisión celebró una audiencia sobre este caso en su sede, el 5 de marzo de 1997, en el curso del 95º período ordinario de sesiones. La Comisión preguntó a los peticionarios si estaban solicitando una determinación in abstracto o presentando una denuncia individual. Los peticionarios indicaron que, en el caso concreto, María Eugenia Morales Aceña de Sierra había sido directamente afectada por la legislación impugnada, y también representaba a otras mujeres víctimas en Guatemala. La Comisión les solicitó que formalizaran por escrito la condición de víctima de María Eugenia Morales de Sierra, para dar cumplimiento a sus disposiciones reglamentarias y proceder a tramitar esta petición bajo su sistema de casos.

12.Los peticionarios formalizaron la condición de víctima de María Eugenia Morales de Sierra en comunicación del 23 de abril de 1997, fecha desde la cual se considera establecida en el expediente tal condición. Las partes pertinentes de esta comunicación fueron remitidas al Estado, solicitándole sus observaciones, mediante nota del 9 de junio de 1997.

13.El 10 de julio de 1997, el Gobierno presentó un breve escrito con información adicional que fue transmitida a los peticionarios para que presentaran sus observaciones, mediante nota del 14 de julio de 1997.

14.El 28 de julio de 1997, los peticionarios presentaron a la Comisión documentación complementando su escrito del 23 de abril de 1997.La documentación fue transmitida al Gobierno de Guatemala el 14 de agosto de 1997 para recabar sus observaciones.

15.De acuerdo con lo solicitado por los peticionarios, la Comisión celebró otra audiencia sobre la admisibilidad del presente caso el 10 de octubre de 1997, en su sede, en el curso del 97º período de sesiones. Luego de las averiguaciones instruidas por la Comisión, el Estado indicó que seguía dispuesto a considerar la opción de una solución amistosa. Los peticionarios indicaron su convicción de que esta opción había sido extensamente explorada pero no había arrojado resultados positivos.

16.El 6 de marzo de 1998, la Comisión aprobó el Informe 28/98, declarando admisible el presente caso. Ese Informe fue remitido a ambas partes en sendas notas del 2 de abril de 1998.[1]

17.Citando las deliberaciones en curso en relación con la reforma de los artículos pertinentes del Código Civil, el 5 de mayo de 1998, el Estado solicitó una prórroga del plazo para presentar la información pertinente al Informe 28/98. La Comisión concedió la prórroga hasta el 22 de junio de 1998 e informó a los peticionarios de este extremo.

18.El Estado presentó un breve escrito de fecha 23 de junio de 1998, en el que indicaba que seguía dispuesto a iniciar negociaciones para una solución amistosa y solicitaba que, si esto fuera aceptado por los peticionarios, la Comisión suspendiera el trámite de la materia. Este escrito fue remitido a los peticionarios, solicitando sus observaciones, mediante nota del 16 de julio de 1998.

19.Los peticionarios presentaron un resumen de sus argumentos en relación con los méritos de las denuncias planteadas mediante una nota del 10 de agosto de 1998.Las partes pertinentes de la misma fueron remitidas al Estado el 27 de agosto de 1998.para que presentara sus observaciones.

## III.POSICIÓN DE LAS PARTES

### Posición de los peticionarios

20.Desde que se inició este asunto, los peticionarios han sostenido que los artículos del Código Civil de Guatemala impugnados establecen distinciones entre el hombre y la mujer que son discriminatorias y, por tanto, violan las normas de la Convención Americana. De acuerdo con su designación de María Eugenia Morales de Sierra como víctima en el caso, los peticionarios sostienen que esos artículos la colocan en situación de subordinación jurídica de su marido y no le permiten ejercer control sobre aspectos importantes de su vida. Indican que las citadas disposiciones discriminan contra la víctima de manera inmediata, directa y continuada, en violación de los derechos establecidos en los artículos 1(1), 2, 17 y 24 de la Convención Americana. De acuerdo con los argumentos presentados después de la aprobación del Informe 28/98 por la Comisión, admitiendo el caso, alegan, además, que esta discriminación transgrede la vida privada y familiar de la víctima, en contravención del artículo 11(2) de la Convención.

21.Los peticionarios sostienen que los artículos 109, 110, 113, 114, 115, 131, 133, 255 y 317 del Código Civil crean distinciones entre las mujeres casadas, las mujeres solteras y los hombres casados, de lo que resulta que María Eugenia Morales no puede ejercer los derechos que se confieren a esos otros grupos. Citando la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, incluida la de la Corte Interamericana, afirman que, si bien una diferencia de trato no necesariamente implica una discriminación, toda distinción de ese tipo debe estar objetivamente justificada en la consecución de fines legítimos y que los medios empleados deben ser proporcionales a esos fines. Las distinciones en cuestión en este caso –sostienen– son ilegítimas e injustificadas.

22.Los peticionarios alegan que, como mujer casada que vive en Guatemala, madre, profesional y propietaria de bienes adquiridos conjuntamente con su marido durante el matrimonio, la Sra. Morales de Sierra está sometida a los efectos inmediatos de este régimen legal en virtud de su sexo y su estado civil, y por el mero hecho de que las disposiciones impugnadas están vigentes. En virtud del artículo 109, la representación conyugal corresponde al marido que, en virtud del artículo 131, administra el patrimonio conyugal. Los artículos 115 y 133 disponen las excepciones respectivas a estas normas generales sólo cuando el marido se encuentra esencialmente ausente. En virtud del artículo 255, el marido representa y administra los bienes de los menores y los discapacitados. En contraste con ello, la esposa puede ser excusada del ejercicio de la tutela en virtud de su sexo y de lo dispuesto en el artículo 317.Esos artículos impiden que la Sra. Morales de Sierra represente legalmente sus propios intereses y los de su familia, y exigen que dependa de su marido para ello.

23.Además, su derecho a trabajar está condicionado a lo que los peticionarios caracterizan como una división legislativa anacrónica de los deberes dentro del matrimonio, por cuanto el artículo 110 dispone que el cuidado del hogar y de los niños corresponde a la esposa y madre, y los artículos 113 y 114 disponen que la esposa puede desempeñar actividades fuera del hogar sólo en la medida en que las mismas no perjudiquen sus funciones en él. Aunque el esposo de la víctima nunca se opuso a que ésta ejerciera su profesión, por ley, puede hacerlo en cualquier momento y, en el caso de una disputa, la decisión corresponde a un juez. Los peticionarios hacen referencia a una afirmación de obiter dictum de la Corte

Interamericana en su Opinión Consultiva OC-14 para sostener que una norma que priva de un derecho a un grupo dentro de una población, por ejemplo, sobre la base de factores tales como la raza o el sexo, automáticamente perjudica a todos los miembros del grupo afectado.

24.Los peticionarios impugnan la conclusión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de que las disposiciones impugnadas están justificadas como forma de protección de la mujer y como medio de establecer certeza jurídica en la asignación de derechos y responsabilidades dentro del matrimonio. Afirman que los medios empleados son desproporcionados y que la discriminación resultante en el tratamiento no es razonable. Sostienen que estas disposiciones son contrarias al principio de igualdad entre los cónyuges y anulan la capacidad jurídica de la mujer casada dentro del orden jurídico interno, con lo que se controvierte la protección consagrada en los artículos 17 y 24 de la Convención Americana, así como las obligaciones dispuestas en los artículos 1(1) y 2.Además, argumentan que la manera en que las disposiciones impiden que la víctima ejerza sus derechos, al limitar, por ejemplo, su derecho al trabajo o a disponer de sus bienes, constituye una injerencia injustificada en su vida privada, en contravención del artículo 11(2).

25.Por último, los peticionarios señalan que las disposiciones impugnadas contravienen los artículos 15 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, disposiciones a las que la Comisión podría referirse al formular su decisión. Agregan que la relación reconocida entre la desigualdad en las relaciones de género y la prevalencia de la violencia contra la mujer también podrían servir de pauta en el análisis de la Comisión.

Posición del Estado

26.El Estado no controvierte la sustancia de las reclamaciones planteadas por los peticionarios. Por el contrario, sostiene que sigue adoptando medidas para modificar los artículos impugnados del Código Civil y hacerlos congruentes con las normas de la Convención Americana y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En las actuaciones ante la Comisión previas a la aprobación del Informe 28/98, el Estado reconoció que las disposiciones citadas son "desactualizadas" y crean preocupación respecto de la obligación de no discriminación. Señala, además, que los empeños en favor de la reforma de estos artículos se han basado en el hecho de que contravienen el artículo 46 de la Constitución, así como las disposiciones de la Convención Americana y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Gobierno subrayó que ha demostrado su interés en derogar o reformar ciertos artículos del Código Civil, tanto a través del apoyo a iniciativas en favor de enmiendas legislativas como mediante la impugnación de la constitucionalidad de los artículos 113 y 114 presentada por el Procurador General en 1996.

27.Fue principalmente sobre la base de las iniciativas pendientes en favor de una reforma que el Estado ha impugnado la admisibilidad del caso, sosteniendo que los mecanismos internos seguían ofreciendo una reparación accesible y efectiva de la situación denunciada y

que los peticionarios, por tanto, no habían satisfecho el requisito de agotamiento de los recursos internos.[2]Luego de la aprobación por la Comisión del informe sobre admisibilidad, el Estado indicó que el Congreso seguía empeñado en la modificación de ciertos artículos del Código Civil a fin de hacerlo congruente con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En cuanto al escrito presentado por el Estado el 22 de junio de 1998, esas reformas seguían siendo debatidas en el Congreso. El Estado sostiene que las medidas emprendidas en favor de una reforma de los artículos impugnados demuestran su compromiso de defender las garantías establecidas en la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en otros instrumentos internacionales aplicables.

## IV.CONSIDERACIONES SOBRE EL FONDO

### Consideraciones iniciales

28.Desde el comienzo, conviene señalar que, pese a la presentación de varios proyectos de reforma ante las comisiones del Congreso de Guatemala encargadas de pronunciarse sobre tales iniciativas, a la fecha del presente Informe, los artículos pertinentes del Código Civil siguen vigentes en la República de Guatemala. En pocas palabras, el artículo 109 dispone que la representación conyugal corresponde al marido, aunque ambos cónyuges tienen igual autoridad dentro del hogar.[3] El artículo 110 estipula que el marido tiene ciertas obligaciones de proteger y asistir a la esposa, en tanto ésta tiene el derecho y la obligación especiales de cuidar de los hijos menores y del hogar.[4]El artículo 113 establece que la esposa puede ejercer una profesión o tener otras responsabilidades fuera del hogar sólo en la medida en que ello no perjudique sus responsabilidades en el hogar.[5]El artículo 114 establece que el marido puede oponerse a que la esposa desempeñe actividades fuera del hogar cuando brinde un sustento adecuado del hogar y tenga "motivos suficientemente justificados". De ser necesario, un juez resolverá las disputas que puedan plantearse en este aspecto.[6] El artículo 115 afirma que la representación conyugal puede ser ejercida por la esposa cuando el marido no lo hace, particularmente cuando abandone el hogar, se encuentre detenido o ausente por otras razones.[7] El artículo 131 establece que el marido administrará el patrimonio conyugal.[8] El artículo 133 establece excepciones a esta norma sobre la misma base establecida en el artículo 115.[9] El artículo 255 dispone que, en los casos en que el marido y la esposa ejerzan la patria potestad, el marido representará a los menores y administrará sus bienes.[10] El artículo 317 establece que ciertas clases específicas de personas pueden ser exceptuadas de ejercer algunas formas de tutela, incluidas, entre otras, las mujeres.[11]

29.La Comisión recibió información sobre dos iniciativas en favor de la reforma de esos artículos durante su visita in loco realizada en Guatemala del 6 al 11 de agosto de 1998, pero hasta ahora no ha recibido información alguna sobre las medidas correspondientes del plenario del Congreso. Tampoco ha recibido información sobre los resultados, si los hubo, de la impugnación constitucional contra los artículos 113 y 114, presentada por el Procurador General ante la Corte de Constitucionalidad en 1996.Si bien el Estado parecería vincular los constantes empeños en favor de la reforma a su voluntad de explorar

la opción de una solución amistosa, los peticionarios han indicado que consideran que la posibilidad de una solución amistosa ha sido explorada y agotada.

30.Los párrafos 28 y 29 hacen referencia a una situación general que la Comisión estudio en su reciente visita in loco, y además a la que hizo referencia en su Informe sobre la Condición de la Mujer en las Américas (véase las referencias, infra).En el caso concreto de María Eugenia Morales de Sierra, la Comisión explícitamente se planteó el tema de su competencia ratione personae en su Informe 28/98 sobre admisibilidad:

Con respecto a la cuestión de la jurisdicción ratione personae, la Comisión ha explicado previamente que, en general, su competencia en el trámite de casos individuales se refiere a hechos que entrañan los derechos de una persona o personas específicas. Véase, en general, CIDH, Caso de Emérita Montoya González, Informe 48/96, Caso 11.553 (Costa Rica), en el Informe Anual de la CIDH 1996, OEA/Ser.L/V/II.95, Doc. 7 rev., 14 de marzo de 1997, párrafos 28, 31.La Comisión tiene una competencia más amplia en virtud del artículo 41.b de la Convención para dirigir recomendaciones a los Estados miembros para la adopción de medidas progresivas en favor de la protección de los derechos humanos.

Con posterioridad a la petición original de una decisión in abstracto, que parecería fundarse en la competencia que confiere a la Comisión el Artículo 41.f, los peticionarios modificaron su petición y designaron a María Eugenia Morales de Sierra como una víctima concreta, como se planteó anteriormente, en comunicación de 23 de abril de 1997.Con la identificación de una víctima concreta, la Comisión puede proceder a su decisión sobre la admisibilidad del presente caso. Como ha explicado la Honorable Corte, para iniciar los procedimientos establecidos en los artículos 48 y 50 de la Convención Americana la Comisión requiere una petición que contenga una denuncia de una violación concreta respecto de una persona determinada. Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-14/94, "Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 de la Convención Americana)", del 9 de diciembre de 1994, párr. 45, véase también, párrs. 46-47.Con referencia a los otros mecanismos contenciosos del sistema, el artículo 61.2 de la Convención establece, además, que "[p]ara que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados" los procedimientos establecidos en dichos artículos."La jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y libertades de personas determinadas y no con la de resolver casos abstractos". Id. párr. 49.[12]
Derecho de María Eugenia Morales de Sierra a igual protección y a igualdad ante la ley

31.El derecho a igual protección de la ley establecido en el artículo 24 de la Convención Americana exige que la legislación nacional acuerde las protecciones sin discriminación. Las diferencias de tratamiento en circunstancias por lo demás similares, no necesariamente son discriminatorias.[13]Una distinción que se basa en "criterios razonables y objetivos" podría servir un interés legítimo del Estado en conformidad con las disposiciones del artículo 24.[14] En realidad, podría ser necesaria para hacer justicia o proteger a personas que requieren la aplicación de medidas especiales.[15] Una distinción basada en criterios

razonables y objetivos (1) persigue un propósito legítimo y (2) emplea medios proporcionales al fin que se busca.[16]

32.De acuerdo con el estatus de Guatemala como Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer[17] y conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención Americana,[18] es preciso señalar que el artículo 15(1) de aquélla exige que los Estados partes garanticen la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. El artículo 15(2) especifica que la mujer debe merecer la misma capacidad jurídica que los hombres en los asuntos civiles, en particular respecto de la concertación de contratos y la administración de bienes, y las mismas oportunidades para ejercer esa condición. La discriminación contra la mujer, de acuerdo con la definición de esta Convención, es:

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Esta definición, respondiendo, como lo hace, a causas y consecuencias específicas de discriminación por género, abarca formas de desventaja sistemática que afectan a la mujer que podrían no haber estado contempladas en normas anteriores.

33.En las actuaciones ante la Comisión, el Estado no ha controvertido el hecho de que los artículos 109, 110, 113, 114, 115, 131, 133, 255 y 317 del Código Civil crean, entre la mujer casada y el hombre casado, distinciones que se basan en el sexo; en realidad, ha reconocido que algunos aspectos de las disposiciones impugnadas son incongruentes con las disposiciones sobre igualdad y no discriminación de la Constitución, la Convención Americana y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

34.Pese a este reconocimiento, sin embargo, la decisión adoptada el 24 de junio de 1993 por la Corte de Constitucionalidad sobre la validez de los artículos citados sigue siendo la aplicación e interpretación autorizada de la ley nacional. Esta decisión se basa en el hecho de que la Constitución establece que el hombre y la mujer tienen derecho a igualdad de oportunidades y responsabilidades, cualquiera sea su estado civil, así como a la igualdad de derechos dentro del matrimonio. Señala que ciertos tratados de derechos humanos, incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, forman parte del derecho interno. En su análisis del artículo 109, la Corte indica que la atribución jurídica de la representación conyugal al marido se justifica en razón de la "certeza y la seguridad jurídica". Para la Corte, esto no plantea discriminación contra la esposa, pues está libre de disponer de sus propios bienes, y ambos cónyuges tienen igual autoridad dentro del hogar. La Corte valida el artículo 115 sobre la misma base. Con respecto al artículo 131, que otorga autoridad al marido para administrar el patrimonio conyugal, la Corte recuerda que, según el artículo 109, ambos cónyuges decidirán sobre

materias que interesan a la economía familiar, inclusive si serán titulares conjuntos o separados de los bienes. En ausencia de esta decisión, las razones de certeza y seguridad jurídica justifican la aplicación del artículo 131.La Corte concluye que el artículo 133 es válido por las mismas razones.

35.Al analizar el artículo 110, que atribuye la responsabilidad del sustento del hogar al marido y la responsabilidad por el cuidado de los hijos menores y del hogar a la esposa, la Corte subraya el apoyo mutuo que los cónyuges deben brindarse y la necesidad de proteger el hogar y los hijos. La división de funciones no pretende discriminar –concluye la Corte– sino proteger a la esposa en su función de madre, y proteger a los hijos. La mujer no se ve perjudicada; por el contrario, las disposiciones realzan su autoridad. Al analizar los artículos 113 y 114, que permiten que la mujer ejerza tareas fuera del hogar en la medida en que ello no esté en conflicto con sus obligaciones en el hogar, la Corte afirma que esta disposición no contiene prohibición alguna de los derechos de la mujer. Como ningún derecho es absoluto, el artículo incluye limitaciones encaminadas primordialmente a proteger a los hijos de la unión. Congruentemente con los deberes de cada cónyuge, el marido puede oponerse a que la esposa cumpla tareas fuera del hogar sólo si ofrece un sustento adecuado y tiene razones justificadas. La disposición que establece que un juez decidirá en caso de desacuerdo brinda una protección contra posible acción arbitraria pues garantiza que las razones del marido se refieran al papel legalmente definido de la esposa y a la protección de los hijos.

36.La Comisión observa que las garantías de igualdad y no discriminación consagradas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reflejan bases esenciales del propio concepto de derechos humanos. Como lo ha afirmado la Corte Interamericana, estos principios se desprenden "directamente de la unidad de naturaleza del género humano y [son] inseparable[s] de la dignidad esencial de la persona".[19]Las distinciones estatutarias basadas en criterios vinculados a condiciones tales como la raza o el sexo, exigen un escrutinio más intenso. Lo que la Corte y la Comisión Europeas han afirmado también rige para las Américas, es decir, que dado que "el avance de la igualdad de los sexos es hoy un objetivo muy importante", … "tendrían que mediar razones de mucho peso" para justificar una distinción basada únicamente en razones de sexo.[20]

37.Las distinciones de género objeto de estudio han sido defendidas dentro del marco del derecho interno esencialmente sobre la base de la necesidad de la certeza y seguridad jurídicas, de la necesidad de proteger el hogar y a los hijos, respecto de valores guatemaltecos tradicionales, y, en ciertos casos, de la necesidad de proteger a la mujer en su calidad de esposa y madre. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad no intentó probar la validez de estos asertos o sopesar otras posiciones, y la Comisión no está persuadida de que las distinciones citadas sean siquiera congruentes con los objetivos articulados. Por ejemplo, el hecho de que el artículo 109 excluya a la mujer casada del ejercicio de la representación conyugal, excepto en circunstancias extremas, no contribuye a una administración ordenada de la justicia ni favorece su protección, la de su hogar o la de sus hijos. Por el contrario, priva a la mujer casada de la capacidad jurídica necesaria para

invocar la protección judicial que una administración ordenada de la justicia y la Convención Americana exigen esté a disposición de toda persona.

38.Al exigir que la mujer casada -en este caso María Eugenia Morales de Sierra- dependa de su marido para representar a la unión, los términos del Código Civil imponen un sistema en el que la capacidad de aproximadamente un mitad de la población de las personas casadas para actuar en una serie de cuestiones esenciales está subordinada a la voluntad de la otra mitad. El efecto global de las disposiciones impugnadas es denegar a la mujer casada su autonomía legal.[21]El hecho de que el Código Civil prive a María Eugenia Morales de Sierra, como mujer casada, de la capacidad legal a la que otros guatemaltecos tienen derecho, hace vulnerables sus derechos a una violación sin recurso.[22]

39.En el caso actual, la Comisión considera que las distinciones basadas en el género establecidas en los artículos impugnados no pueden justificarse y contravienen el derecho de María Eugenia Morales de Sierra establecido en el artículo 24.Esas restricciones tienen efecto inmediato y se plantean sencillamente en virtud del hecho de que las disposiciones citadas están vigentes. Como mujer casada, se le han negado en base a su sexo protecciones de que gozan los hombres casados y otros guatemaltecos. Las disposiciones que impugna restringen, entre otras cosas, su capacidad jurídica, su acceso a los recursos, su posibilidad de concertar cierto tipo de contratos (vinculados, por ejemplo, al patrimonio conyugal), de administrar esos bienes y de invocar recursos administrativos o judiciales, y tienen el efecto ulterior de reforzar las desventajas sistemáticas que impiden la capacidad de la víctima para ejercer una serie de otros derechos y libertades.

El caso de María Eugenia Morales de Sierra y protección a la familia: igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades en el matrimonio

40.El artículo 17(1) de la Convención Americana establece los derechos vinculados a la vida familiar de acuerdo con la disposición de que, como "elemento natural y fundamental de la sociedad", la familia "debe ser protegida por la sociedad y el Estado". El derecho a contraer matrimonio y fundar una familia está sujeto a ciertas condiciones del derecho nacional, aunque las limitaciones que por esa vía se introducen no deben ser tan restrictivas que "se dificulte la propia esencia del derecho".[23]El artículo 17(4), que deriva del artículo 16(1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, especifica que "[l]os Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges" en el matrimonio y en su disolución. A este respecto, el artículo 17(4) es la "aplicación concreta" del principio general de igual protección y no discriminación en el matrimonio, del artículo 24.[24]

41.En el caso de Guatemala y de otros Estados partes, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer especifica las medidas que deben adoptarse para garantizar una igualdad sustantiva en la legislación sobre la familia y las relaciones familiares. De acuerdo con el artículo 16 de esa Convención, los Estados partes deben garantizar, entre otras cosas, sobre la base de la "igualdad entre hombres y mujeres", los mismos derechos y deberes con respecto al ejercicio de la custodia y otros tipos de tutela

de los hijos; los "mismos derechos personales… a elegir apellido, profesión y ocupación"; y los mismos derechos con respecto a la propiedad, administración y disposición de los bienes.

42.Los peticionarios han indicado que los citados artículos del Código Civil impiden a la esposa y al marido el ejercicio equitativo de sus derechos y el pleno cumplimiento de sus responsabilidades en el matrimonio. María Eugenia Morales de Sierra alega que, aunque su vida familiar se basa en el principio del respeto recíproco, el hecho de que la ley atribuya autoridad exclusiva a su marido en la representación conyugal y de los hijos menores, crea un desequilibrio en el peso de la autoridad ejercida por cada cónyuge dentro del matrimonio, desequilibrio que puede percibirse dentro de la familia, la comunidad y la sociedad. Si bien la víctima, como madre, tiene el derecho y el deber de proteger los mejores intereses de sus hijos menores, la ley le quita la capacidad legal para ello.

43.Como se señaló, los artículos impugnados del Código Civil establecen distintas funciones para cada cónyuge. El marido es responsable del sustento financiero del hogar y la mujer es responsable del cuidado del hogar y de los hijos (artículo 110).La esposa puede trabajar fuera del hogar sólo en la medida en que ello no perjudique sus funciones legalmente definidas en él (artículo 113), en cuyo caso, su marido tiene derecho a oponerse a dichas actividades (artículo 114).El marido representa a la unión conyugal (artículo 109), controla el patrimonio conyugal (artículo 131), representa a los hijos menores y administra sus bienes (artículo 255).La Corte de Constitucionalidad caracterizó la reglamentación del matrimonio por el Estado como fuente de certeza y seguridad jurídica para cada cónyuge y defendió la distinción de funciones sobre la base de que las normas establecen preferencias que no son discriminatorias, sino protectoras.

44.La Comisión halla que, lejos de asegurar la "igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades" dentro del matrimonio, las disposiciones citadas institucionalizan desequilibrios en los derechos y deberes de los cónyuges. Si bien el artículo 110 sugiere una división de tareas entre las responsabilidades financieras del marido y las responsabilidades domésticas de la esposa, corresponde señalar que, de acuerdo con el artículo 111, la esposa con una fuente separada de ingreso tiene que contribuir al mantenimiento del hogar o sustentarlo en su totalidad, si su marido no puede hacerlo. El hecho de que la ley otorgue una serie de capacidades legales exclusivamente al marido establece una situación de dependencia de jure para la esposa y crea un desequilibrio incorregible en la autoridad de los esposos dentro del matrimonio. Además, las disposiciones del Código Civil aplican conceptos estereotipados de las funciones de la mujer y del hombre que perpetúan una discriminación de facto contra la mujer en la esfera familiar y que tienen el efecto ulterior de dificultar la capacidad de los hombres para desarrollar plenamente sus papeles dentro del matrimonio y de la familia. Los artículos en cuestión crean desequilibrios en la vida familiar, inhiben el rol del hombre respecto del hogar y los hijos y, en tal sentido, privan a éstos de una atención plena y equitativa de ambos padres. "Una familia estable es aquella que se basa en los principios de equidad, justicia y realización individual de cada uno de sus integrantes".[25]

45.En el caso de la Sra. Morales de Sierra, la Comisión concluye que los artículos impugnados obstaculizan el deber del Estado de proteger a la familia al imponer un régimen que impide que la víctima ejerza sus derechos y cumpla sus responsabilidades dentro del matrimonio en pie de igualdad con su esposo. El Estado no ha adoptado las medidas para garantizar la igualdad de derechos y equilibrar las responsabilidades dentro del matrimonio. En consecuencia, en este caso, el régimen conyugal vigente es incompatible con las disposiciones del artículo 17(4) de la Convención Americana, leído con referencia a los requisitos del artículo 16(1) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

* La Comisionada Marta Altolaguirre, de nacionalidad guatemalteca, no participó en la discusión y decisión de este Informe, conforme lo requiere el artículo 19(2)(a) del Reglamento de la Comisión.

[1] El informe 28/98 se publicó en el Informe Anual de la CIDH de 1997, OEA/Ser.L/V/II.98, Doc. 7 rev., 13 de abril de 1998, pág. 148.

[2] Véase, en general, Informe 28/98, supra, párrs. 23, 27 y 20.

[3] El artículo 109 del Código Civil establece: "(Representación conyugal).—La representación conyugal corresponde al marido, pero ambos cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; fijarán de común acuerdo el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la economía familiar".

[4] El artículo 110 del Código Civil establece: "(Protección a la mujer).—El marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas.

La mujer tiene especialmente el derecho y la obligación de atender y cuidar a sus hijos durante la menor edad y dirigir los quehaceres domésticos".

[5] El artículo 113 del Código Civil establece" "(Mujer empleada fuera del hogar).—La mujer podrá desempeñar un empleo, (38) ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, (39) cuando ello no perjudique el interés y cuidado de los hijos ni las demás atenciones del hogar".[Las notas 38 y 39 hacen referencia a artículos de la Constitución y Código de Comercio.]

[6]El artículo 114 del Código Civil establece: "—El marido puede oponerse a que la mujer se dedique a actividades fuera del hogar, siempre que suministre lo necesario para el sostenimiento del mismo y su oposición tenga motivos suficientemente justificados. El juez resolverá de plano lo que sea procedente".

[7] El artículo 115 del Código Civil establece: "(Representación de la mujer).—La representación conyugal será asumida por la mujer cuando por cualquier motivo deje de ejercerla el marido y especialmente en los casos siguientes: 1o.—Si se declara la interdicción del marido; 2o.—Si el marido abandona voluntariamente el hogar, o se declara su ausencia; y 3o.—Si el marido fuere condenado a prisión, y por todo el tiempo que ésta dure".

[8] El artículo 131 del Código Civil establece: "—En el régimen de comunidad absoluta o en el de comunidad de gananciales, el marido es el administrador del patrimonio conyugal, sin que sus facultades puedan exceder los límites de una administración regular.

Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciere de bienes comunes".

[9] El artículo 133 del Código Civil establece: "(Administración de la mujer).—La administración del patrimonio conyugal se transfiere a la mujer en los casos del artículo 115, con las mismas facultades, limitaciones y responsabilidades que establecen los artículos anteriores".

[10] El artículo 255 del Código Civil establece: "—Cuando la patria potestad la ejerzan conjuntamente el padre y la madre durante el matrimonio o la unión de hecho, la representación del menor o incapacitado y la administración de los bienes la tendrá el padre".

[11] El artículo 317 del Código Civil establece" "(Excusa).—Pueden excusarse de la tutela y pro tutela: 1o.—Los que tengan a su cargo otra tutela o pro tutela; 2o.—Los mayores de sesenta años; 3o.—Los que tengan bajo su patria potestad tres o más hijos; 4o.—Las mujeres; 5o.—Los que por sus limitados recursos no puedan atender el cargo sin menoscabo de su subsistencia; 6o.—Los que padezcan enfermedad habitual que les impida cumplir los deberes de su cargo; y 7o.—Los que tengan que ausentarse de la República por más de un año".

[12] Informe, supra, párrafos 30, 31.

[13] Véase, por ejemplo, Corte Eur. de D.H., Caso de la lingüística belga, Ser. A No. 6, pág. 34, párr. 10.

[14] Véase, en general, ibid., Comité de D.H., Broeks v. Países Bajos, Comm. No. 172/1998, párr. 13, Zwaan de Vries v. Países Bajos, Comm. No. 182/1998, párr. 13.

[15] Véase, por ejemplo, Corte IDH, Opinión Consultiva OC-4/84, "Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización", 19 de enero de 1984, párr. 56.

[16] Véase, por ejemplo, el Caso de la lingüística belga, supra.

[17] Guatemala ratificó la Convención el 12 de agosto de 1982.

[18] Véase, Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982.Serie A. No. 1, párrafos 41, 43.

[19] Opinión Consultiva OC-4 supra, párr. 55.

[20] Véase, por ejemplo, Corte Eur. De D.H., Karlheinz Schmidt v. Alemania, Ser. A No. 291-B, 18 de julio de 1994, párr. 24, citando Schuler-Zgraggen v. Suiza, Ser. A No. 263, 24 de junio de 1993, párr. 67, Burghartz v Suiza, Ser. A No. 280-B, 22 de febrero de 1994, párr. 27.

[21] Véase, en general, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general No. 21, "Igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares", ONU Doc. HRI/1/Rev. 1 (1994) párr. 7).

[22] Véase, en general, Comité de D.H., Ato del Avellanal v. Perú, Comm. No. 202/1986, párr. 10.2.

[23] Corte Eur. de D.H., Rees v. Reino Unido, Ser. A No. 106, 17 de octubre de 1986, párr. 50.

[24] Véase OC-4/84, párr. 66.

[25] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general Nº 21, supra, párr. 24.

**INFORME Nº 92/98. CASO 11.837. TRINIDAD Y TOBAGO. INDRAVANI PAMELA RAMJATTAN. 3 DE NOVIEMBRE DE 1998.**

I.ANTECEDENTES

1. Por fax fechado el 17 de noviembre de 1997, la firma de abogados de Londres Slaughter and May presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo "la Comisión") contra la República de Trinidad y Tobago (en lo sucesivo "el Estado" o "Trinidad"), en nombre de la Sra. Indravani (Pamela) Ramjattan, actualmente condenada a muerte y recluida en la Prisión del Estado, en Puerto España. En la denuncia se establece que la Alta Corte de Trinidad, en sede de Assizes en Puerto España, juzgó a la Solicitante por el homicidio intencional del Sr. Alexander Jordan, su esposo en una unión de hecho, el 13 de febrero de 1991, junto con dos coacusados, el Sr. Danny Baptiste y el Sr. Hanif Hilaire. La Solicitante fue procesada el 29 de mayo de 1995 y se le impuso la condena de muerte preceptiva por homicidio intencional.

Medidas cautelares

2. Simultáneamente con la presentación de la denuncia, el peticionario solicitó a la Comisión que dictara medidas cautelares conforme al artículo 29(2) de su Reglamento, y que promoviera la suspensión de la ejecución hasta que la Comisión se pronunciara sobre el asunto. El 21 de noviembre de 1997 la Comisión solicitó al Estado que suspendiera la ejecución de la Sra. Ramjattan "hasta que la Comisión haya tenido la posibilidad de considerar este caso y pronunciarse sobre el mismo". La Comisión solicitó "que se haga lugar de inmediato a lo arriba solicitado".

3. El Estado de Trinidad y Tobago no respondió a esta solicitud de medidas cautelares. La Comisión lamenta que el Estado parte no haya estado dispuesto a conceder las medidas cautelares solicitadas en virtud del artículo 29(2) del Reglamento, y garantizar que la Peticionaria no sea ejecutada en tanto el caso esté a examen. De hecho, sin embargo, al 28 de septiembre de 1998 la Peticionaria no ha sido ejecutada. La Comisión observa que no compete al Estado parte, sino a la Comisión, decidir en torno a la admisibilidad de las peticiones. La Comisión solicita al Estado que en el futuro coopere plenamente con el examen de las comunicaciones por la Comisión.

II. ACTUACIONES ANTE LA COMISIÓN

4. La apelación de la Sra. Ramjattan ante la Corte de Apelaciones de la República de Trinidad y Tobago fue desestimada el 7 de noviembre de 1996. Posteriormente dicha Corte dictó una sentencia escrita, el 10 de marzo de 1997. El 10 de octubre de 1997 la Solicitante presentó una Petición de Venia Especial para Apelar al Consejo Privado, que fue desestimada el 7 de noviembre de 1997.

5. En la denuncia se sostiene que el Estado de Trinidad y Tobago violó los artículos siguientes de la Convención Americana en perjuicio de la Solicitante: artículos 4, 5, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "la Convención" o "la Convención Americana"). El 23 de enero de 1998 los peticionarios presentaron un Escrito Adicional en nombre de la Sra. Indravani (Pamela) Ramjattan, en que se aducían violaciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará". Específicamente, en cuanto a la primera petición, se aduce que la Solicitante es una mujer que registra una deprimente historia de abuso físico y mental a manos de su esposo conforme a una unión de hecho, el difunto Alexander Jordan. Jordan, según la petición, entró en la vida de la Solicitante cuando ella tenía 14 años de edad, y él 33. Cuando la Solicitante tenía 17 años de edad fue obligada a vivir con Jordan, que había comprado el terreno de al lado del de los padres de la Sra. Ramjattan. Al 12 de febrero de 1991, fecha del supuesto crimen, tenían seis hijos. Se afirma que Jordan mantenía a la Solicitante en "un reino de terror", y que el amante de esta última, Denny Baptiste, del que estaba embarazada desde hacía 5 o 6 meses, fue quien infligió los golpes mortales a la víctima, en tanto que la Solicitante, según la petición, "ni siquiera se encontraba en el mismo cuarto cuando se asestó el golpe mortal". El Estado tardó cuatro años y tres meses en llevar el caso a juicio, y a la fecha en que se presentó la petición a la Comisión la Solicitante había pasado en el pabellón de la muerte dos años y seis meses. Con la excepción de la hija mayor, que prestó declaración en el juicio de su madre en mayo de 1995, no ha visto a sus hijos (que tenían entre 2 y 11 años de edad cuando fue arrestada) en todo el tiempo que ha pasado en prisión. Además los peticionarios sostienen que hubo graves violaciones del derecho de asistencia legal en un caso en que puede imponerse la pena capital. Según la petición, su primer encuentro con su abogado defensor tuvo lugar en la Audiencia Preliminar; no fue notificada por anticipado de los cargos ni tuvo oportunidad de preparar su defensa; en el juicio fue asistida por un abogado distinto, que la visitó dos veces antes del juicio, y en cada ocasión durante apenas 20 minutos; durante el juicio propiamente dicho sólo pudo ver a su abogado durante un período de 3 a 5 minutos algunos días del juicio, y no todos los días; su abogado no dio importancia al abuso físico y mental que ella había sufrido ni al impacto del mismo sobre su conducta en relación con el supuesto delito; no fueron citados testigos en su defensa.

6. El Estado de Trinidad y Tobago respondió a la petición a través de la Nota POL:6/16/2 Vol. 7, del 16 de abril de 1998. En ella informó a la Comisión que las "instrucciones referentes a las solicitudes de personas condenadas a muerte impartidas por el Gobierno de Trinidad y Tobago el 13 de octubre de 1997 son a su juicio aplicables a la comunicación de Indravani Ramjattan, Caso Nº 11.837. Además el Estado señaló:

... para que cualquier recomendación de la Comisión sea considerada por el Ministro de Seguridad Nacional al asesorar a Su Excelencia el Presidente con respecto al ejercicio de la prerrogativa del perdón, el Gobierno de Trinidad y Tobago solicita respetuosamente a la Comisión que presente sus conclusiones referentes a esta comunicación dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de remisión de esta contestación por el Estado parte.

En otras palabras, el Estado solicitó que la Comisión se pronunciara sobre el fundamento de este caso dentro de un período de seis meses contado a partir del 16 de junio de 1998, o sea a más tardar el 16 de octubre de 1998. Según el Estado, la decisión de la Comisión sería considerada por el Ministro de Seguridad Nacional al asesorar al Presidente en cuanto a la procedencia de que este último ejerciera la prerrogativa del perdón. A diferencia de otros sistemas jurídicos, en que la prerrogativa del perdón se considera integrante del procedimiento interno, en Trinidad y Tobago este último está integrado además por la instancia internacional.

7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud del Gobierno, celebró una reunión el 20 de febrero de 1998, durante su nonagésimo octavo período de sesiones, con el Sr. Ralph Maraj, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Trinidad y Tobago y el Sr. Ramesh L. Maharaj, Fiscal General de ese Estado. En su declaración, el Fiscal General sostuvo que la "Comisión no está facultada para impugnar la ejecución de una sentencia de muerte impuesta por un tribunal competente en Trinidad y Tobago". Los siguientes son los argumentos del Estado:

Conforme a la Convención, la Comisión está facultada para formular recomendaciones al Estado parte, pero en la medida en que esas recomendaciones se refieren a una sentencia impuesta por las cortes de dicho Estado, representaría un acto ultra vires tratar de modificar a través de esas recomendaciones el derecho interno del Estado en lo referente al dictado de sentencias. En consecuencia, la Comisión carece de potestades para impugnar la ejecución de una sentencia de muerte impuesta por un tribunal competente en Trinidad y Tobago.

La Constitución de Trinidad y Tobago establece la obligación de todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, de hacer cumplir las leyes de Trinidad y Tobago. El Estado de Trinidad y Tobago está obligado a evitar todo acto que vaya en detrimento de su Constitución y sus leyes, que las subvierta o que frustre su aplicación. Fue por ese motivo que el Gobierno de Trinidad y Tobago, en virtud de la reserva que formuló al aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que la Corte sólo puede tener jurisdicción en la medida en que ello sea compatible con la Constitución de Trinidad y Tobago. Por lo tanto, la Comisión carece de jurisdicción para impedir, por acción o por omisión, del modo que fuere, la aplicación de una sentencia autorizada por la Constitución y las leyes de Trinidad y Tobago y dictada por un tribunal competente. Por lo tanto el Gobierno de Trinidad y Tobago está facultado, mientras está pendiente de resolución una denuncia planteada ante la Comisión, para ejecutar la sentencia de muerte una vez que ha expirado el plazo estipulado conforme a la Constitución y las leyes de Trinidad y Tobago. La Comisión puede recomendar el otorgamiento de una indemnización a una víctima. Puede recomendar al Estado parte que adopte medidas correctivas en los asuntos que hayan dado lugar a una infracción sustancial, para que otros no sufran la misma violación de derechos en el futuro. No obstante, se sostiene que la Comisión carece de facultades para alterar, directamente o a través de

recomendaciones, una sentencia legalmente impuesta por un tribunal de un Estado parte. (Énfasis agregado).

III.CONSIDERACIONES GENERALES

A. Competencia de la Comisión

8. Trinidad y Tobago es un Estado parte de la Convención Americana, cuyo tratado ratificó el 28 de mayo de 1991. Trinidad y Tobago ratificó la "Convención de Belem do Pará" el 4 de junio de 1996. En la denuncia se aducen violaciones de derechos humanos previstos en la Convención Americana, que la Comisión tiene competencia para considerar.

B. Admisibilidad procesal de la denuncia

1. Agotamiento de los recursos internos

9. En su contestación, fechada el 16 de abril de 1998, el Gobierno de Trinidad y Tobago manifestó:

Por economía procesal (...), pese al hecho de que el Solicitante se abstuvo de solicitar ante todo la reparación de los perjuicios sufridos a través de una Moción Constitucional planteada ante los tribunales nacionales de Trinidad y Tobago, salvo en la medida de lo establecido expresamente en este expediente, el Estado parte no impugna la admisibilidad de esta comunicación invocando la norma del agotamiento de los recursos internos (...).

10. Los peticionarios, en las observaciones a la contestación del Estado parte, fechadas el 22 de julio de 1998, señalaron que "el Estado parte no ha cuestionado la admisibilidad de esta comunicación basándose en la regla del agotamiento de los recursos internos". No obstante, el Estado parte ha sostenido que la Solicitante debió haber buscado reparación interponiendo una Moción Constitucional ante los tribunales nacionales de Trinidad y Tobago. Se sostiene que en Trinidad y Tobago un recluso del Pabellón de la Muerte no cuenta con asistencia letrada para interponer una moción constitucional. En consecuencia, en la práctica no está disponible el recurso de una moción constitucional a los efectos del artículo 46(1)(a) de la Convención o el artículo 27(2)(b) del Reglamento. Conforme a lo previsto por el artículo 46(2)(b) de la Convención y el artículo 27(2)(b) del Reglamento, el requisito del previo agotamiento de los recursos internos no es aplicable cuando:

no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos.

Se sostiene que al Solicitante en la práctica se le ha denegado acceso a una moción constitucional, o se le ha impedido agotar el remedio, en virtud de que en los hechos no está disponible una moción constitucional.

11. La jurisprudencia de la Comisión Interamericana y la de la Corte respaldan la opinión de que el recurso debe ser efectivo y apto para suscitar el resultado que esté destinado a lograr, y que no basta la mera disponibilidad del recurso. (Velásquez Rodríguez, Objeciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 88). Tratándose de una presa indigente, que ha agotado todos los recursos judiciales, incluido el interpuesto ante el Comité Judicial del Consejo Privado de Londres, para que quepa exigir que presente una moción constitucional es preciso que recaiga sobre el Estado la carga de la prueba de demostrar que ese recurso es efectivo y puede suscitar un resultado conforme al cual valga la pena que el preso lo interponga. A juicio de la Comisión, el Estado no ha asumido la carga de la prueba en el caso de autos, por lo cual la Comisión considera admisible este caso.

2.Presentación en plazo

12. La petición fue presentada dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la sentencia definitiva recaída en la apelación del procesamiento y la sentencia, conforme al artículo 46(1)(b) de la Convención. La apelación interpuesta por la Sra. Ramjattan contra su procesamiento y condena fue desestimada por la Corte de Apelaciones de Trinidad y Tobago el 10 de marzo de 1997. La petición fue presentada a la Comisión el 17 de noviembre de 1997.

3.Inexistencia de duplicación de otros procedimientos
internacionales

13. La petición cumple los requisitos del artículo 46(1)(c), porque no está pendiente de resolución en otro procedimiento internacional, ni constituye la duplicación de una petición ya examinada y resuelta por la Comisión o por otro organismo gubernamental internacional del que sea miembro el Estado de que se trata.

IV.CONCLUSIÓN

14. La Comisión concluye que la petición es admisible, por haberse satisfecho los requisitos del artículo 46 de la Convención Americana.

15. Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1. Declarar admisible el presente caso.

2. Ponerse a disposición de las partes a los efectos de procurar una solución amistosa al asunto, basada en el respeto de los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana.

3. Hacer público el presente informe y publicarlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 3 días del mes de noviembre del año de 1998. (Firmado): Carlos Ayala Corao, Presidente; Robert K. Goldman, Primer Vicepresidente; Jean Joseph Exumé, Segundo Vicepresidente, Comisionados Alvaro Tirado Mejía, Claudio Grossman, Hélio Bicudo y Henry Forde.

**INFORME Nº 71/99 CASO 11.656 MARTA LUCÍA ÁLVAREZ GIRALDO COLOMBIA 4 DE MAYO DE 1999.**

I. RESUMEN

1. El 18 de mayo de 1996, Marta Lucía Álvarez Giraldo (en adelante "la víctima" o "la peticionaria") presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") una petición en contra de la República de Colombia (en adelante "el Estado" o "el Estado colombiano") por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5(1) y (2), 11(1) y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención" o la "Convención Americana").

2. La peticionaria alega que su integridad personal, honra e igualdad, se encuentran afectados por la negativa de las autoridades penitenciarias de autorizar el ejercicio de su derecho a la visita íntima debido a su orientación sexual. El Estado alega que permitir visitas íntimas a homosexuales afectaría el régimen de disciplina interna de los establecimientos carcelarios dado que, en su opinión, la cultura latinoamericana es poco tolerante de las prácticas homosexuales en general.

3. Tras analizar las posiciones de las partes, los recursos internos de que dispuso la peticionaria y el resto de los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención, se procede a declarar admisible el presente caso.

II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4. El 1º de agosto de 1996 la Comisión abrió el caso 11.656 y transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado, con un plazo de 90 días para presentar su respuesta. El Estado presentó su respuesta el 21 de noviembre de 1996, la cual fue debidamente trasladada a la peticionaria. El 15 de octubre de 1996 la peticionaria presentó información adicional. El 6 de febrero de 1997 el Estado remitió información adicional y el 5 de marzo de 1997 la peticionaria envió una nueva comunicación, cuyas partes pertinentes fueron debidamente remitidas.

5. El 23 de septiembre de 1997, la Comisión se puso a disposición de las partes para alcanzar una solución amistosa del caso. La peticionaria presentó su respuesta el 21 de octubre de 1997. El 18 de noviembre de 1997 y el 2 de abril de 1998, el Estado solicitó sucesivas prórrogas con el objeto de examinar las propuestas de la peticionaria. Finalmente, el 12 de agosto de 1998, el Estado descartó esta posibilidad. El 5 de noviembre de 1998, la peticionaria, por intermedio de su representante legal, presentó un escrito de observaciones que fue oportunamente trasmitido al Estado.

III. POSICIONES DE LAS PARTES

A. La posición de la Peticionaria

6. Al momento de los hechos bajo examen, la peticionaria se encontraba cumpliendo sentencia de primera instancia privativa de su libertad desde el 14 de marzo de 1994 en el Centro de Reclusión Dosquebradas "La Badea" en Pereira. Puesto que la legislación vigente contempla el derecho de los internos a las visitas íntimas, Marta Lucía Alvarez Giraldo solicitó a la Defensoría del Pueblo Regional Pereira que intercediera ante las autoridades competentes para que le permitieran recibir a su compañera de vida. El 26 de julio de 1994 la Fiscalía 33 de Santuario, que era el despacho judicial que adelantaba en ese momento la investigación penal, emitió la autorización correspondiente. Esta decisión fue comunicada a la Dirección de la Reclusión de Mujeres de Dosquebradas el 27 de julio de 1994 y reiterada mediante oficio Nº 635 del 19 de agosto de 1994.

7. La peticionaria señala que luego de haberse reiterado el oficio que la autorizaba a recibir visitas íntimas, el Director del establecimiento donde se encontraba solicitó la reconsideración de la decisión de la Fiscalía 33 de Santuario a la Directora Seccional de la Fiscalía. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo -Regional Pereira- trasladó al Director del Centro de Reclusión de Mujeres "La Badea" la autorización judicial de la visita íntima. Al día siguiente, el Director del reclusorio solicitó a la Juez Promiscua del Circuito de Santuario autorización para trasladar a la peticionaria a otro centro carcelario. El 20 de octubre de 1994, en vista de que la petición de visita íntima no había sido resuelta aún por el Director de Reclusión de Mujeres, la Defensoría del Pueblo Regional Pereira le solicitó información sobre el trámite. Como resultado se respondió que la petición había sido remitida a la Dirección Regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC).

8. En respuesta, la Defensoría del Pueblo Regional Pereira interpuso una acción judicial de tutela en favor de la peticionaria. El Juzgado Penal Municipal de Dosquebradas hizo lugar a la acción en lo pertinente al derecho de la reclusa a que se tomara una decisión relativa a su petición. Consecuentemente, se ordenó a la Directora de Reclusión de Mujeres de Pereira que se pronunciara sobre la solicitud de la peticionaria. En fecha 7 de febrero de 1995, la Directora del Centro de reclusión se pronunció sobre la petición, negando la visita íntima, con base en la orientación sexual de la reclusa.

9. La Defensoría del Pueblo Regional Pereira apeló de la decisión dictada por el juzgado de primera instancia, la cual fue confirmada el 13 de junio de 1995 por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal. Finalmente, el 22 de mayo de 1995, la Corte Constitucional se abstuvo de revisar el fallo de tutela.

10. En cuanto a las alegaciones de derecho, la peticionaria alega que la legislación colombiana no pone reparos a la visita íntima de reclusos con base en su orientación sexual. Afirma que no existen elementos que permitan tal diferenciación entre el derecho a la visita íntima de un recluso heterosexual y el de un homosexual. Considera, por lo tanto, que las autoridades penitenciarias han incurrido en un trato discriminatorio no autorizado por el

derecho interno y a todas luces violatorio de los artículos 5, 11 y 24 de la Convención Americana.

B. La posición del Estado

11. El Estado no ha cuestionado la admisibilidad del caso. En lo que se refiere a la cuestión de fondo, el Estado justificó su negativa a permitir la visita íntima por razones de seguridad, disciplina y moralidad en las instituciones penitenciarias.

12. Seguidamente, sin embargo, reconoció la legitimidad del reclamo presentado, basado en un informe del Ministerio de Justicia y Derecho donde se admite que la peticionaria está siendo tratada en forma inhumana y discriminatoria. Sin embargo, reiteró sus alegatos iniciales en cuanto a que la prohibición atiende a razones arraigadas en la cultura latinoamericana la cual, sostiene, sería poco tolerante respecto de las prácticas homosexuales.

13. El Estado también se ha referido a consideraciones de política penitenciaria y de índole personal. Señaló que, de aceptarse la solicitud de la peticionaria, "se estaría aplicando una excepción a la norma general que prohíbe tales prácticas [homosexuales] con lo cual se afectaría el régimen de disciplina interno de los centros carcelarios". Se refirió también al supuesto "mal comportamiento" de la interna quien habría participado de incidentes relativos al funcionamiento del Comité de Derechos Humanos del Centro Penitenciario.

IV. ANÁLISIS

A. Competencia

14. La Comisión tiene competencia para examinar la petición en cuestión. La peticionaria tiene legitimación para comparecer y ha presentado agravios sobre el cumplimiento de normas establecidas en la Convención por un Estado parte. Los hechos alegados en la petición tuvieron lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención ya se encontraba en vigor para el Estado colombiano.1 La Comisión pasa ahora a determinar la admisibilidad del presente caso, a la luz de los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención.

B. Requisitos de admisibilidad

a. Agotamiento de los recursos internos

15. La Comisión considera que los recursos internos quedaron en efecto agotados con la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que rechazó la revisión de la acción de tutela intentada. Por lo tanto, la Comisión entiende que se ha cumplido con el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 46(1)(a).

b. Plazo de presentación

16. La petición fue presentada el 18 de mayo de 1996. El artículo 46(1)(b) de la Convención Americana establece que ésta debe ser presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva.2

17. La decisión definitiva en este caso --la decisión de la Corte Constitucional que rechazó la revisión de la acción de tutela-- lleva fecha 22 de mayo de 1995.

18. La peticionaria sostiene que no corresponde considerar el 22 de mayo de 1995 como referencia para contar el plazo de seis meses establecido en el artículo 46(1)(b) dado que la decisión de la Corte Constitucional nunca le fue notificada, hecho que no ha sido controvertido por el Estado. En efecto, según ha confirmado la Comisión en decisiones anteriores,3 el plazo de seis meses establecido en el artículo 46(1)(b) debe ser contado a partir de la notificación de la sentencia definitiva y dado que no habría existido notificación formal en este caso, el requisito debe darse por satisfecho.

19. La Comisión observa además que –a pesar de haber contado con sobradas oportunidades procesales para hacerlo—el Estado en ningún momento ha objetado el cumplimiento con este requisito, lo cual equivale a una renuncia tácita del derecho a cuestionar la admisibilidad del caso sobre esta base. Consecuentemente, corresponde concluir que en el presente caso no resulta exigible el cumplimiento del plazo establecido en el artículo 46(1)(b).

c. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada

20. La Comisión entiende que la materia de la petición no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional y no reproduce una petición ya examinada por este u otro órgano internacional. Por lo tanto, los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(1)(d) se encuentran satisfechos.

d. Caracterización de los hechos alegados

21. La Comisión considera que el reclamo de la peticionaria se refiere a hechos que podrían constituir –inter alia—violaciones al artículo 11(2) de la Convención Americana en cuanto hubiera injerencias abusivas o arbitrarias a su vida privada. En la fase sobre el fondo, la CIDH determinará en definitiva el ámbito del concepto de la vida privada y la protección que debe acordársele en el caso de las personas privadas de su libertad.

22. Por lo tanto, por cuanto la falta de fundamento o la improcedencia de la petición no resulta evidente, la Comisión considera satisfechos los requisitos del artículo 47(b) y 47(c) de la Convención.

V. CONCLUSIONES

23. La Comisión concluye que tiene competencia para conocer el presente caso y que éste es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención.

Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible el presente caso.

2. Enviar este Informe al Estado colombiano y a la peticionaria.

3. Continuar con el análisis del fondo de la cuestión, incluyendo el alcance y contenido del artículo 11(2) de la Convención Americana.

4. Reiterar su voluntad de ponerse a disposición de las partes con el fin de alcanzar una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos protegidos en la Convención Americana e invitar a las partes a pronunciarse sobre tal posibilidad, y

5.Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 4 días del mes de mayo de 1999. (Firmado): Robert K. Goldman, Presidente; Hélio Bicudo, Primer Vicepresidente; Claudio Grossman, Segundo Vicepresidente; Miembros: Carlos Ayala Corao y Jean Joseph Exumé.

**INFORME Nº102/99 CASO 11.307 MARÍA MERCIADRI DE MORINI ARGENTINA 27 de septiembre de 1999.**

I. RESUMEN

1. El 15 de junio de 1994 la señora María Merciadri de Morini (en adelante "la peticionaria") presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión", la "Comisión Interamericana" o "CIDH") en la cual alega la violación de los derechos al debido proceso (artículo 8), a los derechos políticos (artículo 23), a la igualdad ante la ley (artículo 24) y a los recursos efectivos (artículo 25), establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o la "Convención Americana") por parte de la República Argentina (en adelante el "Estado", el "Estado argentino", o "Argentina") en su propio prejuicio.

2. La peticionaria alegó que en la lista electoral de seis candidatos del partido Unión Cívica Radical para diputados nacionales de la Provincia de Córdoba, se colocó a una mujer en el cuarto y a otra en el sexto puesto. Con ello se violó la ley 24.012 y su decreto reglamentario No. 379/9 3, por los cuales debió haberse colocado a dos mujeres dentro de los primeros cinco puestos. La peticionaria interpuso los recursos internos disponibles ante las autoridades judiciales, las cuales además de rechazar su petición, rechazaron su legitimación para actuar. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la apelación presentada después que se habían efectuado las elecciones y el mencionado partido político había ganado cuatro puestos de los seis para los que se había presentado. Como fundamento de su rechazo señaló que "en las elecciones del 3 de octubre de 1993, la Unión Cívica Radical había obtenido un caudal de votos que le había consagrado cuatro diputados nacionales y en la causa se disputaba quién debía haber ocupado la quinta candidatura". El Estado señaló que en el presente caso se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna y solicitó a la Comisión que declarara la inadmisibilidad de la petición porque los hechos alegados no configuran violación de ninguno de los derechos establecidos en la Convención.

3. Al examinar la admisibilidad de la petición, la Comisión concluyó que tiene competencia para conocer este caso y que es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

I. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4. La peticionaria presentó su petición ante la Comisión el 15 de junio de 1994, la cual fue remitida al Estado el 16 de junio de 1994. La Comisión recibió respuesta del Estado el 9 de enero de 1995, la cual fue transmitida a la peticionaria el 18 de enero de 1995. La peticionaria envió sus observaciones el 27 de febrero de 1995, las cuales fueron remitidas al Estado el 1 de marzo de 1995. El Estado solicitó prórroga y respondió el 4 de mayo de

1995. La peticionaria presentó sus observaciones el 5 de junio de 1995. El Estado contestó el 10 de agosto de 1995. El 11 de octubre de 1995 la peticionaria remitió una nueva comunicación reiterando posturas anteriores. La peticionaria, envió el 17 de noviembre de 1997 una carta en la que reitera la denuncia y solicita el pronto despacho de la Comisión, acompañando otros fallos en otras causas que sustentarían su decisión. La Comisión acumuló esta información adicional en el presente caso por la analogía de los alegatos planteados. Con fecha 3 de diciembre de 1997 se remitió dicha comunicación al Estado. El 18 de febrero de 1998 se recibió la respuesta del Estado, la cual fue remitida a la peticionaria el 24 de febrero de 1998. El 31 de marzo de 1998 se recibieron las observaciones de la peticionaria, las cuales fueron remitidas al Estado el 26 de mayo de 1998.

## III. POSICIONES DE LAS PARTES

### A. La peticionaria

5. La peticionaria alegó que el partido político Unión Cívica Radical de la Provincia de Córdoba había conformado de común acuerdo entre sus dirigentes la lista de seis candidatos a diputados nacionales, para la elección del 3 de octubre de 1993, colocando en los puestos tercero y sexto a dos mujeres, sin tener en cuenta que el mencionado partido sólo renovaba a cinco diputados nacionales. Con esto se configuró la violación de la ley 24.012, llamada Ley de Cupo, la cual garantiza que un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) de los cargos electivos de las listas de los partidos políticos debe ser cubierto por mujeres, "en proporciones con posibilidades de resultar electas". Por otra parte, el artículo 2 del decreto No. 379/93, que reglamenta la ley, detalla que "el treinta por ciento de los cargos a integrarse por mujeres, según lo prescrito por la ley 24.012, debe interpretarse como una cantidad mínima. En los casos en que la aplicación matemática de este porcentaje determinara fracciones inferiores a la unidad, el concepto de cantidad mínima se regirá por la tabla que como anexo "A" integra el presente decreto", y el mencionado anexo dice: "cargos a renovar, cinco; cantidad mínima: dos".

6. Con estas normas, se está creando la obligación para los partidos políticos de confeccionar sus listas de candidatos de acuerdo con esa ley y su incumplimiento acarrea su no oficialización1. Así mismo, también se crea el derecho correlativo de los ciudadanos, investidos del derecho constitucional de sufragio2, de votar por las listas de candidatos que estén integradas por mujeres en la forma que dicha norma establece.

7. La peticionaria adujo que si la lista del partido Unión Cívica Radical no se ajusta a lo que dispone la ley, está restringiendo y vulnerando el derecho del sufragante que nace de ella con el objeto de asegurar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos. El perjuicio consiste en privar al ciudadano de votar por una lista del partido de su preferencia conformada con arreglo a las disposiciones legales, y obligarle a votar por una lista que no se ciñe a dichas normas, violando así el pleno ejercicio de sus derechos políticos. La peticionaria considera que por ello no puede negársele al ciudadano elector la legitimación para requerir que dicho derecho sea respetado.

8. La peticionaria alegó que en su carácter de ciudadana afiliada a dicha agrupación política impugnó la lista ante la Junta Electoral, la cual fue rechazada el 20 de mayo de 1993 considerando "que la lista de candidatos surgió del consenso de todos los Núcleos del Partido, que acordaron una lista única". Tras apelar dicha decisión, el 22 de junio de 1993 la justicia federal rechazó su solicitud y aceptó la excepción de falta de legitimación para actuar en el presente caso, la cual había sido opuesta por la contraparte. La peticionaria apeló esta última decisión y la Cámara Federal Electoral rechazó la apelación el 13 de agosto de 1993. El 26 de agosto de 1993 presentó el recurso extraordinario, el cual fue rechazado el 7 de octubre de 1993, con fundamento en que la elección había tenido lugar el 3 de octubre de 1993 y la cuestión se había vuelto abstracta. El 18 de octubre de 1993 la peticionaria interpuso recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue desestimado el 2 de diciembre de 1993 con el argumento de que "en las elecciones del 3 de octubre de 1993, la Unión Cívica Radical había obtenido un caudal de votos que le había consagrado cuatro diputados nacionales y en la causa se disputaba quién debía haber ocupado la quinta candidatura."

9. La peticionaria consideró que las autoridades judiciales argentinas debieron decidir conforme a derecho y que la cuestión "no era abstracta". Al respecto, señala que debe reconocerse el "derecho en expectativa", bien "concreto", para ser diputado nacional en el caso de que se produjera una vacante entre los elegidos. Si se produce la vacante, ascendería un varón –el que está en el quinto lugar-- y no una mujer como le correspondería. Por ello, considera que en el presente caso debió haberse colocado a una mujer en el quinto puesto y a un hombre en el sexto lugar. Así mismo, consideró que aún en el caso de cuatro cargos a renovar, deben elegirse dos mujeres, porque una sola mujer representa el 25%, inferior al cupo legal. En consecuencia, no pueden colocarlas en cualquier lugar de la lista, sin tomar en consideración el número de puestos que se renovarán.

10. La peticionaria también alegó que la Cámara Federal Electoral rechazó su legitimación para actuar al exigirle un interés propio que no aclara –puede ser económico, social, político, etc.—sin advertir la trascendencia de la cuestión que interesa a todos por igual. Con ello, se violaron sus derechos y adujo que toda persona tiene derecho a presentar una impugnación sin que sea necesario que se trate de una persona perjudicada con motivo del lugar que ocupe en las listas electorales.

11. Así mismo, considera incomprensible la clásica exigencia del derecho subjetivo violado o del interés concreto desconocido, sobre todo a partir de la decisión del más alto tribunal de Argentina en el caso Ekmekdjian c/Sofovich.3 También la peticionaria consideró que hay que tener en cuenta que el artículo 57 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos No. 23.298 reconoce específicamente la personalidad de los afiliados de los partidos políticos reconocidos "cuando les hayan sido desconocidos los derechos otorgados por la Carta Orgánica y se encuentren agotadas las instancias partidarias".

12. La peticionaria alegó que el Estado había violado los artículos 8 y 25 de la Convención Americana porque el tribunal de primera instancia había considerado que no tenía legitimación para actuar. Así mismo, consideró que al rechazar su demanda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había violado el principio de igualdad protegido en el artículo 24, lo que implica a su vez un cercenamiento de los derechos políticos previstos en el artículo 23 de la Convención Americana.

13. En presentaciones posteriores, la peticionaria anexó otro caso análogo y posterior al presentado en su petición original. Concretamente, a título ilustrativo, incluyó otra causa similar en la cual la Cámara Nacional Electoral decidió el 30 de mayo de 1995 acoger sus pretensiones ordenando ascender a la mujer al quinto lugar y desplazando al varón al sexto4. La peticionaria alegó que esta decisión quedó firme a su favor cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos de apelación intentados por la contraparte.

14. Por otra parte, la peticionaria también presentó ante la Comisión la causa iniciada por María Florentina Gómez Miranda5, que "tiene como objeto demostrar que siguen vigentes los motivos para peticionar [ sic] 6". Así mismo, invoca otro caso en donde la Cámara Electoral oficializó la lista con el veinticinco por ciento de mujeres con posibilidad de resultar electas del mismo partido político de la Provincia de Córdoba para las elecciones del 26 de octubre de 1997. En este último caso, la peticionaria afirmó que no había agotado los recursos internos.

B. El Estado

15. El Estado alegó que en este caso se habían agotado los recursos internos pero que la petición era inadmisible por no caracterizar hechos violatorios de la Convención. En cuanto al fondo, el Estado señaló, en primer lugar, que las listas de candidatos que se presentan a los actos eleccionarios, además de ser convalidados por la autoridad judicial electoral antes de los comicios, son convalidadas en su conformación por el voto popular. Por ello, no podía ofrecer alternativa alguna sin conculcar de alguna manera la expresión de la voluntad popular en las urnas.

16. A los fines de demostrar que sí se respetaban los derechos de la mujer en las listas electorales, el Estado anexó otras decisiones sobre causas iniciadas por la peticionaria, donde la Cámara decidía que el partido político Unión Cívica Radical debía modificar las listas con el objeto de incluir dos mujeres entre los cinco primeros lugares, antes de presentarlas a la justicia nacional electoral. Concretamente, anexó la sentencia de la Cámara Nacional Electoral de fecha 30 de marzo de 1995 revocando la sentencia de fecha 21 de diciembre de 1994 del Juez Federal con competencia electoral de la ciudad de Códoba en el caso "Merciadri de Morini, María Teresa s/representación". La decisión del tribunal en ese caso consideró que "el cupo del 30% debe ser en proporciones con posibilidades de resultar electas, lo que debe entenderse con posibilidades reales o efectivas". Así mismo, se reconoció la legitimación a la peticionaria e hizo saber a la Justicia

Nacional Electoral que a los efectos del artículo 60, primer párrafo, del Código Electoral Nacional que deberán figurar dos mujeres entre los cinco primeros lugares.

17. En segundo lugar, el Estado alegó que no corresponde a la Comisión examinar la integración de las listas de candidatos electorales. Así mismo, señala que dicha integración no puede entenderse como violación de alguno de los derechos establecidos en la Convención. El Estado también alegó la doctrina de la cuarta instancia, por la cual la Comisión no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar los supuestos errores de hecho o de derecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia.

18. En presentaciones posteriores, el Estado anexó casos donde se evidenciaba el respeto de los derechos de las mujeres ante la justicia electoral. Así mismo, el Estado señaló que en el transcurso del trámite ante la Comisión la peticionaria había introducido cuestiones ajenas a su petición original, tales como la causa de María Florentina Gómez Miranda; el incidente similar en las elecciones de1997, en el cual consideró que no se habían agotado los recursos internos; y en la tercera causa presentada, señaló que las autoridades judiciales habían decidido de manera favorable a la peticionaria, quedando satisfecha su pretensión ante las instancias internas.

19. El Estado alegó que desde el 24 de agosto de 1994 rigen las reformas introducidas a la Constitución Nacional que, en el nuevo artículo 37 in fine, dispone la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, la cual se garantizará por acciones positivas en la regulación de partidos políticos y en el régimen electoral.

## IV. ANÁLISIS SOBRE ADMISIBILIDAD

### A. Competencia ratione temporis, ratione materiae, ratione personae de la Comisión

20. La Comisión tiene competencia ratione temporis [en razón del tiempo] para conocer el presente caso, por cuanto, en primer lugar, el peticionario sostiene que el Estado argentino es responsable internacionalmente con motivo de la decisión dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2 de diciembre de 1993, la cual tuvo lugar una vez que el Estado había consignado el instrumento de ratificación de la Convención Americana el 5 de septiembre de 1984 ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.

21. En segundo lugar, con relación a la competencia ratione materiae [en razón de la materia] la petición inicial denuncia presuntas violaciones de los derechos consagrados en los artículos 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana.

22. En cuanto a la competencia pasiva ratione personae [en razón de la persona], el peticionario atribuye violaciones a un Estado parte, en este caso Argentina. Con relación a la competencia activa ratione personae [en razón de la persona], el peticionario alega que

dichas violaciones se cometieron en su propio perjuicio y se presentó como víctima directa de dichas violaciones.

B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

a. Agotamiento de los recursos internos

23. La regla de la previa interposición y agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, establecida en el artículo 46(1)(a) de la Convención, dispone que toda petición formulada ante la Comisión debe haber sido conocida previamente, en sustancia, ante las instancias internas. Esta regla permite a los Estados solucionar previamente las cuestiones planteadas dentro de su propio marco jurídico antes de verse enfrentado a un proceso internacional.

24. En el presente caso, la Comisión nota que la peticionaria interpuso los recursos internos con la presentación de la demanda con motivo de la omisión de un puesto para las mujeres en la lista del partido político Unión Cívica Radical presentando los candidatos para las elecciones del 3 de octubre de 1993. Una vez que la peticionaria presentó los recursos de apelación ordinarios y extraordinarios ante las autoridades judiciales nacionales, la demanda fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Estado consideró que en el presente caso se habían interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna de acuerdo a lo establecido en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana. Por las razones antes mencionadas, la Comisión concluye que se ha cumplido con este requisito.

b. Plazo para presentar una petición ante la Comisión

25. El artículo 46(1)(b) de la Convención establece como requisito para la admisibilidad de una petición que haya sido presentada dentro del plazo de los seis meses a partir del momento en que el peticionario haya sido notificado de la decisión definitiva. La Comisión observa que la sentencia definitiva fue dictada el 2 de diciembre de 1993 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La petición fue presentada ante la Comisión el 15 de junio de 1994, dentro del plazo de los seis meses. La Comisión concluye que se ha cumplido con este requisito.

c. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada

26. Con relación al requisito de que la petición no se halle pendiente de decisión por otro organismo internacional, establecido en el articulo 46(1)(c) de la Convención, la Comisión no ha recibido información que indique que esta circunstancia esté presente. Por lo tanto, la Comisión considera que se ha cumplido con él. Por otra parte, la Comisión también concluyó que se ha cumplido con el requisito establecido en el artículo 47 (d), por cuanto esta petición no es la reproducción de una petición ya examinada por la Comisión ni ha sido decidida por otro organismo internacional.

d. Caracterización de violaciones

27. El artículo 47(b) de la Convención establece que la Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación cuando "no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención". La peticionaria ha alegado que con motivo de las decisiones de las autoridades judiciales argentinas, el Estado ha violado el derecho al debido proceso (artículo 8), a los derechos políticos (artículo 23), el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24) y a los recursos efectivos (artículo 25) de la Convención. La Comisión considera que los hechos expuestos por la peticionaria, de ser ciertos, podrían configurar violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión concluye que se ha cumplido con este requisito.

V. CONCLUSIONES

28. La Comisión concluye que tiene competencia para conocer de este caso y que la petición es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

29. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECIDE:

1.Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a las presuntas violaciones a los artículos 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana;

2. Notificar esta decisión a las partes;

3.Continuar con el análisis de fondo de la cuestión;

4. Ponerse a disposición de las partes con el fin de alcanzar una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos consagrados en la Convención Americana e invitar a las partes a pronunciarse sobre tal posibilidad, y

5. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington. D.C. a los 21 días, del mes de septiembre de 1999. (Firmado): Robert K. Goldman, Presidente; Hélio Bicudo, Primer Vicepresidente; Claudio Grossman, Segundo Vicepresidente; y los Comisionados Carlos Ayala Corao, Alvaro Tirado Mejía y Jean Joseph Exumé.

**INFORME Nº 129/99 CASO 11.565 ANA, BEATRIZ Y CELIA GONZÁLEZ PÉREZ MÉXICO 19 DE NOVIEMBRE DE 1999.**

I. RESUMEN

1. El 16 de enero de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la CIDH") recibió una denuncia presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, en adelante "los peticionarios") en la cual se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "el Estado", "el Estado mexicano", o "México") por la detención ilegal, violación y tortura de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzeltales, así como la posterior falta de investigación y reparación de tales hechos. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana"): derecho a la integridad personal (artículo 5); libertad personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo 8); protección de la honra y de la dignidad (artículo 11); derechos del niño (artículo 19); y protección judicial (artículo 25).

2. Conforme a la denuncia, el 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo ilegalmente en el estado de Chiapas, México, a las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez de González para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas. Los peticionarios alegan que durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares; que el 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal con base en un examen médico ginecológico; que la misma fue corroborada ante dicha institución por la declaración de Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores; que el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994; y que ésta decidió finalmente archivar el expediente ante la falta de comparecencia de las mismas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas. Los peticionarios sostienen que el Estado faltó a su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones.

3. Por su parte, el Estado mexicano alega que las autoridades competentes llevaron adelante una investigación seria, aunque no se agotaron los recursos internos; que los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso; y que se podía reiniciar la investigación militar archivada, pero que no era posible sin la colaboración de las presuntas víctimas. El Estado solicita que la CIDH declare la inadmisibilidad del caso por falta de agotamiento de los recursos internos y por no configurarse violaciones de los derechos humanos.

4. La CIDH concluye en este informe que el caso reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión decide declarar

que el caso es admisible, notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de los méritos relativos a las supuestas violaciones a los artículos 5, 7, 8, 11, 19 y 25 de la Convención Americana. Al mismo tiempo, se pone a disposición de las partes para iniciar el trámite de solución amistosa y decide publicar el presente informe.

## II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. La Comisión asignó el número 11.565 al caso y solicitó información al Estado mexicano sobre las partes pertinentes de la denuncia el 18 de enero de 1996. Luego de recibir las observaciones de los peticionarios el 13 de mayo de 1996, la CIDH las transmitió al Estado mexicano el 10 de septiembre de 1996. El Estado remitió sus observaciones a la Comisión el 24 de octubre de 1996, que las trasladó a los peticionarios.

6. La CIDH solicitó información actualizada sobre el caso a los peticionarios el 13 de noviembre de 1998 y, ante la falta de respuesta, reiteró tal solicitud el 19 de marzo de 1999. Los peticionarios presentaron información sobre el caso el 27 de mayo de 1999, y el Estado mexicano hizo lo propio el 14 de julio de 1999. Finalmente, los peticionarios presentaron observaciones adicionales el 7 de septiembre de 1999.

7. El 4 de octubre de 1999 se celebró una reunión de trabajo sobre el presente caso en la sede de la Comisión, con presencia de los peticionarios y representantes del Estado, en la cual se recibió información actualizada sobre las posiciones de las partes en cuanto a la admisibilidad y el fondo de la denuncia.

## III. POSICIONES DE LAS PARTES

### A. Los peticionarios

8. La denuncia recibida en la CIDH alega que el 4 de junio de 1994, aproximadamente a las 2:30 p.m., integrantes del Ejército Federal Mexicano detuvieron arbitrariamente a la señora Delia Pérez de González y a sus hijas Ana, Beatriz y Celia, y que las interrogaron con el objeto de hacerles confesar su pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).2 Destacan que las mujeres se comunican en el idioma de la etnia tzeltal y que su conocimiento del castellano es muy limitado, en virtud de lo cual tuvieron dificultad para comprender las preguntas que les formularon. Los peticionarios alegan que luego separaron a la madre de sus hijas, y que se llevaron a Ana, Beatriz y Celia a una habitación de madera donde las golpearon y violaron en reiteradas ocasiones en presencia de unos 30 militares, la mayoría de los cuales participaron de dichos actos. Conforme a la petición, las cuatro mujeres fueron liberadas a las 4:30 p.m. del mismo día, luego de ser amenazadas de muerte para que no denunciaran los hechos.

9. Los peticionarios alegan que las mujeres permanecieron escondidas varias semanas por el temor de las represalias con que les habrían amenazado los militares. El 29 de junio de 1994, una doctora calificada practicó un examen médico ginecológico a cada una de las tres hermanas y constató que persistían las huellas de la violación, a más de 20 días de los

hechos denunciados. Dicha prueba médica se acompañó a la denuncia formulada el 30 de junio de 1994 a la Procuraduría General de la República en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El 30 de agosto de 1994, Ana y Beatriz González Pérez ratificaron y ampliaron su denuncia ante dicha autoridad, así como ante un "alto funcionario de la Procuraduría General de la República", dentro de la Averiguación Previa 64/94 que se había iniciado con base en la denuncia. Agregan los peticionarios que la menor de las hermanas, Celia, no compareció debido a que no pudo superar el temor por lo que había sufrido; en virtud de ello, la madre quedó en su casa para acompañarla.

10. El 2 de septiembre de 1994, el Ministerio Público Federal decidió remitir la Averiguación Previa 64/94 a la Procuraduría General de Justicia Militar "por incompetencia en razón de la materia". Los peticionarios sostienen que cumplieron con el requisito de interponer los recursos internos idóneos disponibles en México para solucionar la situación denunciada; y que la cesión de competencia a favor de las autoridades militares fue una violación de la propia Constitución mexicana, así como del deber de investigar los hechos violatorios. Al respecto, expresan lo siguiente:

A partir de la cesión de competencia a la jurisdicción militar en septiembre de 1994, no hubo ningún avance sustancial en las investigaciones, a pesar que la instancia del fuero civil ordenara a la Procuraduría militar que continuara con la dicha investigación. Desde febrero de 1996 el caso se encuentra archivado, lo cual consiste en una violación al deber de investigar.

El hecho de que la legislación mexicana señale que la jurisdicción militar conocerá de los delitos comunes cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo, sumado a la defensa que hace el gobierno para que la justicia militar conozca del presente caso, hacen suponer que la detención, tortura y violación de las ofendidas fueron actos de servicio o derivados del mismo. 3

11. Los peticionarios sostienen que la averiguación iniciada y luego archivada por el Ministerio Público militar no reúne los requisitos de idoneidad e imparcialidad, esenciales para cualquier investigación sobre violaciones de derechos humanos. En tal sentido, observan que el Boletín Nº 38 de la Secretaría de Defensa Nacional (en adelante "la SEDENA") del 3 de julio de 1994 acerca de los hechos que motivaron la denuncia, "rechaza enérgicamente las falsas imputaciones hechas a personal militar, reservándose el derecho de proceder legalmente en contra de las personas o entidades que difaman a nuestra institución". Agregan que la Procuraduría de Justicia Militar es una institución sometida jerárquicamente al titular de la SEDENA.

12. En cuanto a la nueva comparecencia y examen médico ante las autoridades militares -- que el Estado considera esencial para reiniciar la investigación-- los peticionarios afirman lo siguiente:

Es inaceptable la pretensión que estas mujeres, que habían pasado semejante experiencia de tortura, ante miembros de esa institución, iban a sentirse seguras declarando (por tercera

vez) ante este organismo. En reiteradas ocasiones los peticionarios hicieron de conocimiento a la Fiscalía civil el temor y el trauma de las víctimas que les dificultaba incluso trasladarse al fuero civil, por tener que verse obligadas a atravesar retenes militares, lo cual hizo imposible que se presentaran ante la autoridad militar a declarar.

Cabe notar que las víctimas debido a la naturaleza del caso es lógico que estuviesen aterradas de presentarse ante el organismo castrense. Más aún cuando los órganos involucrados --en este caso el Ejército-- pasan a ser los encargados de dirigir las investigaciones.

No era obligación de las víctimas, quienes ya habían prestado su declaración ante el fuero competente, prestarse otra vez a esa tortura psicológica que implicaría un nuevo interrogatorio y la humillación de un nuevo examen ginecológico, más aún ante el organismo que representa a los responsables de la tortura, detención ilegal y violación de las ofendidas.

Lo anterior implica una violación y agresión igual o más grave que la sufrida el 4 de junio de 1994, por lo que no puede ser válida la propuesta del Ejército de reiniciar ellos la investigación, desestimando las ya hechas por el Ministerio público Federal. Más aún si ellos cuentan con testimonio de los propios soldados que "interrogaron" a las ofendidas y aceptan haber estado en tiempo, contexto y oportunidad para cometer la agresión. Básicamente lo único que no aceptan en su testimonio, es haberlas violado, pero aceptan haberlas detenido, interrogado y otros hechos, que incluso por su contradicción permiten suponer que las declarantes dicen la verdad y los soldados mienten. Sin embargo todo ello se desestimó y nunca se procesó a ninguno de ellos.4

13. Respecto a la supuesta falta de interés de los peticionarios, que alegó el Estado, CEJIL sostiene que se practicó un examen médico inmediatamente después de los hechos, que fue presentado ante la PGR y luego ratificado con la declaración de las víctimas. Con base en dichos antecedentes, los peticionarios alegan que hay pruebas de los hechos violatorios, y que la falta de respuesta de CEJIL durante tanto tiempo se debió a la dificultad en localizar a las mujeres ya que, como consecuencia de los hechos, se vieron obligadas a abandonar sus comunidades y sus familias, y que fueron repudiadas conforme a la cultura indígena.

14. Los peticionarios manifiestan que los abusos denunciados en este caso forman parte de un problema general en México, e invocan en dicho contexto la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ("Convención de Belém do Pará").5 Igualmente, los peticionarios alegan que los hechos caracterizan una violación de los derechos del niño protegidos en el artículo 19 de la Convención Americana:

La menor de las víctimas tenía 16 años de edad cuando fue torturada y violada por soldados del Ejército Federal Mexicano, su caso es como bien afirmó el Comité de los Derechos del Niño, uno de los tantos que se mantiene en la impunidad, en donde la falta de voluntad del Gobierno para proteger a sus ciudadanos (as) menores de edad queda

manifiesta en el archivo del presente caso, por lo que, 5 años después de los abusos físicos, psicológicos y sexuales sufridos por esta menor, no existe ningún responsable juzgado y condenado por tales delitos.6

15. En definitiva, los peticionarios sostienen que los hechos fueron debidamente denunciados, con pruebas serias, ante las autoridades en México; pero que la cesión de competencia a favor del Ministerio Público Militar y la ausencia de voluntad resultó en la falta de investigación de las violaciones, por lo que hasta la fecha persiste la plena impunidad de los responsables.

B. El Estado

16. El Estado mexicano omite inicialmente toda referencia al fondo de la denuncia, y manifiesta que la misma debe ser rechazada por falta de agotamiento de los recursos internos:

En el ámbito militar, los reclamantes no han presentado a la SEDENA denuncia alguna contra los fiscales a cargo de la investigación, pese a que tienen derecho a ello y a que, de acreditarse algún ilícito por parte del Ministerio público Militar, procedería un juicio de responsabilidad judicial militar ante los tribunales del fuero de guerra…En virtud de las severas sanciones que un juicio de esta índole podría acarrear, no se trata de una mera formalidad de la cual estén relevados los reclamantes, ni se han agotado los recursos disponibles en el fuero militar conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.

El que este caso corresponda primordialmente al fuero de guerra no quiere decir, sin embargo, que las interesadas carezcan de recursos efectivos en el ámbito civil federal. De acuerdo al artículo 34 del Código Penal…"quien se considere con derecho a la reparación del daño, que no pueda obtener ante el juez penal, en virtud de no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, sobreseimiento o sentencia absolutoria, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación correspondiente".

Si los reclamantes consideran que el proceso no se apegó a los derechos humanos y las libertades fundamentales, nada obsta para que demanden judicialmente el ejercicio de la acción penal en este caso, lo cual también correspondería resolver a los tribunales ordinarios y no a los tribunales del fuero militar.7

17. Posteriormente, el Estado amplía sus alegatos y expresa que la Oficina de Quejas y Atención a la Ciudadanía realizó una investigación con base en el artículo publicado en el periódico La Jornada el 17 de junio de 1994, e informó a la SEDENA acerca de las declaraciones de varias personas respecto a los hechos. El Estado afirma que la autoridad militar ordenó el 25 de junio de 1994 una investigación "a efecto de determinar si con motivo de los hechos de referencia hubo infracción a la Disciplina Militar"(sic). Agrega además lo siguiente:

El 2 de julio de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional informó a la opinión pública, mediante boletín de prensa número 38, que como resultado de la investigación realizada -- en torno a la supuesta violación de 3 indígenas Tzeltales por personal militar-- se había desprendido que tal imputación era completamente falsa y que no hubo infracción a la Disciplina Militar, de conformidad con la Averiguación Previa A5FTA/03/94-E (énfasis en el original).8

18. El Estado indica además que la averiguación previa Nº 64/94 se inició "por los delitos de VIOLACIÓN TUMULTUARIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y OTROS" (mayúscula en el original), y que en tal indagatoria se efectuaron los siguientes trámites:

Se dio intervención a la Policía Judicial Federal, a efecto de que realizara una investigación sobre los referidos hechos. [Se] Solicitó la comparecencia de los denunciantes, a efecto de que ratificaran su escrito excitativo de justicia, presentándose el día 1o. de julio de 1994. [Se] Solicitó la comparecencia de las presuntas agraviadas, a efecto de que rindieran su declaración en relación con los hechos de referencia. Se dio intervención a peritos médico-legistas, a efecto de que dictaminaran sobre la edad clínica de las que se ostentaban como agraviadas (sic), y se practicara el respectivo examen médico ginecológico.9

19. Menciona el Estado la solicitud de diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para que se designe a una mujer como fiscal especial en el caso. Por otra parte, informa que el Procurador General de Justicia Militar designó a una fiscal militar y a "personal médico femenino" para asistirla en "el esclarecimiento de los hechos en cuestión"; y que dicho funcionario militar "solicitó y obtuvo" que el Agente del Ministerio Público Federal en Chiapas "declinara en definitiva la competencia en favor del Fuero de Guerra, por ser asunto de esta materia". El Estado describe las actuaciones del Procurador General de Justicia Militar en estos términos:

Recabó la ampliación de las declaraciones de los civiles que presenciaron los hechos, quienes en síntesis manifestaron que en ningún momento hubo maltrato de obra o de palabra por parte del personal militar en contra de las supuestas agraviadas, mucho menos ataque sexual alguno. Recabó la ampliación de las declaraciones del personal militar involucrado, ante la presencia de su respectivo defensor de oficio, quien ofreció las pruebas de confrontación y careos, entre sus defendidos y las supuestas ofendidas, prueba que no fue posible desahogar por la inasistencia de las supuestas agraviadas, contándose con personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como observadores en la práctica de las diligencias practicadas, a petición de la Fiscal Militar, así como con peritos traductores del Instituto Nacional Indigenista, médicos legistas con especialidad en ginecología, todos ellos civiles y de la jurisdicción. Citó a la Licenciada MARTHA GUADALUPE FIGUEROA MIER y al Sr. ROGER MALDONADO BAQUEIRO, (énfasis en el original) supuestos representantes legales de las ofendidas, compareciendo únicamente la citada en primer término, notablemente molesta, altanera e intimidante, pero con extremo nerviosismo (sic). En razón de lo anterior, el Jefe de Averiguaciones Previas de Justicia Militar concluyó que la imputación en contra del personal militar es total y manifiestamente falsa.10

20. Más adelante, el Estado realiza un detallado análisis de la averiguación previa militar, que incluye las declaraciones de varias personas, que coinciden en cuanto a la buena conducta de los uniformados y que niegan que los hechos hubieran sucedido.11 El análisis del Estado prosigue con el título denominado "Consideraciones sobre la competencia del fuero de guerra para conocer de los hechos". Bajo dicho título, el Estado indica que "la existencia del Fuero de Guerra obedece a la naturaleza misma del Instituto Armado y a su peculiar modo de vida", y explica que los supuestos que hacen procedente la intervención de dicho fuero son los siguientes: que el autor de la violación a la ley sea miembro de las fuerzas armadas; que el militar esté en servicio o realizando actos relativos al mismo; y que la infracción a la ley sea en contra de la disciplina militar. Luego el Estado los aplica al caso bajo estudio:

Respecto al primer supuesto, se considera que no existe problema alguno, ya que los propios reclamantes aceptan expresamente que los sujetos activos del hecho delictivo son miembros de las Fuerzas Armadas.

En cuanto al segundo de ellos, referente a que el sujeto activo esté de servicio o ejecutando actos relativos o relacionados a éste, debe entenderse por servicio todo acto que ejecutan los militares, en forma aislada o colectiva, en cumplimiento de órdenes que reciban en el desempeño de las funciones que les competen según su categoría y de acuerdo con las leyes, reglamentos y disposiciones del Ejército, artículo 37 Reglamento para el Servicio Interior de los Cuerpos de Tropa.

En lo relativo al tercer elemento, que la infracción a la ley o delitos en contra de la disciplina militar, al respecto el Código de Justicia Militar es muy explícito, al establecer en su artículo 57, lo siguiente: …Son delitos contra la disciplina militar (…) II. Los del orden común o federal cuando haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan: a) Que fueran cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo (énfasis en el original).12

21. Prosigue el Estado con un análisis de jurisprudencia mexicana relativa a la competencia del fuero militar, y argumenta que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es plenamente compatible con la Constitución de México.13 Además de la ley fundamental, el Estado cita las normas legales mexicanas que considera aplicables al presente caso, que incluyen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Concluye el Estado que el presente caso "se fundamenta en supuestos vagos e indicios, pero no en prueba plena alguna, señalándose como principal indicio, una nota periodística y una denuncia presentada ante Autoridad incompetente". (Mayúscula en el original)

22. El Estado cuestiona en una comunicación posterior la demora de los peticionarios en presentar información a la CIDH sobre el caso, y expresa en tal sentido que "un retraso de esta magnitud, bajo ninguna circunstancia puede ser justificable, especialmente tratándose de hechos como los que se alegan".14 Agrega que "la propia CNDH…determinó dar por

concluido el expediente respectivo a raíz precisamente de la inactividad y falta de cooperación de los denunciantes", pero a pesar de ello "reitera su voluntad de continuar con las investigaciones si los peticionarios estuvieran dispuestos a cooperar con las autoridades".15

23. El Estado sostiene que el caso es inadmisible por los siguientes motivos: los recursos de la jurisdicción interna no se agotaron; los peticionarios no lograron probar hechos violatorios de los derechos humanos; las autoridades militares son las competentes para investigar los hechos denunciados; y la investigación iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar fue seria e imparcial, pero debió archivarse debido a la falta de cooperación de las supuestas víctimas. Finalmente, el Estado solicita que la CIDH archive el presente caso.

IV. ANÁLISIS

A. Competencia, ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci de la Comisión

24. Los alegatos del presente caso describen hechos que serían violatorios de varios derechos reconocidos y consagrados en la Convención Americana, que tuvieron lugar dentro de la jurisdicción territorial de México, cuando la obligación de respetar y garantizar todos los derechos establecidos en dicho instrumento se encontraba en vigor para dicho Estado.16 Por lo tanto, la CIDH es competente ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci para conocer sobre el fondo de la denuncia.

B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

a. Agotamiento de los recursos internos

25. La Corte Interamericana de Derechos humanos ha establecido lo siguiente respecto a la regla del agotamiento previo de los recursos internos:

Los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1).17

26. La CIDH, luego de analizar la información aportada por los peticionarios y por el Estado, considera prima facie que la denuncia formulada por los representantes de las víctimas ante la Procuraduría General de la República en Chiapas el 30 de junio de 1994, constituye el recurso idóneo que debía interponerse para remediar las violaciones alegadas. En efecto, los hechos descritos por los peticionarios --de ser establecidos en el marco de una investigación seria e imparcial, conforme al debido proceso-- constituirían detención

arbitraria, tortura y violación, es decir, hechos previstos y sancionados por la legislación penal ordinaria en México.18 A pesar de ello, el Ministerio Público Federal declinó su competencia en favor de su análogo militar. Ambas partes coinciden en que no ha finalizado hasta la fecha la investigación de los hechos, aunque discrepan en cuanto al motivo: para el Estado, se debe a la falta de cooperación de las víctimas, y para los peticionarios, a la intervención de un organismo incompetente que carece de imparcialidad y voluntad.

27. De lo anterior resulta que los representantes de las supuestas víctimas tuvieron acceso al recurso idóneo de la jurisdicción interna y lo interpusieron en tiempo y forma pero, en definitiva, el proceso derivó en la paralización de la investigación, y luego en su archivo. Los peticionarios alegan que están exentos de acudir a la jurisdicción militar, debido a que plantearon la denuncia ante la autoridad competente, y que la instancia de la Procuraduría General de Justicia Militar carece de la imparcialidad necesaria para la investigación de los hechos.

28. Es un hecho no controvertido que la denuncia ante el Ministerio Público en Chiapas fue presentada con un certificado del examen médico ginecológico, de acuerdo al cual se constataron las lesiones propias de los hechos de violación alegados por los peticionarios;19 el Estado mexicano no objetó la validez de dicho documento en el trámite del presente caso. La CIDH observa además, de manera preliminar, que han transcurrido cinco años desde que se presentó dicha denuncia ante las autoridades en México, sin que hasta la fecha de adopción del presente informe se haya establecido de manera definitiva cómo sucedieron los hechos; en consecuencia, tampoco se ha identificado a los presuntos responsables. Sin embargo, estas cuestiones serán analizadas en la etapa procesal oportuna, junto con los demás alegatos relativos a los derechos a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva.20

29. La Comisión concluye que por diversos hechos no se han podido agotar los recursos internos en México, a pesar del lapso de cinco años transcurrido desde los hechos. En consecuencia, la Comisión aplica al presente caso la excepción prevista en la segunda parte del artículo 46(2)(b) de la Convención Americana. Las causas y efectos que impidieron el agotamiento de los recursos internos serán analizados en el informe que adopte la CIDH sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si configuran violaciones a la Convención Americana.

b. Plazo de presentación

30. En virtud de la aplicación al presente caso del artículo 46(2)(b) de la Convención Americana, no corresponde analizar el requisito del artículo 46(1)(b) del instrumento internacional citado. La Comisión estima que en el presente caso, bajo las circunstancias analizadas, la petición fue presentada dentro de un plazo razonable a partir de la fecha en que los hechos fueron denunciados en México.

c. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada

31. Las excepciones previstas en el artículo 46(1)(d) y en el artículo 47(d) de la Convención Americana no han sido opuestas por el Estado mexicano, ni surgen de la información contenida en el expediente del presente caso.

d. Caracterización de los hechos alegados

32. La Comisión considera que los hechos alegados, en caso de resultar ciertos, caracterizarían violaciones de los derechos garantizados en los artículos 5, 7, 8, 11, 19 y 25 de la Convención Americana.

C. Solicitud de archivo

33. El Estado mexicano solicitó el archivo del presente caso debido a la demora de los peticionarios para responder a la información suministrada por aquél el 24 de octubre de 1996. El Estado manifestó:

Dilaciones como las ocurridas en el presente caso, vician los procedimientos ante la Comisión y contravienen el espíritu de la Convención Americana.

Si bien dicha Convención no establece expresamente plazos para concluir el conocimiento de un caso, ni prevé una figura parecida a la de la caducidad de la instancia, tanto el espíritu, como los principios generales del derecho sí establecen deberes de equidad, buena fe y transparencia. Convalidar casos que manifiestan tal falta de interés, no sólo respecto de la jurisdicción interna sino incluso respecto de la propia jurisdicción interamericana, cuestionaría severamente dichos deberes.21

34. A fin de analizar la solicitud del Estado, la Comisión debe remitirse a las disposiciones aplicables en materia de archivo. El artículo 48(1)(b) de la Convención Americana establece:

Recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, [la Comisión] verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente. (énfasis agregado)

35. En concordancia con dicha norma, el Reglamento de la CIDH establece en su artículo 35(c) las cuestiones preliminares del procedimiento:

La Comisión seguirá con el examen del caso, decidiendo las siguientes cuestiones:

a. el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, pudiendo determinar las providencias que considere necesarias para aclarar las dudas que subsistan.

b. otras materia relacionadas con la admisibilidad de la petición o su improcedencia manifiesta, que resulten del expediente o que hayan sido planteadas por las partes.

c. si existen o subsisten los motivos de la petición, ordenando, en caso contrario, archivar el expediente. (énfasis agregado)

36. La Comisión considera, con base en la información presentada por las partes y resumida en el presente informe, que subsisten plenamente los motivos expuestos por los peticionarios en sus alegatos sobre el presente caso. Luego, no existe razón alguna para suspender o concluir el trámite iniciado en el sistema interamericano; por el contrario, el caso debe ser declarado admisible a fin de proseguir a la siguiente etapa prevista en la Convención Americana y el Reglamento de la CIDH.

V. CONCLUSIONES

37. La Comisión concluye que tiene competencia para conocer de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

38. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1. Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 5, 7, 8, 11, 19 y 25 de la Convención Americana.

2. Notificar de esta decisión a las partes.

3. Continuar con el análisis de fondo de la cuestión.

4. Ponerse a disposición de las partes con el fin de alcanzar una solución amistosa fundada en el respeto a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana e invitar a las partes a pronunciarse sobre tal posibilidad; y

5. Publicar esta decisión e incluirla en su informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de San José, Costa Rica, a los 19 días del mes de noviembre de 1999. (Firmado): Robert K. Goldman, Presidente; Hélio Bicudo, Primer Vicepresidente; Claudio Grossman, Segundo Vicepresidente; Miembros: Alvaro Tirado Mejía, Carlos Ayala Corao y Jean Joseph Exumé.

1 Nombres ficticios. La verdadera identidad de las presuntas víctimas y de sus familiares se mantiene en reserva por solicitud expresa de los peticionarios, y de conformidad con la práctica de la Comisión ante denuncias de hechos como los caracterizados en el presente caso, cuya publicación puede afectar la dignidad y el honor de las personas (Ver, por ejemplo, Informe Anual de la CIDH 1996, Informe Nº 38/96, Caso 10.506 – X e Y, Argentina, págs. 52 a 78). Además, una de las supuestas víctimas era menor de edad en el momento en que habrían ocurrido las violaciones. En su nota del 2 de mayo de 1999, los peticionarios manifestaron cuanto sigue:

A partir de las denuncias, las víctimas sufrieron represalias de la comunidad donde vivían, que hicieron que tuvieran que mudarse de su pueblo de origen y que dos de ellas se cambiaran los nombres. Por tales motivos, los peticionarios hemos obviado los nombres de las ofendidas y solicitamos respetuosamente a la H. Comisión que en el futuro mantenga el nombre de las víctimas en confidencialidad.

La verdadera identidad de las víctimas está en conocimiento del Estado mexicano. Dicha información consta en la denuncia que originó el trámite del Caso 11.565, cuyas partes pertinentes se transmitieron al Estado el 18 de enero de 1996, así como en la denuncia formulada el 30 de junio de 1994 a la Procuraduría General de la República en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

2 Grupo armado disidente que protagonizó una rebelión en Chiapas en 1994. La "Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas", que entró en vigor el 11 de marzo de 1995, define al EZLN como "el grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994". A la fecha de aprobación de este informe, seguía el conflicto y las negociaciones para la paz en Chiapas permanecían inconclusas.

3 Comunicación de CEJIL del 27 de mayo de 1999, pág. 4.

4 Comunicación de CEJIL del 27 de mayo de 1999, págs 5 y 6.

5 México depositó el instrumento de ratificación de la Convención de Belém do Pará el 12 de noviembre de 1998.

6 Comunicación de CEJIL del 27 de mayo de 1999, pág. 13.

7 Comunicación del Estado mexicano del 13 de mayo de 1996, págs. 1 y 2.

8 Comunicación del Estado mexicano del 24 de octubre de 1996, pág. 2.

9 Idem, págs. 2-3.

10 Idem, pág. 3.

11 Por ejemplo, Pedro Santiz Espinoza declaró:

Que desde el tiempo en que llegaron los militares a mi casa siempre se han portado bien con la gente; que nunca he visto que la gente que pasa por ahí tenga algún problema con los militares; que los militares únicamente les piden a la gente que pasa por ahí su credencial y les revisan sus bolsas; que nunca he escuchado algún rumor de que los militares que están en el puesto junto a mi casa, se hayan aprovechado de mujeres…

Que no observó que los soldados hubieran golpeado a las muchachas, ya que entonces lo hubiera manifestado a la autoridad, que no ha sido asesorado por nadie para lo que está diciendo, que tampoco ha sido amenazado, ni tampoco le han dado dinero para que declare como lo hace, que en ese día no estaba tomado…

Comunicación del 29 de octubre de 1996, pág. 4.

12 Idem, págs. 10 y 11.

13 En tal sentido, el Estado agrega lo siguiente:

Es incomprensible que finquen acusaciones en contra de instituciones verticales y de limpia trayectoria histórica como el Ejército Mexicano, sin más prueba que rumores que sólo producen inseguridad jurídica y el más oprobioso ataque a los organismos responsables de la Seguridad Nacional, que fueron llevados a la zona de conflicto, con el único propósito de cumplir su deber, su misión constitucional, de salvaguardar la Seguridad Interior de la Nación, dentro del régimen del estado de derecho y tutela de los Derechos Humanos que impera en el Estado Mexicano.

Idem, págs. 26 y 27.

14 Comunicación del Estado del 14 de julio de 1999, pág. 1.

15 Idem.

16 El Estado mexicano depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana el 3 de abril de 1982.

17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia sobre excepciones preliminares, 26 de junio de 1987, párr. 91.

18 Al respecto, los peticionarios manifiestan que "el delito de violación, en este caso tumultuaria y en contra de tres mujeres incluida una menor, es originalmente y por definición un delito del orden común y no una falta contra la disciplina militar" (comunicación del 28 de agosto de 1996, pág. 4). Por su parte, el Estado sostiene que los militares se encontraban en servicio el día de los hechos, ya que "en tiempo de paz también

puede afectarse la seguridad interior del país" (comunicación del 24 de octubre de 1996, pág. 14); que es "lógico que la competencia se dé para el Fuero de Guerra"; y que el "órgano del fuero castrense competente…después de haber realizado una profunda y exhaustiva investigación a través de una averiguación previa, concluyó sobre la inexistencia de los hechos imputados". (ídem, pág. 22)

19 Los peticionarios sostienen lo siguiente:

[El 9 de junio de 1994] una doctora perteneciente al Grupo de Mujeres de San Cristóbal practica un examen médico ginecológico a las víctimas donde certifica que a más de 20 días de la violación aún persisten huellas de violencia y cicatrización de lesiones físicas y genitales en concordancia con la fecha de la agresión.

Comunicación del 16 de enero de 1996, págs. 2 y 3.

20 Cabe recordar en tal sentido la siguiente precisión formulada por la Corte Interamericana:

Cuando se invocan ciertas excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos internos, como son la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal, no sólo se está alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se está imputando al Estado involucrado una nueva violación a las obligaciones contraídas por la Convención. En tales circunstancias la cuestión de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo.

Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia citada, párr. 91.

21 Comunicación del 14 de julio de 1999, pág. 3.

**INFORME NO 66/00. CASO 12.191. MARÍA MAMÉRITA MESTANZA CHÁVEZ. PERÚ. 3 DE OCTUBRE DE 2000.**

I.RESUMEN

1.Mediante petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión", "la Comisión Interamericana" o "CIDH") el 15 de junio de 1999, las organizaciones no gubernamentales Estudio para la Defensa de la Mujer (DEMUS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (CLADEM) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), las cuales acreditaron posteriormente como copeticionarias al Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP) y al Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), (en adelante "las peticionarias"), denunciaron que la República del Perú (en adelante "Perú", "el Estado" o "el Estado peruano") violó derechos humanos de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, al someterla de manera forzada a un procedimiento quirúrgico de esterilización, que finalmente ocasionó la muerte de la señora Mestanza Chávez. Las peticionarias originales alegaron que los hechos denunciados configuran violación por el Estado peruano de los derechos a la vida, a la integridad personal, y a igualdad ante la ley, consagrados en los artículos 4, 5, 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención" o la "Convención Americana"), así como violaciones a los artículos 3, 4, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante "Convención de Belem do Para"), a los artículos 3 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante "Protocolo de San Salvador"), y a los artículos 12 y 14(2) de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El Estado alegó inadmisibilidad por falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. La Comisión decide admitir el caso en lo que se refiere a presuntas violaciones a los artículos 1, 4, 5 y 24 de la Convención Americana, y 7 de la Convención de Belém do Pará.

II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

2.La Comisión recibió la denuncia el 15 de junio de 1999. El 14 de julio de 1999 la CIDH abrió el caso, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió información a ser presentada dentro de un plazo de 90 días. Perú solicitó ampliación del plazo para hacer llegar su respuesta, que fue otorgada por la CIDH. Perú respondió el 14 de enero de 2000. Las peticionarias presentaron observaciones a la respuesta del Estado el 12 de abril de 2000.

III.POSICIÓN DE LAS PARTES

A. Posición de las peticionarias

3.Alegan que el caso de la Sra. María Mamérita Mestanza representa uno más entre un número significativo de casos de mujeres afectadas por la aplicación de una política gubernamental de carácter masivo, compulsivo y sistemático que enfatizó la esterilización como método para modificar rápidamente el comportamiento reproductivo de la población, especialmente de mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales. Al respecto, refieren que la Defensoría del Pueblo recibió diversas denuncias al respecto,[1] y que entre noviembre de 1996 y noviembre de 1998 CLADEM, por su parte, logró documentar 243 casos sobre violaciones de derechos humanos en la aplicación de la anticoncepción quirúrgica en Perú.

4.Señalan que la señora María Mamérita Mestanza, mujer campesina de aproximadamente 33 años de edad y madre de 7 hijos, fue objeto de acoso desde 1996, por parte del Centro de Salud del Distrito de La Encañada, que forma parte del sistema público de salud, para que se esterilizara. Recibieron así, ella y su compañero permanente Jacinto Salazar Suárez, distintas formas de hostigamiento, que incluyeron varias visitas donde el personal de salud amenazaba con denunciarla a ella y al Sr. Salazar Suárez ante la policía, y les mencionaba que el gobierno había dado una ley conforme a la cual la persona que tuviera más de cinco hijos debería pagar una multa y sería llevada a la cárcel.

5.Refieren que finalmente y bajo coacción se logró el consentimiento de la señora Mestanza para ser objeto de una operación de ligadura de trompas. El procedimiento quirúrgico fue realizado en fecha 27 de marzo de 1998 en el Hospital Regional de Cajamarca, sin haberse efectuado previamente ningún examen médico. La señora Mestanza fue dada de alta al día siguiente, 28 de marzo de 1998, aún cuando presentaba serias anomalías como vómitos e intensos dolores de cabeza. Durante los días siguientes el señor Jacinto Salazar informó varias veces al personal del Centro de Salud de La Encañada del estado de salud de la señora Mestanza, que iba empeorando cada día, y el personal del Centro de Salud decía que estos eran los efectos post operatorios de la anestesia.

6.Aducen que finalmente la señora Mestanza Chávez falleció en su casa, el 5 de abril de 1998, y que en el certificado de defunción se diagnosticó que su muerte se había producido debido a una "sepsis" como causa directa y bloqueo tubárico bilateral como causa antecedente. Informaron que días después un doctor del Centro de Salud ofreció una suma de dinero al señor Jacinto Salazar con el fin de dar por terminado el problema.

7.Indican que el 15 de abril de 1998 el señor Jacinto Salazar denunció ante la Fiscal Provisional Mixta de Baños del Inca a Martín Ormeño Gutiérrez, Jefe del Centro de Salud de La Encañada, en relación con la muerte de la señora Mestanza, por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la figura de homicidio culposo. Agregan que el 15 de mayo de 1998 dicha Fiscal Provincial formalizó denuncia penal contra el señor Ormeño Gutiérrez y contra otras personas, ante la Jueza Provincial de la localidad, quien el 4 de junio de 1998 declaró que no había lugar a la apertura de instrucción. Tal decisión fue confirmada el 1° de julio de 1998 por la Sala Especializada en lo Penal, en virtud de lo cual, el 16 de diciembre de 1998, la Fiscal Provincial ordenó el archivo definitivo del caso.

B. Posición del Estado

8.Alega que el Ministerio de Salud investigó los hechos, y que dicha investigación arrojó como resultado "consejería inadecuada" a la señora Mestanza y falta de seguimiento después de la intervención quirúrgica, todo esto como resultado de una intervención quirúrgica voluntaria.

9.Señala que como consecuencia de este informe se determinó la existencia de responsabilidad administrativa de los médicos, enfermeras y anestesistas que participaron en la operación de la señora Mestanza, como también de los directores del Centro de salud y de los Coordinadores de los Programas de Salud Reproductiva. Agrega que el caso fue luego estudiado por la Inspectoría General de salud y también por el Juzgado Mixto de Baños del Inca, de la ciudad de Cajamarca, y por la Sala Especializada de la Corte Superior de Justicia, quienes consideraron no haber lugar a la apertura de la instrucción iniciada por la denuncia penal presentada por el señor Salazar Suárez ante la Fiscalía Provincial Penal de Baños del Inca el 15 de abril de 1998. Con lo anterior y según la legislación peruana, el Estado señaló que la decisión de no abrir instrucción adquirió calidad de cosa juzgada.

10.Aduce que la acción instaurada por el señor Salazar estuvo destinada a definir la responsabilidad individual de agentes en actos de negligencia médica y no tuvo como objeto determinar lo que los peticionarios determinaron como "esterilización forzada". En razón de ello solicitó que el caso se declarare inadmisible debido a que no se agotaron los recursos internos respecto al proceso quirúrgico en el que alegadamente no medió la voluntad de la víctima, y respecto al acoso y los actos discriminatorios denunciados por las peticionarias.

IV.ANÁLISIS

11.La Comisión pasa a analizar los requisitos de admisibilidad de una petición establecidos en la Convención Americana.

A. Competencia ratione materiae, ratione personae y ratione temporis de la Comisión

12.Las peticionarias se encuentran facultadas por el artículo 44 de la Convención Americana y por el artículo 12 de la "Convención de Belém do Pará" para presentar denuncias ante la CIDH. Dicha petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a la cual Perú se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados tanto en la Convención Americana como en la "Convención de Belém do Pará". En lo concerniente al Estado, la Comisión observa que Perú es Estado parte de la Convención Americana, al haberla ratificado el 28 de julio de 1978, y de la "Convención de Belém do Pará", por haberla ratificado el 18 de octubre de 1995. Por tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la denuncia.

13.Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione materiae debido a que los hechos alegados en la petición pudieran ser violatorios de derechos protegidos por la Convención Americana y por la Convención de Belém do Pará, en su artículo 7.

14.La CIDH tiene además competencia rationae temporis en razón de que los hechos en cuestión habrían tenido lugar a partir de 1996, cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana y en la Convención de Belém do Pará ya se encontraba en vigor para el Estado peruano.

B. Requisitos de admisibilidad de la petición

a. Agotamiento de los recursos internos

15.Las peticionarias y el Estado concuerdan en que el 15 de abril de 1998 el señor Jacinto Salazar denunció ante la Fiscal Provisional Mixta de Baños del Inca a Martín Ormeño Gutiérrez, Jefe del Centro de Salud de La Encañada, en relación con la muerte de la señora Mestanza, por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la figura de homicidio culposo. El 15 de mayo de 1998 dicha Fiscal Provincial formalizó denuncia penal contra el señor Ormeño Gutiérrez y contra otras personas ante la Jueza Provincial de la localidad, quien el 4 de junio de 1998 declaró que no había lugar a la apertura de instrucción. Dicha decisión fue confirmada el 1° de julio de 1998 por la Sala Especializada en lo Penal, en virtud de lo cual la Fiscal Provincial, en fecha 16 de diciembre de 1998, ordenó el archivo definitivo del caso.

16.Las peticionarias sostienen que con la decisión anterior se agotaron los recursos de la jurisdicción interna. El Estado aduce por su parte que tal decisión del 16 de diciembre de 1998 es definitiva y constituye cosa juzgada, pero que ésta no constituye agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, debido a que con ella se pretendió determinar responsabilidades por el eventual homicidio culposo de la señora Mestanza, pero no lo relativo a la alegada esterilización forzada ni a los denunciados acoso y actos de discriminación que se denuncia fue víctima la señora Mestanza.

17.La Comisión observa que el recurso interno agotado por el señor Jacinto Salazar era adecuado, al menos en teoría, para procurar obtener justicia en el caso específico, mediante la sanción penal al Jefe del Centro de Salud en donde se habrían originado los hechos que a la postre causaron la muerte de la señora Mestanza. Por otra parte, el Estado no ha acreditado cuáles son los otros recursos internos que según su argumento debieron ser agotados. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento tanto de los recursos internos que deben agotarse como de su efectividad.[2]

18.Por las razones anteriormente expuestas la Comisión llega a la conclusión que está cumplido el requisito concerniente al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.

b. Plazo de presentación

19.Con relación al requisito contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención, conforme al cual la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos, se ha cumplido en este caso debido a que el 16 de diciembre de 1998 se agotaron los recursos de la jurisdicción interna, y aún cuando del caso no surge la fecha de notificación de dicha decisión, la petición fue formulada a la CIDH el 15 de junio de diciembre de 1999, antes de que transcurrieran seis meses a partir de la fecha de la decisión.

c. Duplicidad de procedimientos y cosa juzgada

20.La Comisión entiende que la materia de la petición no está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni reproduce una petición ya examinada por éste u otro organismo internacional.Por lo tanto, los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) se encuentran también satisfechos.

d. Caracterización de los hechos

21.La Comisión considera que la exposición de las peticionarias se refiere a hechos que de ser ciertos podrían caracterizar una violación de derechos garantizados en la Convención Americana y en la Convención de Belem do Pará.

V.CONCLUSIONES

22.La Comisión considera que tiene competencia para conocer de este caso y que de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana la petición es admisible, en los términos anteriormente expuestos.

23.Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible el presente caso, en lo que se refiere a presuntas violaciones a los artículos 1, 4, 5 y 24 de la Convención Americana, y 7 de la Convención de Belém do Pará.

2.Notificar esta decisión a las peticionarias y al Estado.

3.Continuar con el análisis del fondo de la cuestión.

4.Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 3 días del mes de octubre de 2000.Firmado por Hélio Bicudo, Presidente; Claudio Grossman, Primer Vicepresidente; Juan Méndez, Segundo Vicepresidente; Comisionada Marta Altolaguirre, Comisionados Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo.

**INFORME N° 73/01. CASO 12.350. MZ. BOLIVIA. 10 de octubre de 2001.**

I.RESUMEN

1.El 22 de noviembre de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una denuncia presentada por la Oficina para la Mujer, el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ("las peticionarias"), contra el Estado de Bolivia ("el Estado") por la violación de los derechos y garantías judiciales de MZ.[1]La peticionaria alega que los hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana") a respetar y garantizar los derechos (articulo 1(1); derecho a la integridad personal (artículo 5); garantías judiciales (artículo 8(1); protección a la honra y a la dignidad (artículo 11); a la igualdad ante la ley (artículo 24); y protección judicial (artículo 25) y los artículos 3, 4, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

2.Según la petición, la presunta víctima MZ fue violada sexualmente el 2 de octubre de 1994, por lo cual acudió a la justicia penal del Estado boliviano, con el fin de que su agresor, Jorge Carlos Aguilar, fuera investigado y sancionado. La escasa pena impuesta por el Juez de primera instancia la llevó a apelar la decisión, para que el autor del hecho fuera sancionado con una pena mayor, que guardara proporción con el daño causado, pero los jueces que resolvieron el recurso de apelación tomaron la arbitraria y discriminatoria decisión de absolverlo, dejando impune la violación sexual de la que MZ fue víctima.

3.El Estado considera que el Poder Ejecutivo no puede responder a la denuncia interpuesta contra Bolivia por MZ, ya que esto atentaría contra la independencia del Poder Judicial. Que dicha denuncia es inadmisible ya que fue interpuesta fuera del plazo de seis meses establecido en el artículo 38 del anterior Reglamento de la Comisión --vigente al momento de presentar la denuncia-- y 46 de la Convención Americana; que la valoración de la prueba por parte de los jueces durante el desarrollo de todo el proceso ante la jurisdicción interna de Bolivia se hizo en ejercicio de su jurisdicción, de acuerdo con las leyes y la jurisprudencia boliviana, y con respeto de los criterios de prudente arbitrio y sana crítica, y que MZ tuvo acceso a todos los recursos que consagra la legislación boliviana.

4.Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 1(1),5, 8(1), 11, 24 y 25 de la Convención Americana y los artículos 3, 4, 6 y 7 de la Convención de Belém do Pará.

## II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA

5.La petición fue recibida el 22 de noviembre de 2000 y transmitida al Estado boliviano el 14 de diciembre de 2000 bajo el número 12.350.El Estado presentó sus observaciones el 16 de marzo de 2001, las que se trasladaron a los peticionarios el 21 de marzo de 2001.Las peticionarias solicitaron una prórroga de 30 días para contestar y hacer las observaciones correspondientes a la respuesta del Estado boliviano. El 17 de abril de 2001 las peticionarias solicitan una prórroga de 30 días, la Comisión le concedió al peticionario 60 días de prórroga en fecha 19 de abril de 2001. El 15 de junio de 2001 CEJIL solicitó una prórroga de 20 días; la CIDH le concedió una prórroga de 30 días en fecha 18 de junio de 2001. Los peticionarios presentaron observaciones sobre la respuesta del Estado e información adicional el 19 de julio de 2001, las que se trasladaron al Estado de Bolivia en fecha 8 de agosto de 2001 con un término de 30 días. El Estado, en fecha 11 de septiembre de 2001, solicitó prórroga para su presentación. La CIDH le concedió 30 días a partir del 14 de septiembre de 2001.

## III.POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD

### A. Las peticionarias

6.Las peticionarias alegan que MZ, de 30 años de edad, de nacionalidad holandesa, soltera, en la madrugada del 2 de octubre de 1994 fue atacada y violada sexualmente en su domicilio por Jorge Carlos Aguilar, hijo de los dueños de la casa que rentaba. La sorpresa del ataque hizo que la víctima quedara en principio paralizada por el terror y la fuerza física del atacante, más las amenazas de muerte y los ademanes que hacía de sacar un arma; luego intentó resistencia llegando a herir en la ceja a su atacante con un objeto contundente. A primeras horas del alba, aprovechando un descuido de su atacante, la presunta víctima logró huir en busca de auxilio. La familia que ocupaba el apartamento principal del inmueble le facilitó el teléfono desde el que solicitó ayuda de sus amigos GB y KF, quienes le acompañaron a las gestiones de denuncia y atención médica.

7.Personal especializado en Criminalística se constituyó en el lugar de los hechos, recogió evidencias para su procesamiento en el laboratorio y tomó fotografías del escenario del crimen.

8.Las diligencias de la Policía Judicial concluyen que MZ fue víctima de los delitos de violación y allanamiento, señalando como posible autor a Jorge Carlos Aguilar, quien no pudo ser encontrado desde el día de la denuncia, no obstante los esfuerzos realizados por la Policía Técnica Judicial y la INTERPOL. El imputado es declarado rebelde y contumaz a la ley, pero días previos a la conclusión del período de prueba se presenta ante el Juez prestando declaración indagatoria. Con fecha 26 de mayo de 1996 se dicta el auto final de instrucción que dispone el procesamiento del imputado Jorge Carlos Aguilar por existir suficientes indicios de ser el autor del delito de violación. Iniciado el trámite del plenario, el imputado Jorge Carlos Aguilar es citado a prestar declaración confesoria. Terminado el trámite del Plenario, el Fiscal requiere la condena de Jorge Carlos Aguilar por el delito de violación y por el allanamiento de domicilio.

9.Finalmente el Juez de Partido Tercero de lo Penal de Cochabamba declaró a Jorge Carlos Aguilar autor del delito de violación sexual, por existir en su contra prueba plena, aplicando la pena de cinco años de prisión.

10.Ambas partes apelan la sentencia dictada. En este estado procesal el condenado Jorge Carlos Aguilar presenta una carta con título de "declaración escrita" en la que da una tercera versión de los hechos, afirmando que MZ fue quien le agredió sexualmente y no como ella ha sostenido durante todo el proceso.

11.El 13 de octubre de 1997, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito de Cochabamba, legitimada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dicta el auto de Vista en el que se absuelve de culpa y pena por el delito de violación a Jorge Carlos Aguilar.

12.Contra esta sentencia fue interpuesto un recurso de casación el 22 de octubre de 1997 por error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, el cual fue declarado INFUNDADO por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 25 de abril de 2000.

13.En el documento de observación a la respuesta del Estado boliviano, las peticionarias consideran que "El Poder Ejecutivo de Bolivia debe atender la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado que representa internacionalmente a todos los poderes y órganos del Estado, los cuales están vinculados por las obligaciones internacionales adquiridas por Bolivia".

14.Los peticionarios alegan que la denuncia fue presentada dentro del plazo de seis meses establecido por el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana. En cuanto a otros requisitos de admisibilidad de la petición, manifiestan cuanto sigue:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es competente para conocer este caso porque los procesos de apelación y casación adelantados por la jurisdicción boliviana son violatorios del debido proceso y de otros derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".

El Estado de Bolivia violó el derecho de MZ a obtener una decisión fundada (artículo 8.1). La decisión judicial es arbitraria, porque es contraria a la evidencia y carece de una adecuada motivación.

También violó su derecho de contar con un Juez imparcial en la determinación de sus derechos, carente de prejuicios de género, que no la discriminara (artículo 8.1 en conexión con los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana y 7 de la Convención de Belém do Pará.[2]

B. El Estado

15.Por su parte el Estado boliviano alega que en el caso de MZ los más altos tribunales de dicho Estado se pronunciaron sobre sus peticiones, habiendo la Corte Suprema de Justicia dictado el Auto Supremo el 25 de abril de 2000 en el caso seguido por MZ contra Jorge Carlos Aguilar por el delito de violación, actuación procedimental que se constituye jurisprudencia nacional en materia penal, aspecto que imposibilita que el Poder Ejecutivo pueda responder a la demanda interpuesta ante la CIDH por MZ.

16.Estima el Estado que si la Comisión corrigiese las supuestas irregularidades denunciadas por el peticionario, no sólo atentaría contra los principios de seguridad jurídica e independencia judicial, sino que convertiría a la Comisión en una instancia de revisión, lo cual no se compadece con su naturaleza.

17.El Estado boliviano entiende que la denuncia fue presentada por las peticionarias el 7 de diciembre de 2000, y que la decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia le fue notificada el 29 de mayo de 2000 a MZ, tal como se desprende del expediente. Por ello, en el presente caso a partir del 29 de mayo de 2000 tenía el plazo legal de seis meses, o sea, 29 de noviembre de 2000 para presentar su petición ante la CIDH, dentro de lo previsto por el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana, concordante con el artículo 38(1) del Reglamento de la CIDH vigente en dicha época, aspecto que no fue cumplido por las peticionarias, dado que de los antecedentes notificados al Estado boliviano se establece que las peticionarias presentaron la demanda en fecha 7 de diciembre de 2000, mediante el caso 12.350, o sea a los seis meses y ocho días, extremo que vulnera los plazos previstos.

18.El Estado boliviano considera que la valoración de la prueba por parte de los jueces durante el desarrollo de todo el proceso ante la jurisdicción interna de Bolivia se hizo de acuerdo a las leyes y la jurisprudencia, y con respeto de los criterios de prudente arbitrio y sana crítica, así como lo establece artículo 135 del Código de Procedimiento Penal "Todos los medios de pruebas aportados serán valorados en su conjunto por un órgano jurisdiccional a su prudente arbitrio y conforme a las reglas de la sana crítica, exponiendo, invariablemente, los razonamientos en que se funde esa valoración jurídica".

19.Dentro de la demanda que interpuso MZ contra Jorge Carlos Aguilar, la demandante ha usado todos los recursos que le concede la legislación boliviana, descartándose que en cualquier instancia del trámite seguido por MZ no se le haya permitido en sus derechos al acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedida de agotarlos.

## IV.ANÁLISIS

### A. Competencia, ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci de la Comisión Interamericana.

20.Las peticionarias se encuentran facultadas por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. Dichas peticiones señalan como presuntas víctimas a personas individuales, respecto a quienes Bolivia se comprometió a

respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención. En lo concerniente al Estado, la Comisión observa que Bolivia es Estado parte de la Convención Americana, al haberla ratificado el 19 de julio de 1979. Asimismo, la CIDH observa que en cuanto a la competencia pasiva en ratione personae, es un principio general del derecho internacional que el Estado debe responder por los actos de todos sus órganos, incluidos los de su Poder Judicial. Por ello, la Comisión tiene competencia ratione personae para entender en la presente petición.

21.La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer esta petición por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte de dicho tratado.

22.La Comisión tiene competencia ratione temporis, por cuanto los hechos alegados en la petición tuvieron lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención ya se encontraba en vigor para el Estado.

23.En relación con los alegatos sobre posibles violaciones a la Convención de Belém do Pará, la Comisión observa que Bolivia ratificó dicha Convención en fecha 5 de diciembre de 1994. La violación sexual ocurrida a la víctima tuvo lugar el 2 de octubre de 1994, es decir, con anterioridad a la ratificación por parte de Bolivia de dicho instrumento internacional. Por ello la Comisión carece de competencia ratione temporis para considerar estos hechos. Sin perjuicio de ello, la Comisión sí tiene competencia ratione temporis para aplicar la Convención de Belém do Pará por hechos ocurridos con posterioridad a la ratificación de la Convención por parte del Estado, en lo que se refiere a la presunta denegación de justicia.

24.Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae porque en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos en la Convención Americana. En relación a las alegaciones de las peticionarias sobre las supuestas violaciones al artículo 7 de dicha Convención, la Comisión observa que de conformidad con el artículo 12 de la Convención de Belém do Pará se pueden presentar a la CIDH peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la misma por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a los artículos 3, 4 y 6 de dicha Convención, la Comisión Interamericana puede utilizarlos en la interpretación de otras disposiciones aplicables a la luz de lo previsto en el artículo 29 de la Convención Americana, por lo cual la CIDH tiene competencia ratione materiae para aplicar la Convención de Belém do Pará.

B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

a. Agotamiento de los recursos internos

25.Con la interposición del Recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia, la resolución del mismo por el Auto Supremo de fecha 25 de abril de 2000 que lo rechaza por infundado y notificada a las partes el 29 de mayo, se han agotado todos los recursos internos disponibles en la legislación interna de Bolivia.

b. Plazo de presentación

26.El Estado controvierte el cumplimiento del plazo de seis meses que establece el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana, pues alega que la demanda fue presentada el 7 de diciembre de 2000. La CIDH observa que la comunicación tiene sello de ingreso y fue recibida en la Secretaría Ejecutiva el 22 de noviembre de 2000. Teniendo en cuenta que la sentencia que agotó los recursos internos fue notificada el 29 de mayo de 2000, la Comisión tiene por cumplido el plazo de seis meses para la presentación de la petición. En relación a la nota del 7 de diciembre de 2000 es la segunda presentación hecha por las peticionarias, en la cual adjuntan documentación de referencia.

c. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada

27.El expediente del presente caso no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se halla pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente decidido por la Comisión Interamericana. Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones previstas en el artículo 46(1)(d) y en el artículo 47(d) de la Convención Americana.

d.C aracterización de los hechos alegados

28.La CIDH considera que los hechos alegados, en caso de resultar ciertos, caracterizarían violaciones de los derechos garantizados en los artículos 1(1), 5, 8(1), 11, 24 y 25 de la Convención Americana y 3, 4, 6 y 7 de la Convención de Belém do Pará.

29.Las peticionarias no alegan meros errores de hecho ni de derecho sino que, por el contrario, sostienen que el proceso judicial considerado como un todo, y la forma en que se condujeron las autoridades judiciales, constituyen violaciones al debido proceso.

V.CONCLUSIONES

30.La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión.

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas violaciones de derechos protegidos en los artículos 1(1), 5, 8(1), 11, 24 y 25 de la Convención Americana y 3, 4, 6 y 7 de la Convención de Belém do Pará.

2.Notificar esta decisión a las partes.

3.Continuar con el análisis de fondo de la cuestión, y

4.Publicar esta decisión e incluirla en su informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2001.(Firmado): Claudio Grossman, Presidente; Juan E. Méndez, Primer Vicepresidente; Marta Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta, Hélio Bicudo, Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo, Comisionados.

**INFORME Nº 118/01. CASO 12.230. ZOILAMÉRICA NARVÁEZ MURILLO. NICARAGUA. 15 de octubre de 2001.**

I.RESUMEN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

1.El 27 de octubre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o la "CIDH") recibió una petición presentada por la señora Zoilamérica Narváez Murillo, en su calidad de presunta víctima, y Vilma Núñez de Escorcia, en su carácter de representante legal y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (en adelante "las peticionarias"), en contra del Estado de Nicaragua (en adelante "el Estado" o "Nicaragua"), en la cual se alega que el Estado violó el derecho de la Sra. Zoilamérica Narváez de ser oída por un juez o tribunal competente. La señora Narváez presentó una querella ante el Juzgado I de Distrito del Crimen de Managua, el 5 de junio de 1998, con motivo de supuestas agresiones físicas y psicológicas de las que fue objeto por parte de su padre adoptivo, el Sr. Daniel Ortega Saavedra, actual diputado ante la Asamblea Nacional.

2.Según las peticionarias, el Estado de Nicaragua ha violado los artículos 1 (obligación de respetar los derechos), 2 (obligación de adoptar disposiciones de derecho interno), 8 (garantías judiciales), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial)contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el artículo 7 incisos b, d, e, f y g, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, toda vez que la Asamblea Nacional no se ha pronunciado sobre la solicitud de desafuero presentada por la Sra. Narváez en contra del diputado Daniel Ortega, lo cual no ha permitido a la presunta víctima acceder a la justicia en busca del restablecimiento de sus derechos violados.

3.El Estado nicaragüense alegó no haber denegado el acceso a la justicia a la señora Zoilamérica Narváez Murillo, e indicó que en el presente caso las autoridades actuaron con apego a la ley interna y a lo establecido en la Convención Americana. El Estado indicó además que en el caso en cuestión, no se habían agotados los recursos de la jurisdicción interna ya que existía una Comisión Especial encargada de estudiar y dictaminar sobre el desafuero del diputado Ortega conforme al procedimiento establecido por la Ley de Inmunidad. Por lo tanto solicitó a la Comisión que declarara el reclamo de las peticionarias inadmisible sobre la base del incumplimiento del requisito del previo agotamiento de los recursos internos, previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana. En respuesta, las peticionarias alegaron que la denuncia presentada ante la CIDH se enmarcaba en el contexto de las excepciones al requisito de agotamiento de los recursos internos previstos en el artículo 46(2) incisos (b) y (c) de la Convención Americana.

4.En su 113° período ordinario de sesiones, del 9 al 19 de octubre de 2001, la Comisión analizó los elementos de hecho y de derecho aportados por las partes durante la tramitación de la denuncia y decidió declarar el presente caso admisible conforme a las disposiciones de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

## II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5.El 27 de octubre de 1999, la Comisión recibió la petición presentada por las señoras Zoilamérica Narváez Murillo y Vilma Núñez de Escorcia en contra del Estado de Nicaragua. El 8 de noviembre de 1999, la Comisión, de conformidad con el artículo 34 de su Reglamento vigente hasta el 30 de abril de 2001, inició la tramitación del caso 12.230 y solicitó al Estado la información pertinente, otorgándole un plazo de 90 días para tal efecto. En la misma fecha se puso en conocimiento de las peticionarias la apertura del caso.

6.El 13 de enero de 2000, el Estado presentó sus observaciones indicando que en el caso bajo estudio no fueron agotados los recursos de la jurisdicción interna. Dicha información fue remitida a las peticionarias el 15 de febrero de 2000, solicitando las observaciones correspondientes.

7.El 14 de enero de 2000, las peticionarias remitieron a la Comisión información adicional, la cual fue trasladada al Estado el 16 de febrero de 2000.El 27 de marzo de 2000, las peticionarias aportaron a la Comisión la respuesta sobre las observaciones del Estado. Dicha información fue remitida al Estado de Nicaragua el 31 de marzo de 2000, otorgándole un plazo de 30 días para sus observaciones.

8.El 22 de agosto de 2000, la Comisión recibió una comunicación de las peticionarias, en la cual solicitaron comparecer en una audiencia ante la CIDH. La Comisión, mediante nota del 11 de septiembre de 2000, señaló la imposibilidad de recibirlas en audiencia, toda vez que la solicitud fue presentada extemporáneamente.

9.El 27 de septiembre de 2000, el Estado remitió sus observaciones reiterando que en el presente caso los recursos internos no fueron agotados. De acuerdo al procedimiento, dicha información fue transmitida a las peticionarias el 6 de octubre de 2000.

10.Con fecha 13 de diciembre de 2000, las peticionarias enviaron sus observaciones sobre la respuesta del Estado de Nicaragua. La Comisión dio traslado de dichas observaciones al Estado, el 19 de diciembre de 2000, otorgando un plazo de 30 días para su respuesta. El 25 de abril de 2001, el Estado dio respuesta a las observaciones del peticionario, reiterando su posición expresada en escritos anteriores. El 26 de junio de 2001, las peticionarias presentaron sus observaciones sobre la respuesta del Estado.

## III.POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Posición de las peticionarias

11.Las peticionarias alegan que el Estado de Nicaragua ha violado el derecho a las garantías judiciales de la señora Zoilamérica Narváez, al permitir que los delitos de abusos sexuales denunciados ante el Juzgado I de Distrito del Crimen de Managua queden impunes por no proceder al desafuero del diputado Daniel Ortega. Las peticionarias manifiestan que el Poder Legislativo obstaculizó el acceso a la justicia, en tanto que no tramitó la solicitud de desafuero, tal como lo establece el procedimiento de la Ley de Inmunidad, situación que pese a la actividad procesal realizada por la Sra. Narváez, no pudo ser superada por la falta de voluntad política del órgano legislativo y por la inexistencia de recurso ulterior alguno que obligara a dicho poder del Estado a iniciar el procedimiento de desafuero. Por lo anterior, consideran que en el presente caso operan las excepciones contenidas en el artículo 46(2), incisos (b) y (c) de la Convención Americana.

12.Las demandantes alegan que la Asamblea Nacional, en tanto que órgano del Estado, no se apegó a lo establecido por la Ley Nº 83 de Inmunidad, y a pesar de las reiteradas solicitudes de desafuero no recibió resolución alguna, hasta que se inició el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez presentado el caso ante la instancia internacional, el Estado remitió a la demandante, mediante oficio del 7 de diciembre de 1999, la notificación de la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional tomada en la sesión Nº 033-99, del 25 de noviembre de 1999, sobre su solicitud de desafuero.

13.Las peticionarias alegan que en dicha resolución, la Asamblea Nacional distorsionó y manipuló los alegatos de la Sra. Zoilamérica Narváez, ya que dicho organismo se pronunció sobre el procedimiento de suspensión o pérdida de condición de diputado, regida por el Reglamento Interno de la Asamblea, y no sobre el procedimiento para resolver la solicitud de desafuero interpuesta por la demandante, que se rige a través de la Ley de Inmunidad. Las peticionarias alegan además, que el Estado actuó con dolo, toda vez que remitió a la Comisión una resolución diferente a la que fuera transmitida a la Sra. Narváez en fecha del 7 de diciembre de 1999.

B. Posición del Estado

14.El Estado sostiene que el Poder Legislativo no obstaculizó en ningún momento el acceso a la justicia de la demandante. En este sentido señala que la Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua remitió a la Asamblea Nacional las diligencias que llegaron a su conocimiento, con base en la Ley de Inmunidad, ya que no tenía competencia para conocer la acción de querella promovida por la señora Zoilamérica Narváez, sin antes proceder al trámite de desafuero de conformidad con la ley interna. El Estado alega además que la demandante tuvo acceso pleno a los recursos internos, toda vez que solicitó el desafuero del diputado Ortega y pidió por la vía incidental que se determinara previamente si éste se encontraba en ejercicio de su cargo de diputado o si había incurrido en abandono de sus funciones.

15.El Estado alega que las instancias de la jurisdicción interna no se hallan agotadas, toda vez que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en sesión del 25 de noviembre de

1999, resolvió por unanimidad evacuar los incidentes que habían sido planteados por la Sra. Narváez y acordó crear una Comisión Especial con el objeto de estudiar y dictaminar sobre el desafuero del diputado Daniel Ortega, conforme al procedimiento establecido por la Ley de Inmunidad. El Estado agrega que las resoluciones de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no fueron recurridas de amparo por la Sra. Narváez, tal y como lo señala el artículo 51 de la Ley de Amparo. En consecuencia, solicita a la Comisión declare el reclamo de las peticionarias inadmisible, en los términos del artículo 46 (1) (a) de la Convención Americana.

## IV.ANÁLISIS SOBRE LA COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD

### A. Competencia de la Comisión

16.Vistos los antecedentes y el trámite de la denuncia señalados en los puntos anteriores, la Comisión consideró las condiciones de admisibilidad del caso en los siguientes términos:

17.La Comisión podrá conocer de un caso sometido a su consideración siempre y cuando, prima facie, éste reúna los requisitos formales de admisibilidad exigidos en los artículos 46y 47 de la Convención Americana.

18.Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto a quienes el Estado de Nicaragua se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Nicaragua es un Estado Parte de la Convención desde el 25 de septiembre de 1979, fecha en que depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición de la Sra. Zoilamérica Narváez Murillo.

19.La Comisión tiene competencia ratione loci, para conocer la presente petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado Parte en dicho Tratado.

20.La Comisión tiene competencia ratione temporis, por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición.
21.Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.

### B. Requisitos de admisibilidad de la petición

22.La Comisión procede a analizar si la presente petición reúne los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

a. Agotamiento de los recursos internos y plazo de presentación

de la petición

23.La Comisión ha señalado de manera reiterada el carácter "coadyuvante o complementario" del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Esta regla permite a los Estados solucionar previamente las cuestiones planteadas dentro del marco jurídico propio antes de verse enfrentados a un proceso internacional.

24.El Estado alega que el reclamo de las peticionarias debe ser declarado inadmisible en vista de que la decisión sobre el caso se encuentra pendiente de resolución. Las peticionarias, por su parte, alegan haber acudido a las autoridades competentes; sin embargo, la interposición de los recursos internos fue infructuosa, toda vez que la falta de pronunciamiento de parte de la Asamblea Nacional sobre la solicitud de desafuero no les ha permitido acceder a la justicia en busca del restablecimiento de sus derechos violados.

25.El artículo 46(1)(a) de la Convención establece lo siguiente: "para que una petición o comunicación presentada sea admitida por la Comisión se requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos". Sin embargo, su inciso (2) prevé que este requisito no resulta aplicable toda vez que:

a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

26.En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los peticionarios sólo deben agotar recursos que resulten "adecuados" para subsanar la violación alegada. Cabe mencionar que la función de esos recursos dentro del sistema del derecho interno debe ser idónea para proteger la situación jurídica infringida.[1]

27.En el presente caso las peticionarias alegaron haber agotado los recursos de la jurisdicción interna, toda vez que la demandante interpuso querella ante el Juzgado I de Distrito del Crimen de Managua, el 5 de junio de 1998, en contra del Sr. Daniel Ortega, por los delitos de abusos deshonestos, violación y acoso sexual. La señora Narváez solicitó en la misma querella se pidiera a la Asamblea Nacional iniciar el proceso de desafuero del Sr. Ortega como diputado ante dicho poder del Estado, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Nº 83 de Inmunidad. Dicha querella fue admitida en virtud del auto judicial del 9 de junio de 1998.

28.El 15 de junio de 1998, el diputado Daniel Ortega presentó un escrito ante el Juzgado I de Distrito del Crimen, mediante el cual solicitó al juez que rechazara la querella, dado que gozaba del privilegio de inmunidad por su condición de diputado, de conformidad con el artículo 139 de la Constitución Política de Nicaragua. Además negó las imputaciones que le fueron hechas y alegó la prescripción de la acción penal en varias de ellas.

29.En auto del 17 de junio de 1998, la juez a cargo de la causa revocó la admisión de la querella y remitió lo actuado a la Asamblea Nacional para que la Secretaría informara a la Junta Directiva y se procediera conforme a lo dispuesto en la Ley de Inmunidad.

30.El 22 de junio de 1998, la Sra. Zoilamérica Narváez presentó solicitud de desafuero del diputado Daniel Ortega ante la Secretaría de la Asamblea Nacional y el 24 de junio solicitó se verificara la asistencia del diputado a las sesiones parlamentarias. El 21 de agosto, el 9 y 11 de septiembre y el 8 de octubre de 1998, la demandante reiteró su solicitud ante la Asamblea Nacional.

31.El 28 de octubre de 1998, la Asamblea Nacional extendió a la señora Zoilamérica Narváez certificación de la resolución de la Junta Directiva que ordenaba la remisión del caso a la Dirección de Asesoría Legislativa, para que fuera ésta la que presentara sus consideraciones a la Junta Directiva.

32. El 7 de diciembre de 1999, la Asamblea Nacional notificó a la Sra. Narváez la Resolución Nº 033-99, del 25 de noviembre de 1999, mediante la cual la Junta Directiva de la Asamblea Nacional consideró su solicitud para que ésta se pronunciara "en el sentido de determinar si el Diputado Daniel Ortega Saavedra no goza del Fuero Especial de Inmunidad, porque según ella [la Sra. Narváez] expresa el Art. 130 Cn establece que la inmunidad no se aplica en los casos relativos a los Derechos de Familia, y ella entiende que los delitos por los que ha presentado acusación penal contra el Diputado Daniel Ortega, deben considerarse como Delitos contra la familia y caerían por lo tanto bajo los Derechos de Familia".

33.Con este propósito, la Junta Directiva señaló lo siguiente: "el Art. 130 Cn. expresa textualmente la excepción de Inmunidad para los Derechos de Familia, con lo cual se refiere única y exclusivamente a asuntos civiles relacionados con el Derecho de Familia tales como: El matrimonio; El divorcio; Los hijos; El parentesco; La patria potestad; Los alimentos, etc., y no se refieren en absoluto a aspectos del orden penal, ya que entonces diría expresamente delitos contra la familia y el legislador constituyente no usó esa expresión. La legislación nicaragüense así lo ha dejado establecido. Originalmente el Derecho de Familia se contempló en su totalidad como parte del Derecho Civil y ha correspondido a los Jueces Civiles dilucidar los asuntos que en esa materia se susciten distinguiéndolo de la materia Penal. Con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial claramente se observa la distinción existente, correspondiéndole a Salas y Tribunales distintos el conocimiento de estas materias…".

34.La Junta Directiva de la Asamblea Nacional agregó: "Que además en el Código Penal vigente no existen este tipo de delitos contra la familia, sino que únicamente contempla nuestro Código delitos contra las personas y delitos que afectan el estado civil de las personas. Debemos recordar el PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL establecido en el Arto. 34 Inciso 11 Cn. que establece que una persona tiene la garantía a no ser procesado ni condenado por acto u omisión que al momento de cometerse no esté previamente

calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible…" y el mismo Código Penal en su Arto. 13 establece: Prohíbase en materia penal la interpretación extensiva. El Juez debe atenerse estrictamente a la letra de la ley. En los casos de duda se interpreta la ley en el sentido más favorable al reo".

35.Finalmente, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional expresó que: "en el caso presentado por la Sra. Narváez Murillo, estamos claramente en presencia de una acción, de una acusación que no es del orden civil, campo al que pertenece el Derecho de Familia exceptuado constitucionalmente de la inmunidad, sino que estamos frente a un asunto claramente del orden penal que no quedó exceptuado de la inmunidad establecida por el artículo 130 Cn. y que más bien se rige por la legislación penal vigente".

36.En consecuencia, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional resolvió, por una parte, "declarar sin lugar la excepción presentada y reafirma que la inmunidad cubre en este caso al Diputado señor Daniel Ortega Saavedra"; y, por otra parte, "crear una Comisión Especial para conocer y resolver las diligencias remitidas a la Primera Secretaría por el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua, por la querella interpuesta por la Sra. Zoilamérica Narváez Murillo, en contra del señor diputado Daniel Ortega Saavedra".[2]

37.El Estado reconoce que las solicitudes y los argumentos planteados por la Sra. Narváez llevaron a la Asamblea Nacional a pronunciarse sobre los incidentes de previo y especial pronunciamiento contenidos en el Acta Nº 033/99, "lo que originó que postergara su decisión principal sobre la solicitud de desaforación del Diputado Ortega Saavedra, para pronunciarse sobre los incidentes planteados".[3]El Estado alega que la creación de dicha Comisión Especial demuestra que no se ha agotado la jurisdicción interna, toda vez que es éste el procedimiento establecido por la Ley de Inmunidad y que por lo tanto, es el órgano encargado de decidir sobre el desafuero del diputado Daniel Ortega. Sin embargo, el Estado menciona que: "Si bien es cierto, la Comisión está creada…falta aún el nombramiento de los cinco miembros que la integrarán."[4]

38.Por último, el Estado agrega en sus alegatos que los recursos internos no han sido agotados, toda vez que la Sra. Narváez no recurrió de amparo las Resoluciones de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.[5]A ese respecto, la peticionaria ha señalado que de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Amparo, no procede contra actos o resoluciones legislativas de la Asamblea Nacional, por lo que la denunciante está indefensa, ya que no existe recurso alguno que obligue al Poder Legislativo a resolver su denuncia en los términos que la Ley de Inmunidad establece.

39.La Comisión Interamericana observa que la Ley de Inmunidad establece que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional debe nombrar de inmediato una Comisión a fin de que se estudie y dictamine la queja presentada. Por otra parte, el procedimiento contemplado en la Ley de Inmunidad establece que vencido el término de prueba, que no debe ser mayor de 30 días, la Comisión Especial debe emitir un dictamen dentro de los 10 días siguientes, confirmando o rechazando la queja.[6]

40.Igualmente, la Comisión Interamericana observa con relación al agotamiento de los recursos internos que desde que la Sra. Narváez presentó su solicitud de desafuero ante la Asamblea Nacional, es decir, el 22 de junio de 1998, hasta la fecha, han transcurrido tres años y tres meses sin que la peticionaria haya recibido una respuesta definitiva sobre su solicitud. En particular, la falta de nombramiento de parte de la Asamblea Nacional de los miembros que integrarían la Comisión Especial no ha permitido obtener una decisión sobre la solicitud de desafuero interpuesta por la Sra. Narváez,[7] colocando así a la peticionaria en una situación de espera indefinida y privándola de ejercer sus derechos ante la justicia ordinaria.

41.A los efectos de la admisibilidad de la presente denuncia, la Comisión Interamericana considera que la peticionaria se ha visto privada de acceder a un recurso judicial adecuado para la investigación de su querella presentada ante el Juzgado de Managua, en el sentido de la excepción prevista en el artículo 46(2)(b) de la Convención Americana. Por lo tanto, los requisitos establecidos en el artículo 46(1)(a) y (b) no resultan aplicables al presente caso.

42.El artículo 46(2) de la Convención, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo frente a las normas sustantivas del mismo instrumento. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión y debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.

43.La Comisión estima que en el caso sub-judice, el agotamiento de los recursos internos se encuentra estrechamente ligado con el fondo del caso, dada la obligación del Estado de respetar las garantías de acceso a la justicia y de proveer recursos judiciales efectivos, de conformidad con la Convención Americana. Por lo anterior, los aspectos relacionados con la efectividad de los recursos internos serán analizados en el informe que adopte la CIDH sobre el fondo de los hechos denunciados.

b. Duplicación del proceso y cosa juzgada

44.El artículo 46(1)(c) de la Convención establece que para que una petición o comunicación sea admitida por la Comisión, la materia de la misma no debe estar pendiente de otro procedimiento internacional. Asimismo, el artículo 47(d) de la Convención establece que la Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación cuando sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional.

45.De los alegatos de las partes y de los documentos contenidos en el expediente no se demuestra que la petición esté pendiente de otro procedimiento o arreglo internacional, o que sea una reproducción de petición anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional. Por lo anterior, la Comisión considera que en el presente caso se

ha cumplido con los requisitos de admisibilidad contenidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención Americana.

c. Caracterización de los hechos alegados

46.La Comisión considera que las alegaciones relativas a la presunta violación de los derechos a las garantías judiciales, igualdad ante la ley y a la protección judicial, formuladas por las peticionarias podrían caracterizar una violación de derechos garantizados en los artículos 8, 24 y 25 en concordancia con el artículo 1 de la Convención Americana.

47.Las peticionarias han demostrado que las presuntas violaciones son imputables a un órgano o agentes del Estado, tal y como se establece en el artículo 47(b) de la Convención. En los párrafos relativos al análisis del agotamiento de los recursos internos, se señala que las presuntas violaciones serían el resultado de acciones u omisiones cometidas por agentes o funcionarios de la República de Nicaragua.

V.CONCLUSIÓN

48.La Comisión concluye, en virtud de las consideraciones antes expuestas, que la presente petición cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, la Comisión es competente para conocer del caso Nº 12.230.

49.Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que anteceden, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible el presente caso en relación con la presunta violación a los artículos 8, 24 y 25 en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2.Con respecto aquellos otros derechos invocados por las peticionarias, diferir su tratamiento al examen sobre el fondo, en caso de comprobarse los hechos.

3.Notificar esta decisión a las partes.

4.Continuar con el análisis de fondo del caso en cuestión.

5.Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C. a los 15 días del mes de octubre de 2001.(Firmado):Claudio Grossman, Presidente; Juan Méndez, Primer Vicepresidente; Marta Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta; Miembros de la Comisión: Helio Bicudo, Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 63.
[2] Junto con la decisión Nº 033-99 de la Junta Directiva de la Asamblea General, también fue transmitida una nota de fecha 3 de enero de 2000 que el Primer Secretario de la Asamblea General envió al Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. En dicha nota, el Primer Secretario señala que la Comisión Especial que estudiaría y dictaminaría sobre el desafuero del Sr. Ortega ya había sido creada, pero no se había conformado aún.
[3] Observaciones del Estado de Nicaragua del25 de abril de 2001, p. 2.
[4] Ibid., p. 3.
[5] Observaciones del Estado de Nicaragua del 25 de abril de 2001, p. 3.
[6] La Ley de Inmunidad establece:
Art. 8: Recibida en Secretaría de la Asamblea Nacional la queja enviada por el Presidente de la República o bien la queja presentada ante este Poder del Estado, informará de inmediato a la Junta Directiva y se tramitará conforme a los artículos siguientes.
Art. 9: La Junta Directiva de la Asamblea Nacional nombrará de inmediato una Comisión que estará integrada de conformidad a los criterios establecidos en el Estatuto General de la Asamblea Nacional, a fin de que se estudie y dictamine la queja presentada. El funcionario contra el que se presenta la queja, se le notificará de los términos de la denuncia dentro de las 24 horas siguientes de haberse formado la Comisión y se le dará audiencia ante ésta dentro del sexto día de notificado para que exprese lo que tenga a bien.
Art.11: La Comisión abrirá a pruebas por 20 días, contados a partir del día de la audiencia, el que podrá ser prorrogado por diez días más a solicitud de la Comisión o el interesado ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, vencido este término emitirá su dictamen dentro de los diez días siguientes. El dictamen será confirmando la procedencia de la queja o rechazándola.
Art. 13: Si la Asamblea Nacional con el 60% de los votos de sus miembros confirma la queja contra el funcionario o funcionarios, procederá a desaforarlos. (…)
[7] La CIDH no ha sido informada de que los miembros que formarían la Comisión Especial, creada mediante Resolución 033/99, del 25 de noviembre de 1999, con el propósito de decidir sobre el desafuero del diputado Daniel Ortega, hayan sido designados.

**INFORME Nº 51/02. ADMISIBILIDAD. PETICIÓN 12.404. JANET ESPINOZA FERIA Y OTRAS. PERÚ. 10 DE OCTUBRE DE 2002.**

I. RESUMEN

1.El 2 de agosto de 2001 el señor Walter Albán Peralta, en su condición de Defensor del Pueblo en funciones, y la señora Victoria Villanueva Chávez en su condición de coordinadora general del Movimiento Manuela Ramos (en adelante "los peticionarios"), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión", la "Comisión Interamericana" o "CIDH") en la cual alegan la violación a los derechos políticos (artículo 23), a la igualdad ante la ley (artículo 24) y a la no discriminación (artículo 1(1)), establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o la "Convención Americana") por parte de la República del Perú (en adelante el "Estado", el "Estado peruano", o "Perú") en perjuicio de las candidatas al Congreso de la República de los Distritos Electorales de Callao, Ica y La Libertad y los electores Katia Iliana Chumo García y otros.

2.Los peticionarios denunciaron que las autoridades electorales del Perú, representadas por el Jurado Nacional de Elecciones, en una interpretación restrictiva de la Ley Electoral 26859 que establece entre otras disposiciones las cuotas electorales, como una acción afirmativa para promover la participación y el acceso de la mujer en los procesos electorales en un mínimo de 30% de mujeres o varones, ha favorecido la discriminación de género al haber proferido la Resolución Nº 068-2001 de 22 de enero de 2001, que reglamentó las cuotas mínimas electorales en los distritos electorales de Callao, Ica y La libertad para las elecciones del Congreso llevadas a cabo en el mes de abril del año 2001.

3.Indican que tal resolución dispuso para el Distrito de Ica, con derecho a elegir cuatro (4) congresistas; un mínimo de un (1) candidato varón o mujer por cada lista; en el Distrito de La Libertad, con derecho a elegir siete (7) congresistas, reglamentó un mínimo de dos (2) candidatos varón o mujer por cada lista; y en el Distrito de Callao, con derecho a elegir cuatro (4) congresistas, reglamentó un mínimo de un (1) candidato varón o mujer por cada lista, no obstante los recursos intentados por los peticionarios y otro organismo oficial, que no fueron atendidos.

4.El Estado peruano alega por su parte que existe una falta de agotamiento de los recursos internos por cuanto los peticionarios no han acudido al procedimiento denominado "Pedido Atípico de Nulidad de Resoluciones" ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, reglado por el texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 6 de enero del 2001 para que esa autoridad revisara la mencionada Resolución, careciendo por ello de interés para obrar.

5.Que la previsión legal respecto de las cuotas mínimas cobija indistintamente a varones y mujeres para evitar el monopolio de uno u otro género, que al hacer diferencia a favor del género femenino se constituiría en una discriminación para el género masculino.

6.También alegó el Estado que existe una imposibilidad matemática para cumplir tal disposición por que los resultados representados en números fraccionarios en algunos casos llevan a la aproximación decimal hacia el número entero más cercano. Sienta finalmente que el Estado peruano no ha violado la Convención en el presente asunto.

7.Al examinar la admisibilidad de la petición, la Comisión concluyó que tiene competencia para conocer este caso y que es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, en lo que respecta a eventuales violaciones a los artículos 1(1), 23 y 24 de la Convención Americana, e iniciar el procedimiento sobre el fondo de la cuestión. La Comisión decide igualmente notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

## II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

8.El 8 de noviembre de 2001 la Comisión transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le solicitó que presentara información en un plazo de dos meses conforme al artículo 30(3) del reglamento de la Comisión. Con fecha 10 de enero de 2002, el Estado peruano remitió a la Comisión formal respuesta con sus respectivos anexos. El 15 de marzo de 2002 la Comisión transmitió a los peticionarios las partes pertinentes de la respuesta suministrada por el Estado para su conocimiento. Los peticionarios presentaron sus observaciones a las ofrecidas por el Estado mediante escrito de 3 de julio de 2002, y por nota de 5 de septiembre de 2002 ampliaron la información respecto a que tres de las víctimas por ellos citadas en la denuncia se encontraban vinculadas al Movimiento Manuel Ramos. Estas comunicaciones fueron trasladadas al Estado el 11 de septiembre para su conocimiento.

## III.POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Posición de los peticionarios

9.Los peticionarios señalaron que en el Perú el sistema de cuotas para las elecciones parlamentarias fue incorporado en el artículo 116 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, de 29 de septiembre de 1997, en donde se estableció que "Las listas de candidatos al Congreso deben incluir un número no menor del 25% de mujeres o de varones".

10.Que la inclusión de los varones en esta norma fue producto de una negociación política al interior del Congreso para salvar el habitual recelo hacia las acciones afirmativas en favor de las mujeres, no obstante que hasta las elecciones generales del año de 2001 las cuotas fueron consideradas como una acción afirmativa para las mujeres tanto por los partidos y movimientos políticos como por las autoridades electorales y en ese sentido el proyecto original lo contempló.

11.Indican que como consecuencia de ello en octubre de 1998 se llevaron a cabo las primeras elecciones municipales en que se aplicó el sistema de cuotas, obteniéndose un

notable incremento en el porcentaje de mujeres que accedió a cargos en los gobiernos locales a nivel nacional, como en el caso de las regidoras, que pasó del 7% al 25%. En esa misma línea, en las elecciones parlamentarias del 2000, la presencia de las mujeres en el Congreso aumentó de 13 a 26.

12.Señalan que por el éxito de tal medida, en diciembre del año 2000 por recomendación de la Defensoría del Pueblo, mediante la Ley 27387 se modificó el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones, elevando la cuota de mujeres no menor del 25% a no menor del 30%.

13.Los peticionarios alegaron que en el proceso electoral llevado a cabo el día 8 de abril de 2001, los órganos encargados de administrar justicia en materia electoral no respetaron la cuota electoral de 30% en los Distritos Electorales de Callao, Ica y La Libertad, incumplimiento materializado en la resolución Nº 068-2001-JNE de 22 de enero expedida por el Jurado Nacional de Elecciones, que dispuso para estos tres distritos un número inferior de candidatos varones o mujeres para cada lista electoral de los grupos en contienda de acuerdo al número de congresistas por cada Distrito Electoral.

14.Refieren que efectivamente, para el Distrito de Ica, con derecho a elegir cuatro (4) congresistas, se reglamentó un mínimo de un (1) candidato varón o mujer por cada lista. Que en el Distrito de La Libertad, con derecho a elegir siete (7) congresistas, se reglamentó un mínimo de dos (2) candidatos varón o mujer por cada lista, y en el Distrito de Callao, con derecho a elegir cuatro (4) congresistas, se reglamentó un mínimo de un (1) candidato varón o mujer por cada lista.

15.Como resultado de lo anterior, en los distritos electorales de Ica y Callao la cuota de mujeres quedó reducida a un 25% del total de candidatos de cada lista y en el distrito de La Libertad la cuota de mujeres quedó reducida al 28.5%.

16.Ante tal hecho, la Defensoría del Pueblo, mediante comunicación de 31 de enero 2001, con anterioridad a las elecciones, exhortó al Jurado Nacional de Elecciones como organismo competente para velar por el cumplimiento de las normas electorales, a modificar la resolución Nº 068-2001-JNE, en el sentido de fijar en dos (2) el mínimo de candidatas para los distritos electorales de Ica y Callao y en tres (3) para el distrito electoral de La Libertad, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones, cuando señala que "las listas de candidatos al Congreso en cada distrito electoral deben incluir un número no menor al 30% de mujeres o de varones". Que una solicitud en igual sentido fue elevada al Jurado Nacional de Elecciones por la presidenta de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Humano del Congreso de la República, así como por la organización no gubernamental Manuela Ramos.

17.La respuesta del Jurado Nacional de Elecciones fue la de no rectificar la resolución impugnada y por el contrario, por medio de la Resolución Nº 22-2001-JNE de 5 de febrero de 2001, declaró improcedente las solicitudes de rectificación formuladas, considerando entre otras, que la legislación electoral sobre reservas de cuotas para la participación

política no se refiere exclusivamente al sexo femenino, que no es discriminatoria por tratarse de una norma que busca consolidar la igualdad jurídica entre ambos géneros y que la participación electoral es un derecho de las partes cuyo requisito esencial es el del libre consentimiento.

18.Posteriormente, el Defensor del Pueblo se dirigió a los Jurados Electorales Especiales de cada uno de estos distritos electorales, como órganos temporales encargados de administrar justicia en esta materia, a fin de que garantizaran la protección de los derechos de igualdad y participación política reconocidos en la Constitución y en la Ley Electoral, a efectos de que verificaran las listas de candidatos presentadas por las agrupaciones políticas en cumplimiento de las cuotas mínimas y se subsanara el error en el plazo más leve.

19.El único Jurado Electoral Especial que dio respuesta fue el del distrito judicial de Ica, mediante Resolución de 9 de febrero de 2001, que resolvió no acoger el pedido formulado por la Defensoría del Pueblo, decisión recurrida en apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, el cual mediante Resolución Nº 295-2001-JNE de 4 de abril de 2001 declaró infundado el recurso de apelación interpuesto con los mismos argumentos que había esgrimido con ocasión de la anterior solicitud que en forma directa formulara la Defensoría del Pueblo y las otras dos entidades mencionadas.

20.Tal situación de discriminación, señalan los peticionarios, fue advertida en el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea Elecciones de 8 de abril de 2001, en el Informe Final del Instituto Nacional Demócrata/Centro Carter (Proyecto Conjunto de Observación Electoral) de 11 de Julio de 2001 y fue denunciado por el Movimiento Manuela Ramos a la Misión de Observación Electoral Elecciones Generales República del Perú año 2001 de la OEA.

21.Señalan además en su denuncia que en este caso se está ante la presencia de "intereses difusos cuando éstos pertenecen a todos y a cada uno de los miembros de un grupo, clase, comunidad, pero sin que medie la existencia de un vínculo jurídico determinado" por tratarse de necesidades comunes de una pluralidad indeterminada de personas afectadas por un mismo acto, omisión, hecho o disposición jurídica, lo que conlleva a que la legitimidad para obrar ante las instancias competentes se convierta en un actio popularis.

22.En este sentido, indican que la resolución del Jurado Nacional de Elecciones mencionada, constituye un interés difuso del universo de mujeres, quienes fueron potenciales candidatas al Congreso de la República por los distritos electorales del Callao, Ica y La Libertad, que de acuerdo a la información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE, el número de mujeres hábiles para votar y por lo tanto potenciales candidatas de los distritos electorales referidos es de 892.868.

23.Sientan los peticionarios que la Defensoría del Pueblo es el garante último o de cobertura de aquellos fenómenos jurídicamente relevantes huérfanos de justiciabilidad, específicamente los intereses difusos.

24.Los peticionarios señalaron que con tal decisión del Jurado Nacional de Elecciones las presuntas víctimas fueron afectadas en sus derechos políticos al no poder elegir un número mayor de mujeres del que hubieran deseado. En el distrito electoral de La Libertad, Luisa Cecilia Castillo Carranza, Kelly Jacqueline Baigorria Acosta, Fanny Ruíz Reyes, Marcela Rodríguez Argomedo, Mercedes Eusevio de Saavedra, Janet Espinoza Feria y Miguel Ascue Nuñez. En el distrito electoral del Callao, Katia Iliana Chumo García, Benjamín Zevallos Ortíz Drago, Fernando Alberto García Huby, Gloria Boulangger de Castillo, Sandra Escobar de Barayvar, Ruth Vásquez López, Gissela Bouangger Falla, Silvia Rosa Moreno Bocanegra y Juana Zerpa de Velarde. En el distrito electoral de Ica,Patricia Rita Zanabria Castillo, Aleida Fidelina Chacaltana, Celso Artemio Cupe, Lastenia Ismelda Aparcana Díaz y Lidia Esperanza Díaz Villacrisis.

25.En escrito allegado a la actuación el 3 de julio del año que avanza por los peticionarios, y en respuesta a lo observado por el Estado peruano, enfatizan el agotamiento de los recursos internos con la actuación surtida ante el Jurado Nacional de Elecciones, señalando que la alternativa de dirigirse a esa autoridad mediante el Pedido Atípico de Nulidad de Resoluciones no es medio eficaz, pues en el caso de los ciudadanos Edwin Laguerre Gallardo y Ricardo Bissete Pinedo en un asunto diferente, solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo, al haber acudido ante esa instancia por intermedio de ese excepcional recurso, obteniendo como respuesta que ese órgano declaró improcedentes los recursos interpuestos con el argumento que sus resoluciones no son revisables.

26.También refieren los peticionarios que la verdad histórica de lo acontecido en ese país es que las listas al Congreso siempre han estado conformadas exclusiva o mayoritariamente por varones, por lo que se trata entonces de una acción afirmativa la previsión legal de la cuotas y que el argumento de la imposibilidad matemática del cumplimiento de los porcentajes de las cuotas para mujeres o varones cuando da por resultado número decimal, éste debe redondearse al entero superior.

27.Mediante comunicación de septiembre 5 de 2002, la Coordinadora General del Movimiento Manuela Ramos informa que "En la relación de víctimas mencionadas en la petición, figuran tres personas que eran miembros del Movimiento Manuela Ramos en la fecha en que ocurrió la violación de la Ley Electoral en la parte referida a la aplicación del mecanismo de cuotas de representación política en las listas de candidatos a congresistas y en que se presentaron los recursos hasta agotar la jurisdicción interna. Ellas son: Janet Espinoza Feria, actual Coordinadora de la Oficina Regional de Manuela Ramos con sede en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad. Ingresó en el año de 1998. Patricia Rita Zanabria, abogada del Programa Derechos Sociales de Manuela Ramos. Ingresó el año de 1997. Votante del distrito electoral de Ica y Katia Iliana Chumo García, actual regidora de la Municipalidad de la Provincia Constitucional del Callao, integrante de la red de ex alumnas del Curso Internacional de Derechos Humanos desarrollado anualmente por Manuela Ramos".

B. Posición del Estado

28.El Estado ha manifestado que las presuntas víctimas o potenciales candidatas tenían la posibilidad de interponer un "Pedido Atípico de Nulidad de Resoluciones" ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones para que esa entidad revisara su propia resolución, independientemente de las peticiones y recursos interpuestos "por las instituciones patrocinantes de las candidatas presuntamente afectadas", trámite reglado en el ítem Nº 40 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual no habrían agotado los procedimientos previos, existiendo "falta de interés para obrar, pues ellas no han agotado los recursos que la ley interna les ofrece antes de recurrir a instancias supranacionales".

29.Sostiene igualmente el Estado, que en el artículo 116 de la Ley Electoral que consagró las cuotas mínimas de varones o mujeres para las listas electorales de candidatos al Congreso no estableció una acción afirmativa a favor de las mujeres, sino que legisló en contra del predominio exclusivo de uno u otro sexo en las listas parlamentarias, pues de lo contrario se terminaría discriminando a los hombres en caso que todas las candidatas fueran mujeres.

30.Señala finalmente, que para el Jurado Nacional de Elecciones, existe dificultad en cumplir matemáticamente con el porcentaje del 30% establecido legalmente en el artículo 116 de la Ley 27859, pues de acuerdo a las distribución de candidatos para cada distrito electoral que señala la Resolución de 22 de enero de 2001 Nº 069-2001-JNE, y al padrón electoral, no se permitiría determinar con exactitud el número de escaños a otorgar de las cuotas mínimas para cada circunscripción electoral, procediéndose entonces como solución a redondear al número más cercano, tal como lo prevé el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones.

IV.ANÁLISIS SOBRE ADMISIBILIDAD

A. Competencia ratione temporis, ratione loci, ratione materiae, ratione personae de la Comisión

31.La Comisión tiene competencia ratione temporis [en razón del tiempo] para conocer el presente caso, por cuanto, en primer lugar, los peticionarios sostienen que el Estado peruano es responsable internacionalmente con motivo de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de 22 de enero de 2001, la cual tuvo lugar una vez que el Estado había consignado el instrumento de ratificación de la Convención Americana el 28 de julio de 1978 ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.

32.En segundo lugar, con relación a la competencia ratione materiae [en razón de la materia] la petición inicial denuncia presuntas violaciones de los derechos consagrados en los artículos 1(1), 23 y 24 de la Convención Americana.

33.La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer esta petición por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar en el territorio del Estado de Perú.

34.En cuanto a la competencia pasiva ratione personae [en razón de la persona], los peticionarios atribuyen violaciones a un Estado parte, en este caso Perú. Con relación a la competencia activa ratione personae [en razón de la persona], los peticionarios alegan que dichas violaciones se cometieron en perjuicio de Luisa Cecilia Castillo Carranza, Kelly Jacqueline Baigorria Acosta, Fanny Ruíz Reyes, Marcela Rodríguez Argomedo, Mercedes Eusevio de Saavedra, Janet Espinoza Feria, Miguel Ascue Nuñez, Katia Iliana Chumo García, Benjamín Zevallos Ortíz Drago, Fernando Alberto García Huby, Gloria Boulangger de Castillo, Sandra Escobar de Barayvar, Ruth Vásquez López, Gissela Bouangger Falla, Silvia Rosa Moreno Bocanegra y Juana Zerpa de Velarde, Patricia Rita Zanabria Castillo, Aleida Fidelina Chacaltana, Celso Artemio Cupe, Lastenia Ismelda Aparcana Díaz, Lidia Esperanza Díaz Villacrisis, víctimas directas, que aspiraban en cada uno de sus distritos electorales a elegir a otras candidatas que no pudieron participar en la contienda electoral por ser restrictiva tal cuota y además, de 892.868 mujeres potenciales candidatas y electoras de los distritos electorales de La Libertad, el Callao e Ica.

35.La Comisión observa que uno de los copeticionarios, la Defensoría del Pueblo, aduce obrar en representación en abstracto de, entre otras, a nombre del colectivo de mujeres, votantes potenciales de los distritos electorales de La Libertad, el Callao e Ica, cuantificadas en 892.868, en forma de un actio popularis. Sin embargo, la CIDH considera que a la luz de los artículos 44 y concordantes de la Convención y de la jurisprudencia del sistema interamericano, corresponde declarar la admisibilidad de la petición con respecto a aquellas víctimas debidamente individualizadas, identificadas y determinadas, a efectos de iniciar los trámites tal como prevén los artículos 46 y siguientes de la Convención en concordancia con los artículos 26 y siguientes del Reglamento de la Comisión.[2]

36.A los fines de la admisibilidad, la CIDH considera que las personas identificadas como víctimas e individualizadas son asimismo representativas del grupo innominado que la Defensoría señala como potenciales víctimas.

B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

a. Agotamiento de los recursos internos

37.La regla de la previa interposición y agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna establecida en el artículo 46(1)(a) de la Convención, dispone que toda petición formulada ante la Comisión debe haber sido conocida previamente, en sustancia, ante las instancias internas. Esta regla permite a los Estados solucionar previamente las cuestiones planteadas dentro de su propio marco jurídico antes de verse enfrentado a un proceso internacional. Es la disposición constitucional o legal que tiene el Estado para proveer de un recurso accesible, efectivo y posible a través del cual puedan demandarlas presuntas víctimas, el reconocimiento y el restablecimiento de sus derechos, antes de acudir ante el

sistema interamericano de protección a los derechos humanos, sin que tales procedimientos se conviertan en meras formalidades que al contrario de lograr la realización de éstos, diluyan en el tiempo toda posibilidad de su reclamo, reconocimiento y ejercicio.

38.En el presente caso, la Comisión nota que los peticionarios interpusieron los recursos internos disponibles contra la resolución Nº 068-2001-JNE de 22 de enero de 2001, mediante solicitudes ante el Jurado Nacional de Elecciones el 31 de enero de 2001 presentado por la Defensoría del Pueblo, en igual forma la presentada por el Movimiento Manuela Ramos el 1º de febrero de 2001, a la par con otra petición de la Presidenta de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Humano del Congreso de la República, peticiones que fueron resueltas por la Resolución Nº 122-2001-JNE de 5 de febrero de 2001 como máxima autoridad competente en esta materia, declarando improcedentes tales solicitudes.

39.Por su parte, el Estado ha alegado a su favor, que no se han agotado los recursos internos que dispone la ley electoral de ese país, para que se hubiera revisado por el Jurado Nacional de Elecciones su propia Resolución Nº 068-2001-JNE de 4 de enero de 2001, materia de la violación impugnada.

40.Un primer punto de tal argumento, reposa en que mediante Resolución 011-2001-JNE de fecha 4 de enero de 2001, se aprobó el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Jurado Nacional de Elecciones, el cual en su ítem Nº 40 establece un procedimiento denominado "Pedido Atípico de Nulidad de Elecciones", que en concepto del Estado, sería aplicable al no existir un mecanismo preestablecido para impugnar la decisión adoptada por esa suprema autoridad en lo electoral.[3]

41.Otro aspecto de la inconformidad del Estado y unido al anterior, es que independientemente de las solicitudes elevadas ante el Jurado Nacional de Elecciones en su momento por parte de los aquí peticionarios, las potenciales candidatas presuntamente afectadas tenían la posibilidad de interponer un "Pedido Atípico de Nulidad de Resoluciones", a fin de lograr la revisión de la decisión adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones.

42.Ha establecido la jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana, que cuando un peticionario sostiene que ha agotado los recursos aplicables o que se aplica una excepción propuesta por el artículo 46 de la Convención, "el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad."[4]

43.En el presente caso el Estado ha señalado el no agotamiento de tales recursos, indicando que el mecanismo pertinente para haber cuestionado internamente el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, se trataba del "Pedido Atípico de Nulidad de Resoluciones," pues a su entender no existía otro mecanismo establecido para haber impugnado la resolución 068-2001-JNE.

44.Tal como han señalado los denunciantes y se evidencia de los anexos allegados, supra 14, los peticionarios, mediante sendas comunicaciones de 31 de enero y 1º de febrero de 2001, manifestaron directamente ante el Jurando Nacional de Elecciones su inconformidad con el contenido de la Resolución 068-2001-JNE de esa misma autoridad, al considerar que al fijar una cuota inferior al 30% en las listas de los candidatos al Congreso de la República en los distritos electorales de La Libertad, el Callao e Ica se vulneró el artículo 116 de la Ley Electoral 27387.

45.Este máximo organismo dio respuesta a dichas solicitudes por medio de la Resolución Nº 22-2001-JNE de 5 de febrero de 2001, declarando "improcedentes las solicitudes de rectificación de la Resolución Nº 068-2001-JNE," no porque estas entidades carecieran de interés jurídico para actuar o porque se interpusieran por fuera de término, sino porque a su entender no se habría producido la vulneración alegada, es decir, resolvió de fondo sobre tales peticiones.[5]

46.Pero es más, la Defensoría del Pueblo se dirigió a los Jurados Electorales Especiales de cada uno de los distritos electorales de La Libertad, el Callao e Ica , como órganos temporales encargados de administrar justicia en esta materia,[6] solicitándoles que garantizaran los derechos de igualdad y participación política reconocidos en la Constitución y en la Ley Electoral, verificando las listas de candidatos presentadas por las agrupaciones políticas en cumplimiento de las cuotas mínimas y se subsanara tal error, supra 16 y 17.

47.El único Jurado Electoral Especial que dio respuesta a las solicitudes fue el del distrito electoral de Ica, que declaró extemporánea la petición por haberse ceñido su resolución, en su concepto, a lo dispuesto por la ley electoral y alegando estar publicadas las respectivas listas en los diarios de la localidad.[7]Ante tal decisión, la Defensoría del Pueblo acudió en apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones quien al pronunciarse nuevamente sobre la materia, en Resolución Nº 295-2001-JNE de 3 de abril de 2001, declaró infundada la apelación interpuesta por la Defensoría del Pueblo no sólo reiterando los argumentos antes expuestos, supra 14 y 16, sino refiriéndose a su anterior Resolución Nº 122-2001-JNE de 5 de febrero de 2001 como antecedente, la misma que había resuelto las peticiones de la Defensoría del Pueblo, el Movimiento Manuela Ramos y otra de la Presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso. Esta misma autoridad, además, determinó que en desarrollo del artículo 181 de la Constitución Política y del artículo 36 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional, tal decisión era adoptada en instancia final y definitiva, no procediendo contra ella recurso alguno.[8]

48.Tal como ha quedado demostrado, los peticionarios acudieron ante la autoridad competente, el Jurado Nacional de Elecciones, por el procedimiento consagrado en la misma Ley Electoral y recibieron respuesta en dos ocasiones, bajo el mismo supuesto de hecho y en el mismo sentido, sin que haya lugar a dudas a que hubo equívoco en las peticiones o en el procedimiento intentado. La respuesta del Estado para que se acudiera por la vía de un "Procedimiento Atípico de Nulidad de las Resoluciones" ante el mismo Jurado Nacional de Elecciones, es el ejercicio de un mecanismo o recurso extraordinario

que sería aceptable si no existiera otro a través del cual esa autoridad hubiese tenido la oportunidad de pronunciarse, como efectivamente lo hizo y en dos ocasiones.

49.También observa la Comisión que de acuerdo a disposición constitucional, artículo 181, las resoluciones que emita el Jurado Nacional de Elecciones en esta materia son dictadas en instancia final, definitiva e irreversible, lo que significa que no tiene la posibilidad de ser conocidas y controladas en aspectos formales o de fondo por vía jurisdiccional en procesos ordinario, verbi gratia ante el contenciosos administrativo o por vía de amparo, tratándose esta última de una acción extraordinaria, con lo cual los peticionarios no tendrían otra oportunidad ante los órganos regulares del Estado para demandar la protección a estos derechos que alegan como violados.

50.En el otro aspecto referido a la carencia de interés para obrar que ha alegado el Estado, al no haber interpuesto las víctimas en forma directa el recurso interno (Pedido Atípico de Nulidad de Elecciones), observa la Comisión que tres de las presuntas víctimas señaladas en la denuncia, Janet Espinoza Feria, Patricia Rita Zanabria y Katia Iliana Chumo García, para la época de su presentación, estaban vinculadas al Movimiento Manuela Ramos en diferentes actividades en los distritos electorales referidos.

51.Entiende la Comisión que cuando el Movimiento Manuela Ramos acude ante el Jurado Nacional de Elecciones para solicitar la revisión de la resolución ya mencionada, acciona a nombre del colectivo de mujeres que dice representar, pero también a nombre de Janet Espinoza Feria, Patricia Rita Zanabria y Katia Iliana Chumo García, que hacen parte de su movimiento, con lo que se evidencia que se agotó el recurso interno[9] y si bien es cierto que las otras presuntas víctimas no acudieron directamente a esa instancia a reclamar para sí tal derecho, el Estado no ha aportado ningún argumento, razón valedera o prueba tendiente a demostrar que la decisión a la que hubiera arribado el Jurado Nacional de Elecciones, no hubiese sido diferente a lo resuelto por el mismo en las resoluciones del 5 de febrero y 3 de abril de 2001, cuando declaró improcedente e infundada las solicitudes de revisión de la Resolución 068-2001-JNE de 22 de enero de 2001 o hubiesen obtenido como respuesta que la improcedencia se originaba bajo el argumento que tales decisiones no son susceptibles de revisión, como señalan los peticionarios ocurrió con los señores Edwin Laguerre Gallardo y Ricardo Bissete Pinedo, en un asunto diferente al aquí expuesto. Existiendo dos resoluciones sobre los mismos hechos aquí reclamados, el Estado está bajo la obligación procesal de demostrar la posibilidad cierta de que un nuevo recurso ante la misma autoridad tendría al menos cierta perspectiva de éxito.[10]

52.Por lo anterior, la Comisión reitera que los recursos ofrecidos por la legislación interna en el área electoral para que las peticionarios y las presuntas víctimas hubieran acudido en solicitud de reposición de sus derechos fueron agotados por ellos a satisfacción y que por tratarse además de un procedimiento restrictivo, sin ninguna posibilidad de control judicial o constitucional, están agotadas la posibilidades para que el Estado peruano a través de su jurisdicción logre la realización de los presuntos derechos que se discuten como violados por sus agentes.

b. Plazo para presentar una petición ante la Comisión

53.El artículo 46(1)(b) de la Convención establece como requisito para la admisibilidad de una petición que haya sido presentada dentro del plazo de los seis meses a partir del momento en que el peticionario haya sido notificado de la decisión definitiva. La Comisión observa que el último pronunciamiento definitivo del Jurado Nacional de Elecciones fue dictado el 3 de abril de 2001. La petición fue presentada ante la Comisión el 2 de agosto de 2201, dentro del plazo de los seis meses. La Comisión concluye que se ha cumplido con este requisito.

c. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada

54.Con relación al requisito de que la petición no se halle pendiente de decisión por otro organismo internacional establecido en el artículo 46(1)(c) de la Convención, la Comisión no ha recibido información que indique que esta circunstancia esté presente. Por lo tanto, la Comisión considera que se ha cumplido con él. Por otra parte, la Comisión también concluyó que se ha cumplido con el requisito establecido en el artículo 47(d), por cuanto esta petición no es la reproducción de una petición ya examinada por la Comisión ni ha sido decidida por otro organismo internacional.

d. Caracterización de violaciones

55.El artículo 47(b) de la Convención establece que la Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación cuando "no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención". Los peticionarios han alegado que con motivo de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, el Estado ha violado el derecho a la no discriminación (artículo 1(1), a los derechos políticos (artículo 23) y el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24) de la Convención. La Comisión considera que los hechos expuestos por los peticionarios, de ser ciertos, podrían configurar violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión concluye que se ha cumplido con este requisito.

V.CONCLUSIONES

56.La Comisión concluye que tiene competencia para conocer de este caso y que la petición es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

57.Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible la petición en lo que respecta a eventuales violaciones a los artículos 1(1), 23 y 24 de la Convención Americana.

2.Notificar esta decisión a los peticionarios y al Estado.

3.Continuar con el análisis del fondo de la cuestión.

4.Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los diez días del mes de octubre de 2002.Firmado: Juan Méndez, Presidente; Marta Altolaguirre, Primera Vicepresidenta; José Zalaquett, Segundo Vicepresidente; Comisionados Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo y Clare K. Roberts.

[1] Conforme a lo dispuesto por el artículo 17(2) del Reglamento de la Comisión, la Comisionada Susana Villarán, de nacionalidad peruana, no participó en el debate ni en la decisión del presente asunto.
[2] La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-14/94, párrafos 45 a 47 recalcó tal exigencia y la CIDH, en un asunto similar, Caso María Eugenia Morales Sierra, Informe de Admisibilidad Caso 11.625 de 6 de marzo de 1998, así lo resolvió.
[3] Al verificar el Item 40 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado mediante resolución Nº 001-2001-JNE, Pedido Atípico de Nulidad de Resoluciones expedidas por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Requisitos. Pedido dirigido al Presidente del JNE y firmado por el peticionante. Adjuntar comprobante de pago del Banco de la Nación a la orden del jne. 10% UIT S/ 300.00. Calificación No regular. Dependencia donde se inicia el trámite: Oficina de Trámite Documentario del JNE. Resolución del Pleno del JNE. Autoridad que resuelve la impugnación.
[4] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de excepciones preliminares de 26 de junio 1987, párr.88.
[5] Véase anexo 8 de la denuncia, publicación diario El Peruano página 198287 de miércoles 7 de febrero de 2001. "Declaran improcedentes solicitudes de rectificación de la Res. No. 068-2001.JNE, que estableció número mínimo de mujeres y varones que deben integrar listas de candidatos al Congreso de la República."
[6] Artículo 34 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones
[7] Véase anexo 10 de la denuncia.
[8] Véase anexo 15 de la denuncia, publicación diario El Peruano, página 200870 de miércoles 4 de abril de 2001. "Declaran infundada apelación interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Ica".
[9] Ib. Caso María Eugenia Morales Sierra, Informe de Admisibilidad Caso 11.625, de 6 de marzo de 1998.
[10] Véase en el mismo sentido Comisión Europea de Derechos Humanos, Appl. 27/55 X vs Federal Republic of Germany 1978

**INFORME Nº 59/03. PETICIÓN 71/01. ADMISIBILIDAD. SONIA ARCE ESPARZA. CHILE. 10 DE OCTUBRE DE 2003**

I.RESUMEN

1.En el presente informe se aborda la admisibilidad de la petición P071/01.Su trámite fue iniciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Comisión" o "la CIDH") tras haber recibido una petición el 30 de enero de 2001 y la documentación que la fundamenta, el 27 de agosto de 2001.La petición fue interpuesta por Sonia del Carmen Arce Esparza, la presunta víctima, y la Corporación de la Morada (en adelante, "los peticionarios") contra la República de Chile (en adelante, "el Estado").Conforme a un pedido de los peticionarios, se agregó como copeticionario, en octubre de 2001, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL).

2.Los peticionarios alegan que ciertos artículos del Código Civil chileno violan los derechos de la Sra. Arce Esparza consagrados en los artículos 1, 2, 17, 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "la Convención Americana") y los artículos 1, 2, 5(a), 15(1), 15(2) y 16(1) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En particular, los peticionarios argumentan que el artículo 1749 del Código Civil chileno, que autoriza al cónyuge varón a actuar como único administrador de los bienes de la cónyuge, viola los derechos de la presunta víctima. Los peticionarios sostienen que otros artículos del Código Civil chileno relacionados con la administración de bienes entre cónyuges también violan los derechos de la presunta víctima, a saber, los artículos 1750, 1752 y 1754 de dicho Código. Los peticionarios afirman que satisfacen los requisitos de admisibilidad de la Comisión y que están exceptuados de agotar los recursos internos o que, en su defecto, los han agotado todos.

3.El Estado sostiene, por su parte, que la declaración debe ser declarada inadmisible por no haber agotado los recursos internos. Afirma que la Sra. Arce Esparza no ha invocado total o debidamente dos recursos pertinentes: (1) el recurso de protección, y (2) el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (en adelante, el "recurso de inaplicabilidad").

4.Como se indica más adelante, de acuerdo con su examen, la Comisión concluye que es competente para dar vista a las denuncias de los peticionarios en relación con la violación de los artículos 1, 2, 17, 21, 24 y 25 de la Convención Americana.

II.TRAMITE ANTE LA COMISIÓN

5.El 30 de enero de 2001, la Comisión recibió una petición interpuesta por los peticionarios Sonia del Carmen Arce Esparza y la Corporación de la Morada. Por nota del 21 de marzo de 2001, la Comisión informó a los peticionarios que no se podía iniciar el trámite correspondiente a esa altura porque la información presentada no indicaba que se hubieran agotado los recursos internos.

6.El 25 de abril de 2001, los peticionarios enviaron a la Comisión una respuesta de cuatro páginas en que sostenían que estaban exceptuados de agotar la vía interna por inexistencia de recursos efectivos. El 9 de mayo de 2001, la Comisión envió una nota a los peticionarios informándoles que seguía siendo insuficiente la información sobre el agotamiento de los recursos internos para empezar el trámite.

7.El 27 de agosto de 2001, los peticionarios enviaron a la Comisión información adicional sobre el agotamiento de los recursos internos. Por nota del 25 de septiembre de 2001, la Comisión informó a los peticionarios que había iniciado el trámite de la petición. Por nota de la misma fecha, la Comisión envió al Estado las partes pertinentes de la petición, solicitándole una respuesta dentro de los 90 días, de acuerdo con el artículo 30(3) del Reglamento.

8.El 17 de octubre de 2001, el peticionario, Corporación de La Morada, envió una carta a la Comisión solicitando que el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fuera también incorporado como copeticionario. Por nota del 1 de noviembre de 2001, la peticionaria Sonia Arce Esparza solicitó análogamente que CEJIL fuera incorporado como copeticionario.

9.El 28 de noviembre de 2001, el Estado se dirigió por escrito a la Comisión solicitando una prórroga para presentar su respuesta. Por nota del 7 de enero de 2002, la Comisión accedió a lo solicitado, de conformidad con el artículo 30(3) de su Reglamento.

10.El 22 de enero de 2002, la Comisión recibió una carta de los peticionarios en la que solicitaban una audiencia ante la Comisión y el Estado. La Comisión accedió a lo solicitado en nota del 6 de febrero de 2002. La audiencia fue celebrada el 6 de marzo, en el curso del 114º período ordinario de sesiones, para escuchar las posiciones de las partes en cuanto a la admisibilidad del caso. Ambas partes estuvieron representadas y participaron debidamente.

11.El Estado presentó su respuesta a la Comisión el 7 de marzo de 2002. La Comisión remitió a los peticionarios la respuesta del Estado el 19 de marzo de 2002, solicitándoles las observaciones dentro del plazo de un mes. Hasta la fecha, los peticionarios no han respondido.

## III.POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Los peticionarios

12.Los peticionarios argumentan que ciertos artículos del Código Civil chileno violan los derechos de la Sra. Arce Esparza protegidos por la Convención Americana y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En particular, los peticionarios afirman que los artículos del Código Civil relacionados con los derechos y obligaciones de los cónyuges en la administración de sus bienes violan los artículos 1, 2, 17, 21, 24 y 25 de la Convención Americana y los artículos 1, 2, 5(a), 15(1),

15(2) y 16(1) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

13.El 28 de febrero de 1976, la Sra. Arce Esparza contrajo matrimonio con Patricio Salinas Arce, con lo cual se sometió a las disposiciones del Código Civil sobre la administración de los bienes entre cónyuges. En 1994, tras el fallecimiento de sus padres, la Sra. Arce Esparza heredó algunos inmuebles. Cuando trató de venderlos, el agente inmobiliario encargado de la venta se negó a concluir la transacción sin el consentimiento del esposo de la Sra. Arce Esparza, como lo exige el artículo 1749 del Código Civil chileno.

14.Los peticionarios argumentan que el artículo 1749 en particular, así como los demás artículos relacionados con la administración de bienes entre cónyuges, violan derechos protegidos de la Sra. Arce Esparza. El artículo 1749 del Código Civil considera al marido jefe de la unión marital y, como tal, el único administrador de los bienes de la pareja y de la esposa. "El marido es jefe de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer…".[2]Esta ley exige el consentimiento del esposo para toda decisión que afecte los bienes de su cónyuge, lo que significa que la Sra. Arce Esparza no puede vender sus bienes sin el consentimiento del esposo.

15.El artículo 1754 establece que la esposa no puede administrar sus propios bienes, excepto en circunstancias extraordinarias. "[L]a mujer no podrá enajenar o gravar ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido, sino en los casos del artículo 138".[3]El artículo 1752 dispone expresamente que la esposa no tiene derechos sobre los bienes de la pareja durante el matrimonio."[L]a mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad".[4]Además, el artículo 1750 del Código Civil dispone que los bienes del esposo y los bienes maritales deben ser considerados uno a los efectos de terceros tales como los acreedores."El marido es, respecto de terceros dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio, de manera que durante la sociedad los acreedores del marido podrán perseguir tanto los bienes de éste como los bienes sociales; sin perjuicio de los abonos o compensaciones que a consecuencia de ello deba el marido a la sociedad o la sociedad al marido".[5]Los peticionarios consideran que los artículos impugnados violan directamente los derechos de la Sra. Arce Esparza protegidos por la Convención Americana. En particular, que violan sus derechos a la igual protección y al pleno goce de su derecho a la propiedad, como lo es la capacidad de comprar y vender tierras libremente.

16.Los peticionarios sostienen que la ley no ofrece alternativa real alguna a la Sra. Arce Esparza para administrar sus propios bienes. Una alternativa sería que la Sra. Arce Esparza pidiera a su esposo el consentimiento para administrar sus propios bienes. Los peticionarios argumentan que ello es imposible (puesto que el esposo de la Sra. Arce Esparza no puede ser localizado) y discriminatorio, puesto que estaría obligada a depender del consentimiento de su cónyuge. Otra alternativa sería que la Sra. Arce Esparza solicitara autorización al juez para administrar sus propios bienes, lo cual exigiría demostrar una causa especial (por ejemplo, que su esposo niega el consentimiento sin justificación).Los peticionarios

consideran que tener que demostrar una causa especial limita injustificablemente el derecho de la Sra. Arce Esparza a administrar sus bienes.

17.Los peticionarios argumentan que han satisfecho los requisitos de admisibilidad de la Comisión. Específicamente, en cuanto al requisito del agotamiento de los recursos internos, los peticionarios sostienen que están exceptuados de cumplir ese extremo en virtud del artículo 46(2)(a) o, en su defecto, que han agotado los recursos internos.

18.Los peticionarios afirman que están exceptuados de agotar la vía interna porque los dos recursos disponibles, el recurso de protección y el recurso de inaplicabilidad, son inadecuados. Ambos plantean como requisito previo para acceder al recurso que exista un proceso penal en curso en un tribunal inferior en que se esté aplicando la presunta ley inconstitucional contra la Sra. Arce Esparza. Ello significa que, para tener acceso al recurso, la Sra. Arce Esparza, primero, tendría que presentarse ante un juez y solicitar permiso para administrar sus propios bienes y ese permiso tendría que serle negado. Los peticionarios argumentan que esos recursos son inadecuados, por dos razones: primero, porque, al tener que pedir permiso al juez para administrar sus propios bienes, la Sra. Arce Esparza tendría que someterse precisamente a la discriminación que está impugnando. Segundo, porque estos recursos no atienden a la alegación de la Sra. Arce Esparza de que los artículos impugnados, aún en ausencia de aplicación directa por un juez para impedirle vender sus bienes, son violatorios de sus derechos.

19.Como alternativa, los peticionarios argumentan que la Sra. Arce Esparza ha agotado los recursos internos. El 2 de agosto de 2001, la Sra. Arce Esparza interpuso un recurso de protección ante la Alta Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue desestimado el 6 de agosto de 2001.La Corte declaró que no hacía lugar a la apelación porque los hechos alegados estaban fuera del ámbito de ese recurso.[6]Los peticionarios sostienen que esta negativa a su apelación prueba el agotamiento de los recursos internos.

B. El Estado

20.El Estado no ha controvertido la sustancia de las denuncias de los peticionarios. Por el contrario, argumenta que, primero, la legislación chilena protege los derechos de la Sra. Arce Esparza y, segundo, que la petición debe ser desestimada por no haber agotado los recursos internos.

21.El Estado chileno sostiene que la legislación chilena protege los derechos de la Sra. Arce Esparza. La Constitución de Chile protege el derecho a la igualdad ante la ley.[7] Además, la legislación chilena garantiza expresamente el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer. "[H]hombres y mujeres son iguales ante la ley.".[8]Otra ley chilena garantiza expresamente el derecho de todos al pleno goce de sus derechos a la propiedad."[Todos tienen] derecho de propiedad en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes [de tal manera que] nadie puede ser privado de este derecho…".[9]Existe también una doctrina chilena según la cual toda ley anterior a la Constitución se considera tácitamente derogada cuando está en conflicto con las garantías constitucionales. En este caso –dice el Estado- el

artículo 1749 es anterior a la Constitución, por lo cual, no debe aplicarse. Además, el Estado sostiene que quien quiera que trate de hacer cumplir esta ley contra una persona estará violando ese derecho individual y, cuando se viola un derecho individual, la persona perjudicada tiene acceso a recursos internos efectivos.

22.En este caso, el Estado afirma que la Sra. Arce Esparza tiene acceso a dos recursos efectivos: (1) el recurso de protección, y (2) el recurso de inaplicabilidad. En tanto los peticionarios caracterizan los recursos como ineficaces, el Estado considera que la Sra. Arce Esparza no los invocó debidamente. En el caso del recurso de protección, la razón de la denegación de la apelación fue que la víctima no impugnó una aplicación ilegal de la ley, como lo exige el recurso. En realidad, argumentó que la propias leyes violaban sus derechos. En el caso del recurso de inaplicabilidad, la presunta víctima aún no ha tratado de invocar este recurso o de satisfacer su requisito previo de que exista un proceso legal en un tribunal inferior en que la ley alegadamente inconstitucional se está aplicando contra ella. Por tanto, el Estado entiende que los peticionarios no pueden argumentar que los recursos sean inadecuados hasta no haberlos invocado debidamente. El Estado alega también que el requisito del agotamiento no ha sido satisfecho porque los peticionarios, por su propia admisión, nunca invocaron el recurso de inaplicabilidad. El Estado sostiene que, por todas estas razones, no debe aceptarse la petición por no haberse agotado los recursos de la vía interna.

## IV.ANÁLISIS DE LA ADMISIBILIDAD

### A. Competencia de la Comisión ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci

23.De acuerdo con el artículo 44 de la Convención Americana, los peticionarios están autorizados a presentar denuncias ante la CIDH. En el caso presente, la presunta víctima nombrada en la petición es una persona cuyos derechos protegidos por la Convención el Estado se comprometió a respetar y garantizar. Con respecto al Estado, la Comisión observa que Chile es parte de la Convención Americana desde el 21 de agosto de 1990, fecha en que depositó el correspondiente instrumento de ratificación. Por tanto, la Comisión es competente ratione personae para examinar la petición.

24.La Comisión también es competente ratione loci para examinar la petición por cuanto en la misma se alega la violación de derechos protegidos por la Convención Americana, que habría ocurrido dentro del territorio de un Estado parte de ese instrumento internacional. La CIDH también tiene competencia ratione temporis puesto que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos por la Convención Americana ya regía para el Estado cuando habrían ocurrido los hechos alegados. Por último, la Comisión tiene competencia ratione materiae por cuanto en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.

### B. Otros requisitos de la admisibilidad de la petición

a. Agotamiento de los recursos internos

25.El artículo 46 de la Convención Americana especifica que, para que un caso sea admitido, se requerirá "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Este requisito existe para garantizar al Estado afectado la oportunidad de resolver las disputas dentro de su propio contexto legal. Pero, cuando, como cuestión de hecho o de derecho, no existen recursos internos efectivos, se exceptúa el requisito de agotarlos. El artículo 46(2) de la Convención especifica que esta excepción rige: si la legislación del Estado afectado no ofrece el debido proceso para la protección del derecho presuntamente violado; si la parte que alega la violación se vio obstaculizada en su acceso a los recursos internos, o si existió demora indebida en el pronunciamiento de la sentencia definitiva. En consecuencia, cuando el peticionario alega incapacidad para probar el agotamiento, el artículo31 del Reglamento de la Comisión establece que se traslada al Estado la carga de probar qué recursos específicos quedan por ser agotados y de ofrecer una reparación del perjuicio alegado.

26.Los escritos de ambas partes coinciden en indicar dos recursos que se aplicarían a la situación denunciada, a saber el recurso de protección y el recurso de inaplicabilidad. Los peticionarios sostienen que ambos recursos son ineficaces, pues su invocación y agotamiento exigirían que las normas impugnadas primero fueran aplicada a través de una decisión judicial o proceso específicos en relación con la administración de los bienes de la Sra. Arce Esparza. Los peticionarios argumentan que la presunta víctima debe estar en condiciones de impugnar la constitucionalidad de las normas en cuestión, pues actualmente la afectan en términos de su carácter discriminatorio, sin tener que satisfacer ninguna otra condición. Agregan que, en su defecto, la interposición por la presunta víctima de un recurso de protección satisface plenamente el requisito del artículo46 del agotamiento de la vía interna. El Estado, en suma, afirma que la aplicación de las normas en una situación concreta es un requisito procesal y que, una vez satisfecho, ambos recursos ofrecen todas las posibilidades de una reparación efectiva. En consecuencia, sostiene que la presunta víctima no invocó debidamente el recurso de protección según los requisitos aplicables, y no invocó absolutamente el recurso de inaplicabilidad, por lo cual no ha satisfecho los requisitos del artículo 46.

27.Al analizar el requisito del agotamiento de los recursos internos, la Comisión observa primero que la situación denunciada refiere al efecto de las normas impugnadas en los derechos de la presunta víctima. La afirmación básica es que las normas violan los derechos de la Sra. Arce Esparza a no sufrir discriminación y a la igual protección de la ley simplemente por estar vigentes. La Comisión observa que la jurisprudencia del sistema confirma que las distinciones de la ley basadas en una condición personal pueden de por sí, sin que medie acción alguna de aplicación, dar lugar a responsabilidad de parte del Estado por no observar las obligaciones respecto de la igualdad y la no discriminación.[10]En el caso presente, ninguno de los recursos disponibles permite a la Sra. Arce Esparza impugnar directamente las normas contestadas en tanto afectan sus derechos por su simple vigencia. Ambos recursos exigen que la presunta víctima se someta a ulteriores aplicaciones de las

normas para poder impugnarlas. Por tanto, la Comisión concluye que los recursos internos disponibles son inadecuados y que, en consecuencia, los peticionarios quedan exceptuados de agotar los recursos internos, según el artículo 46 de la Convención Americana.

28.Además, las disposiciones del artículo46 requieren que la sustancia de la situación denunciada ante la Comisión haya sido planteada ante la justicia interna. Como lo reitera la jurisprudencia del sistema, no es necesario agotar todos los recursos teórica o formalmente disponibles, sino aquellos adecuados y efectivos para reparar la situación denunciada. Como se indicó, las partes concurren en que existen dos posibles recursos aplicables. Aunque los peticionarios sostienen que ninguno ofrecía la posibilidad de una reparación realmente efectiva, la Sra. Arce Esparza invocó el recurso de protección como medio de procurar una reparación ante la justicia interna. La sustancia de sus denuncias fue llevada a la justicia, pero la acción fue desestimada por no impugnar una decisión o proceso judicial concreto referido a la legislación impugnada. La Sra. Arce Esparza interpuso así su denuncia ante la justicia interna por la vía de uno de los recursos que el Estado señala como válido. En principio, una vez que el peticionario ha presentado una denuncia ante la justicia por la vía de un recurso válido, no es necesario que siga invocando y agotando otros recursos, y el Estado no ha explicado por qué el recurso de inaplicabilidad ofrecería una reparación diferente o mejor de la situación denunciada.[11]En consecuencia, la Comisión concluye también que los peticionarios agotaron los recursos internos conforme lo requiere el artículo 46.

b. Plazo para la presentación de la petición

29.De acuerdo con el artículo46(1)(b) de la Convención, las peticiones deben ser presentadas dentro del plazo para ser admitida, a saber, dentro de los seis meses a partir de la fecha en que la parte denunciante haya sido notificada de la sentencia definitiva a nivel interno.

30.Según consta en el expediente en poder de la Comisión, en el caso presente la notificación de la desestimación del recurso de protección fue recibida por la Sra. Arce Esparza el 6 de agosto de 2001, y la petición fue recibida por la Secretaría el 30 de enero de 2002.De modo que la Comisión concluye que la petición satisface el requisito de presentación en plazo.

c. Duplicación de procedimientos y res judicata

31.El artículo 46(1)(c) dispone que la admisión de las peticiones está sujeta al requisito de que la materia "no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional" y el artículo47(d) de la Convención estipula que la Comisión no admitirá una petición que"sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional".En el caso presente, las partes no han indicado, ni surge del trámite, la existencia de alguna de estas circunstancias para la inadmisibilidad.

d.Caracterización de los hechos alegados

32.El artículo 47(b) de la Convención Americana dispone que no se admitirán las alegaciones que no señalen hechos que tiendan a establecer una violación. El Estado se ha opuesto a la admisiblidad de la presente petición argumentando, en esencia, que la protección constitucional del derecho a la igualdad está por encima las distinciones potencialmente incompatibles establecidas en la legislación impugnada, y que la petición no es completa porque no se ha impedido que la presunta víctima administre sus bienes.

33.Que la situación denunciada caracterice o no una violación de los derechos de la Sra. Arce Esparza protegidos por la Convención Americana es materia de la etapa de examen de los méritos. Pero, con respecto a la cuestión de la caracterización, la Comisión desea reiterar que la existencia de una legislación que incluya distinciones basadas en la condición personal puede de por sí caracterizar una posible violación. "[U]na norma que despojara de algunos de sus derechos a una parte de la población, en razón, por ejemplo, de su raza, automáticamente lesiona a todos los individuos de esa raza."[12]A este respecto, la Comisión concluye, en el caso presente, que los peticionarios han establecido denuncias que, de ser congruentes con otros requisitos y de demostrarse su veracidad, podrían tender a establecer la violación de los derechos protegidos por los artículos 1, 2, 17, 21, 24 y 25 de la Convención Americana. En conformidad con lo dispuesto en el artículo29 de la Convención Americana, respecto de la interpretación y aplicación, la Comisión se referirá a los términos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la medida pertinente como fuente de derecho para interpretar los derechos y obligaciones del Estado en virtud de la Convención Americana.

V.CONCLUSIONES

34.La Comisión concluye que es competente para examinar el caso presente y que la petición es admisible, de acuerdo con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

35.Sobre la base de los argumentos de hecho y de derechos expresados, y sin prejuzgar sobre los méritos del caso,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible el presente caso con respecto a la presunta violación de los derechos reconocidos en los artículos 1, 2, 17, 21, 24 y 25 de la Convención Americana.

2.Notificar a las partes de esta decisión.

3.Continuar con el análisis de los méritos del caso.

4.Publicar el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., al décimo día del mes de octubre del año de 2003. (Firmado): Clare Kamau Roberts, Primer Vicepresidente; Susana Villaran, Segunda; Vicepresidenta; y Comisionados Robert K. Goldman y Julio Prado Vallejo.

[1] El miembro de la Comisión José Zalaquett, de nacionalidad chilena, no participó en el examen y la votación, de conformidad con el Artículo 17(2)(a) del Reglamento.
[2] Artículo 1749 del Código Civil de Chile.
[3] Artículo 1754 del Código Civil de Chile.
[4] Artículo 1752 del Código Civil de Chile.
[5] Artículo 1750 del Código Civil de Chile.
[6] En su decisión, la Alta Corte de Apelaciones de Santiago declaró que "los hechos descritos en la presentación de fojas 1 sobre pasan los márgenes del procedimiento del recurso de protección , toda vez que se cuestionan las disposiciones de una ley, cuya aplicación, de conformidad con la Constitución Política del Estado, no es susceptible de impugnarse por esta vía…".Véase nota de los peticionarios a la Comisión de fecha 27 de agosto de 2001 en que se cita a la Alta Corte de Apelaciones de Santiago.
[7] Constitución de la República de Chile, artículo 2, Nº 2.
[8] Artículo Nº 19.611 del Código Civil de Chile , 16 de junio de 2001.
[9] Artículo Nº 24 del Código Civil de Chile , 16 de junio de 2001.
[10] Véase CIDH, Informe Nº 4/01, Caso 11.625, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), 19 de enero de 2001, en general y en el párr. 39; Corte IDH, Responsabilidad internacional por la promulgación y aplicación de leyes en violación de la Convención (Arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994, Ser. A Nº 14, parr. 43.
[11] Como se indica en el artículo 31(3) del Reglamento de la Comisión, el Estado que alegue el no agotamiento de los recursos internos tiene la carga de demostrar qué recursos quedan disponibles y efectivos. Conforme a ese artículo y a la jurisprudencia aplicable, la parte que alega el no agotamiento debe plantear alegaciones específicas, y no genéricas, respecto de los recursos disponibles y de su efectividad. Las alegaciones del Estado con respecto a la justificación para invocar otro recurso, sujeto a las mismas condiciones del invocado y desestimado, han sido genéricas. Véase CIDH, Informe Nº 72/01, Caso 11.804, Juan Angel Greco (Argentina), 10 de octubre de 2001, párr. 49; Informe Nº 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas (Nicaragua), Informe Anual de la 1997, párr. 95.Por el principio de que la invocación y el agotamiento de un recurso aplicable es, en principio, suficiente, véase, por ejemplo, Corte Europea de Derechos Humanos, McCann y otros c. Reino Unido, 18984/91, 3 de septiembre de 1993.
[12] Corte IDH, OC-14/94, supra, párr. 43.

**INFORME Nº 25/04. PETICIÓN 12.361. ADMISIBILIDAD. ANA VICTORIA SÁNCHEZ VILLALOBOS Y OTROS. COSTA RICA. 11 DE MARZO DE 2004.**

I.RESUMEN

1.El 19 de enero de 2001, el Sr. Gerardo Trejos Salas (en adelante "el peticionario") presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión", "la Comisión Interamericana" o "la CIDH"), contra la República de Costa Rica (en adelante "El Estado", "Costa Rica", "el Estado costarricense" o "el Estado de Costa Rica"), en la que alega la responsabilidad internacional del Estado costarricense por la sentencia número 2000-02306, del 15 de marzo de 2000, dictada por la Sala Constitucional de Costa Rica, que declaró la inconstitucionalidad del Decreto Presidencial número 24029-S, del 3 de febrero de 1995, que regulaba la práctica de la fecundación in vitro en ese país.

2.El peticionario alega que la referida sentencia viola los artículos 1, 2, 4, 5, 8, 11(2), 17, 24, 25, 26 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana"), así como los artículos 3, 10 y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante "Protocolo de San Salvador"), y los artículos 1 y 7(h) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (en adelante "Convención de Belém do Pará") contra Ana Victoria Sánchez Villalobos; Fernando Salazar Portilla; Gretel Artavia Murillo, Miguel Mejía Carballo; Andrea Bianchi Bruno; German Alberto Moreno Valencia; Ana Cristina Castillo León; Enrique Acuña Cartín, Ileana Henchos Bolaños; Miguel Antonio Yamuni Zeledón; Claudia María Carro Maklouf; Víctor Hugo Sanabria León, Karen Espinoza Vindas; Héctor Jiménez Acuña; Maria del Socorro Calderón P.; Joaquina Arroyo Fonseca, Geovanni Antonio Vega, Carlos E. Vargas Solórzano, Julieta González Ledezma y Oriester Rojas Carranza, todos pacientes de los doctores Gerardo Escalante López y Della Ribas (en adelante denominados "las supuestas víctimas"), y contra las empresas Costa Rica Ultrasonografía S.A. y el Instituto Costarricense de Fertilidad.

3.En relación con la admisibilidad, el Estado alegó que la denuncia es infundada e improcedente y que debe ser considerada inadmisible. Alegó también que la tardía individualización de las víctimas, así como la falta de legitimación ad causam de las víctimas primeramente individualizadas, es decir las empresas referidas supra, deberían indicar la inadmisibilidad de la petición. También alegó la falta de agotamiento de los recursos internos y el carácter extemporáneo de la petición en relación con las víctimas posteriormente identificadas.

4.El peticionario, por su parte, alegó que las supuestas víctimas optaron por la confidencialidad porque temían la perturbación de su vida privada. Posteriormente la

Comisión recibió una comunicación firmada por los pacientes de los doctores Gerardo Escalante López y Delia Ribas en la que renunciaron a la confidencialidad.

5.El peticionario alegó, asimismo, que debido al carácter vinculante de las resoluciones de la Sala Constitucional de Costa Rica no quedaba ningún recurso jurisdiccional interno por agotar.

6.La Comisión, con base en el análisis de los argumentos presentados por ambas partes y de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención, decidió declarar admisible la petición en relación con las eventuales violaciones de los artículos 1, 2, 11, 17 y 24 de la Convención Americana y proseguir con el análisis del fondo del asunto.

## II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

7.El día 6 de febrero de 2001 la Comisión acusó recibo de la comunicación del peticionario e informó la apertura del caso número 12.361, de acuerdo con las normas del Reglamento de la Comisión vigente en esa fecha. El mismo 6 de febrero las partes pertinentes de la petición fueron transmitidas al Estado, al que se le solicitó que presentara informaciones sobre el caso dentro del plazo de 90 días.

8.El 4 de mayo de 2001 la Comisión recibió la respuesta del Estado, en la cual este alegó la improcedencia de la acción, dado que la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica está en total sintonía con la Convención Americana. El 1o de junio del mismo año la Comisión envió copia de la respuesta del Gobierno al peticionario con la solicitud de que formulara sus comentarios.

9.El 12 de junio de 2001 la Comisión recibió los comentarios del peticionario a la respuesta del Gobierno costarricense. En la misma fecha esas observaciones fueron enviadas al Estado.

10.El 18 de julio de 2001 el Gobierno envió nuevas observaciones sobre el caso, alegando que la petición de autos no debería ser admitida por no existir víctimas individualizadas y asimismo por falta de legitimación ad causam de las víctimas que habían sido individualizadas, es decir, las empresas Costa Rica Ultrasonografía S.A. y el Instituto Costarricense de Fertilidad. Estas informaciones fueron transmitidas al peticionario el 23 de julio de 2001.

11.El 2 de octubre de 2002 la Comisión acusó recibo de la comunicación del peticionario fechada de 25 de septiembre de 2002, en la que el peticionario solicitó que se uniera la admisibilidad con el fondo, de acuerdo con el artículo 37(3) del Reglamento de la Comisión, y declaró que renunciaba al procedimiento de solución amistosa. En seguida se enviaron nuevamente al peticionario las partes pertinentes de la respuesta del Estado del 18 de julio de 2001, que habían sido enviadas por la Comisión primeramente el día 23 de julio de 2001, dándose un plazo de respuesta de 15 días.

12.En la misma fecha fueron enviadas las partes pertinentes de la comunicación del peticionario del 25 de septiembre de 2002 al Estado, al que se concedió un plazo de 30 días para responder a las mismas. El 29 de enero de 2003 la Comisión acusó recibo de las observaciones del 30 de octubre de 2002 enviadas por el Estado, que en la misma fecha fueron transmitidas al peticionario. El peticionario respondió el 24 de diciembre de 2002 y el 23 de enero de 2003.

13.En las referidas comunicaciones las supuestas víctimas se identificaron y otorgaron poderes al peticionario para que las representara ante esta Comisión. Reiteraron la posición del peticionario de que no se habían identificado por temor de que su vida privada se viera perturbada. También reiteraron su pedido de que se uniera la admisibilidad con el fondo de acuerdo con el artículo 37(3) de la Convención. Esas observaciones fueron transmitidas al Estado el 11 de marzo de 2003, y el Estado respondió a las mismas el 27 de mayo de 2003, informando su oposición a la unión de la admisibilidad con el fondo.

14.El 10 de octubre de 2003 se recibió una comunicación del peticionario en la cual se solicitó ampliación de la petición a fin de incluir los artículos 1, 2, 5, 8, 11(2), 24, 25 y 26 de la Convención Americana, así como los artículos 3, 10 y 15 del Protocolo de San Salvador. Esta comunicación fue recibida el 10 de octubre de 2003 y sus partes pertinentes fueron transmitidas al Estado el 25 de noviembre de 2003, otorgándose un plazo de 60 días para la respuesta.

15.El 23 de enero de 2004 se recibió la respuesta del Gobierno a la ampliación de la petición. En dicha comunicación el Estado solicitó la declaración de inadmisibilidad de la petición por los motivos antes mencionados, es decir por falta de legitimación de las partes y falta de caracterización de las violaciones alegadas. Al mismo tiempo adujo la extemporaneidad de la petición y la falta de agotamiento de los recursos internos en relación con las víctimas posteriormente individualizadas.

## III.POSICIÓN DE LAS PARTES

### a. Posición del peticionario

16.El peticionario señala que el día 3 de febrero de 1995 fue firmado un Decreto Presidencial en Costa Rica, con el número 24029-S, que autorizaba la práctica de la fecundación in vitro en ese país, y regulaba su ejercicio. Sostiene que el modelo establecido en ese decreto se diferenciaba del de otros países, pues solamente se aplicaba a matrimonios; prohibía la inseminación de más de seis óvulos y disponía que todos los embriones debían ser depositados en el útero materno, estando prohibido el congelamiento, preservación o descarte de embriones.

17.El peticionario señala que el 15 de marzo de 2000, la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, a través de la sentencia número 2000.02306, se pronunció sobre una acción de inconstitucionalidad, anulando el Decreto Presidencial 24049-S por considerar inconstitucional la práctica de la fecundación in vitro en el país tal como la

regulaba ese instrumento jurídico. Destaca que la Sala Constitucional fundamentó su decisión en el hecho de que la técnica de la fecundación in vitro, tal como era practicada en la época, implicaba una elevada perdida de embriones, directamente causada por la manipulación consciente y voluntaria de células reproductoras.

18.El peticionario alega que la técnica de la fecundación in vitro, tal como era regulada en Costa Rica, no representaba un atentado contra la vida. Sostiene, basándose en estudios médicos, que no todo embrión humano evoluciona hasta el nacimiento y destaca que los porcentajes de éxito en la gestación a través del proceso natural y de la fecundación in vitro son semejantes.

19.El peticionario cuestiona la personalidad jurídica del embrión conforme a lo establecido en la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala Constitucional de Costa Rica. A tal efecto se refiere a los artículos 31 y 1004 del Código Civil costarricense y argumenta que aunque exista la protección al feto, ella no es absoluta, ya que está condicionada a su nacimiento con vida.

20.El peticionario sostiene la relatividad del derecho a la vida. Alega que aunque se trate de un derecho fundamental, está sujeto a limitaciones cuando se contrapone a la tutela de otros derechos fundamentales. Presenta la situación de autos en tal contexto, afirmando que se está protegiendo un derecho incondicionalmente y así desconociendo otros derechos.

21.El peticionario amplía su tesis sobre la relatividad de la protección de la vida desde la concepción. Afirma que la Convención Americana prevé esta relatividad al expresar en su artículo 4 que la vida debe ser protegida por la Ley, en general, desde el momento de la concepción. Agrega que, por lo tanto, ese derecho debe ser analizado a la luz del artículo 32 de la Convención, que estipula la correlación entre los derechos.

22.El peticionario alega que la prohibición de la práctica de la fecundación in vitro en Costa Rica, importa discriminación y un tratamiento desigual entre enfermos, violando de esta forma los artículos 1 y 24 de la Convención Americana. Sostiene que la prohibición imposibilita el tratamiento de las personas que padecen esterilidad o infertilidad, siendo que al mismo tiempo se permite utilizar avances científicos y tecnológicos para el tratamiento tendiente a la cura o alivio de otras enfermedades. En este sentido también alega que la prohibición de la práctica de la fecundación in vitro implica una violación al derecho a la salud dispuesto en el artículo 10 del Protocolo de San Salvador y a la integridad física, psicológica y moral protegida en el artículo 5 de la Convención Americana.

23.El peticionario también alega que el Estado de Costa Rica violó el artículo 17 de la Convención Americana a través de la prohibición de la técnica de la fecundación in vitro cuando negó a hombres y mujeres que padecen infertilidad o esterilidad la posibilidad de fundar o constituir una familia. Agrega que por el mismo motivo el Estado de Costa Rica habría violado el artículo 15(2) del Protocolo de San Salvador.

24.El peticionario alega que la prohibición de la práctica de la fecundación in vitro en Costa Rica constituye asimismo una intromisión arbitraria y abusiva en la vida privada y familiar de personas que necesitan y desean someterse al referido procedimiento médico para poder fundar una familia, violando así el artículo 11(2) de la Convención Americana. Agrega que debido a la naturaleza del juicio de inconstitucionalidad las supuestas víctimas no pudieron hacer valer sus derechos ni ser oídas, lo que según alega es una violación a sus garantías judiciales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.

25.El peticionario además alega la violación de los artículos 1 y 7(h) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará". El peticionario observa que la prohibición de la práctica de la fecundación in vitro en Costa Rica causó grave daño o sufrimiento psicológico a las supuestas víctimas, en especial a las mujeres, y sostiene que el Estado costarricense no tomó medidas efectivas para prevenir o responder a estas violaciones. Destaca que hay una presión muy fuerte, especialmente sobre las mujeres, de procrear, y que la falta de tratamiento prolonga y agrava el sufrimiento emocional causado por esa presión.

26.El peticionario señala que inicialmente no había individualizado a las supuestas víctimas pues éstas habían optado por la confidencialidad a fin de no ser objeto de injerencia en su vida privada. Además sostuvo que la identidad de las víctimas solamente sería revelada si así lo solicitaba la Comisión. No obstante, en sus últimas comunicaciones, como se señaló anteriormente, el peticionario presentó una lista firmada por las supuestas víctimas, quienes manifestaron que otorgaban poder al peticionario para que las representara ante la Comisión.

27.El peticionario solicita que la Comisión declare que la prohibición de la práctica de la fecundación in vitro en Costa Rica viola los artículos 1, 2, 4, 5, 8, 11(2), 17, 24, 25, 26 y 32 de la Convención Americana; también los artículos 3, 10 y 15 del Protocolo de San Salvador y los artículos 1 y 7(h) de la Convención de Belém do Pará. Solicita también que las supuestas víctimas tengan derecho a una justa indemnización por los perjuicios que les fueron causados, en especial en lo que atañe a las que tuvieron que desplazarse al extranjero a fin de realizar la fertilización y las que debido a su edad avanzada quedaron imposibilitadas de tener hijos aunque la práctica llegue a ser declarada permisible en el futuro.

28.El peticionario también solicita que se considere víctima a la empresa que adquirió los equipos médicos necesarios para practicar la fecundación in vitro en Costa Rica y que no pudieron hacer uso de los mismos debido a la prohibición emanada de la Sala Constitucional.

b. Posición del Estado

29.El Estado alega que desde el punto de vista biológico y legislativo es posible establecer que desde el momento en que se determine que existe vida se impone el deber de protegerla. Agrega que no importa que esta vida se haya materializado en un ser humano

visible, sino que, por el contrario, esa protección debe darse desde su existencia, por precoz que sea su forma. En ese sentido afirma que con la fecundación se inicia el desarrollo de una vida humana, que debe ser protegida.

30.El Estado sostiene que aunque el Decreto Ejecutivo 24029-S disponga que todos los óvulos fertilizados deben ser implantados en el útero materno, estando prohibida su eliminación o preservación, la simple manipulación de embriones para que solamente uno sobreviva significa la muerte de otros embriones. Sostiene que si bien ocurren muertes dentro del útero materno debido a circunstancias naturales, no se acepta que esas muertes fuesen previsibles como resultado de manipulación humana. Agrega que el problema no se limita al número de vidas humanas perdidas, sino que está ligado principalmente a su previsibilidad.

31.El Estado rebate el argumento del peticionario de que el embrión carece de personalidad jurídica. Para ello el Estado utiliza argumentos legislativos, como la disposición del artículo 31 del Código Civil costarricense, que protege el derecho a la vida desde 300 días antes del su nacimiento.

32.Adicionalmente el Estado alega que la técnica de la fecundación in vitro no representa un caso de tratamiento de emergencia para salvar una vida. Sostiene que la infertilidad o la esterilidad no deben ser consideradas enfermedades, pues no equivalen a una alteración de la salud de una persona, sino una condición biológica o consecuencia de una enfermedad. En ese sentido afirma que la fecundación in vitro no es un tratamiento de emergencia ni cura para una enfermedad, pues no resuelve sus causas. Afirma que se trata de un recurso artificial que procura superar esa condición biológica. Concluye que se estaría jugando con vidas humanas al practicarla, por lo cual esa interpretación sería contraria a los derechos que protegen la vida en el derecho interno costarricense.

33.El Estado también alega que la autorización de la fecundación in vitro en Costa Rica estaría violando no solamente la protección del derecho a la vida reconocida en la Convención Americana, sino también otros instrumentos de Derecho Internacional de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocen la necesidad de protección especial del niño tanto antes como después del nacimiento.

34.El Estado sostiene que el principio de igualdad y no discriminación no propone que se dé un tratamiento idéntico a cada situación médica diversa, sino que requiere que se consideren las particularidades de cada caso concreto a fin de proporcionar la intervención médica adecuada. Destaca que en el tratamiento al que pueden ser sometidas las personas con infertilidad o esterilidad debe estar limitado por las disposiciones de la Constitución y del ordenamiento internacional de protección de los derechos humanos.

35.En relación con el derecho de fundar una familia, el Estado alega que aunque exista un derecho a tener hijos y fundar una familia, esos derechos tienen como límite valores superiores, como el derecho de todos los seres humanos, sin distinción, a la protección de su

vida. A este respecto menciona el principio de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos y afirma que no se puede sacrificar algunos derechos en aras de otros.

36.Sobre la correlación entre los derechos, el Estado afirma que este principio establece que todo derecho tiene sus límites, que son determinados por los derechos de los otros. En su propio interés afirma que el derecho de los embriones implica un límite a los derechos de los demás, inclusive de los matrimonios a tener hijos o de los científicos a experimentar con embriones.

37.En cuanto a la alegada violación a la vida privada, el Estado sostiene el principio de que la práctica de la fecundación in vitro no constituye un asunto privado que sea inofensivo para la convivencia social. Agrega que tal como está establecida, la técnica actual de la fecundación in vitro contraría el orden público, la moral y las buenas costumbres, porque viola el derecho a la vida, de lo que surge el interés legítimo del Estado en intervenir.

38.En cuanto a la alegada violación de garantías judiciales y protección judicial, el Estado señala que el proceso de constitucionalidad, en Costa Rica, prevé en los artículos 81 y 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional la publicación de un aviso, por tres veces consecutivas, en el Boletín Judicial, haciendo saber que se ha incoado una acción constitucional, lo que se realiza a los efectos de llevar a conocimiento público la iniciación del proceso a fin de que los legítimamente interesados puedan participar en él.

39.Adicionalmente el Estado declara que la jurisprudencia constitucional es vinculante, pero no para la propia Sala, que podría eventualmente revocar la decisión si existiesen criterios suficientes que lo justificaran. Alega, por lo tanto, que las reclamaciones de las supuestas víctimas no fueron analizadas por tribunales nacionales, por lo que aduce falta de agotamiento de recursos internos y extemporaneidad de la petición, en virtud de la tardía individualización de las supuestas víctimas.

40.En relación con la alegación del peticionario de que la sentencia de la Sala Constitucional costarricense sería una forma de violencia contra la mujer, El Estado afirma que se trata de una interpretación extensiva de la letra de la Convención de Belém do Pará, apartada del espíritu de ese instrumento, y sostiene que de la petición de que se trata no se desprende ningún acto de violencia contra la mujer o falta de diligencia que provoque esa violencia. Alega que el sufrimiento causado por el problema de la infertilidad a hombres y mujeres no tiene nexo causal alguno con el Estado costarricense.

41.En lo referente a la admisibilidad, el Estado alega la falta de legitimación ad causam del peticionario, que no individualizó a las víctimas en el estado procesal adecuado y sin señalar la relación de las supuestas víctimas con el caso de que se trata. También alega la falta de legitimación ad causam en relación con las empresas Costa Rica Ultrasonografía S.A. y el Instituto Costarricense de Fertilidad, por no ser personas físicas y por lo tanto no estar protegidas por la Convención Americana.

42.A ese mismo respecto, el Estado alega también que la petición es infundada e improcedente en cuanto no expone hechos que caractericen una violación de los derechos humanos contemplados en la Convención Americana.

IV.ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

A. Competencia ratione personae, ratione materiae, ratione temporis, ratione loci de la Comisión Interamericana

a. Competencia ratione personae

43.El artículo 44 de la Convención Americana y el 23 del Reglamento de la CIDH estipulan que "cualquier persona o grupo de personas" están facultadas para presentar peticiones ante la CIDH, referentes a supuestas violaciones de la Convención Americana.

44.El Estado de Costa Rica alega que la individualización de las supuestas víctimas ocurrió muy tardíamente, y agrega que no se mencionó la relación entre las supuestas víctimas y los hechos denunciados en la petición. Por lo tanto solicita la declaración de falta de competencia ratione personae, dado que en la petición inicial no se presentaron verdaderas víctimas individualizadas. El Estado también alega falta de competencia ratione personae de la Comisión en lo que atañe a las empresas Costa Rica Ultrasonografía S.A. y el Instituto Costarricense de Fertilidad. El peticionario, sin embargo, alega que sólo envió una lista de las supuestas víctimas en su comunicación del 24 de diciembre de 2002 porque ellas habían optado por la confidencialidad pues temían una injerencia de la prensa en su vida privada.

45.Los requisitos de admisibilidad de una denuncia deben ser estudiados, en general, en el momento en que la Comisión se pronuncia sobre la admisibilidad.[1]Por lo tanto, el momento de la presentación de la denuncia y el de la declaración sobre admisibilidad son distintos. El artículo 33 del Reglamento de la CIDH, por ejemplo, faculta a la Comisión a solicitar al peticionario que complete los requisitos omitidos en la petición cuando la Comisión estima que la "petición es inadmisible o está incompleta".[2]

46.Aceptar el argumento del Estado costarricense de que la mencionada denuncia sería inadmisible porque no fueron individualizadas las víctimas en la petición inicial, a pesar de que lo hayan sido posteriormente implicaría una decisión formalista contraria a la protección de los derechos humanos consagrados en la Convención, y colocaría a las supuestas víctimas en estado de indefensión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que "es un principio comúnmente aceptado que el sistema procesal es un medio para alcanzar la justicia y que ésta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades".

47.Del mismo modo, la falta de individualización de las víctimas nada modificaría el conocimiento por parte del Estado costarricense de la situación descrita en la denuncia,

toda vez que ella se dio en relación con una sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica a partir de la cual se prohibió la práctica de la fecundación in vitro en el país.

48.La Comisión entiende que posee competencia ratione personae porque las personas de que se trata se encuentran comprendidas en la definición de persona del artículo 1(2) de la Convención.

49.En relación con las empresas Costa Rica Ultrasonografía S.A. e Instituto Costarricense de Fertilidad, la Comisión ratifica su práctica y doctrina establecidas en los casos Banco del Perú,[3] Tabacalera Boquerón,[4] Mevopal, S.A.[5] yBendeck-Cohdinsa,[6] en que declara que no tiene competencia ratione personae para analizar una petición presentada ante la Comisión por una persona jurídica por estar éstas excluidas de los sujetos a los cuales la Convención otorga protección. La presente petición no posee elementos que justifiquen la modificación de la jurisprudencia de la Comisión.

50.En consecuencia, a los efectos de la admisibilidad, la Comisión decide que tiene competencia ratione personae con relación con las supuestas víctimas arriba citadas y no la posee en relación con las empresas Costa Rica Ultrasonografía S.A. y el Instituto Costarricense de Fertilidad.

b. Competencia ratione materiae

51.Al respecto, la Comisión observa que la petición denuncia la supuesta violación de derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en especial en sus artículos 1, 2, 4, 5, 8, 11(2), 17, 24, 25, 26 y 32.

52.La petición también denuncia violaciones de los artículos 3, 10 y 15 del Protocolo de San Salvador. La CIDH observa que aunque carezca de competencia para establecer violaciones de los referidos artículos del Protocolo de San Salvador, tendrá en cuenta las normas referentes a la obligación de no discriminación, al derecho a la salud y al derecho a la constitución y protección de la familia en su análisis sobre el mérito de ese caso, conforme a lo Establecido en los artículos 26 y 29 de la Convención Americana.

53.Con respecto a las alegada violación de los artículos 1 y 7(h) de la Convención de Belém do Pará, la Comisión observa que, conforme al artículo 12 del mismo instrumento se pueden presentar peticiones a la CIDH en las que se alegue la violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará por un Estado parte. Dichas peticiones serán consideradas por la Comisión de conformidad con sus normas de procedimiento y los requisitos para la presentación y consideración de peticiones establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. [7]

54.En consecuencia, si los hechos denunciados se comprobaren, podrían constituir violaciones a derechos humanos protegidos en la Convención Americana. Por tal motivo la Comisión se considera competente para examinar la denuncia.

c.Competencia ratione temporis

55.La Comisión tiene igualmente competencia ratione temporis, porque los hechos alegados en la petición tuvieron lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención ya se encontraba en vigor para el Estado de Costa Rica.[8]

d. Competencia ratione loci

56.Por último, La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, ya que en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana, que tuvieron lugar dentro del territorio de un Estado parte del mencionado tratado.

B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

a. Agotamiento de los recursos internos

57.El peticionario menciona que el 15 de marzo de 2000 la Sala Constitucional Costarricense, en una acción de inconstitucionalidad, dictó una sentencia que anulaba el Decreto Ejecutivo número 24029-S, del 3 de febrero de 1995, prohibiendo por lo tanto la práctica de la fecundación in vitro en el Estado de Costa Rica. Esa sentencia fue notificada a las partes el día 11 de octubre de 2000.

58.El peticionario alega que no procede ningún otro recurso contra esta decisión, con excepción del de ampliación o aclaración, conforme el artículo 11(2) de la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, que prevé que las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional son irrecurribles. Por los motivos arriba referidos el peticionario alega que se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme el artículo 46(1) (a) de la Convención Americana.

59.El Estado alega que no hubo agotamiento de los recursos del derecho interno, pues las reclamaciones de las supuestas víctimas individualizadas no fueron analizadas por tribunales nacionales. El Estado señala que la jurisprudencia constitucional en Costa Rica es vinculante, pero no para la Sala Constitucional, que podría eventualmente revocar la decisión si hubieren fundamentos suficientes que lo justificasen.

60.La Comisión entiende que hay una decisión definitiva y vinculante de la más alta instancia judicial de Costa Rica sobre los hechos denunciados, en la cual se declaró la inconstitucionalidad de la práctica de la fecundación in vitro, tal como la regulaba el Decreto Presidencial número 24029-S. Este hecho no es controvertido por el Estado de Costa Rica. En ese sentido, la Comisión estima que no hay necesidad de que se efectúen mecánicamente trámites formales sobre los mismos hechos para que se cumpla una mera formalidad.

61.La Comisión afirmó reiteradamente que no basta que el Estado alegue la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos para que ella prospere. Conforme a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un Estado que invoca esa excepción debe también identificar los recursos internos a agotar y probar su eficacia en tales circunstancias.[9]

62.La Comisión recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también estableció que la mera existencia de recursos internos no implica la obligación de que ellos sean agotados, pues deben ser adecuados y efectivos. Para que sean adecuados es necesario que su función, dentro del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. Recurso eficaz, a su vez, es el que permite producir el resultado para el que fue establecido.

63.El Estado de Costa Rica mencionó los recursos jurisdiccionales internos que todavía se encontraban disponibles para el peticionario, pero no probó su eficacia. Por lo tanto, la CIDH considera agotados dichos recursos.

b. Plazo de presentación

64.La sentencia definitiva de la Sala Constitucional fue dictada el 15 de marzo de 2000 pero el peticionario alega que las partes recién fueron notificadas de la decisión en octubre de 2000. El artículo 46(1) (b) establece que la petición debe ser "presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto perjudicado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva".

65.El peticionario presentó la petición el 19 de enero de 2001, es decir, dentro del plazo de seis meses establecido por el artículo 46(1) (b) de la Convención Americana.

c. Duplicidad de procedimientos y cosa juzgada internacionales

66.La Comisión entiende, de acuerdo con las informaciones contenidas en los autos, que el asunto no se encuentra pendiente de otro procedimiento de acuerdo internacional ni ha sido previamente decidido por éste u otro organismo internacional. Considera, por lo tanto, que han sido satisfechos los requisitos de los artículos 46(1) (c) y 47(d) de la Convención Americana.

d. Caracterización de los hechos alegados

67.En el presente caso, el peticionario ha presentado una lista de víctimas individualizadas, mujeres y hombres en busca de un tratamiento para la esterilidad, y ha alegado que las acciones del Estado encaminadas a prohibir el acceso a uno de los tratamientos existentes constituye una violación de los artículos 1, 2, 4, 5, 8, 11(2), 17, 24, 25, 26 y 32 de la Convención Americana, artículos 3, 10 y 15 del Protocolo de San Salvador, y artículos 1 y 7 de la Convención de Belém do Pará.

68.La Comisión observa que las alegaciones del peticionario en relación a los derechos de las personas nombradas como víctimas se refieren principalmente a los artículos 1, 2, 11, 17 y 24 de la Convención Americana. En particular, el artículo 17(2) de la Convención establece que "[s]e reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención." Desarrollos en el derecho internacional que se retrotraen a la Conferencia de Teherán, al Programa de Acción del Cairo, y la Plataforma de Acción de Beijing, han reconocido el derecho de las parejas y de los individuos:

de decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y los medios necesarios para hacerlo, y el derecho de alcanzar los más altos niveles de salud sexual y reproductiva. También se incluye el derecho a adoptar todas las decisiones relativas a la procreación, sin discriminación, coacción, ni violencia, según lo establecido en los instrumentos de derechos humanos (Conferencia Internacional Sobre la Población y el Desarrollo, Cairo, 1994).

69.En la etapa de fondo, la Comisión examinará el derecho general de fundar una familia establecido en la Convención Americana y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, así como en muchas constituciones, junto con el derecho a la protección de la vida privada y familiar, a la luz de las cuestiones planteadas en la petición bajo estudio. Estos derechos no son absolutos; el problema particular a ser examinado es si la acción estatal encaminada a restringir el acceso a medidas que favorecen la planificación familiar y la procreación, son compatibles con las disposiciones antes referidas de la Convención Americana. En este sentido, la denuncia no es manifiestamente infundada de acuerdo con la Convención.

70.El peticionario no ha proporcionado un fundamento fáctico o jurídico que demuestre como los hechos denunciados han afectado los derechos de las víctimas adultas individualizadas protegidos por los artículos 4 y 32 de la Convención Americana; ni ha proporcionado suficientes fundamentos para que se hayan caracterizado violaciones a los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana, o al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Las alegaciones hechas en relación con el Protocolo de San Salvador pudieran ser tomadas en consideración al interpretar las obligaciones del Estado conforme al artículo 26 de la Convención Americana, en la medida en que fuera pertinente al revisar el fondo del asunto, pero los artículos invocados del protocolo no son directamente justiciables bajo el sistema de peticiones individuales.

V.CONCLUSIONES

71.Por las razones anteriormente expuestas, la Comisión considera que tiene competencia para entender en el presente caso y que, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la petición es admisible, en los términos anteriormente expuestos.

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible la presente denuncia en cuanto a las supuestas violaciones de derechos protegidos en los artículos 1, 2, 11, 17 y 24[10] de la Convención Americana.

2.Declarar inadmisible la presente denuncia en cuanto a las empresas Costa Rica Ultrasonografía S.A. y el Instituto Costarricense de Fertilidad.

3.Declarar inadmisible la presente denuncia en cuanto a los artículos 4, 5, 8, 25, 26 y 32 de la Convención Americana, los artículos 3, 10 y 15 del Protocolo de San Salvador y los artículos 1 y 7(h) de la Convención de Belem do Pará.

4.Notificar la presente decisión a las partes.

5.Continuar con el análisis de fondo de la cuestión.

6.Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Ciudad de Washington, D.C., a los 11 días del mes de marzo de 2004. (Firmado): José Zalaquett, Presidente; Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente; Susana Villarán, Segunda Vicepresidenta; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, Paulo Sergio Pinheiro, Freddy Gutiérrez Trejo y Florentín Meléndez.

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 28/98, Caso 11.625 (“Maria Eugenia Morales de Sierra"), 6 de marzo de 1998, Guatemala, Informe Anual 1997.
[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 52/00, Casos Nº 11.830 y 12.038 (“Trabajadores Cesados del Congreso”), Perú, 15 de junio de 2000, Informe Anual 2000.
[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 10/91, Caso 10.169, ("Banco del Perú"), Informe Anual 1990-1991. En este caso la Comisión reconoció su competencia para proteger los derechos de un individuo cuya propiedad es expropiada, pero no para proteger "los derechos de personas jurídicas", tales como empresas o instituciones bancarias. Idem, párrafo 2.
[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 47/97 (“Tabacalera Boquerón"), 16 de octubre de 1997, Paraguay, Informe Anual 1997.
[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 39/99 ("Mevopal, S.A."), 11 de marzo de 1999, párrafo 20, Argentina, Informe Anual 1998.
[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 106/99 (Bendeck-Cohdinsa), 27 de septiembre de 1999, párrafos 17 y sig., Honduras, Informe Anual 1999.
[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 73/01, Caso 12.350, MZ, 10 de octubre de 2001, Bolivia, Informe Anual 2001, párrafo 24.

[8] Costa Rica ratificó la Convención Americana el 8 de abril de 1970, y el 2 de junio de 1980 presentó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con los artículos 45 y 62 de la Convención.
[9] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C, Nº 1, párrafo 88.
[10] Los Comisionados José Zalaquett, Evelio Fernández y Freddy Gutiérrez votaron contra la inclusión del artículo 24 de la Convención por entender que los hechos alegados no tienden a caracterizar una violación de dicha disposición.

**INFORME N° 16/05. PETICIÓN 281-02. ADMISIBILIDAD. CLAUDIA IVETTE GONZÁLEZ. MÉXICO. 24 DE FEBRERO DE 2005.**

I.RESUMEN

1.El 6 de marzo de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una denuncia en la que se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos ("el Estado") por las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Claudia Ivette González, quien desapareció el 10 de octubre de 2001 en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, y fue hallada asesinada el 6 de noviembre del mismo año. La petición fue presentada por Josefina González Rodríguez, madre de la presunta víctima, y por Rosario Acosta y Jorge Alberto Gaytán en representación de la "Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana" (en adelante, conjuntamente, "los peticionarios").

2.Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de los artículos 8 (incisos a, c, d y h) y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará"); de los artículos XIV y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ("Declaración Americana").Alegan igualmente que se configura la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana"): obligación de respetar y garantizar todos los derechos (artículo 1); obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2); derecho a la libertad personal (artículo 7); derecho a la protección de la honra y la dignidad (artículo 11) y derecho a la protección judicial (artículo 25); y que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en dicho instrumento internacional. Por su parte, el Estado mexicano sostiene que las actuaciones judiciales en el caso demuestran su voluntad de garantizar el respeto de los derechos humanos de toda persona y que no se han agotado los recursos internos. En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.

3.Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1(1) del instrumento internacional citado; y de los artículos 7, 8 y 9 de la Convención de Belém do Pará; y decide igualmente publicar el presente informe.

II.TRÁMITE ANTE LA CIDH

4.La petición fue presentada el 6 de marzo de 2002 con una comunicación de la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana. Luego del estudio inicial sobre el trámite, con base en el artículo 30 de su Reglamento la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado con fecha 29 de mayo de 2002 y fijó el plazo de dos meses para que éste presentara sus observaciones. El 2 de agosto de 2002 el Estado solicitó una prórroga para presentar dichas observaciones, que fue concedida por la Comisión Interamericana hasta el 29 de agosto de 2002.Con fecha 30 de agosto de 2002 se recibió la nota del Estado que contiene las observaciones sobre la petición. Esta información se trasladó a los peticionarios el 23 de septiembre de 2002 con el plazo de un mes para que presentaran sus observaciones.

III.POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD

A. Los peticionarios

5.Los peticionarios imputan responsabilidad al Estado por "irregularidades e inconsistencias" en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior muerte de Claudia Ivette González. La señora Josefina González Rodríguez manifiesta lo siguiente:

1.El día 11 de octubre que fui a reportarla como perdida a la Procuraduría de Justicia no me aceptaron el reporte "por ser ya muy tarde". Fue hasta el día 12 que pude levantar el acta.
2.Mi familia, conocidos y otras personas cercanas, tuv[imos] que hacer rastreos en el lugar donde se encontró el cuerpo por nuestra cuenta, ya que la Policía Judicial no tomó cartas en el asunto durante las casi cuatro semanas desde su desaparición.
3.La entonces Fiscal Especial para Homicidios de Mujeres, Sully Ponce, a pesar de tener la responsabilidad de agilizar estos casos, en un encuentro con ella me dijo que estaban haciendo lo posible por encontrarla, pero que "delante del caso de mi hija, había muchos más", por tanto debía esperar indefinidamente.
4.A mí y a mi hija Mayela solamente nos tomaron pruebas de sangre para el ADN, cuyos resultados, nos dijeron, estarían en un mes. Es la fecha que no hemos recibido los resultados.
5.A cuatro semanas de la desaparición de mi hija, cuando me la entregaron, lo único que recibí fue una bolsa de huesos. Me resultó extraño que en menos de un mes, su cuerpo se corrompiera de esa manera. La Fiscal Zulema Bolívar me dijo que sí era posible, dado que el cuerpo "pudo haber sido maltratado por animales, lluvia o tierra".
6.Desde el momento en que me entregaron el cuerpo de mi hija, las autoridades se desligaron del caso, dándolo por cerrado.
7.Después de cuatro meses del hallazgo del cuerpo de mi hija, nuevamente el domingo 24 y lunes 25 de febrero del año 2002, familiares, amigos y gente de grupos solidarios hicimos un rastreo en el lugar donde fueron localizadas mi hija y otras siete jovencitas, encontrando tres pertenencias intactas de mi hija Claudia Ivette. Las autoridades encargadas de realizar la investigación justificaron este hecho diciendo que esos objetos habían sido colocados ahí "por familiares de los dos (supuestos) asesinos".

6.Con base en lo anterior, la señora González Rodríguez considera que las autoridades gubernamentales "no han hecho todo lo que podían hacer para esclarecer la muerte de mi hija y dar una explicación clara y verídica sobre esta violación" y que "la ineficiencia en las investigaciones demuestra la poca voluntad del gobierno para esclarecer estos crímenes y prevenirlos". Entre otras medidas de carácter general, solicita que la CIDH establezca la responsabilidad de las autoridades por tales hechos y que "se pronuncie enérgicamente para que termine el clima de impunidad y violación a los derechos humanos [de las mujeres] en el estado de Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez".

7.Respecto al agotamiento de recursos internos, los peticionarios sostienen que se aplica la excepción prevista en el artículo 46(2)(b) de la Convención Americana, ya que el caso permanecía abierto en la jurisdicción interna hasta la fecha en que presentaron la petición a la Comisión Interamericana. Afirma además la señora González Rodríguez que carece de documentos para sustentar la petición, ya que le fueron negados, y que la mayoría de las copias que le entregaron las autoridades "no tienen nada que ver con el caso de mi hija y otras, no se aprecia su contenido". Manifiesta por último su disposición de comparecer a la CIDH para sustentar la petición.

B. El Estado

8.En respuesta a la denuncia, el Estado mexicano sostiene primeramente que "el reporte sobre desaparición de personas no fue levantado por la señora Josefina González Rodríguez, sino por la hermana de Claudia Ivette González, de nombre Mayela Banda González. Luego hace referencia a los testimonios como "hecho[s] que supone[n] que las autoridades actuaron con prontitud ante la desaparición de Claudia Ivette González".[1]Sobre el tercero de los párrafos de la petición citados supra, el Estado "ni lo afirma ni lo niega, por ser un argumento de índole subjetivo".

9. La dilación en los resultados de los estudios de ADN, de acuerdo al Estado, "no obedece a ningún tipo de negligencia por parte de la autoridad ministerial local, sino al proceso que dichos peritajes requieren" y que hasta la fecha de dichas observaciones "no se han entregado los resultados, mismos que se harán del conocimiento de la CIDH y de la propia peticionaria". En cuanto al párrafo quinto de la respuesta de los peticionarios, el Estado mexicano se abstiene de responder y "sólo hace alusión al hecho de que ya se ha realizado la necropsia, estudios de craneometría y odontológicos"

10.Además, el Estado sostiene que "en ningún momento y bajo ninguna circunstancia el hecho de entregar el cuerpo de una persona asesinada presupone que le caso haya sido cerrado, lo que tampoco ocurre siquiera cuando se ejercita la acción penal en contra de algún supuesto responsable".[2]Agrega que las autoridades mexicanas "han redoblado esfuerzos con el fin de agotar todas las hipótesis que conlleven a localizar y comprobar la probable responsabilidad de los sujetos activos que dieron muerte a las ocho mujeres víctimas". Considera además el Estado que las investigaciones han sido eficientes en la

medida en que hay siete personas que están compurgando penas y que "en el caso concreto no se ha escatimado en recursos materiales y humanos para resolverlo de igual manera".

11.El Estado mexicano afirma que "en ningún momento se ha minimizado la problemática que viven las mujeres en Ciudad Juárez" sino que por el contrario, se han celebrado reuniones entre las autoridades y representantes de la sociedad civil en las que "se ha estudiado la posibilidad de establecer los mecanismos adecuados que inhiban la gestación de este tipo de lamentables sucesos". El Estado menciona igualmente las acciones que ha llevado adelante el Gobierno del Estado de Chihuahua para atender la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, así como las medidas adoptadas para apoyar el trabajo de la Fiscalía Especial para los Asesinatos de Mujeres en Ciudad Juárez, y la reestructuración de la Unidad de Atención a Víctimas y Personas Desaparecidas "con el fin de optimizar los recursos humanos y eficientar el servicio" (sic).

12.La información antes mencionada, en opinión del Estado, debe tenerse en cuenta para "corrobora[r] la voluntad política del Gobierno mexicano para garantizar el respeto a los derechos humanos de todo individuo". Alega además que debe considerarse el criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de previo agotamiento de recursos internos, regla que "permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional".

13.En suma, el Estado mexicano pide que la Comisión Interamericana valore el esfuerzo realizado por las autoridades para esclarecer las muertes de mujeres en Ciudad Juárez; que "reconozca la transparencia como elemento primordial en las actuaciones ministeriales derivadas de las supuestas irregularidades en la investigación sobre la muerte de Claudia Ivette González"; y que, oportunamente, declare inadmisible la petición "en virtud de que no se cumple con los requisitos establecidos para ello por la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

## IV.ANÁLISIS

### A. Competencia ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci de la Comisión Interamericana

14.Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a quien México se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, México es parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981, fecha en que se depositó el respectivo instrumento de ratificación; es igualmente parte en la Convención de Belém do Pará desde el 12 de noviembre de 1998.Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

15.La CIDH tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana y la Convención de

Belém do Pará que habrían tenido lugar dentro del territorio de México, Estado parte en dicho tratado. Asimismo, la Comisión Interamericana goza de competencia ratione temporis puesto que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana y en la Convención de Belém do Pará ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión es competente ratione materiae, debido a que en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.

16.Con respecto a los alegatos sobre violaciones de la Declaración Americana, en atención a lo dispuesto en los artículos23 y 49 de su Reglamento, la Comisión goza, en principio, de competencia ratione materiae para examinar violaciones de los derechos consagrados por dicha Declaración.[3]Sin embargo, la CIDH ha establecido previamente[4] que una vez que la Convención Americana entra en vigor en relación con un Estado, es dicho instrumento --no la Declaración-- el que pasa a ser la fuente específica del derecho que aplicará la Comisión Interamericana, siempre que en la petición se aleguen violaciones de derechos sustancialmente idénticos consagrados en los dos instrumentos[5] y que no medie una situación de continuidad.[6]

B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

1.Agotamiento de los recursos internos

17.El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana dispone que la admisibilidad de una petición presentada ante la Comisión está sujeta al requisito de "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". El artículo 46(2) de la Convención establece tres supuestos en los que no se aplica la regla del agotamiento de los recursos internos: a) que no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y c) que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

18.Las partes en el presente asunto sostienen una controversia sobre el agotamiento de los recursos internos en México, por lo que corresponde a la Comisión Interamericana pronunciarse al respecto. El Estado sostiene que no se ha cumplido tal requisito convencional; los peticionarios, por su parte, invocan la aplicabilidad de la excepción a dicha regla que se refiere a los casos en que no se les permite el acceso a los recursos internos o se les impide agotarlos.

19.Cuando un Estado alega que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, tiene a su cargo señalar cuáles deben agotarse y demostrar su efectividad.[7]En tal caso, pasa a los peticionarios la carga procesal de demostrar que dichos recursos fueron agotados

o que se configura alguna de las excepciones del artículo 46(2) de la Convención Americana.

20.En el asunto aquí analizado, el Estado mexicano se limita a sostener que no se han agotado los recursos internos y presenta información acerca de acciones adoptadas para atender el problema de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.[8]Menciona igualmente, de manera general, algunas de las diligencias efectuadas en el expediente de Claudia Ivette González, más no presenta información específica que lleve a concluir que el recurso está revestido de la idoneidad y efectividad que requieren los parámetros internacionales en materia de derechos humanos.

21.Sin entrar a analizar los argumentos desarrollados por las partes acerca de la presunta violación de las garantías judiciales y protección judicial, la Comisión Interamericana observa de manera preliminar que, a la fecha de aprobación de este informe, han transcurrido casi tres años y medio desde la fecha en que desapareció Claudia Ivette González y dicho hecho fue denunciado a las autoridades competentes. Conforme a la información disponible a la CIDH, aún luego de haberse localizado sus restos mortales, no se han esclarecido completamente los hechos denunciados ni se ha determinado si hay responsabilidad imputable a funcionarios gubernamentales, como fue denunciado por los peticionarios; y el Estado no ha proporcionado información específica sobre medidas adoptadas o avances en la investigación o procesamiento de presuntos responsables.

22.Asimismo, la Comisión Interamericana observa que los peticionarios alegan que los hechos del presente caso se dan en un contexto de numerosos asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres en Ciudad Juárez, que son seguidas de impunidad por razones imputables a las autoridades.

23.A la luz de todo lo expresado más arriba, y de las constancias del expediente de este asunto, la Comisión Interamericana establece --a efectos de la admisibilidad-- que se ha verificado un retardo injustificado en la decisión de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto a los hechos denunciados. En consecuencia, la CIDH aplica al presente asunto la excepción al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana.

2.Plazo de presentación

24.Con relación al requisito contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención, conforme al cual la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos, la Comisión considera que tampoco resulta exigible el cumplimiento de tal plazo, toda vez que la petición fue presentada dentro del plazo razonable mencionado en el artículo 32(2) de su Reglamento para los casos en los cuales no se ha dictado sentencia firme con anterioridad a la presentación de la petición.

3.Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

25.El expediente de la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se hallase pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente decidido por la Comisión Interamericana. Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones previstas en el artículo 46(1)(d) y en el artículo 47(d) de la Convención Americana.

4.Caracterización de los hechos alegados

26.Los alegatos de los peticionarios se refieren a presuntas violaciones al derecho al debido proceso, a la protección judicial, al reconocimiento de la honra y la dignidad personal y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia garantizados, respectivamente, por la Convención Americana y la Convención de Belém de Pará. Por su parte, el Estado mexicano alega que no se cumplen los requisitos de admisibilidad, en particular invoca la regla de agotamiento de los recursos internos y sostiene que no se ha sustentado la denuncia de irregularidades judiciales.

27.No corresponde establecer en la presente etapa procesal si se violaron efectivamente la Convención Americana u otros instrumentos aplicables. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe determinar si se exponen los hechos que caracterizan una posible violación, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana. El parámetro de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión Interamericana debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención Americana. Este análisis tiene carácter sumario, y no implica prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia. La distinción entre el estudio correspondiente a la declaración sobre la admisibilidad y el requerido para determinar una violación se refleja en el propio Reglamento de la CIDH, que establece de manera claramente diferenciada las etapas de admisibilidad y fondo.

28.Los alegatos de los peticionarios se refieren a hechos que, de ser ciertos, caracterizarían violaciones de varios derechos garantizados por la Convención Americana y por la Convención de Belém do Pará. A pesar de que el Estado alega que no hay violación alguna, la CIDH estima que los hechos expuestos ameritan un examen de manera más precisa y completa de la petición en la etapa de fondo.

29.LaCIDH considera que los hechos, en caso de resultar comprobados, caracterizarían violaciones de los derechos garantizados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1(1) de dicho instrumento.

30.Asimismo, la CIDH considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. El análisis de los alegatos referentes a las presuntas violaciones de los artículos 8 y 9 de la Convención de Belém do Pará dependerán de la conclusión de la CIDH respecto al artículo 7 del citado instrumento en la etapa de fondo.

31.Aunque los peticionarios no hayan invocado el artículo 4 de la Convención Americana, en virtud del principio iura novit curia la Comisión Interamericana admitirá alegatos referentes al derecho a la vida garantizado la Convención Americana, a fin de analizarlos en la etapa de fondo con relación al deber de garantía del artículo 1(1) consagrado en dicho instrumento internacional. En aplicación del mismo principio jurídico, la CIDH considera que los alegatos de hecho referentes al trato que presuntamente habrían recibido la madre y los familiares de Claudia Ivette González por parte de las autoridades mexicanas, podrían caracterizar la violación de los derechos protegidos en los artículos 5 y 11 de la Convención Americana en perjuicio de dichos familiares.

32.En cuanto a los artículos 2 y 7 de la Convención Americana invocados por los peticionarios, la CIDH considera que resultan admisibles, pero con la salvedad de que la determinación en la etapa de fondo sobre ambas disposiciones requerirá de información más clara, completa y detallada de cada una de las partes. Respecto al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, la Comisión Interamericana entiende que en este caso corresponde analizar en la etapa de fondo si el Estado cumplió con su obligación de tomar las medidas necesarias para asegurar la eficacia de los derechos protegidos en la Convención Americana. Particularmente, se analizará en dicha etapa si el Estado adoptó las medidas o políticas necesarias en la época de los hechos.

33.Respecto al derecho garantizado en el artículo 7 de la Convención Americana, dentro del contexto de hechos denunciados en Ciudad Juárez, y ante la falta de esclarecimiento de lo acontecido en este caso, cabe plantearse la posibilidad de que Claudia Ivette González hubiera estado privada de su libertad.

34.En consideración de todo lo anterior, la CIDH concluye que los peticionarios han acreditado prima facie los extremos requeridos en el artículo 47(b) de la Convención Americana.

V.CONCLUSIONES

35.La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1(1) de dicho instrumento; y de los artículos 7, 8 y 9 de la Convención de Belém do Pará.

2.Notificar esta decisión a las partes.

3.Continuar con el análisis de fondo de la cuestión, y

4.Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 24 días del mes de febrero de 2005.(Firmado): Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vicepresidente; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.

[1] El Estado mexicano sostiene:
Por lo que se refiere al contenido del punto segundo, ése se desvirtúa con los testimonios de Juana González Flores, Ana Isabel Juárez Valencia, Aidé Navarrete García, Armando Velazco Fernández, Verónica Hernández Estrada, Efrén Ámese, Juan Antonio Martínez Jacobo, Víctor Hugo Hernández Domínguez y Jesús Moisés Cuellar Juárez, entre los días 12 y 25 de octubre de 2001.
Comunicación del Estado mexicano de 30 de agosto de 2002, pág. 1.
[2] Idem.
[3] Ver igualmente la interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dentro del Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89, 14 de julio de 1989, Corte IDH (Ser. A) Nº 10 (1989), párr. 41.
[4] Ver CIDH, Amílcar Menéndez y otros, supra nota 1, párr. 41.
[5] Opinión Consultiva OC-10/89, supra, párr. 46.
[6] La CIDH ha establecido que tiene competencia para examinar violaciones de la Declaración y de la Convención siempre que se verifique la violación continuada de los derechos protegidos por ambos instrumentos. Ver, por ejemplo, CIDH, Informe Anual 1987-88, Resolución 26/88, Caso 10.190, Argentina; y CIDH, Informe Anual 1998, Informe 38/99, Argentina, párr. 13.
[7] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia sobre excepciones preliminares citada, párr. 88.Ver igualmente, Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párr. 8; Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párr. 90; Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No.12, párr. 38;Caso Neira Alegría y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie C No.13, párr. 30; Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, Serie C No. 24, párr. 40; Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996, Serie C No. 25, párr. 40; Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No.11, párr. 41.

[8] El Estado mexicano ha presentado igualmente información de carácter general sobre la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez en audiencias convocadas para tal efecto, y en informes periódicos remitidos a la CIDH; algunos de ellos contienen menciones al presente caso. Por ejemplo, el "Noveno informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez (agosto – septiembre de 2003, 118º período ordinario de sesiones" contiene una mención en un cuadro del anexo 4.1 "Relación de víctimas con información sobre el proceso de investigación, móvil y en su caso, sentencia". Asimismo, el "Segundo Informe de la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua" de octubre de 2004, alude a este caso en la página 93, como parte del proceso o causa penal 74/04; el mismo informe menciona el caso en la página 105, como parte de la indagatoria PGR/UEDO/176/2003.Cabe destacar que se trata de simples referencias al caso, no de alegatos jurídicos, y que por otra parte no fueron presentados como parte del trámite respectivo.

**INFORME N° 17/05. PETICIÓN 282-02. ADMISIBILIDAD. ESMERALDA HERRERA MONREAL. MÉXICO. 24 DE FEBRERO DE 2005.**

I.RESUMEN

1.El 6 de marzo de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una denuncia en la que se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos ("el Estado") por las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Esmeralda Herrera Monreal, quien desapareció en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, el 29 de octubre de 2001 cuando tenía 15 años de edad; y fue hallada asesinada el 7 de noviembre del mismo año. La petición fue presentada por Irma Monreal, madre de la presunta víctima, y por la "Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana" (en adelante, conjuntamente, "los peticionarios").

2.Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de los artículos 8 (incisos a, c, d y h) y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará"); de los artículos XIV y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ("Declaración Americana").Alegan igualmente que se configura la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana"): obligación de respetar y garantizar todos los derechos (artículo 1); obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2); derecho a la libertad personal (artículo 7); derecho a la protección de la honra y la dignidad (artículo 11) y derecho a la protección judicial (artículo 25); y que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en dicho instrumento internacional. Por su parte, el Estado mexicano sostiene que las actuaciones judiciales en el caso demuestran su voluntad de garantizar el respeto de los derechos humanos de toda persona y que no se han agotado los recursos internos. En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.

3.Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 11, 19 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1(1) del instrumento internacional citado; y de los artículos 7, 8 y 9 de la Convención de Belém do Pará; y decide igualmente publicar el presente informe.

II.TRÁMITE ANTE LA CIDH

4.La petición fue presentada el 6 de marzo de 2002 con una comunicación de la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana. Luego del estudio inicial sobre el

trámite, con base en el artículo 30 de su Reglamento la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado con fecha 29 de mayo de 2002 y fijó el plazo de dos meses para que éste presentara sus observaciones. El 2 de agosto de 2002 el Estado solicitó una prórroga para presentar dichas observaciones, que fue concedida por la Comisión Interamericana hasta el 29 de agosto de 2002.Con fecha 30 de agosto de 2002 se recibió la nota del Estado que contiene las observaciones sobre la petición. Esta información se trasladó a los peticionarios el 23 de septiembre de 2002 con el plazo de un mes para que presentaran sus observaciones.

III.POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD

A. Los peticionarios

5.Los peticionarios imputan responsabilidad al Estado por "irregularidades e inconsistencias" en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior muerte de Esmeralda Herrera Monreal. La señora Irma Monreal manifiesta que tales hechos consisten en lo siguiente:

1.No asumir la pronta búsqueda de mi hija al notificarles su desaparición, dándonos a nosotros la responsabilidad de buscarla;

2.Actuar descalificando a mi hija diciéndome que seguramente se había ido con el novio, cuando yo sabía que no tenía novio.

3.No tomar en cuenta datos ofrecidos por la propia familia para seguir líneas de investigación y para identificar el cuerpo, por ejemplo: no investigaron a un joven que fue él ultimo en tener contacto con ella; e hicieron caso omiso de una fractura en la clavícula, basándose para la identificación del cuerpo de mi hija solamente en unas ropas.

4.Cada vez que acudí a pedir información sobre la búsqueda de mi hija, no me la daban y me mandaban a comprar el periódico para enterarme de las noticias.

5.Al preguntar la causa de la muerte de mi hija el Subprocurador José Manuel Ortega Aceves me dijo que era "indefinida". No me entregaron ningún documento de la autopsia.

6.El cuerpo de mi hija, con solo ocho días de desaparecida, no tenía ni rostro ni cabello, asegurándome en la Judicial que los animales, el viento y la tierra lo habían destrozado. Sin embargo, el resto de su cuerpo estaba desnudo e intacto. Aun más, al momento de ser encontrado, estaba boca abajo.

7.Al pasar el cuerpo al ataúd no permitieron que ningún familiar estuviera presente, diciéndonos que la ley no lo permitía. Sellaron la caja y no nos permitieron abrirla antes de enterrarla.

8.A mí y al papá de Esmeralda nos tomaron pruebas de sangre y cabello para el ADN, asegurándonos que en un mes nos entregarían los resultados. A la fecha no hemos recibido nada.

9.El Subprocurador José Manuel Ortega Aceves me aseguró queriendo convencerme que los dos responsables del asesinato de mi hija ya están en la cárcel, afirmación que no está debidamente comprobada por las autoridades y ante la cual yo tengo serias dudas porque no hay pruebas contundentes que lo aseguren ni lo desmientan.

10.A partir de la entrega del cuerpo de mi hija las autoridades cerraron el caso sin entregarme el expediente ni un solo papel, a pesar de que yo con anterioridad los había solicitado. Hasta hace poco tiempo me entregaron un fólder lleno de hojas sin orden lógico, muchas de ellas repetidas y otras ilegibles, las cuales muestran la falta de seriedad en el seguimiento del caso, y manifiestan la negligencia e irregularidades en las investigaciones.

6.Con base en lo anterior, la señora Monreal considera que las autoridades gubernamentales "no han hecho todo lo que podían hacer para esclarecer la muerte de mi hija" y que "la ineficiencia en las investigaciones demuestra la poca voluntad del gobierno para establecer estos crímenes y prevenirlos". Entre otras medidas de carácter general, solicita que la CIDH establezca la responsabilidad de las autoridades por tales hechos y que "se pronuncie enérgicamente para que termine el clima de impunidad y violación a los derechos humanos [de las mujeres] en el estado de Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez".

7.Respecto al agotamiento de recursos internos, los peticionarios sostienen que se aplica la excepción prevista en el artículo 46(2)(b) de la Convención Americana, ya que el caso permanecía abierto en la jurisdicción interna hasta la fecha en que presentaron la petición a la Comisión Interamericana. Afirma además la señora Monreal que carece de documentos para sustentar la petición, ya que le fueron negados por las autoridades responsables de la investigación. Manifiesta por último su disposición de comparecer a la CIDH para sustentar la petición.

B. El Estado

8.En respuesta a la denuncia, el Estado mexicano sostiene primeramente que "el reporte sobre desaparición de Esmeralda Herrera Monreal se recibió al día siguiente de la fecha en que desapareció, es decir el 30 de octubre de 2001, y que ese mismo día se giró oficio a la Policía Judicial del Estado en el que se ordenó de inmediato proceder a su localización".[1]Sobre el segundo y cuarto párrafo de la petición, citados supra, el Estado "se reserva su derecho de contestar...toda vez que se trata de señalamientos de índole subjetiva".

9.Prosigue el Estado en sus observaciones:

En referencia al punto tres, de acuerdo con los informes de la autoridad ministerial, del análisis de la averiguación previa consta que el 2 de noviembre de 2001 compareció Eduardo Chávez Marín, quien al parecer tuvo contacto con la víctima antes de su desaparición.

Asimismo, por lo que respecta a la apreciación de la peticionaria en el sentido de que las autoridades se basaron únicamente en la ropa para lograr la identificación de Esmeralda Herrera Monreal, el hecho se desvirtúa por el resultado del peritaje realizado el 21 de noviembre de 2001, que consistió en un estudio forense en craneometría y odontología, cuya conclusión estableció una coincidencia en relación óseo facial. (sic)[2]

De igual forma, el 16 de noviembre de 2001 acudieron voluntariamente Adrián Herrera Monreal y Antonio Herrera Rodríguez, hermano y padre de esmeralda, a reconocer el cadáver ante el Ministerio Público, como el de esmeralda Herrera Monreal.

En relación con los puntos quinto y sexto de las partes pertinentes, el Gobierno de México manifiesta que ésos son ciertos ya que, efectivamente, así consta en el certificado de la necropsia del 9 de noviembre de 2001, que emitió la Oficina Técnica de servicios Periciales, que establece la causa de muerte como "indefinida".

Por lo que hace al punto séptimo de las partes pertinentes, el Gobierno de México señala que no conoce con precisión que dicho evento efectivamente haya sucedido, por lo cual se abstiene de responder.

En relación al punto octavo, el Gobierno mexicano desea aclarar que la tardanza en los resultados de la práctica de la diligencia de los estudios de ADN no obedece a ningún tipo de negligencia por parte de la autoridad ministerial local, sino al proceso que dichos peritajes requieren.

Hasta el día de la fecha no se han entregado los resultados, una vez que se encuentren en poder de las autoridades ministeriales locales se harán del conocimiento de la CIDH.

En lo relativo al punto noveno de la comunicación de los peticionarios, el Gobierno de México señala que efectivamente existen dos personas sujetas a proceso por el asesinato de las ocho mujeres encontradas en los operativos de los días 6 y 7 de noviembre de 2001, y será la autoridad judicial la que determine su situación.

Con relación al punto décimo, se afirma que carece de validez ya que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia el hecho de entregar el cuerpo de una persona asesinada presupone que el caso haya sido cerrado, lo que tampoco ocurre siquiera cuando se ejercita la acción penal en contra de algún presunto responsable. [3]

10.Agrega que las autoridades mexicanas "han redoblado esfuerzos con el fin de agotar todas las hipótesis que conlleven a localizar y comprobar la probable responsabilidad de los sujetos activos que dieron muerte a las ocho mujeres víctimas". Considera además el Estado

que “no debe perderse de vista que con relación a este caso, la autoridad logró aprehender a dos sujetos que aparecen como presuntos responsables de los homicidios” y que “actualmente están siendo procesados y se tiene conocimiento que el proceso está en la etapa probatoria”. [4]

11.El Estado mexicano afirma que “en ningún momento se ha minimizado la problemática que viven las mujeres en Ciudad Juárez” sino que por el contrario, se han celebrado reuniones entre las autoridades y representantes de la sociedad civil en las que “se ha estudiado la posibilidad de establecer los mecanismos adecuados que inhiban la gestación de este tipo de lamentables sucesos”. El Estado menciona igualmente las acciones que ha llevado adelante el Gobierno del Estado de Chihuahua para atender la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, así como las medidas adoptadas para apoyar el trabajo de la Fiscalía Especial para los Asesinatos de Mujeres en Ciudad Juárez, y la reestructuración de la Unidad de Atención a Víctimas y Personas Desaparecidas “con el fin de optimizar los recursos humanos y hacer eficiente el servicio”.

12.La información antes mencionada, en opinión del Estado, debe tenerse en cuenta para “corrobora[r] la voluntad política del Gobierno mexicano para garantizar el respeto a los derechos humanos de todo individuo”. Alega además que debe considerarse el criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de previo agotamiento de recursos internos, regla que “permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional”.

13.En suma, el Estado mexicano pide que la Comisión Interamericana valore el esfuerzo realizado por las autoridades para esclarecer las muertes de mujeres en Ciudad Juárez; que “reconozca la transparencia como elemento primordial en las actuaciones ministeriales derivadas de las supuestas irregularidades en la investigación sobre la muerte de Esmeralda Herrera Monreal”; y que, oportunamente, declare inadmisible la petición “en virtud de que no se cumple con los requisitos establecidos para ello por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

## IV.ANÁLISIS

### A. Competencia ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci de la Comisión Interamericana

14.Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a quien México se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, México es parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981, fecha en que se depositó el respectivo instrumento de ratificación; es igualmente parte en la Convención de Belém do Pará desde el 12 de noviembre de 1998.Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

15.La CIDH tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará que habrían tenido lugar dentro del territorio de México, Estado parte en dicho tratado. Asimismo, la Comisión Interamericana goza de competencia ratione temporis puesto que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión es competente ratione materiae, debido a que en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.

16.Con respecto a los alegatos sobre violaciones de la Declaración Americana, en atención a lo dispuesto en los artículos23 y 49 de su Reglamento, la Comisión goza, en principio, de competencia ratione materiae para examinar violaciones de los derechos consagrados por dicha Declaración.[5]Sin embargo, la CIDH ha establecido previamente[6] que una vez que la Convención Americana entra en vigor en relación con un Estado, es dicho instrumento --no la Declaración-- el que pasa a ser la fuente específica del derecho que aplicará la Comisión Interamericana, siempre que en la petición se aleguen violaciones de derechos sustancialmente idénticos consagrados en los dos instrumentos[7] y que no medie una situación de continuidad.[8]

B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

1.Agotamiento de los recursos internos

17.El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana dispone que la admisibilidad de una petición presentada ante la Comisión está sujeta al requisito de "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". El artículo 46(2) de la Convención establece tres supuestos en los que no se aplica la regla del agotamiento de los recursos internos: a) que no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y c) que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

18.Las partes en el presente asunto sostienen una controversia sobre el agotamiento de los recursos internos en México, por lo que corresponde a la Comisión Interamericana pronunciarse al respecto. El Estado sostiene que no se ha cumplido tal requisito convencional; los peticionarios, por su parte, invocan la aplicabilidad de la excepción a dicha regla que se refiere a los casos en que no se les permite el acceso a los recursos internos o se les impide agotarlos.

19.Cuando un Estado alega que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, tiene a su cargo señalar cuáles deben agotarse y demostrar su efectividad.[9]En tal caso,

pasa a los peticionarios la carga procesal de demostrar que dichos recursos fueron agotados o que se configura alguna de las excepciones del artículo 46(2) de la Convención Americana.

20.En el asunto aquí analizado, el Estado mexicano se limita a sostener que no se han agotado los recursos internos y presenta información acerca de acciones adoptadas para atender el problema de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.[10]Menciona igualmente, de manera general, algunas de las diligencias efectuadas en el expediente de Esmeralda Herrera Monreal, más no presenta información específica que lleve a concluir que el recurso está revestido de la idoneidad y efectividad que requieren los parámetros internacionales en materia de derechos humanos.

21.Sin entrar a analizar los argumentos desarrollados por las partes acerca de la presunta violación de las garantías judiciales y protección judicial, la Comisión Interamericana observa de manera preliminar que, a la fecha de aprobación de este informe, han transcurrido casi tres años y medio desde la fecha en que desapareció Esmeralda Herrera Monreal y dicho hecho fue denunciado a las autoridades competentes. Conforme a la información disponible a la CIDH, aún luego de haberse localizado sus restos mortales, no se han esclarecido completamente los hechos denunciados ni se ha determinado si hay responsabilidad imputable a funcionarios gubernamentales, como fue denunciado por los peticionarios.

22.Asimismo, la Comisión Interamericana observa que los peticionarios alegan que los hechos del presente caso se dan en un contexto de numerosos asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres en Ciudad Juárez, que son seguidas de impunidad por razones imputables a las autoridades.

23.A la luz de todo lo expresado más arriba, y de las constancias del expediente de este asunto, la Comisión Interamericana establece --a efectos de la admisibilidad-- que se ha verificado un retardo injustificado en la decisión de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto a los hechos denunciados, y que los recursos internos han resultado ineficaces para solucionar en forma oportuna la situación denunciada. En consecuencia, la CIDH aplica al presente asunto la excepción al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana.

2.Plazo de presentación

24.Con relación al requisito contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención, conforme al cual la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos, la Comisión considera que tampoco resulta exigible el cumplimiento de tal plazo, toda vez que la petición fue presentada dentro del plazo razonable mencionado en el artículo 32(2) de su Reglamento para los casos en los cuales no se ha dictado sentencia firme con anterioridad a la presentación de la petición.

3.Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

25.El expediente de la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se hallase pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente decidido por la Comisión Interamericana. Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones previstas en el artículo 46(1)(d) y en el artículo 47(d) de la Convención Americana.

4.Caracterización de los hechos alegados

26.Los alegatos de los peticionarios se refieren a presuntas violaciones al derecho al debido proceso, a la protección judicial, al reconocimiento de la honra y la dignidad personal y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia garantizados, respectivamente, por la Convención Americana y la Convención de Belém de Pará..Por su parte, el Estado mexicano alega que no se cumplen los requisitos de admisibilidad, en particular invoca la regla de agotamiento de los recursos internos y sostiene que no se ha sustentado la denuncia de irregularidades judiciales.

27.No corresponde establecer en la presente etapa procesal si se violaron efectivamente la Convención Americana u otros instrumentos aplicables. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe determinar si se exponen los hechos que caracterizan una posible violación, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana. El parámetro de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión Interamericana debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención Americana. Este análisis tiene carácter sumario, y no implica prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia. La distinción entre el estudio correspondiente a la declaración sobre la admisibilidad y el requerido para determinar una violación se refleja en el propio Reglamento de la CIDH, que establece de manera claramente diferenciada las etapas de admisibilidad y fondo.

28.Los alegatos de los peticionarios se refieren a hechos que, de ser ciertos, caracterizarían violaciones de varios derechos garantizados por la Convención Americana y por la Convención de Belém do Pará. A pesar de que el Estado alega que no hay violación alguna, la CIDH estima que los hechos expuestos ameritan un examen de manera más precisa y completa de la petición en la etapa de fondo.

29.LaCIDH considera que los hechos, en caso de resultar comprobados, caracterizarían violaciones de los derechos garantizados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1(1) de dicho instrumento.

30.Asimismo, la CIDH considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. El análisis de los alegatos referentes a las presuntas violaciones de los artículos 8 y 9 de la Convención de Belém do

Pará dependerán de la conclusión de la CIDH respecto al artículo 7 del citado instrumento en la etapa de fondo.

31.Aunque los peticionarios no hayan invocado los artículos 4 o 19 de la Convención Americana, en virtud del principio iura novit curia la Comisión Interamericana admitirá alegatos referentes al derecho a la vida garantizado la Convención Americana, a fin de analizarlos en la etapa de fondo con relación al deber de garantía del artículo 1(1) y el deber de protección especial para la niñez consagrados en dicho instrumento internacional. En aplicación del mismo principio jurídico, la CIDH considera que los alegatos de hecho referentes al trato que presuntamente habrían recibido la madre y los familiares de Esmeralda Herrera Monreal por parte de las autoridades mexicanas, podrían caracterizar la violación de los derechos protegidos en los artículos 5 y 11 de la Convención Americana en perjuicio de dichos familiares.

32.En cuanto a los artículos 2 y 7 de la Convención Americana invocados por los peticionarios, la CIDH considera que resultan admisibles, pero con la salvedad de que la determinación en la etapa de fondo sobre ambas disposiciones requerirá de información más clara, completa y detallada de cada una de las partes. Respecto al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, la Comisión Interamericana entiende que en este caso corresponde analizar en la etapa de fondo si el Estado cumplió con su obligación de tomar las medidas necesarias para asegurar la eficacia de los derechos protegidos en la Convención Americana. Particularmente, se analizará en dicha etapa si el Estado adoptó las medidas o políticas necesarias en la época de los hechos.

33.Respecto al derecho garantizado en el artículo 7 de la Convención Americana, dentro del contexto de hechos denunciados en Ciudad Juárez, y ante la falta de esclarecimiento de lo acontecido en este caso, cabe plantearse la posibilidad de que Esmeralda Herrera Monreal hubiera estado privada de su libertad.

34.En consideración de todo lo anterior, la CIDH concluye que los peticionarios han acreditado prima facie los extremos requeridos en el artículo 47(b) de la Convención Americana.

V.CONCLUSIONES

35.La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 11, 19 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1(1) de dicho instrumento; y de los artículos 7, 8 y 9 de la Convención de Belém do Pará.

2.Notificar esta decisión a las partes.

3.Continuar con el análisis de fondo de la cuestión, y

4.Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 24 días del mes de febrero de 2005.(Firmado): Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vicepresidente; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.

[1] Comunicación del Estado mexicano de 30 de agosto de 2002, pág. 1.
[2] Idem.
[3] Idem, págs. 1 y 2.
[4] Idem, pág. 2.
[5] Ver igualmente la interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dentro del Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89, 14 de julio de 1989, Corte IDH (Ser. A) No. 10(1989), párr. 41.
[6] Ver CIDH, Amílcar Menéndez y otros, supra nota 1, párr. 41.
[7] Opinión Consultiva OC-10/89, supra, párr. 46.
[8] La CIDH ha establecido que tiene competencia para examinar violaciones de la Declaración y de la Convención siempre que se verifique la violación continuada de los derechos protegidos por ambos instrumentos. Ver, por ejemplo, CIDH, Informe Anual 1987-88, Resolución 26/88, Caso 10.190, Argentina; y CIDH, Informe Anual 1998, Informe 38/99, Argentina, párr. 13.
[9] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia sobre excepciones preliminares citada, párr. 88.Ver igualmente, Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párr. 8; Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párr. 90; Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No.12, párr. 38;Caso Neira Alegría y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie C No.13, párr. 30; Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, Serie C No. 24, párr. 40; Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996, Serie C No. 25, párr. 40; Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No.11, párr. 41.

[10] El Estado mexicano ha presentado igualmente información de carácter general sobre la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez en audiencias convocadas para tal efecto, y en informes periódicos remitidos a la CIDH; algunos de ellos contienen menciones al presente caso. Por ejemplo, el "Noveno informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez (agosto – septiembre de 2003, 118º período ordinario de sesiones" contiene una mención en un cuadro del anexo 4.1 "Relación de víctimas con información sobre el proceso de investigación, móvil y en su caso, sentencia". Asimismo, el "Segundo Informe de la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua" de octubre de 2004, alude a este caso en la página 93, como parte del proceso o causa penal 74/04; el mismo informe menciona el caso en la página 105, como parte de la indagatoria PGR/UEDO/176/2003.Cabe destacar que se trata de simples referencias al caso, no de alegatos jurídicos, y que por otra parte no fueron presentados como parte del trámite respectivo.

**INFORME N° 18/05. PETICIÓN 283-02. ADMISIBILIDAD. LAURA BERENICE RAMOS MONARREZ. MÉXICO. 24 DE FEBRERO DE 2005.**

I.RESUMEN

1.El 6 de marzo de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una denuncia en la que se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos ("el Estado") por las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Laura Berenice Ramos Monarrez, quien desapareció en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, el 22 de septiembre de 2001 cuando tenía 17 años de edad; y cuyo cuerpo habría sido hallado entre el 6 y el 7 de noviembre del mismo año. La petición fue presentada por Benita Monarrez Salgado, madre de la presunta víctima, y por la "Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana" (en adelante, conjuntamente, "los peticionarios").

2.Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de los artículos 8 (incisos a, c, d y h) y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará"); de los artículos XIV y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ("Declaración Americana").Alegan igualmente que se configura la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana"): obligación de respetar y garantizar todos los derechos (artículo 1); obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2); derecho a la libertad personal (artículo 7); derecho a la protección de la honra y la dignidad (artículo 11) y derecho a la protección judicial (artículo 25); y que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en dicho instrumento internacional. Por su parte, el Estado mexicano sostiene que las actuaciones judiciales en el caso demuestran su voluntad de garantizar el respeto de los derechos humanos de toda persona y que no se han agotado los recursos internos. En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.

3.Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 11, 19 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1(1) del instrumento internacional citado; y de los artículos 7, 8 y 9 de la Convención de Belém do Pará; y decide igualmente publicar el presente informe.

II.TRÁMITE ANTE LA CIDH

4.La petición fue presentada el 6 de marzo de 2002 con una comunicación de la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana. Luego del estudio inicial sobre el trámite, con base en el artículo 30 de su Reglamento la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado con fecha 29 de mayo de 2002 y fijó el plazo de dos meses para que éste presentara sus observaciones. El 2 de agosto de 2002 el Estado solicitó una prórroga para presentar dichas observaciones, que fue concedida por la Comisión Interamericana hasta el 29 de agosto de 2002.Con fecha 30 de agosto de 2002 se recibió la nota del Estado que contiene las observaciones sobre la petición. Esta información se trasladó a los peticionarios el 23 de septiembre de 2002 con el plazo de un mes para que presentaran sus observaciones. No hubo comunicaciones posteriores de las partes.

III.POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD

A. Los peticionarios

5.Los peticionarios imputan responsabilidad al Estado por "irregularidades e inconsistencias" en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior muerte de Laura Berenice Ramos Monarrez. La señora Benita Monarrez Salgado explica que se habían hallado cuatro cadáveres los días 6 y 7 de noviembre de 2001 en Ciudad Juárez, y que las autoridades le manifestaron que uno de ellos era el de su hija. En las palabras de la señora Ramos Monarrez, las irregularidades en que incurrieron las autoridades consistieron en lo siguiente:

1.Asegurarme que uno de los ocho cuerpos encontrados el 6 y 7 de noviembre del año 2001 es el de mi hija Laura Berenice, impidiéndome a mí y a mi familia reconocer e identificar el cuerpo hasta la fecha, alegando "que me estaban protegiendo". Del mismo modo no me han mostrado fotografías del levantamiento del cuerpo que afirman es el de mi hija.
2.Me tomaron muestras para hacer la prueba del ADN. Afirmaron que iban a darle prioridad a mi caso y que el resultado lo tendríamos de uno a tres meses. Hasta el día de hoy, 6 de marzo del 2002, no hay todavía ninguna respuesta, aduciendo que no hay reactivos en el Distrito Federal. Sin embargo mi familia y yo hemos ofrecido en muchas ocasiones realizar esta prueba con recursos propios y en laboratorios de primer nivel en Estados Unidos, a lo cual hemos recibido una negativa rotunda por parte de la Subprocuraduría General de Justicia, Zona Norte, sin un motivo justificado obstruyendo el proceso de averiguación previa sobre el asunto de mi hija. Acudí innumerables veces a ver al anterior Subprocurador José Manuel Ortega Aceves sin ser recibida, y el día que me recibió me dijo "que siguiera esperando".
3.He llevado datos precisos que podrían servir como líneas de investigación y no han sido tomados en cuenta, como haber dado el nombre del agente judicial Esteban Ramos, con quien mi hija salió algunas veces, y no lo han investigado. Del mismo modo les informe que el teléfono celular que traía mi hija continua recibiendo llamadas, las cuales, al ser contestadas, se corta la comunicación.
4.Ser tratada de manera humillante, indigna y prepotente por parte de los elementos de la Judicial. El agente Miramontes, asignado a este caso, después de un rastreo que hicimos el día 24 de febrero, en el que se encontró una prenda que podría ser de mi hija, al pedirle

información sobre el lugar donde fue encontrado el posible cuerpo de mi hija, se burlo, me grito y me dijo "señora, ya deje de polemizar, o ¿acaso su búsqueda es por remordimiento?".Demostrando con esto su falta de sensibilidad y de respeto ante mi dolor y desesperación.
5.He insistido varias veces en que me proporcionen una copia del expediente y lo único que he recibido es la copia del acta de desaparición, documento plagado de irregularidades y falsedades.
6.Como último trámite acudí el día 6 de marzo de 2002 ante la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, Zona Norte a reconocer el cuerpo de mi hija y me recibió la nueva Fiscal Especial de Delitos contra las Mujeres, la Lic. Liliana Herrera López quién me dijo que no es posible ver el cuerpo para reconocerlo ya que lo único que se encuentran son los restos óseos debido a que por motivo de unos estudios le fue retirada la piel, esto sin autorización de mi parte en el supuesto de que fuese mi hija.

6.Con base en lo anterior, la señora Monarrez Salgado considera que las autoridades gubernamentales "no han hecho todo lo que podían hacer para esclarecer la desaparición y posible muerte de mi hija" y que "la ineficiencia en las investigaciones demuestra la poca voluntad del gobierno para establecer estas violaciones a los derechos humanos y prevenirlas". Entre otras medidas de carácter general, solicita que la CIDH establezca la responsabilidad de las autoridades por tales hechos y que "se pronuncie enérgicamente para que termine el clima de impunidad y violación a los derechos humanos [de las mujeres] en el estado de Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez".

7.Respecto al agotamiento de recursos internos, los peticionarios sostienen que se aplica la excepción prevista en el artículo 46(2)(b) de la Convención Americana, ya que hasta la fecha en que presentaron la petición a la Comisión Interamericana, el caso permanecía abierto en la jurisdicción interna en una etapa inicial sin avance alguno. Afirma además la señora Monarrez Salgado que carece de documentos para sustentar la petición, ya que le fueron negados por las autoridades responsables de la investigación. Manifiesta por último su disposición de comparecer a la CIDH para sustentar la petición.

B. El Estado

8.En respuesta a la denuncia, el Estado mexicano sostiene primeramente que "los días 6 y 7 de noviembre de 2001, en efecto, se llevó a cabo un operativo en el que fueron encontrados 8 cuerpos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua".[1]Prosigue el Estado:

Debido al clima de violencia que impera en esa ciudad, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJ) determinó someter los cuerpos encontrados a exámenes minuciosos para conocer la causa de muerte y su identidad.

En enero de 2002, dichos exámenes, apoyados en peritajes de craneometría y odontología, permitieron conocer que la identidad de uno de ellos corresponde a quien en vida respondía al nombre de Laura Berenice Ramos.

El 22 de marzo, 16 días después de que la peticionaria presentara su inconformidad, se le permitió el acceso al cadáver a fin de que corroborara que efectivamente correspondía al de Laura Berenice Ramos. En ese acto la señora Benita Ramos Monarrez y el señor Pablo Monarrez Salgado, madre y tío de la víctima respectivamente, confirmaron que el cadáver pertenecía [a] Laura Berenice Ramos.

En relación con lo argumentado por la peticionaria en el punto segundo de las partes pertinentes, el Gobierno de México desea aclarar que la tardanza en los resultados de la práctica de la diligencia sobre los estudios de ADN no obedece a ningún tipo de negligencia por parte de la autoridad ministerial local, sino al proceso que dichos peritajes requieren. Hasta el día de hoy, no han sido entregados los resultados, Una vez que se encuentren en poder de las autoridades ministeriales locales, se harán de conocimiento de la CIDH.
Con respecto al tercer punto, según información de la autoridad ministerial local, de manera oportuna se le hizo saber a la peticionaria que la forma en que pretendía hacer valer las pruebas de ADN no se apegaba a la normatividad.

El Gobierno de México se reserva su derecho de contestar los puntos tres y cuatro, toda vez que se trata de señalamientos de índole subjetiva....

Por otra parte y en referencia a lo que establece la peticionaria en el punto cuarto de las partes pertinentes, según informes de la autoridad ministerial local, del análisis de la averiguación previa no se desprende la "existencia de una persona susceptible de estar relacionada con la desaparición de su hija Laura Berenice".

Por otra parte, extraña al Gobierno de México el señalamiento de la peticionaria en el sentido que no le fueron entregadas copias de las actuaciones, ya que la autoridad ministerial estatal argumenta haberlas entregado en enero.

Con referencia al punto siete, es cierto que no se le permitió el acceso al cuerpo en virtud de que las investigaciones no habían concluido; sin embargo, el 22 de marzo, como ya se dijo en el primer punto, una vez que se obtuvieron los resultados de los diversos peritajes, se le permitió el acceso.[2]

9.Agrega que las autoridades mexicanas "han redoblado esfuerzos con el fin de agotar todas las hipótesis que conlleven a localizar y comprobar la probable responsabilidad de los sujetos activos que dieron muerte a las ocho mujeres víctimas". Considera además el Estado que "no debe perderse de vista que con relación a este caso, la autoridad logró aprehender a dos sujetos que aparecen como presuntos responsables de los homicidios" y que "actualmente están siendo procesados y se tiene conocimiento que el proceso está en la etapa probatoria".[3]Hasta la fecha de adopción del presente informe, el Estado no presentó información más específica o actualizada al respecto.

10.El Estado mexicano afirma que "en ningún momento se ha minimizado la problemática que viven las mujeres en Ciudad Juárez" sino que por el contrario, se han celebrado reuniones entre las autoridades y representantes de la sociedad civil en las que "se ha

estudiado la posibilidad de establecer los mecanismos adecuados que inhiban la gestación de este tipo de lamentables sucesos". El Estado menciona igualmente las acciones que ha llevado adelante el Gobierno del Estado de Chihuahua para atender la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, así como las medidas adoptadas para apoyar el trabajo de la Fiscalía Especial para los Asesinatos de Mujeres en Ciudad Juárez, y la reestructuración de la Unidad de Atención a Víctimas y Personas Desaparecidas "con el fin de optimizar los recursos humanos y eficientar el servicio" (sic).

11.La información antes mencionada, en opinión del Estado, debe tenerse en cuenta para "corrobora[r] la voluntad política del Gobierno mexicano para garantizar el respeto a los derechos humanos de todo individuo". Alega además que debe considerarse el criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de previo agotamiento de recursos internos, regla que "permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional".

12.En suma, el Estado mexicano pide que la Comisión Interamericana valore el esfuerzo realizado por las autoridades para esclarecer las muertes de mujeres en Ciudad Juárez; que "reconozca la transparencia como elemento primordial en las actuaciones ministeriales derivadas de las supuestas irregularidades en la investigación sobre la muerte de Laura Berenice Ramos Monarrez"; y que, oportunamente, declare inadmisible la petición "en virtud de que no se cumple con los requisitos establecidos para ello por la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

## IV.ANÁLISIS

### A. Competencia ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci de la Comisión Interamericana

13.Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a quien México se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, México es parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981, fecha en que se depositó el respectivo instrumento de ratificación; es igualmente parte en la Convención de Belém do Pará desde el 12 de noviembre de 1998.Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

14.La CIDH tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará que habrían tenido lugar dentro del territorio de México, Estado parte en dicho tratado. Asimismo, la Comisión Interamericana goza de competencia ratione temporis puesto que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana y en la Convención de Belém do Pará ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión es competente ratione materiae, debido a que en la petición se

denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.

15.Con respecto a los alegatos sobre violaciones de la Declaración Americana, en atención a lo dispuesto en los artículos23 y 49 de su Reglamento, la Comisión goza, en principio, de competencia ratione materiae para examinar violaciones de los derechos consagrados por dicha Declaración.[4]Sin embargo, la CIDH ha establecido previamente[5] que una vez que la Convención Americana entra en vigor en relación con un Estado, es dicho instrumento --no la Declaración-- el que pasa a ser la fuente específica del derecho que aplicará la Comisión Interamericana, siempre que en la petición se aleguen violaciones de derechos sustancialmente idénticos consagrados en los dos instrumentos[6] y que no medie una situación de continuidad.[7]

B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

1.Agotamiento de los recursos internos

16.El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana dispone que la admisibilidad de una petición presentada ante la Comisión está sujeta al requisito de "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". El artículo 46(2) de la Convención establece tres supuestos en los que no se aplica la regla del agotamiento de los recursos internos: a) que no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y c) que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

17.Las partes en el presente asunto sostienen una controversia sobre el agotamiento de los recursos internos en México, por lo que corresponde a la Comisión Interamericana pronunciarse al respecto. El Estado sostiene que no se ha cumplido tal requisito convencional; los peticionarios, por su parte, invocan la aplicabilidad de la excepción a dicha regla que se refiere a los casos en que no se les permite el acceso a los recursos internos o se les impide agotarlos.

18.Cuando un Estado alega que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, tiene a su cargo señalar cuáles deben agotarse y demostrar su efectividad.[8]En tal caso, pasa a los peticionarios la carga procesal de demostrar que dichos recursos fueron agotados o que se configura alguna de las excepciones del artículo 46(2) de la Convención Americana.

19.En el asunto aquí analizado, el Estado mexicano se limita a sostener que no se han agotado los recursos internos y presenta información acerca de acciones adoptadas para atender el problema de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.[9]Menciona igualmente, de manera general, algunas de las diligencias efectuadas en el expediente de

Laura Berenice Ramos Monarrez, más no presenta información específica que lleve a concluir que el recurso está revestido de la idoneidad y efectividad que requieren los parámetros internacionales en materia de derechos humanos.

20.Sin entrar a analizar los argumentos desarrollados por las partes acerca de la presunta violación de las garantías judiciales y protección judicial, la Comisión Interamericana observa de manera preliminar que, a la fecha de aprobación de este informe, han transcurrido casi tres años y medio desde la fecha en que desapareció Laura Berenice Ramos Monarrez y dicho hecho fue denunciado a las autoridades competentes. Conforme a la información disponible a la CIDH, la familia de Laura Berenice Ramos Monarrez considera que aún no se ha confirmado que los restos encontrados correspondan a ésta; no se han esclarecido los hechos denunciados ni se ha determinado si hay responsabilidad imputable a funcionarios gubernamentales, como fue denunciado por los peticionarios; y el Estado no ha proporcionado información específica sobre medidas adoptadas o avances en la investigación o procesamiento de presuntos responsables.

21.Asimismo, la Comisión Interamericana observa que los peticionarios alegan que los hechos del presente caso se dan en un contexto de numerosos asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres en Ciudad Juárez, que son seguidas de impunidad por razones imputables a las autoridades.

22.A la luz de todo lo expresado más arriba, y de las constancias del expediente de este asunto, la Comisión Interamericana establece --a efectos de la admisibilidad-- que se ha verificado un retardo injustificado en la decisión de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto a los hechos denunciados, y que los recursos internos han resultado ineficaces para solucionar en forma oportuna la situación denunciada. En consecuencia, la CIDH aplica al presente asunto la excepción al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana.

2.Plazo de presentación

23.Con relación al requisito contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención, conforme al cual la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos, la Comisión considera que tampoco resulta exigible el cumplimiento de tal plazo, toda vez que la petición fue presentada dentro del plazo razonable mencionado en el artículo 32(2) de su Reglamento para los casos en los cuales no se ha dictado sentencia firme con anterioridad a la presentación de la petición.

3.Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

24.El expediente de la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se hallase pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente decidido por la Comisión Interamericana. Por

lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones previstas en el artículo 46(1)(d) y en el artículo 47(d) de la Convención Americana.

4.Caracterización de los hechos alegados

25.Los alegatos de los peticionarios se refieren a presuntas violaciones al derecho al debido proceso, a la protección judicial, al reconocimiento de la honra y la dignidad personal y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia garantizados, respectivamente, por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. Por su parte, el Estado mexicano alega que no se cumplen los requisitos de admisibilidad, en particular invoca la regla de agotamiento de los recursos internos y sostiene que no se ha sustentado la denuncia de irregularidades judiciales.

26.No corresponde establecer en la presente etapa procesal si se violaron efectivamente la Convención Americana u otros instrumentos aplicables. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe determinar si se exponen los hechos que caracterizan una posible violación, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana. El parámetro de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión Interamericana debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención Americana. Este análisis tiene carácter sumario, y no implica prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia. La distinción entre el estudio correspondiente a la declaración sobre la admisibilidad y el requerido para determinar una violación se refleja en el propio Reglamento de la CIDH, que establece de manera claramente diferenciada las etapas de admisibilidad y fondo.

27.Los alegatos de los peticionarios se refieren a hechos que, de ser ciertos, caracterizarían violaciones de varios derechos garantizados por la Convención Americana y por la Convención de Belém do Pará. A pesar de que el Estado alega que no hay violación alguna, la CIDH estima que los hechos expuestos ameritan un examen de manera más precisa y completa de la petición en la etapa de fondo.

28.LaCIDH considera que los hechos, en caso de resultar comprobados, caracterizarían violaciones de los derechos garantizados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1(1) de dicho instrumento.

29.Asimismo, la CIDH considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. El análisis de los alegatos referentes a las presuntas violaciones de los artículos 8 y 9 de la Convención de Belém do Pará dependerán de la conclusión de la CIDH respecto al artículo 7 del citado instrumento en la etapa de fondo.

30.Aunque los peticionarios no hayan invocado los artículos 4 o 19 de la Convención Americana, en virtud del principio iura novit curia la Comisión Interamericana admitirá alegatos referentes al derecho a la vida garantizado la Convención Americana, a fin de

analizarlos en la etapa de fondo con relación al deber de garantía del artículo 1(1) y el deber de protección especial para la niñez consagrados en dicho instrumento internacional. En aplicación del mismo principio jurídico, la CIDH considera que los alegatos de hecho referentes al trato que presuntamente habrían recibido la madre y los familiares de Laura Berenice Ramos Monarrez por parte de las autoridades mexicanas, podrían caracterizar la violación de los derechos protegidos en los artículos 5 y 11 de la Convención Americana en perjuicio de dichos familiares.

31.En cuanto a los artículos 2 y 7 de la Convención Americana invocados por los peticionarios, la CIDH considera que resultan admisibles, pero con la salvedad de que la determinación en la etapa de fondo sobre ambas disposiciones requerirá de información más clara, completa y detallada de cada una de las partes. Respecto al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, la Comisión Interamericana entiende que en este caso corresponde analizar en la etapa de fondo si el Estado cumplió con su obligación de tomar las medidas necesarias para asegurar la eficacia de los derechos protegidos en la Convención Americana. Particularmente, se analizará en dicha etapa si el Estado adoptó las medidas o políticas necesarias en la época de los hechos.

32.Respecto al derecho garantizado en el artículo 7 de la Convención Americana, la CIDH observa que los peticionarios sugirieron que se investigara a un agente de la policía judicial que salía con su hija. Dentro del contexto de hechos denunciados en Ciudad Juárez, y ante la falta de esclarecimiento de lo acontecido en este caso, cabe plantearse la posibilidad de que Laura Berenice Ramos Monarrez hubiera estado privada de su libertad.

33.En consideración de todo lo anterior, la CIDH concluye que los peticionarios han acreditado prima facie los extremos requeridos en el artículo 47(b) de la Convención Americana.

V.CONCLUSIONES

34.La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 11, 19 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1(1) de dicho instrumento; y de los artículos 7, 8 y 9 de la Convención de Belém do Pará.

2.Notificar esta decisión a las partes.

3.Continuar con el análisis de fondo de la cuestión, y

4.Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 24 días del mes de febrero de 2005.(Firmado): Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vicepresidente; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.

[1] Comunicación del Estado mexicano de 30 de agosto de 2002, pág. 1.
[2] Idem.
[3] Idem, pág. 2.
[4] Ver igualmente la interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dentro del Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89, 14 de julio de 1989, Corte IDH (Ser. A) No. 10(1989), párr. 41.
[5] Ver CIDH, Amílcar Menéndez y otros, supra nota 1, párr. 41.
[6] Opinión Consultiva OC-10/89, supra, párr. 46.
[7] La CIDH ha establecido que tiene competencia para examinar violaciones de la Declaración y de la Convención siempre que se verifique la violación continuada de los derechos protegidos por ambos instrumentos. Ver, por ejemplo, CIDH, Informe Anual 1987-88, Resolución 26/88, Caso 10.190, Argentina; y CIDH, Informe Anual 1998, Informe 38/99, Argentina, párr. 13.
[8] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia sobre excepciones preliminares citada, párr. 88.Ver igualmente, Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párr. 8; Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párr. 90; Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No.12, párr. 38;Caso Neira Alegría y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie C No.13, párr. 30; Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, Serie C No. 24, párr. 40; Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996, Serie C No. 25, párr. 40; Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No.11, párr. 41.
[9] El Estado mexicano ha presentado igualmente información de carácter general sobre la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez en audiencias convocadas para tal efecto, y en informes periódicos remitidos a la CIDH; algunos de ellos contienen menciones al presente caso. Por ejemplo, el "Noveno informe del Gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez (agosto – septiembre de 2003, 118º período ordinario de sesiones" contiene una mención en un cuadro del anexo 4.1 "Relación de víctimas con información sobre el

proceso de investigación, móvil y en su caso, sentencia". Asimismo, el "Segundo Informe de la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua" de octubre de 2004, alude a este caso en la página 93, como parte del proceso o causa penal 74/04; el mismo informe menciona el caso en la página 105, como parte de la indagatoria PGR/UEDO/176/2003.Cabe destacar que se trata de simples referencias al caso, no de alegatos jurídicos, y que por otra parte no fueron presentados como parte del trámite respectivo.

**INFORME Nº 92/06. PETICIÓN 95-04. ADMISIBILIDAD. MARÍA ISABEL VÉLIZ FRANCO. GUATEMALA. 21 DE OCTUBRE DE 2006.**

I.RESUMEN

1.El 26 de enero de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo "Comisión Interamericana", "Comisión" o "CIDH") recibió una denuncia en la que se alega la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala ("El Estado") por los vacíos e irregularidades en la investigación de la muerte de María Isabel Véliz Franco, de 15 años de edad, quien desapareció el 17 de diciembre de 2001 en Ciudad Guatemala y fue hallada muerta al día siguiente. La petición fue presentada por Rosa Elvira Franco Sandoval de Véliz (en adelante, "la peticionaria"), madre de la presunta víctima, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red de No Violencia Contra las Mujeres en Guatemala (en adelante, conjuntamente "los peticionarios").

2.Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana"):el Derecho a la Vida (artículo 4), Integridad Personal (artículo 5), Derecho a la Libertad Personal (artículo 7), Garantías Judiciales (artículo 8), Protección de la Honra y de la Dignidad (artículo 11), Derechos del Niño (artículo 19), Igualdad ante la Ley (artículo 24) y Protección Judicial (artículo 25); así como el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", todo ello en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana. Alegan con respecto a Rosa Elvira Franco Sandoval de Véliz se configura la violación del derecho a de integridad personal (artículo 5) y su protección de la honra y de la dignidad (artículo 11).El Estado de Guatemala, por su parte, sostiene que la investigación del caso continúa en trámite y manifiesta su interés por esclarecer los asesinatos de mujeres ocurridos en los últimos años en Guatemala a consecuencia de la violencia generada en contra de las mujeres.

3.Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los derechos de Maria Isabel Véliz Franco bajo los artículos 4, 8.1, 11, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, así como la presunta violación al artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", y los artículos 5.1, 8.1, 11 y 25 en lo que respecta a Rosa Elvira Franco Sandoval de Véliz, todo ello en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana. La Comisión decide además, publicar el presente informe en el Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4.La petición fue presentada el 26 de enero de 2004.Luego del estudio inicial sobre el trámite, con base en el artículo 30.2 de su Reglamento, la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado el 24 de septiembre de 2004, y fijó el plazo de dos meses para que éste presentara sus observaciones. El 19 de noviembre de 2004 el Estado solicitó una prórroga de 30 días para presentar sus observaciones sobre la petición. La CIDH concedió la prórroga solicitada de 30 días, contados a partir del 14 de diciembre de 2004, fecha en la que se le comunicó al Estado de la concesión de la prórroga. Con fecha de 16 de diciembre de 2004, se recibió la nota del Estado que contiene las observaciones sobre la petición, la cual fue trasladada a la peticionaria, quien a su vez presentó sus observaciones el 22 de enero de 2005.

5.El 21 de febrero de 2005 la peticionaria aportó información adicional. El 24 de febrero de 2005, la CIDH trasladó al Estado las partes pertinentes de las observaciones de la peticionaria, así como la información adicional recibida, y fijó el plazo de un mes para presentar sus observaciones ante la CIDH. El 12 de abril de 2005, el Estado presentó a la CIDH un informe con observaciones adicionales sobre las comunicaciones de la peticionaria. El 21 de abril de 2005 se trasladó a la peticionaria el informe del Estado, otorgándole un plazo de un mes para que presentara sus observaciones. El 27 de mayo de 2005 la peticionaria presentó observaciones adicionales sobre la petición. El 20 de junio de 2005 la CIDH trasladó al Estado esta información, otorgándole un mes de plazo para que presentara sus observaciones.

6.El 5 de septiembre de 2005, la CIDH fue informada que a partir de dicha fecha la peticionaria sería representada en adelante por CEJIL. Igualmente, el 25 de enero de 2006, CEJIL informó a la CIDH que la Red de No Violencia contra las Mujeres en Guatemala se incorporaba en calidad de peticionaria y los peticionarios presentaron observaciones adicionales sobre la petición, la cual fue trasladada al Estado el 27 de enero de 2006, otorgándole un plazo de 20 días para presentar observaciones correspondientes. El 14 de febrero de 2006, el Estado presentó a la CIDH una solicitud de prórroga de 30 días, la cual fue concedida por la CIDH.

7.El 24 de marzo de 2006, el Estado envió observaciones adicionales sobre la petición, las cuales fueron trasladadas a los peticionarios el 7 de abril de 2006.El 1º de mayo de 2006, los peticionarios respondieron a las observaciones adicionales presentadas por el Estado. El 24 de mayo de 2006, el Estado presentó observaciones adicionales sobre esta petición, las cuales fueron trasladadas a los peticionarios el 2 de junio de 2006.Mediante comunicación de fecha 13 de julio de 2006, el Estado presentó a la CIDH información adicional, la misma que fue trasladada a los peticionarios el 3 de agosto de 2006.

A. Solicitud de Medidas Cautelares

8.El 27 de junio de 2005 la peticionaria solicitó a la CIDH el otorgamiento de medidas cautelares de protección a favor suyo y de su familia, alegando sentir temor por su vida e integridad personal tanto la de ella como la de su familia por ser víctimas de asedio,

hostigamiento, persecución y amenazas constantes y permanentes de personas desconocidas y armadas. El 16 de noviembre de 2005 la Comisión decidió otorgar medidas cautelares con una vigencia de 6 meses a favor de Rosa Elvira Franco Sandoval, Leonel Enrique Véliz Franco, José Roberto Franco Sandoval y Cruz Elvira Sandoval Polanco. En relación a la vigencia de las medidas cautelares, el 4 de agosto de 2006 la CIDH recibió una comunicación del Estado la cual concluye "en tanto el Estado no esclarezca el presente caso, las condiciones de riesgo, vulnerabilidad y extrema urgencia se mantienen, por lo que se requiere a la CIDH un plazo razonable, para informar sobre los avances en la investigación y cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales de protección a los derechos humanos." Dicha comunicación fue transmitida a los peticionarios el 8 de agosto de 2006 otorgándose un plazo de 30 días para presentar sus observaciones.

## III.POSICIONES DE LAS PARTES

### A. Los peticionarios

9.Los peticionarios imputan responsabilidad al Estado por vacíos e irregularidades en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior muerte de Maria Isabel Véliz Franco, de 15 años de edad. Aducen que el 17 de diciembre de 2001 la señora Rosa Elvira Franco Sandoval de Véliz denunció ante la Policía Nacional Civil (en adelante PNC) la desaparición de su hija María Isabel Véliz Franco, cuyo cuerpo fue encontrado el día siguiente. Los peticionarios alegan que, a partir del momento de la denuncia, las autoridades guatemaltecas por acción u omisión han incurrido en serias violaciones al debido proceso que han dado como resultado la ineficacia en la investigación. Añaden que, desde el inicio de la investigación, los agentes estatales responsables en vez de proceder a investigar los hechos, se han enfocado en desacreditar a la víctima y a su madre. Asimismo, en el caso de Rosa Elvira Franco Sandoval de Véliz, los peticionarios alegan que su integridad ha sido vulnerada por el doloroso proceso de la pérdida de su hija y la frustrante lucha por instar al Estado durante cuatro años para que agilice el proceso de investigación de su muerte.

10.Se alega que el 18 de diciembre de 2001, la PNC recibió una llamada de un informante anónimo que indicó que, en la noche del 17 de diciembre, una mujer descendió de un carro, depositó un costal en un lote baldío ubicado en el municipio de Mixco, cerca de Ciudad de Guatemala y el carro se dirigió a una vivienda en esa misma localidad. De inmediato, la PNC se trasladó al lugar reportado y encontró el costal, dentro del cual se encontraba el cuerpo sin vida de María Isabel Véliz Franco. Los peticionarios sostienen que las autoridades no dieron el debido seguimiento a esta llamada, puesto que, por ejemplo, nunca buscaron el automóvil descrito por el informante anónimo.

11.El 19 de diciembre de 2001, un grupo de especialistas recolectó evidencias en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la niña, que fueron enviadas al laboratorio del Departamento Técnico Científico del Ministerio Público. Según los peticionarios, la certificación médica de defunción expedida el 18 de diciembre de 2001 calificó la muerte

de María Isabel Véliz Franco como un homicidio. A pesar de ello, señalan los peticionarios que no se hicieron pruebas forenses al cadáver de la presunta víctima que pudieran haber ayudado a esclarecer los hechos. Los peticionarios aducen que no se hizo un análisis completo de las evidencias y que nunca se llevaron a cabo las siguientes pruebas: a) cotejo de elementos pilosos encontrados en el cadáver; b) cotejo de la sangre encontrada en la escena del crimen (según el examen de hematología era tipo B y AB y Maria Isabel Véliz Franco era tipo A); c) vello púbico; d) hisopado bucal, vaginal y anal; e) raspado de uñas; y f) análisis de dos toallas encontradas en la escena del crimen.

12.El 14 de enero de 2002, Rosa Elvira Franco Sandoval de Véliz, madre de la presunta víctima, declaró ante el Ministerio Público, sobre personas cercanas a su hija y solicitó que se rastrearan las llamadas entrantes y salientes del celular de su hija. En vista de que el Ministerio Público no atendió su solicitud, por su propia iniciativa la señora Franco obtuvo de la compañía de servicios celulares información sobre las llamadas salientes del celular de su hija. A pesar de que no pudo obtener el registro de llamadas entrantes, remitió al Ministerio Público la información obtenida el 30 de enero de 2002 y les solicitó por escrito con fecha 1º de febrero de 2002, así como en varias ocasiones posteriores, que se agilice la investigación. Los peticionarios alegan que recién el 4 de septiembre de 2002 se remitió el desplegado de las llamadas hechas del celular de la niña a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público para que investigara a los propietarios de los teléfonos contenidos en el informe.

13.Según la información proporcionada por los peticionarios, el Ministerio Público emitió un informe el 20 de febrero de 2002 con los "resultados de las diligencias preliminares de la investigación de María Isabel Véliz Franco" en el cual se incluyen calificaciones despectivas en su contra, como por ejemplo, se describe que el alias de la menor era "la loca".[1] Aducen que el informe concluye que la presunta víctima era una muchacha libertina, involucrada con maras, frecuentaba discotecas, tenía muchos novios, usaba ropa provocativa y consumía drogas. Asimismo que María Isabel vestía de manera provocativa y que su forma de vestir y sus pertenencias no concordaban con su capacidad económica.[2]El informe también indica que la madre de la víctima era negligente en la supervisión de su hija. Asimismo, señalan los peticionarios que las autoridades le han comunicado a la señora Rosa Elvira Franco Sandoval de Véliz que su hija era una "cualquiera".[3]

14.El informe de febrero de 2002 también señala como principal sospechoso al señor Osbel Airosa Hernández, de nacionalidad cubana, con quien la presunta víctima habría salido el día de su desaparición. El 15 de abril del 2002, el señor Osbel Airosa Hernández rindió su declaración ante el Ministerio Público, pero cuando se lo citó nuevamente en reiteradas ocasiones, entre octubre de 2003 y marzo de 2004, 7 meses después desde la primera declaración, éste no compareció. Según las alegaciones de los peticionarios, el Estado fue extremadamente negligente en cuanto a la identificación y localización de este principal sospechoso, ya que en septiembre de 2004, el Ministerio Público fue informado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala que el señor Osbel Airosa nunca había trabajado en dicha entidad y recién en febrero de 2005 se ordenó al Servicio de

Investigación Criminal la plena identificación y ubicación del señor Osbel Airosa Hernández.

15.Los peticionarios alegan también que la investigación del caso se retrasó injustificadamente debido a un conflicto de competencia. Al respecto, indican que el 11 de marzo de 2002 el Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Departamento de Guatemala se declaró incompetente para conocer el caso en virtud de que el supuesto homicidio ocurrió en la jurisdicción del municipio de Mixco, que pertenece a la Agencia Fiscal No. 5. Por ello, el 24 de mayo del 2002, el caso pasó de la Agencia Fiscal No. 32 a la Agencia Fiscal No. 5. Por su parte, el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mixco declaró su incompetencia para conocer los hechos porque se presumía que el delito ocurrió en el lugar donde desapareció la víctima por lo que el caso fue remitido nuevamente a la Agencia No. 32y quedó bajo el conocimiento del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal. Dicho Juzgado planteó el conflicto de competencia el 25 de septiembre de 2002. El caso fue resuelto por la Corte Suprema, quien el 21 de noviembre de 2002, declaró como Juzgado competente al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal del municipio de Mixco, por lo que el caso se remitió a la jurisdicción de Mixco el 11 de diciembre de 2002.

16.Según los peticionarios, debido al retraso de la investigación, recién el 15 de diciembre de 2002 se realizó una inspección ocular de la escena del crimen, cuando había pasado casi un año desde la muerte de María Isabel Véliz Franco. Señalan que cuando se realizó la inspección, la escena del crimen ya estaba alterada e incluso el predio había sido quemado. En el mismo sentido, indican que no fue sino hasta el 8 de julio de 2003 que se practicó un allanamiento en el inmueble donde supuestamente se encontraba el vehículo que se habría utilizado para trasladar el cadáver de la presunta víctima, según la versión del informante anónimo. Adicionalmente, informan los peticionarios que dicho allanamiento se hizo en un lugar incorrecto, pues la dirección reportada por el informante anónimo fue 6ta Calle 5-24 Colonia Monserrat en la zona 7 y el allanamiento se llevó a cabo en la 6 calle 5-24 de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala. En consecuencia, los resultados del allanamiento fueron negativos.

17.Según la información aportada por los peticionarios, la última diligencia realizada para identificar posibles responsables de la muerte de María Isabel Véliz Franco se realizó en febrero de 2005, cuando se ordenó al Servicio de Investigación Criminal la plena identificación y ubicación del señor Osbel Airosa. Desde entonces, el caso se encuentra alegadamente abandonado. De tal forma, alegan que han pasado más de cuatro años desde el asesinato de la presunta víctima y el caso está aún en fase de investigación sin indicios de que próximamente se pueda determinar a los responsables materiales y/o intelectuales de su ejecución.

18.Según los peticionarios, tal ha sido la negligencia de las autoridades estatales que el 2 de noviembre de 2004, el Procurador de Derechos Humanos emitió una resolución, que concluye que el Ministerio Público no procedió acorde al principio de objetividad en el ejercicio de la acción penal, ni tampoco actuó dentro de los plazos establecidos por la ley, "por lo que se evidencia la incapacidad del Estado de garantizarle a los habitantes de la

República de Guatemala, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (…).[4] Además, denuncia a los agentes fiscales intervinientes por dilatar la justicia al no resolver el tema de competencia territorial. El Procurador de los Derechos Humanos resolvió declarar la violación de los derechos humanos a la seguridad y al debido proceso de la señora Rosa Elvira Franco Sandoval de Véliz ya que existen indicios racionales que responsabilizan de dicha violación al Estado de Guatemala.

19.Añaden los peticionarios que la discriminación por género ha sido un obstáculo en el proceso investigativo de este caso, y que los hechos relatados deben ser analizados en el contexto de los asesinatos de mujeres en Guatemala, donde existe un patrón sistemático de asesinatos de mujeres. Al respecto, alegan que el Estado no ha adoptado medidas para proteger el derecho a la vida de las mujeres. Para ello sostienen que según la Procuraduría de los Derechos Humanos, de 1,188 casos de mujeres y niñas asesinadas entre los años 2001 y 2004, sólo se ha investigado el 9% de los casos.

20.Los peticionarios señalan que la falta de capacidad investigativa e interés de las autoridades "fomenta más violencia y una falta de confianza en las estructuras estatales responsables de proteger los derechos humanos de los ciudadanos. La impunidad que se genera envía el mensaje de que estos actos son tolerados, permitiendo que la violencia contra las mujeres se vuelva sistemática."[5]

21.En suma, los peticionarios sostienen que no resulta exigible el agotamiento de los recursos internos ya que se ha acreditado que el proceso muestra un retraso injustificado y a la fecha no ha habido una "decisión definitiva" como tal.

B. El Estado

22.El Estado de Guatemala manifiesta primeramente que a través del Ministerio Público, ente investigador en materia penal, ha realizado una investigación profunda del caso para dar con el responsable de los "delitos de plagio y asesinato" de Maria Isabel Véliz Franco.[6]

23.Asimismo sostiene sobre el presente caso, como muchos de los que se han venido presentando en el país, si bien las investigaciones no arrojan resultados positivos debido a la falta de prueba física y científica, se han coordinado acciones por parte del Ministerio Público con el Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, como con la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio para poder encontrar a los culpables.

24.El Estado manifiesta su "interés por esclarecer los asesinatos de mujeres ocurridos en los últimos años a consecuencia de la violencia generada hacia las mujeres en nuestro país". Afirma que prueba de ello ha sido la invitación que extendió el Presidente Oscar Bergery por solicitud de representantes de la sociedad civil a la entonces Relatora sobre Derechos de la Mujer, Susana Villarán para visitar Guatemala y examinar este problema.

25.El Estado afirma haber realizado entre el 14 de enero de 2002 y el 22 de noviembre de 2004, setenta y dos diligencias entre las que figuran "citaciones, allanamientos y autorización de desplegados de llamadas telefónicas".[7]

26.Con relación al seguimiento de la llamada telefónica anónima, el Estado manifiesta que en base a la información que consta en el Informe de 15 de enero de 2002, se inició vigilancia del domicilio cito en la 6ta. Calle 5-24 Colonia Nueva Montserrat zona 3 de Mixto y no zona 7 como erróneamente se consignó y no se observó ningún vehículo con las características proporcionadas. Asimismo alega el Estado que sí se investigaron las características del automóvil descrito por el informante anónimo pero que se determinó que en la fecha de comisión del delito no había ningún vehículo con las placas descritas.

27.El Estado manifiesta haber allanado el inmueble donde supuestamente se encontraba el vehículo utilizado para trasladar el cadáver de Maria Isabel Véliz Franco el 8 de julio de 2003 con resultados negativos.

28.El Estado aduce haber realizado pruebas forenses al cadáver, las mismas que mediante informe emitido el 4 de enero de 2002 no determinaron presencia de semen. Asimismo manifiesta que en la necropsia se estableció las lesiones y la causa de la muerte de la víctima.

29.El Estado afirma haber realizado la inspección ocular en el baldío de manera oportuna y que esa escena fue sobrevolada por un helicóptero de la Policía Nacional Civil. También indica haber realizado una inspección ocular en el lugar de los hechos el 18 de junio de 2003.

30.El Estado manifiesta que si bien hubo un conflicto de competencia en el caso, ello no cesó la investigación de los hechos. Señala que el 24 de mayo de 2002, el Agente Fiscal de la Agencia No. 32 de la Fiscalía Metropolitana de la ciudad de Guatemala se inhibió de conocer el delito y remitió el expediente debido a que el 11 de marzo de 2002 el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal se había inhibido de conocer el delito aduciendo que el mismo se cometió en la jurisdicción del municipio de Mixco. Posteriormente, el 3 de junio de 2002, la Agencia Fiscal No. 5 de la Fiscalía Municipal de Mixto asignó el caso a Edgar Romero Arana Castillo. Dicha Agencia Fiscal con fecha 23 de junio de 2002solicitó al Juzgado de Primero de Primera Instancia Penal solicitara de oficio su incompetencia para conocer del caso y remita las actuaciones al Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal porque se presumía que el delito se cometió en el lugar donde ocurrió la desaparición de la menor. El Juzgado Primero de Primera Instancia Penal se declaró de oficio incompetente el 02 de septiembre de 2002 y remitió las actuaciones al Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal de Guatemala, quien planteó el conflicto de competencia a la Corte Suprema el 25 de septiembre de 2002. El 21 de noviembre de 2002, la Corte Suprema de Justicia declaró que el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal era el órgano competente para conocer el caso y con fecha 11 de diciembre de 2002, la Fiscalía No. 32 de la Fiscalía Distrital Metropolitana remitió las actuaciones a la Fiscalía de Mixco.

31.En cuanto al posible sospechoso del homicidio, Osbel Airosa, el Estado solicitó al señor Francisco Lee, de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, lugar donde presuntamente el sospechoso laboraba, mantenerlo en su puesto de trabajo. El presunto sospechoso declaró ante el Ministerio Público el 15 de abril de 2002. Posteriormente fue citado en reiteradas ocasiones y no se presentó a declarar.

32.En torno a las llamadas telefónicas del teléfono celular de la menor, el Estado ordenó el despliegue de las mismas en marzo de 2002 a la empresa de telecomunicaciones. Asimismo el Estado manifiesta que existe un informe que contiene incidencias de llamadas entrantes y salientes con hora de duración de las llamadas.

33.El Estado niega que desde el año 2005 el caso haya quedado abandonado y sostiene que durante ese año solicitó a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, el análisis de las últimas llamadas telefónicas que tuvo la víctima (noviembre de 2004) con la finalidad de establecer las personas con las cuales se comunicó la menor antes de su muerte. Asimismo, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala informó que el señor Osbel Airosa Hernández no trabajaba en dicha entidad y por tanto se ordenó al Servicio de Investigación Criminal la plena identificación y ubicación de Osbel Airosa Hernández.

34.En relación a las supuestas humillaciones hacia la peticionaria, el Estado solicita que se informe de manera más concreta sobre los hechos para realizar una investigación al respecto. Al no poder hallarse un presunto culpable, el Estado alega que el caso aún se encuentra en la fase de investigación con la finalidad de obtener mayores elementos de prueba para poder dar inicio a un proceso penal y así poder realizar justicia.

35.El Estado sostiene que "si a la fecha no ha sido posible individualizar al imputado no es por incapacidad, irresponsabilidad o falta de debida diligencia (…) sino porque no contamos con un testigo presencial del hecho u otra prueba que nos permita poder ligar al proceso a algún sindicado, tal como en otros casos de asesinatos de mujeres (…)."[8]

## IV.ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

### A. Competencia de la Comisión rationae personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci

36.Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a María Isabel Véliz Franco, persona individual respecto de quien Guatemala se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, Guatemala es parte de la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978, fecha en que depositó el respectivo instrumento de ratificación. Lo mismo sucede con la Convención de Belém do Pará de la cual Guatemala es parte desde el 4 de abril de 1995.Por lo tanto, la Comisión tiene competencia rationae personae para examinar la petición.

37.La CIDH tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana y en la Convención de Belém do Para que habrían tenido lugar dentro del territorio de Guatemala, Estado parte en dicho tratado.

38.Asimismo, la Comisión goza de competencia ratione temporis puesto que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana y en la Convención de Belém do Pará ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión es competente ratione materiae, debido a que en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.

B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

1.Agotamiento de los recursos internos

39.El artículo 46.1.a de la Convención Americana establece que para que una petición pueda ser admitida, se requerirá "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos."El artículo 46.2 de la Convención por su parte establece tres supuestos en los que no se aplica la regla del agotamiento de los recursos internos: a) que no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y c) que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Estos supuestos no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también que estos sean adecuados y efectivos.

40. En el presente caso, el Estado alega que existe una investigación abierta pertinente a los hechos y que a pesar de las diligencias realizadas para investigar y esclarecer los hechos, no existen aun pruebas físicas y científicas contundentes que sirvan como evidencia para poder encontrar a los culpables, por lo tanto, no existe un retardo injustificado en la sustanciación de las diligencias encaminadas a esclarecer las circunstancias de los hechos. Por su parte, los peticionarios alegan la imposibilidad de agotar los recursos internos y señalan un retardo injustificado por parte del Estado para investigar y esclarecer los hechos "a causa de una actuación imprecisa o inexistente", de tal manera, que el homicidio de Maria Isabel Véliz Franco continúa en la fase de investigación. Sostienen que el Estado ha tenido pruebas y elementos contundentes para investigar el caso y que más que un caso complejo, se trata de la "desidia y desinterés de las autoridades responsables de investigar."Asimismo, del expediente se desprende su participación activa en el caso desde su inicio, además de haber llevado a cabo diligencias e indagaciones con la finalidad de coadyuvar al esclarecimiento de los hechos. Igualmente, los peticionarios alegan que han pasado más de cuatro años desde el asesinato de la presunta víctima y el caso está aún en fase de investigación sin

indicios de que próximamente se pueda determinar a los responsables materiales y/o intelectuales de su ejecución.

41. Cuando un Estado alega que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, tiene a su cargo señalar cuáles deben agotarse y demostrar su efectividad. En tal caso, pasa a los peticionarios la carga procesal de demostrar que dichos recursos fueron agotados o que se configura alguna de las excepciones del artículo 46.2 de la Convención Americana.

42. Sin entrar a analizar los argumentos desarrollados por las partes acerca de la presunta violación de las garantías judiciales y protección judicial, la Comisión observa que han pasado más de cuatro años desde que Maria Isabel Véliz Franco fue hallada muerta, sin que a la fecha de la elaboración del presente informe los representantes del Estado hayan proporcionado información concreta sobre la determinación y sanción de los posibles responsables de su muerte. La Comisión también nota que el expediente ante la CIDH no contiene información acerca de diligencias recientes llevadas a cabo por el Estado o avances que conducirían a esclarecer los hechos y a sancionar a los responsables, específicamente a partir del año 2005 en adelante. El Estado guatemalteco se limita a mencionar algunas de las diligencias efectuadas en la investigación de los hechos, más no presenta información específica que permita concluir que la investigación está revestida de la idoneidad y efectividad que se requiere para el esclarecimiento de los hechos.

43.Conforme a la información disponible ante la CIDH, la Comisión asimismo observa preliminarmente que ha habido un retardo injustificado en relación a la competencia. [9]Este conflicto de competencia de casi siete meses constituye un factor contribuyente al retardo injustificado en la identificación y sanción de los presuntos responsables.

44.Igualmente, la Comisión Interamericana observa que los peticionarios alegan que los hechos del presente caso se dan en un contexto de numerosos homicidios y desapariciones de mujeres en Guatemala, de los cuales la mayoría son casos no resueltos por las autoridades del Estado, perpetuando la impunidad de actos de violencia contra las mujeres.

45.A la luz de todo lo expresado líneas arriba y de las constancias del expediente, la Comisión Interamericana establece – a efectos de la admisibilidad – que se ha verificado un retardo injustificado en la decisión de los órganos jurisdiccionales guatemaltecos respecto a los hechos denunciados. En consecuencia, la CIDH aplica al presente asunto la excepción al agotamiento de los recursos internos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana.

2.Plazo de presentación

46.Con relación al requisito contemplado en el artículo 46.1.b de la Convención, conforme al cual la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos, la Comisión considera que tampoco resulta aplicable el cumplimiento de tal plazo, toda vez que la petición fue presentada dentro del plazo razonable mencionado en el artículo 32.2

de su Reglamento para los casos en los cuales no se ha dictado sentencia firme con anterioridad a la presentación de la petición.

3.Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

47.El expediente de la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se hallase pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente decidido por la Comisión Interamericana. Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones previstas en el artículo 46.1.d y en el artículo 47.c de la Convención Americana.

4.Caracterización de los hechos alegados

48.En el presente caso, los peticionarios sostienen que el Estado es responsable por presuntas violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y de la dignidad, igualdad ante la ley y protección judicial, a los derechos del niño, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, garantizados respectivamente por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. Por su parte, el Estado alega que el proceso judicial se encuentra en la etapa de investigación de los hechos.

49.Al respecto, la Comisión considera que no corresponde en esta etapa del proceso determinar si se produjeron o no las alegadas violaciones. A efectos de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos alegados pueden caracterizar posibles violaciones a las Convenciones como estipula el artículo 47.b de la Convención Americana. El criterio de apreciación de estos extremos es diferente al requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión debe realizar una evaluación prima facie para determinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado en la Convención. Esta determinación constituye un análisis primario, que no implica prejuzgar sobre el fundamento del asunto.

50.Los alegatos de los peticionarios se refieren a hechos que, de ser ciertos, caracterizarían violaciones de varios derechos garantizados por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. La CIDH estima que los hechos expuestos ameritan un examen de manera más precisa y completa de la petición en la etapa de fondo.

51.La CIDH considera que de ser comprobados los hechos caracterizarían violaciones de los derechos de Maria Isabel Véliz Franco, garantizados en los artículos 8.1, 11, 19, 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento. Asimismo considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Del mismo modo, la CIDH estima que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones del artículo 4 de la Convención Americana, en relación al deber de garantía del artículo 1.1 de dicho instrumento.

52.De la misma manera considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones al artículo 24 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento. La CIDH observa que los peticionarios alegan que los hechos relatados se han dado en un contexto de impunidad ante actos violentos por parte de la administración de la justicia, que afecta desproporcionadamente a las mujeres como grupo y propende la repetición de estos actos. Dentro de este patrón de impunidad, se aducen actitudes de funcionarios judiciales basadas en conceptos socioculturales discriminatorios que afectan mayormente a las mujeres. Este patrón de impunidad ha sido observado por la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH.[10]

53.Con respecto de Rosa Elvira Franco de Véliz, la Comisión considera que de ser comprobados los hechos, caracterizarían violaciones a los derechos garantizados en los artículos 5.1 y 11 de la Convención Americana. Asimismo, aunque los peticionarios no hayan invocado los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en virtud del principio iura novit curia arriba invocado, la CIDH admitirá alegatos referentes a presuntas violaciones de los artículos 8.1 y 25 con respecto a la madre de la presunta víctima. Todos estos artículos serán analizados en relación al artículo 1.1 de la Convención Americana.

54.La CIDH considera que en los hechos descritos no existen fundamentos suficientes que caractericen una violación al derecho a la integridad personal protegido por el artículo 5 de la Convención Americana, así como el derecho a la libertad personal protegido por el artículo 7 de dicho documento en relación a María Isabel Véliz Franco.

55.En consideración de todo lo anterior, la CIDH concluye que los peticionarios han acreditado prima facie los extremos requeridos en el artículo 47.b de la Convención Americana.

V.CONCLUSIONES

56.La Comisión concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión.

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 4, 8.1, 11, 19, 24 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento; y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en relación a Maria Isabel Véliz Franco; y a presuntas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 5.1, 8.1, 11 y 25 en conexión con el artículo 1.1 de la Convención Americana en relación con Rosa Elvira Franco Sandoval de Véliz.

2.Declarar inadmisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones a los derechos reconocidos en los artículos 5 y 7 de la Convención Americana en relación con María Isabel Véliz Franco.

3.Notificar esta decisión a las partes.

4.Continuar con el análisis del fondo del asunto y,

5.Dar a conocer públicamente el presente informe y publicarlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 21 días del mes de octubre de 2006.(Firmado): Evelio Fernández Arévalos, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Florentín Meléndez, Segundo Vicepresidente; Freddy Gutiérrez, Paolo G. Carozza, Miembros de la Comisión.

[1] Informe del Ministerio Público de fecha 20 de febrero del 2002, Ref. 2727/01.
[2] Informe del Ministerio Público de fecha 20 de febrero del 2002, Ref. 2727/01.
[3] Esto último también fue denunciado por la señora Rosa Franco en una carta al Procurador de los Derechos Humanos de 22 de enero de 2003 y en una carta al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público de 28 de agosto de 2004.
[4] Informe del Procurador de Derechos Humanos de fecha 2 de noviembre de 2004. Ref. Exp. Ord. Gua. 41-2003/DI.
[5] Comunicación de los peticionarios de fecha 25 de enero de 2005.
[6] Comunicación del Estado de fecha 16 de diciembre de 2004.
[7] Comunicación del Estado de fecha 12 de abril de 2005.
[8] Comunicación del Estado de fecha 13 de Julio de 2006.
[9] CIDH, Informe N° 54/01, caso 12.051, Maria da Penha Maia Fernandes, párr. 32.
[10] CIDH Comunicado de Prensa, Nº 20/04, La Relatoría Especial de la CIDH evalúa la Vigencia del Derecho de la Mujer Guatemalteca a Vivir Libre de Violencia y Discriminación, Washington, DC, 18 de septiembre de 2004.

**INFORME N° 32/06. PETICIÓN 1175-03. ADMISIBILIDAD. PALOMA ANGÉLICA ESCOBAR LEDEZMA Y OTROS. MÉXICO. 14 de marzo de 2006.**

I.RESUMEN

1.El 30 diciembre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una denuncia en la que se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos ("el Estado") por las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Paloma Angélica Escobar Ledezma ("presunta víctima"), quien desapareció el 2 de marzo de 2002 en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, cuando tenía 16 años de edad; y fue hallada muerta el 29 de marzo del mismo año. La petición fue presentada por Norma Ledezma Ortega, madre de la presunta víctima; Justicia para Nuestras Hijas; el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL); y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (en adelante, conjuntamente, "los peticionarios").

2.Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Asimismo alegan que los siguientes derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos humanos (en adelante Convención) han sido conculcados: derecho a la vida (artículo 4), derecho a la integridad personal (artículo 5), garantías judiciales (artículo 8), protección judicial (artículo 25), así como los derechos del niño (artículo 19), y la igual protección de la ley (artículo 24).Alegan que con respecto a Norma Ledezma (madre de la presunta víctima) y su familia se configuran las violaciones al derecho de integridad personal (artículo 5), el derecho a la protección de la familia (artículo 17), el derecho de igualdad ante la ley (artículo 24), y el derecho a la protección judicial (artículo 25) todo ello en violación al deber genérico del Estado reconocido en el artículo 1.1 de la Convención. Por su parte, el Estado mexicano sostiene que las diligencias efectuadas demuestran su voluntad de garantizar el respeto de los derechos humanos de toda persona, y que no se han agotado los recursos internos. En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.

3.Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará; y de los artículos 2, 4, 5, 8, 17, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del instrumento internacional citado; y decide igualmente publicar el presente informe en el Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4.La petición fue presentada el 30 de diciembre de 2003. Luego del estudio inicial sobre el trámite, con base en el artículo 30.2 de su Reglamento la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado el 14 de julio de 2004, y fijó el plazo de dos meses para que éste presentara sus observaciones. En fecha 27 de septiembre de 2004 se recibió la nota del Estado que contiene las observaciones sobre la petición. Esta información se trasladó a los peticionarios, quienes a su vez presentaran observaciones el 22 de abril de 2005.Dicha comunicación fue trasladada al Estado el 20 de julio de 2005.Mediante comunicación recibida el 19 de agosto de 2005, el Estado respondió a las observaciones de los peticionarios.

III.POSICIONES DE LAS PARTES

A. Los peticionarios

5.Los peticionarios alegan que el Estado es responsable, entre otras razones, por irregularidades e inconsistencias en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Ledezma. De acuerdo con la denuncia, Paloma Angélica Ledezma, desapareció el 2 de marzo de 2002 cuando contaba con 16 años de edad, y su cuerpo fue encontrado el 29 de marzo del mismo año.

6.Paloma Angélica Escobar Ledezma trabajaba en una empresa maquiladora[1] y los días sábados asistía a una escuela de computación, ambas en Ciudad Juárez. El 2 de marzo salió de su casa a las 3:15 p.m. rumbo a la clase de computación y no regresó. Su madre, la señora Norma Ledezma, preocupada por su ausencia, buscó ese mismo día a su hija en la casa de sus amigas y amigos, hospitales y en la Comandancia de la policía, sin obtener resultado alguno. En esta ocasión, acudió además a denunciar la desaparición ante la representante del Ministerio Público adscrito a la Oficina de Averiguaciones Previas y de Conciliación y Servicio Social, quien la transmitió a la Jefa del Grupo Especial de Delitos Sexuales y Contra la Familia de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua. El 3 de marzo, esta última dependencia dio inicio a una averiguación previa, e instruyó la realización de diligencias y toma de declaraciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

7.Los peticionarios señalan que el cuerpo de la adolescente fue encontrado el 29 de marzo de 2002 en el kilómetro 4.5 de la carretera de Chihuahua a Ciudad Aldama. El cuerpo se hallaba a unos 800 metros de la carretera, en avanzado estado de putrefacción[2].El dictamen pericial concluye, entre otras cosas, que se investiga una muerte violenta con características de homicidio doloso. Asimismo, afirman que al efectuar la necropsia, el médico legalista encontró contusiones equimóticas localizadas en la cara antero-externa del hemotórax izquierdo, y en la región dorsal del hemotórax derecho; luxación cervical a nivel C2 y C3, y concluyó que la causa de la muerte fue una luxación en la columna vertebral. Destacan que al momento del levantamiento del cadáver las prendas íntimas de Paloma Angélica Escobar estaban mal colocadas “la parte que corresponde a la cintura se encontró vestida en la pierna izquierda, la de la pierna izquierda en la pierna derecha y la pierna

derecha en la cintura", lo cual les lleva a presumir que además de la agresión física, la menor sufrió agresión sexual.

8.Los peticionarios traen a la atención de la CIDH parte de la información recopilada en los testimonios y diligencias efectuadas en torno al caso. Al respecto, manifiestan su extrañeza en cuanto a que sólo unas semanas antes de su desaparición, el Director de la escuela de computación informó a Paloma Angélica Escobar Ledezma que el horario de clases se cambiaría de la mañana a la tarde (de 4:00 a 8:00 p.m.), debido a arreglos que iban a ser efectuados en la escuela. Sin embargo, de un total de 15 alumnos, sólo fue cambiado el horario de la presunta víctima y el de otras tres personas. El día de los hechos, Paloma Escobar asistió normalmente a las clases de computación. Según los peticionarios, entre los testimonios de personas que vieron a Paloma Escobar ese día después de sus clases, hay uno que refiere haberla visto en un vehículo en compañía de algunos promotores del centro de computación, y que se la veía semidormida. Otra persona habría testificado que vio a Paloma el domingo 10 de marzo a las 4:30 p.m. desde la planta de arriba de su casa, en compañía de dos personas jóvenes, y un tercero que pasaba los 30 años. Según esta persona, los jóvenes traían una camiseta con el logotipo de la escuela de computación y tendrían alrededor de 20 años. Los peticionarios alegan que las autoridades contaban con la información mencionada, pero que únicamente dieron trámite "mecánico" a esta denuncia.

9.Indican que si bien a partir del hallazgo del cuerpo de Paloma Angélica Escobar Ledezma se iniciaron las diligencias de investigación con el fin de identificar y sancionar a los responsables, hasta la fecha no se han obtenido resultados concretos. Por esta razón a un año y medio de no observar avances interpusieron la presente denuncia ante la Comisión. Señalan que transcurridos casi 4 años, la averiguación previa continúa sin una línea clara de investigación, de manera tal que aún no se habría procedido a la consignación de un juez. Señalan además que las investigaciones han excedido el plazo considerado razonable, y que ello es evidente a partir de los criterios de complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, y la conducta de las autoridades. Afirman que dicho retraso en la investigación se generó por obstáculos imputables a las autoridades estatales.

10.Los peticionarios alegan que no hay debido proceso legal en el estado de Chihuahua para realizar una investigación, seria, imparcial y eficaz a efectos de esclarecer este tipo de actos de violencia. Alegan, la ausencia de un recurso judicial idóneo y efectivo que permita sancionar a los responsables, y que se ha observado un retardo injustificado en la sustanciación de las diligencias legales destinadas a determinar las circunstancias en que Paloma Escobar perdió la vida. Aducen, asimismo, negligencia por parte de las autoridades del Estado, y destacan además que el patrón generalizado de violencia relatado en esta denuncia ha sido reconocido por diversos organismos no gubernamentales.

11.Los peticionarios consideran que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida en perjuicio de Paloma Escobar se configura de la siguiente forma: a) todos los indicios disponibles apuntan a que el presente caso se circunscribe a un patrón sistemático, tolerado por agentes del Estado, que nulifica la posibilidad de revolver el caso

con los recursos judiciales del orden interno; b) el Estado faltó a su deber de adoptar medidas adecuadas para prevenir estos asesinatos al no proteger a las víctimas en vista de las graves amenazas y los tangibles avisos de riesgo de repetición; y c) el Estado no ha respondido al asesinato con la debida seriedad, celeridad y diligencia para investigar, procesar y sancionar a los responsables, lo cual paralelamente afecta el derecho a la verdad de los familiares de la víctima y de la sociedad en general. Añaden que el Estado omitió su deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de los niños bajo su jurisdicción, a pesar de conocer el contexto de violencia que venía siendo denunciado en Chihuahua durante diez años. Asimismo, los peticionarios sostienen que dicho patrón sistemático permite imputar responsabilidad al Estado, toda vez que éste ha tolerado que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente. En particular, afirman que el Estado no ha tomado las medidas necesarias para garantizar plenamente los derechos que tenía Paloma Angélica Escobar Ledezma en su carácter de menor de edad.

12.Es la posición de los peticionarios que los representantes del Estado han incurrido en omisiones por la falta de actuación adecuada en el momento de la realización de pruebas técnicas periciales oportunas. Mencionan en tal sentido la falta de análisis detallado de las ropas con las que se encontró a Paloma Escobar, o el cuidado necesario de las diligencias del levantamiento el cadáver, la búsqueda y resguardo de evidencia, así como del lugar de hallazgo. Por consiguiente, alegan que, en este caso se habría configurado un patrón de obstrucción de justicia.

13.Asimismo, afirman que a la fecha de presentación de su denuncia ante la Comisión Interamericana (30 de diciembre de 2003) no había persona alguna detenida por la muerte de Paloma, y que se habría permitido salir de Chihuahua a uno de los probables responsables. Otro aspecto destacado por los peticionarios es el del entorpecimiento de la justicia por la labor de una agente de la Procuraduría que habría sembrado evidencias para inculpar aúna persona como posible responsables, al presuntamente haber sido novio de Paloma Escobar [3].

14.Por otra parte, los peticionarios alegan que la falta de investigación en este caso forma parte de un panorama general de discriminación ejercida en contra de las mujeres y niñas en el estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez. Denuncian el trato discriminatorio en razón del género, en torno a la actuación de las autoridades que dieron importancia a diligencias de carácter hostil hacia la culpabilidad de la propia familia, u otras orientadas hacia la "conducta moral" de la menor, por ejemplo la conducta que pudo haber tenido con su novio. Los peticionarios consideran que el caso no ha sido investigado dentro de lo requerido para situaciones que se desarrollan en el contexto de violencia de género y afirman que la violencia contra la mujer constituye la violación de múltiples derechos humanos. En este marco, señalan, cuando el Estado no actúa con la debida diligencia para prevenir la violencia contra la mujer y responder a ella, es directamente responsable, lo cual señalan puede observase el retardo injustificado y la negligencia practicada por las autoridades al momento de investigar y esclarecer las circunstancias de la muerte de Paloma Escobar.

15.Los peticionarios señalan que la pérdida de Paloma Angélica ha afectado el núcleo familiar y la vivencia cotidiana de sus integrantes, y que el dolor podrá aliviarse únicamente cuando se pueda esclarecer la verdad de los hechos.

16.En suma, sostienen que no ha sido posible para la familia de Paloma acceder a canales efectivos de justicia en vista de las irregularidades relacionadas con las investigaciones efectuadas. Añaden que la muerte de Paloma no ha sido investigada exhaustivamente que se han desatendido todos los informes e indicios sobre el caso. En consecuencia, solicitan la aplicación del artículo 42.b y c) por considerar que los elementos presentados reúnen las causales de exención al agotamiento de recursos de jurisdicción interna.

B. El Estado

17.El Estado mexicano sostiene primeramente que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no ha escatimado esfuerzos para esclarecer el presente caso. En tal sentido señala que, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Chihuahua, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua es la dependencia facultada para llevar a cabo la investigación y persecución ante los tribunales, de todos los delitos del orden local.

18.Asimismo, el Estado remite en anexo una lista de 370 diligencias realizadas por la PGJ de Chihuahua con relación al homicidio de Paloma Angélica Escobar Ledesma[4].En particular, señala que hay una investigación en desarrollo sobre el asesinato de Paloma Angélica Escobar Ledezma, y que la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua no ha podido contar con los elementos suficientes para la consignación de un presunto responsable. Por tal motivo, explica el Estado, no se ha podido iniciar un proceso judicial, a menos que se encuentren mayores pruebas que permitan concluir la probable responsabilidad. Asimismo, reconoce que si bien hubo irregularidades en la primera investigación, éstas ya fueron subsanadas. En particular, alega que la agente de la Procuraduría estatal que fuera acusada de sembrar pruebas ya había sido sancionada[5], e indica que las autoridades continúan las investigaciones de manera adecuada.

19.Asimismo, el Estado indicó estar conciente de que "a más de tres años, no existen resultado[s]tangibles, pero como se explicó […] el Gobierno está implementando mejores métodos de investigación y administración de justicia, con lo que se espera que en el mediano plazo se pueda estar en aptitud de castigar a los responsables del homicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma"[6].

20.Otro aspecto que denota el Estado mexicano es su apertura a la visita de distintos expertos en materia de derechos humanos, lo cual, afirma ha probado su intención de dar una solución integral a la situación de violencia en Ciudad Juárez. El Estado manifiesta haber tomado medidas dirigidas a consolidar los mecanismos de prevención de violencia, de investigación, y de sanción para crímenes cometidos en dicha ciudad fronteriza, tales como la designación de una Comisionada de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, así

como la creación de fiscalías especializadas entre otras.Menciona el Estado que dichas medidas han reportado sus frutos, ya que se ha verificado una baja de la incidencia de la criminalidad. Asimismo, afirma que se están tomando precauciones suficientes para prevenir situaciones de riesgo para las mujeres en esta región. Por lo expuesto, agrega, no es posible concluir que el Estado ha actuado de manera negligente e ineficaz en el combate a la violencia en contra de las mujeres, ni que tolere este tipo de violencia en contra de las mujeres. En cuanto a los alegatos de los peticionarios sobre discriminación, el Estado afirma que ha tomado medidas para prevenir y sancionar cualquier caso de tal naturaleza a través de las fiscalías especiales.

21.El Estado afirma que "cuenta con un aparato de justicia y de seguridad pública que tiene por objeto prevenir la perpetración de delitos, sin embargo, no es posible para ningún Estado erradicar todo crimen en una sociedad determinada". A partir de lo expuesto, estima el Estado que no es posible concluir que hay un retardo injustificado de de justicia, y que se encuentra aún dentro de plazo razonable para la conclusión del proceso. En consecuencia, señala, no se observa denegación de justicia por investigación deficiente y reafirman que no se puede responsabilizar al Estado mexicano por los lamentables hechos ocurridos.

22.En cuanto al plazo razonable, señala que se han presentado en la sustanciación de este caso los criterios establecidos por la Corte Interamericana. En primer lugar, sostiene el Estado, las circunstancias de estos casos tienen un especial grado de complicación por cuestiones tales como las de carácter social, económico, y delictivo. Segundo, las autoridades investigan de manera constante y con la debida atención todas pruebas e indicios que han arrojado las periciales y declaraciones rendidas. Tercero, en este punto el Estado mexicano relata el hecho de que en algunas ocasiones en que se solicitó la comparecencia de los familiares de las víctimas, estos no acudieron.

23.El Estado alega que los recursos de la jurisdicción interna no han agotado. En este sentido, resalta que los peticionarios tendrían la posibilidad de "promover un amparo por el no ejercicio de la acción penal, que de tener resultado favorable para el promovente, obligaría a la autoridad a consignar a quien se probara como responsable."[7]

## IV.ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

### A. Competencia de la Comisión ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci

24.Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a Paloma Angélica Escobar Ledezma y Norma Ledezma, personas individuales respecto a quienes México se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, México es parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981, fecha en que se depositó el respectivo instrumento de ratificación. Lo mismo sucede con la Convención de Belém do

Pará de la cual México es parte desde el 12 de noviembre de 1998. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

25.La CIDH tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas que habrían tenido lugar dentro del territorio de México, Estado parte en dicho tratado.

26.Asimismo, la Comisión Interamericana goza de competencia ratione temporis puesto que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana y en la Convención de Belém do Pará ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión es competente ratione materiae, debido a que en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.

B. Otros requisitos para la admisibilidad de la petición

1.Agotamiento de los recursos internos

27.El artículo 46.1.a de la Convención Americana establece que para que una petición pueda ser admitida, se requerirá "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". El artículo 46.2 de la Convención establece tres supuestos en los que no se aplica la regla del agotamiento de los recursos internos: a) que no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y c) que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Cabe destacar que estos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también a que éstos sean adecuados y efectivos. Que sean adecuados significa que la función de estos recursos, dentro del sistema de derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. Un recurso eficaz es el que permite producir el resultado para el que ha sido establecido[8].

28.En el presente caso, las partes sostienen una controversia con relación al cumplimiento del requisito de agotamiento de los recursos internos contemplado en el artículo 46.1.a de la Convención Americana, por lo cual corresponde a la Comisión Interamericana pronunciarse al respecto. El Estado sostiene que no se ha cumplido con dicho requisito, mientras que los peticionarios invocan la aplicabilidad de la excepción en vista de que, alegan, hay un retardo injustificado en la sustanciación de las diligencias encaminadas a identificar a los responsables de la muerte de Paloma Angélica Escobar Ledezma, así como a esclarecer las circunstancias de los hechos.

29.Cuando un Estado alega que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, tiene a su cargo señalar cuáles deben agotarse y demostrar su efectividad. En tal caso, pasa a los peticionarios la carga procesal de demostrar que dichos recursos fueron agotados o que se configura alguna de las excepciones del artículo 46.2 de la Convención Americana.

30.En el asunto aquí analizado, el Estado mexicano sostiene que los peticionarios deben "promover un amparo por no ejercicio de la acción penal"[9].Al respecto, la Comisión señala el principio reconocido por la jurisprudencia de que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal hasta sus últimas consecuencias[10].En consecuencia, en el caso particular, no es posible transferir esta carga a la parte peticionaria. Debe destacarse igualmente que, de acuerdo a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal del Estado de Chihuahua,[11] el procedimiento penal consta de cuatro períodos, en los cuales la averiguación previa y la consignación corresponden a la primera etapa. Por otra parte, el Estado también ha alegado que "en algunas ocasiones en que se solicitó la comparecencia de los familiares de las víctimas, éstas no acudieron", para ejemplificar este punto, el Estado concretamente citó seis diligencias. Al respecto, la Comisión nota que, las diligencias citadas por el Gobierno se desarrollaron durante septiembre y noviembre del año 2002, y que el Estado no ha logrado justificar que tales incomparecencias hayan ocasionado un retardo masivo en las investigaciones.

31.Sin entrar a analizar los argumentos desarrollados por las partes acerca de la presunta violación de las garantías judiciales y protección judicial, la CIDH observa que a la fecha de presentación de este informe han transcurrido casi cuatro años desde que Paloma Angélica Escobar Ledezma, fuera hallada muerta, sin que hasta la fecha de elaboración de este informe, los representantes del Estado hayan proporcionado información concreta sobre la determinación de los posibles responsables de la muerte de Paloma Angélica, ni sí en el caso particular ha sido determinada alguna responsabilidad imputable a funcionarios gubernamentales. A su vez, la Comisión Interamericana observa que el Estado no ha proporcionado información específica sobre avances en esta investigación, en particular, que conducirían a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La Comisión considera esta información suficiente para que se configure la excepción dispuesta en el artículo 46.2.c.

32.Asimismo, la Comisión Interamericana observa que los peticionarios alegan que los hechos del presente caso se dan en un contexto de numerosos asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres en Ciudad Juárez, que son seguidas de impunidad por razones imputables a las autoridades.

33.A la luz de todo lo expresado más arriba, y de las constancias del expediente, la Comisión Interamericana establece --a efectos de la admisibilidad-- que se ha verificado un retardo injustificado en la decisión de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto a los hechos denunciados. En consecuencia, la CIDH aplica al presente asunto la excepción al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana.

2.Plazo de presentación

34.El artículo 46.1.b de la Convención dispone que la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos. Al respecto, la CIDH considera que tampoco resulta exigible el cumplimiento de tal plazo, toda vez que la petición fue presentada dentro del plazo razonable mencionado en el artículo 32.2 de su Reglamento.

3.Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

35.El expediente de la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se hallase pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente decidido por la Comisión Interamericana. Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones previstas en el artículo 46.1.d y en el artículo 47.d de la Convención Americana.

4.Caracterización de los hechos alegados

36.Los peticionarios sostienen en sus alegatos que el Estado es responsable por presuntas violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, igualdad ante la ley, protección judicial, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, garantizados respectivamente en la Convención Americana, y la Convención de Belem do. Por su parte, el Estado alega que los peticionarios no han agotado los recursos internos, y por consiguiente no se cumplen los requisitos de admisibilidad.

37.Al respeto, la Comisión considera que no corresponde en esta etapa del proceso determinar si se produjeron o no las alegadas violaciones. Particularmente, se analizará en dicha etapa si el Estado adoptó medidas o políticas necesarias en la época de los hechos[12]. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver si los hechos expuestos tienden a caracterizar posibles violaciones a la Convenciones, como estipula el artículo 47.b de la Convención Americana.

38.El criterio de apreciación de estos extremos es diferente al requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado en la Convención[13].Este análisis tiene carácter sumario, y no implica prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia. La distinción entre el estudio correspondiente a la declaración sobre la admisibilidad y el requerido para determinar una violación se refleja en el propio Reglamento de la CIDH, que establece de manera claramente diferenciada las etapas de admisibilidad y fondo[14].

39.Los alegatos de los peticionarios se refieren a hechos que, de ser ciertos, caracterizarían violaciones de varios derechos garantizados por la Convención Americana y por la

Convención de Belém do Pará. La CIDH estima que los hechos expuestos ameritan un examen de manera más precisa y competa de la petición en la etapa de fondo. Por otra parte, en aplicación del principio iura novit curia, la Comisión Interamericana analizará alegatos referentes al artículo 2 de la Convención Americana.

40.La Comisión considera que de ser comprobados, los hechos caracterizarían violaciones de los derechos, de Paloma Angélica Escobar Ledezma, garantizados en los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento. De la misma manera, considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. En lo que respecta a Norma Ledezma, la Comisión considera que de ser comprobados, los hechos caracterizarían violaciones a los derechos garantizados por los artículos 5, 17, 24, y 25.Asimismo, aunque los peticionarios no hayan invocado el artículo 8 de la Convención Americana, en virtud del principio iura novit curia arriba invocado, la CIDH admitirá alegatos referentes a presuntas violaciones de dicho artículo con respecto a la madre de la presunta víctima.

41.En consideración de todo lo anterior, la CIDH concluye que los peticionarios han acreditado prima facie los extremos requeridos en el artículo 47.b de la Convención Americana.

VIII.CONCLUSIONES

42.La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DECIDE:

1.Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 4, 5, 7, 8, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2, de dicho instrumento; y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en relación a Paloma Angélica Escobar Ledezma; y los artículos 5, 8, 17, 24 y 25 en conexión con el artículo 1.1 en relación a Norma Ledezma.

2.Notificar esta decisión a las partes.

3.Continuar con el análisis de fondo de la cuestión, y

4.Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 14 días del mes de marzo de 2006.(Firmado) Evelio Fernández Arévalos, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Florentín Meléndez, Segundo Vicepresidente; Clare K. Roberts, Freddy Gutiérrez, Paolo G. Carozza y Víctor E. Abramovich, Miembros de la Comisión.

[1] Se conoce como maquiladora a una fábrica filial de una empresa extranjera, que opera con materias primas importadas y exporta toda su producción al país de origen.
[2] Dictamen pericial de 31 de marzo de 2002.
[3] Dicha persona era la Comandante de Policía Judicial de Chihuahua a quien se encargó la investigación de la desaparición de la muerte de Paloma Escobar, a partir del día 3 de marzo de 2002.El Estado sostiene que dicha funcionaria fue sancionada con once meses de prisión por la comisión del delito de imputaciones falsas en perjuicio de la administración pública, por haberse demostrado su interferencia con la investigación consistente en sembrar pruebas que desviaban la línea de búsqueda de información en el caso de Paloma Escobar Ledezma. Causa Penal 138/02, Chihuahua,8 de noviembre de 2002.
[4] Comunicación del Estado de 27 de septiembre de 2004.
[5] Ver nota de pie de página 3.
[6] Comunicación del Estado de 19 de agosto de 2005.
[7] Comunicación del Estado mexicano de 27 de septiembre de 2004.
[8] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C Nº 4, párrs. 63-64; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 66-67; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párrs. 87-88.
[9] Comunicación del Estado mexicano de 27 de septiembre de 2004.
[10] CIDH, Informe Nº 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Informe Anual de la CIDH 1997, párrs.96 y 97.Ver igualmente CIDH, Informe N° 55/97, párr. 392.
[11] Articulo 1. El procedimiento en materia penal tiene cuatro periodos:
I. El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que comprende las diligencias legalmente necesarias para que el ministerio público pueda resolver si ejercita la acción penal;
II. El preprocesal, que comprende las diligencias practicadas ante los tribunales con el fin de que estos resuelvan la situación jurídica de los indiciados;
III. El de instrucción, que comprende las diligencias practicadas ante los tribunales con el fin de averiguar la existencia de los delitos, las circunstancias en que hubieren sido cometidos y la responsabilidad o irresponsabilidad de los procesados;
IV. El de juicio, durante el cual el ministerio publico precisa su acusación y el acusado su defensa ante los tribunales y estos valoran las pruebas y pronuncian sentencia definitiva.
[12] Ver CIDH, Informe No 16/05, Petición 281/02, Admisibilidad, Claudia Ivette González, México, 2005, Párr. 32. Informe No 17/05, Petición 282/02, Admisibilidad, Esmeralda Herrera Monreal, México, 2005, Párr. 32.Informe No 18/05, Petición 283/02, Admisibilidad, Laura Berenice Ramos Monarrez, México, 2005, Párr. 31.
[13] Ver CIDH, Informe No. 128-01, Caso 12.367, Herrera y Vargas ("La Nación"), Costa Rica, 3 de diciembre de 2001, párrafo 50.
[14] Ver CIDH, Informe No. 31-03, Caso 12.195, Mario Alberto Jara Oñate y otros, Chile, 7 de marzo de 2003, párrafo 41.

**INFORME Nº 31/06. PETICIÓN 1176-03. ADMISIBILIDAD. SILVIA ARCE Y OTROS. MÉXICO. 14 de marzo de 2006.**

I.RESUMEN

1.El 30 diciembre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una denuncia en la que se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos ("el Estado") por las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Silvia Arce ("presunta víctima"), quien desapareció el 11 de marzo de 1998 en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. La petición fue presentada por Evangelina Arce, madre de la presunta víctima, por Justicia para Nuestras Hijas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), (en adelante, conjuntamente, "los peticionarios").

2.Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante "Convención de Belém do Pará"); y de los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Alegan asimismo que han sido conculcados las siguientes disposiciones garantizadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("la Convención Americana"): la obligación de respetar y garantizar todos los derechos (artículo 1); la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2); el derecho a la vida (artículo 4); el derecho a la integridad personal (artículo 5); el derecho a la libertad personal (artículo 7); las garantías judiciales (artículo 8); la igualdad ante la ley (artículo 24); y el derecho a la protección judicial (artículo 25).En particular, alegan que respecto a Evangelina Arce y su familia se configuran violaciones al derecho a la integridad personal (artículo 5); derecho a las garantías judiciales (artículo 8); a la protección de la familia (artículo 17); y a la protección judicial (artículo 25), todo ello en violación del deber genérico de respeto y garantía previsto en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Sostienen igualmente que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en dicho instrumento internacional. Por su parte, el Estado mexicano sostiene que las diligencias expuestas en el caso demuestran su voluntad de garantizar el respeto de los derechos humanos de toda persona, y que no se han agotado los recursos internos. En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.

3.Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará; de los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada; y de los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 24 y 25 de la Convención

Americana, en conexión con el artículo 1.1 del instrumento internacional citado; igualmente, decide publicar el presente informe en el Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

## II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4.La petición fue presentada el 30 de diciembre de 2003 mediante una comunicación de Justicia para Nuestras Hijas, CMDPDH y CEJIL. Luego del estudio inicial sobre el trámite, con base en el artículo 30.2 de su Reglamento la Comisión transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado el 18 de mayo de 2004 con el plazo de dos meses para que éste presente sus observaciones. El 3 de enero de 2005 la Comisión Interamericana reiteró al Estado mexicano la solicitud de información efectuada el 18 de mayo de 2004.El 1º de febrero de 2005 se recibió la nota del Estado que contiene las observaciones sobre la petición. Esta información se trasladó a los peticionarios el 12 de abril de 2005 con el plazo de un mes para que presentaran sus observaciones, quienes por su parte, las presentaron el 19 de mayo de 2005.Dichas observaciones se enviaron al Estado el 20 de julio de 2005, y éste presentó sus observaciones con fecha 19 de agosto del mismo año.

## III.POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Los peticionarios

5.Los peticionarios alegan que el Estado es responsable, entre otras razones, por irregularidades e inconsistencias en la investigación de los hechos referentes a la desaparición de Silvia Arce. De acuerdo con la denuncia, Silvia Arce, de 29 años de edad, fue vista con vida por su familia por última vez el miércoles 11 de marzo de 1998.El día de su desaparición, Silvia Arce salió de su domicilio a las 7:00 PM con rumbo a su trabajo como bailarina en un bar llamado "El Pachangas"[1] y nunca regresó. Octavio Atayde, padre de los hijos de Silvia Arce, fue al bar a preguntar por ella, a lo cual uno de los meseros manifestó su extrañeza de que aún no hubiera llegado a casa. Destacan los peticionarios que al mismo tiempo de la desaparición de Silvia Arce desapareció también Griselda Mares Matas, una de sus amigas cercanas.[2]

6.El 13 de marzo Oscar Atayde acudió a la casa de la señora Evangelina Arce, madre de Silvia Arce, para comunicarle que su hija no había regresado a su domicilio. Al día siguiente, Evangelina Arce se presentó a la Procuraduría General de la Justicia del estado de Chihuahua (PGJE) e interpuso la denuncia correspondiente. Igualmente, los familiares procuraron obtener información que les ayudara a esclarecer los hechos y determinar su paradero. La noche del 14 de marzo el señor Atayde regresó al bar, pero los presentes no pudieron darle mayor información. El 15 de marzo, uno de los guardias del bar les dijo que la madrugada de los hechos, el señor Avilio Melgarejo había ofrecido llevar a Silvia a la casa de ésta.[3]Los familiares transmitieron esta información a la PGJE y, luego de constatar que el vehículo del señor Melgarejo se encontraba en su casa, informaron a la policía judicial a fin de que procedieran a su búsqueda. Sin embargo, no se habría efectuado diligencia alguna hasta el 23 de marzo de 1998, 10 días después de la

desaparición. Durante la diligencia, la dueña de la casa reiteró a los oficiales lo mismo que había dicho a los familiares de la presunta víctima: que en la fecha de los hechos "había ido una mujer de las características de Silvia Arce a buscar a Avilio Melgarejo, y que iba con otro sujeto en carro blanco."

7.Afirman los peticionarios que los agentes encargados de la investigación omitieron líneas de investigación que, prima facie, podrían haber dado resultados útiles para el esclarecimiento de la desaparición de Silvia Arce.[4]Por el contrario, los peticionarios alegan que "las investigaciones se han centrado en señalamientos sobre la vida íntima de la víctima."[5]En 2002 algunos de los peticionarios asumieron la representación legal de la coadyuvancia, y la revisión de la indagatoria les permitió apreciar diversas omisiones. Entre otras, pudieron constatar que desde 1998 hasta ese momento no se había realizado diligencia alguna, motivo por el cual se solicitó la práctica de nuevas investigaciones. Evangelina Arce agrega que, en un principio, algunas de las evidencias que ella aportó no aparecían en la indagatoria; por ejemplo, menciona una grabación en la cual una persona no identificada afirma que "Silvia Arce fue asesinada por Avilio Melgarejo, y que posteriormente dejaron su cuerpo en el Municipio de Parral", que apareció tiempo después y fue transcrita recién el 15 de junio de 2002.Entre las irregularidades de la investigación, los peticionarios observan que los agentes omitieron recabar información relevante sobre el principal sospechoso;[6] que tampoco se siguieron líneas de investigación en torno a personas que podrían estar de alguna forma vinculadas con la desaparición;[7] y que no se llevaron a cabo acciones para encontrarlas.

8.Los peticionarios afirman que los hechos referidos coinciden con el patrón de desapariciones de mujeres en la región de Chihuahua en esa época. Sostienen que el Estado es responsable por la incertidumbre generada a los familiares de Silvia Arce por desconocer su paradero. Por el tiempo transcurrido sin tener noticias de Silvia Arce, los peticionarios consideran que es posible pensar que habría perdido la vida en circunstancias hasta ahora no esclarecidas. Afirman que la responsabilidad del Estado está comprometida por no haber llevado a cabo una investigación diligente al momento de la desaparición e indican que, análogamente a lo sucedido con Verónica Rivera, Silvia Arce pudo haber estado inicialmente secuestrada. Agregan que la información reunida por los familiares contiene indicios de que un agente del Estado podría haber estado involucrado. Por otra parte, señalan que la familia fue desintegrada como consecuencia de la desaparición de Silvia Arce y la incertidumbre sobre su paradero. Los peticionarios alegan que la madre sufrió el deterioro de su salud física y emocional y que recibió "un trato de hostigamiento y descalificación permanente en su trabajo realizado a través de diversas organizaciones en las que ha participado en labores de denuncia pública a nivel nacional e internacional."[8]

9.En suma, los peticionarios sostienen que hay un retardo injustificado en la investigación, pues luego de más de ocho años de los hechos, no ha habido una explicación razonable por la cual no se ha localizado a Silvia Arce, ni se ha sancionado a los responsables de los hechos denunciados, mientras su familia ha buscando incansablemente justicia, e incluso ha iniciado algunas investigaciones por cuenta propia. Alegan además que la ausencia de la figura de la desaparición forzada de personas en el ordenamiento interno conduce a que no

hay un recurso idóneo para las víctimas y que de ello se desprende que el Estado no ha cumplido con su deber de adoptar disposiciones de derecho interno para proteger a las personas bajo su jurisdicción. Identifican al factor de género como elemento determinante para que no se haya ejercido acciones de investigación exhaustivas, a pesar de que el Estado ha reconocido y aceptado sus deberes de respeto y garantía a los derechos de las mujeres.

10.Además de alegar que se configura en el caso una denegación de justicia, los peticionarios invocan la excepción a la regla de agotamiento de recursos internos prevista en el artículo 46.2 de la Convención Americana, ya que los recursos disponibles en la jurisdicción interna no han sido eficaces ni expeditos y se constata un retardo injustificado y la ausencia del debido proceso legal.

B. El Estado

11.En respuesta a la denuncia, el Estado mexicano sostiene que los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, son resultado de un fenómeno social complejo, multifacético y multifactorial que no pude ser atendido desde la sola perspectiva de la investigación policial y la administración de justicia. Afirma que es un problema que requiere de una visión integral que aborde las causas sociales y estructurales que originaron el fenómeno. Reconoce que en la situación particular de Ciudad Juárez factores tales como el narcotráfico, consumo de drogas, migración y las organizaciones delictivas agudizan la cultura de discriminación contra la mujer.[9]

12.El Estado alude a las acciones que ha tomado para atender la problemática de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Entre otras, menciona que en el ámbito de prevención se instaló por decreto del Gobernador del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHIMU), que ha impulsado la realización de varias actividades con el objetivo de dar respuesta al problema. En coordinación con la Fiscalía Especial Estatal para los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, dicho instituto da seguimiento a cada una de las investigaciones y atención de los familiares de las víctimas. El Estado menciona igualmente la creación de la Comisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Asimismo, destaca que el Congreso del estado reformó el Código Penal para hacer frente a los delitos que se identifican como repetitivos en cada uno de los casos.

13.En el campo de procuración y administración de justicia, el Estado refiere que se ha contemplado la instrumentación de un Plan Integral de Seguridad Pública; el establecimiento de una agencia de investigaciones mixta integrada por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua; la instrumentación de medidas de protección en favor de las víctimas y familiares; la atracción de líneas de investigación del ámbito federal; y que se ha gestionado el apoyo de la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos de Norteamérica (Federal Bureau de Investigation - FBI), a efecto de brindar asistencia técnica en las investigaciones.[10]

14.Menciona además el Estado la creación de una Fiscalía Especial Federal para investigar homicidios y desapariciones de mujeres en el Municipio de Ciudad Juárez, que presentó sus informes a la CIDH en junio y octubre de 2004.Indica que en el Segundo Informe de la Fiscal Especial[11], se señaló que de los 155 casos analizados, hasta ese momento se detectó la probable responsabilidad de servidores públicos que estuvieron directamente involucrados en la integración de las averiguaciones y que pudieron haber incurrido en las responsabilidades administrativas y/o penales. En total habrían sido 100 funcionarios de la PGJE los que ya fueron separados de sus cargos y enfrentan diversos procesos de carácter penal y/o administrativo.[12]El Estado considera que con estas medidas ha respondido a uno de los principales señalamientos de los familiares de las víctimas, es decir, el maltrato y negligencia de diversos funcionarios.[13]

15.Por otra parte, el Estado señala:

[E]l Gobierno de México desea aclarar lo señalado por esa ilustre Comisión en el sentido de que no ha recibido información sobre esta petición, ya […] que la presentación de información ante este órgano interamericano ha sido una constante, con lo que se demuestra la disposición del Gobierno mexicano de mantener una estrecha comunicación con la Comisión sobre el tratamiento integral que se está dando a la problemática en Cd. Juárez, Chihuahua.[14]

16.En cuanto a la desaparición de Silvia Arce, el Estado señala que este caso fue incluido en el primer paquete que revisó la Fiscal Especial Federal.[15]Añade que el 7 de julio de 2004 el caso fue remitido, por incompetencia, a la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), por haberse considerado que intervinieron más de tres personas. La mencionada agencia inició una averiguación previa por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (privación ilegal de la libertad, contra la salud y lesiones).Añaden que se siguen realizando diversas diligencias para determinar el posible paradero de Silvia Arce.

17.El Estado sostiene que uno de los presuntos sospechosos se encontraría preso en el Centro de Readaptación Judicial desde octubre de 1998, purgando una sentencia de 13 años y 6 meses de prisión por robo calificado y secuestro. A su vez, el Estado proporcionó información específica acerca del estado de las investigaciones y solicitó que se mantuviera en reserva por hallarse la misma en la etapa indagatoria, y para no comprometer el desarrollo de ésta. La información referida se hizo de conocimiento de los peticionarios y consta en el expediente de la Comisión Interamericana.

18.Por último, el Estado señala que, en el caso de Silvia Arce, ha documentado en los dos informes de la Fiscalía Especial antes mencionados, el apoyo brindado a sus familiares. Dicho apoyo habría consistido en una despensa familiar para los meses de julio a septiembre del año 2004, otorgada por la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía Especial. Asimismo, menciona que se les habría dado apoyo económico, médico, psicológico, asistencia y asesoría jurídica durante los mismos meses por parte del Instituto Chihuahuense de la Mujer y de la Fiscalía Especial.

IV.ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

A. Competencia de la Comisión ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci

19.Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a Silvia y Evangelina Arce, personas individuales respecto a quienes México se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, México es parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981, fecha en que se depositó el respectivo instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

20.Por otra parte, el Estado mexicano ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belem do Pará") el 12 de noviembre de 1998.Los hechos que motivan la petición bajo estudio tienen inicio en marzo de 1998, antes de la vigencia para México del instrumento citado. Sin embrago, los peticionarios alegan el carácter continuado de las violaciones de debido proceso, razón por la cual cabría analizar tales alegatos a partir de la vigencia sobreviniente de la Convención de Belém do Pará.[16]Un criterio similar se observa en cuanto a la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, ratificada por México el 9 de abril de 2002, pues de igual manera esta figura ha sido ampliamente reconocida como de carácter continuado en la jurisprudencia interamericana. Por consiguiente, la CIDH tiene competencia ratione temporis para analizar en la etapa de fondo los alegatos sobre presuntas violaciones de ambos instrumentos internacionales.

21.La Comisión Interamericana tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas que habrían tenido lugar dentro del territorio de México, Estado parte en dichos tratados.

B. Otros requisitos para la admisibilidad de la petición

1.Agotamiento de los recursos internos

22.El artículo 46.1.a de la Convención Americana establece que para que una petición pueda ser admitida, se requerirá "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". El artículo 46.2 de la Convención establece tres supuestos en los que no se aplica la regla del agotamiento de los recursos internos: a) que no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) que no se haya permitido al presunto lesionado

en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y c) que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Cabe destacar que estos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también a que éstos sean adecuados y efectivos. Que sean adecuados significa que la función de estos recursos, dentro del sistema de derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. Un recurso eficaz es el que permite producir el resultado para el que ha sido establecido.[17]

23.En el presente caso, las partes sostienen una controversia en relación con el cumplimiento del requisito de agotamiento de los recursos internos contemplado en el artículo 46.1.a de la Convención Americana, por lo cual corresponde a la CIDH pronunciarse al respecto. El Estado sostiene que no se ha cumplido dicho requisito, mientras que los peticionarios invocan la aplicabilidad de la excepción por considerar que hay un retardo injustificado en la sustanciación de las diligencias encaminadas a esclarecer las circunstancias de los hechos, e identificar y sancionar a los responsables.

24.Cuando un Estado alega que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, tiene a su cargo señalar cuáles deben agotarse y demostrar su efectividad. En tal caso, pasa a los peticionarios la carga procesal de demostrar que dichos recursos fueron agotados, o que se configura alguna de las excepciones del artículo 46.2 de la Convención Americana.

25.En el asunto aquí analizado, el Estado mexicano se limita a sostener que no se han agotado los recursos internos y presenta información acerca de acciones adoptadas para atender el problema de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Menciona igualmente algunas de las diligencias efectuadas en el expediente de Silvia Arce en 2004, más no presenta información específica que lleve a concluir que el recurso está revestido de la idoneidad y efectividad que requieren los parámetros internacionales en materia de derechos humanos.

26.Sin entrar a analizar los argumentos desarrollados por cada parte acerca de la presunta violación de las garantías judiciales y protección judicial, la Comisión Interamericana observa de manera preliminar que, a la fecha de aprobación de este informe, han transcurrido ocho años desde la fecha en que desapareció Silvia Arce y que dicho hecho fue denunciado a las autoridades competentes. Conforme a la información disponible a la CIDH, hasta el momento no se han esclarecido completamente los hechos denunciados ni se ha determinado si hay responsabilidad imputable a funcionarios gubernamentales, como fue denunciado por los peticionarios.Asimismo, la Comisión interamericana observa que el Estado no ha proporcionado información específica sobre avances en esta investigación en particular que conducirían a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

27.Asimismo, la Comisión Interamericana observa que los peticionarios alegan que los hechos del presente caso se dan en un contexto de numerosos asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, que son seguidas de impunidad por razones imputables a las autoridades.

28.A la luz de todo lo expresado más arriba, y de las constancias del expediente de este asunto, la Comisión Interamericana establece --a efectos de la admisibilidad-- que se ha verificado un retardo injustificado en la decisión de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto a los hechos denunciados. En consecuencia, la CIDH aplica la excepción al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana.

2.Plazo de presentación

29.El artículo 46.1.b de la Convención Americana dispone que la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos. La Comisión Interamericana considera que tampoco resulta exigible este requisito a la petición bajo estudio, toda vez que se ha aplicado la excepción del artículo 46.2.c y la petición fue presentada antes de que se dictara sentencia firme, pero dentro del plazo razonable mencionado en el artículo 32.2 del Reglamento.

3.Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

30.El expediente de la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se hallase pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente decidido por la Comisión Interamericana. Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones previstas en el artículo 46.1.d y en el artículo 47.d de la Convención Americana.

4.Caracterización de los hechos alegados

31. En el presente caso los peticionarios sostienen que el Estado es responsable por presuntas violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, igualdad ante la ley, protección judicial, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, principios garantizados por la Convención Americana, la Convención de Belem do Pará y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Por su parte, el Estado alega que los peticionarios no han agotado los recursos internos, y que por consiguiente no se cumplen los requisitos de admisibilidad.

32. Al respecto, la Comisión considera que no corresponde en esta etapa del proceso determinar si se produjeron o no las alegadas violaciones. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver si los hechos expuestos tienden a caracterizar posibles violaciones a la Convenciones, como estipula el artículo 47.b de la Convención Americana.

33. El criterio de apreciación de estos extremos es diferente al requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión Interamericana debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado en la Convención Americana.[18] Este análisis tiene carácter sumario, y no implica un prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia. La

distinción entre el estudio correspondiente a la declaración sobre la admisibilidad y el requerido para determinar una violación se refleja en el propio Reglamento de la CIDH, que establece de manera claramente diferenciada las etapas de admisibilidad y fondo.[19]

34. Los alegatos de los peticionarios se refieren a hechos que, de ser ciertos, caracterizarían violaciones de varios derechos garantizados por la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará, y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. La CIDH estima que los hechos expuestos ameritan un examen de manera más precisa y completa en la etapa de fondo. Por otra parte, aunque los peticionarios no hayan invocado el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud del principio iura novit curia la Comisión admitirá alegatos referentes a presuntas violaciones de dicho artículo.

35. La CIDH considera que, de ser comprobados los hechos, caracterizarían violaciones de los derechos de Silvia Arce garantizados en los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento. De la misma manera, considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones al artículo 7, de la Convención de Belém do Pará; así como también los artículos I y III de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. En lo que respecta a Evangelina Arce, la Comisión considera que de ser comprobados, los hechos caracterizarían violaciones a los derechos garantizados por los artículos 5, 8, 17, y 25 de la Convención.

36. Respecto al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, la CIDH entiende que en este caso corresponde analizar en la etapa de fondo si el Estado cumplió con su obligación de tomar las medidas necesarias para asegurar la eficacia de los derechos protegidos en la Convención Americana. Particularmente, se analizará en dicha etapa si el Estado adoptó medidas o políticas necesarias en la época de los hechos.[20]

37.En consideración de todo lo anterior, la CIDH concluye que los peticionarios han acreditado prima facie los extremos requeridos en el artículo 47.b de la Convención Americana.

V.CONCLUSIONES

38. La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1. Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere, respecto a Silvia Arce, a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 y 2 de dicho instrumento; del

artículo 7 de la Convención de Belém do Pará; y de los artículos I y III de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Respecto a Evangelina Arce, declarar admisibles los artículos 5, 8, 17, y 25 en conexión con el artículo 1.1 de la Convención Americana.

2.Notificar esta decisión a las partes.

3.Continuar con el análisis de fondo de la cuestión, y

4.Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 14 días del mes de marzo de 2006.(Firmado: Evelio Fernández Arévalos, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Florentín Meléndez, Segundo Vicepresidente; Clare K. Roberts, Freddy Gutiérrez, Paolo G. Carozza y Víctor E. Abramovich, Miembros de la Comisión).

[1] Declaración testimonial de Octavio Atayde Palomino, padre de los tres hijos de Silvia.
[2] Los peticionarios no aportan mayor información acerca del estado de las investigaciones entorno al paradero de Griselda Mares, sólo señalan que el 17 de marzo de 1998 la madre de Griselda Mares reportó su desaparición ante las autoridades.
[3] Avilio Melgarejo Rivero trabajaba en El Pachangas como guardia de seguridad desde finales de 1997, y luego fue novio de Silvia Arce. Comunicación de los peticionarios de 30 de diciembre de 2003, pág. 5.
[4] Los peticionarios indican que otra de las bailarinas del bar, Verónica Rivera, se presentó a denunciar que ella misma había sido secuestrada por Avilio Melgarejo y otras dos personas más, una de las cuales identificó como un policía judicial. La señora Rivera habría sido custodiada toda la noche y la dejaron salir al día siguiente, bajo la condición de que no contara nada. Sin embargo, a pesar de su temor, Verónica Rivera quiso denunciar los hechos porque creía que podía haber alguna conexión con la desaparición de Silvia Arce. En su denuncia, Verónica Rivera aportó información acerca de las personas responsables de su secuestro y del lugar donde la habían mantenido durante ese tiempo. El 14 de abril de 1998 se hizo la consignación por el delito de secuestro en agravio de Verónica Rivera, y se señaló como presuntos responsables a Avilio Melgarejo, Carlos Cárdenas y Jorge García Paz. Sin embargo, el 4 de mayo de 1998 la orden de aprehensión fue negada por considerarse que faltaban elementos para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad; entre otras cosas, se estableció que el dicho de Verónica Rivera carecía de validez por tratarse de una servidora del sexo.
[5] Comunicación de los peticionarios de 30 de diciembre de 2003.
[6] Los peticionarios sostienen que "no se pidió el apoyo necesario y fundamental a las instituciones relacionadas para la obtención de mayor información de los teléfonos y direcciones…tampoco se pidió información a la Policía Federal para conocer los nombres de las personas que pudieran estar vinculadas en la investigación de los actos de venta de drogas, a fin de fortalecer la investigación y actuar con la prontitud requerida". Comunicación de los peticionarios de 30 de diciembre de 2003.

[7] Los peticionarios afirman que un policía judicial pudo estar involucrado con la desaparición, pero que no habrían sido agotadas las investigaciones en torno a ese supuesto vínculo. Comunicación de los peticionarios de 30 de diciembre de 2003.
[8] Comunicación de los peticionarios de 30 de diciembre de 2003, pág. 21.
[9] Comunicación del Estado mexicano de 1° de febrero de 2005, pág. 1.
[10] Comunicación del Estado mexicano de 1° de febrero de 2005, págs. 3-8.
[11] Entregado durante la audiencia celebrada el 21 de octubre de 2004, en el marco de 121 Periodo Ordinario de Sesiones.
[12] Dicha lista incluye 8 fiscales, 8 agentes del Ministerio Público, 10 subagentes, 2 Subjefes de Oficina de Averiguaciones Previas, 27 agentes de la Policía Judicial y 25 peritos.
[13] Comunicación del Estado mexicano de 1° de febrero de 2005, págs. 7-8.
[14] Comunicación del Estado mexicano de 1° de febrero de 2005, pág. 2.
[15] Comunicación del Estado mexicano de 1° de febrero de 2005, pág. 8.
[16] Ver, en este sentido, CIDH, Caso 11.516, Ovelario Tames, Informe Anual 1998, (Brasil) párr.26 y 27, Caso 11.405 Newton Coutinho Mendes y otros, Informe 1998 (Brasil),Caso 11.598 Alonso Eugenio da Silva, Informe Anual 1998 (Brasil), par. 19 y 20, Caso 11.287 João Canuto de Oliveira, Informe Anual 1997 (Brasil). Caso 12.051, Maria Da Penha Maia Fernandes, Informe Anual 2001(Brasil).Ver igualmente Corte IDH, Caso Blake, Sentencia de Excepciones Preliminares de 2 de julio de 1996, párrafos 39 y 40; Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 155; y Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, párr. 163.Igualmente ha aceptado en el caso Genie Lacayo (párrafos 21 y 24 Excepciones Prel.) conocer sobre la violación de los artículos 2, 8, 24 y 25 que formaban parte de una denegación de justicia que comenzaba previamente a la aceptación no retroactiva de la competencia de la Corte, pero continuaban luego de ella. Además, la noción de situación continuada cuenta igualmente con reconocimiento judicial por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos, en decisiones sobre casos relativos a detención que remontan a los años sesenta; y por parte del Comité de Derechos Humanos cuya práctica bajo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y su primer Protocolo Facultativo, a partir del inicio de los años ochenta, contiene ejemplos del examen de situaciones continuadas generando hechos que ocurrían o persistían después de la fecha de entrada en vigor del Pacto y Protocolo con respecto al Estado en cuestión, y que constituían per se violaciones de derechos consagrados en el Pacto.
[17] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C Nº 4, párrs. 63-64; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 66-67; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párrs. 87-88.
[18] Ver CIDH, Informe No. 128/01, Caso 12.367, Herrera y Vargas ("La Nación"), Costa Rica, 3 de diciembre de 2001, párr. 50.
[19] Ver CIDH, Informe No. 31/03, Caso 12.195, Mario Alberto Jara Oñate y otros, Chile, 7 de marzo de 2003,
párr. 41.
[20] Ver CIDH, Informe Nº 16/05, Petición 281/02, Admisibilidad, Claudia Ivette González, México, 2005, Párr. 32; Informe No 17/05, Petición 282/02, Admisibilidad, Esmeralda Herrera Monreal, México, 2005, párr. 32;e Informe No 18/05, Petición 283/02, Admisibilidad, Laura Berenice Ramos Monárrez, México, 2005, párr. 31.

**INFORME Nº 93/06. PETICIÓN 972-03. ADMISIBILIDAD. VALENTINA ROSENDO CANTÚ[1] Y OTROS. MÉXICO. 21 DE OCTUBRE DE 2006.**

I.RESUMEN

1. El 10 de noviembre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una denuncia en la que se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos ("el Estado", "el estado mexicano") por la detención ilegal, violación y tortura de Valentina Rosendo Cantú, indígena del pueblo Tlapaneca Me`paa, ("presunta víctima"), así como la posterior falta de investigación de tales hechos. La petición fue presentada por la presunta agraviada, la Organización Indígena de Pueblos Mextecos y Tlapanecos AC. (OIPMT), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" AC y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (en adelante, conjuntamente, "los peticionarios").

2.Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("la Convención Americana"): el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la libertad personal (artículo 7), el derecho a las debidas garantías judiciales (artículo 8), el derecho a la protección judicial (artículo 25), así como el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (artículo 1.1).Asimismo, alegan la violación de los artículos 3, 4, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención Belém do Pará", el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y los artículos 1, 16, 34 y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sostienen igualmente que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana.

3. El Estado mexicano, por su parte, sostiene que la Procuraduría General de Justicia Militar inició una investigación previa de oficio sobre el caso, y que acordó su competencia para continuar con las investigaciones del caso cuando el ministerio público local declinó su competencia a favor del fuero militar. El Estado sostiene que no se han agotado los recursos internos y en consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.

4.Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que la petición es admisible, a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 5.1, 7, 8.1, 11, 19 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1.1 de dicho instrumento internacional, además del artículo 7 de la Convención Belem do Pará y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La Comisión decide además, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

## II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5.La petición fue presentada el 10 de noviembre de 2003. Luego del estudio inicial sobre el trámite, con base en el artículo 30.2 de su Reglamento, la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado el 10 de diciembre de 2003, y fijó el plazo de dos meses para que éste presentara sus observaciones.El17 de febrero de 2004 el Estado solicitó una prórroga al plazo concedido. El 23 de marzo de 2004 el Estado respondió a las observaciones de los peticionarios. La CIDH trasladó esta información a los peticionarios el 14 de abril de 2004.

## III.POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Los peticionarios

6. Los peticionarios alegan que el Estado es responsable, entre otras razones, por la detención ilegal, violación y tortura de Valentina Rosendo Cantú, así como la posterior falta de investigación de tales hechos. De acuerdo con la denuncia Valentina Rosendo Cantú, de 17 años de edad, fue agredida y violentada sexualmente por dos miembros del Ejército mexicano, mientras que otros seis militares observaban.

7.Los peticionarios alegan que, el 16 de febrero de 2002, aproximadamente a las 2 de la tarde, Valentina Rosendo Cantú, indígena del pueblo Tlapaneca y vecina de Barranca Bejuco, se encontraba lavando ropa en un arroyo ubicado unos 200 metros de su domicilio cuando aparecieron dos soldados acompañados de un civil que traían amarrado. Dos de los soldados se acercaron a la presunta agraviada mientras que los otros la rodearon y enojados le preguntaron dónde estaban los encapuchados. Ella respondió que no conocía a ninguno lo que provocó que un militar le apuntara con un arma y amenazándola con dispararle le preguntó si ella era de Barranca Bejuco. La presunta agraviada respondió que no, que era de Caxiltepec. Uno de los militares le mostró una fotografía y le preguntó si conocía a la persona a lo que ella contestó que no.

8.Según los peticionarios, los militares le continuaron preguntando sobre unos nombres escritos en una lista y si los conocía, a lo que ella respondía negativamente. Acto seguido el militar que le apuntaba con el arma le dio un culatazo en el estómago y por el golpe cayó al piso boca arriba sobre unas piedras desmayándose momentáneamente. Al recobrar el conocimiento se sentó y uno de los militares tomándole de los cabellos y de manera violenta le dijo: "¿Cómo que no sabes, no eres de Barrnaca Bejuco?", contestándoles una vez más que no, que era de Caxitepec, que vivía en Barranca Bejuco porque se acababa de casar. Los dos militares procedieron a rasguñarle la cara, le quitaron la falda, el fondo y la pantaleta que llevaba puesta y la acostaron en el piso. Uno de ellos le abrió las piernas, se bajó su pantalón y truza y la violó por un lapso de 5 a 6 minutos y el otro militar hizo lo mismo, mientras otros seis militares presenciaban los hechos. Apenas pudo librarse, la presunta agraviada pudo pararse "prácticamente desnuda y corrió logrando pasar el cerco de los militares que la rodeaban, en tanto los castrenses la observaban burlonamente".

Corrió a su casa e informó a sus familiares, entre ellos su esposo F., sobre los hechos, con quien decidió reportarlos al Delegado de la comunidad.

9.Según los peticionarios, por encontrarse mal de salud, la presunta agraviada acudió a la clínica de salud pública de la comunidad Caxitepec, Municipio de Acatapc para ser atendida y dejar constancia de la violación de la que fue víctima, sin embargo el personal del salud no la atendió aduciendo que "no querían problemas con los militares, que además no la podían atender ahí porque no contaban con el equipo necesario".[2]Los peticionarios alegan que después de conseguir dinero para el transporte, acudió al Hospital General dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero en donde fue revisada y en donde se le extendió una constancia que establecía traumatismo en el abdomen por los golpes recibidos, pero sin sugerir estudios de laboratorio ni recetó medicamentos para los malestares. Asimismo, no se presentó el caso al Ministerio Público como correspondía. Los peticionarios alegan que la presunta agraviada tuvo que tratarse del virus de papiloma humano que aparentemente contrajo a raíz de la violación sexual por sus propios medios y que su estado psicológico a causa de los hechos aún no ha sido tratado.

10. Los peticionarios alegan que el 8 de marzo de 2002 la presunta agraviada presentó denuncia contra los elementos castrenses ante el Ministerio Público del Fuero Común, en Ayutla de los Libres, Guerrero por los delitos de violación sexual, tortura, detención ilegal y los que resultasen de la investigación. Es así que se dio apertura a la Averiguación Previa ALLE/SC/02/62/2002.Después de un conflicto de competencia para ver el caso,[3] el 5 de abril del 2002 el Director General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Guerrero envió la Averiguación Previa a la Agencia del Ministerio Público especializada de delitos sexuales y atención a delitos de violencia intrafamiliar del distrito judicial de Morelos con domicilio en Tlapa de Comonfort. Junto con la investigación se envió el certificado médico ginecológico de fecha 19 de marzo de 2002 el mismo que según los peticionarios, dado el tiempo transcurrido desde la presunta agresión sexual hasta la realización del examen médico que, no detectaba vestigios de penetración vaginal pero sí rasgos corporales de violencia.[4]Por su parte, Cristina Estrada Martínez, titular de la Agencia Investigadora del Ministerio Público especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del distrito judicial de Morelos, comunicó a la Procuraduría General de Justicia del Estado que, con fecha 15 de abril del 2002 dieron inicio a la Averiguación Previa del caso. Según los peticionarios, desde esta fecha realmente se da inicio a las investigaciones, pues el Agente Investigador ordena la realización de las primeras pruebas.

11.Según los peticionarios, el 08 de abril de 2002, el subprocurador de procedimientos penales, Miguel Barreto Sedeño, le solicitó a la Agencia encargada de la investigación del caso "realizar un análisis jurídico con el objeto de ver la posibilidad de que se remita al Ministerio Público del Fuero Militar que corresponda, por corresponderle al fuero castrense de acuerdo a la aplicación de la ley a las personas, a fin de que se esclarezca y se castigue a los responsables."[5]Por este motivo, el 16 de mayo de 2002, la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común encargada del caso, se declaró incompetente y remitió la averiguación previa al Director General de averiguaciones previas de la Procuraduría

General de Justicia del Estado de Guerrero para que se la envíe al Ministerio Público Militar correspondiente.

12.Ante esta decisión, los peticionarios alegan que la presunta agraviada interpuso recurso de amparo el 06 de junio de 2002 ante el Primer Juzgado de Distrito del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo, Guerrero, reclamando la declinación de competencia de la Procuraduría Estatal, aduciendo que deben ser las autoridades civiles quienes investiguen y resuelvan los delitos de los cuales fue objeto y no las autoridades militares por carecer de independencia e imparcialidad. El amparo fue declarado improcedente el 30 de agosto de 2002. Ante esta decisión, la presunta agraviada interpuso recurso de revisión de amparo, en cuya sentencia se confirmó la improcedencia con fecha 12 de noviembre de 2002.

13.Según los peticionarios, ante este hecho, con fecha de 28 de noviembre de 2002, la presunta agraviada solicitó mediante escrito al Agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 Zona Militar con residencia en Chilpancingo, Guerrero, que informara si aceptó o no la competencia declinada por la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común especializada en delitos sexuales y atención a delitos de violencia intrafamiliar del distrito judicial de Morelos. En el supuesto afirmativo, solicitó que se abstuviera de conocer del asunto por ser inconstitucional la competencia militar. Al no ser notificada de su solicitud, la presunta agraviada acudió al Ministerio Público Militar en mención, en donde se le informó que la investigación fue enviada a la Procuraduría General de Justicia Militar de la ciudad de México. Ante este hecho, abogados del Centro PRODH se apersonaron a la institución y el 20 de enero de 2003, la Procuraduría General de Justicia Militar emitió un escrito en el que informa que aceptó la competencia y que no la declinará a las autoridades civiles. Ante este hecho, el 11 de febrero del 2003, la presunta agraviada interpuso recurso de amparo, el mismo que fue resuelto por el juez Quinto de Distrito "B" de Amparo en Material Penal en el Distrito Federal, quien con fecha 29 de abril de 2003 ordenó sobreseer el juicio de garantías.

14.Si bien ante la resolución del amparo cabía la interposición del recurso de revisión del amparo, los peticionarios alegan que la presunta agraviada decidió no interponerlo debido a que "el recurso de revisión de amparo indirecto carece de idoneidad y padece de ineficacia por estar de antemano destinado al fracaso."[6]Para ello se basa en una serie de precedentes que dan cuenta que el Poder Judicial no considera violatorio que el Fuero Militar vea casos de violación de derechos humanos perpetrados a civiles por parte de personal militar. Por esta razón los peticionarios invocan el agotamiento de los recursos internos establecido en el artículo 46.1.a, así como la excepción a la regla de agotamiento de recursos internos prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana.

B. El Estado

15.En respuesta a la denuncia, el Estado mexicano sostiene que, en marzo de 2002, la Procuraduría General de Justicia Militar inició una Averiguación Previa del caso bajo el número 35ZM/05/2002 como reacción a una nota periodística en la que se acusaba a

personal militar de quejas y golpes a una joven del pueblo Tlapaneca. Esta Averiguación Previa iniciada paralelamente a la que inició la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, fue enviada al Sector Central de la Procuraduría General de Justicia Militar bajo el número SC/069/2002-XIV.

16.El Estado alega que el 15 de mayo de 2002 la Procuraduría General de Justicia de Guerrero decidió declinar su competencia en el caso a favor del fuero militar y el 20 de enero de 2003, la Procuraduría General de Justicia Militar acordó su competencia para continuar con las averiguaciones del caso.

17. El Estado señala que el 5 de marzo de 2002, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDDH) inició una queja con motivo de la denuncia interpuesta por la presunta agraviada y su representante. Posterior a algunas diligencias, la CDDH remitió el expediente de queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por razones de competencia debido a que probablemente "los responsables de la violación eran servidores públicos." Sobre el particular, el Estado aduce que la CNDH en diciembre de 2002 declaró concluido el expediente debido a que no había suficientes elementos para determinar que la peticionaria hubiera sido objeto de una violación sexual.

18. El Estado alega que aún no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna debido a que este caso se encuentra en la primera etapa del procedimiento penal, a saber el procedimiento de la averiguación previa. Para ello, se han realizado diversas actuaciones como declaraciones ministeriales de la peticionaria, de miembros de la comunidad y de diversos miembros del personal perteneciente a las fuerzas armadas algunos de los cuales habrían manifestado que son falsos los hechos denunciados por la presunta agraviada.[7] Asimismo, el Estado aduce que los peticionarios al no impugnar el último recurso de amparo presentado, causó ejecutoria.

19. Asimismo según el Estado se llevó a cabo una diligencia de confronta en donde la presunta agraviada no hizo ningún señalamiento directo en contra de alguno de los elementos militares que se le pusieron a la vista para que los identifique. El Estado sostiene que esta situación se dio aún cuando según un testimonio del soldado de infantería, Eudelio Flores Bernardino, en declaración ante el Agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 Zona militar sostuvo "… después cuando le ponían en fila al personal militar vi que el señor Encarnación Sierra se acercó a la señora Valentina Rosendo Cantú para decirle en dialecto tlapaneco que escogiera a cualquier de ellos… diciéndole la señora Valentina Rosendo Cantú al señor Encarnación Sierra Morales que no era ninguno de ellos…"[8]

20.El Estado señala además que la investigación no ha concluido en gran parte por "la falta de interés procesal de la peticionaria, quien no se ha presentado al desahogo de diversas diligencias argumentando temor o miedo por comparecer antes las instancias militares debido a que fueron elementos del ejército quienes la violaron".[9]Al respecto el Estado señala que se encuentra en la mejor disposición para ofrecer a la presunta agraviada las condiciones necesarias para facilitar su comparecencia ante el Ministerio Público.

21.El Estado manifiesta que este caso ha sido de conocimiento del Relator Especial sobre la Tortura, la Relatoría Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y de la Organización Mundial contra la Tortura a través de la proporción de información solicitada y en donde se ha señalado que las investigaciones "no han sido expeditas por falta de interés procesal por parte de la señora Valentina Rosendo Cantú."[10]En resumen, al no haberse agotado los recursos internos, el Estado considera inadmisible la petición.

IV.ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

A. Competencia de la Comisión rationae personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci

22.Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 para presentar denuncias ante la CIDH. La petición establece como presunta víctima a Valentina Rosendo Cantú, persona individual respecto de quien el estado Mexicano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, México es parte de la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación. Es por ello que la Comisión tiene competencia rationae personae para examinar la petición.

23.Por otro lado, el Estado mexicano ratificó la Convención de Belem do Pará el 12 de noviembre de 1998 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 22 de junio de 1987. Por consiguiente, la CIDH tiene competencia rationae temporis para analizar la etapa de fondo de los alegatos sobre presuntas violaciones de estos instrumentos internacionales.

24.La CIDH tiene competencia ratione loci y materiae para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos humanos protegidos en la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que se habrían perpetrado dentro del territorio de México, Estado parte en estos tratados. La CIDH manifiesta que no tiene competencia para aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño pero que sin embargo la misma puede ser utilizada en la interpretación de las disposiciones contenidas en la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

B. Otros requisitos para la admisibilidad de la petición

1.Agotamiento de los recursos internos

25.El Estado mexicano sostiene que los recursos internos no se han agotado por lo tanto, el caso se encuentra en etapa preliminar dentro del proceso penal.Los peticionarios alegan que se han agotado los recursos internos al haber sido presentados y denegados un recurso de amparo y el subsiguiente recurso de revisión del amparo que argumentaban la ausencia

de independencia e imparcialidad del fuero militar, y posteriormente un segundo recurso de amparo bajo los mismos supuestos. Los peticionarios también invocan la aplicabilidad de la excepción de agotamiento de recursos internos por considerar que hay un retardo injustificado producto de la intervención de un organismo incompetente que carece de imparcialidad y voluntad.

26.En primer término, corresponde aclarar cuáles son los recursos internos que deben ser agotados conforme a la letra y el espíritu del artículo 46.1.a de la Convención Americana. Esta norma indica que para que una petición sea admitida, se requerirá que "..se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". La Corte Interamericana ha interpretado en este sentido que sólo deben ser agotados los recursos adecuados para subsanar las violaciones presuntamente cometidas. El que los recursos sean adecuados significa que:

la función de esos recursos dentro del sistema de derecho interno sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable.[11]

27.La jurisprudencia de la Comisión reconoce que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal hasta sus últimas consecuencias[12] y que, en esos casos, éste constituye la vía idónea para esclarecer los hechos. Igualmente, tanto la Corte Interamericana como la Comisión han reafirmado el deber del Estado de investigar toda violación de los derechos humanos, juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y evitar la impunidad.[13] La Comisión considera que los hechos alegados por los peticionarios en el presente caso involucra la presunta vulneración de un acto que se traduce en la legislación interna en un delito perseguible de oficio y que por lo tanto es este proceso penal, impulsado por el Estado mismo, el que debe ser considerado a los efectos de determinar la admisibilidad del reclamo.

28.En cuanto al empleo del fuero militar para juzgar a miembros del Ejército presuntamente implicados, la Comisión se ha pronunciado en forma reiterada en el sentido de que la jurisdicción militar no constituye un foro apropiado y por lo tanto no brinda un recurso adecuado para investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana.[14]

29.Por lo tanto, dadas las características del presente caso, la Comisión considera que resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46.2.a de la Convención Americana, por lo cual el requisito previsto en materia de agotamiento de recursos internos no resulta aplicable. Tampoco resulta aplicable el cumplimiento con el plazo de seis meses previsto en el artículo 46.1.b de la Convención, toda vez que la petición fue presentada dentro del

plazo razonable al cual hace referencia el artículo 32.2 de su Reglamento para los casos en los cuales no se ha dictado sentencia firme con anterioridad a la presentación de la petición.

30.Sólo resta señalar que la invocación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos allí consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46.2, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo, vis á vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cabe aclarar que las causas y los efectos que han impedido el agotamiento de los recursos internos en el presente caso serán analizados, en lo pertinente, en el Informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente configuran violaciones a la Convención Americana.

2.Duplicación de procedimientos y cosa juzgada

31. El expediente de la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se hallase pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente decidido por la Comisión Interamericana. Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones previstas en el artículo 46.1.d y en el artículo 47.c de la Convención Americana.

3.Caracterización de los hechos alegados

32. En el presente caso los peticionarios sostienen que el Estado es responsable por presuntas violaciones al derecho a la integridad personal, al derecho a la libertad personal, al derecho a las debidas garantías judiciales, el derecho a la protección judicial al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho una vida libre de tortura, así como el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. El Estado mexicano, por su parte sostiene que aún no se han agotado los recursos internos.

33. Al respecto, la Comisión considera que no corresponde en esta etapa del proceso determinar si se produjeron o no las alegadas violaciones. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver si los hechos expuestos tienden a caracterizar posibles violaciones a la Convenciones, como estipula el artículo 47.b de la Convención Americana.

34. El criterio de apreciación de estos extremos es diferente al requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión Interamericana debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia contiene elementos de aparente violación o violaciones

de la Convención Americana. Este análisis tiene carácter sumario, y no implica un prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia.

35. Los alegatos de los peticionarios se refieren a hechos que, de ser ciertos, caracterizarían violaciones de varios derechos garantizados por la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará, y la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura. La CIDH estima que los hechos expuestos ameritan un examen de manera más precisa y completa en la etapa de fondo. Por otro lado, aunque los peticionarios no hayan invocado los artículos 11 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, en virtud del principio iura novit curia la Comisión admitirá alegatos referentes a presuntas violaciones de dichos artículos.

36.La CIDH considera que, de ser comprobados los hechos, caracterizarían violaciones de los derechos de Valentina Rosendo Cantú garantizados en los artículos 5.1, 7, 8.1, 11, 19 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículos 1.1 de dicho instrumento. De la misma manera, considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará; así como también los artículos 1, 6 y 8 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura.

37.En consideración de todo lo anterior, la CIDH concluye que los peticionarios han acreditado prima facie los extremos requeridos en el artículo 47.b de la Convención Americana.

V.CONCLUSIONES

38. La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere, respecto a Valentina Rosendo Cantú, a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 5.1, 7, 8.1, 11, 19 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones generales consagradas en el artículo 1.1 de dicho tratado, además del artículo 7 de la Convención Belém do Pará y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

2.Notificar esta decisión a las partes.

3.Continuar con el análisis de fondo de la cuestión, y

4.Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 21 días del mes de octubre de 2006. (Firmado): Evelio Fernández Arévalos, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Florentín Meléndez, Segundo Vicepresidente; Freddy Gutiérrez, Paolo G. Carozza y Víctor E. Abramovich, Miembros de la Comisión.

[1] Por solicitud expresa de la víctima, se consigna su nombre completo en la petición.

[2] Comunicación de los peticionarios del 6 de noviembre de 2003, pág. 3.

[3] El 18 de marzo del 2002 la averiguación previa ALLE/SC/02/62/2002 fue remitida a la Dirección General de Averiguaciones Previas por incompetencia, para que a través de dicha Dirección General se enviara la misma a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Morelos, para que ésta agencia sea la encargada de dar seguimiento a la investigación debido a que los hechos se realizaron dentro del perímetro jurisdiccional del Distrito Judicial de Morelos. El 28 de marzo del 2002 mediante oficio PGJE/DGAP/2247/2002, el Director de Averiguaciones Previas regresa las actuaciones para que se continúe con la investigación en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Allende, en Ayutla los Libres, Guerrero.

[4] Comunicación de los peticionarios del 6 de noviembre de 2003, pág. 4

[5] Comunicación suscrita por el Subprocurador de Procedimientos Penales Miguel Barreto Sedeño de fecha 8 de abril de 2002, oficio 0676.

[6] Comunicación de los peticionarios del 6 de noviembre de 2003, pág. 12.Asimismo, los peticionarios presentan un boletín de prensa Num. 025 emitido por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA)en el que rechazan la posibilidad de que elementos del ejército hubieran abusado de la presunta agraviada.

[7] Comunicación del Estado mexicano del 23 de marzo del 2004, págs. 3 y 4.

[8] Comunicación del Estado mexicano del 23 de marzo del 2004, pág. 5.

[9] Comunicación del Estado mexicano del 23 de marzo del 2004, pág. 7.

[10] Comunicación del Estado mexicano del 23 de marzo del 2004, pág. 3

[11] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4., párr. 63.

[12] Informe Nº 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Informe Anual de la CIDH 1997, párrs. 96 y 97.Ver también Informe N° 55/97, párr. 392.

[13] CIDH, Informe de Fondo, N° 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandes, Brasil, 16 Abril 2001, párr. 43, citando Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4., párr. 176 y Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5., párr. 175; CIDH, Informe de Fondo, N° 53/01, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, México, 4 Abril 2001, párr. 84.

[14] CIDH Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1999), pág. 175; Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1993), pág. 246; Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil (1997), págs. 40-42.Asimismo, la Corte Interamericana ha confirmado que la justicia penal militar sólo constituye un ámbito adecuado para juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Corte I.D.H., Caso Durand y Ugarte, Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68., párr. 117.

**INFORME Nº 94/06. PETICIÓN 540-04. ADMISIBILIDAD. INÉS FERNÁNDEZ ORTEGA[1] Y OTROS. MÉXICO. 21 DE OCTUBRE DE 2006.**

I.RESUMEN

1. El 14 de junio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una denuncia en la que se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos ("el Estado", "el estado mexicano") por la detención ilegal, violación y tortura en agravio de Inés Fernández Ortega ("presunta víctima"), indígena del pueblo Tlapaneca Me`paa, así como la posterior falta de investigación de tales hechos. La petición fue presentada por la presunta agraviada, la Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos AC. (OIPT) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" AC, (en adelante, conjuntamente, "los peticionarios").

2.Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("la Convención Americana"): el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la libertad personal (artículo 7), el derecho a las debidas garantías judiciales (artículo 8), el derecho a la protección de la honra y dignidad humana (artículo 11), el derecho a la protección a la familia (artículo 17), el derecho a la propiedad privada (artículo 21), el derecho a la protección judicial (artículo 25) así como el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (artículo 1.1).Asimismo, alegan la violación de los artículos 3, 4, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención Belem do Pará", y del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Sostienen igualmente que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana.

3. El Estado mexicano, por su parte, sostiene que la Procuraduría General de Justicia Militar inició una investigación de oficio sobre el caso, que el ministerio público local declinó su competencia a favor del fuero militar, y que ni la presunta víctima ni los testigos acudieron al ministerio público militar a comparecer a pesar de haber sido notificadas en reiteradas ocasiones. Asimismo sostiene que aún no se han agotado todas las diligencias de la investigación para poder identificar a los responsables del delito.

4. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que la petición es admisible, a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 5.1, 7, 8.1, 11, 17, 19, 21, y 25 de la Convención Americana, todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1.1 de dicho instrumento

internacional, el artículo 7 de la Convención Belém do Pará y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La Comisión decide además, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

## II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5.La petición fue recibida el 14 de junio de 2004. La Comisión transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado el 2 de febrero de 2005 fijando el plazo de dos meses para que éste presente sus observaciones. El 1º de abril de 2005 el Estado solicitó una prórroga al plazo. El 12 de julio de 2005 el Estado respondió a las observaciones de los peticionarios. El 18 de julio de 2005,la CIDH trasladó las observaciones del Estado a los peticionarios.

6.Posterior a la presentación de la petición, con fecha de 10 de enero de 2005, se recibió una solicitud de medidas cautelares a favor de Obtilia Eugenio Manuel, una de las peticionarias de este caso integrante de la Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos AC. (OIPT), a consecuencia de amenazas y hostigamiento que habría sufrido debido a su rol en la defensa de este caso y otros similares. La medidas cautelares fueron otorgadas el 14 de enero de 2005 bajo el número MC 6-05.

## III.POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Los peticionarios

7. Los peticionarios alegan que el Estado es responsable, entre otras razones, por la detención ilegal, la violación y tortura en agravio de Inés Fernández Ortega ("presunta víctima"), indígena del pueblo Tlapaneca Me`paa, así como la posterior falta de investigación de tales hechos. De acuerdo con la denuncia Inés Fernández Ortega, de 29 años de edad, fue agredida sexualmente por miembros del Ejército mexicano.

8.De acuerdo con la denuncia, el 22 de marzo de 2002, aproximadamente a las 3 de la tarde, Inés Fernández Ortega, se encontraba en el interior de su domicilio cuando 3 soldados se introdujeron en el interior de su cocina sin su consentimiento, mientras que 9 soldados se quedaron en su patio. En el interior también se encontraban los hijos de la presunta agraviada, todos menores de edad, quienes al ver la situación huyeron por miedo hacia la casa de su abuelo Raymundo Prisciliano Jesús. Los soldados que entraron al domicilio de la presunta agraviada le preguntaron sobre la ubicación de su marido y sobre la carne que tenía en su patio. Al no contestar y permanecer en silencio por no hablar español, los soldados se enfurecieron y seguidamente la amenazaron con sus armas, le ordenaron que se tirara al suelo y la violentaron sexualmente: "Ya en el suelo el soldado con su mano derecha la sujetó de las dos manos y con su mano izquierda la bajó la pantaleta. Acto seguido ese soldado se bajó su pantalón hasta las rodillas y se le encimó y comenzó a violarla por un lapso de aproximadamente 10 minutos. Los otros dos militares siendo cómplices observaban y rodeaban a Inés." Una vez que los soldados terminaron de agredirla, salieron del interior del domicilio y se dirigieron a la Montaña robándose la carne

que estaba en su patio. La presunta agraviada permaneció en su cocina hasta que llegó su esposo Fortunato Prisciliano Sierra.

9.Los peticionarios alegan que el 24 de marzo del 2002, la presunta agraviada acudió al Ministerio Público del Fuero Común ubicado en Ayutla de los Libres, Guerrero, e interpuso denuncia formal contra los soldados por los delitos de violación sexual, allanamiento de morada, abuso de autoridad, y los que resultasen de la investigación. El examen ginecológico fue realizado el 25 de marzo de 2002 por la Dra. Griselda Radilla López, debido a que el día anterior no se encontraba personal médico femenino razón por la que la presunta agraviada se negó a que se lo practicaran.

10.Los peticionarios sostienen que el 2 de abril de 2002, el Ministerio Público envió un oficio a la Dra. Griselda Radilla López con la finalidad de recibir los resultados de estudio de laboratorio de la presunta agraviada, contestando el director del Hospital de Ayutla de los Libres, Guerrero que por no contar con reactivos disponibles para los estudios, los mismos no se realizaron en esa Institución, pero que contaban con laminillas de las muestras obtenidas. El 10 de abril de 2002, el Ministerio Público ordenó al Director del Hospital remitir el Dictamen Ginecológico practicado así como las laminillas obtenidas para que sean examinadas por un Perito en materia de Química Forense. Dichas muestras y los resultados del examen habían sido enviadas a la Secretaría de Salud de Chilpancingo, Guerrero. Según los peticionarios, los resultados de los estudios señalados dieron como positiva la existencia de espermatozoides en la cavidad vaginal pero al solicitarse el examen de química forense en materia genética, la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero contestó que era imposible practicar el estudio debido a que las laminillas obtenidas se habían destruido a causa del estudio de Espermatobioscopía y Fosfata Acida.

11.Según los peticionarios, el 17 de mayo del 2002, el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común encargado del caso, se declaró incompetente para ver el caso. Ante este hecho la presunta agraviada presentó un escrito al Agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 Zona Militar solicitando le informe si aceptó o no la competencia declinada y en el supuesto afirmativo se abstenga de conocer del asunto por ser inconstitucional la competencia militar dado que la presunta agraviada era una civil. Al respecto, aducen los peticionarios que el 17 de marzo de 2002, la presunta agraviada fue notificada de que el Fuero Castrense era competente para ver el caso y ante este hecho, el 9 de abril del 2003, la presunta agraviada interpuso recurso de amparo, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la competencia castrense. El amparo 405/2003 fue declarado improcedente por el Juez Primero de Distrito, residente en Chilpancingo, Guerrero. Ante este hecho, aducen los peticionarios que la presunta agraviada, con fecha 19 de septiembre de 2003 interpuso un recurso de revisión del amparo, el mismo que con fecha 28 de noviembre del 2003 confirmó la improcedencia del amparo debido a que para los tribunales, la presunta agraviada se encontraba impedida de recurrir al juicio de garantías ya que como víctima del delito no tenía ese derecho. Los peticionarios alegan que a la fecha de la presentación de la petición desconocen el estado procesal del caso ya que la presunta agraviada no ha sido notificada de ninguna actuación procedimental por parte del fuero

castrense.

12.Los peticionarios alegan que ante la ineficacia de investigación mostrada por las autoridades civiles y militares en el caso de la presunta agraviada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 48/2003 por la violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, debido a que el Ministerio Público castrense pretendía cerrar las indagatorias del caso sin haber efectuado las acciones necesarias y suficientes para acreditar las existencia del delito.

B. El Estado

13.En respuesta a la denuncia, el Estado mexicano sostiene que el 27 de marzo de 2002, la Procuraduría General de Justicia Militar inició una investigación de oficio del caso como reacción a una nota periodística titulada "Segunda mujer violada por militares en la región Me Paa" publicada en el diario "El Sur". Es así que realizó diversas diligencias consistentes en la toma de declaraciones de 31 elementos militares destacamentazos en la "Base de Operaciones Méndez" los cuales se encontraban operando el día de los hechos en Barranca Tecuani. El Estado mexicano alega que todos los militares comparecientes salieron en diferentes direcciones pero nunca en el poblado donde se encontraba la agraviada.

14.El Estado sostiene que el 17 de mayo de 2002 el ministerio público local decidió declinar su competencia en el caso a favor del fuero militar entregando el resultado del dictamen pericial en materia de química forense practicado a la presunta agraviada en el que se señala la identificación de células espermáticas. Al respecto, y con la finalidad de realizar un estudio en química forense en materia de genética, el coordinador de Química Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero informó que el material había sido agotado en el proceso de análisis y que las muestras habían sido destruidas.

15. El Estado alega que se programaron diligencias en las fechas 15 de noviembre de 2002, 18 de diciembre de 2002 y 24 de enero de 2003 a las que ni la presunta víctima ni los testigos acudieron a comparecer a pesar de haber sido debidamente notificadas. El Estado mexicano sostiene que debido a la inasistencia sin causa por parte de la presunta agraviada, el ministerio público militar propuso a la Procuraduría General de Justicia Militar "el archivo del presente caso con las reservas de ley argumentado la falta de interés jurídico de la agraviada, inexistencia de imputación directa y falta de certeza o prueba suficiente para considerar que elementos del Ejército mexicano hubieren cometido la conducta imputada".[2]Sin embargo, el Estado aduce que la Procuraduría General de Justicia Militar rechazó tal solicitud y devolvió la averiguación previa para su perfeccionamiento así como ordenó el desahogo de las diligencias faltantes.

16.El Estado sostiene que el 13 de marzo de 2003 la presunta agraviada solicitó al Ministerio Público Militarse abstuviera de seguir conociendo el caso, a lo que le respondieron que la actuación "estaba fundada y motivada y que debido a ello, no podía eludir su obligación legal de seguir investigando los hechos."

17.El Estado mexicano sostiene que desea "hacer hincapié en la necesidad de agotar todas las diligencias de investigación faltantes, pues para sancionar a los responsables es requisito sine cuanon conocer su identidad," Por ello, y con el ánimo de dar solución al asunto, el Estado alega que considera necesario crear condiciones suficientes para la víctima para agotar todas las diligencias faltantes y así estar en aptitud de identificar a los probables responsables. Asimismo, el Estado mexicano considera conformar un Grupo de Trabajo integrado por representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, así como representantes de los peticionarios, para revisar de manera conjunta el procedimiento de investigación, determinar diligencias necesarias para esclarecer los hechos, y posteriormente que personal femenino sea responsable del desahogo de las diligencias acordadas.

IV.ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

A. Competencia de la Comisión rationae personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci

18.Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 para presentar denuncias ante la CIDH. La petición establece como presunta víctima a Inés Fernández Ortega, persona individual respecto de quien el Estado mexicano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, México es parte de la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación. Es por ello que la Comisión tiene competencia rationae personae para examinar la petición.

19.Por otro lado, el Estado mexicano ratificó la Convención de Belem do Pará el 12 de noviembre de 1998 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 22 de junio de 1987. Por consiguiente, la CIDH tiene competencia rationae temporis para analizar la etapa de fondo de los alegatos sobre presuntas violaciones de estos instrumentos internacionales.

20.La CIDH tiene competencia ratione loci y materiae para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos humanos protegidos en la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que se habrían perpetrado dentro del territorio de México, Estado parte en estos tratados.

B. Otros requisitos para la admisibilidad de la petición

1.Agotamiento de los recursos internos

21.El Estado mexicano se limita a alegar que el proceso aún se encuentra en la etapa de investigación. Los peticionarios alegan que se han agotado los recursos internos al haber sido presentado y denegado un recurso de amparo y el subsiguiente recurso de revisión del

amparo que argumentaban la ausencia de independencia e imparcialidad del fuero militar. Los peticionarios también invocan la aplicabilidad de la excepción de agotamiento de recursos internos por considerar que hay un retardo injustificado producto de la intervención de un organismo incompetente que carece de imparcialidad y voluntad.

22.En primer término, corresponde aclarar cuáles son los recursos internos que deben ser agotados conforme a la letra y el espíritu del artículo 46.1.a de la Convención Americana. Esta norma indica que para que una petición sea admitida, se requerirá que "..se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". La Corte Interamericana ha interpretado en este sentido que sólo deben ser agotados los recursos adecuados para subsanar las violaciones presuntamente cometidas. El que los recursos sean adecuados significa que:

la función de esos recursos dentro del sistema de derecho interno sea idónea para proteger la situación jurídica infringida.En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable.[3]

23.La jurisprudencia de la Comisión reconoce que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal hasta sus últimas consecuencias[4] y que, en esos casos, éste constituye la vía idónea para esclarecer los hechos. Igualmente, tanto la Corte Interamericana como la Comisión han reafirmado el deber del Estado de investigar toda violación de los derechos humanos, juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y evitar la impunidad.[5] La Comisión considera que los hechos alegados por los peticionarios en el presente caso involucra la presunta vulneración de un acto que se traduce en la legislación interna en un delito perseguible de oficio y que por lo tanto es este proceso penal, impulsado por el Estado mismo, el que debe ser considerado a los efectos de determinar la admisibilidad del reclamo.

24.En cuanto al empleo del fuero militar para juzgar a miembros del Ejército presuntamente implicados, la Comisión se ha pronunciado en forma reiterada en el sentido de que la jurisdicción militar no constituye un foro apropiado y por lo tanto no brinda un recurso adecuado para investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana.[6]

25.Por lo tanto, dadas las características del presente caso, la Comisión considera que resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46.2.a de la Convención Americana, por lo cual el requisito previsto en materia de agotamiento de recursos internos no resulta aplicable. Tampoco resulta aplicable el cumplimiento con el plazo de seis meses previsto en el artículo 46.1.b de la Convención, toda vez que la petición fue presentada dentro del plazo razonable al cual hace referencia el artículo 32.2 de su Reglamento para los casos en

los cuales no se ha dictado sentencia firme con anterioridad a la presentación de la petición.

26.Sólo resta señalar que la invocación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos allí consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46.2, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo, vis á vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cabe aclarar que las causas y los efectos que han impedido el agotamiento de los recursos internos en el presente caso serán analizados, en lo pertinente, en el Informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente configuran violaciones a la Convención Americana.

2.Duplicación de procedimientos y cosa juzgada

27.El expediente de la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se hallase pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente decidido por la Comisión Interamericana. Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones previstas en el artículo 46.1.d y en el artículo 47.c de la Convención Americana.

3.Caracterización de los hechos alegados

28.En el presente caso los peticionarios sostienen que el Estado es responsable por presuntas violaciones al derecho a la integridad personal, al derecho a la libertad personal, al derecho a las debidas garantías judiciales, al derecho a la protección de la honra y dignidad humana, al derecho a la protección a la familia, al derecho a la propiedad privada, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho una vida libre de tortura, al derecho a la protección judicial así como el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. El Estado mexicano, por su parte sostiene que el proceso aún se encuentra en etapa de investigación ya que aún se encuentra realizando diligencias para encontrar a los responsables. Sin embargo considera conformar un Grupo de Trabajo para revisar el procedimiento de investigación.

29.Al respecto, la Comisión considera que no corresponde en esta etapa del proceso determinar si se produjeron o no las alegadas violaciones. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver si los hechos expuestos tienden a caracterizar posibles violaciones a las Convenciones, como estipula el artículo 47.b de la Convención Americana. El criterio de apreciación de estos extremos es diferente al requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión Interamericana debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia contiene elementos de aparente violación o violaciones de la

Convención Americana. Este análisis tiene carácter sumario, y no implica un prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia.

30. Los alegatos de los peticionarios se refieren a hechos que, de ser ciertos, caracterizarían violaciones de varios derechos garantizados por la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará, y la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura. La Comisión también nota de manera preliminar en el presente caso, el posible agravamiento de las violaciones alegadas por el dolor y la humillación de la presunta agraviada por su condición de indígena y desconocimiento del idioma de sus agresores.[7] La CIDH estima que los hechos expuestos ameritan un examen de manera más precisa y completa en la etapa de fondo. Por otro lado, aunque los peticionarios no hayan invocado el artículo 19 de la Convención Americana y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, en virtud del principio iura novit curia la Comisión admitirá alegatos referentes a presuntas violaciones de dichos artículos.

31.La CIDH considera que, de ser comprobados los hechos, caracterizarían violaciones de los derechos de Inés Fernández Ortega garantizados en los artículos 5.1, 7, 8.1, 11, 19, 21, y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones generales consagradas en el artículo 1.1.De la misma manera, considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará; así como también los artículos 1, 6 y 8 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura.

32.En cuanto al artículo 17 de la Convención Americana invocado por los peticionarios, la CIDH considera que resulta admisible, pero con la salvedad de que la determinación en la etapa de fondo sobre esta disposición requerirá de información más clara, completa y detallada de cada una de las partes.

33.En consideración de todo lo anterior, la CIDH concluye que los peticionarios han acreditado prima facie los extremos requeridos en el artículo 47.b de la Convención Americana.

V.CONCLUSIONES

34. La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión.

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere, respecto a Inés Fernández Ortega, a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 5.1, 7, 8.1, 11, 17, 19, 21, y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones generales

consagradas en el artículo 1.1 de dicho tratado, además del artículo 7 de la Convención Belém do Pará y de los artículos 1, 6, y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

2.Notificar esta decisión a las partes.

3.Continuar con el análisis de fondo de la cuestión, y

4.Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 21 días del mes de octubre de 2006. (Firmado): Evelio Fernández Arévalos, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Florentín Meléndez, Segundo Vicepresidente; Freddy Gutiérrez, Paolo G. Carozza y Víctor E. Abramovich, Miembros de la Comisión.

[1] Por solicitud expresa de la víctima, se consigna su nombre completo en la petición.
[2] Comunicación del Estado mexicano del 12 de julio del 2005, pág. 3.
[3] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4., párr. 63.
[4] Informe Nº 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Informe Anual de la CIDH 1997, párr. 96 y 97.Ver también Informe N° 55/97, párr. 392.
[5] CIDH, Informe de Fondo, N° 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandes, Brasil, 16 Abril 2001, párr. 43, citando Corte I.D.H, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4., párr. 176 y Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5., párr. 175; CIDH, Informe de Fondo, N° 53/01, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, México, 4 Abril 2001, párr. 84.
[6] CIDH Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1999), pág. 175; Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1993), pág. 246; Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil (1997), págs. 40-42.Asimismo, la Corte Interamericana ha confirmado que la justicia penal militar sólo constituye un ámbito adecuado para juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Corte I.D.H., Caso Durand y Ugarte, Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 117.
[7] CIDH, Informe de Fondo, N° 53/01, Ana, Beatriz, y Cecilia González Pérez (México), 4 de abril de 2001, párr. 95.

**INFORME Nº 52/07. PETICIÓN 1490-05. ADMISIBILIDAD. JESSICA GONZÁLES Y OTROS. ESTADOS UNIDOS(*). 24 DE JULIO DE 2007.**

I. RESUMEN

1.El 27 de diciembre de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la "Comisión" o "CIDH") recibió una petición presentada por Caroline Bettinger-López, Emily J. Martin, Lenora Lapidus, Steven Macpherson Watt y Ann Beeson, abogados de la Unión Americana para las Libertades Civiles[1] (en adelante, los "peticionarios") contra el Gobierno de los Estados Unidos. (en adelante, el "Estado" o "Estados Unidos"). La petición fue presentada en nombre de la señora Jessica Gonzáles (Lenahan), ciudadana estadounidense que denuncia que la policía no respondió a sus reiteradas y urgentes llamadas a lo largo de varias horas informando que el cónyuge del que estaba separada se había llevado a sus tres hijas menores (de 7, 8 y 10 años de edad), en violación de una orden judicial de protección contra él, lo que derivó en la muerte de las niñas. La Corte Suprema de los Estados Unidos alegadamente validó el comportamiento de los agentes de policía al sostener que la señora Gonzáles, según la Constitución de los Estados Unidos, no tenía derecho a que dicha orden de protección fuera implementada por la policía.

2.En la petición se alega que la muerte prevenible de las hijas de la señora Gonzáles y el daño que ésta sufrió violan sus derechos a la vida y a la seguridad de la persona consagrados en el artículo I, su derecho a la vida privada y familiar previsto en el artículo V, su derecho a la protección de la familia, dispuesto en el artículo VI, su derecho a la protección de la maternidad y la infancia, conforme al artículo VII y su derecho a la inviolabilidad del hogar, dispuesto en el artículo IX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante, "la Declaración Americana").Los peticionarios agregan que el hecho de que Estados Unidos no haya investigado la denuncia de la señora Gonzáles ni le brindara a ésta una reparación viola su derecho a la justicia, consagrado en el artículo XVIII, así como su derecho a obtener una decisión rápida de las autoridades, previsto en el artículo XXIV. Finalmente, en la petición se sostiene que el hecho de que Estados Unidos no asegurara los derechos sustantivos previstos en los artículos enumerados viola el derecho de la señora Gonzáles a la igualdad, previsto en el artículo II. En respuesta a la petición, el Estado argumenta que las denuncias de los peticionarios son inadmisibles porque la presunta víctima no agotó los recursos internos.

3.Como se establece en el presente Informe, tras examinar los argumentos de las partes sobre la cuestión de la admisibilidad, y sin prejuzgar sobre los méritos de la materia, la Comisión decidió declarar admisibles las denuncias de los peticionarios con respecto a los artículos I, II, V, VI, VII, XVIII y XXIV de la Declaración Americana, continuar con el análisis de los méritos del caso, remitir el presente informe a las partes y publicarlo e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados

Americanos.

## II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4.Tras ser interpuestas la denuncia por los peticionarios, de fecha 27 de diciembre de 2005,recibida por la Secretaría Ejecutiva el 27 de diciembre de 2005, y una versión de la misma con correcciones de formato, recibida el 13 de enero de 2006, el 17 de abril de 2006 la Comisión remitió sus partes pertinentes al Estado y solicitó información dentro de los dos meses, como lo establece su Reglamento.

5. En nota de 21 de junio de 2006, el Estado solicitó una extensión de treinta días para preparar su respuesta. El 26 de junio de 2006, la Comisión accedió a lo solicitado. En comunicación de fecha 18 de septiembre de 2006 recibida por la Comisión el 20 de septiembre de 2006, el Estado remitió sus observaciones a la denuncia de los peticionarios. Por nota fechada el 22 de septiembre de 2006, la Comisión remitió la respuesta del Estado a los peticionarios, solicitándoles que enviaran toda información adicional respecto de la misma en el plazo de un mes.

6.En una nota fechada el 27 de noviembre de 2006, los peticionarios suministraron información en relación con la denuncia y solicitaron la asistencia de la Secretaría para obtener todos los documentos sobre esta materia no sujetos al derecho de reserva que estuvieran en poder, bajo custodia o bajo control del Gobierno de Estados Unidos. Posteriormente, en una nota de fecha 27 de noviembre de 2006, la Comisión solicitó al Estado que en un mes remitiera a la Comisión copia de toda documentación referida a su respuesta a la petición en esta materia que no haya sido suministrada a la Comisión, conjuntamente con toda otra documentación u otra información que el Estado considerase relevante a la etapa de la admisibilidad de esta petición interpuesta ante la Comisión.

7.Por nota de 11 de diciembre de 2006, y otra de fecha 12 de diciembre de 2006, recibidas por la Comisión el 12 de diciembre de 2006, los peticionarios remitieron sus observaciones a la respuesta del Estado de fecha 18 de septiembre de 2006. La Comisión transmitió al Estado las partes pertinentes de las observaciones de los peticionarios el 3 de enero de 2007, solicitándole sus comentarios en un mes. En una nota fechada el 5 de marzo de 2007, el Estado acusó recibo de la nota de la Comisión de 3 de marzo de 2007 y 22 de setiembre de 2006. Como respuesta a esta última, el Estado informó que, en cuanto al pedido de documentación adicional planteado por los peticionarios, no existe disposición alguna en la normativa de la Comisión que prevea este tipo de pedidos y recomendó que los peticionarios procuraran dicha documentación por los procedimientos estaduales y federales.

8. Se convocó a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar algunos temas del caso para el viernes 2 de marzo de 2007, en el curso del 127º período ordinario de sesiones de la Comisión. En una comunicación fechada el 14 de mayo de 2007, los peticionarios presentaron sus observaciones en relación con la audiencia del 2 de marzo de 2007. Por nota fechada el 17 de mayo de 2007, la Comisión remitió al

Estado las observaciones de los peticionarios, solicitándole sus comentarios en un mes.

9. Mediante comunicación de fecha 6 de julio de 2007, Andrew Rhys Davies y Katherine L. Caldwell, abogados de la firma Allen & Overy LLP, presentaron un memorial de Amici Curiae a favor de las alegaciones de los peticionarios en el presente caso. El memorial de Amici Curiae fue también presentado en nombre de 29 organizaciones, entidades y redes internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos de mujeres y niños.[2] Por nota de fecha 20 de julio de 2007, la Comisión remitió el memorial de Amici Curiae a los peticionarios y al Estado, para su conocimiento.

## III.POSICIONES DE LAS PARTES

### A. Posición de los peticionarios

10. Los peticionarios alegan que la señora Gonzáles y su esposo vivían en Castle Rock, Colorado, y que se habían casado en 1990.En 1996, su esposo empezó a tener un comportamiento abusivo con ella y con sus tres hijas menores (de 7, 8 y 10 años).En 1999, tras un intento de suicidio del Sr. Gonzáles, la señora Gonzáles presentó una demanda de divorcio y empezó a vivir separada del Sr. Gonzáles. En mayo de ese año, solicitó una orden de protección del Estado de Colorado para protegerse y proteger a sus hijas. Dicha orden fue impartida en mayo (con carácter temporal) y en junio de 1999 (con carácter permanente). La orden otorgaba a la señora Gonzáles la exclusiva custodia física de sus tres hijas menores y permitía que el Sr. Gonzáles las visitara ocasionalmente. La orden preveía que las visitas familiares sólo podrían ocurrir una vez por semana en el horario de la cena - "visita a la hora de la cena en días de semana" – y tendrían que ser previamente coordinadas antes entre Simón y Jessica Gonzáles.

11.Los peticionarios sostienen que el 22 de junio de 1999, el Sr. Gonzáles se llevó a las hijas con él, en violación de la orden de protección, pues no se había coordinado previamente horas de visita. Aproximadamente a las 5:50 p.m. del mismo día, la señora Gonzáles llamó al Departamento de Policía de Castle Rock para denunciar el alegado secuestro. Los peticionarios afirman que, en su llamada, informó a la policía de la existencia de la orden de protección y que no había existido un arreglo previo de visita proyectado para ese día. Los peticionarios agregan que, más tarde, en el transcurso del día, volvió a llamar a la policía (7:30 p.m.) y que aproximadamente a las 8:00 p.m. llegaron dos agentes a su casa. Los peticionarios alegan que, tras mostrarles una copia de la orden judicial, los agentes de policía informaron a la señora Gonzáles que no podían hacer nada para ejecutar la orden, dado que su ex cónyuge tenía derecho a "horas de visita". También le dijeron que esperara hasta las 10:00 p.m. para volver a llamar a la policía.

12.Los peticionarios alegan que la señora Gonzáles reportó a la policía una llamada que recibió de su esposo alrededor de las 10:30 p.m. y que éste, ante su negativa a "reavivar" sus relaciones, le comunicó que "él sabía lo que tenía que hacer". También alegan que la señora Gonzáles denunció una llamada alarmante efectuada esa tarde por la novia del Sr. Gonzáles, Rosemary Young, quien expresó preocupación por la posibilidad de que el Sr.

Gonzáles se hiciera daño a sí mismo o a sus hijas. Alegadamente, dijo a la señora Gonzáles que su ex marido había amenazado antes, ese día, con arrojarse con el coche por un acantilado.

13. Según los peticionarios, la policía desestimó todas las llamadas de la señora Gonzáles. La policía simplemente respondía que el padre de las niñas tenía derecho a pasar un tiempo con ellas, aunque la señora reiteradamente mencionaba la orden de protección contra él y que no había ningún acuerdo de visita programada. Se le aconsejó que esperara hasta las 10:00 p.m. y, cuando llamó a esa hora, sus reclamos fueron desatendidos y se le dijo que volviera a llamar a la medianoche. Según los peticionarios, la inacción e indiferencia persistió aún después de que la señora Gonzáles fuera al Departamento de Policía de Castle Rock y presentara una denuncia del incidente.

14.Los peticionarios alegan que, aproximadamente a las 3:30 a.m., el Sr. Gonzáles se presentó en el destacamento policial y abrió fuego contra los agentes policiales, quienes le dieron muerte en el lugar. Posteriormente, la policía encontró los cuerpos de las tres niñas asesinadas en la parte posterior de la camioneta del Sr. Gonzáles.

15. Las alegaciones indican que, tras enterarse del incidente, la señora Gonzáles se dirigió en su coche al destacamento policial.[3] Cuando intentó acercarse a la camioneta del Sr. Gonzáles, fue detenida por la policía y llevada a la oficina del Alguacil. Los peticionarios alegan que los agentes se negaron a ofrecer a la señora Gonzáles alguna información sobre si sus hijas se encontraban con vida o no, e ignoraron sus pedidos de ver a sus hijas e identificarlas. Se alega que fue detenida en un cuarto por 12 horas y que fue interrogada, sin ningún contacto con el exterior. Las alegaciones indican que se sintió revictimizada y que quedó traumada por la experiencia. Alrededor de las 8:00 a.m., fue informada por los agentes del Estado de que el Sr. Gonzáles había asesinado a sus hijas antes de llegar al destacamento policial. Alegadamente, las autoridades no le permitieron identificar los cuerpos de sus hijas sino hasta seis días más tarde, en sus féretros, en el momento de la sepultura. Alega también que las autoridades nunca le permitieron acercarse al vehículo del Sr. Gonzáles y que habrían dispuesto del mismo tres semanas después de la muerte de las niñas.

16.Los peticionarios afirman, por último, que la señora Gonzáles nunca supo de los detalles sobre cómo, cuándo y dónde murieron sus hijas, que los certificados de defunción no contienen esa información, por lo cual, todavía no ha podido incluirla en sus lápidas.[4]Alegadamente, solicitó esta información a la policía de Castle Rock, pero le fue denegada. En general, la señora Gonzáles alega que se le negó una investigación fáctica de los hechos que rodearon la muerte de sus hijas.

17. Los peticionarios subrayan que en ningún momento la policía pareció preocupada por la seguridad de sus hijas y que las reiteradas llamadas fueron atendidas con desinterés por la policía. En una de las instancias, un agente de la policía desestimó sus reclamos, diciéndole que "no veía cuál eran el gran problema." Los peticionarios también alegan que ese día la policía no respondió a ninguna emergencia que le hubiera podido impedir asignar efectivos

policiales a la implementación de la orden de protección de la señora Gonzáles. Finalmente, afirman que la señora Gonzáles confiaba en que la policía tomaría alguna medida y que si hubiera sabido que no indagaría sobre el paradero de sus hijas, hubiera tomado la iniciativa de hallarlas ella misma y habría evitado la tragedia.

18.Los peticionarios indican que la señora Gonzáles presentó una demanda ante el Tribunal distrital de Colorado, instancia de nivel federal, alegando que el Municipio de Castle Rock y varios agentes de policía habían violado sus derechos, al amparo de la cláusula del debido proceso de la Décimo Cuarta Enmienda, demandando tanto violaciones al debido proceso de tipo sustantivo y procesal. En cuanto al debido proceso sustantivo, la señora Gonzáles afirmó que ella y sus hijas tenían derecho a la protección policial contra daños por parte de su marido. En cuanto a la parte procesal, alegó que poseía un interés de tutela protegido en la implementación de la orden de protección y que la negativa arbitraria de los agentes de la policía de Castle Rock de ese derecho sin el debido proceso, era violatoria de sus derechos. El Tribunal de Distrito desestimó el caso, y un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito confirmó y revirtió en parte. Este dictamen fue luego confirmado en una nueva audiencia ante todos los jueces en sesión plenaria de esa instancia.

19. El caso de la señora Gonzáles llegó a la Corte Suprema, la máxima instancia judicial y de apelaciones de Estados Unidos. Según los peticionarios, el 27 de junio de 2005, la Corte Suprema rechazó todas las demandas de la señora Gonzáles, sosteniendo que sus derechos al debido proceso no habían sido violados. La Corte Suprema sostuvo que, pese a la ley de arresto obligatorio de Colorado y a los términos expresos y obligatorios de su orden de protección, la señora Gonzáles no tenía un derecho personal a que la policía implementara la orden.

20.Los peticionarios subrayan que la violencia doméstica es un fenómeno generalizado y tolerado en los Estados Unidos, que afecta desproporcionadamente a las mujeres y tiene repercusiones negativas en sus hijos. Los peticionarios subrayan que, aunque a nivel estatal y federal se reconoce el carácter prevalente, persistente y grave del problema y se han tomado medidas legislativas para contrarrestarlo, la respuesta de los agentes policiales es tratarlo como un asunto familiar y privado de escasa prioridad, en comparación con otros delitos. Esta percepción incide negativamente en la respuesta de la policía en la implementación de las órdenes de protección.

21.En cuanto al derecho a la igualdad de la ley, los peticionarios alegan que la falta de respuesta del Estado a las denuncias de la señora Gonzáles se basó en estereotipos negativos de algunos funcionarios estatales frente a las víctimas de violencia doméstica y a una implícita política neutral del departamento de policía, de asignar baja prioridad a las llamadas por denuncias de incidentes de violencia doméstica, política que afecta de forma desproporcionada a las mujeres. Según los peticionarios, dicha actitud por parte de las autoridades estatales afecta de forma particularmente grave a las mujeres de diferentes grupos raciales y étnicos y de bajos recursos económicos.

22.Además, los peticionarios alegan que la doctrina de inmunidad soberana limita gravemente la posibilidad de que las víctimas de violencia doméstica enjuicien a los departamentos de policía por infracciones como negligencia cuando no cumplen sus obligaciones legales. Los peticionarios argumentan que la Ley de inmunidad gubernamental de Colorado impide que la señora Gonzáles inicie una acción contra al Municipio de Castle Rock. Los peticionarios argumentan que, según la legislación del Estado de Colorado, actores del gobierno como los agentes de policía son inmunes a la responsabilidad civil a menos que el demandante pueda demostrar que los actos de los agentes implican "culpa grave e intencionalidad".[5] Los peticionarios recalcan que esa demostración es, en la mayor parte de las circunstancias, imposible, en especial en los casos de violencia doméstica, porque el daño habitualmente es causado por un tercero que no es agente del Estado. Además, los peticionarios sostienen que la máxima corte judicial de Colorado ha interpretado esta disposición en forma extremadamente restrictiva, afirmando que el carácter de "culpa grave e intencionalidad" a los efectos de la Ley de inmunidad implica demostrar "que el agente actuó o dejó de actuar deliberadamente, en la creencia consciente de que ello podría causar daño" a la víctima.[6]

23.Finalmente, los peticionarios subrayan que la interpretación que hace la Corte Suprema de la Constitución impide que las víctimas de violencia doméstica obtengan una reparación legal y responsabilicen legalmente a la policía por no proteger a las víctimas contra actos de violencia doméstica. Por tanto, se perpetúan los estereotipos negativos que afectan a las mujeres y se fortalecen las estructuras que sostienen la violencia doméstica. En la petición se indica que en 2000, la Corte Suprema derogó una ley federal que había creado una vía de acción judicial para demandar a los perpetradores de actos de violencia doméstica, afirmando que el Congreso, a nivel federal, carecía de autoridad constitucional para aprobar dicha ley.[7] La Corte Suprema habría sostenido en otra decisión que el Estado no tiene una obligación sustantiva de proteger a una persona contra la violencia cometida por un tercero no perteneciente al Estado.[8]Los peticionarios finalmente alegan que la Corte Suprema una vez más denegó una reparación legal a las víctimas de violencia doméstica en el caso que involucra a la señora Gonzáles, señalando que una persona carecía de un derecho constitucional a la ejecución de una orden de protección.[9]

24.En cuanto a la admisibilidad de la petición, los peticionarios alegan que la petición de la señora Gonzáles cumple con el Reglamento de la Comisión. Agregan que la señora Gonzáles agotó debidamente los recursos internos de conformidad con el artículo 31 del Reglamento, que su petición fue interpuesta dentro del plazo de seis meses establecido en el artículo 32.1 del Reglamento, y que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es vinculante para los Estados Unidos.

25.En cuanto a los méritos, los peticionarios piden que la Comisión declare que Estados Unidos de América ha violado los artículos I, II, V, VI, VII, IX, XVIII y XXIV de la Declaración Americana y que recomiende las reparaciones que considere adecuadas y efectivas para las violaciones que sufrió la señora Gonzáles.

B. Posición del Estado

26.El Estado alega que los hechos ocurridos antes de los homicidios de las tres hijas de la señora Gonzáles, el 23 de junio de 1999, confirman que ella había acordado que el Sr. Gonzáles podía ver a sus tres hijas esa noche, para una visita a la hora de cenar, en un día de semana, y que la visita era congruente con la orden restrictiva. El Estado alega que, por tanto, la información disponible en ese momento no revelaba indicio alguno de la probabilidad de que el Sr. Gonzáles cometiera ese trágico crimen contra sus propias hijas.

27.El Estado alega que el registro de elementos probatorios hasta la tarde del 22 de junio de 1999 y las primeras horas del 23 de junio de 1999, demuestran que la policía respondió profesionalmente a la información aportada por la señora Gonzáles. El Estado argumenta que, aunque la orden de protección otorgaba a la señora Gonzáles "la custodia física temporaria exclusiva" de sus hijas, asignaba al Sr. Gonzáles "tiempo para estar con sus hijas menores un fin de semana sí y uno no, comenzando, después del horario de trabajo, la tarde del viernes, y continuando hasta las 7:00 p.m. del domingo". Asimismo, asignaba al Sr. Gonzáles "una visita a la hora de la cena entre semana", la cual sería "coordinada entre las partes." El Estado argumenta que, por tanto, como la señora Gonzáles consintió la visita entre semana a la hora de la cena, el Sr. Gonzáles no violó la orden de restricción al llevarse a sus hijas por la tarde.

28.El Estado argumenta que los integrantes del Departamento de Policía de Castle Rock fueron sensibles a sus numerosos pedidos de asistencia y tomaron en serio sus preocupaciones. En respuesta a su primera llamada, se habría despachado a dos agentes a la casa de la señora Gonzáles, uno de los cuales fue directamente a su casa y el otro, a la casa del Sr. Gonzáles y, más tarde, se unió al primer agente, en la casa de la señora Gonzáles. El Estado alega también que en ningún momento la señora Gonzáles mostró a los agentes la orden de protección.

29.Aproximadamente a las 8:43 p.m., la señora Gonzáles llamó a la policía e informó que había recibido una llamada telefónica de su marido y que éste estaba con sus hijas en el parque de diversiones de Elitch, en Denver. En esa ocasión -alega el Estado- la señora Gonzáles no mencionó ninguna conversación con Rosemary Young (la novia del Sr. Gonzáles) ni preocupación alguna por el estado mental del Sr. Gonzáles o por la seguridad de sus hijas, ni sugirió que se despachara un agente para localizar al Sr. Gonzáles en el parque de diversiones.

30.El Estado alega que a las 9:57 p.m., la señora Gonzáles volvió a llamar y expresó frustración porque sus hijas no habían regresado a casa. No mencionó que estuviera preocupada por la seguridad de las hijas. Ni pidió que la policía de Castle Rock distribuyera una orden de búsqueda a los demás departamentos de policía. Según el Estado, la señora Gonzáles implícitamente reconoció que no existía una violación de la orden de protección al explicar al agente que atendió la primera llamada al departamento policial de Castle Rock y en sus posteriores conversaciones con un agente, que ella había acordado la visita.

31.Aproximadamente a las 12:30 a.m. del miércoles 22 de junio, la señora Gonzáles se

apersonó ante el departamento de policía llorando. El Estado alega que, en ese momento, expresó preocupación por el estado mental del Sr. Gonzáles, diciendo que había "perdido la cabeza" y que podía ser un potencial "suicida". El Estado alega que la policía ordenó la búsqueda del Sr. Gonzáles y de su vehículo por medio de una advertencia de localización conforme a la cual, la jurisdicción que hallara a la persona, lo comunicaría al departamento. El Estado informa que, de acuerdo con la investigación, el Sr. Gonzáles llegó al destacamento policial a las 3:25 a.m. y efectuó algunos disparos contra la ventana. Tras un intercambio de disparos con los agentes, el Sr. Gonzáles resultó muerto. Cuando los agentes se acercaron a la camioneta del Sr. Gonzáles, descubrieron los cuerpos de las tres niñas.

32.El Estado argumenta que la petición es inadmisible por no establecer el incumplimiento de una obligación por parte de Estados Unidos, de acuerdo con la Declaración Americana. El Estado alega que ninguna disposición de la Declaración impone una obligación afirmativa de los Estados de efectivamente prevenir la comisión del delito perpetrado por el Sr. Gonzáles. Además, el Estado alega que ninguna disposición de la Declaración contiene un lenguaje que siquiera mencione la implementación de los derechos, como la Convención Americana. Esta, por otro lado, incluye una disposición que describe las obligaciones efectivas de los Estados partes en cuanto a la implementación de los derechos enumerados en la Convención.

33.Asimismo, el Estado alega que la señora Gonzáles no agotó los recursos disponibles para denunciar los hechos sufridos. En particular, el Estado alega que los hechos efectivos del caso no fueron abordados en el litigio a nivel interno. A nivel de tribunal de distrito, el Municipio de Castle Rock inició una acción para desestimar la denuncia. El Tribunal de Distrito dictaminó que, como cuestión de derecho, la señora Gonzáles no estableció un caso que ameritara una reparación.[10] En consecuencia, los hechos del caso no fueron abordados en el litigio porque los procesos de apelación referían a si la ley federal invocada por la señora Gonzáles estaba a su disposición, en base a las alegaciones que contenía su denuncia. El Estado sostiene que, si Simón Gonzáles hubiera sobrevivido, la señora Gonzáles hubiera tenido acceso a toda otra gama de recursos, como el procesamiento penal o acciones penales o civiles por desacato. La Corte Suprema determinó que la cláusula del debido proceso de la Décimo Cuarta Enmienda otorgaba a los agentes de policía discrecionalidad en la implementación de las órdenes de protección y determinó que la señora Gonzáles no tenía un derecho federal a la implementación de la orden de protección.

34.El Estado alega que la señora Gonzáles nunca presentó una denuncia ante el Departamento de Policía ni ante el Municipio de Castle Rock que pudiera haber dado lugar a una investigación de su denuncia por parte del Departamento de Policía o el Municipio de Castle Rock. Además, aunque la señora Gonzáles optó por no iniciar una acción bajo la legislación de Colorado, como una demanda civil en un tribunal estatal contra los agentes de policía, invocando la ley estatal sobre actos ilícitos en la esfera civil, el Estado alega que, "si la señora hubiera podido establecer que los agentes de policía de Castle Rock habían actuado "con intencionalidad y culpa grave" fuera del ámbito de su

cargo, debería haber iniciado una demanda civil contra ellos en un tribunal estatal."[11] Asimismo, el Estado argumenta que la disposición sobre inmunidad gubernamental de Colorado hubiera permitido iniciar esa demanda, si la señora hubiera podido satisfacer ese requisito.[12]

35.El Estado afirma que el hecho de que la señora Gonzáles no haya logrado resultados positivos a nivel judicial federal por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en este caso específico, no significa que las víctimas de violencia doméstica carezcan de recursos a nivel nacional o local, ni que las órdenes de protección no protejan efectivamente a sus beneficiarios.

36.El Estado describe también una serie de otros recursos y protecciones para las víctimas de violencia doméstica a nivel nacional y estatal, como los miles de millones de dólares destinados a ejecutar programas relacionados con ese fenómeno, así como una amplia gama de leyes destinadas a mejorar la investigación de los casos de violencia doméstica.

## IV.ANÁLISIS

### A. Competencia de la Comisión ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci

37.Tras considerar los antecedentes que tuvo ante sí, la Comisión considera que es competente para examinar la presente petición. El artículo 23 del Reglamento de la Comisión autoriza a los peticionarios a presentar una denuncia alegando la violación de derechos reconocidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Las alegadas víctimas, la señora Gonzáles y sus tres hijas Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzáles, están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos y sus derechos están protegidos por la Declaración Americana, cuyas disposiciones el Estado está obligado a respetar, de conformidad con el artículo 17 de la Carta de la OEA, el artículo 20 del Estatuto de la Comisión y el artículo 29 del Reglamento de la Comisión. Estados Unidos está sujeto a la jurisdicción de la Comisión desde que depositó su instrumento de ratificación de la Carta de la OEA, el 19 de junio de 1951.[13]De modo que la Comisión es competente ratione personae con respecto a la señora Gonzáles.

38.En la medida en que los peticionarios alegan la violación de los artículos I, II, V, VI, VII, IX, XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Comisión es competente ratione materiae para examinar la petición.

39.La Comisión es competente ratione temporis para examinar las denuncias porque en la petición se alegan hechos que habrían ocurrido después de la fecha en que entraron en vigencia las obligaciones de Estados Unidos en virtud de la Declaración.

40.Finalmente, la Comisión es competente ratione loci, en la medida en que en la petición se alegan hechos que habrían ocurrido estando la señora Gonzáles bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

B. Admisibilidad de la Petición

1.Agotamiento de los recursos internos

41.El artículo 31.1 del Reglamento de la Comisión especifica que, para decidir sobre la admisibilidad de una materia, la Comisión debe comprobar si se han invocado y agotado los recursos del sistema legal interno, de acuerdo con los principios generalmente reconocidos del derecho internacional. El artículo 31.2 del Reglamento de la Comisión, sin embargo, especifica que este requisito no rige si la legislación interna del Estado afectado no otorga el debido proceso de ley para proteger el derecho alegadamente violado, si la parte que alega la violación vio negado su acceso a los recursos internos o impedida de agotarlos, o si existió demora indebida en el pronunciamiento final sobre los recursos invocados. Como lo indica el artículo 31.3 del Reglamento de la Comisión, cuando el peticionario alega alguna de estas excepciones, corresponde al Estado demostrar que no se agotaron los recursos internos, a menos que ello surja con clara evidencia de autos.

42.El requisito del agotamiento previo de los recursos internos se aplica cuando estos están disponibles en la práctica dentro del sistema nacional y cuando sean adecuados y efectivos para brindar una reparación de la violación alegada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado que los recursos internos, de acuerdo con los principios generalmente reconocidos del derecho internacional, deben ser adecuados, en el sentido de que deben permitir la restauración del derecho violado, y efectivos, en el sentido de ser capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos.[14]Si bien en el sistema legal de todos los países existe una serie de recursos, la norma de su agotamiento no requiere invocar los que son inadecuados[15], ineficaces[16] o no ofrecen posibilidades de éxito[17].A los fines de la admisibilidad, la norma de análisis empleada para la evaluación prima facie de la adecuación y efectividad de los recursos del derecho interno no es tan rigurosa como la requerida para determinar si se ha cometido una violación de los derechos protegidos por la Convención.[18]

43.En el caso presente, las partes discrepan en cuanto al cumplimiento de este requisito y, en consecuencia, corresponde que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre la materia. Los peticionarios alegan que la señora Gonzáles agotó debidamente los recursos internos disponibles respecto de las denuncias hechas a la Comisión. En particular, sostienen que la señora Gonzáles presentó su demanda del debido proceso constitucional ante los tribunales federales, que el 27 de junio de 2005,la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó su demanda y que se agotaron todas las demás instancias de apelación.

44.El Estado responde argumentando que la presente petición debe considerarse inadmisible porque la señora Gonzáles no invocó una serie de recursos legales y administrativos que se encontraban a su disposición. El Estado sostiene que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos en Municipio de Castle Rock, Colorado c. la señora Gonzáles, se limitaba a alegaciones particulares planteadas por la señora Gonzáles respecto del régimen legal de Colorado en particular vinculado a la

implementación de las órdenes de protección y que no debe interpretarse que ello significa que no existen recursos disponibles para las víctimas de violencia doméstica en Estados Unidos, ni que las órdenes restrictivas aplicadas a tales casos no ofrecen protección a sus beneficiarios. El Estado argumenta que había una serie de posibles vías que no fueron agotadas por la señora Gonzáles, como: a) la presentación de una denuncia administrativa ante el Departamento de Policía de Castle Rock o ante el Municipio de Castle Rock, la cual hubiera dado lugar a una investigación de su denuncia por parte de estas entidades; b) la iniciación de una demanda civil ante la justicia estatal contra los funcionarios policiales, al amparo de la ley sobre actos ilícitos, lo que hubiera estado permitido por la Ley de inmunidad gubernamental de Colorado, y[19] c) la interposición de un pedido de igual protección ante los tribunales federales.

45.El Estado también describe una serie de recursos y protecciones adicionales para las víctimas de violencia doméstica a nivel nacional y de los estados, como los miles de millones de dólares asignados a la implementación de programas relacionados con la violencia doméstica y la diversidad de leyes destinadas a fomentar la investigación de los casos de violencia doméstica. Asimismo, el Estado afirma que, si Simón Gonzáles hubiera sobrevivido, la señora Gonzáles hubiera tenido a su disposición toda otra serie de recursos, como el procesamiento penal y los procedimientos de desacato a nivel penal o civil.

46.Los peticionarios responden argumentando que ninguno de los recursos judiciales estatales y federales señalados por el Estado constituían "recursos jurídicos viables"[20] para la señora Gonzáles y que en 1999 no estaba a su disposición ningún canal administrativo que le hubiera otorgado una reparación adecuada y efectiva. Agregan que el único recurso "disponible, adecuado y efectivo" [21] que hubiera podido agotar en 1999 era el de una demanda del debido proceso a nivel federal. En cuanto a los demás recursos mencionados por el Estado, los peticionarios argumentan que la presentación de una denuncia al amparo de la Cláusula de igual protección de la Constitución de Estados Unidos hubiera sido inútil, por el precedente establecido por la Corte Suprema. Además, afirman que la Ley de inmunidad gubernamental de Colorado impedía que la señora Gonzáles iniciara una acción civil por acto ilícito contra el Municipio de Castle Rock y los agentes de policía. Los peticionarios alegan también que el Estado no aporta información alguna sobre los mecanismos de denuncia administrativa que menciona en su respuesta y que la peticionaria nunca fue informada de tales mecanismos cuando ocurrieron los hechos alegados. Los peticionarios argumentan finalmente que, como Simon Gonzáles no sobrevivió, todo recurso señalado por el Estado al respecto no estaba de hecho a disposición de la señora Gonzáles y que esos recursos hubieran sido inadecuados para reparar las violaciones de derechos humanos alegadas.

47.Al considerar la posición de las partes sobre el agotamiento, la Comisión observa que las denuncias presentadas por la señora Gonzáles ante la Comisión se centran en alegaciones que ya presentó ante los tribunales federales y llegaron a la Corte Suprema, máxima instancia judicial y de apelaciones de los Estados Unidos. La señora Gonzáles demandó al Departamento de Policía de Castle Rock y a algunos agentes de policía al amparo de la cláusula del debido proceso de la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos, presentando impugnaciones sustantivas y de procedimiento, que fueron posteriormente desestimadas por esa máxima instancia.[22]Estados Unidos no disputa esta alegación. Además, la Comisión observa que la Corte Suprema, en su decisión, no indicó que la señora Gonzáles hubiera invocado los recursos equivocados para presentar sus reclamos.

48.La Comisión, por tanto, concluye que el Estado, en este caso, no ha indicado cómo las alternativas legales y administrativas que menciona podrían haber ofrecido a la señora Gonzáles un resultado diferente a sus demandas o cómo dichas alternativas hubieran podido ser adecuadas y efectivas para reparar las violaciones alegadas. Además, ambas partes subrayan los precedentes que limitan las probabilidades de éxito de cualquiera de esas vías, incluido el dictamen de la Corte Suprema en Municipio de Castle Rock, Colorado c. Gonzáles, los casos de la Corte Suprema que determinan que el gobierno no tiene obligación de proteger a una persona por actos cometidos por actores no estatales y las leyes de inmunidad vigentes que protegen a los funcionarios del Estado contra la responsabilidad civil.

49.En su jurisprudencia, esta Comisión ha compartido la opinión de la Corte Europea de Derechos Humanos de que el peticionario puede ser exceptuado de agotar los recursos internos respecto de una denuncia cuando surge con claridad de autos que ninguna acción tendría perspectivas razonables de éxito a la luz de la jurisprudencia de las máximas instancias judiciales del Estado.[23] En tales circunstancias, la Comisión consideró que los procedimientos en que se presentan denuncias de esta naturaleza no se considerarían "efectivos" de acuerdo con los principios generales del derecho internacional. En tales circunstancias, la Comisión concluye que cualquiera de estos procedimientos para plantear estas denuncias ante los tribunales del Estado parecerían no ofrecer perspectivas razonables de éxito, por lo cual no serían efectivos de acuerdo con los principios generales del derecho internacional.

50.Sobre la base de los factores señalados, la Comisión concluye que los peticionarios agotaron debidamente todos los recursos de que disponían en el sistema legal de Estados Unidos, por lo cual sus denuncias ante la Comisión no están impedidas de consideración por imperio del requisito del agotamiento de los recursos previsto en el artículo 31.1 de su Reglamento.

2.Duplicación de procedimientos

51.En la petición, los peticionarios afirman que las denuncias de la señora Gonzáles no están pendientes ante ningún otro foro internacional. El Estado no ha contestado esta cuestión de la duplicación de procedimientos. Por tanto, la Comisión concluye que no existe impedimento alguno a la admisibilidad de las denuncias de los peticionarios en lo que atañe al artículo 33 de su Reglamento.

3.Plazo de presentación

52.Los antecedentes de esta denuncia indican que los peticionarios interpusieron la petición ante la Comisión el 27 de diciembre de 2005, por tanto, dentro del plazo de seis meses a partir de la decisión del 27 de junio de 2005 de la Corte Suprema de Estados Unidos que afirma que la señora Gonzáles no había establecido una violación de la 14a Enmienda de la Constitución de ese país. El Estado no ha suscitado la cuestión del plazo. En tal sentido, la Comisión concluye que la petición no fue presentada fuera del plazo dispuesto en el artículo 32 de su Reglamento.

4.Caracterización de los hechos

53.A los fines de la admisibilidad, el artículo 34(a) del Reglamento de la Comisión dispone que toda petición que se presente ante la Comisión debe afirmar hechos que tiendan a establecer una violación de los derechos a que refiere el artículo 27 del Reglamento o ser desestimada por ser "manifiestamente infundada" o "claramente improcedente", conforme al artículo 34(b) del Reglamento de la Comisión. Para ello, la Comisión realiza sólo una evaluación prima facie de los hechos alegados con respecto a la admisibilidad y no considera ni juzga los méritos de las denuncias presentadas.

54.En sus alegaciones, los peticionarios plantean tres denuncias principales de violación de derechos de la señora Gonzáles consagrados en la Declaración Americana:

a. Que la muerte evitable de las hijas de la señora Gonzáles y los daños que sufrió violan sus derechos a la vida y a la seguridad personal, dispuestos en el artículo I, sus derechos de protección especial (artículo VII) y sus derechos a la protección de la familia y el hogar (artículos V, VI y IX) de la Declaración Americana;

b. El que Estados Unidos no investigara las denuncias de la señora Gonzáles, no le ofreciera un recurso efectivo y la falta de información sobre las circunstancias de la muerte de sus hijas violan sus derechos a recurrir a la justicia (artículo XVIII) y de petición ante el Estado y a recibir una pronta decisión (artículo XXIV);

c. El que Estados Unidos no garantizara los derechos sustanciales de la señora Gonzáles antes señalados viola su derecho a la igualdad (artículo II).

55.El Estado se opone a estas denuncias en base a que los peticionarios no citan ninguna disposición de la Declaración Americana que imponga un deber afirmativo al Estado de efectivamente evitar la comisión de delitos individuales por particulares, como los trágicos asesinatos cometidos por el Sr. Simón Gonzáles en perjuicio de sus tres hijas. El Estado argumenta que no hay ninguna otra disposición en la Declaración con un texto que siquiera mencione la implementación de los derechos enumerados, menos aún, una obligación afirmativa de prevenir delitos como los señalados en este caso.

56.A este respecto, de acuerdo con la jurisprudencia y práctica bien establecida y de larga data del sistema interamericano, se reconoce que la Declaración Americana es fuente de obligaciones legales para los Estados miembros de la OEA, incluidos, en particular, los que

no son partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[24]Se considera que estas obligaciones derivan de las obligaciones de los Estados miembros en materia de derechos humanos en virtud de la Carta de la OEA[25], que dichos Estados han convenido están contenidos y definidos en la Declaración Americana,[26] así como del carácter jurídico consuetudinario de los derechos protegidos por muchas de las disposiciones de la Declaración.[27]Por tanto, como fuente de obligaciones legales que dicho instrumento es, el Estado debe implementar los principios de la Declaración Americana en la práctica dentro de su jurisdicción, y es pertinente que la Comisión considere y, de sustanciarse, determine las violaciones de ese instrumento atribuibles a un Estado miembro de la OEA, incluido Estados Unidos. En consecuencia, la Comisión concluye que el ámbito de esta obligación en el presente caso puede sery será examinado a la luz de las circunstancias de los hechos alegados, de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos[28] y de su aplicación a los países que no ratificaron la Convención Americana. Las alegaciones de las partes en este caso no indican que la petición sea manifiestamente infundada o improcedente, por lo cual la Comisión puede declararla admisible.

57.Con respecto a las denuncias de los peticionarios, tras examinar detenidamente la información y los argumentos presentados por las partes e indicados en la Parte III del presente Informe, la Comisión considera que los hechos alegados por los peticionarios con respecto a estas denuncias podrían tender a establecer la violación de los derechos de la señora Gonzáles y sus hijas amparados en los artículos I, V, VI, VII, XVIII y XXIV de la Declaración Americana y ameritan el análisis de los méritos de la petición.

58.De la misma manera considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones al artículo II de la Declaración Americana. La CIDH observa que los peticionarios alegan que existe una práctica generalizada y sistemática de las autoridades policiales de tratar la violencia doméstica como un crimen de baja prioridad y perteneciente al ámbito privado, resultado de estereotipos discriminatorios sobre las víctimas que influyen negativamente la respuesta de la policía en la implementación de las órdenes de protección. Las fallas en la respuesta de la policía afectan de forma desproporcionada a las mujeres, por constituir la mayoría de las víctimas de la violencia doméstica. Las deficiencias en la respuesta estatal alegadamente afectan de forma particularmente grave a mujeres pertenecientes a minorías étnicas y raciales y de bajos recursos económicos.

59.En opinión de la CIDH, los hechos alegados en la petición no aportan fundamento suficiente para que se tienda a establecer la violación del derecho a la inviolabilidad del hogar, protegido por el artículo IX de la Declaración Americana.

## V.CONCLUSIONES

60. La Comisión concluye que tiene competencia para examinar las alegaciones de los peticionarios y que la petición es admisible en cuanto a las alegadas violaciones de los artículos I, II, V, VI, VII, XVIII y XXIV de la Declaración Americana, de acuerdo con el Reglamento de la Comisión.

61.Sobre la base de las conclusiones de hecho y de derecho establecidas precedentemente, y sin prejuzgar sobre los méritos de la materia,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisibles las denuncias de la petición con respecto a los artículos I, II, V, VI, VII, XVIII y XXIV de la Declaración Americana.

2.Declarar inadmisible la denuncia de la alegada violación del derecho consagrado en el artículo IX de la Declaración Americana.

3.Continuar con el análisis de los méritos del caso.

4.Remitir el presente Informe a las Partes.

5.Publicar el presente Informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 24 días del mes de julio de 2007. (Firmado): Florentín Meléndez, Presidente; Víctor Abramomich, Segundo Vicepresidente y Comisionados, Evelio Fernández Arévalos, Freddy Gutiérrez, y Clare K. Roberts.

* El Miembro de la Comisión Profesor Paolo Carozza no participó en el análisis y la votación de este caso, de acuerdo con el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión.
[1] Por nota de 26 de octubre de 2006, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia fue acreditada como copeticionario.
[2] Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM); Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Argentina; Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina; Fundación Mujeres en Igualdad, Argentina; Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, Argentina; Instituto de Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; Tracy Robinson, Facultad de Derecho, University of the West Indies, Barbados; La Oficina Jurídica Para la Mujer de Cochabamba, Bolivia; Constance Backhouse, Profesora de Derecho, University of Ottawa, Canada; Canadian Association of Sexual Assault Centres, British Columbia, Canadá; Harmony House, Ottawa, Ontario, Canadá; Profesora Elizabeth Sheehy, Facultad de Derecho, University of Ottawa, Canadá; Centro de Derechos Humanos y Litigio Internacional (CEDHUL), Colombia; Corporación Sisma Mujer, Colombia; Liga de Mujeres Desplazadas, Colombia; Fundación Paniamor, Costa Rica; La Fundación PROCAL (Promoción, Capacitación y Acción Alternativa), Costa Rica; Centro de Apoyo Aquelarre (CEAPA), República Dominicana; Movimiento de Mujeres Dominico - Haitiana (MUDHA), República

Dominicana; Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), República Dominicana; Jacqueline Sealy-Burke, Directora, Legal Aid and Counseling Clinic (LACC), Grenada; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), México; Organización Popular Independiente, A.C., Cd. Juárez, México; Organización Red de Mujeres Contra la Violencia, Nicaragua; Centro de la Mujer Panameña (CEMP), Panamá; Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Lima, Perú; Red Nacional de Casas de Refugio Para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia Familiar y Sexual, Perú.

[3] Audiencia sobre la materia de Jessica Gonzáles c. Estados Unidos en el 127º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2 de marzo de 2007.

[4]Audiencia sobre la materia de Jessica Gonzáles c. Estados Unidos en el127º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2 de marzo de2007.

[5] Petición de los peticionarios de 27 de diciembre de 2005, pág. 37.

[6] Observaciones de los peticionarios a la comunicación del Estado de 12 de diciembre de 2006, pág. 92.

[7] La petición refiere al caso de Estados Unidos c. Morrison, 529 U.S. 598 (2000), según el cual cuestiones tales como los delitos violentos y las relaciones familiares pertenecen a la esfera local y no nacional. Por tanto, el Congreso, a nivel federal, carece de competencias para crear una reparación que permita resarcir a las víctimas de la violencia de género.

[8] La petición refiere al caso de DeShaney c. el Departamento de Servicios Sociales de Winnebago, 489 U.S. 189 (1989).

[9] La petición refiere a la decisión de la Suprema Corte en el caso de Castle Rock c. Gonzáles, 125 S.Ct. 2796 (2005).

[10] Gonzáles c. Municipio de Castle Rock, No. 00-1285 (D.Co. interpuesta23 de enero de 2001).

[11] Observaciones del Estado de 18 de septiembre de 2006, pág. 21.

[12] Observaciones del Estado de 18 de septiembre de 2006, pág. 22.

[13] El artículo 20 del Estatuto de la CIDH dispone que, con respecto a los Estados miembros de la OEA que no son partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión puede examinar las comunicaciones que se le presenten y toda otra información disponible, dirigirse a los gobiernos de tales Estados para pedirles la información que estime pertinente y formularle recomendaciones cuando lo considere apropiado para lograr una observancia más efectiva de los derechos humanos fundamentales. Véase, además, Carta de la Organización de los Estados Americanos, Arts. 3, 16, 51, 112, 150; Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Arts. 26, 51-54; Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-10/8, "Interpretación de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre dentro del Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos," 14 de julio de 1989, Ser. A Nº 10 (1989), párrs. 35-35; CIDH, James Terry Roach y Jay Pinkerton c. Estados Unidos, Caso 9647, Res. 3/87, 22 de septiembre de 1987, Informe Anual 1986-87, párrs. 46-49.

[14] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 64-66.

[15] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 64.

[16] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 66.
[17] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 68.
[18] CIDH, Informe Nº 8/05, Petición 12.238, Miriam Larrea Pintado, Ecuador, de 23 de febrero de 2005, párr. 31.
[19] Observaciones del Estado de 18 de septiembre de 2006, pág. 22.
[20] Observaciones de los peticionarios de 14 de mayo de 2007.
[21] Observaciones del Estado de 18 de septiembre de 2006, pág. 22.
[22] Con respecto al debido proceso sustantivo, la señora Gonzáles argumenta que ella y sus hijas tenían derecho a la protección policial contra daños causados por su cónyuge. Con respecto al debido proceso en materia de procedimientos, la señora Gonzáles argumenta que tenía un interés protegido en la ejecución de su orden de restricción y que los agentes de policía de Castle Rock que le negaron arbitrariamente ese derecho sin el debido proceso violaron sus derechos.
[23] Véase, por ejemplo, Caso 11.193, Informe Nº 51/00, Gary Graham c. Estados Unidos (Admisibilidad), Informe Anual de la CIDH 2000, párr. 60, donde se cita Corte Europea de Derechos Humanos, Casos De Wilde, Oomas y Versyp, 10 de junio de 1971, Publ. E.C.H.R. Ser. A, Vol.12, pág. 34, párrs. 37, 62; Corte Europea de Derechos Humanos, Avan Oosterwijck c. Bélgica, Sentencia (Objeciones Preliminares), 6 de noviembre de 1980, Caso Nº 7654/76, párr. 37. Véase también Caso 11.753, Informe Nº 108/00, Ramón Martinez Villareal c. Estados Unidos (Admisibilidad), Informe Anual de la CIDH 2000, párr. 70.
[24] Véase Corte I.D.H., Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párrs. 35-45; James Terry Roach y Jay Pinkerton c. Estados Unidos, Caso 9647, Res. 3/87, 22 de septiembre de 1987, Informe Anual de la CIDH 1986-87, párrs. 46-49.Por ejemplos de decisiones en que la Comisión determinó la violación de la Declaración Americana con respecto a Estados miembros de la OEA que no son partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, véase Caso 1742 (Cuba), Mayo de 1975, Informe Anual de la CIDH 1975; Maclean c. Suriname, Caso 10.116, Resolución Nº 18/89, Informe Anual de la CIDH 1988-1989; Michael Edwards y otros c. Las Bahamas, Caso 12.067, Informe Nº 48/01, Informe Anual de la CIDH 2000; Garza c. Estados Unidos, Caso 12.243, Informe Nº 52/01, Informe Anual de la CIDH 2000.
[25] Carta de la Organización de los Estados Americanos, Artículos 3, 16, 51, 112, 150.
[26] Véase, por ejemplo, Resolución 314 de la Asamblea General de la OEA, AG/RES. 314 (VII-O/77), 22 de junio de 1977 (por la que se encomienda a la Comisión Interamericana la preparación de un estudio para establecer sus obligaciones de descargar los compromisos asumidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre"); Resolución 371 de la Asamblea General de la OEA, AG/RES (VIII-O/78), 1 de julio de 1978 (por la que se reafirma el compromiso de promover la observancia de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre."); Resolución 370 de la Asamblea General de la OEA, AG/RES. 370 (VIII-O/78), 1 de julio de1978 (que hace referencia a los "compromisos internacionales" de los Estados miembros de la OEA con

respecto a los derechos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).

[27] CIDH, Caso 12.379, Informe Nº 19/02, Lares-Reyes y otros (Estados Unidos), 27 de febrero de 2002, párr. 46.

[28] Corte I.D.H., Caso de la "Masacre de Mapiripán". Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 111; Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 123.

**INFORME Nº 48/07. PETICIONES 261-03, 397-03 Y 1377-04. ADMISIBILIDAD. KARINA MONTENEGRO Y OTRAS. ECUADOR. 23 DE JULIO DE 2007.**

I.RESUMEN

1.El 3 de abril de 2003,12 de mayo de 2003, 15 de diciembre de 2004, 20 de diciembre de 2004 y el 21 de enero de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") recibió cinco peticiones presentadas por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (en adelante "el peticionario" o "INREDH"), en las que se alega la violación por parte de la República de Ecuador (en adelante "el Estado") de los artículos7 (incisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6), 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana"), artículos 2 (incisos b y c), 4 (incisos b, c y f), 6 (a) y 7 (incisos a y d) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará"), artículos 1 y 2(c) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en perjuicio de las señoras Tania Shasira Cerón Paredes, Karina Montenegro, Leonor Briones, Martha Cecilia Cadena y Nancy Quiroga respectivamente ("las presuntas víctimas").

2. El peticionario alega que las presuntas víctimas fueron ilegalmente detenidas porque a la fecha de su detención se encontraban en estado de gestación y en el caso de la señora Martha Cecilia Cadena tenía 68 años de edad, incumpliéndose así lo establecido por la legislación ecuatoriana que dispone que las mujeres embarazadas y personas mayores de65 años de edad, no pueden ser privadas de libertad, debiéndose sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario. Alega también el peticionario que la detención es arbitraria por las condiciones en las que tuvieron que llevar su embarazo y dar a luz, así como por las condiciones carcelarias en las que viven hasta la fecha con sus menores hijos, condiciones que en el caso de la señora Cadena, le han causado una afectación mental, agravada por su edad avanzada.

3. El Estado sostiene que las presuntas víctimas no agotaron los recursos internos a su disposición, tales como apelación de la medida cautelar dictada en su contra o amparo de libertad, contemplados en los artículos 172 y 422, respectivamente del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano. Agrega que la conducta de las autoridades que ordenaron y ejecutaron las detenciones, se adecuó al marco legal vigente; solicitando se declare la inadmisibilidad de las peticiones por incumplir con los requisitos exigidos por el artículo 46 de la Convención y se las archive.

4. Tras examinar la posición de las partes a la luz de los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana decide declarar admisible el caso en relación con los artículos 5, 7, 19 y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1(1) del mismo instrumento y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Por otra parte, decide declarar inadmisible el caso en relación con los artículos 11 y 24 de la Convención Americana; y de los artículos 2 (incisos b y c), 4(incisos b, c y f), 6(a) de la Convención de Belém do Pará. En

consecuencia, la CIDH notifica a las partes y hace público el presente informe, que incluirá en su Informe Anual.

## II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. La petición relacionada con la señora Tania Shasira Cerón Paredes, fue recibida en la Comisión el 3 de abril de 2003, siendo registrada como P-261-03. El 20 de mayo de 2004, los peticionarios proporcionaron información adicional. Las partes pertinentes de la petición fueron transmitidas al Estado mediante comunicación de 14 de octubre de 2004, otorgándole un plazo de dos meses para contestar. Hasta la fecha de elaboración del presente informe no se recibió información del Estado.

6. La petición relacionada con la señora Karina Montenegro, fue recibida en la Comisión el 12 de mayo de 2003, siendo registrada como P-397-03.Mediante comunicación de 19 de mayo de 2004, la Comisión solicitó información adicional al peticionario. El 16 de febrero de 2005, la Comisión reiteró la solicitud de información, que fue proporcionada por el peticionario mediante comunicación recibida el 11 de marzo de 2005.

7. La petición relacionada con la señora Leonor Briones fue recibida en la Comisión el 15 de diciembre de 2004, siendo registrada como P-1371-04.Mediante comunicación de 13 de enero de 2005 se solicitó información adicional al peticionario, que fue proporcionada el 17 de febrero de 2005.

8. La petición relacionada con la señora Martha Cecilia Cadena fue recibida en la Comisión el 20 de diciembre de 2004, siendo registrada como P-1377-04. Mediante comunicación de 23 de mayo de 2005, se transmitieron las partes pertinentes al Estado otorgándole un plazo de dos meses para contestar. El Estado presentó su respuesta, mediante comunicación Nº 18941 de fecha 3 de agosto de 2005, cuyas partes pertinentes fueron transmitidas al peticionario el 9 de agosto de 2005 otorgándole el plazo de un mes para presentar observaciones. El peticionario solicitó una prórroga que fue concedida por la Comisión el 23 de septiembre de 2005. Las observaciones fueron presentadas mediante comunicación recibida el 13 de octubre de 2005, cuyas partes pertinentes fueron transmitidas al Estado mediante comunicación de 28 de octubre de 2005, otorgando un mes de plazo para presentar observaciones. Hasta la fecha de elaboración del presente informe el Estado no presentó sus observaciones.

9. La petición relacionada con la señora Nancy Quiroga fue recibida por la Comisión el 21 de enero de 2005, y registrada como P87/05.

10. Mediante comunicación de 23 de mayo de 2005, la Comisión Interamericana comunicó a las partes que, de conformidad con lo previsto en el artículo 29(d) de su Reglamento, se dispuso la acumulación de las peticiones P397/03 Karina Montenegro, P1371/04 Leonor Cristina Briones Cheme y P-87-05 Nancy Iralda Quiroga Quishpe, en la P397/03. En la misma comunicación, la Comisión transmitió al Estado las partes pertinentes de las peticiones acumuladas, otorgando un plazo de dos meses para responder.

Mediante comunicación de fecha 21 de julio de 2005, el Estado solicitó una prórroga, que fue concedida por un mes mediante comunicación de 29 de julio de 2005. Por comunicación de 10 de agosto de 2005, el Estado solicitó otra prórroga para contestar, la cual fue concedida por 30 días mediante comunicación de fecha 8 de septiembre de 2005.

11.Con fecha 22 de agosto de 2005, el Estado presentó su respuesta, cuyas partes pertinentes fueron transmitidas al peticionario el 8 de septiembre de 2005, con el plazo de un mes para presentar información adicional. Dicha información no fue proporcionada hasta la fecha de elaboración del presente informe.

III.POSICIÓN DE LAS PARTES

A. Posición del peticionario

Tania Shasira Cerón Paredes

12.Sostiene el peticionario que el 5 de julio de 2002, la señora Tania Shasira Cerón Paredes fue detenida ilegal y arbitrariamente en la ciudad de Quito por miembros de la Policía Nacional y trasladada al destacamento policial de la INTERPOL[1], donde permaneció durante 7 días. Al momento de su detención, se encontraba en el quinto mes de embarazo[2]. El 8 de julio de 2002, el Juez Primero de lo Penal de Pichincha se avocó al conocimiento del inicio de la instrucción fiscal por tenencia ilegal de drogas, y ordenó la prisión preventiva. El 12 de julio de 2002, la señora Cerón fue trasladada al Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito (en adelante "el Centro de Rehabilitación"), donde dio a luz. El 30 de julio de 2002, el Juez ordenó la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario de conformidad con el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal[3], pero la agencia policial desacató la orden.

13.El peticionario sostiene que el 5 de septiembre de 2002 INREDH presentó un recurso de hábeas corpus ante el Alcalde de la ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política.[4]El recurso fue fundado por el peticionario en que había una detención ilegal por haberse contrariando lo establecido en el artículo 58 del Código Penal;[5] porque la detenida no fue puesta a órdenes de un juez competente en forma inmediata; y debido a que permaneció sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Mediante resolución de 17 de septiembre de 2002 el recurso fue declarado improcedente, sin que se analizaran los elementos de ilegalidad y arbitrariedad, con base en la independencia judicial; y por haber ordenado el juez el arresto domiciliario sin revocar la detención preventiva[6].La resolución fue apelada ante el Tribunal Constitucional, cuya Primera Sala decidió confirmar la resolución del Alcalde y exhortar al Juez que "ordene el inmediato cumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario dictada con fecha 30 de julio de 2002"[7].La resolución del Tribual Constitucional, dictada el 2 de octubre de 2002, consideró que el juez había sustituido la prisión preventiva por el arresto domiciliario, cumpliendo con el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, pero no constaba en el expediente que la señora Cerón hubiera salido de la cárcel. Alega el peticionario, que de esta manera la señora Cerón no tuvo acceso a un recurso efectivo.

14.Relata el peticionario que ante la negativa de cumplir la orden del Tribunal Constitucional, INREDH presentó un escrito en que solicitó al juez que ordenara el inmediato cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional, pese a lo cual nunca fue cumplida. Actualmente, la señora Cerón no se encuentra en el Centro de Rehabilitación, y el peticionario desconoce en qué centro de detención se encuentra.

Karina Montenegro

15.Indica el peticionario que la señora Karina Montenegro fue detenida el 23 de mayo de 2002 de forma ilegal y arbitraria en la ciudad de Quito por miembros de la Policía Nacional y trasladada al destacamento de la INTERPOL, donde permaneció durante 7 meses. En el momento de su detención, la señora Montenegro estaba embarazada. El 25 de mayo de 2002, el Agente Fiscal de la Unidad de delitos de Narcotráfico del Ministerio Público de Pichincha dio inicio a la instrucción fiscal. El 28 de mayo de 2002, la Jueza Décimo Octava de lo Penal de Pichincha dictó orden de prisión preventiva, y dispuso que la misma se cumpliera en el Centro de Rehabilitación. El 5 de junio de 2002, la Jueza considerando el evidente embarazo de la señora Montenegro, revocó la orden de prisión preventiva y la sustituyó por el arresto domiciliario. El 6 de junio de 2002 se comunicó al Teniente Coronel Juan Francisco Sosa, Jefe de la Oficina Antinarcóticos de Pichincha, para que diera cumplimiento a la disposición de la Jueza, sin embargo esta autoridad nunca ejecutó la orden.

16.Sostiene que INREDH interpuso un recurso de hábeas corpus ante el Alcalde de la ciudad de conformidad con lo dispuesto en el Art. 93 de la Constitución Política, alegando una detención ilegal, por haberse contrariado lo establecido en el artículo 58 del Código Penal, por no haber puesto a la señora Montenegro a disposición de un juez competente en forma inmediata y por no darse cumplimiento a la orden de la jueza de sustitución de la detención preventiva de conformidad con el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal.

17.Relata que la Alcaldía negó el recurso, sin analizar los elementos de arbitrariedad e ilegalidad, con base en la independencia judicial y la no interferencia de organismos estatales en los órganos de la función judicial.[8]Dicha resolución fue apelada ante el Tribunal Constitucional, que el 14 de noviembre de 2002[9] revocó la resolución de la Alcaldía, concedió el recurso de hábeas corpus, llamó la atención al jefe antinarcóticos por incumplir la orden de la jueza, y ordenó sustituir la detención preventiva por el arresto domiciliario. Tras permanecer 7 meses en los calabozos de la INTERPOL, el 27 de diciembre de2002, la señora Montenegro fue trasladada al Centro de Rehabilitación, una vez que su hijo ya había nacido. Actualmente continúa detenida en el Centro de Rehabilitación, donde vive con su hijo de 5 años de edad.

Leonor Briones

18.Indica el peticionario que el 15 de noviembre de 2003, la señora Leonor Cristina

Briones Cheme fue detenida en la ciudad de Quito por miembros de la Policía Antinarcóticos de Pichincha y fue trasladada a los calabozos de dicha dependencia. Al momento de su detención estaba embarazada[10].

19.El peticionario sostiene que el 16 de noviembre de 2003, se inició la etapa de instrucción fiscal por el delito de tenencia y posesión ilícita de estupefacientes. El 18 de noviembre de 2003 el Juez Cuarto de lo Penal de Pichincha dictó orden de prisión preventiva, pese al embarazo de la señora Briones, quien fue ingresada al Centro de Rehabilitación el 16 de diciembre de 2003.

20.Alega que el 26 de abril de 2004, INREDH interpuso un hábeas corpus ante el Alcalde metropolitano de Quito. En la audiencia, celebrada el 3 de mayo de 2004, se solicitó la libertad de la señora Briones. Mediante resolución de 5 de mayo de 2004, considerando el Art. 199 de la Constitución referido a la independencia judicial, se decidió negar el recurso y mantener la medida "emitida por autoridad competente en legal y debida forma, en contra de la recurrente, atento al estado de la causa, es el juez que tiene conocimiento de la misma el responsable de su situación procesal"[11]. Se presentó apelación ante el Tribunal Constitucional, cuya Primera Sala mediante resolución de 6 de julio de 2004, considerando que el juez es "la autoridad competente, conforme a derecho, para disponer la sustitución de la prisión preventiva"[12], resolvió confirmar la resolución de alcaldía y exhortar al juez que cumpla con el art. 171 del Código de Procedimiento Penal.

21.Sostiene que el 11 de mayo de 2004, el Juez sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario, sin embargo y pese a que se ofició[13] al Jefe Provincial de la Policía Judicial de Pichincha para que se dé cumplimiento a la orden, la medida nunca fue cumplida. Actualmente la señora Briones continúa detenida, su hijo de 2 años y 10 meses, tuvo que ser separado de ella, porque se enfermó debido a la comida que recibía en el Centro de Rehabilitación.

Martha Cecilia Cadena

22.El peticionario informa que el 3 de mayo de 2004, la señora Martha Cecilia Cadena, fue detenida en la ciudad de Quito por la Policía Antinarcóticos de Pichincha por haber incurrido en el delito flagrante de tenencia de estupefacientes. Al momento de su detención tenía sesenta y ocho años de edad[14]. Del 3 al 6 de mayo de 2004, fue mantenida en los calabozos de la INTERPOL, sin haber sido llevada a órdenes de juez competente. El 4 de mayo de 2004, el Fiscal Distrital de la Unidad Antinarcóticos de Pichincha dio inicio a la etapa de instrucción y solicitó al Juez disponer la orden de prisión preventiva[15].

23.Indica también que el 5 de mayo de 2004, INREDH interpuso recurso de hábeas corpus ante la Alcaldía. En la audiencia celebrada el 10 de mayo de 2004, se solicitó la inmediata libertad de la señora Cadena. En resolución de Alcaldía de la misma fecha, en consideración de que " el señor Juez Octavo de lo Penal de Pichincha que conoce la causa, como órgano de la Función Judicial con la debida competencia para hacerlo, debe pronunciarse sobre la medida cautelar de la prisión preventiva que pesa sobre la recurrente,

por cuanto es quien debe resolver su situación procesal (...)"[16], y del artículo 199 de la Constitución sobre la independencia de la función judicial, se decidió negar el recurso por improcedente.

24.Sostiene que el 6 de mayo de 2004, el Juez Octavo de lo Penal de Pichincha se avocó al conocimiento de la causa por los delitos de tráfico, tenencia y posesión ilícita de estupefacientes, dictando orden de prisión preventiva[17]. En esa fecha fue trasladada al Centro de Rehabilitación, donde se encuentra actualmente.

25.Relata el peticionario que dentro del proceso penal en su contra, la señora Cadena solicitó su arresto domiciliario al juez de la causa el 18 de mayo de 2004, reiterándolo el 19 de mayo de 2004.

26.Sostiene que el 31 de mayo de 2004, el Juez de la causa sustituyó la detención preventiva por el arresto domiciliario. Mediante oficio Nº 631-2004-JOPP de 1 de junio de 2004, dirigido al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, se le indicó que cumpliera con lo dispuesto, y que la señora Cadena cumpla su arresto domiciliario en el lugar identificado por ella, ubicado en el Comité del Pueblo No. 1, Barrio La Paz.

27.El peticionario informa que el 11 de junio de 2004, INREDH apeló la resolución de Alcaldía ante el Tribunal Constitucional, que mediante resolución de 28 de julio de 2004, considerando que "(...) los jueces pueden ordenar como medida cautelar la prisión preventiva, pero al constatar la edad del imputado, imperativamente se debe aplicar como alternativa el arresto domiciliario como lo señala el artículo 171 del Código de Procedimiento penal. En la especie, se ha demostrado ante la Alcaldía con la presentación de la partida de nacimiento, que la imputada Martha Cecilia Cadena tiene a la fecha sesenta y ocho años y que por esa razón legal, el Juez de la causa en atención a este particular, debió ordenar el arresto domiciliario como medida cautelar y no la prisión preventiva, como en el presente caso ha ocurrido"[18], resolvió confirmar la resolución de Alcaldía y negar el recurso de hábeas corpus, así también oficiar al Juez de la causa a efecto de que tome las medidas pertinentes a fin de que como medida sustitutiva de la prisión preventiva, ordene el arresto domiciliario.

28.Indica que dentro del proceso penal, el 28 de junio de 2004, la señora Cadena reiteró el pedido de que se oficie al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha para dar cumplimiento a la orden judicial. El 29 de junio de 2004, el Juez reiteró la orden de sustitución y el pedido a la Policía Judicial mediante oficio Nº 830-JOPP-2004.

29.Agrega el peticionario que mediante oficio Nº 2132-JPAP-04 dirigido al Juez Octavo Penal de Pichincha, de 23 de julio de 2004, el Jefe de Antinarcóticos de Pichincha, señaló que el domicilio de la señora Cadena:

(...) no cuenta con los servicios básicos elementales, ni presta las medidas de seguridad necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto (...)" y que las condiciones del domicilio señalado "daría paso a que los policías designados para la vigilancia corran el riesgo de

incurrir en lo dispuesto en el Art. 79 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, por las precarias condiciones de infraestructura, sanitarias, seguridad, etc. (...)[19].

30.El peticionario también informa que el Juez, mediante providencia de 9 de agosto de 2004, dispuso que la imputada determine otro domicilio que cumpla con las garantías suficientes para sustituir la detención preventiva por el arresto domiciliario. Pese a las órdenes judiciales de sustitución de la detención preventiva, estas no han sido cumplidas por la Policía Judicial.

31.Según el peticionario, la señora Cadena, evidencia rasgos de deterioro mental, en entrevista que tuvo con el equipo de INREDH afirmó no entender lo que sucedía, mostró incoherencias en sus ideas y forma de hablar, y finalmente solicitó la asistencia de otra interna, quien comentó que muchas veces "oye y entiende cosas y luego no se (sabe) que sucede pues se le olvidan totalmente".

32.Finalmente, el 18 de enero de 2007, INREDH presentó una solicitud a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, a fin de que se realizara una evaluación médica de las condiciones de la señora Cadena, sin recibir respuesta hasta el momento.

Nancy Quiroga

33.El peticionario informa que el 25 de diciembre de 2003, la señora Nancy Iralda Quiroga Quishpe fue detenida en la ciudad de Quito por los guías penitenciarios del Centro de Rehabilitación de Varones Nº 1, cuando trataba de ingresar a visitar a un detenido, acusada de tenencia y posesión ilícita de cocaína. Al momento de su detención se encontraba embarazada[20].

34.Relata que el 26 de diciembre de 2003, se dio inició a la etapa de instrucción fiscal por el presunto delito de tenencia y posesión ilícitas de sustancias estupefacientes, solicitando al Juez, disponga la orden de prisión preventiva[21]. El 29 de diciembre de 2003, la Jueza Séptima de lo Penal de Pichincha dictó auto de prisión preventiva[22].

35.Indica el peticionario que el 6 de mayo de 2004, INREDH interpuso un recurso de hábeas corpus ante el Alcalde metropolitano de Quito. En la audiencia, se solicitó la inmediata libertad de la señora Quiroga y se presentó el informe médico correspondiente. El Alcalde, mediante resolución de 10 de mayo de 2004, considerando el Art. 199 de la Constitución Política referido a la independencia judicial y "(...) manteniéndose la medida cautelar de prisión preventiva, emitida por autoridad competente en legal y debida forma, en contra de la recurrente, atento al estado de las causas, son los Jueces competentes que tienen conocimiento de las mismas los responsables de su situación procesal (...)"[23], decidió negar el recurso de hábeas corpus por improcedente.

36.Sostiene que en la audiencia preliminar del proceso penal ante el Juzgado Séptimo, realizada el 17 de mayo de 2004, la señora Quiroga ratificó su embarazo y solicitó el arresto domiciliario[24].

37.Informa que INREDH presentó recurso de apelación de la decisión del Alcalde ante el Tribunal Constitucional, que en resolución de 21 de julio de 2004 consideró lo siguiente:

OCTAVO.- A fojas 14 y 15 de los autos constan los resultados del estudio ecografía pélvica que se realizó a la ciudadana Nancy Quiroga Quishpe, en donde se advierte un embarazo de 10 semanas a la fecha de los resultados. Esta prueba científica demuestra que la afectada se encuentra efectivamente en estado de embarazo, por lo que el juez de la causa debió aplicar el arresto domiciliario como medida cautelar y no la prisión preventiva, de modo que se torna en ilegal su internamiento en un centro de detención provisional o de rehabilitación social[25]

Decidió confirmar la Resolución de la Alcaldía, negando el recurso, y exhorta "al juez de la causa a efecto de que arbitre las medidas pertinentes a fin de que como medida sustitutiva de la prisión preventiva, ordene el arresto domiciliario"[26].

38.Relata el peticionario que el 18 de mayo de 2004, ante el evidente embarazo de la detenida, la Jueza de la causa dictó orden de arresto domiciliario, que fue comunicada a la Directora del Centro de Rehabilitación, sin embargo no fue cumplida.

39. Agrega que el 21 de mayo de 2004, la Fiscal de la Unidad Antinarcóticos de Pichincha, apeló la resolución de sustitución de detención preventiva, por no estar de acuerdo con la sustitución y por no haberse justificado el estado de gestación de la señora Quiroga. La Segunda Sala de la Corte Superior de Quito, el 26 de agosto de 2004, resolvió "carec[er]de competencia para conocer el asunto subido indebidamente en grado, por lo que se dispone se devuelva el proceso a la señora Jueza de primer nivel"[27].

40.Actualmente, la señora Quiroga sigue recluida en el Centro de Rehabilitación, vive con su hija de 2 años y 8 meses, pese a que las condiciones del lugar no son las más idóneas para el crecimiento y desarrollo de un infante.

Violaciones comunes alegadas en las tres peticiones

41.Sostiene el peticionario que en el caso de las presuntas víctimas que estaban embarazadas al momento de su detención, el encierro les significó dar a luz en las circunstancias que rodean una cárcel, sin acceso a controles médicos periódicos para ellas, ni para sus hijos, pues en la cárcel no hay ginecólogo ni pediatra, y que mantener a una mujer detenida en estas circunstancias, cuando la ley lo prohíbe, constituye una forma de violencia estatal.

42.El peticionario alega que a pesar de que los artículos 58 del Código Penal y el 171 del Código de Procedimiento Penal establecen la prohibición de detener a una mujer embarazada y a personas mayores de 65 años, y la obligación de reemplazar la prisión preventiva por el arresto domiciliario. En la práctica, ninguna de las presuntas víctimas pudo gozar del derecho al arresto domiciliario, por el contrario, permanecieron en los

calabozos de la policía judicial o en los centros de rehabilitación, junto con otras detenidas que ya habían sido condenadas y en condiciones inapropiadas para garantizar su integridad física.

43.Sostiene el peticionario que considerando lo establecido por el artículo 208[28] de la Constitución, el traslado de las presuntas víctimas a los Centros de Rehabilitación Social es ilegal, arbitrario y contrario a la Convención porque al momento de su detención ninguna de las mujeres había sido sentenciada.

B. Posición del Estado

44.Con relación a las tres peticiones acumuladas el Estado alega el incumplimiento de parte de las presuntas víctimas del requisito del agotamiento de los recursos internos, al omitir presentar los recursos de amparo de libertad y apelación de las medidas cautelares dictadas en su contra.

45.Sobre la petición de la señora Karina Montenegro, el Estado indica que el recurso de revisión interpuesto dentro del proceso penal, se encuentra pendiente de resolución. Este recurso no agotado, le impide a la Comisión conocer esta petición, al incumplirse uno de los requisitos de admisibilidad contemplados en el artículo 46(1) de la Convención y al no verificarse las excepciones previstas en el artículo 46(2), tampoco podría hablarse de un retardo injustificado porque el recurso de revisión es considerado como un nuevo proceso.

46. Con relación a la petición relacionada con la señora Martha Cecilia Cadena, el Estado alega que la inconformidad del peticionario con las resoluciones de las autoridades que conocieron en sus distintas instancias el recurso de hábeas corpus para obtener la libertad de la Sra. Cadena y la falta de agotamiento de otros recursos internos, impiden que la Comisión declare la admisibilidad de esta petición, por incumplir con los requisitos exigidos por el artículo 46 de la Convención.

47. Sostiene el Estado que la presentación de la petición fue prematura pues el recurso de hábeas corpus no era la única vía idónea para resolver la situación. Si la presunta víctima consideraba que su detención violó la ley, antes de que se inicie el proceso penal, podía acogerse al recurso de amparo de la libertad, contemplado en el artículo 422 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, de acuerdo al artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, la imputada podía apelar la prisión preventiva ante la Corte Superior de Justicia.

48. Con relación a la orden de sustitución de la detención preventiva, sostiene el Estado que según el informe sobre la inspección técnica de su domicilio, se constató la situación precaria del inmueble, lo que impidió la ejecución de la orden. El Juez ordenó que la señora Cadena determine otro domicilio y si bien "no se encontraba en la obligación constitucional ni legal de señalarlo" se le dio la posibilidad de identificar otro lugar que cumpla con los requisitos mínimos de supervivencia. El Estado indica que la Comisión debe valorar esta actuación de buena fe, como un esfuerzo por proteger a una persona en situación de vulnerabilidad, por lo que no se puede calificar esta decisión como

discriminatoria o ilegal.

49.Con relación a las presuntas violaciones alegadas, el Estado sostiene que considerando que la ilegalidad y arbitrariedad de una detención debe analizarse a partir de la observancia o no de los preceptos constitucionales o legales, señaló que los agentes de policía que aprehendieron a la Sra. Cadena lo hicieron en aplicación del artículo 24.6 de la Constitución y el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal, lo cual se ajustó a los parámetros internacionales y constitucionales. La señora Cadena fue puesta a disposición de las autoridades dentro de un plazo razonable, al sometérsela a fórmula de juicio, al darse inicio la etapa de instrucción fiscal, el 4 de mayo de 2004.

50.Finalmente el Estado, en consideración de que la petición no reúne los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana y el artículo 38 del Reglamento de la Comisión, solicita a la Comisión declare el caso inadmisible y lo archive.

IV.ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

A. Competencia de la Comisión ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci

51. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la Comisión. Las peticiones señalan como presuntas víctimas a las señoras Tania Shasira Serón Paredes, Karina Montenegro, Leonor Briones, Martha Cecilia Cadena y Nancy Quiroga, personas individualizadas, respecto a quienes Ecuador se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, Ecuador es parte de la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977, fecha en que se depositó el respectivo instrumento de ratificación; es igualmente parte de la Convención de Belém do Pará desde el 15 de septiembre de 1995.Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

52. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará que habrían tenido lugar dentro del territorio de Ecuador, Estado parte en dichos tratados. Asimismo, la Comisión Interamericana tiene competencia ratione temporis puesto que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana y en la Convención de Belém do Pará ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión es competente ratione materiae, debido a que en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. La CIDH manifiesta que no tiene competencia para aplicar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer pero que sin embargo la misma puede ser utilizada en la interpretación de las disposiciones contenidas en la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará.

B. Otros requisitos para la admisibilidad de la petición

1.Agotamiento de los recursos internos

53.El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional.

54.En el presente caso, los peticionarios alegan que los recursos internos se agotaron con las respectivas sentencias del Tribunal Constitucional que conoció en apelación los recursos de hábeas corpus interpuestos a nombre de cada una de las presuntas víctimas. De otro lado, el Estado argumenta que los mismos no han sido agotados, al no haberse interpuesto recurso de amparo de libertad o apelado la medida cautelar de detención preventiva.

55.De la información presentada por las partes, la Comisión nota que:

-El 30 de julio de 2002, el juez de la causa de la señora Tania Shasira Cerón Paredes ordenó la sustitución de la detención preventiva por el arresto domiciliario. Ante su incumplimiento, el 5 de septiembre de 2002, se interpuso un hábeas corpus, que fue declarado improcedente por la Alcaldía. La decisión fue apelada ante el Tribunal Constitucional, que el 2 de octubre de 2002, confirmó la resolución de Alcaldía y exhortó al juez de la causa ordenar el inmediato cumplimiento de la orden de sustitución, la cual no fue cumplida.

-El 5 de junio de 2002, el juez de la causa de la señora Karina Montenegro ordenó la sustitución de la detención preventiva por el arresto domiciliario. Ante su incumplimiento, se interpuso un hábeas corpus, que fue negado por la Alcaldía. La decisión fue apelada ante el Tribunal Constitucional, que el 14 de noviembre de 2002, revocó la resolución de Alcaldía, concedió el recurso y ordenó la sustitución de la medida. La sentencia del Tribunal Constitucional no fue cumplida.

-El 26 de abril de 2004, se interpuso hábeas corpus a favor de la señora Leonor Briones que fue negado por la Alcaldía. El 11 de mayo de 2004,el Juez de la causa sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario. Ante el incumplimiento, se apeló la decisión de la Alcaldía ante el Tribunal Constitucional, que el 6 de Julio de 2004 la confirmó y exhortó al juez cumplir con la sustitución de la medida. La sentencia del Tribunal Constitucional no fue cumplida.

-El 5 de mayo de 2004, se interpuso ante la Alcaldía un hábeas corpus a favor de la señora Martha Cecilia Cadena, que fue negado. El 31 de mayo de 2004, el Juez de la causa sustituyó la detención preventiva por el arresto domiciliario. Ante el incumplimiento, El 11

de junio de 2004, se apeló la resolución de la Alcaldía ante el Tribunal Constitucional, que el 28 de Julio de 2004 confirmó la resolución, negó el recurso y ofició al juez tomé las medidas para ordenar la detención domiciliaria. El 29 de junio de 2004, el Juez de la causa reiteró la orden de sustitución. El 9 de agosto de 2004, el Juez de la causa ordenó que la señora Cadena designara otro domicilio para cumplir con el arresto, porque en base al informe del Jefe Antinarcóticos, su domicilio no cuenta con los servicios básicos elementales, ni presta las medidas de seguridad necesarias.

-El 6 de mayo de 2004, se interpuso ante la Alcaldía un hábeas corpus a favor de Nancy Quiroga, que fue negado. El 18 de mayo de 2004, el juez de la causa ordenó la sustitución de la detención preventiva por el arresto domiciliario. Ante el incumplimiento, se apeló la resolución de Alcaldía ante el Tribunal Constitucional que el 21 de julio de 2004,la confirmó, negó el recurso y exhortó al juez tomar las medidas para sustituir la detención preventiva. El 21 de mayo de 2004, la Fiscal de la Unidad Antinarcóticos de Pichincha, apeló la sustitución, pero el 26 de agosto de 2004, la Segunda Sala de la Corte Superior de Quito, resolvió no tener competencia y devolvió el expediente a la jueza.

56. El peticionario sostiene que los recursos internos se agotaron con las resoluciones del Tribunal Constitucional, que conoció en apelación los recursos de hábeas corpus, según lo contemplado en el artículo 93 de la Constitución Política de Ecuador. Por su parte, el Estado sostiene que no se ha cumplido el requisito del artículo 46(1) (a) de la Convención Americana porque no se apeló la medida cautelar de detención preventiva, ni se interpuso amparo de libertad según lo establecido en los artículos 172 y 422 del Código de Procedimiento Penal, respectivamente.

57.Sobre el particular, cabe referirse a la Opinión Consultiva No. 8 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

[E]l hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[29].

58.Asimismo, en el caso Dayra María Levoyer Jiménez, la CIDH estableció cuanto sigue:

La revisión de la legalidad de una detención implica la constatación no solamente formal, sino sustancial, de que esa detención es adecuada al sistema jurídico y que no se encuentra en violación a ningún derecho del detenido. Que esa constatación se lleve a cabo por un Juez, rodea el procedimiento de determinadas garantías, que no se ven debidamente protegidas si la resolución está en manos de una autoridad administrativa, que no necesariamente tiene la formación jurídica adecuada, pero que en ningún caso puede tener la facultad de ejercer la función jurisdiccional (...)"[30].

59. La Comisión considera en el presente caso que cuando el peticionario apeló las resoluciones de Alcaldía que negaron el recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional, el Estado tuvo la oportunidad de realizar un control judicial de la detención en los términos exigidos por la Convención Americana. Por lo tanto, la sentencia de dicho tribunal agotó los recursos internos en cada uno de los casos, aunque las resoluciones del Tribunal Constitucional no hubieran sido cumplidas.

1.Plazo para presentar la petición

60. El artículo 46(1) (b) de la Convención Americana exige que la petición debe presentarse dentro del plazo de los seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos. Al respecto, la Comisión observa que en el presente caso ratifica su doctrina conforme a la cual

El incumplimiento de una sentencia judicial firme configura una violación continuada por parte de los Estados que persiste como infracción permanente del artículo 25 de la Convención, en donde se consagra el derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, en dichos casos no opera el requisito concerniente al plazo de presentación de las peticiones contemplado en el artículo 46(1) (b) de la Convención Americana.[31]

61.Por lo tanto, la Comisión considera que el requisito contemplado en el artículo 46(1)(b) no es aplicable al presente caso, y que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable, en los términos del artículo 32 de su Reglamento.

2.Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

62. El artículo 46(1) (c) dispone que la admisión de las peticiones está sujeta al requisito respecto a que la materia "no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional," y en el artículo 47.d de la Convención se estipula que la Comisión no admitirá la petición que "sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por "la Comisión o por otro organismo internacional. En el presente caso, las partes no han esgrimido la existencia de ninguna de esas dos circunstancias de inadmisibilidad, ni ellas se deducen de los procedimientos.

3.Caracterización de los hechos alegados

63.A los fines de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si se exponen hechos que podrían caracterizar una violación, como estipula el artículo 47.b de la Convención Americana.

64.La Comisión considera que la alegada detención en contra de las condiciones establecidas por la legislación ecuatoriana podría configurar una violación del artículo 7 de la Convención Americana. El alegado incumplimiento de la sustitución de la detención preventiva por el arresto domiciliario, ordenado por los jueces de las causas de las 5

presuntas víctimas, así como de las cinco sentencias del Tribunal Constitucional que ordenaron a los jueces tomar las medidas para efectivizar la sustitución ordenada podría configurar violación del artículo 25 de la Convención.

65.Si bien es cierto el peticionario no alegó la violación de los artículos 5 y 19 de la Convención Americana, la Comisión, en aplicación del principio iura novit curia, considera que las condiciones en las que las presuntas víctimas tuvieron que desarrollar su embarazo, dar a luz y criar a sus hijos podrían caracterizar violación de dichos artículos.

66.La detención, el mantenimiento de la detención preventiva contra lo establecido por el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, así como que continúen detenidas hasta el momento, podría configurar violación del artículo 7 de la Convención Belém do Pará.

67.Las condiciones de detención, en las que tuvieron que continuar su embarazo, dar a luz, y tienen en la actualidad que vivir con sus menores hijos podrían configurar violación del artículo 4(b) de la Convención Belém do Pará.

68.Respecto a las alegadas violaciones de los artículos 11 y 24 de la Convención Americana; y de los artículos 2 (incisos b y c), 4( incisos b, c y f), 6(a) de la Convención Belém do Pará, la Comisión estima que los alegatos expuestos por el peticionario no tienden a caracterizar posibles violaciones a dichos artículos.

V.CONCLUSIONES

69.Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y sin constituir prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión, la Comisión concluye que el presente caso satisface los requisitos de admisibilidad enunciados en el artículo 46 de la Convención Americana.

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible la petición bajo estudio, en relación con los derechos reconocidos en los artículos5, 7, 19 y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.

2.Declarar inadmisible la alegada violación de los artículos 11 y 24 de la Convención Americana; y de los artículos 2 (incisos b y c), 4(incisos b, c y f), 6(a) de la Convención de Belém do Pará.

3.Notificar esta decisión al Estado y al peticionario.

4.Invitar a las partes a considerar la posibilidad de iniciar el procedimiento para llegar a una solución amistosa del caso y ponerse a disposición de las partes para tal efecto.

5.Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual, a ser presentado a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington D.C., a los 23 días del mes de julio de 2007.(Firmado): Florentín Meléndez, Presidente; Paolo Carozza, Primer Vicepresidente; Víctor Abramovich, Segundo Vicepresidente; Clare K. Roberts, Evelio Fernández Arévalos y Freddy Gutiérrez, Comisionados.

[1] Que no están bajo el control de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social de Ecuador, autoridad encargada de velar por los derechos de los detenidos(as).
[2] Según se desprende de la copia del examen ecográfico, practicado el 24 de julio de 2002 por el Dr. Juan Parreño, del Departamento Médico del Centro de Rehabilitación.
[3] El artículo 171 dispone:
Sustitución.- Siempre que se trate de un delito sancionado con pena que no exceda de cinco años y que el imputado no haya sido condenado con anterioridad por delito, el juez o tribunal puede ordenar una o varias de las siguientes medidas alternativas a la prisión preventiva:
1.El arresto domiciliario, con la vigilancia policial que el juez o tribunal disponga;
2.La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o tribunal o ante la autoridad que él designe; y,
3.La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez o tribunal.
Cualquiera que fuere el delito, la prisión preventiva será sustituida por el arresto domiciliario en todos los casos en que el imputado o acusado sea una persona mayor de sesenta y cinco años de edad o que se trate de una mujer embarazada y hasta noventa días después del parto. En estos casos también procede la caducidad prevista en el artículo 169 de este Código.
[4] El artículo 93 expresa:
Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá acogerse al hábeas corpus. Ejercerá este derecho por sí o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito, ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre, o ante quien haga sus veces. La autoridad municipal, en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la recepción de la solicitud, ordenará que el recurrente sea conducido inmediatamente a su presencia, y se exhiba la orden de privación de libertad. Su mandato será obedecido sin observación ni excusa, por los encargados del centro de rehabilitación o del lugar de detención.
El alcalde dictará su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes. Dispondrá la inmediata libertad del reclamante si el detenido no fuere presentado, si no se exhibiere la orden, si ésta no cumpliere los requisitos legales, si se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la detención o, si se hubiere justificado el fundamento del recurso (...).
[5] Art. 58.-Ninguna mujer embarazada podrá ser privada de su libertad, ni será notificada con sentencia que le imponga penas de prisión o de reclusión, sino 90 días después del parto.
[6] Copia de la Resolución de Alcaldía de 17 de septiembre de 2002.
[7] Copia de la Resolución del Tribunal Constitucional Nº 051-2002-HC

[8] Copia de Resolución de Alcaldía de 9 de septiembre de 2002.
[9] Mediante Resolución 050-2002-HC.
[10] Según consta en la copia del examen eco pélvico del Hospital Enrique Garcés, realizado el 2 de febrero de 2004.
[11] Copia de la Resolución de Alcaldía.
[12] Copia de la Resolución del Tribunal Constitucional No. 031-2004-HC
[13] Copia de oficio N° 906-2004-435-2003-JCPP de 20 de mayo de 2004.
[14]Según se desprende de la copia de su partida de nacimiento.
[15] Copia de Resolución del Fiscal.
[16] Copia de la Resolución de Alcaldía.
[17] Copia del auto emitido.
[18] Copia de Resolución de Tribunal Constitucional.
[19] Copia del oficio.
[20] Según Informe del Dr. Galo Maldonado Picerno del Departamento Médico del Centro de Rehabilitación.
[21] Copia de Resolución de inicio de instrucción.
[22] Copia de Auto que dispone prisión preventiva.
[23] Copia de la Resolución.
[24] Copia de acta de audiencia preliminar. Punto 1.
[25] Copia de la Resolución No. 033-2004-HC. Considerando octavo.
[26] Copia de la Resolución No. 033-2004-HC., puntos resolutivos 1 y 2.
[27] Copia de la Resolución de la Corte Superior.
[28] El artículo 208 de la Constitución de Ecuador dispone:
(...) Los centros de detención contarán con los recursos materiales y las instalaciones adecuadas para atender la salud física y psíquica de los internos. Estarán administrados por instituciones estatales o privadas sin fines de lucro, vigiladas por el Estado.
Los procesados o indiciados en juicio penal que se hallen privados de su libertad, permanecerán en centros de detención provisional.
Únicamente las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de la libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de rehabilitación social (...).
[29] El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humano)
[30] Informe Nº 66/01. Caso 11.992 Dayra María Levoyer Jiménez de 14 de junio de 2001. Párr. 79
[31] CIDH, Informe Anual 1999, Informe N° 75/99 – César Cabrejos Bernuy. Caso 11.800 Perú, Párr. 22.Informe N° 89/99 - Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez Fernández, Reymer Bartra Vásquez y Maximiliano Gamarra Ferreira. Caso 12.034 Perú, Párr. 23. Informe Anual 2001, Informe N° 85/01 – Trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Empresa de Servicios Municipales de Lima. Caso 12.084 Perú, Párr. 20.

**INFORME N° 29/07. PETICIÓN 712-03. ADMISIBILIDAD. ELENA TELLEZ BLANCO. COSTA RICA. 26 DE ABRIL DE 2007.**

I.RESUMEN

1.El 24 de agosto de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión", la "Comisión Interamericana" o la "CIDH") recibió una petición presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL y el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia, SEPI(en adelante "los peticionarios"). En esta petición se alega la responsabilidad de la República de Costa Rica (en adelante "Costa Rica", o el "Estado") por la violación, en perjuicio de la señora Elena Tellez Blanco (en adelante la "presunta víctima"), de los artículos 5, 11, 17, 19, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana" o la "Convención"), en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.

2.Los peticionarios alegan que la presunta víctima tiene una excesiva y desproporcionada jornada laboral que muchas veces se extiende hasta por 24 horas durante 11 días consecutivos, como trabajadora de los albergues establecidos por el Patronato Nacional de la Infancia (en adelante el "PANI"). En ese sentido, alegan que esta situación constituye una forma de discriminación laboral, en parte debido al género femenino de la presunta víctima, por medio de la cual se ha violado los derechos de integridad personal, protección de la familia y vida privada y familiar de la misma. Además que, ante esto, el Estado no ha garantizado la debida protección judicial.

3.El Estado solicitó a la Comisión que declarara el caso inadmisible sobre la base de que no se han agotado los recursos de la vía interna y que la presunta víctima actúa de mala fe al omitir referirse a los procesos laborales que aun están en trámite en los Tribunales de Justicia de Costa Rica.

4. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que la petición es admisible, a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 5, 24 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento internacional. La Comisión decide además, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA

5.La Comisión recibió la petición el día 24 de agosto de 2003 y se le asignó el número 712/03.Con fecha 11 de septiembre del mismo año, se acusa recibo y se indica a los peticionarios que el reclamo se encuentra bajo estudio.

6.Con fecha 17 de septiembre de 2003, la Comisión recibió información adicional de los peticionarios.

7.Con fecha 18 de marzo de 2004, la Comisión trasladó la información al Estado al cual se le concedió plazo de dos (2) meses para presentar sus observaciones.

8.Con fecha 18 de agosto de 2005, la Comisión reiteró al Estado que estaba a la espera de sus observaciones.

9. Con fecha 14 de octubre de 2005 el Estado remitió a la Comisión las observaciones a dicha petición. Con fecha 28 de noviembre del mismo año, la Comisión acusa recibo de dicha comunicación al Estado y le remite a los peticionarios las partes pertinentes para que presenten las observaciones en el plazo de un (1) mes.

10. Con fecha 26 de enero del 2006 los peticionarios remiten a la Comisión las observaciones. Con fecha 2 de febrero del 2006 la Comisión remite al Estado las partes pertinentes para que en el plazo de un (1) mes presenten sus observaciones.

11.Con fecha 3 de febrero del 2006 la Comisión informa a los peticionarios que se ha decidido convocar una audiencia durante su 124 período ordinario de sesiones, para tratar cuestiones referentes a la petición, indicándoles que dicha audiencia se llevará a cabo el 3 de marzo del 2006 y les solicita la lista de las personas que integrarían la delegación.

12.Con fecha 20 de febrero del 2006 el Estado remite a la Comisión la lista de las personas que conformarían la delegación para la citada audiencia.

13.Con fecha 3 de marzo del 2006 se celebró la audiencia No.10 sin que se tomara decisión alguna respecto de la petición.

14. Con fecha 26 de junio del 2006 la Comisión remitió a los peticionarios y al Estado, comunicación en la cual decide ponerse a disposición de las partes con miras a alcanzar una solución amistosa a partir del ofrecimiento planteado durante la audiencia celebrada, por lo que solicitó a los peticionarios manifestar a la Comisión en el plazo de un (1) mes, si tendrían interés en iniciar el procedimiento previsto en el artículo 48.1.f de la Convención.

15.Con fecha 14 de agosto del 2006, la Comisión recibió comunicación por parte del Estado en la cual manifiesta que previo a entrar en un proceso de solución amistosa, considera necesario que la Comisión se pronuncie sobre la admisibilidad de la petición, en relación con lo cual, en dicho escrito, también se fundamenta la posición de Costa Rica sobre la inadmisibilidad de la solicitud a nombre de la señora Tellez Blanco.

16.Con fecha 19 de diciembre de 2006, los peticionarios dirigieron comunicación a la Comisión con el fin de presentar argumentos adicionales y solicitar se emita el informe de admisibilidad, ya que consideran haber demostrado que la petición reúne los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 46.1 de la Convención.

## III.POSICIONES DE LAS PARTES

### A. Los peticionarios

17.Indican los peticionarios que la presunta víctima ha laborado como empleada de los albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) desde hace trece años, teniendo a su cargo, una carga laboral excesiva toda vez que es común que tenga que trabajar hasta 24 horas al día, durante 11 días consecutivos.

18. Manifiestan los peticionarios que la presunta víctima tiene un trabajo de "Tía Sustituta" en uno de los albergues para niños en la ciudad de San José, en donde se encarga del cuidado de un promedio de 10 a 20 niños, entre infantes y adolescentes, quienes muchas veces presentan problemas de comportamiento o psicológicos, presentan discapacidades, problemas de drogadicción y de sexualidad, entre otros. Indican los peticionarios que muchas veces los de niños han sido víctimas de maltratos, abuso sexual o abandono. Agregan que a pesar de la complejidad de este trabajo, muchas veces son sólo dos las Tías Sustitutas encargadas del número de niños y adolescentes arriba indicado, a pesar de que el Modelo de Atención para Alternativas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del PANI, documento oficial del Patronato, recomienda que por cada 8 personas protegidas por el albergue, se asignen a dos tías sustitutas.

19.Asimismo, alegan que la naturaleza del trabajo exigente desde el punto de vista físico, mental e intelectual, y que demanda para con los protegidos, de acuerdo con la Sección Empleo del PANI, velar por sus derechos, supervisar su comportamiento, apoyarles en sus tareas escolares, facilitar la participación de niños con disparidad, atender de día y noche a los niños enfermos, llevar reportes diarios, vestir a los niños y acostarlos, velar por las condiciones de higiene, bañarlos, cambiar pañales, entre otras actividades laborales. Mencionan los peticionarios que las actividades de cuidado y atención de los menores, comienzan desde que se levantan las tías sustitutas (presuntas víctimas) alrededor de las 4 de la mañana, y que por tanto la sobrecarga laboral ha llevado al alejamiento de las tías sustitutas de sus propios hijos y en general, de sus familias.

20.Argumentan también los peticionarios que el Reglamento Autónomo de Servicio del Patronato Nacional de la Infancia exige a las Tías Sustitutas trabajar de lunes a domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, además de permanecer en el centro de trabajo en condición de disponibilidad desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Luego de once días trabajando en las condiciones descritas, reciben tres días de descanso, los cuales, debido a la obligación de disponibilidad que exige el reglamento a las trabajadoras, no necesariamente se cumple.

21.Aducen los peticionarios que frente a este tipo de trabajo, la supuesta simple presencia en el local o disponibilidad, se convierte la mayoría de las veces en trabajo efectivo, debido a la exigente carga laboral que resulta de las condiciones de los niños del albergue, toda vez que las tías tienen que cumplir con responsabilidades que van, desde el cuidado de los

niños, hasta realizar labores similares a las de empleada doméstica y maestra y mensajera y transportista y enfermera.

22.Los peticionarios aducen que la presunta víctima se enfrenta a una situación de "discriminación laboral por motivos de género", que afecta generalmente a las "Tías Sustitutas" en los albergues del PANI. Manifiestan que la sola denominación de los cargos indica que están dirigidos a mujeres y que en la práctica todas las "Tías Sustitutas" son mujeres. Alegan que tanto el PANI como las autoridades judiciales tienen una concepción estereotipada de que las mujeres "en su rol de madre" están obligadas a cuidar sus hijos las 24 horas del día y realizar labores domésticas sin derecho a descanso. Expresan que esta concepción se ha trasladado al perfil del puesto de las "Tías Sustitutas", exigiéndoles que asuman el mismo rol de una madre cuando en realidad se trata del desempeño de un trabajo para el cual son contratadas. Si bien el trabajo de las tías en el cuidado de los niños y niñas de los albergues es importante y particular, expresan que "no puede perderse de vista que dicho trabajo está regulado por normas laborales que deben ser respetadas sin excepción". Para sustentar dichas alegaciones, presentan un informe de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, el cual señala que:

En este sentido, es criterio de la Defensoría que el trabajo de las "Tías Sustitutas" tiene como referente el trabajo femenino cotidiano de las mujeres trabajadoras del hogar y madres de familia, cuyo horario requerido no es susceptible de limitar; de ahí que, desde las necesidades e intereses de las trabajadoras denominadas Tías Sustitutas y que realizan el cuido y atención de los menores del PANI, resulta importante recordar y reafirmar que las actividades que realizan es trabajo y que no debe desvalorizarse por considerársele trabajo doméstico propio de mujeres, el cual es visto como su función natural y en consecuencia, invisibilizado"[1]

23.Indican los peticionarios que en mayo de 2000, el Sindicato de Empleados del PANI, contrató a una empresa consultora para realizar una investigación de campo sobre las repercusiones que tiene la jornada de trabajo en las Tías. Señalan que las conclusiones del estudio establecen que a raíz de las condiciones de trabajo antes descritas, efectivamente se produce un detrimento de la salud física y mental de las tías sustitutas. Informan que debido a la escasez de personal conduce a su sobrecarga de trabajo y que las relaciones con sus hijos y con sus familias se ven seriamente perjudicadas debido a su ausencia de sus hogares, y aun estando en ellos, debido a su agotamiento. Aclaran asimismo, que el nivel de cansancio corporal, en ellas, sobrepasa los límites de tolerancia aceptables.

24.Señalan además que la señora Tellez Blanco fue objeto de una agresión física en julio de 2002 cuando uno de los niños atacó a otro menor con un arma punzo-cortante y la presunta víctima se vio obligada a intervenir y forcejear con él y como reacción, el niño agresor la golpeó, lo cual resultó en que la señora Tellez se tuviera que someter a una operación, denominada otroscopía. Consideran importante mencionar que, en el caso de la presunta víctima, ella trabaja sola en uno de los albergues del PANI en San José, mientras que en la mayoría de los albergues trabajan dos tías sustitutas.

25.Alegan también los peticionarios que las mujeres trabajadoras en estos albergues han presentado una serie de diligencias frente a la Defensoría de los Habitantes y la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las cuales han resultado infructuosas. Debido a ello, un grupo de trabajadoras presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema en el año 1992 para defender sus derechos fundamentales exigiendo la nulidad del artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicio del PANI[2] que exige el trabajo de lunes a domingo y durante las veinticuatro horas al día, amparándose en el precepto contemplado en el Título V Derechos y Garantías Sociales, artículo 58 de la Constitución Política de Costa Rica[3], así como en la aplicabilidad del principio de igualdad de remuneración en trabajos semejantes, de acuerdo con el artículo 57[4] de la citada Constitución Política. Indican los peticionarios que en consideración a las pretensiones de las recurrentes, la Sala Constitucional decidió suspender la tramitación del recurso de amparo y otorgarles plazo para presentar la correspondiente acción de inconstitucionalidad.

26.Alegan los peticionarios que mediante la consecuente acción de inconstitucionalidad, las trabajadoras solicitaron a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se pronunciara sobre el artículo 37.C. del Reglamento Autónomo del PANI, con base en su preocupación de que "la jornada establecida en la norma impugnada – 24 horas del día, de lunes a domingo – excede la capacidad de toda persona y va en detrimento de la salud y el bienestar, no solo de las Tías Sustitutas, sino también de los niños que son dignos del mayor cuidado y esmero, porque muchos de ellos tienen incapacidades tanto físicas como psíquicas". En ese sentido, el 5 de septiembre de 1995 dicha Sala, dictó la sentencia No. 4902-95, declarando parcialmente con lugar la acción, anulándose por inconstitucional el inciso c del artículo 37 del citado Reglamento, referente a la frase que dice "las veinticuatro horas del día". Dicha resolución estableció que el tipo de trabajo sometido a revisión se encuentra dentro de un régimen excepcional laboral, razón por lo cual no son violatorias las condiciones de trabajo ni la jornada laboral que se les exige a las Tías Sustitutas. Igualmente decidió que este tipo de jornada es necesaria para el buen desenvolvimiento del menor que precisa atención diaria y continua. Resolviendo así que la jornada debería ser de 12 horas y no de 24, lo cual en efecto hace que la norma impugnada sea inconstitucional, y otorgó el derecho a una mayor compensación salarial para las horas adicionales a la jornada, durante las cuales las tías sustitutas deben estar disponibles. La Sala Constitucional en dicha sentencia describe que el trabajo de las "Tías Sustitutas" es:

prácticamente equivalente al de una madre con funciones de naturaleza similar a este, pues consisten, precisamente, en las labores físicas y afectivas que se esperan de una madre, para con sus hijos, en el caso diez, de las cuales, al menos tres presentan algún problema físico o mental, por lo que aquellas deben procurar que el niño sienta que tiene un hogar donde se le brinda cariño, estabilidad, comprensión, seguridad, confianza, educación y en fin, todos aquellos factores que le permitirán su desarrollo integral hasta llegar a ser un buen ciudadano capaz de desenvolverse en la sociedad.[5]

27.Adicionalmente, resaltan los peticionarios que respecto de la sentencia No. 4902-95 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de fecha 5 de

septiembre de 1995, se debe tener presente que de los 7 magistrados que conformaron la Sala, hubo voto disidente de 3 de ellos, quienes fueron de la opinión de que debía declararse la inconstitucionalidad de la totalidad de la norma impugnada de acuerdo con la siguiente declaración:

Si bien es cierto, la jornada laboral, entendida esta como el tiempo durante el cual se encuentra el trabajador al servicio de su patrono, y por ampliación convencional puede ser fijada por las partes, no puede dicha jornada exceder del máximo legal que establece la Constitución Política. Las partes pueden convenir libremente la jornada laboral que incide en la prestación de los servicios; pero es evidente que no les es permitido superar el límite que el constituyente ha impuesto como máximo de la jornada en cuestión… Ante lo expuesto es evidente que la jornada laboral que prescribe el artículo 37 inciso c) del Reglamento Autónomo de Trabajo del Patronato Nacional de la Infancia, al contemplar una jornada laboral de veinticuatro horas diarias de lunes a domingo infringe directamente las citadas normas y es por ello que nos apartamos de la conclusión a que llegó la mayoría de la Sala al resolver y declaramos en su totalidad inconstitucional el artículo 37 c) del Reglamento…[6]

28.Asimismo, alegan los peticionarios que la sentencia de la Sala Constitucional concluye que el hecho de tener que permanecer en los centros (albergues) no es violatorio de la Constitución en tanto son funcionarias de confianza, y mientras la jornada laboral no sea mayor de doce horas, con la correspondiente remuneración por el tiempo adicional, no se ha producido la desigualdad salarial aducida. Agregan que la Sala Constitucional tampoco encontró violatorio a la Constitución que los días de trabajo sean de lunes a domingo, en razón de los días de descanso que se asignaran posteriormente. Manifiestan los peticionarios que luego de haber sido evacuada la acción de inconstitucionalidad se prosiguió con el conocimiento del recurso de amparo que había sido presentado por las trabajadoras en 1992, el cual fue resuelto el 10 de julio de 1996, con lugar mediante sentencia No. 3482-96, pero sólo en lo referido a la inconstitucionalidad del inciso c) del artículo 37, declarando la nulidad de los contratos de las recurrentes en lo relacionado con la jornada de 24 horas de trabajo e instruyendo al PANI a reelaborar los contratos laborales y suscribirlos con las recurrentes, esta vez con jornadas de doce horas, pero reconociendo su permanencia en el hogar con un plus salarial por disponibilidad, los cual implica que continua la disponibilidad de las tías sustitutas en jornadas de 24 horas al día.

29.En dicha sentencia, la Sala incluye en las respectivas consideraciones, un resumen de lo expuesto por las peticionarias quienes manifestaron que "en conclusión su labor es la de una verdadera madre, pero el PANI nunca ha reconocido ni estimulado la naturaleza espacialísima de su trabajo, desestimando sus peticiones, continúan diciendo que diferentes especialistas elaboraron un informe sobre su situación en el que indican, que al tener que atender más niños de lo establecido, están sufriendo un mayor desgasta físico y emocional y existen estudios y recomendaciones del servicio civil para que se recalifiquen sus puestos, pues el salario que se les paga y demás condiciones laborales son desproporcionadas con la labor que desempeñan".

30.Alegan también los peticionarios que, no obstante la decisión de la Sala Constitucional, todavía se instruye a tías sustitutas a mantener el ritmo de trabajo de once días consecutivos, con una jornada laboral que de hecho se extiende por 24 horas de lunes a domingo. Señalan que, frente a esto, el Sindicato de Empleados del PANI presentó, con fecha 8 de junio de 2002, un segundo recurso de inconstitucionalidad respecto al inciso c) del Artículo 38 del Reglamento Autónomo de Servicio del PANI[7], el cual establece que las tías sustitutas deberán permanecer en el centro de trabajo en condición de disponibilidad desde las 18:00 horas hasta las 6:00 horas del día siguiente, lo cual contraviene tanto una serie de artículos de la Constitución Política, como varios derechos amparados por la Convención Americana.

31.Aducen los peticionarios que, mediante sentencia N° 2002-06660 de fecha5 de julio de 2002, notificada el 24 de febrero de 2003, la Sala Constitucional declaró que no existe trasgresión alguna a los derechos fundamentales de las tías sustitutas, por cuanto no se está irrespetando la jornada laboral de doce horas que ha sido dispuesta, sino que si se les está reconociendo dicha jornada, así como su disponibilidad y la permanencia en el hogar con el correspondiente pago salarial, razones que la Sala consideró suficientes para declarar improcedente el recurso y rechazarlo por el fondo. Dicho recurso es inapelable.

32.En este sentido, se documenta que la presunta víctima y un grupo de trabajadoras, han iniciado proceso ordinario laboral en contra del Patronato Nacional de la Infancia, mediante el cual reclamaron el pago de horas extras no pagadas y el tiempo de disponibilidad no pagado, calculado en un 40% sobre el salario base, toda vez que el PANI deliberadamente sustanció y rebajó el sobresueldo en un 25%. Respecto de este proceso el Juzgado de Trabajo mediante sentencia No. 1206 de fecha 7 de mayo del 2003 declaró la demanda sin lugar en todos sus extremos.

33.Igualmente se documenta que otro grupo de trabajadoras del PANI en el que no participó la presunta víctima, promovió ante el Juzgado de Trabajo otra demanda ordinaria laboral, mediante la cual también solicitó el otorgamiento del pago por concepto de disponibilidad, en un 40%.El Juzgado al resolver sobre el particular, emitió la sentencia No. 1082 de fecha 8 de mayo del 2003 en la cual la Juez, indica que el fondo de las pretensiones de dichas trabajadoras se debe centrar, no en el pago de un porcentaje más sobre el salario base (según lo pretendido por las demandantes), sino en la inconformidad con la jornada laboral que se deduce de su queja[8], y con motivo de dicha consideración, resolvió declarar sin lugar en todos sus extremos dicha demanda.

34.Con fecha 3 de marzo del 2006, durante el 124 período ordinario de sesiones de la Comisión, se celebró la audiencia No. 10, en la cual los peticionarios volvieron a reiterar los argumentos de la petición en el sentido de que la vía interna ha sido suficientemente agotada y que los recursos internos no han protegido la situación jurídica denunciada, no han sido idóneos ni eficaces las soluciones planteadas, toda vez que persiste la violación, y, el Estado no ha tomado las provisiones necesarias para remediar y cambiar el régimen laboral al que están sometidas las tías sustitutas del PANI.

35.Finalmente los peticionarios en su comunicación recibida en la Comisión con fecha 3 de enero del 2007, remiten argumentos adicionales a efecto de que sea admisible el caso, indicando que lo resuelto por la Sala Constitucional únicamente logró que se reconociera el pago de un sobresueldo a las trabajadoras, supuestamente por permanecer en condición de disponibilidad por espacio de 12 horas, pero no se reparó la violación de los derechos que dio origen a su queja o reclamo, pues en la práctica, las Tías continúan estando sujetas a una jornada de trabajo de 24 horas continuas, por un espacio de 11 días consecutivos, y se ven obligadas a permanecer en los albergues donde laboran, realizando actividades para lograr satisfacer las necesidades de los niños y niñas que se encuentran bajo su cuidado. Así mismo, argumentan los peticionarios que a lo largo de este litigio internacional, el Estado ha pretendido hacer valer la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, cuando señala, entre otras cosas que en el proceso interno no fueron alegadas violaciones de los mismo derechos que ante la Comisión se alegan como violados; aduciendo sin embargo que es evidente que en el fondo la reclamación es la misma, es decir, la eliminación de la disposición reglamentaria que establece una jornada de 24 horas para las trabajadoras.

36.Así mismo señalan los peticionarios que contrario a lo establecido en el artículo 137 del Código de Trabajo[9] costarricense, se evidencia que las Tías Sustitutas no se encuentran en condición de (eventual) disponibilidad, pues no se limitan a estar expectantes a la existencia de alguna necesidad, sino que se encuentran obligadas a permanecer laborando en los albergues, no pudiendo disponer de su tiempo como si se tratara de tiempo libre, ni están a la expectativa de ser llamadas, sino que por el contrario, en todo momento están a la disposición del empleador, por lo cual se trata de tiempo de trabajo efectivo, laborando así las 24 horas del día.

B. El Estado

37. Con fecha 14 de octubre del 2005, el Estado remitió las observaciones respectivas, argumentando que Las tías sustitutas que laboran para el PANI han promovido 3 juicios laborales ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial, dos de los cuales han sido acumulados en uno solo. Ambos juicios ya fueron fallados y declarados "sin lugar en todos sus extremos". Dichas sentencias establecieron que no es posible, según el Derecho Laboral, otorgar el pago por horas extras a las Tías Sustitutas, toda vez que se incurriría en un doble pago, por estar ellas remuneradas con el 25% más de su salario por el concepto de disponibilidad.

38. Argumenta el Estado que el régimen de las Tías Sustitutas no viola el principio de igualdad y discriminación por género, y considera que es fundamental dejar sentado que el régimen excepcional instaurado en relación con las trabajadoras de atención directa o "Tías Sustitutas" encuentra su base en el fin legítimo de velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes que están en condición de vulnerabilidad.

39.Continua argumentando el Estado que es fundamental enfatizar que en cuanto a este extremo, las accionantes –y la peticionaria en particular- no han agotado la vía interna, toda vez que este derecho no ha sido alegado dentro de los reclamos ante la Sala

Constitucional o alguna otra instancia nacional, y al respecto resalta que la jurisdicción constitucional es un medio expedito para el reclamo de los derechos fundamentales.

40. Asimismo manifiesta el Estado que este régimen laboral no quebranta el principio de igualdad y no discriminación por género, menos aun con las modificaciones ordenadas por la Sala Constitucional y ejecutadas por el PANI y la Autoridad Presupuestaria en cuanto a los contratos con dicho grupo de trabajadoras; es decir que si bien existe un régimen excepcional, el Estado ha asumido que éste no puede ser en conculcación de garantías y libertades fundamentales. Asimismo debe rescatarse que la trascendencia de la labor de las tías sustitutas respalda el que exista un régimen excepcional –sin transgredir derechos- y se encuentra en consonancia con lo señalado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en cuanto a que no toda diferenciación en el trato constituye una discriminación, pues la distinción no resulta contraria al principio de no discriminación, es decir, "si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr un propósito legitimo", tal como lo esboza la peticionaria en su escrito. En ese mismo orden de ideas, indica el Estado que debe enfatizarse en el hecho que en atención al principio de legalidad, se ha llevado a cabo el trámite pertinente en las instancias estatales, resultando en el pago por horas de disponibilidad, para que el régimen de las Tías Sustitutas, siendo excepcional, se encuadre dentro de las exigencias de la racionalidad.

41.Insiste el Estado en que la petición de la señora Tellez Blanco no tiene lugar, toda vez que no se han agotado los recursos internos, pues ella no recurrió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando se interpusieron tanto el recurso de amparo, como la acción de inconstitucionalidad respectiva. Indica igualmente que la peticionaria no figura como parte en ninguno de dichos dos procesos, y que aún mas, en ningún momento se afirma la petición ante la Comisión que la señora Tellez figuró como parte en alguno de esos procesos. Afirma el Estado que si bien las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte tienen efectos erga omnes, algunos de los derechos reclamados por la peticionaria no fueron objeto de estudio en el recurso de amparo, ni siquiera a favor de quienes lo interpusieron, ni tampoco fueron ventilados los correspondientes reclamos en otras instancias, por lo cual continua abierta la cuestión para su discusión en la vía interna.

42.Con fecha 3 de marzo del 2006, durante el 124 período ordinario de sesiones de la Comisión, se celebró la audiencia No. 10, en la cual el Estado insistió en su argumento de que no existe congruencia o correlación entre lo solicitado al interior de Costa Rica con respecto a lo que se está pretendiendo ante esta Comisión y, reiteró que la señora Tellez aun tiene la oportunidad de interponer su propio (recurso de) amparo y exponer su caso particular.

43.El Estado en su comunicación de fecha 11 de agosto del 2006 (recibida en la Comisión el 14 del mismo mes) expresa que es necesario recalcar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha establecido que el importante régimen en el cual se desempeñan las Tías Sustitutas del PANI tiene una naturaleza excepcional, debido especialmente a que dichas trabajadoras cumplen un papel de gran trascendencia en beneficio de los menores de edad en condición de vulnerabilidad. Agrega que, una vez

establecido que se trata de un régimen excepcional, debe entenderse que no corresponde a un régimen común de trabajo debido a la necesidad de mantener patrones de estabilidad y de seguridad en beneficio de dichos menores.

44.También manifiesta el Estado que, respecto al segundo recurso de amparo, por tratarse de aspectos laborales, fue remitido por la Sala Constitucional a la jurisdicción laboral con el fin de que los alegatos fuesen allí ventilados. Igualmente informa que las dos causas abiertas en la jurisdicción laboral continúan en trámite, pues corresponden a recursos en alzada interpuestos contra resoluciones de la propia Sala Constitucional, razón por la cual el Estado insiste en que no se ha agotado la vía interna. Aclara el Estado que, las decisiones judiciales en este sentido son las indicadas para determinar si corresponde el pago de horas extras junto con la remuneración por disponibilidad del 40% que se pretende, en vez del 25 % que en un principio determinó la Sala Constitucional.

45.Recalca el Estado con respecto a la falta de agotamiento de los recursos internos que, los recursos que se han intentado han tendido una connotación de remuneración laboral y no así de reforma de un régimen laboral en particular y que por tanto, entiende que la peticionaria reclama ante la Comisión, derechos distintos a aquellos que sobre el tema han sido reclamado en las instancias nacionales, y que adicionalmente, la peticionaria Tellez Blanco no ha ventilado en los tribunales costarricenses las situaciones que supuestamente la afectan.

46.Manifiesta el Estado que al reglamentar el régimen que aplica a las Tías del PANI, el gobierno se basó en el propio ordenamiento jurídico costarricense, buscando ajustar el denominado régimen excepcional a los criterios de racionabilidad y proporcionalidad. Agrega que, de no respetarse dichos criterios en un contexto especifico, correspondería discutir la correspondiente denuncia en la vía interna, a través del recurso de amparo o de la acción de inconstitucionalidad, y que, al igual que cualquier presunta violación de derechos en materia laboral, corresponde su análisis a la jurisdicción laboral, proceder que no ha sido seguido la peticionaria.

47.Finalmente el Estado expresa su interés en que se aclare si el asunto en cuestión versa sobre la situación de una peticionaria, la señora Tellez, o si versa sobre las condiciones de un grupo de trabajadoras, pues en la audiencia celebrada el 3 de marzo del año 2006 en el marco del 124º período ordinario de sesiones de la CIDH, las representantes de las víctimas enfatizaron en la situación de la señora Tellez con hechos nuevos sobre los cuales el Estado no tenía conocimiento y frente a los cuales según se ha dicho, existen soluciones internas que la señora Tellez no ha utilizado, tales como el recurso de amparo y la jurisdicción laboral, por lo que solicita que la petición sea declarada inadmisible.

IV.ANÁLISIS

A. Competencia ratione personae, ratione loci, ratione temporis y ratione materiae de la Comisión Interamericana

48.Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala la situación particular de la señora Tellez Blanco, una persona individual respecto de quien el Estado costarricense se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. Por otro lado, la Comisión señala que Costa Rica es un Estado parte en la Convención Americana desde el 8 de abril de 1970, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto la Comisión tiene competencia racione personae para examinar la petición.

49.La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado, en este caso, el Estado de Costa Rica. La CIDH tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.

B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

1.Agotamiento de los recursos internos

50.El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana, de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional.

51.El requisito de agotamiento previo se aplica cuando en el sistema nacional están efectivamente disponibles recursos que son adecuados y eficaces para remediar la presunta violación. En este sentido, el artículo 46.2 especifica que el requisito no se aplica cuando no exista en la legislación interna el debido proceso legal para la protección del derecho en cuestión; o si la presunta víctima no tuvo acceso a los recursos de la jurisdicción interna; o si hay retardo injustificado en la decisión sobre dichos recursos. Como indica el artículo 31 del Reglamento de la Comisión, cuando el peticionario alega una de estas excepciones, corresponde al Estado demostrar que los recursos internos no han sido agotados, a menos que ello se deduzca claramente del expediente.

52.En la presente denuncia, los peticionarios han alegado que se agotaron los recursos de la jurisdicción interna, que culminaron con la sentencia emitida por la Sala Constitucional de fecha 5 de julio del 2002 emitida en respuesta al recurso de Amparo interpuesto por el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia, entidad que al interior de

Costa Rica representa automáticamente los intereses de la señora Tellez al procurarse cualquier tipo de mejora en las condiciones laborales para el grupo de personas empleadas como tías sustitutas del PANI y que además es uno de los peticionarios en la denuncia planteada ante la CIDH.

53.Por su parte, el Estado aduce que los recursos internos no se agotaron completa y debidamente porque la presunta víctima no participó en todos los recursos interpuestos respecto del tema y que más aun, ella no ha expuesto individualmente su situación en un recurso de Amparo, recurso del cual el Estado aduce que aun puede hacer uso. Agrega el Estado que la discusión a lo interno se ha limitado a dirimir parámetros sobre la jornada de trabajo y la debida remuneración, no así a un análisis para el caso particular de la señora Tellez.

54.Con base en los términos del artículo 46 de la Convención y del artículo 31 del Reglamento y su revisión del expediente, la Comisión considera que la resolución de la Sala Constitucional agota los recursos internos disponibles para la señora Tellez. Blanco.

2.Plazo de presentación

55.El Reglamento de la Comisión, artículo 32.1, establece que serán consideradas "las peticiones presentadas dentro de los seis meses contados a partir de la fecha en que la presunta víctima haya sido notificada de la decisión que agota los recursos internos."

56.En el presente caso, la petición fue presentada el 24 de agosto de 2003, respecto de supuestas violaciones a los derechos de la presunta víctima que comenzaron años antes de la presentación de la petición y ante las cuales se presentó un recurso ante la Sala Constitucional, la cual dictó sentencia el 5 de julio de 2002 misma que fue notificada el 24 de febrero de 2003. Consecuentemente, la Comisión considera que el requisito del artículo 32.1 de su Reglamento ha sido cumplido en la presente petición, habiéndose presentado esta dentro del plazo establecido.

3.Duplicación de procesos y cosa juzgada internacionales

57.No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento internacional, ni que se reproduzca una petición ya examinada por este u otro órgano internacional. Por ello, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.

4.Caracterización de los hechos alegados

58.No corresponde a la Comisión en esta etapa del procedimiento decidir si se produjeron las alegadas violaciones a los artículos de la Convención Americana de la presunta víctima. A efectos de admisibilidad, la Comisión debe resolver en este momento únicamente si se exponen hechos, que de ser probados, podrían caracterizar violaciones a la Convención, según lo estipula el artículo 47.b de la Convención Americana, y si la petición es

"manifiestamente infundada" o es "evidente su total improcedencia" según el inciso (c) del mismo artículo.

59.El criterio para la apreciación de estos extremos es distinto al requerido para pronunciarse sobre el fondo de una denuncia. La Comisión debe realizar una evaluación prima facie y determinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención, pero no establecer la existencia de dicha violación. El examen que corresponde efectuar en este momento es simplemente un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo del asunto. El propio Reglamento de la Comisión al establecer dos etapas claras, una de admisibilidad y otra de fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión a los fines de declarar una petición admisible y la evaluación requerida para establecer una violación.

60.En el presente caso, la Comisión considera que no resultan manifiestamente infundados los argumentos esgrimidos por los peticionarios en cuanto a la posible vulneración del os artículos 5, 24 y 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de la presunta víctima, la señora Tellez Blanco.

61.La CIDH considera que los hechos expuestos, de ser probados con relación a la presunta víctima podría caracterizar posibles violaciones al artículo 5 de la Convención Americana en conexión con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento. Los peticionarios alegan que la jornada laboral a la que estaría sujeta la señora Tellez Blanco habría ocasionado su deterioro físico y mental, de esta manera atentando directamente contra su integridad personal. Todo ello a raíz de que a las "Tías" , según se alega, no se les permite disfrutar del tiempo necesario para su descanso diario por fuera del lugar de trabajo, luego de cumplir con una labor extenuante que el propio Estado costarricense ha descrito como "primordial"[10].En la práctica, la labor de cada "Tía", según se argumenta, comprende trabajo continuo durante 24 horas al día, por 11 días consecutivos, con la obligación de permanecer en el lugar de trabajo durante este lapso de tiempo, y en beneficio de un grupo de 10 a 20 niños que presentan problemas de comportamiento, psicológicos, de discapacidad, de drogas y de sexualidad, entre otros.

62.De la misma manera, frente a la presunta violación del artículo 24 de la Convención, la Comisión observa que podría caracterizarse una violación de dicho artículo en caso de probarse que el régimen al que está sujeta la señora Tellez Blanco tiene un impacto desproporcionado en las mujeres, ya que sólo mujeres ocupan el puesto de "Tías".

63.Respecto de la presunta violación del artículo 25 de la Convención, la Comisión observa de la información aportada por los peticionarios que la violación a dicho artículo no se invoca por el mero hecho de que las demandas hayan resultado en sentencias desfavorables a nivel interno, sino que se fundamenta en la falta de disponibilidad de una protección efectiva del Estado ante las problemáticas planteadas por varios funcionarios del poder judicial (un juez[11] y tres magistrados[12]).

64. En cuanto al reclamo sobre la presunta violación de los artículos 11, 17 y 19, de la

Convención Americana, así como del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, la Comisión estima que no existen suficientes fundamentos dentro de las presentaciones de las partes que sustenten violaciones de los mismos.

V.CONCLUSIÓN

65.La Comisión concluye que esta petición es admisible y que es competente para examinar el reclamo presentado por los peticionarios en relación con la presunta violación de los artículos 5, 24 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, conforme a lo dispuesto por los artículos 46.1.c y (d), 46.2.c y 47.b del mismo instrumento internacional y conforme a los artículos 28 al 37 y 39 del Reglamento de la Comisión.

66.Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.Declarar admisible la presente petición, en relación con los artículos 5, 24 y 25, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana.

2.Declarar que la presente petición es inadmisible con respecto a los artículos 11, 17 y 19 de la Convención Americana y 7 de la Convención de Belém do Pará.

3.Notificar esta decisión al Estado y a los peticionarios.

4.Iniciar el trámite sobre el fondo de la cuestión.

5.Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual, a ser presentado ante la Asamblea General de la OEA.

Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de abril de 2007. Florentín Meléndez, Presidente; Paolo G. Carozza, Primer Vicepresidente; Víctor E. Abramovich, Segundo Vicepresidente; Evelio Fernández Arévalos, Clare K. Roberts, Paulo Sérgio Pinheiro y Freddy Gutiérrez Miembros de la Comisión.

VOTO FUNDAMENTADO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PAOLO G. CAROZZA, EVELIO FERNÁNDEZ ARÉVALOS Y CLARE K. ROBERTS DEL INFORME DE ADMISIBILIDAD N° 29/07

Esta petición debe ser declarada inadmisible ya que las alegaciones presentadas no tienden a caracterizar la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La queja de los peticionarios que se relaciona con el artículo 5 de la Convención se basa completamente en que la jornada de quienes trabajan para el PANI es irrazonable, así como en los efectos sicológicos y físicos que tales jornadas tienen en las empleadas (Tías). Está claro que existe un cuerpo normativo internacional en dicha materia, así como un régimen para su supervisión internacional, particularmente en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, esos temas superan el alcance del Artículo 5 de la Convención, el cual no busca supervisar las relaciones laborales comunes ni imponer estándares específicos a los Estados con relación a las condiciones y a los horarios de trabajo dentro del ámbito de los contratos laborales, ya sean del sector público o del sector privado. Esto no implica necesariamente que no estaríamos dispuestos a contemplar la aplicación del artículo 5 a las condiciones de trabajo en ciertas situaciones especiales -- por ejemplo cuando en forma específica, las condiciones extremas de trabajo que causen daño a la integridad física, psíquica o moral de una persona estén ligadas con las circunstancias que hagan de la relación de trabajo una forma de servidumbre involuntaria, o que se asemeje a esta última. No obstante, en el caso que aquí se presenta, los peticionarios no han alegado ningún hecho que exponga tales circunstancias excepcionales.

De igual forma, según como se han alegado los hechos, no podrían servir de fundamento para llegar a determinar una violación del artículo 24.Si el argumento de los peticionarios es que la señora Téllez fue discriminada debido a la contratación exclusiva de mujeres para el cargo de Tía Sustituta, entonces serían los varones las posibles víctimas de la exclusión al no permitírseles obtener ese tipo de empleo, pero no serviría ello de base para un recurso por discriminación en el caso de la señora Téllez. En la medida en que, por el contrario, los peticionarios alegan que las condiciones de empleo y los horarios de trabajo de la señora Téllez y de otras Tías Sustitutas constituyen un trato discriminatorio en contra de ellas y en comparación con los varones, una vez más, los hechos alegados no sirven de fundamento para el recurso. Los peticionarios no han alegado hechos que puedan demostrar estadísticamente o de otra manera esta diferencia en el tratamiento entre varones y mujeres en situaciones suficientemente comparables.

Finalmente, no pensamos que los hechos alegados puedan servir de base para el incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proporcionar la protección judicial de los derechos fundamentales de la señora Téllez, en los términos del artículo 25 de la Convención.

[1]Defensoría de los Habitantes, Informe Anual de Labores (1998).
[2]Artículo 37 del Reglamento del PANI: Los centros de atención a menores funcionarán con tres categorías de servidores, personal administrativo, personal técnico y tías sustitutas, las que ejecutarán sus labores con el siguiente horario: ...c) Las Tías Sustitutas laborarán de lunes a domingo, las veinticuatro horas del día. La Dirección Ejecutiva determinará los días de descanso que legalmente les corresponda."
[3]Artículo 57. Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia.
Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la

ley determine.
[4]Artículo 58. La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley.
[5]Sala Constitucional, Sentencia 4902-95.
[6]Voto salvado de los Magistrados Castro Bolaños, Arguedas Ramírez y Calzada Miranda.
[7]Artículo 38 inciso c) "Las Tías Sustitutas laboraran de lunes a domingo, de las 06:00 horas a las 18:00 horas, pero permanecerán en su centro de trabajo en condición de disponibilidad de las 18:00 horas a las 6:00 horas del día siguiente.
[8]Sentencia No. 1082, emitida por el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José Goigoechea, de fecha 8 de mayo del 2003: "... CONSIDERANDO: VIII) EN CUANTO AL PAGO QUE SE RECLAMA POR CONCEPTO DE CUARENTA POR CIENTO DE DISPONIBILIDAD: ... De ahí que cuestiona esta juzgadora el pago que se reclama de un cuarenta por ciento, toda vez que la inconformidad de las accionantes es el estar sujetas a permanecer dentro del albergue y por ende no realizar sus actividades personales y familiares. El porcentaje sea cual sea que se reclame realmente no cobra importancia ante lo expuesto por las reclamantes, pues el problema considera esta administradora no se soluciona con el pago de un porcentaje más sobre el salario base, toda vez que ha quedado claro aquí que la inconformidad no es salarial sino de jornada laboral."
[9]Artículo 137: "Tiempo de trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanezca a las ordenes del patrono o no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de descanso y comidas"
[10].Comunicación del Estado Costarricense recibida en la CIDH el 14 de agosto de 2006.
[11].Mediante sentencia No. 1082, emitida por el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José Goigoechea, de fecha 8 de mayo del 2003
[12].Mediante voto disidente de 3 de los 7 magistrados que conformaron la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que emitió la Sentencia No. 4902-95, con fecha 5 de septiembre de 1995.

**INFORME Nº 38/07[1]PETICIÓN 12.263. ADMISIBILIDAD. MARCIA BARBOSA DE SOUZA. BRASIL. 26 DE JULIO DE 2007.**

I.RESUMEN

1.El 28 de marzo de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "CIDH") recibió una petición presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento Nacional de los Derechos Humanos (MNDH) / Regional Nordeste (en adelante "los peticionarios"), siendo la información actualizada el 3 de octubre de 2006, en la cual se alega la violación por parte de la República Federativa del Brasil (en adelante, "Brasil" o "el Estado", de los artículos 2, 4, 24, 25 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana"), tanto como 3, 4, 5 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" (en adelante la Convención de Belém do Pará) en perjuicio de Marcia Barbosa de Souza.

2.A través de la presente petición, se denuncia al Estado como responsable de violaciones a los derechos de la Srta. Marcia Barbosa de Souza, cuyo cuerpo fuera encontrado sin vida en un terreno baldío en las inmediaciones de la ciudad de João Pessoa, Capital de Paraiba, el 18 de junio de 1998. En relación a ello, se inició una investigación policial por la policía local, la cual fuera concluida el 27 de agosto de 1998. Se atribuye la responsabilidad del crimen a un Diputado Estadual, supuesto amante de la presunta víctima. Por ello, la Procuraduría General de Justicia se habría visto en un principio impedida de entablar acción penal contra el aludido sujeto, en razón de sus fueros parlamentarios, al no haber la Asamblea Parlamentaria conferido autorización para este proceder. El 20 de diciembre de 2001, con la aprobación de la Enmienda Constitucional Nº 35/2001, se determinó que la acción penal contra parlamentarios sería admitida independientemente de la autorización de la Asamblea Legislativa. No obstante ello, las autoridades con competencia en Paraiba, no reiniciaron el impulso de la acción penal hasta marzo del año 2003. Transcurridos más de 4 (cuatro) años, a la fecha de la remisión de la última información, la causa aún no ha sido juzgada, tramitándose con extrema lentitud. La decisión que vaya a recaer, es susceptible de ser objeto de varios recursos revisivos, habiendo transcurrido más de 8 (ocho) años desde que tuviera lugar el hecho, lo cual extendería la impunidad en relación al caso.

3.El 26 de septiembre de 2000, el Estado contestó la petición deducida, remitiendo una información adicional sobre el asunto en fecha 31 de octubre de 2000, manifestando que el Procurador General del Estado de Paraiba y el Ministerio Público presentaron denuncia contra el Diputado Estadual acusado. En dos oportunidades se solicitó el desafuero del sujeto para instaurarse acción penal en su contra, siendo las solicitudes denegadas.

4.Tras examinar la posición de las partes a la luz de los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decidió

declarar admisible el caso en relación con los artículos 4, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión con la obligación general contenida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, tanto como 7 de la Convención de Belém do Pará. Igualmente, decidió declarar inadmisible la petición bajo estudio, en relación a los artículos 2 de la Convención Americana, tanto como 3, 4 y 5 de la Convención de Belém do Pará.

5.En consecuencia, la Comisión decidió notificar a las partes y hacer público el presente Informe de Admisibilidad e incluirlo en su Informe Anual.

II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

6.En fecha 19 de abril de 2000, la Comisión notificó al Estado de haberse instaurado en su contra una petición, haciéndole llegar las partes pertinentes de la misma, además de notificarle del conocimiento del instante en que empezaba a computarse el plazo de 90 (noventa) días establecido por el artículo 34 del reglamento de ésta, vigente en aquel entonces, para la contestación de aquella. En la misma fecha se comunicó a los peticionarios el acuse de recibo de la petición por ellos instaurada.

7.El 8 de agosto de 2000, el Estado solicitó una prórroga al plazo que le fuera concedido para responder la petición, siendo la concesión de ésta comunicada al mismo el 14 de dicho mes y año.

8.El 26 de septiembre de 2000, el Estado informó a la Comisión respecto a la petición incoada en su contra, siendo esta información transmitida a los peticionarios el 5 de octubre de 2000, concediéndoseles el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días para que presenten observaciones acerca de lo expuesto en ella. En la última fecha, se transmitió al Estado el acuse del recibo de la información que remitiera.

9.Por nota de fecha 31 de octubre de 2000, recibida por la Comisión el 2 de noviembre del mismo año, el Estado remitió una información adicional sobre el caso, siendo ésta el 20 de noviembre de 2000 transmitida a los peticionarios, a quienes se les otorgó el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días para presentar observaciones en su referencia. En la misma fecha se comunicó al Estado el acuse de recibo de la información en cuestión.

10.El 21 de diciembre de 2000, los peticionarios presentaron las observaciones a la información adicional proveída por el Estado. El acuse de recibo de éstas, fue comunicado a los sujetos en cuestión el 26 del mismo mes y año. En esta misma fecha, las observaciones aludidas fueron transmitidas al Estado, concediéndosele el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días para que presente las observaciones que considerare pertinentes.

11.El 20 de mayo de 2003, los peticionarios remitieron información adicional sobre el caso. El acuse de recibo de la misma fue comunicado a éstos el 11 de junio de 2003, transmitiéndose en la misma fecha esta información al Estado, con el objeto de que en el plazo de 30 (treinta) días presente las informaciones que creyere convenientes.

12.El 7 de septiembre de 2006, la Comisión solicitó a los peticionarios que remitan informaciones actuales en relación al caso, y acerca de si su interés en proseguir con el mismo subsiste. Los peticionarios enviaron su respuesta en fecha 3 de octubre de 2006.

13.El 17 de noviembre de 2006 el Estado solicitó una prórroga de 30 días, la cual fue concedida el 5 de diciembre de 2006 por la Comisión. El 19 de julio de 2007 el Estado envió nueva información sobre el caso para la consideración de la Comisión, la cual fue traslada el 25 de julio de 2007 a los peticionarios para sus observaciones.

III.POSICIONES DE LAS PARTES

A. Posición de los peticionarios

14. Se aduce que el cuerpo de Marcia Barbosa de Souza fue encontrado en un terreno baldío en las cercanías de la ciudad de João Pessoa, Capital del Estado de Paraiba, el 18 de junio de 1998. Para indagar el homicidio, la Policía Civil del Estado de Paraiba inició la investigación Nº 98.004184.0. Identificada la víctima, se descubrió que ella contaba con 20 (veinte) años de edad, era estudiante, se encontraba desempleada, y era natural de la ciudad de Cajazeiras, Estado de Paraiba, hija de Severino Reinaldo de Souza y Marineide Barboza de Souza, ambos residentes de la localidad aludida.

15.Según los peticionarios, la investigación reconstruyó los últimos pasos de la presunta víctima en João Pessoa, descubriéndose que ella estuvo hospedada en una posada de nombre "Canta Maré", lugar en el cual recibió varias llamadas telefónicas del referido Diputado Estadual en aquel entonces, información corroborada por las telefonistas del local de referencia, cuyas declaraciones prestadas en la investigación se encuentran anexas. Según la investigación, sostienen que el día 17 de junio de 1998, después de recibir un último llamado del diputado en cuestión, la presunta víctima dejó la posada para ir a su encuentro. Horas después, aún en compañía del Diputado, llamó del teléfono celular de éste a su ciudad natal, Cajazeiras, donde habló con una amiga de nombre Marcia, y con su familia. La amiga relató que la presunta víctima se encontraba en un motel con el Diputado, hablando incluso la relatante con él. La madre dijo que su hija sonaba feliz, pues había conseguido un empleo, y pretendía quedarse en João Pessoa. Se manifiesta que éste fue el último contacto de la presunta víctima con familiares y amigos[2].

16. Sostienen los peticionarios, que en la mañana del 18 de junio de 1998, un transeúnte vio el vehículo utilizado por el aquel entonces Diputado arrojar "algo" en un terreno baldío, yendo a ver de qué se trataba, se encontró con el cadáver de la presunta víctima. Una vez avisada la policía, se abrieron las investigaciones correspondientes, arrojando la pericia tanatoscópica que la muerte del individuo en cuestión tuvo lugar como causa de una asfixia provocada por sofocamiento[3]. Esta investigación, presidida por el Delegado de Policía Adesaldo Ferreira, concluyó con un informe que señaló al aquel entonces Diputado Estadual como el asesino de la estudiante. Consta en el informe final de la investigación, que el Diputado había sido visto acompañado de la presunta víctima en la noche anterior al crimen, existiendo otras evidencias que confirmaban su presencia en compañía de ésta,

durante sus últimas horas de vida, quien habiendo salido con el sujeto citado, nunca llegó a regresar[4].

17.Al decir de los peticionarios, la policía de Paraiba remitió los autos al Ministerio Público del Estado[5]. Como privilegio inherente a su cargo, el aquel entonces Diputado gozaba de inmunidad parlamentaria, razón por la cual el expediente fue entregado al Jefe del Ministerio Público Estatal, quien procedió a denunciar el caso, existiendo en la denuncia una resalva de que el inicio de la acción penal solo podrá llevarse a cabo con el permiso de la Asamblea Legislativa para que el Diputado fuere procesado. La investigación fue finalizada el 27 de agosto de 1998. El 8 de octubre de dicho año, el Procurador General de Justicia presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia del Estado de Paraiba contra el Diputado Estadual, por el asesinato de la presunta víctima, solicitándose que fuese requerida la necesaria autorización a la Asamblea Legislativa del Estado de Paraiba, por encontrarse el acusado en ejercicio de un cargo en su seno[6]. El 9 de octubre de dicho año, el Juez Relator del caso ordenó su remisión a la oficina de "Coordinación Judicial", con el objeto de que se oficie a la Asamblea Legislativa la petición de desafuero, siendo ésta encaminada al Presidente de dicho órgano el 14 de octubre de 1998[7]. El 17 de diciembre de 1998, el cuerpo en cuestión libró la Resolución Nº 614/98 denegando el pedido de desafuero solicitado por el Tribunal de Justicia del Estado para proceder a la instauración de la acusación criminal contra el Diputado Estadual, siendo esta decisión publicada en el Diario del Poder Legislativo el 18 de diciembre de 1998[8]. En marzo de 1999, por iniciarse un nuevo periodo parlamentario, el Poder Judicial del Estado de Paraiba presentó ante la Asamblea Legislativa un nuevo pedido de desafuero para el Diputado en cuestión[9], siendo el pedido nuevamente denegado, sin que ello fuera publicado en el diario oficial.

18.Se adujo por los peticionarios, que la concesión del desafuero es un acto discrecional del Poder Legislativo, asentándose su deliberación en votación secreta de sus Miembros. Agotada esta Instancia, su resultado es definitivo, al menos hasta concluir el período legislativo del afectado, careciendo el Poder Judicial de competencia para reformar tal decisión. La decisión legislativa de denegar el desafuero, impide que cualquier medida judicial pueda ser tomada contra el Diputado, no existiendo en el marco del Derecho Positivo vigente en el Estado medida alguna para combatir tal situación. Ante el cierre de la vía jurisdiccional por la Asamblea Legislativa, y frente a la inexistencia de algún otro recurso que quepa, se demuestran agotadas las vías internas para la discusión de este caso. La revocatoria de la resolución legislativa de referencia, requiere de una nueva resolución que autorice el desafuero. Se denuncia que la posición del Poder Legislativo ha constituido una traba al acceso a la Justicia para los familiares de la presunta víctima, viéndose éstos imposibilitados de que la acción penal pueda ser instaurada contra el presunto responsable.

19.En la información adicional remitida por los peticionarios en fecha 3 de octubre de 2006, se manifiesta que el 20 de diciembre de 2001, ocurrió en el Estado una alteración legislativa en relación a la inmunidad parlamentaria, con la aprobación por el Congreso Nacional de la Enmienda Constitucional Nº 35/2001, que determinó que la acción penal contra parlamentarios podría ser admitida sin previa autorización de la Cámara Legislativa

a que pertenecen. Con esta innovación, luego de iniciado el proceso, el mismo debe ser comunicado al órgano del cual el acusado es miembro, quien puede suspender el curso de la acción penal, si juzgase conveniente, por el voto de la mayoría de sus componentes.

20. Afirman los peticionarios, que en relación al caso en aprecio, pese a la modificación referida, las autoridades con competencia para el impulso de la acción penal en el Estado de Paraiba, no tomaron medidas tendientes a reencauzar las actividades judiciales tendientes a dilucidar la responsabilidad del crimen, hasta marzo de 2003.

21.Según los peticionarios, se dictó resolución de "pronunciamiento" (acusación) contra el ex Diputado, el 27 de julio de 2005, 7 (siete) años luego de que tuviera lugar el crimen, al considerar la justicia brasileña que existían indicios suficientes para determinar la autoría del crimen por el sujeto. La defensa interpuso un recurso contra esta decisión, el cual fuera rechazado. Hace más de un año que se aguarda la inclusión del proceso en la nómina del Tribunal para su juzgamiento por el "Juri Popular" (jurado popular).

22.Mencionan que por encontrarse el acusado aguardando el momento del juicio en libertad, el caso no tiene prioridad en su realización, pues así lo dispone el artículo 431 del Código Procesal Penal brasileño. Teniendo en cuenta la realidad de la justicia local, se afirma no existen expectativas de que el caso sea juzgado este año, y una vez recaída una posible decisión condenatoria, existirían recursos a ser interpuestos contra la misma, por lo que una condena definitiva dista en años por llegar, debiendo tenerse en cuenta que el homicidio de Marcia Barbosa tuvo lugar hace más de 8 (ocho) años.

23.Se hace referencia por los peticionarios que, a pesar de que el principal indiciado ya no se desempeña en su banca parlamentaria, éste aún mantiene una posición de influencia considerable en la política local del Estado de Paraiba, lo que puede resultar en una intervención sobre la imparcialidad del "Juri Popular". La propia demora existente en la cuestión, demuestra el poder de intervención del ex diputado y su grupo político, en el Poder Judicial local, pues pese a sensibilizar la situación a la sociedad residente en el sitio, no se logró una inmediata actuación de las autoridades responsables, una vez que se viabilizó la posibilidad de intentar la imputación indispensable.

24.Aducen los peticionarios, que transcurridos más de 3 (tres) años desde la instauración de la acción penal, ésta viene tramitándose con excesiva lentitud, teniendo en cuenta que aún no ha recaído en la causa ninguna decisión de mérito. Este retardo, afirman refleja la forma como el Poder Judicial del Brasil trata los casos de violencia contra las mujeres. Superada la cuestión de la inmunidad parlamentaria, la presente hipótesis ilustra el grave patrón de discriminación en materia judicial, que se verifica en los casos de agresiones y homicidios practicados contra mujeres. Luego de referir situaciones tratadas por la Comisión, sostienen que el caso que nos ocupa, se encuentra inserto en un contexto de impunidad en relación a situaciones en que se ve involucrada la violencia contra la mujer, cuya característica particular consiste en la extrema lentitud del trámite de la acción penal instaurada contra el presunto autor.

25.Se indica por los peticionarios la comisión de violaciones a los derechos consagrados en los artículos 4, 8, 24, 25, 1.1 y 2 de la Convención Americana, tanto como 3, 4, 5 y 7 de la Convención de Belém do Para, peticionándose se declare la responsabilidad del Estado en relación a ello, con la respectiva reparación que corresponda.

B. Posición del Estado

26.El Estado, afirma que según el Procurador General de Justicia del Estado de Paraiba, Dr. José Paulo Neto, el Ministerio Público presentó una denuncia contra el Diputado Estadual, principal sospechoso del homicidio de la estudiante Marcia Barbosa de Souza. En dos oportunidades, el 14 de octubre de 1998, y el 31 de marzo de 1999, el Tribunal de Justicia de Paraiba solicitó a la Asamblea Legislativa de dicho Estado autorización para la instrucción de acción penal contra el referido parlamentario, siendo ambos pedidos denegados por el Poder Legislativo estatal. Se informa además que la Secretaria de Derechos Humanos se encuentra examinando la posibilidad de tomar eventuales providencias en el caso en apreciación.

27.En la información adicional recibida el 2 de noviembre de 2000, se sostuvo que durante la Reunión Ordinaria Nº 126 del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (órgano colegiado creado por Ley 4.319), realizada el 10 de octubre del señalado año, uno de los temas tratados fue el asesinato de la presunta víctima, siendo en la ocasión designada por el Consejo una Comisión integrada por la Profesora Flavia Piovesan y el Dr. Percilio de Souza Lima Neto, encargada de actuar directamente en la obtención de información sobre el caso. Cabrá según sostienen a la Comisión, establecer contacto con la Asamblea Legislativa del Estado de Paraiba, con el fin de señalar que la gravedad de las circunstancias del caso llevaron a que el Estado brasileño fuese denunciado ante esta Comisión por las violaciones de derechos y garantías previstos en la Convención Americana. Asimismo, el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana determinó la realización de gestiones junto a los poderes ejecutivos, judiciarios y legislativos estaduales a fin de resaltar la sensibilidad del caso y la importancia otorgada por el Gobierno Federal en punir a los responsables del crimen y reparar los daños causados a los familiares de la víctima, lo cual concluyó en diciembre de 2001 en la aprobación por parte del Congreso Nacional Brasileño de la Enmienda Constitucional No. 35/2001 alterando el instituto de la inmunidad parlamentaria previsto en la Constitución Federal.

28. En la información enviada el 19 de julio de 2007, el Estado indicó que la acción penal en contra del Sr. Aércio Pereira de Lima se encuentra en la segunda etapa, llamada de fase de juzgamiento. El juzgamiento por el Tribunal de jurado fue fijado para el día 26 de septiembre de 2007. Asimismo, el Estado alegó que el caso sea declarado inadmisible toda vez que no se cumplen con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 31.1 del Reglamento de la CIDH y en el artículo 46.1.a de la Convención Americana.

IV.ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD

A. Competencia

1.Competencia rationae personae, rationae loci, rationae temporis y rationae materiae de la Comisión

29.Los peticionarios sostienen que el Estado ha violado los derechos de la presunta víctima consagrados en los artículos 2, 4, 24 y 25 de la Convención Americana[10]; y los artículos 3, 4, 5, y 7 de la Convención de Belém do Pará[11], en perjuicio de la presunta víctima y sus familiares.

30. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a Marcia Barbosa de Souza, ciudadana del Estado brasileño, por lo tanto, la Comisión tiene competencia rationae personae para examinar la petición.

31.La Comisión considera que tiene competencia rationae materiae, rationae loci y rationae temporis por tratarse la petición de derechos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, ambas en vigencia al momento en que tuvieran lugar los hechos, vinculantes respecto a la República Federativa de Brasil.

32.Con relación a su competencia respecto a la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" (CVM), la Comisión tiene competencia en general por ser éste un instrumento interamericano de derechos humanos, y además por la que le asignan específicamente los Estados en el artículo 12 de dicha Convención, que dice:

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

2.Agotamiento de los recursos internos

33. El artículo 46.1.a de la Convención establece lo siguiente: "para que una petición o comunicación presentada sea admitida por la Comisión se requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos". Sin embargo, su inciso (2) prevé que este requisito no resulta aplicable toda vez que:

a)no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;

b)no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y

c)haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

34.Sin entrar a analizar los argumentos desarrollados por las partes acerca de la presunta violación de las garantías judiciales y protección judicial, la Comisión Interamericana observa de manera preliminar que, a la fecha de aprobación de este informe, han transcurrido más de 8 (ocho) años desde la fecha en que tuvo lugar el asesinato de Marcia Barbosa. El hecho fue debidamente denunciado a las autoridades, pero ni una investigación policial o imputación fiscal pudieron llevarse a cabo, pues el sospechoso gozaba de inmunidad parlamentaria. Este último obstáculo, fue zanjado con el cese del sujeto en su cargo parlamentario, habiéndose además aprobado la Enmienda Constitucional Nº 35/2001, siendo una acusación presentada contra el ex diputado el 27 de julio de 2005. Igualmente se destaca que el Estado reconoce que los hechos fueron denunciados.

35. Se tiene por cierto que las acciones intentadas contra el sospechoso se reasumieron recién en marzo del 2003, pues el Estado no refutó este hecho. A la fecha de redacción de este informe, se manifiesta que han transcurrido 4 (cuatro) años desde que se reasumieran las acciones judiciales y recién el caso habría quedado incluido para ser juzgado el 26 de septiembre de 2007 por el órgano competente. Desde que tuviera lugar el hecho punible, como ya se ha dicho, han transcurrido más de 8 (ocho) años sin que se determine quién fue el responsable por el mismo.

36.Asimismo, la Comisión Interamericana observa que los peticionarios alegan que los hechos del presente caso se dan en un contexto de casos en que mujeres son víctimas de violencia, lo cual se materializa con un excesivo retardo en su tramitación, que termina en impunidad para los autores de estos hechos. Mientras que el Estado alega que el proceso judicial está avanzando de acuerdo con la ley, no ha presentado información que explica o justifica los lapsos temporales en el proceso judicial.

37. A la luz de todo lo expresado más arriba, y de las constancias del expediente en que se contiene este asunto, la Comisión Interamericana establece --a efectos de la admisibilidad-- que se ha verificado un retardo injustificado en la decisión de los órganos jurisdiccionales brasileños respecto a los hechos denunciados. En consecuencia, la CIDH aplica al presente asunto la excepción al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana.

3.Plazo de presentación

38.Conforme al artículo 46.1.b de la Convención Americana, constituye un requisito de admisibilidad la presentación de las peticiones dentro del plazo de 6 (seis) meses a partir de la notificación al presunto lesionado de la sentencia que agote los recursos internos.

39.El artículo 32.2 del Reglamento de la Comisión, consagra que en los casos en los cuales

resulten aplicables las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión: "…A tal efecto, la Comisión considerará la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso…"[12].

40.En el presente caso, la Comisión se pronunció supra sobre la aplicabilidad a la situación de la excepción al requisito del agotamiento de los recursos internos. Por lo tanto, la Comisión Interamericana debe determinar si la petición fue presentada dentro de un lapso de tiempo razonable, según establece la normativa citada.

41.De acuerdo a lo expuesto en los párrafos que anteceden, como la petición fue deducida el 28 de marzo de 2000, luego de transcurridos casi 2 (dos) años desde que tuviera lugar el crimen, la Comisión considera que la presentación tuvo lugar dentro de los parámetros de razonabilidad a que hace alusión la norma en cuestión, teniendo en cuenta el lapso transcurrido desde que el crimen tuviera lugar, sin que haya sido juzgado el proceso judicial doméstico que trata de éste, lo cual como se dijera configura una clara excepción a la exigencia del agotamiento de los recursos internos, ello sin perjuicio del análisis que se llevará a cabo por este órgano, en relación a posibles violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.

4.Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional

42.No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.

5.Caracterización de los hechos alegados

43.A los fines de la admisibilidad, la CIDH debe decidir si se exponen hechos que podrían caracterizar una violación, como estipula el artículo 47.b de la Convención Americana, si la petición es "manifiestamente infundada" o si es "evidente su total improcedencia", según el inciso (c) del mismo artículo.

44.El estándar de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre los méritos de una denuncia. La CIDH debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención y no para establecer la existencia de una violación. Tal examen es un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo[13]. Como en esta hipótesis, nos encontramos ante un relato que describe una posible violación de derechos básicos como aquellos relativos a la vida, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales, el acceso a la justicia y los derechos de las mujeres, inherentes a la presunta víctima, ellos en relación a la obligación general contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, corresponde avocarse al estudio de la presente controversia.

45. La Comisión no encuentra que la petición sea "manifiestamente infundada" o que sea "evidente su improcedencia". En consecuencia, la CIDH considera que, prima facie, los peticionarios han acreditado los extremos requeridos para la procedencia de su admisibilidad.

46.Sin embargo, los peticionarios denuncian un presunto incumplimiento a la obligación del Estado contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, relativa al deber de adoptar disposiciones de derecho interno para asegurar los derechos contenidos en dicho Instrumento habría tenido lugar. De acuerdo a la información presentada por los peticionarios el 3 de octubre de 2006, la Comisión nota que el 20 de diciembre de 2001 tuvo lugar una alteración legislativa doméstica en relación a la inmunidad parlamentaria, con la aprobación por el Congreso Nacional de la Enmienda Constitucional Nº 35/2001, que determinó que la acción penal contra miembros del Poder Legislativo podría ser admitida sin previa autorización de la Cámara a que pertenecen, con lo cual se habría reparado el defecto denunciado, por lo que corresponde decretar inadmisible el estudio de un potencial incumplimiento de la obligación en cuestión.

47.También debe ser tenido en cuenta por la Comisión, que los peticionarios denuncian presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 3, 4 y 5 de la Convención de Belem do Pará.

48.Tal como fuera trascrito supra, el artículo 12 de la Convención de Belém do Pará, establece que son justiciables ante los órganos del Sistema Interamericano todas las peticiones en las que se denuncien hechos violatorios a los derechos garantizados en dicho Instrumento, expresamente contenidos en el artículo 7 del mismo instrumento, que establece los compromisos principales.

49.Aplicando cuanto dispone el artículo 12 de la Convención de Belem do Pará supra trascripto, este órgano debe declarar inadmisibles las presuntas violaciones a los derechos contenidos en los artículos 3, 4 y 5 de dicho Instrumento.

50.Teniendo en cuenta lo expresado, la Comisión Interamericana considera que, de ser comprobados los hechos expuestos con relación a la violación del derecho a la vida, a las garantías judiciales, al acceso a la justicia y los derechos de las mujeres, contra la presunta víctima y sus familiares, el presente caso caracterizaría una posible violación de las garantías resguardadas por los artículos 4, 8.1, y 25 de la Convención Americana, tanto como 7 de la Convención de Belém do Pará, pues prima facie, con la descripción fáctica de la situación, se ha acreditado de un modo verosímil que nos encontramos ante una potencial vulneración de los derechos de los sujetos, garantizados por las aludidas normas.

51.Asimismo, la CIDH considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones al artículo 24 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento. La CIDH observa que los peticionarios alegan que los hechos relatados se han dado en un contexto de impunidad ante actos violentos por parte de la administración de la justicia, que afecta desproporcionadamente a las mujeres como grupo,

y propende la repetición de estos actos. Dentro de este patrón de impunidad, se aducen actitudes de funcionarios judiciales basadas en conceptos socioculturales discriminatorios que afectan mayormente a las mujeres. El patrón mencionado alegadamente resulta en retrasos extremos e injustificados en el procesamiento de casos de violencia contra las mujeres, lo que alegadamente ocurre en este caso, pese a la reforma legislativa relativa a la inmunidad parlamentaria en el 2001.

52.Las posibles violaciones serán analizadas en conexión con la obligación general prevista en el artículo 1.1 de la Convención Americana.

VI.CONCLUSIONES

53.Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, la Comisión concluye que el presente caso satisface los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE:

1.Declarar admisible la petición bajo estudio, en relación con los artículos 4 (derecho a la vida), 8.1 (derecho a gozar de garantías judiciales), 24 (derecho a la igualdad ante la Ley) y 25 (derecho a gozar de protección judicial) de la Convención Americana, en conexión con la obligación general contenida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, tanto como el artículo 7 de la Convención de Belém do Para.

2.Declarar inadmisible la petición bajo estudio, en relación a los artículos 2 de la Convención Americana, tanto como 3, 4 y 5 de la Convención de Belém do Pará.

3.Notificar esta decisión al Estado y al peticionario.

4.Iniciar el trámite sobre el fondo de la cuestión.

5.Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual, a ser presentado a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 26 días del mes de julio de 2007. (Firmado): Florentín Meléndez, Presidente; Víctor Abramovich, Primer Vicepresidente; Paolo Carozza, Segundo Vicepresidente y Comisionados, Evelio Fernández Arévalos, Freddy Gutiérrez, y Clare K. Roberts.

[1] Conforme a lo establecido en el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la CIDH, el Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, de nacionalidad brasileña, no participó en la decisión sobre esta petición

[2] Informe final de la Jefatura de Crímenes contra la Persona. Anexo 1 de la petición.
[3] Acusación presentada por el Ministerio Publico contra el ex diputado. Anexo 2 de la petición.
[4] Informe final de la Jefatura de Crímenes contra la Persona. Anexo 1 de la petición.
[5] Idem nota anterior.
[6] Acusación presentada por el Ministerio Publico contra el ex diputado. Anexo 2 de la petición.
[7] Oficio del Poder Judicial a la Asamblea Legislativa solicitando desafuero. Anexo 3 de la petición.
[8] Resolución Asamblea Legislativa denegando desafuero. Anexo 4 de la petición.
[9] Nuevo Oficio del Poder Judicial solicitando a la Asamblea Legislativa desafuero. Anexo 5 de la petición.
[10] Ratificada por Brasil el 25 de noviembre de 1992.
[11] Ratificada por Brasil el 27 de noviembre de 1995.
[12] CIDH, Informe Nº 31/99, Caso 11.763, Masacre de Plan de Sánchez, Admisibilidad, 11 de marzo de 1999.
[13] CIDH, Informe N° 21/04, Petición 12.190, Admisibilidad, José Luis Tapia González y otros, Chile, 24 de febrero de 2004, párr. 33.

**INFORME Nº 40/08. PETICIÓN 270-07. ADMISIBILIDAD. I.V.[1]. BOLIVIA. 23 DE JULIO DE 2008.**

I. RESUMEN

1. El 7 de marzo de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una petición presentada por el Defensor del Pueblo de la República de Bolivia (en adelante "el peticionario") en nombre de I.V. (en adelante "la presunta víctima") en la que se alega la responsabilidad internacional del Estado de Bolivia (en adelante "el Estado" o "el Estado boliviano"), por haber sometido a I.V. a una esterilización sin consentimiento y posteriormente haber sido impedida por las autoridades judiciales de acceder a la justicia para remediar las violaciones alegadamente sufridas. En la petición se alegó que los hechos narrados constituyen violaciones de los derechos protegidos por los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad), 13 (libertad de pensamiento y de expresión), 17 (protección a la familia), y 25 (protección judicial), en conexión con las obligaciones generales establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención"). Asimismo se alegó la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante "Convención de Belém do Pará").

2. El peticionario sostiene que en el 2000 la presunta víctima fue sometida en un hospital público a un procedimiento quirúrgico de ligadura de trompas sin su consentimiento informado, y por tanto, a una esterilización no consentida, perdiendo su función reproductiva en forma permanente. El peticionario igualmente aduce que los hechos han permanecido en completa impunidad por dilaciones indebidas e injustificadas en el proceso penal y que I.V. todavía sufre las consecuencias físicas y psicológicas de dicha intervención. Con respecto a la admisibilidad, el peticionario argumenta que se agotaron los recursos de la jurisdicción interna con la Resolución 514/06 de la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz de 23 de agosto de 2006, que resolvió la apelación incidental interpuesta contra la Resolución 13/06 confirmando la prescripción de la acción penal.

3. Por su parte, el Estado sostiene que al practicarse una cesárea a la presunta víctima, se presentaron múltiples adherencias, razón por la cual el médico que la atendió le informó sobre el riesgo que correría su vida en un próximo embarazo, motivo por el que le sugirió la realización de una ligadura de trompas que ella consintió verbalmente. En relación al agotamiento de los recursos internos, el Estado controvierte la admisibilidad argumentando que, de conformidad al artículo 46.1 literal a) y 47 literal a) de la Convención Americana, el peticionario no agotó los recursos internos.

4. Tras examinar la información presentada a la luz de los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión concluye que es competente para conocer el reclamo presentado y que la petición es admisible por la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 8.1, 11.2, 13, 17 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Asimismo considera que la petición es admisible por la presunta violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. En consecuencia, la Comisión decide notificar a las partes, hacer público el presente Informe de Admisibilidad e incluirlo en su Informe Anual.

## II. TRÁMITE

5. La Comisión recibió la petición el 7 de marzo de 2007 y le asignó el número P-270-07. El 7 de mayo de 2007 la Comisión trasladó la petición al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para que presentara sus observaciones. Mediante comunicación de fecha 10 de julio de 2007, el peticionario suministró información sobre el caso.

6. El 18 de julio de 2007 la Comisión remitió la comunicación anterior al Estado y le requirió que en un plazo de un mes presentara información sobre la petición. El 17 de julio de 2007, el Estado boliviano solicitó una prórroga para responder a las observaciones de los peticionarios. Mediante comunicación de fecha 14 de agosto de 2007, la CIDH le informó al Estado boliviano sobre la concesión de la prórroga solicitada por un período de 30 días.

7. Mediante notas de fecha 17 de agosto de 2007, 19 y 21 de septiembre de 2007, el Estado solicitó copias de las páginas 12 y 13 de la petición y una prórroga adicional de un mes para presentar las observaciones a la misma. Por su parte, el peticionario, mediante comunicación de fecha 21 de agosto de 2007, suministró información sobre el caso.

8. El 1º de octubre de 2007, la Comisión remitió al Estado copias de las páginas 12 y 13 de la petición, y le informó que le concedió la prórroga solicitada. Mediante comunicación de fecha 1º de noviembre de 2007, el peticionario suministró información sobre el caso. Dicha información fue transmitida al Estado el 26 de noviembre de 2007 otorgándole al Estado un mes para que presente observaciones.

9. Mediante comunicación de fecha 4 de diciembre de 2007, el Estado presentó observaciones en el caso, las mismas que fueron transmitidas por la CIDH al peticionario el 18 de diciembre de 2007 otorgándosele el plazo de un mes para que presente observaciones. El 29 de enero de 2008, el peticionario solicitó una ampliación del plazo para la presentación de su respuesta a la información presentada por el Estado. Mediante comunicación de fecha 25 de febrero de 2008, el peticionario suministró información sobre la petición la cual fue transmitida al Estado el 1 de abril de 2008, con un plazo de un mes para que presente observaciones. A la fecha de aprobación del presente informe el Estado no había presentado observaciones adicionales.

## III. POSICIÓN DE LAS PARTES

A. El peticionario

10. El peticionario alega que la presunta víctima fue sometida en un hospital público a un procedimiento quirúrgico de ligadura de trompas sin su consentimiento informado, y por tanto, a una esterilización no consentida, perdiendo su función reproductiva en forma permanente. El peticionario aduce que I.V. y su pareja fueron informados después de haberse realizado el procedimiento. El peticionario igualmente sostiene que los hechos han permanecido en completa impunidad por dilaciones indebidas e injustificadas en el proceso penal y que I.V. todavía sufre las consecuencias físicas y psicológicas de dicha intervención. Indica que una decisión como el sometimiento a una ligadura de trompas está en el ámbito de la autonomía personal de la mujer y no en el ámbito de una decisión estatal o médica.

11. El peticionario sostiene que la presunta víctima, de 35 años de edad, durante los tres primeros meses de gestación, tuvo sus controles prenatales en el hospital público San Gabriel y que a partir del 22 de febrero de 2000 prosiguió con los controles en el hospital público Hospital de la Mujer, donde se le realizaron varios exámenes. Sostiene que el último control que tuvo fue el 28 de junio de 2000 donde se programó una cesárea para alrededor del 3 de julio debido a que su bebé se encontraba en posición transversa.

12. El peticionario indica que el 1º de julio de 2000, alrededor de las 15:50 horas, I.V. acudió de emergencia al Hospital de la Mujer en compañía de su pareja y su hija porque se le rompió la fuente, siendo atendida por los médicos que se encontraban de turno. El peticionario alega que la Dra. Rosario Arteaga le hizo el tacto vaginal a pesar de haber sido advertida por la presunta víctima de que debían programarle una cesárea.

13. Alrededor de las 19:00, el peticionario aduce que se presentó el Dr. Edgar Torrico ante la presunta agraviada para comunicarle que él le realizaría la cirugía pero que debía esperar un momento más. Sostiene que I.V. le preguntó al médico si la cesárea se haría en la cicatriz anterior, a lo que respondió que lo decidiría en el quirófano y que la vería más tarde.

14. El peticionario alega que alrededor de las 20:45, I.V. fue llevada al quirófano, fue preparada para la operación y le suministraron la anestesia epidural. Sostiene que durante la operación, el Dr. Torrico preguntó a I.V. dónde le habían hecho la primera cesárea, a lo que ella respondió que en Lima, Perú. También le preguntó si anteriormente tuvo una infección a lo que I.V. respondió negativamente. El peticionario alega que esas fueron las únicas preguntas que el médico hizo a I.V. durante la operación y que en ningún momento se informó o preguntó algo relativo a la ligadura de trompas.

15. El peticionario sostiene que I.V. pidió a la anestesióloga que le avise la hora en que nazca su bebé. Alega que al poco tiempo, I.V. se dio cuenta que ya le habían realizado la cesárea y preguntó la hora, contestándole la anestesióloga que eran las 21:26. Asimismo aduce que vio cuando su bebé fue entregado al neonatólogo. Sostiene igualmente que alrededor de las 22:40, la presunta víctima fue llevada a otro ambiente donde estuvo

aproximadamente una hora. El peticionario alega que durante todo este proceso su pareja y su hija permanecieron en el hospital.

16. El peticionario aduce que el 2 de julio de 2000, alrededor de las 9:30 a.m., durante la visita médica, I.V. le preguntó al residente de tercer año, Marco Vargas, acerca de la cesárea. Sostiene que en ese momento el residente le comunicó que le habían ligado las trompas, y que ella no iba a poder tener más hijos. Ante dicha respuesta, alega el peticionario que I.V. preguntó por qué le habían hecho eso, si es que acaso corría peligro su vida o la de su bebé, a lo que el residente le respondió que no, que se habían descubierto muchas adherencias y que un futuro embarazo podía ser de mucho riesgo para ella. El peticionario alega que I.V. quedó muy consternada porque en ningún momento durante la operación "se le habló, informó o consultó algo en referencia a la ligadura de trompas" y recibió la noticia sobre la ligadura de trompas un día después de la operación.

17. Sostiene el peticionario que la pareja de I.V. pidió una explicación por escrito sobre dicha situación, y que el Dr. Vargas respondió que la solicitud debía hacerse con memorial, con la firma de un abogado, dirigida al Hospital de la Mujer, y que la respuesta la tendrían en 48 horas. El peticionario alega que la pareja de I.V. recurrió a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, organización que envió una nota con fecha 4 de julio de 2000, pidiendo al hospital que informe sobre el caso.

18. El peticionario indica que el 3 de julio de 2000, es decir, 2 días después de haberse realizado las intervenciones quirúrgicas, el residente Vargas escribió en la hoja de evolución de historia clínica de I.V.: "3/7/2000, Hrs. 09:00: El día de ayer se comunicó a la paciente de que la salpingoclasia bilateral[2] fue realizada por indicación médica, la misma que fue aceptada por la paciente al comprender que con nuevo embarazo su vida corre peligro. Dr. Vargas." El peticionario alega que este hecho constituye prueba contundente de que I.V. nunca fue informada ni consultada sobre la ligadura de trompas realizada el 1º de julio durante el segundo acto quirúrgico.

19. El peticionario alega que la Norma Boliviana de Salud MSPS-98[3] requiere la "elección informada" que se refiere al proceso por el cual una persona toma una decisión sobre atención en salud basada en el acceso a toda la información necesaria y su plena comprensión desde el punto de vista del cliente. Igualmente hace referencia a la definición de "consentimiento informado" que está definida como el "acto por el cual se acuerda recibir atención médica o tratamiento, después de un proceso de elección informada".

20. El peticionario informa que la Norma Boliviana de Salud MSPS-98 establece que el proceso de ligadura de trompas "podrá ser realizado siempre que la usuaria haya recibido una orientación adecuada y se tenga constancia de su decisión mediante firma o impresión digital del documento de Consentimiento Informado, que debe ser incluido en la historia clínica de la usuaria." Al respecto, el peticionario alega que dicho documento nunca fue firmado. [4] El peticionario aduce que dicho documento contiene 7 puntos en los que la usuaria debe declarar haber recibido información sobre cada método de planificación familiar, incluyendo sus beneficios y limitaciones; tener conocimiento de que la

anticoncepción quirúrgica es un método definitivo; haber sido informada con amplitud y claridad sobre las posibles molestias propias del procedimiento, entre otros, y debe ser firmado en presencia de un testigo.

21. El peticionario aduce que durante todos los controles prenatales a los que acudió I.V. y desde que ingresó al Hospital de la Mujer, el 1 de julio de 2000, nunca recibió ningún tipo de información sobre métodos anticonceptivos y no se le solicitó su consentimiento para que se le practicara una ligadura de trompas. Su pareja tampoco fue informada o consultada al respecto.

22. Asimismo, el peticionario indica que el Código de Ética y Deontología Médica del Colegio Médico de Bolivia establece en su artículo 37 que: "la esterilización de una persona sólo se podrá efectuar a solicitud expresa, voluntaria y documentada de la misma, o en caso de indicación terapéutica estrictamente determinada por una junta médica."

23. El peticionario también aduce que la pareja de I.V. sólo firmó una autorización en el Hospital de la Mujer para efectuar la cesárea de I.V. y no la ligadura de trompas.[5] En base a dicho documento, sólo se hubiera podido autorizar la práctica de otros procedimientos en caso de que hubiera habido un riesgo inminente de pérdida de la vida de la madre o del bebé.

24. El peticionario asimismo sostiene que no resulta coherente ni sustentable afirmar que las complicaciones suscitadas en la operación ponían en riesgo la salud de I.V. y por eso era necesario aplicar una esterilización. El peticionario indica que los médicos que atendieron a I.V. manifestaron que el supuesto riesgo a la salud de I.V. se daría sólo en caso de que se embarace nuevamente.

25. El peticionario menciona una gama de estándares internacionales[6] que protegen el derecho de las mujeres de tomar decisiones de manera libre, voluntaria e informada en materia de salud, en respeto a su autonomía y autodeterminación. El peticionario indica que asumiendo hipotéticamente que la versión de los miembros del equipo operatorio fuera cierta - que I.V. fue consultada durante la intervención quirúrgica y que ella asintió a la operación - su alegado asentimiento habría sido efectuado bajo anestesia y estrés quirúrgico, y por tanto no habría reunido los requisitos básicos del principio del consentimiento informado. Por tanto, el peticionario alega que el hecho de que el Dr. Torrico presuntamente hubiera logrado una respuesta verbal positiva de I.V. en torno a la ligadura de trompas durante el acto quirúrgico, no puede considerarse como un consentimiento informado.

26. El peticionario alega que desde el 4 de julio de 2000, fecha en que I.V. fue dada de alta, I.V. padeció dolores en la zona de la herida. Sostiene que en los días posteriores I.V. regresó al hospital para una curación y posteriormente para que le retiren los puntos y se quejó del dolor ante el residente Vargas quien no le dio importancia.

27. El peticionario aduce que luego de varias semanas, el dolor y malestares en I.V. continuaron, por lo que fue examinada por el Dr. Carlos Pérez Guzmán quien ordenó que se hiciera una ecografía. Sostiene que dicho examen estableció que I.V. tenía una endometritis aguda y que el útero tenía restos placentarios. Ello fue confirmado posteriormente por un patólogo.[7] Por dicho motivo el peticionario alega que I.V. tuvo que ser sometida a dos legrados y estuvo internada en la Clínica Achumaní.[8] Asimismo sostiene que dos semanas después, I.V. tuvo que internarse en la misma clínica por un problema de absceso de pared y hematoma en la herida de la cesárea. [9] El peticionario sostiene que I.V. continúa sufriendo las secuelas psicológicas y físicas de la intervención quirúrgica de ligadura de trompas. Asimismo sostiene que actualmente tiene problemas de anexitis crónica y que toda esta situación ha afectado su relación con su pareja de quien está separada desde agosto de 2002. Sostiene que sus hijas, especialmente N., han sufrido una vía crucis y un trauma por todo lo sucedido.

28. El peticionario denuncia que la violación de derechos humanos en perjuicio de I.V. fue resultado de una actitud discriminatoria fundada en razones de género. Sostiene que bajo una actitud discriminatoria, paternalista y patriarcal, aprovechando la vulnerabilidad de la mujer, los médicos decidieron someter a I.V. a una ligadura de trompas sin su consentimiento. Asimismo sostiene que el caso de I.V. guarda relación con un patrón generalizado de discriminación contra las mujeres en materia de anticoncepción quirúrgica practicada por los hospitales y centros de salud bolivianos.

29. Frente a los hechos descritos, a solicitud de la pareja, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, de la Coordinadora de la Mujer, del Defensor del Pueblo y del Ministerio de Salud, se realizaron tres auditorias médicas, se emitió un pronunciamiento del Comité de Ética del Colegio Médico de La Paz y se realizó un proceso administrativo en contra de los Drs. Edgar Torrico y Marco Vargas. Los peticionarios aducen que los resultados de estas auditorías y procesos fueron contradictorios, algunos determinaron la responsabilidad de los doctores y otros no.

30. Sobre el proceso administrativo interno, el peticionario sostiene que la Asesoría Jurídica de la Unidad Departamental de Salud de La Paz emitió la Resolución Final 020/02 dentro del Proceso Administrativo Interno seguido contra el Dr. Edgar Torrico y contra el Dr. Marco Vargas Terrazas, funcionarios del Servicio Departamental de Salud de La Paz. En dicha resolución se estableció en el punto 1 la responsabilidad administrativa en contra del servidor público Dr. Edgar Torrico Ameller, disponiéndose su destitución de la institución. El peticionario también sostiene que en dicha resolución se transcribe parte de la declaración del Dr. Marco Vargas quien señaló que era necesaria la ligadura de trompas desde un punto de vista médico pero incorrecta desde un punto de vista legal porque ellos debían esperar a que la paciente después de la operación autorizara la esterilización.

31. Posteriormente, mediante Resolución Administrativa S/N de fecha 10 de marzo de 2003, ante la apelación presentada por el Dr. Torrico, la Jefa de la Unidad de Asesoría Legal del SEDES, La Paz, Giselle Caba Espada, en aplicación del Art. 29 de la Ley 1178, dejó sin efecto el punto 1 de la Resolución 020/2002 de 25 de julio de 2002 y dispuso el

sobreseimiento en la conducta del servidor público Dr. Edgar Torrico por no existir elementos de prueba en su contra.

32. El peticionario igualmente sostiene que hubo tres juicios penales en los que se dictaron dos sentencias condenatorias en contra del Dr. Edgar Torrico, el médico cirujano que asumió la decisión de ligar las trompas a I.V. sin su consentimiento informado. Sin embargo, dichas sentencias fueron alegadamente anuladas por la Corte Superior de Justicia de La Paz. El peticionario indica que hubo una serie de irregularidades y retrasos que afectaron los juicios penales, incluyendo, "errores en el sorteo del expediente; falta de notificación y convocatoria a los jueces ciudadanos; fallas en la constitución de los tribunales; remisión de la causa a jurisdicciones diversas en varias oportunidades (…) Asimismo es inconcebible el tiempo prolongado que transcurrió en la remisión del expediente de un tribunal a otro (sic)."[10] Aduce que este conjunto de deficiencias resultó en que el proceso penal durara más de tres años y concluya en la extinción de la acción penal. El peticionario alega que esta situación impidió que I.V. pueda obtener un remedio efectivo ante los hechos denunciados quedando lo ocurrido en la impunidad.

33. Acerca del primer juicio penal, el peticionario sostiene que el 31 de agosto de 2002, el Ministerio Público presentó la acusación penal en contra del Dr. Edgar Torrico por el delito de lesiones gravísimas. Aduce que el 18 de noviembre de 2002 el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz, dictó Resolución 86/2002 en la que por unanimidad sentenció al Dr. Torrico a una pena privativa de libertad de 3 años por ser autor del delito de lesiones gravísimas. El peticionario sostiene que en su análisis, la sentencia considera que para el segundo procedimiento quirúrgico de ligadura de trompas no existía "consentimiento pre-operatorio escrito por la paciente ni sus familiares conforme exigen los artículos 19 y 23 del Código de Ética Médica". Igualmente indica que la sentencia establece que "no existe una justificación racional ni médica para efectuar la Salpingoclasia Bilateral, debido a que las múltiples adherencias y la incisión corporal uterina no conllevaban un riesgo inmediato e inminente de pérdida de vida de la paciente. La posibilidad de una complicación en la salud de la misma se hubiera presentado en caso de un nuevo embarazo, es decir se presenta jurídicamente la figura de una condición suspensiva pendiente que no se puede afirmar si se va a cumplir (…)."

34. El peticionario alega que dicha sentencia fue apelada por el Dr. Edgar Torrico y la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, con fecha 12 de febrero de 2003, anuló totalmente la sentencia apelada por "defectos absolutos que implican inobservancias o violación de derechos y garantías" y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia.

35. Con respecto al segundo juicio penal, el peticionario sostiene que el 14 de marzo de 2003, la causa se radicó en el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz y en vista que dos jueces se excusaron de ver la causa, el expediente fue remitido el 9 de mayo de 2003 al Juzgado Tercero de Sentencia. El peticionario alega que como el Tribunal Tercero de Sentencia no pudo constituir tribunal, el 24 de mayo de 2003 se dispuso la remisión de la causa a un Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Alto. El peticionario aduce que el

Tribunal Segundo de Sentencia de El Alto, por no poder constituir tribunal, remitió los obrados al Tribunal de Sentencia de la localidad de Achacachi y éste último el 16 de febrero de 2004 también por no poder constituir tribunal, remitió la causa al Tribunal de Sentencia de Copacabana. El peticionario aduce que recién el 30 de abril de 2004, el Tribunal de Sentencia de Copacabana emitió el auto de apertura de juicio.

36. El peticionario alega que el 13 de agosto de 2004, el Tribunal de Sentencia de Copacabana mediante la resolución 32/2004 sentenció a Dr. Edgar Torrico como autor del delito de Lesión Culposa. Sostiene que el Dr. Edgar Torrico impugnó dicha sentencia. El peticionario sostiene que el 22 de octubre de 2004, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz anuló totalmente la sentencia y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal. El peticionario aduce que el 22 de noviembre de 2004, I.V. presentó un recurso de casación que fue declarado inadmisible el 1 de febrero de 2005.

37. Con respecto al tercer juicio penal, el peticionario sostiene que el 24 de febrero de 2005, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz, devolvió los obrados al Tribunal de Sentencia de Copacabana y éste, el 9 de mayo de 2005 lo remitió al Tribunal de Sentencia de la localidad de Sica Sica. El peticionario aduce que el 10 de agosto de 2005, I.V. solicitó a la Sala Penal Segunda de la Corte de Justicia de La Paz que su proceso sea remitido a un Tribunal de la ciudad de La Paz debido a la lejanía y los costos que implicaba el desplazamiento. El peticionario indica que el 30 de agosto de 2005, el Dr. Edgar Torrico solicitó la extinción de la acción penal en aplicación del artículo 133 del Código de Procedimiento Penal. Aduce que el 21 de septiembre se constituyó el Tribunal de Sica Sica y que el 16 de marzo de 2006 se remitieron los obrados al Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz por declararse incompetente.

38. El peticionario informa que el 27 de abril de 2006, el Dr. Edgar Torrico planteó la extinción de la acción penal por el transcurso de más de tres años que tuvo el proceso. El peticionario indica que el 1 de junio de 2006, el Tribunal de Sentencia Cuarto de La Paz emitió la Resolución No. 13/06 en la que declaró probado por unanimidad el incidente de extinción de la acción y dispuso el correspondiente archivo. En la parte resolutiva de la esta Resolución, el Tribunal señala:

> [e]n autos se observa con meridiana claridad que se ha producido la retardación, asociado a la inoperancia, en primer lugar de funcionarios encargados de practicar notificaciones correctas para la constitución del tribunal escabino, atribuyendo otra parte de la responsabilidad a los órganos jurisdiccionales que, por motivos baldíes, ha procedido a suspender audiencias o derivar la causa a una y otra jurisdicción, y no hay razón fundada para poner en riesgo el interés de las partes para conocer el resultado del accionar jurisdiccional, pues lo evidente es que el encausado ha cumplido con responsabilidad su presencia ante los tribunales a que ha sido convocado y los órganos encargados de administrar justicia han jugado con la ley en términos de verdadero perjuicio para una correcta administración de justicia.

39. El peticionario sostiene que la Resolución No. 13/06 fue apelada por el fiscal y por I.V y que el 23 de agosto de 2006, la Sala Penal de la Corte Superior de La Paz confirmó la extinción de la acción penal pública en el proceso por el transcurso de más de tres años. En fundamentación de tal resolución, el peticionario indica que la Sala Penal señaló que el proceso había durado más de seis años a partir de la primera diligencia procesal y que esta dilación del proceso era imputable al Tribunal que conoce la causa, debido a que incurrió por dos veces en nulidad de actuados por deficiencias procedimentales. Dicha resolución fue notificada a I.V. el 13 de septiembre de 2006.

B. El Estado

40. El Estado sostiene que el 1 de julio de 2000, I.V. fue sometida a una cesárea de emergencia en el Hospital de la Mujer. El Estado alega que de acuerdo a la información descrita en la historia clínica, I.V. ingresó con diagnóstico de rotura de membrana prematura sin trabajo de parto, la misma que presentó complicaciones en la intervención. Sostiene que en la operación se presentaron múltiples adherencias, razón por la cual el médico Dr. Edgar Torrico informó a I.V. sobre el riesgo que correría su vida en un próximo embarazo, motivo por el que le sugirió la realización de la salpingoclasia bilateral. El Estado alega que I.V. al verse informada de estos riesgos, decidió dar su consentimiento verbal, no obstante los médicos buscaron al esposo quien no se encontraba en el hospital.

41. Específicamente el Estado hace referencia a la declaración del Dr. Edgar Torrico quien sostiene:

[.] seguidamente se explicó las condiciones desfavorables del útero, los hallazgos transoperatorios y el riesgo que significa para su vida un embarazo posterior y se recomendó desde el punto de vista médico, la oportunidad de realizar la salpingoclasia, se envía a un interno a buscar al esposo para comunicarle esta decisión el mismo que no es encontrado en el hospital. La Sra. I.V. acepta y da su consentimiento para ejecutar la oclusión tubárica bilateral.

42. El Estado alega que el procedimiento de ligadura de trompas practicado no se produjo con actos de hostigamiento de funcionarios públicos, sino a raíz de una decisión personal de la presunta víctima al momento de realizarse la cesárea. Asimismo sostiene que la anestesia que se le aplicó (anestesia epidural), no inhibe la conciencia y que I.V. contó con información adecuada, y de acuerdo a las circunstancias en las que se encontraba. Igualmente alega que no se evidencian procedimientos adicionales en el área de anestesiología que conlleven a concluir que la paciente se encontraba con estrés quirúrgico.

43. El Estado aduce que para la segunda cirugía, es decir, la ligadura de trompas, no existió consentimiento pre-operatorio escrito y firmado por la paciente ni sus familiares, conforme exigen los artículos 19 y 23 del Código de Ética Médica. Dichos artículos proveen que la esterilización de una persona, sólo se podrá efectuar a solicitud expresa, voluntaria y documentada de la misma o en caso de indicación terapéutica estrictamente determinada por una junta médica especializada. Asimismo sostiene que la expresión de

voluntad no fue documentada de manera escrita de I.V. porque las circunstancias no lo permitían en respeto de la dignidad de la paciente, debido a que la ligadura de trompas no fue programada sino que se produjo a raíz de complicaciones verificadas en la intervención quirúrgica.

44. El Estado alega que el artículo 4 inciso 10 del Código de Ética Médica Boliviana sobre la esterilización, señala que el médico deberá observar estrictamente las disposiciones legales vigentes en el país, así como las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial. El Estado hace referencia a los artículos 14, 19 y 22 del Código de Ética Médica refiriéndose a la esterilización: "La esterilización de una persona, sólo se podrá efectuar a solicitud expresa, voluntaria y documentada de la misma o en caso de indicación terapéutica estrictamente determinada en junta médica". El Estado sostiene que el Dr. Torrico procedió en el marco de lo estipulado en el Código de Ética y Deontología Médica, y en las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial y la Confederación Médica Latinoamericana, ya que antes de realizar la salpingoclasia informó sobre el método quirúrgico a I.V. otorgando ésta su consentimiento verbal. Por tanto sostiene que el Dr. Torrico procedió a realizar la esterilización previo consentimiento de I.V., en cumplimiento de la normativa boliviana de salud que determina el Riesgo Obstétrico.

45. Asimismo el Estado sostiene que una junta médica tiene por finalidad la emisión de un criterio especializado en relación a la salud de un paciente, y que en este caso, el Dr. Torrico y el Dr. Marco Vargas contaban con los conocimientos y especialidades necesarias para la emisión de un criterio especializado.

46. El Estado señala que hubiera sido inadecuado realizar un procedimiento administrativo de complementación de autorización además de la otorgada por su pareja para la realización de cesárea y procedimientos especiales. El Estado aduce que los médicos procedieron de acuerdo a las circunstancias en las que se encontraba I.V. Asimismo alega que el procedimiento realizado en I.V. que fue con su consentimiento oral, "buscaba precautelar el derecho a la vida de la paciente que ya contaba al momento con tres niñas."

47. El Estado alega que de acuerdo con la hoja de evolución de I.V., después de la cesárea, I.V. presentó una recuperación clínicamente estable con secreción láctea escasa, que en caso de haber sufrido una "endometritis aguda restos placentarios post cesárea y absceso de pared abdominal" como lo afirma el peticionario, pudo haberse desangrado ya que se hubiera producido una constante hemorragia, hecho que no sucedió. Asimismo sostiene que en el proceso de recuperación, I.V. presentó escaso flujo vaginal. En relación a las afirmaciones del peticionario sobre la internación de I.V. en una clínica privada, aduce que el peticionario no indica en qué centro hospitalario fue atendida, limitándose a presentar certificados de profesionales particulares no siendo sustentable dicha información.

48. En relación a los procesos internos, el Estado sostiene que se realizó una Auditoría Médica Interna por el Comité de Auditoría Médica del Hospital de la Mujer, quienes en el marco del procedimiento recibieron declaraciones de las personas que intervinieron en la

cesárea realizada. El Estado alega que a través de dichas declaraciones se desprende que la pareja de I.V. no estuvo en el Hospital todo el tiempo en el que I.V. fue intervenida. Asimismo sostiene que se tienen declaraciones del Dr. Edgar Torrico, María Modesta Ticona, el interno Rodrigo Arnez y el Dr. Marco Vargas quienes confirmaron que durante el acto operatorio I.V. fue informada del procedimiento y que dio su consentimiento verbal.

49. El Estado manifiesta que es importante que la CIDH considere que conforme a las declaraciones de la Dra. Virginia Mercado, que señaló que la cesárea duró más de lo habitual (más de una hora), se demuestra las complicaciones en la operación.

50. Una vez emitido el informe por el Comité de Auditoría del Hospital de la Mujer, el Estado alega que se constituyó el Comité de Auditoría Médica de Salud Departamental. El Estado sostiene que dicho Comité respaldó el informe elaborado por el Comité de Auditoría del Hospital de la Mujer. El Estado sostiene que el Comité de Auditoría Médica de Salud Departamental reconoció las severas complicaciones que se presentaron en la operación, lo que obligó a realizar una salpingoclasia. Asimismo sostiene que advirtieron que la ligadura se realizó previo consentimiento verbal otorgado por I.V. a efectos de preservar su bienestar.

51. El Estado alega que el Dr. Edgar Torrico actuó de manera profiláctica (preventiva) como obligación de proteger la salud de I.V. velando por su recuperación y rehabilitación completa después de la cesárea realizada, empleando con idoneidad los medios técnicos a su alcance. Asimismo sostiene que en caso de haber omitido informar a I.V. y no sugerir la realización de la ligadura de trompas, pudo estar sujeto al régimen disciplinario correspondiente.

52. El Estado sostiene que el peticionario no presenta información sobre la reversibilidad de la ligadura de trompas. De acuerdo a los avances en la medicina, el Estado sostiene que la misma es posible, y que se realiza a solicitud de la paciente que desea recobrar su capacidad reproductora, con una alta probabilidad de éxito (70%).

53. El Estado aduce que el peticionario no ha brindado información que conduzca a la existencia de coacción o políticas masivas de control de natalidad en el Estado boliviano. Asimismo, el Estado deja constancia que el peticionario no ha demostrado de manera alguna que el Estado boliviano cuente con políticas públicas de esterilización forzada, menos dirigidas a grupos vulnerables como pueden ser las mujeres indígenas, mujeres del área rural y/o mujeres refugiadas. Sostiene que el peticionario no ha brindado información que conduzca a la existencia de coacción o políticas masivas de control de natalidad en el Estado boliviano.

54. En cuanto al agotamiento de los recursos internos, el Estado indica que se siguió un proceso administrativo interno contra el Dr. Edgar Torrico y el Dr. Marco Vargas. Mediante dicho proceso, el Estado alega que se dispuso la destitución de la institución del Dr. Edgar Torrico y se sobreseyó el proceso contra el Dr. Marco Vargas. Posteriormente, ante una apelación presentada por el Dr. Edgar Torrico, mediante Resolución

Administrativa S/N de fecha 10 de marzo de 2003, se dejó sin efecto el punto 1 de la Resolución Administrativa que establecía la responsabilidad administrativa del Dr. Torrico por no existir elementos de prueba en su contra.

55. Asimismo, el Estado informa que se tramitó un proceso penal contra el Dr. Edgar Torrico por el delito de lesiones gravísimas. El Estado alega que mediante Resolución 86/2002, el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz estableció pena privativa de libertad de 3 años. Posteriormente, informa que el 5 de diciembre de 2002, el Dr. Edgar Torrico presentó un recurso de apelación a la sentencia. Asimismo indica que la peticionaria presentó un recurso de apelación restringida en el cual alega inobservancia y errónea interpretación de la ley procesal y reclamó una pena de privación de libertad de 8 años en lugar de los 3 años establecidos. El 12 de febrero de 2003, el Estado aduce que la Sala Penal Tercera de la Corte de Justicia de La Paz emitió el Auto de Vista Resolución 21/2003 que anuló la sentencia apelada ordenando la reposición del juicio por otro tribunal de sentencia.

56. El Estado sostiene que el proceso penal seguido por I.V. se trasladó de juzgados en diferentes ocasiones debido a las excusas de varios jueces. Alega que el 13 de agosto de 2004, el Tribunal de Sentencia de Copacabana emitió la Resolución 32/2004 que estableció la pena principal de multa por el delito de lesiones gravísimas contra Edgar Torrico. El Estado aduce que el Dr. Edgar Torrico, el 28 de agosto de 2004 presentó recurso de apelación restringida a dicha sentencia y que el 22 de octubre de 2004, mediante resolución 265/2004 se anuló totalmente la sentencia y se ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal.

57. El Estado alega que el 10 de abril de 2006, el Dr. Edgar Torrico presentó un incidente ante el Tribunal Cuarto de Sentencia, mediante el cual solicitó la extinción de la acción penal en aplicación del artículo 133 del Código de Procedimiento Penal que determina la duración máxima del proceso de tres años. El Estado sostiene que el Tribunal Cuarto de Sentencia, el 1 de junio de 2006, mediante Resolución 13/2006 declaró probado el incidente de extinción de la acción penal y dispuso el archivo del expediente.

58. El Estado alega que dicha resolución fue apelada en la vía incidental por el Fiscal asignado al caso y por la presunta agraviada. El Estado sostiene que el 23 de agosto de 2006, la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz emitió la Resolución 514/2006 confirmando la extinción de la acción penal pública.

59. El Estado sostiene conforme al art. 19 párrafo 2 de la Constitución Política, que I.V. tenía la posibilidad de presentar un recurso de amparo constitucional por cuanto existía una resolución final que extinguía la acción penal. El Estado sostiene que dicho artículo establece que todas las personas pueden interponer el recurso extraordinario de Amparo Constitucional en contra de toda Resolución, acto u omisión indebida a la autoridad o funcionario, siempre que no hubiere medio o recurso para la protección inmediata de derechos y garantías.

60. En base a las consideraciones expuestas, el Estado alega que la petición debe ser declarada inadmisible por cuanto sostiene que el peticionario no agotó los recursos internos al no haberse interpuesto un recurso extraordinario de amparo constitucional.

## IV. ANÁLISIS LEGAL

### A. Competencia ratione personae, ratione materiae, ratione temporis, ratione loci

61. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias a favor de la presunta víctima. La presunta víctima del caso se encontraba bajo la jurisdicción del Estado boliviano en la fecha de los hechos aducidos. En cuanto al Estado, la Comisión toma nota que Bolivia es un Estado parte de la Convención desde el 19 de julio de 1979, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. En consecuencia, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

62. Por otro lado, la Comisión toma nota que Bolivia es un Estado parte de la Convención de Belem do Pará desde el 5 de diciembre de 1994 fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por consiguiente, la CIDH tiene competencia rationae temporis para analizar en la etapa de fondo los alegatos sobre presuntas violaciones de este instrumento internacional.

63. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado.

64. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición.

65. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian presuntas violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.

### B. Requisitos de admisibilidad de la petición

#### 1. Agotamiento de los recursos internos

66. Conforme al artículo 46 de la Convención Americana, para que un caso sea admisible deben haberse "interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Ese requisito se estableció para garantizar al Estado en cuestión la posibilidad de resolver controversias dentro de su propio marco jurídico.

67. Las partes en el presente caso sostienen una controversia con respecto al agotamiento de los recursos internos. El Estado alega que la petición es inadmisible porque el peticionario no interpuso ni agotó un recurso extraordinario, el Amparo Constitucional, ante el Tribunal Constitucional. El peticionario, por su parte, señala que agotó los recursos necesarios. El peticionario sostiene que la determinación contenida en la Resolución 514/06 de la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz de fecha 23 de agosto de 2006 que resolvió la apelación incidental interpuesta contra la Resolución 13/06 y que confirmó la prescripción de la acción penal, constituye la decisión definitiva dentro de la causa. Asimismo sostiene que el 20 de septiembre de 2006, Edgar Torrico pidió al Tribunal Técnico de Sentencia No. 4 la ejecutoria de la Resolución 13/06, solicitud que sostiene fue respondida de la siguiente manera: "La resolución ha quedado firme por determinación de ley, no siendo necesario decretar ejecutoria de manera expresa." Por ello sostiene que no existe otro recurso pendiente de ser agotado en la jurisdicción interna.

68. El peticionario también indica que dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional boliviano, no hay un solo caso en el que a través del recurso de amparo constitucional, se haya anulado una resolución que extingue una acción penal por vulneración al debido proceso.

69. En este análisis corresponde aclarar cuáles son los recursos internos que deben ser agotados en cada caso particular. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que sólo deben ser agotados los recursos adecuados para subsanar las violaciones presuntamente cometidas. El que los recursos sean adecuados significa que:

La función de esos recursos dentro del sistema de derecho interno sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable[11].

70. La Comisión igualmente ha establecido que el requisito de agotamiento de los recursos internos no significa que las presuntas víctimas tengan la obligación de agotar todos los recursos que tengan disponibles. Tanto la Corte, como la Comisión han sostenido en reiteradas oportunidades que "(…) la regla que exige el previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios"[12]. En consecuencia, si la presunta víctima planteó la cuestión por alguna de las alternativas válidas y adecuadas según el ordenamiento jurídico interno y el Estado tuvo la oportunidad de remediar la cuestión en su jurisdicción, la finalidad de la norma internacional está cumplida[13].

71. Al considerar la posición de las partes sobre el agotamiento, la Comisión observa que el peticionario optó por recurrir a la vía penal. Dentro del proceso penal, el peticionario sostiene que la determinación contenida en la Resolución 514/06 de la Sala Penal Primera

de la Corte Superior de Justicia de La Paz de fecha 23 de agosto de 2006 que resolvió la apelación incidental interpuesta y confirmó la prescripción de la acción penal resuelta por el Tribunal Cuarto de Sentencia (véase razonamiento párr. 38 supra), constituye la decisión definitiva dentro de la causa. La Comisión observa que la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz confirmó que la dilación del proceso penal se debió a causas directamente atribuibles a la administración de justicia boliviana por haber incurrido en nulidad dos veces por deficiencias procesales:

Es evidente que la duración del trámite de duración de autos, ha durado más de seis años a partir de la primera diligencia procesal en contra de lo previsto por el Art. 133 que señala una duración máxima de 3 años. De la revisión de obrados, se establece que la dilación es imputable al Tribunal que conoce la causa, ya que incurrió por dos veces en nulidad de actuados por deficiencias procesales.
La fundamentación de agravios tanto del fiscal y de la parte querellante, no justifican ni contradicen los fundamentos de la resolución apelada, que ha aplicado correctamente la normativa procesal.[14]

72. Con respecto a la prescripción de la acción penal, el Tribunal Constitucional de Bolivia ha señalado que cuando un órgano de la administración de justicia no tramita un proceso con las garantías procesales y jurídicas requeridas y como consecuencia de ello el proceso excede el plazo legal para que sea resuelto, el Estado pierde su facultad para sancionar en el caso y debe dictar la prescripción de la acción penal. Para el Tribunal Constitucional de Bolivia, la finalidad de la prescripción es evitar posibles violaciones de los derechos de los procesados, entre ellos a la seguridad jurídica:

[e]vitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la dignidad y la seguridad jurídica, que resulten irreparables (…) Conforme a esto, cuando el órgano administrativo o judicial no tramita el proceso con la diligencia que el orden constitucional y legal establece, o emite resoluciones o decretos innecesarios o contrarios a la ley, ocasiona la dilación injustificada de la causa, lesionando el derecho del imputado a la conclusión del proceso dentro del plazo establecido por ley; en estas circunstancias el Estado pierde legitimidad para hacer uso de su poder sancionador, determinando esta situación la extinción de la acción penal (…).[15]

73. En el presente caso, la Comisión considera que el peticionario ha agotado los recursos ordinarios del sistema penal. El recurso que según el Estado habría sido necesario agotar es el recurso extraordinario de Amparo Constitucional. [16] La Comisión observa en primer lugar, que este recurso es de naturaleza extraordinaria, mientras que, en principio, los peticionarios deberían interponer y agotar los recursos ordinarios. En segundo lugar, la Comisión observa que el Estado no ha indicado en qué medida dicho recurso extraordinario hubiera podido responder a, o remediar las violaciones al debido proceso planteadas por el peticionario. En este sentido, el peticionario alega que el proceso penal estuvo afectado por una serie de irregularidades y demoras, y el recurso extraordinario mencionado no tendría como propósito remediar las presuntas violaciones alegadas por el

peticionario. Asimismo, la Comisión observa las pocas probabilidades de éxito que hubiera tenido la interposición de dicho recurso tomando en cuenta la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional de Bolivia citada en el párrafo anterior.

74. La Comisión considera que la idoneidad de una acción civil o penal para remediar los hechos alegados de ser ciertos, será analizada en el fondo del caso.

75. Por lo tanto, la Comisión considera que el peticionario agotó los recursos internos y con ello el requisito consagrado en el artículo 46.1.a de la Convención se encuentra satisfecho desde la fecha en que I.V. fue notificada de la Resolución sobre la prescripción de la acción penal el 13 de septiembre de 2006.

2. Plazo para la presentación de la petición

76. El artículo 46.1.b de la Convención establece que para que la petición pueda ser declarada admisible, es necesario que se haya presentado dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que el interesado fue notificado de la decisión final que agotó la jurisdicción interna.

77. La Comisión ha establecido que los recursos internos fueron agotados a través de la Resolución 514/06 de 23 de agosto de 2006 emitida por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz que fue notificada a la presunta víctima el 13 de septiembre de 2006. La petición se presentó el 7 de marzo de 2007. En virtud de ello, la Comisión concluye que este requisito se encuentra satisfecho.

3. Duplicidad de procedimientos y cosa juzgada

78. El artículo 46.1.b de la Convención dispone que la admisión de las peticiones está sujeta al requisito respecto a que la materia "no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional" y en el artículo 47.d de la Convención se estipula que la Comisión no admitirá la petición que sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión o por otro organismo internacional. En el presente caso, las partes no han esgrimido la existencia de ninguna de esas dos circunstancias de inadmisibilidad, ni ellas se deducen del expediente.

4. Caracterización de los hechos

79. A los fines de admisibilidad, la Comisión debe decidir si en la petición se exponen hechos que podrían caracterizar una violación, como estipula el artículo 47.b de la Convención Americana, si la petición es "manifiestamente infundada" o si es "evidente su total improcedencia", según el inciso (c) del mismo artículo. El estándar de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre los méritos de una denuncia. La Comisión debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia expone hechos que caracterizan una violación de un derecho garantizado por la Convención y no

para establecer la existencia de una violación. Tal examen es un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo[17].

80. La Comisión considera que de ser probados los hechos referentes a la práctica de una esterilización alegadamente sin consentimiento en un hospital público, así como los efectos físicos y psicológicos que la misma produjo en I.V., podrían caracterizar una posible violación de los derechos consagrados en el artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento. Igualmente, los hechos podrían caracterizar una posible violación al artículo 11.2 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, con respecto a las alegaciones del peticionario apuntando a la injerencia arbitraria de funcionarios públicos en la vida privada de I.V en su decisión sobre mantener o no la función reproductora, invadiendo la esfera de su intimidad.[18]

81. La Comisión también considera que los hechos podrían caracterizar una violación al artículo 13 de la Convención de Americana en relación con las obligaciones en el artículo 1.1. del mismo instrumento en perjuicio de la víctima, por no haber sido alegadamente informada de los efectos, riesgos y consecuencias de la intervención quirúrgica a la que fue sometida y/o métodos alternativos, conforme lo establece la norma boliviana y los estándares internacionales de derechos humanos en la materia[19].

82. Asimismo, los hechos podrían caracterizar una posible violación al artículo 17 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, con respecto a la injerencia arbitraria de funcionarios públicos en el derecho de I.V. a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y por consiguiente el tamaño de su familia.

83. Igualmente, la Comisión considera que la esterilización alegadamente realizada por funcionarios estatales sin el consentimiento de la presunta agraviada, así como las consecuencias físicas y psicológicas de dicha intervención médica, podrían caracterizar una posible violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Igualmente podría caracterizar una violación de dicho artículo la supuesta dilación del proceso penal en contra de los supuestos responsables atribuida al poder judicial.

84. La Comisión también estima que las presuntas irregularidades y retrasos que acarrearon la prescripción de la acción penal, atribuidas al poder judicial, podrían caracterizar una posible violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento.

## V. CONCLUSIÓN

85. Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, la Comisión Interamericana concluye que el

presente caso satisface los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y en consecuencia,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE:

1. Declarar admisible la presente petición respecto de la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 8.1, 11.2, 13, 17 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

2. Declarar admisible el reclamo relacionado con el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.

3. Notificar el presente informe al Estado y al peticionario.

4. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 23 días del mes de julio de 2008. (Firmado): Paolo G. Carozza, Presidente; Luz Patrica Mejía, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Clare K. Roberts, Florentían Meléndez y Víctor Abramovich Miembros de la Comisión.

[1] Por solicitud expresa del peticionario en comunicación de fecha de 7 de marzo de 2007, se mantiene en reserva el nombre de la presunta víctima (en adelante "I.V.")
[2] Salpingoclasia u Oclusión Tubaria Bilateral, también llamada anticoncepción quirúrgica y ligadura de trompas.
[3] Según citan los peticionarios: Norma Boliviana de Salud MSPS-98: Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, Volumen I, Oclusión Tubárica Bilateral en Riesgo Reproductivo, aprobada por el Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial No. 517, 17 de noviembre de 1998.
[4] "Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria – Oclusión Tubárica Bilateral. Consentimiento Informado". Según los peticionarios forma parte de la Norma Boliviana de Salud MSPS-98: Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, Volumen I, Oclusión Tubárica Bilateral en Riesgo Reproductivo, aprobada por el Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial No. 517, 17 de noviembre de 1998.
[5] Autorización Familiar para Cirugía o Tratamiento Especial, Anexo 45 de la comunicación de fecha 7 de marzo de 2007 del peticionario.
[6] El peticionario hace referencia a la Organización Mundial de la Salud, Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos (3ra edición) 2005, pág. 4; Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comunicación 4/2004, A.S. vs. Hungría, CEDAW/C/36/D/4/2004, 29 de agosto de 2006; Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Perú, A/53/38/Rev.1, 8 de julio de 1998; Naciones Unidas, Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Perú, CCPR/CO/70/PER, 15 de noviembre de 2000, párr.21.

[7] Laboratorio de Patología y Citología, Resultado de Examen a I.V., Dr. Wilge J. Panoza Meneces, Médico-Patólogo, La Paz, 17 de agosto de 2000.
[8] Certificado médico de la Clínica de Achumani, 3 de septiembre de 2000.
[9] Certificado médico de la Clínica de Achumani, 3 de septiembre de 2000.
[10] Petición presentada por el Defensor del Pueblo de la República de Bolivia, 7 de marzo de 2007, párrs. 147-148.
[11] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 63.
[12] Corte I.D.H., Asunto de Viviana Gallardo y otras. Serie A No.G 101/81, párr. 26.
[13] CIDH, Informe N° 57/03 (Admisibilidad), petición 12.337, Marcela Andrea Valdés Díaz c. Chile, 10 de octubre de 2003, párr. 40.
[14] Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, Resolución 514/2006 de fecha 23 de agosto de 2006.
[15] Tribunal Constitucional, Auto Constitucional 0079/2004-ECA, 29 de septiembre de 2004.
[16] Ver CIDH, Informe No. 17/06, Admisibilidad, Sebastián Claus Furlan y Familia (Argentina), 2 de marzo de 2006; CIDH, Informe No. 5/02, Admisibilidad, Sergio Schiavini y María Teresa Schnak de Schiavini (Argentina), 27 de febrero de 2002; CIDH, Informe No. 51/02, Admisibilidad, Janet Espinoza Feria y Otras (Perú), 10 de octubre de 2002.
[17] Ver CIDH, Informe Nº 128/01, Caso Nº 12.367, Herrera y Vargas ("La Nación"), Costa Rica, 3 de diciembre de 2001, párr. 50; Informe N° 4/04, Petición 12.324, Rubén Luis Godoy, Argentina, 24 de febrero de 2004, párr. 43 e Informe Nº 29/07, Petición 712-03, Elena Tellez Blanco, Costa Rica, 26 de abril de 2007, párr. 58.
[18] La CIDH ha establecido anteriormente que el derecho a la intimidad "garantiza una esfera que nadie puede invadir, un campo de actividad que es absolutamente propio de cada individuo". Asimismo, ha señalado que "el artículo 11.2 prohíbe específicamente la interferencia "arbitraria o abusiva" de ese derecho. La disposición indica que, además de la condición de legalidad, que se debe observar siempre cuando se imponga una restricción a los derechos consagrados en la Convención, el Estado tiene la obligación especial de prevenir interferencias 'arbitrarias o abusivas.'" Véase CIDH, Informe No. 38/96, Caso 10.506, Argentina, 15 de octubre de 1996, párr. 91.
[19] El artículo 16 e) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.

**INFORME NO. 76/08. ADMISIBILIDAD. PETICIÓN 1055-06. PAOLA DEL ROSARIO GUZMÁN ALBARRACÍN Y FAMILIARES. ECUADOR. 17 DE OCTUBRE DE 2008.**

I. RESUMEN

1. El 2 de octubre de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión Interamericana" o la "CIDH") recibió una petición presentada por el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM-Guayaquil) (en adelante "los peticionarios"), en la cual se alega la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador (en adelante "el Estado", "el Estado ecuatoriano" o "Ecuador") por actos de acoso y abuso sexual, falta de atención médica y retardos en el proceso penal en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín (en adelante "la presunta víctima"), de 14 años de edad. Los peticionarios aducen que el vicerrector de la institución de educación pública en donde Paola del Rosario cursaba estudios aprovechó su posición de autoridad para acosar a la víctima sexualmente, lo cual resultó en su suicidio, y que la ineficacia del sistema judicial y administrativo mantienen estos hechos en la impunidad.

2. Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos del niño, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial establecidos en los artículos 4, 5, 7, 8, 19, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana"), en concordancia con el deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de dicho tratado y de los artículos 3, 4 (incisos a, b, c, e), 5, 6(a), 7 (incisos a, b, c, e, f, g) y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante "Convención de Belém do Pará") en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín y sus familiares.

3. Por su parte, el Estado alega que los reclamos de los peticionarios son inadmisibles en vista de que se ha incumplido el requisito del previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46.1.a de la Convención Americana y que éstos no configuran violaciones a la Convención Americana. El Estado asimismo sostiene que el poder judicial ha respondido debidamente a la denuncia de los hechos conforme a la ley y que no ha incurrido en acción u omisión alguna que pueda comprometer su responsabilidad internacional.

4. Tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento con los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decidió declarar el caso admisible a efectos del examen de los reclamos presentados por los peticionarios sobre la presunta violación de los artículos 4, 5, 8, 19, 24 y 25 de la Convención Americana en concordancia con el artículo 1.1 de dicho instrumento, y el artículo 7 de la Convención de

Belém do Pará. Asimismo, la CIDH decidió notificar a las partes el presente informe y ordenar su publicación.

## II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. La CIDH registró la petición bajo el número P-1055-06 y el 8 de febrero de 2007 procedió a transmitir copia de las partes pertinentes al Estado, con un plazo de dos meses para presentar información de conformidad con el artículo 30 (incisos 2 y 3) del Reglamento.

6. El 16 de noviembre de 2007, el Estado presentó sus observaciones, las que fueron trasladadas a los peticionarios el 22 de agosto de 2008, con un plazo de veinte días para presentar observaciones. El 27 de noviembre de 2007, el Estado presentó sus observaciones, las que fueron trasladadas a los peticionarios el 17 de diciembre de 2007, con un plazo de un mes para presentar observaciones. El 10 de octubre de 2007, la Clínica Internacional de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale en Estados Unidos presentó un Amicus curiae, en apoyo a los alegatos de los peticionarios, el cual fue trasmitido a ambas partes el 16 de noviembre de 2007.

7. El 15 de enero de 2008, los peticionarios solicitaron una prórroga para presentar sus observaciones, la cual fue concedida por la CIDH el 18 de enero de 2008, otorgándoles un plazo de un mes para presentar observaciones. Los peticionarios presentaron su respuesta el 18 de febrero de 2008, la cual fue transmitida al Estado para sus observaciones el 17 de abril de 2008, otorgándole el plazo de un mes. El 20 de mayo de 2008, el Estado solicitó una prórroga, la cual fue concedida por la CIDH el 28 de mayo de 2008, otorgándole plazo hasta el 17 de junio de 2008 para que presente sus observaciones. El plazo venció sin que el Estado presentara respuesta.

## III. POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Posición de los peticionarios

8. Los peticionarios alegan que Paola del Rosario Guzmán Albarracín, de dieciséis años de edad, era estudiante de tercer año de educación básica en el Colegio Nacional Técnico de Comercio y Administración "Dr. Miguel Martínez Serrano", establecimiento de educación pública dependiente del Ministerio de Educación de la República del Ecuador, ubicado en Guayaquil. Sostienen que en el año 2001, cuando tenía catorce años y cursaba el segundo año de educación básica, Paola del Rosario comenzó a tener problemas en dos materias, por lo cual era posible que tuviera que repetir el año. Alegan que el vicerrector del plantel le ofreció ayuda, "con la condición de que salga con él"[1]. Indican que Paola del Rosario le contó a su madre, Petita Paulina Albarracín Albán, sobre la ayuda ofrecida, sin especificar la condición del vicerrector. Señalan que la madre se reunió con el vicerrector y decidió que su hija debía repetir el año escolar, lo que así alegadamente ocurre.

9. Los peticionarios aducen que Paola del Rosario continuó siendo acosada por el vicerrector durante el resto del año escolar. Como ejemplo, los peticionarios mencionan como Paola del Rosario le contó a una compañera como el vicerrector "la obligó a tocarle los genitales arrinconándola contra su escritorio" y como sostuvo relaciones sexuales con Paola del Rosario desde octubre del 2002.[2] Asimismo, indican que otras estudiantes y profesoras de la institución anteriormente han declarado y denunciado al vicerrector por actos de acoso sexual[3]. En este sentido, los peticionarios incluso señalan que una maestra fundadora del Colegio denunció ante las autoridades que el vicerrector intentó encerrarla una vez en noviembre de 1988 en su oficina y que en virtud de ello, éste fue retirado brevemente de su cargo pero que fue reinstalado "casi inmediatamente".[4]

10. En este sentido, los peticionarios aducen que Paola del Rosario Albarracín Guzmán fue víctima de los delitos de acoso sexual y estupro por parte del vicerrector del plantel y que, como resultado, habría quedado embarazada. El 20 de noviembre de 2002, la presunta víctima habría contado a sus compañeras de colegio y amigas que había decidido interrumpir su embarazo utilizando una inyección que le colocaría el médico de la escuela. Los peticionarios sostienen que según el testimonio de Eloísa Troncoso, amiga de la presunta víctima, el médico de la escuela condicionaría su ayuda a que la presunta víctima accediera a tener relaciones sexuales con él.

11. Los peticionarios alegan que el 12 de diciembre de 2002, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, estando aún en su casa, la presunta víctima ingirió "11 diablillos" conteniendo fósforo blanco, como consecuencia de la situación de abuso en la que se encontraba. Señalan que en el autobús a la escuela, ese mismo día, la presunta víctima comunicó lo sucedido a sus compañeras, quienes la llevaron a la enfermería del plantel y llamaron a su madre. Los peticionarios sostienen que las autoridades del colegio no informaron a la madre de la presunta víctima lo que había sucedido y tampoco tomaron las medidas pertinentes para arreglar su traslado hospitalario, a pesar de que ésta se encontraba bajo cuidado estatal en la enfermería del plantel.

12. En este sentido, los peticionarios alegan que no es sino hasta que la madre llega al plantel, treinta minutos después, que Paola del Rosario es trasladada a un hospital, "donde murió horas más tarde"[5]. Alegan que según consta en el proceso penal, el llamado de un taxi por parte del conserje del plantel –a orden expresa del vicerrector de la escuela- fue la única ayuda que recibió la madre de la presunta víctima para trasladar a su hija. Sostienen que ese mismo día la presunta víctima muere en la "Clínica Kennedy" de la Ciudad de Guayaquil, como consecuencia de una intoxicación con fósforo blanco voluntariamente ingerido.

13. Frente a los hechos, los peticionarios sostienen que los padres de Paola del Rosario han interpuesto todos los recursos de la jurisdicción interna, en la vía penal, civil y administrativa, y que ninguno de estos recursos ha sido efectivo para remediar las violaciones alegadas. Los peticionarios aducen específicamente que: "El proceso penal se encuentra suspendido desde hace más de dos años, la resolución del proceso administrativo invisibiliza por completo la agresión sexual contra Paola y el proceso civil no es el idóneo

para reparar de manera integral los daños sufridos por Petita y su familia, ni será efectivo mientras [el vicerrector] continúe prófugo de la justicia"[6]. Los peticionarios aducen que el Estado ecuatoriano ha favorecido la impunidad de las violaciones alegadas y la invisibilización de la violencia de género contra la presunta víctima –debido a irregularidades y demoras injustificadas, particularmente en el proceso penal y administrativo-, lo cual ha obstruido la legítima aspiración de justicia de su familia.

14. Los peticionarios alegan que el 16 de diciembre de 2002, el padre de la presunta víctima, Máximo Guzmán, interpuso una denuncia penal contra el vicerrector de la escuela ante el Ministerio Público del Guayas y Galápagos, a la cual se le dio trámite ante la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Guayas. El 12 de junio de 2003, luego de finalizadas las investigaciones preprocesales, la fiscal decide imputar al vicerrector por el delito de acoso sexual. El 15 de julio de 2003, el Juez Vigésimo de lo Penal del Guayas se avoca al conocimiento del caso, y el 22 de agosto de 2003, la Fiscal solicita al juez que dicte prisión preventiva en contra del imputado. El 10 de septiembre de 2003, el Juez niega la solicitud de prisión preventiva, argumentando que la documentación agregada no variaba la situación jurídica del imputado. Los peticionarios señalan que esta decisión fue apelada por la fiscal resultando en que el 18 de diciembre de 2003, la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia revocó la decisión del juez a quo y ordenó la prisión preventiva del imputado. El 5 de enero de 2004 alegadamente se ordenó girar oficio a la Policía Judicial para proceder a la detención del imputado. Los peticionarios sostienen que esta orden de detención permanece incumplida a la fecha.

15. Sostienen que el 13 de octubre de 2003, la madre de la presunta víctima formuló acusación particular en contra del vicerrector en el marco del proceso penal acusándolo además por violación e instigación al suicidio. Sin embargo, los peticionarios alegan que el auto de llamamiento a juicio omite pronunciarse sobre esta acusación, fijando la materia del proceso penal únicamente en el delito de acoso sexual, lo que minimizó la gravedad de lo sucedido. En virtud de ello, la madre de la presunta víctima interpuso un recurso de recusación en contra del Juez Vigésimo de lo Penal del Guayas el 11 de noviembre de 2003, y que éste es finalmente separado de manera definitiva del proceso penal el 4 de mayo de 2004.

16. Los peticionarios señalan que el 23 de agosto de 2004, se dictan autos de llamamiento a juicio y detención en firme en contra del imputado; sin embargo, alegan que a la fecha no se le ha hecho comparecer en juicio y no hay constancia de que el imputado haya depositado caución necesaria para garantizar su libertad durante el proceso. Asimismo, aducen que se suspendió el auto de llamamiento a juicio hasta que el imputado no sea aprehendido o se presente voluntariamente. El 22 de septiembre de 2004, el imputado interpone recursos de apelación y de nulidad contra el auto de llamamiento a juicio, alegando que se violó el trámite previsto en la ley y el 2 de septiembre de 2005, la Corte Superior de Justicia resuelve desechar el recurso de apelación -confirmando así el auto de llamamiento a juicio contra el imputado- y reforma parte de la imputación, por considerar que el tipo penal era estupro agravado y no acoso sexual.

17. En relación con el proceso administrativo, los peticionarios indican que la madre de la presunta víctima interpuso una denuncia por acoso sexual en contra del imputado ante la Subsecretaría Regional de Educación. Sostienen que el 21 de enero de 2003 se remite el caso a la Dirección Provincial de Educación del Guayas y que el 23 de enero de 2003, esta entidad emite un informe en el cual concluye que la presunta víctima estuvo enamorada del vicerrector, pero que no había certeza de que él hubiese correspondido a dicho enamoramiento[7]. Alegan que el informe exculpatorio emitido en el ámbito administrativo no toma en cuenta el estado de vulnerabilidad de la presunta víctima y emite conclusiones que son prejuiciosas[8]. Sostienen que luego de este informe, la Dirección Provincial de Educación suspende toda investigación y sólo a la insistencia de la madre de la presunta víctima, es que se logra finalmente que el 14 de mayo de 2003 se nombre una comisión indagatoria. Alegan que el 9 de marzo de 2004, se concluye en un informe preliminar que el vicerrector había cometido la infracción de abandono injustificado del cargo[9]. En virtud de ello, el 23 de marzo de 2004, la Comisión Provincial de Defensa Nacional resuelve instaurar un sumario administrativo y el 30 de diciembre de 2004 se decide destituir del cargo al vicerrector por abandono injustificado.

18. Los peticionarios aducen que la sanción que le fue aplicada al vicerrector en virtud del proceso administrativo invisibiliza la agresión sexual contra la presunta víctima, ya que no se le sanciona por "conducta inmoral reñida con su profesión", como había sido solicitado por la madre de la presunta víctima[10], y que esta falta del sistema administrativo obedece a prejuicios de género. Indican que la madre de la presunta víctima "ha agotado la vía administrativa pese a que ésta no es la efectiva ni adecuada para sancionar al perpetrador del acoso y abuso sexual"[11]. Por otro lado, alegan que hubo retardo en el proceso administrativo, el cual duró más de dos años, contraviniendo lo establecido en la legislación que establece un plazo máximo de 15 días desde el inicio del sumario administrativo hasta la emisión de la decisión[12].

19. En relación con el proceso civil, los peticionarios señalan que el 10 de octubre de 2003, la madre de Paola inició un juicio ordinario por daño moral en contra del vicerrector[13]. Indican que "este proceso tampoco ha estado exento de retardos injustificados"[14], ya que no es sino hasta el 7 de junio de 2005 que el juez condena al vicerrector al pago de 25.000 dólares. Sin embargo, alegan que esta decisión no puede ejecutarse porque el demandado se encuentra prófugo de la justicia. Sostienen que el 15 de mayo de 2006, la madre de la presunta víctima, inconforme con la sentencia dictada por el juez anterior, presenta recurso de apelación contra esta decisión, y que el 21 de junio de 2006 el proceso sube a la Corte Superior de Justicia, fecha desde la cual el recurso de apelación se encuentra sin resolver.

20. Los peticionarios alegan que el acoso sexual es una realidad frecuente en las instituciones educativas en Ecuador[15] y que el caso de Paola del Rosario es representativo de la situación de violencia sexual cometida contra alumnas por parte del personal docente adscrito a escuelas públicas ecuatorianas[16]. En este sentido, sostienen que el Estado ecuatoriano, por conducto de sus agentes públicos, el vicerrector y el médico de la escuela, incumplió con su deber de cuidado de Paola del Rosario, el cual está reforzado por tratarse de una niña, quien necesita una protección especial, de acuerdo con las obligaciones

internacionales de derechos humanos y de los derechos del niño, y en contravención del artículo 19 de la Convención Americana. En este sentido, sostienen que el Comité de los Derechos del Niño ha demostrado preocupación por los vínculos entre el abuso sexual y el suicidio adolescente y ha indicado que los Estados tienen la obligación de proteger a los adolescentes de toda forma de violencia y abuso, incluyendo el abuso sexual por el personal docente en las escuelas.

21. Asimismo, los peticionarios señalan que el Estado ecuatoriano no ha tomado las medidas normativas necesarias para garantizar la protección de las niñas de actos de violencia sexual en las instituciones educativas públicas y que la deficiente actuación de los operadores de justicia en el caso en concreto ha significado que la legislación ecuatoriana se vea limitada en sus alcances disuasivos y no opere como un mecanismo de prevención de la violencia contra la mujer[17]. En este sentido, alegan que el Estado no ha actuado con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar, sancionar y reparar los hechos, en contravención del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Asimismo, en relación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, alegan que en el presente caso se han verificado principalmente dos tipos de violaciones: aquellas relacionadas con la interpretación legal inadecuada de los delitos sexuales y aquellas que guardan relación con la lentitud e ineficacia con la que se han desarrollado los recursos internos para investigar, sancionar y reparar los hechos objeto del presente caso.

22. Los peticionarios igualmente alegan que el Estado violó el artículo 4 de la Convención Americana al no haber prestado atención médica inmediata a Paola del Rosario ni ofrecerle un traslado inmediato a un hospital, por considerar que ya "era demasiado tarde" para ayudarla[18]. Aducen que el Estado violó el derecho a la integridad física, psíquica y moral contemplada en el artículo 5 de la Convención Americana por la violencia sexual que ejerciera un funcionario estatal en contra de la presunta víctima, a quien tenía bajo su custodia estatal. En relación con el derecho a la seguridad personal contemplado en el artículo 7 de la Convención Americana, los peticionarios indican que el derecho a la integridad personal abarca, entre otros, el derecho a la libertad y seguridad personales, a la dignidad humana, a la intimidad, a la autonomía física de las mujeres y a no ser sometidas a invasiones no consentidas en su cuerpo, de acuerdo a los parámetros internacionales de derechos humanos[19].

23. En relación con el artículo 24 de la Convención Americana, los peticionarios alegan que el comportamiento y la negligencia judicial y administrativa de las autoridades estatales, tanto en la tramitación del proceso administrativo como en la sustanciación del proceso penal han sido discriminatorios. En este sentido, señalan que la falta de debida diligencia estatal en investigar y sancionar los actos de violencia sexual en este caso confirman y perpetúan estereotipos que posicionan a las mujeres como responsables de la violencia de la cual son víctimas, favoreciendo la impunidad social de estos actos.

B. Posición del Estado

24. El Estado sostiene que la petición es inadmisible porque no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, como el proceso penal, las vías internas de reparación y el proceso civil por daños y perjuicios. Asimismo, indica que los peticionarios pretenden utilizar a la Comisión Interamericana "como organismo de revisión de la materia de fondo de los procesos administrativos y penales instaurados en contra del (…) [vicerrector], lo que no es posible por la 'fórmula de la cuarta instancia' que inhabilita a la Comisión Interamericana pronunciarse sobre el desarrollo sustancial de los procesos internos llevados ante los órganos de administración de justicia en el Ecuador"[20].

25. En relación con los hechos, el Estado señala que Paola del Rosario fue víctima de los delitos de acoso sexual y estupro por parte del vicerrector y que éste aprovechándose de su autoridad "asedió a la menor e impuso a la menor Guzmán Albarracín un acto sexual del que finalmente resultó un embarazo"[21].

26. En relación con el proceso penal, el Estado indica que luego de la interposición de la denuncia penal por parte del padre de la presunta víctima y de haber realizado las investigaciones preprocesales, se dio inicio a la etapa de instrucción fiscal y se dictó, por medio de órgano competente, la prisión preventiva en contra del imputado, de conformidad con el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal. Indica que la Corte Superior de Guayaquil, a través de la garantía de los derechos y el ejercicio del poder público de una forma eficaz y responsable, resolvió desechar el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirmar el auto de llamamiento a juicio. Sostiene que este tribunal reformó la imputación del delito "debido a que el tipo penal (…) no fue el adecuado"[22], cambiándolo a estupro agravado por "existir agravantes constitutivas de la infracción, ya que ésta logró el fatal desenlace de la muerte de la menor"[23].

27. Respecto del proceso administrativo, el Estado sostiene que la madre de la presunta víctima presentó una denuncia por acoso sexual contra el vicerrector en la Subsecretaría Regional de Educación, la cual fue remitida a la Dirección Provincial de Educación del Guayas, donde se conformó una Subcomisión Especial de Supervisores "para que se realice una exhaustiva investigación de los hechos denunciados y se pueda instaurar sumario administrativo en contra del docente imputado"[24], a quien se sanciona por destitución del cargo, de conformidad con la legislación.

28. En relación con el alegato de los peticionarios de que aplica la excepción al agotamiento de los recursos internos por la falta de eficacia e idoneidad de éstos, el Estado sostiene, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana, que no debe presumirse con ligereza que el Estado ha incumplido con su obligación de proporcionar recursos internos eficaces[25]. En este sentido, el Estado solicita a la CIDH que en virtud de que ha probado la disponibilidad de recursos internos para el ejercicio de los derechos presuntamente vulnerados, que invierta la carga de la prueba y la traslade a los peticionarios.

29. El Estado alega que la supuesta violación no es atribuible o imputable a un agente estatal, ya que es un principio universalmente aceptado el que los Estados son internacionalmente responsables sólo por sus propios actos o hechos ilícitos. Así, alega que

no ha incurrido en acción u omisión alguna que pueda comprometer su responsabilidad internacional, ya que los actos objeto de la presente petición no se le pueden imputar o atribuir al Estado.

30. En este sentido, el Estado indica que por haber existido una relación entre particulares, la única participación del Estado ecuatoriano ha sido la de administrar justicia de manera eficiente y eficaz y que de las piezas procesales se desprende que se ha actuado conforme a la ley.

31. Por todo lo anteriormente expuesto, el Estado solicita que la Comisión declare inadmisible la presente petición, al no reunir los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Asimismo, solicita que la Comisión declare, con fundamento en los artículos 27, 28 y 31 de su Reglamento, que el Estado no ha violado ningún derecho protegido en la Convención Americana.

## IV. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD

### A. Competencia ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci

32. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la Comisión. La petición señala como presuntas víctimas a Paola del Rosario Guzmán Albarracín y sus familiares, respecto de quienes el Estado de Ecuador se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión observa que Ecuador es un Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

33. La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Por otro lado, el Estado ecuatoriano depositó su instrumento de ratificación de la Convención de Belém do Pará el 15 de septiembre de 1995. Por lo tanto, la CIDH tiene competencia ratione temporis para analizar los alegatos sobre las presuntas violaciones a estos instrumentos internacionales.

34. La Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará que habrían tenido lugar dentro del territorio de Ecuador, Estado parte en dichos Tratados.

### B. Otros requisitos para la admisibilidad de la petición

1. Agotamiento de los recursos internos

35. El artículo 46.1.a de la Convención Americana exige el previo agotamiento de los recursos internos disponibles en la jurisdicción interna en conformidad a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de reclamos sobre la presunta violación de la Convención Americana.

36. El artículo 46.2 de la Convención dispone que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando:

a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

37. Según lo establecido por el Reglamento de la Comisión y afirmado tanto por la Comisión como por la Corte, cuando un Estado alega la falta de agotamiento de los recursos internos por parte del peticionario recae en el Estado la carga de demostrar que los recursos que no han sido agotados resultan "adecuados" para subsanar la violación alegada, demostrando que la función de esos recursos en el derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida[26].

38. En el presente caso, el Estado alega que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna conforme lo previsto en el artículo 46.1.c de la Convención Americana toda vez que aún se encuentran pendientes los procesos penal y civil con relación a los hechos materia del reclamo. Asimismo, considera que no resulta pertinente aplicar la excepción establecida en el artículo 46.2.a de la Convención. Los peticionarios, por su parte, solicitan se dé aplicación a las excepciones previstas en el artículo 46.2.a y c, a consecuencia de la inexistencia de recursos efectivos y el retardo injustificado en la resolución de los recursos interpuestos a nivel interno. En este sentido, alegan que el retardo injustificado y la negligencia de las autoridades han ocasionado que a la fecha no exista sentencia definitiva en el proceso penal y que se esté frente al inminente riesgo de que el caso quede en total impunidad.

39. La jurisprudencia de la Comisión reconoce que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal hasta sus últimas consecuencias[27] y que, en esos casos, ésta constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación. La Comisión considera que los hechos alegados por los peticionarios en el presente caso involucran la presunta vulneración del derecho fundamental a la integridad personal –por una alegada violación sexual en una menor de edad-, el cual se traduce en la legislación interna en un delito perseguible de oficio y que por lo tanto es este proceso, impulsado por el Estado mismo, el que debe ser considerado a los efectos de determinar la admisibilidad del reclamo.

40. En este sentido, la Comisión observa que la Convención de Belém do Pará afirma que la obligación de actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, este instrumento estipula que el Estado, al actuar con la debida diligencia frente a actos violentos, debe tomar especial cuenta de la particular exposición a la violencia y la discriminación que puede sufrir una mujer por su minoría de edad, entre otras condiciones de riesgo[28].

41. En este sentido, la Comisión observa que han transcurrido más de cinco años desde que ocurrieron los hechos objeto de la petición, sin que los procesos hayan producido una resolución. Asimismo, observa que los peticionarios alegan que el proceso penal se encuentra paralizado desde el 25 de agosto de 2004, es decir, desde hace más de cuatro años, por la ausencia del imputado. De igual manera, se observa que el Estado se limita a sostener que no se han agotado los recursos internos, pero no presenta información sobre medidas en marcha o indicios de que los peticionarios tienen otras medidas procesales disponibles.

42. La Comisión estima que en relación con la razonabilidad del plazo, la Corte Interamericana ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino que éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables[29].

43. La Comisión considera que no se puede condicionar la admisibilidad del presente caso en el agotamiento de los procesos judiciales que se encuentran suspendidos desde el 25 de agosto del 2004, y que dado el lapso transcurrido desde los hechos materia de la petición, resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana respecto del retardo injustificado en el desarrollo de los procesos judiciales internos, por lo cual el requisito previsto en materia de agotamiento de recursos internos no resulta exigible.

44. Finalmente, la Comisión considera importante resaltar que la invocación de las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos en ella consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo el artículo 46.2, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo vis à vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la posible violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cabe aclarar que las causas y los efectos que impidieron el agotamiento de los recursos internos serán analizados en el informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si configuran violaciones a la Convención Americana.

2. Plazo de presentación de la petición

45. La Convención Americana establece que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva. En el reclamo bajo análisis, la CIDH ha establecido la aplicación de las excepciones al agotamiento de los recursos internos conforme al 46.2.c de la Convención Americana. Al respecto, el artículo 32 del Reglamento de la Comisión establece que en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.

46. En el presente caso, la petición fue recibida el 2 de octubre de 2006, los hechos materia del reclamo se produjeron desde el 2002 y sus efectos en términos de la alegada falta de resultados de la administración de justicia se extienden hasta el presente. Por lo tanto, en vista del contexto y las características del presente caso, la Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable y que debe darse por satisfecho el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación.

3. Duplicación de procedimientos

47. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.

4. Caracterización de los hechos alegados

48. En esta etapa de admisibilidad, la Comisión considera que no corresponde determinar si se produjeron o no las violaciones alegadas. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver si los hechos expuestos tienden a caracterizar posibles violaciones a la Convención Americana, como estipula el artículo 47.b de la Convención Americana. El criterio de apreciación de estos extremos es diferente al requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión Interamericana debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado en la Convención Americana[30]. Este análisis tiene carácter sumario, y no implica un prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia. La distinción entre el análisis correspondiente a la declaración sobre la admisibilidad y el requerido para determinar una violación se refleja en el propio Reglamento de la CIDH, que establece de manera claramente diferenciada las etapas de admisibilidad y fondo[31].

49. Frente a los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH encuentra que en el presente caso corresponde establecer que las alegaciones de los peticionarios relativas a la presunta violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a los

derechos del niño, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial, podrían caracterizar violaciones a los derechos protegidos en los artículos 4, 5, 8, 19, 24 y 25 de la Convención Americana en concordancia con el artículo 1.1 de dicho instrumento, y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín y sus familiares.

50. La CIDH considera que la información presentada no ofrece elementos suficientes para caracterizar una violación al derecho a la seguridad personal garantizado en el artículo 7 de la Convención Americana.

51. Por cuanto la falta de fundamento o la improcedencia de los aspectos del reclamo señalados no resultan evidentes, la Comisión considera satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 47.b y c de la Convención Americana.

V. CONCLUSIONES

52. La Comisión concluye que es competente para examinar los reclamos presentados por los peticionarios sobre la presunta violación de los artículos 4, 5, 8, 19, 24 y 25 de la Convención Americana en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y que éstos son admisibles, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

53. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos y sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo del asunto,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1. Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 4, 5, 8, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho instrumento, y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín y sus familiares.

2. Declarar inadmisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones del derecho reconocido en el artículo 7 de la Convención Americana.

3. Notificar esta decisión al Estado ecuatoriano y a los peticionarios.

4. Continuar con el análisis del fondo de la cuestión.

5. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 17 días del mes de octubre de 2008. (Firmado): Paolo G. Carozza, Presidente; Luz Patricia Mejía Guerrero, Primera

Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Sir Clare K. Roberts, Paulo Sérgio Pinheiro, Florentín Meléndez y, Víctor E. Abramovich, Miembros de la Comisión.

[1] Petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006, párrafo 3.
[2] Los peticionarios citan como fuente los testimonios de dos compañeras de Paola del Rosario aportados durante la indagación previa (1993-2002) en contra del vicerrector mencionada más adelante en el presente informe. Petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006, párrafo 4.
[3] Petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006, párrafo 17.
[4] Petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006, párrafo 17.
[5] Escrito de observaciones de los peticionarios recibido en la CIDH el 20 de febrero de 2008, página 2.
[6] Petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006, párrafo 87.
[7] "1. Es un hecho evidente que la occisa, la estudiante Paola Guzmán estuvo enamorada del Vice-rector del Colegio. 2. No existe ninguna prueba que determine, de manera concluyente, que el Vice-rector haya correspondido a dicho enamoramiento (es decir, puede ser que sí o puede ser que no), las limitaciones de la presente indagación no llega (sic) a determinarlo." Informe de 23 de enero de 2003, Lic. Jorge Narea Muñoz, Supervisor Provincial de Educación, Dirección Provincial de Educación, División de Supervisión. Anexo de petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006.
[8] En este sentido, los peticionarios señalan que dicho informe cuestiona la incongruencia entre el poder adquisitivo de la presunta víctima y su capacidad de portar 100 dólares. Informe de 22 de diciembre de 2002, Lic. Jorge Narea Muñoz, Supervisor Provincial de Educación, Dirección Provincial de Educación, División de Supervisión. Anexo de petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006.
[9] Los peticionarios señalan que la infracción de abandono injustificado del cargo está contemplada en el artículo 120, numeral 4, literal b) del Reglamento General de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. Petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006, párrafo 50.
[10] Los peticionarios alegan que la madre de la presunta víctima, Petita Albarracín, habría solicitado a la Dirección Provincial de Educación el 19 de agosto de 2003, que se sancionara al vicerrector por "conducta inmoral reñida con su profesión", conducta sancionada por el artículo 32, numeral 4 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. Petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006, párrafo 49.
[11] Petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006, párrafo 77.
[12] Los peticionarios indican que el artículo 112 del reglamento de la Ley de Educación señala un plazo máximo de 15 días para instaurar el sumario administrativo, investigar y sancionar a los maestros que incurren en delitos contra sus estudiantes. Petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006, párrafos 55 y 79.
[13] En este sentido, los peticionarios indican que si bien es cierto que el proceso civil busca una reparación pecuniaria por el daño moral sufrido, éste no es el recurso adecuado para reparar de manera integral el daño. Petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006.
[14] Petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006, párrafo 84.

[15] En este sentido, los peticionarios adjuntan un informe elaborado por la Organización no gubernamental CEPAM-Guayaquil, organización co-peticionaria respecto de la presente petición, que, en este aspecto, cita un informe publicado por el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) (Informe "Programa de erradicación del delito sexual en el sistema educativo", 2004). Véase CEPAM-Guayaquil, "Información básica que se requiere para la identificación de casos hacia el Tribunal Regional de las Mujeres por los DESC", elaborado por AB. Mercy López Martínez, febrero de 2005, página 9. Anexo de la petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006.
[16] Los peticionarios indican que de acuerdo a un estudio realizado en Ecuador, el 22% de las niñas estudiantes han reportado haber sido víctimas de abuso sexual. Shawna Tropp y Mary Ellsberg, "Adressing Violence against Women within the Education Sector", preparado por el Grupo de Desarrollo y Género del Banco Mundial PREP, febrero de 2006, página 2. Escrito de observaciones de los peticionarios recibido en la CIDH el 20 de febrero de 2008, página 2.
[17] Asimismo, indican que la CIDH ha manifestado anteriormente su preocupación por la tipificación de los delitos sexuales y su interpretación en Ecuador y el impacto de ello en el derecho de las mujeres en Ecuador a una vida libre de violencia. En este sentido, los peticionarios hacen referencia a CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev. 1, 24 abril 1997. Petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006, párrafo 130.
[18] Los peticionarios alegan que el médico de la escuela, señaló "Si Paola había ingerido 11 diablillos a las 10h30 hasta las 14h00 que se presentó, consideró que era muy tarde, optando por llamar con urgencia, a los familiares". Informe de la Dirección Provincial de Educación de fecha 23 de enero de 2003, anexo a la petición original recibida en la CIDH el 2 de octubre de 2006.
[19] En este sentido, los peticionarios citan como fuente al Comité de Derechos Humanos, Recomendación General 6: el Derecho a la Vida (artículo 6), 30/07/82, en Recopilación de las Observaciones Generales y Recomendaciones Generales Adoptadas por Órganos de Derechos Humanos creados en Virtud de Tratados, Documento de la ONU HRI/GEN/1/rev.1 (1996).
[20] Nota Nº 4-2-277/07 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador de fecha 16 de noviembre de 2007.
[21] Nota Nº 4-2-277/07 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador de fecha 16 de noviembre de 2007.
[22] Nota Nº 4-2-277/07 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador de fecha 16 de noviembre de 2007.
[23] Nota Nº 4-2-277/07 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador de fecha 16 de noviembre de 2007.
[24] Nota Nº 4-2-277/07 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador de fecha 16 de noviembre de 2007.
[25] En este sentido, el Estado cita el Caso Velázquez Rodríguez, párrafo 60. Véase Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Nota Nº 4-2-277/07 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador de fecha 16 de noviembre de 2007.

[26] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C Nº 4, párrafo 64.
[27] Véanse por ejemplo CIDH, Informe Nº 94/06, Petición 540-04, Admisibilidad, Inés Fernández Ortega y Otros, México, 21 de octubre de 2006, párrafo 23; CIDH, Informe Nº 93/06, Petición 972-03, Admisibilidad, Valentina Rosendo Cantú y Otros, México, 21 de octubre de 2006, párrafo 27; CIDH, Informe N° 62/00, Caso 11.727, Hernando Osorio Correa Informe Anual de la CIDH 2000, párrafo 24; CIDH, Informe Nº 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Nicaragua, Informe Anual de la CIDH 1997, párrafos 96 y 97; y CIDH, Informe N° 55/97, Caso 11.137, Argentina, Informe Anual de la CIDH 1997, párrafo 392.
[28] Artículo 9, Convención de Belém do Pará.
[29] Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C Nº. 148, párr. 289; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C Nº 140, párr. 171; Caso de la "Masacre de Mapiripán". Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C Nº 134, párr. 216; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C Nº 120, párr. 66, y Caso 19 Comerciantes, Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C Nº 109, párr. 188.
[30] Ver CIDH, Informe Nº 128/01, Caso 12.367, Herrera y Vargas ("La Nación"), Costa Rica, 3 de diciembre de 2001, párr. 50.
[31] Ver CIDH, Informe Nº 31/03, Caso 12.195, Mario Alberto Jara Oñate y otros, Chile, 7 de marzo de 2003.

**INFORME Nº 8/08. CASO 11.426. ADMISIBILIDAD. MARCELA ALEJANDRA PORCO. BOLIVIA. 4 DE MARZO DE 2008.**

I. RESUMEN

1. El 30 de diciembre de 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una comunicación con solicitud de medidas cautelares presentada por la organización Servicio Paz y Justicia, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional "CEJIL", la Asociación Justicialista de Abogados, Fernando Rizzi y Gaspar Porco (en adelante "los peticionarios") en nombre de Marcela Alejandra Porco (en adelante "la presunta víctima"), ciudadana argentina, de 25 años de edad en ese entonces.[1] La petición se presentó en contra del Estado de Bolivia (en adelante "el Estado" o "el Estado boliviano") por presuntas irregularidades en el proceso penal seguido contra ella y por haber sido alojada en una cárcel a pesar de sufrir alteraciones mentales sin proporcionarle la atención y seguridad que su estado físico y psíquico requería. En la petición se alegó que los hechos narrados constituyen violaciones de los derechos protegidos por los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad), y 25 (protección judicial), en conexión con las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención").

2. El Estado sostiene que en el presente caso no se ha dado cumplimiento a los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, toda vez que sostiene no se tiene conocimiento, ni se ha probado, que los demandantes hubiesen agotado los recursos de la jurisdicción interna y tampoco que se hubiese cumplido con los plazos procesales. Por ello sostiene que la petición debe ser declarada inadmisible.

3. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que la petición es admisible, a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 5.1, 7, 8.1, 11.1, y 25 de la Convención Americana, todos ellos en concordancia con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, prevista en los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento internacional. La Comisión decide además, notificarla, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

II. TRÁMITE

4. La Comisión recibió una comunicación el 30 de diciembre de 1994 en la que los peticionarios presentaron información sobre el caso y solicitaron medidas cautelares para Marcela Alejandra Porco. Mediante nota de fecha 27 de enero de 1995, los peticionarios

presentaron información adicional sobre el caso. En comunicación de fecha 2 de febrero de 1995, la CIDH trasladó dichas comunicaciones al Estado indicándole un plazo de 90 días para presentar información. Asimismo le informó a las partes sobre el inicio de la tramitación de la denuncia a la que se le asignó el número 11.426.

5. Los peticionarios, mediante nota de fecha 7 de febrero de 1995, solicitaron a la CIDH el otorgamiento de una audiencia ante el pleno de la Comisión. La CIDH, el 8 de febrero de 1995, comunicó a las partes el otorgamiento de dicha audiencia programada para el 14 de febrero de 1995. Los peticionarios, mediante comunicación de 14 de febrero de 1995, presentaron información adicional sobre el caso.

6. Los peticionarios, mediante comunicación de 15 de febrero de 1995, solicitaron a la Comisión que se dirija al Gobierno de Bolivia señalando su disposición para entablar un proceso de solución amistosa, así como el otorgamiento de medidas provisionales a la Corte Interamericana.

7. La CIDH, dirigió un aide memoire de fecha 15 de febrero de 1995 al Estado boliviano el 15 de febrero de 1995, con un plazo hasta el 17 de febrero de 1995 para que se pueda acoger al proceso de solución amistosa, a fin de que Marcela Porco sea trasladada a territorio argentino para su cuidado médico. De lo contrario, la CIDH indicó que enviaría a la Corte la solicitud de medidas provisionales. El Estado, mediante nota de fecha 16 de febrero de 1995, presentó información sobre el caso, la misma que fue transmitida a los peticionarios el 2 de marzo de 1995.

8. Los peticionarios mediante comunicación de fecha 23 de febrero de 1995, presentaron información adicional en el caso y reiteraron su deseo que la Comisión solicite a la Corte Interamericana medidas provisionales. Dicha información fue transmitida por la CIDH al Estado mediante nota de fecha 27 de febrero de 1995 otorgándole un plazo de 60 días para contestar.

9. Mediante nota de fecha 24 de abril de 1995, el Estado presentó información adicional sobre el caso fechada el 18 de abril de 1995. Dicha información fue puesta en conocimiento de los peticionarios el 26 de abril de 1995 otorgándole un plazo de 30 días para presentar observaciones. Los peticionarios, mediante nota de fecha 23 de mayo de 1995 solicitaron una extensión del plazo otorgado para presentar observaciones, el mismo que fue concedido por la CIDH, el 26 de mayo de 1995 por un término de 45 días.

10. La CIDH, mediante nota de fecha 6 de noviembre de 1996, reiteró a los peticionarios el pedido hecho en la comunicación de 26 de mayo de 1995. Los peticionarios presentaron información sobre el caso el 17 de enero de 1997. El 5 de septiembre de 1997, los peticionarios presentaron observaciones sobre el caso, que fueron transmitidas al Estado el 16 de septiembre de 1997. El Estado mediante nota de fecha 17 de diciembre de 1997 presentó sus observaciones que fueron transmitidas a los peticionarios el 29 de diciembre de 1997, otorgándose un plazo de 30 días para presentar información.

11. La CIDH, mediante nota de fecha 4 de diciembre de 1997 se puso a disposición de las partes con el objeto de lograr una solución amistosa del caso, otorgando un plazo de 30 días para recibir respuesta de las partes. Mediante nota de fecha 22 de diciembre de 1998, la CIDH informó a las partes la intención del peticionario de someterse a un proceso de solución amistosa.

12. Los peticionarios, el 14 de mayo de 1999 suministraron información en relación al proceso para lograr una solución amistosa, las cuales fueron transmitidas al Estado el 2 de agosto de 1999. El Estado, en nota de 30 de agosto de 1999 presentó información sobre el caso, la misma que fue trasladada a los peticionarios con un plazo de 45 días para que presenten observaciones.

13. Los peticionarios en nota de 5 de noviembre de 1999 suministraron información sobre el caso, que fue transmitida al Estado el 16 de noviembre de 1999 otorgándole un plazo de 30 días para que presente información. El Estado, el 9 de diciembre de 1999 solicitó a la CIDH una prórroga para responder a las observaciones, que fue concedida por la CIDH el 13 de diciembre de 1999. Mediante notas de 28 de febrero de 2000 y 2 de mayo de 2000 solicitó prórrogas adicionales para presentar observaciones, las mismas que fueran concedidas por la CIDH.

14. Mediante comunicación de fecha 12 de junio de 2000 los peticionarios solicitaron a la CIDH solicite al Estado presente observaciones a su comunicación del 5 de noviembre de 1999.

15. Mediante nota de fecha 31 de julio de 2000, el Estado presentó sus observaciones en relación al caso. Los peticionarios, el 20 de octubre de 2000 solicitaron a la CIDH copia de la denuncia original de la petición. En comunicación de fecha 13 de noviembre de 2000, los peticionarios presentaron sus observaciones que fueron transmitidas al Estado el 5 de diciembre de 2000. El Estado, mediante nota de 29 de diciembre de 2000 solicitó una prórroga de 90 días para presentar información. La CIDH, mediante comunicación del 9 de enero de 2001 concedió al Estado una prórroga por 60 días.

16. El Estado, mediante notas de fecha 16 de marzo de 2001, presentó sus observaciones que fueron puestas en conocimiento de los peticionarios el 27 de marzo de 2001, otorgándoles un plazo de 30 días para presentar observaciones. Los peticionarios presentaron sus observaciones el 13 de junio de 2001, que fueron transmitidas al Estado el 18 de junio de 2001.

17. El Estado, mediante nota de 27 de julio 2001 y 30 de julio de 2001, presentó sus observaciones a la respuesta de los peticionarios. Dicha información fue puesta en conocimiento de los peticionarios el 9 de octubre de 2001. Mediante comunicación de 7 de noviembre de 2001, los peticionarios solicitaron una prórroga de 45 días para presentar observaciones, la misma que fue concedida por la CIDH el 9 de noviembre de 2001. Los peticionarios, mediante comunicación de fecha 17 de diciembre de 2001 solicitaron una

prórroga de dos meses para presentar sus observaciones. La CIDH, el 15 de enero de 2002 concedió una prórroga de 45 días.

18. Los peticionarios presentaron sus observaciones en el caso el 1º de marzo de 2002 que fueron transmitidas al Estado el 14 de marzo de 2002 otorgándole 30 días para que presente observaciones. El Estado, mediante nota de 6 de mayo de 2002 solicitó a la CIDH una prórroga de 30 días para presentar sus observaciones, la misma que fue concedida por la CIDH el 8 de mayo de 2002. El Estado presentó sus observaciones mediante nota de 10 de junio de 2002, que fueron transmitidas a los peticionarios el 13 de junio de 2002 con un plazo de 30 días para que presenten observaciones.

19. Mediante comunicación de 18 de julio de 2007, la CIDH reiteró a los peticionarios la solicitud de información efectuada el 13 de junio de 2002, bajo el apercibimiento de archivar la petición dentro de un plazo de 30 días. Los peticionarios mediante nota de 1 de agosto de 2007 solicitaron a la CIDH una prórroga de un mes para presentar sus observaciones. La CIDH concedió la prórroga solicitada el 14 de agosto de 2007. Mediante nota de 14 de septiembre de 2007, los peticionarios presentaron sus observaciones a la información presentada por el Estado boliviano, las mismas que fueron transmitidas al Estado el 25 de septiembre de 2007, otorgándosele un plazo de un mes para presentar observaciones.

20. A la fecha de aprobación del presente informe, el Estado no había dado respuesta sobre la petición.

TRÁMITE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

21. Mediante comunicación de fecha 30 de diciembre de 1994, los peticionarios solicitaron a la CIDH la adopción de medidas cautelares a favor de Marcela Porco, para protegerla de los alegados tratos inhumanos y degradantes de los que estaba siendo objeto durante su reclusión en la cárcel de Palmasola, en conjunción con el impedimento para presentar el recurso de habeas corpus debido a la prohibición expresa en la Ley 1008 del beneficio de la libertad provisional.

22. El 6 de enero de 1995, la Comisión adoptó medidas cautelares a favor de la víctima.

23. El 25 de enero de 1995 los peticionarios solicitaron a la CIDH una audiencia con el pleno de la Comisión con la finalidad de requerirle a la Corte la adopción de medidas provisionales a favor de Marcela Porco, en razón de encontrarse detenida, en condiciones infrahumanas y sin tratamiento médico por padecer un caso agudo de esquizofrenia. El 15 de febrero de 1995, los peticionarios solicitaron medidas provisionales, aduciendo que a pesar de que la CIDH había otorgado medidas cautelares, las mismas no habían producido ningún resultado concreto, pues sostienen que el Gobierno de Bolivia no estaba en condiciones de brindar seguridad y un tratamiento médico especializado como el que requería la víctima. En seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la CIDH, Marcela Porco fue declarada inimputable mediante sentencia de fecha 22 de febrero de

1995, y el 18 de mayo de 1995 la Corte Suprema ratificó la inimputabilidad. En consecuencia Marcela Porco fue repatriada a la República de Argentina en junio de 1995.

## III. POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Los peticionarios

24. Los peticionarios sostienen que Marcela Alejandra Porco, ciudadana argentina, fue detenida el 2 de junio de 1994 en virtud de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (en adelante "Ley 1008"). Posteriormente sostienen que fue puesta en libertad el 7 de junio de 1995, habiendo permanecido privada de su libertad por el término aproximado de un año y sometida a un proceso especial regulado por la Ley 1008[2] . Los peticionarios sostienen que Marcela Alejandra Porco padecía una historia de psicosis esquizofrénica aguda y crónica y, debido a las condiciones de su detención, vio su estado de salud deteriorado gravemente a causa de diversas acciones del Estado boliviano que se detallan a continuación.

25. Los peticionarios sostienen diversas irregularidades cometidas por el Estado boliviano en contra de Marcela Alejandra Porco, entre los que se encuentran: (1) falta de provisión de tratamiento médico oportuno a Marcela Porco mientras estuvo detenida que acentuó su deterioro físico y mental; (2) falta de garantías a su seguridad ya que sostienen fue víctima de violación sexual mientras se encontraba bajo la custodia del Estado y 3) sometimiento a un procedimiento judicial bajo la Ley 1008, ley que consideran contiene diversas disposiciones violatorias de los derechos humanos.

26. Los peticionarios alegan que Marcela Porco fue detenida el 2 de junio de 1994 por las autoridades bolivianas (Fuerza para la lucha contra el narcotráfico) en adelante "FELCN" en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia, bajo el cargo de transporte de cocaína previsto en el art. 55 de la Ley 1008. Sostienen que Marcela Porco declaró por primera vez el 7 de junio de 1994 ante las autoridades policiales y en dicha declaración expresó que sufría una seria enfermedad mental y que necesitaba se le suministrasen sus medicamentos.

27. Sostienen que después de su detención, fue trasladada a la Cárcel de Mujeres, Palmasola, Santa Cruz, también conocida como el "infierno de Palmasola", sin tener acceso al tratamiento médico que requería su enfermedad. Alegan que la denominación de infierno no es caprichoso y el caso de Marcela Porco es un ejemplo. Sostienen que en el sector femenino de la cárcel de Palmasola, se alojaban tanto condenadas como procesadas en violación de la Convención Americana y las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas. Sostienen que Marcela Porco fue encerrada en una celda oscura de aislamiento por el solo hecho de padecer una enfermedad mental y sin los debidos resguardos. Sostienen que tenía por lugar de internación un pequeño espacio delimitado por un par de cortinas, por donde corría agua, razón por la cual se le proporcionó un camastro a fin de evitar que dichas aguas mojaran el colchón en que dormía. Alegan que ello ocurrió después de una huelga de sus compañeras motivadas por el estado de desamparo en el que Marcela Porco se hallaba.

28. Los peticionarios aducen diversas prácticas irregulares dentro de la prisión que afectaban a todos los internos. Sostienen por ejemplo que quienes entraban a la prisión eran obligados a pagar un alquiler o a construirse una celda previo pago de 300 dólares americanos. Sostienen que la comida debía ser provista por los familiares o pagada por los internos. Aducen que según testimonios de visitantes "la seguridad interna de la cárcel está operada por internos llamados capos". Sostienen que estas condiciones infrahumanas aceleraron el proceso de deterioro de salud mental de Marcela Porco que llegó a un estado tan avanzado que el padre la encontró el día 15 de julio de 1994 yaciendo desnuda en una sección llamada "el bote" entre aguas servidas, con gusanos en los pies y en la vagina; completamente perdida y delirante, mostrando un cuadro de desnutrición grave, debiendo su padre hacerse cargo de ella hasta alimentarla por la boca.

29. Los peticionarios igualmente sostienen que no se respetaron las garantías establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Alegan que la Ley 1008 contiene varias violaciones, que tornan en ineficaces los derechos y libertades consagrados por la Convención Americana. Entre las violaciones alegadas aducen que existió una grave disparidad ente el plazo legal de tres meses establecidos en la Ley 1008 para la tramitación del procedimiento y el tiempo de aproximadamente un año que la víctima estuvo detenida. Asimismo sostienen que el art. 121 de la Ley 1008 presume la culpabilidad de los acusados, debido a que dicho artículo requiere que el Fiscal apele la absolución para que el caso vaya a una segunda instancia judicial. Mientras tanto, el detenido absuelto debe permanecer en la cárcel, pues la Ley no permite la libertad provisional. Sostienen que dicha prolongación indefinida significó para Marcela Porco daños a su salud mental y física.

30. Los peticionarios sostienen que la Ley 1008 tampoco ofreció el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa y que Marcela Porco no tuvo acceso a un recurso idóneo para proteger sus derechos. Aducen que los procesados cuentan con 3 días para presentar su defensa, el plazo es improrrogable y el auto de apertura del proceso no permite recurso de apelación, entre otros. Asimismo sostienen que conforme a la Ley 1008, la investigación fue conducida por funcionarios no judiciales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que no cumplen con los requisitos de independencia e imparcialidad exigidos por los jueces o tribunales conforme a los parámetros internacionales.

31. Los peticionarios alegan que Marcela Porco no pudo acceder a la libertad provisional con el fin de someterse al tratamiento médico. Los peticionarios sostienen que el diagnóstico médico de Marcela Porco – según informe emitido por las autoridades de la clínica San Agustín S.R.L. en Argentina donde efectuaba tratamiento psiquiátrico – acreditaba que Marcela Porco sufría de "psicosis aguda con características de exotoxicidad, psicosis esquizofrénica, psicosis delirante crónica." Aducen que a pesar de que las autoridades conocían esta información, y de las advertencias emitidas por otros especialistas, no se le ofreció un tratamiento adecuado a su estado. Para ello señalan un informe psicológico que obra en el expediente que señala "su cuadro psicopatológico

empeoró considerablemente después de estar recluida en estos dos lugares (refiriéndose a las prisiones de Conchocorito y el "bote").[3]

32. Los peticionarios sostienen que el padre de Marcela Porco considera que ella pudo haber sido abusada sexualmente por guardias mientras estuvo detenida, por comentarios que recibió de otras presas. Asimismo sostienen que el mismo Estado reconoció que Marcela Porco tuvo relaciones sexuales con otro interno en un centro de salud mental. Alegan que dicho reconocimiento demuestra la tolerancia y la falta de prevención del Estado ante tales actos. Asimismo aducen que dicho acto constituye una violación sexual debido a la enfermedad mental que Marcela Porco padecía.

33. Sostienen que los Jueces del Tribunal Primero de Sustancias Controladas donde se tramitó el proceso contra Marcela Porco, permitieron que recibiese tratamiento psiquiátrico en la cárcel, pero no que se le traslade a un sitio adecuado para su tratamiento. Ello en razón del artículo 74 de la Ley 1008 que prohíbe internaciones médicas fuera de los recintos carcelarios de los procesados. Asimismo sostienen que debido a que la cárcel carecía de servicio médico, Marcela Porco no fue tratada. Sostienen que Amnistía Internacional visitó a Marcela Porco en la prisión y confirmó que se encontraba en un estado de salud "deplorable" y que moriría pronto si no recibía atención. Los peticionarios alegan que la falta de garantías de seguridad permitieron que se violen los derechos de Marcela Porco a la integridad física y mental, y al reconocimiento de su dignidad.

34. Los peticionarios sostienen que el 14 de enero de 1995, el tribunal boliviano resolvió el traslado de Marcela Porco al Centro de Salud Mental de Santa Cruz por un plazo de siete días para que se efectúen los exámenes médicos necesarios a fin de establecer su estado mental. Sostienen que el tribunal exigió doble escolta de civil y resolvió que los costos de estadía en el centro de salud estarían a cargo de la familia de la víctima. Asimismo alegan que el mismo 14 de enero, el director de la institución psiquiátrica se negó a recibir a Marcela Porco alegando no poder garantizar su internación debido a la falta de infraestructura adecuada. Sin embargo aducen que el Tribunal exigió que la procesada sea internada en dicho nosocomio a pesar de no ser el lugar idóneo para recibir el tratamiento requerido.

35. Los peticionarios sostienen que el 23 de enero de 1995, el perito médico del caso determinó que la víctima se encontraba enajenada mentalmente y ordenó que se le someta a un tratamiento prolongado con una internación no menor de 60 días. Los peticionarios alegan que el 23 de enero el tribunal resolvió que se continúe con la internación de Marcela Porco, bajo vigilancia, y ordenó que el perito informe semanalmente sobre su evolución.

36. Finalmente, los peticionarios alegan que a pesar que Marcela Porco fue liberada y repatriada a la República de Argentina, el Estado boliviano no ha reparado a la víctima por las violaciones a los derechos y garantías perpetradas durante el proceso, ni tampoco ha cumplido con el deber de investigar, sancionar y reparar conforme lo establecido por la Convención Americana. Los peticionarios aducen que la falta de tratamiento oportuno y

los maltratos sufridos en prisión produjeron daños permanentes en la salud de Marcela Porco.

37. En cuanto al agotamiento de los recursos internos, los peticionarios alegan que la existencia de recursos internos no puede meramente enunciarse con independencia del análisis sobre la idoneidad y eficacia de los recursos ante una determinada situación. Sostienen que el Estado menciona el habeas corpus, el amparo constitucional y los recursos penales como mecanismos contemplados en la legislación boliviana para la protección y garantía de los derechos, pero no menciona de qué manera estos recursos hubieran podido resolver la situación denunciada por los peticionarios. Los peticionarios sostienen que la prohibición del beneficio de la libertad provisional contemplada en el art. 109 de la Ley 1008 la imposibilitó de interponer recursos de amparo constitucional y habeas corpus en este caso concreto. Aducen que dicho artículo establece "En procesos sobre sustancias controladas no procede el beneficio de la libertad provisional."

B. El Estado

38. El Estado alega que Marcela Porco fue detenida en el aeropuerto Viru Viru de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al encontrársele 2.970 gramos de clorhidrato de cocaína en una revisión de rutina. Asimismo sostiene que las diligencias de la policía judicial por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) así como el proceso a cargo de los jueces y las cortes, estaban previstas en la Ley 1008. Esta ley estipula para el delito de transporte, una pena entre 8 a 12 años de presidio y 1.000 a 1.500 días de multa.

39. El Estado alega que cuando Marcela Porco fue detenida y posteriormente rindió su declaración policial, desconoció que en su maleta se encontraba la cocaína e hizo conocer sobre su tratamiento psico-terapéutico. Sin embargo sostiene que las personas dedicadas al tráfico ilegal de sustancias controladas siempre niegan conocer la droga que se encuentra y buscan alguna excusa que pueda librarlos. El Estado sostiene que los policías asignados al caso declararon que Marcela Porco se encontraba normal cuando prestó declaración ante FELCN.

40. Sostiene que por memorial se solicitó la internación médica de Marcela Porco acompañando certificado médico. Sin embargo, en vista de que el art. 74 de la Ley 1008 prohibía la internación médica fuera de los recintos carcelarios, el Estado alega que el Tribunal de Juzgado Primero de Partido de Sustancias Controladas rechazó tal petición y ordenó su atención médica dentro del recinto carcelario para cuyo efecto ordenó la adecuación de una habitación para recibir tratamiento.

41. El Estado alega que ante una solicitud del Colegio de Abogados, el Tribunal de Juzgado Primero de Partido de Sustancias Controladas ordenó al Director del Centro Psiquiátrico "Benito Manni" informe sobre el estado de salud de Marcela Porco, sugiriendo éste su internación en un centro especializado.

42. El Estado sostiene que en relación a la protección de la integridad física y psíquica de Marcela Porco, el 12 de septiembre de 1994 las autoridades dispusieron la internación de Marcela Porco en un centro de salud mental para que reciba el tratamiento correspondiente. Alega que los médicos del centro psiquiátrico encargados de Marcela Porco informaron al Tribunal que ella no presentaba ningún síntoma psicótico, diagnosticándose simulación por lo que no se justificaba su permanencia en dicho centro. Como resultado de ello, el Estado alega que el 23 de septiembre de 1994 Marcela Porco fue trasladada al centro penitenciario.

43. Posteriormente el Estado alega que en enero de 1995, la autoridad judicial ordenó tratamiento especializado y peritaje. Sostiene que como resultado de dicha orden y como producto del informe de un psiquiatra que actuó como dirimidor, a partir del 23 de enero de 1995 Marcela Porco fue internada en un centro de salud mental en donde permaneció hasta que se logró su libertad. Asimismo sostiene que los gastos emergentes de la internación y tratamiento así como su manutención, estuvieron a cargo del Estado.

44. Con respecto a las condiciones de detención, el Estado sostiene que la Comisión del Ministerio de Justicia efectuó una visita sorpresiva a la penitenciaría de Palmasola el 14 de enero de 1995, donde se encontraba Marcela Porco. Alega que en dicha visita se comprobó que se había destinado parte del comedor como celda de la detenida, habiéndola rodeado de cortinas para cuidar su privacidad. Asimismo, sostienen que la misma constató que Marcela Porco se encontraba en inmejorables condiciones, que no denotaba ningún tipo de maltrato, descuido en la vestimenta, desnutrición o suciedad.

45. En relación a las alegaciones del supuesto abuso sexual, el Estado sostiene que cuando la Comisión del Ministerio de Justicia efectuó una visita sorpresiva a la penitenciaría de Palmasola, las otras reclusas en ningún momento denunciaron que Marcela Porco fue víctima de algún atropello.

46. Asimismo alega que de las declaraciones de testigos del centro psiquiátrico donde se encontraba Marcela Porco, se llega a establecer que ella voluntariamente tuvo relaciones sexuales con un señor que respondía al nombre de Alejandro Tineo, quien se encontraba en el mismo centro. Incluso sostiene que cuando fue sorprendida en estas relaciones, ella sostuvo que el Sr. Tineo era su novio y que ella podía tener esas relaciones.

47. El Estado alega que proporcionó asistencia legal para la defensa gratuita de Marcela Porco, asistencia que logró su internación en un centro privado de salud mental y que se le declare inimputable mediante sentencia.

48. Sobre la alegada drasticidad de la Ley 1008, el Estado indica que por Ley 1685 de 2 de febrero de 1996, se dictó la Ley de Fianza Juratoria contra la Retardación de Justicia Penal, que modificó la Ley 1008, otorgando la posibilidad de concederse la libertad provisional bajo fianza juratoria cuando se presenten una serie de procedimientos que favorezcan al procesado. En relación a la cárcel de Palmasola, el Estado sostiene que desde el año 1994 la

cárcel ha sido remodelada, y ofrece una nueva infraestructura que otorga higiene personal, servicios médicos y mejores condiciones de vida a los internos.

49. El Estado sostiene que la petición es improcedente debido a que no existe una clara identificación de las circunstancias en las que se habría actuado para proceder contra los supuestos responsables. Asimismo, sostiene que no se comprobaron indicios de culpabilidad y menos que se hayan concretado denuncias con determinación de personas, circunstancias y hechos consumados, así como tampoco se evidenció la existencia del presunto autor o autores de la acción incriminada. Por tanto, no existe tipicidad e imputabilidad por lo que al Estado no se le puede atribuir responsabilidad penal por tales supuestos.

50. En cuanto al plazo procesal, el Estado alega que el peticionario interpuso su solicitud ante la CIDH el 14 de mayo de 1999, en tanto que Marcela Porco llegó a Argentina el 9 de junio de 1995. Ello sostiene, evidencia que la solicitud fue presentada en forma extemporánea.

51. Sobre la admisibilidad de la petición, el Estado sostiene que los peticionarios no han cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, toda vez que no se tiene conocimiento, ni se ha probado, que los demandantes hubiesen agotado los recursos de la jurisdicción interna, y tampoco que se hubiesen cumplido con los plazos procesales. Por el contrario, sostiene que el procedimiento no fue presentado en el plazo previsto por la Convención. Entre los recursos internos que no fueron utilizados por los peticionarios el Estado señala el Habeas Corpus, el Amparo Constitucional y recursos penales. En relación a los recursos penales, el Estado sostiene que los peticionarios no han acudido a las instancias penales con la finalidad de investigar las conductas alegadas por los peticionarios tipificadas como delitos en el ordenamiento jurídico interno tales como la violación sexual. Sostiene que no se tiene información en sentido que hubiesen acudido a la jurisdicción interna. Por todo ello solicita se declare la demanda inadmisible.

## IV. ANÁLISIS LEGAL

### A. Competencia ratione personae, ratione materiae, ratione temporis, ratione loci

52. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención para presentar denuncias ante la CIDH. La presunta víctima del caso se encontraba bajo la jurisdicción del Estado boliviano en la fecha de los hechos aducidos. Por su parte, el Estado de Bolivia ratificó la Convención Americana el 19 de julio de 1979. En consecuencia, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

53. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado.

54. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos por la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición.

55. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian presuntas violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.

B. Requisitos de admisibilidad de la petición

1. Agotamiento de los recursos internos

56. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, tener la oportunidad de solucionarla antes de que sea conocida por una instancia internacional.

57. El requisito de agotamiento previo se aplica cuando en el sistema nacional están efectivamente disponibles recursos que son adecuados y eficaces para remediar la presunta violación. En este sentido, el artículo 46.2 especifica que el requisito no se aplica cuando no exista en la legislación interna el debido proceso legal para la protección del derecho en cuestión; o si la presunta víctima no tuvo acceso a los recursos de la jurisdicción interna; o si hay retardo injustificado en la decisión sobre dichos recursos. Como indica el artículo 31 del Reglamento de la Comisión, cuando el peticionario alega una de estas excepciones, corresponde al Estado demostrar que los recursos internos no han sido agotados, a menos que ello se deduzca claramente del expediente.

58. Al respecto, los peticionarios han invocado la excepción al agotamiento de los recursos internos (46.2.b). Señalan que Marcela Porco estaba impedida de acceder a recursos de jurisdicción interna debido a la existencia y aplicación de la Ley 1008 de fecha de 19 de julio de 1988 que directamente anuló y por tanto tornó en ineficaz, la utilización de los recursos para proteger sus derechos. Específicamente sostienen que la prohibición del beneficio de la libertad provisional contemplada en el art. 109 de la Ley 1008, la cual fue aplicada al caso de Marcela Porco, la imposibilitó de interponer cualquier recurso de habeas corpus o amparo debido a que bajo dicha disposición legal hubieran sido declarados improcedentes. Finalmente sostienen que siendo los recursos inadecuados e ineficaces, los peticionarios no estaban en la obligación de agotarlos.

59. La Corte Interamericana ha señalado que el Estado que alega el no agotamiento debe señalar los recursos internos que deben agotarse y proporcionar la prueba de su efectividad.[4] El Estado alega que no existe evidencia ni prueba que los peticionarios

hubiesen agotado los recursos internos. Entre los recursos internos que no fueron utilizados por los peticionarios el Estado señala el habeas corpus, el amparo constitucional y recursos penales. En relación a los recursos penales, el Estado sostiene que los peticionarios no han acudido a las instancias penales con la finalidad de investigar las conductas alegadas por los peticionarios tipificadas como delitos en el ordenamiento jurídico interno tales como la violación sexual. En virtud de lo anterior, solicita que la petición sea declarada inadmisible.

60. En relación a los recursos internos aducidos por el Estado, la CIDH considera que el Estado no ha proporcionado ante la Comisión información específica en relación a la manera que los recursos invocados hubiesen servido para resolver la situación planteada. No corresponde al Estado simplemente señalar la falta de agotamiento de los recursos internos de forma general, porque la aplicación y la eficacia de los mismos van a depender de las exigencias formales o sustanciales del derecho interno y su consonancia y posibilidad de usarlos eficazmente en un caso concreto. Como lo ha señalado la Corte Interamericana:

Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable.[5]

Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido.[6]

61. Asimismo, específicamente para los recursos de Habeas Corpus, o el Amparo Constitucional, el Estado no ha indicado cómo dichos recursos podían ser aplicados frente al artículo 109 de la Ley 1008 que establece textualmente: "En procesos sobre sustancias controladas no procede el beneficio de la libertad provisional." A la luz de dicho artículo la CIDH considera que cualquiera de los procedimientos señalados por el Estado no ofrecían perspectivas razonables de éxito, por lo cual no serían efectivos de acuerdo con los principios generales del derecho internacional.

62. Dado que el reclamo principal presentado por los peticionarios se relaciona con la detención en condiciones presuntamente inadecuadas y supuestamente sin "la atención médica necesaria", la Comisión considera que el recurso idóneo hubiera sido el habeas corpus. Considera además que la normativa vigente en ese entonces no le ofrecía la posibilidad de acudir a esta garantía fundamental. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye en este caso que los peticionarios quedan excusados del cumplimiento del requisito del agotamiento de recursos internos de conformidad con el artículo 46.2.

63. Sólo resta señalar que la invocación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos allí consagrados, tales

como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46.2, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo, vis á vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cabe aclarar que las causas y los efectos que han impedido el agotamiento de los recursos internos en el presente caso serán analizados, en lo pertinente, en el Informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente configuran violaciones a la Convención Americana.

2. Plazo para la presentación de la petición

64. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46(1)(b) de la Convención para que una petición pueda ser admitida, debe presentarse dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que la parte denunciante fue notificada de la decisión definitiva dictada a nivel nacional. La norma de los seis meses garantiza certidumbre y estabilidad jurídica una vez que una decisión ha sido adoptada.

65. En virtud del artículo 32(2) del Reglamento de la CIDH, en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. De acuerdo con este artículo, en su análisis, la Comisión "considerará la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso".

66. En cuanto a la petición a estudio, la Comisión ha establecido que resulta aplicable la excepción al agotamiento de los recursos internos del artículo 46(2), y por lo tanto debe evaluar si la petición fue presentada dentro de un plazo razonable de acuerdo con las circunstancias específicas de la situación presentada a su consideración. A ese respecto la CIDH observa que la petición original fue presentada el 30 de diciembre de 1994. Los incidentes que se denuncian en la petición tuvieron su inicio el 2 de junio de 1994. Por consiguiente, la CIDH considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable.

3. Duplicidad de procedimientos y cosa juzgada

67. El artículo 46.1.b de la Convención dispone que la admisión de las peticiones está sujeta al requisito respecto a que la materia "no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional" y en el artículo 47.d de la Convención se estipula que la Comisión no admitirá la petición que sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión o por otro organismo internacional. En el presente caso, las partes no han esgrimido la existencia de ninguna de esas dos circunstancias de inadmisibilidad, ni ellas se deducen del expediente.

4. Caracterización de los hechos

68. A los fines de admisibilidad, la Comisión debe decidir si en la petición se exponen hechos que podrían caracterizar una violación, como estipula el artículo 47.b de la Convención Americana, si la petición es "manifiestamente infundada" o si es "evidente su total improcedencia", según el inciso (c) del mismo artículo. El estándar de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre los méritos de una denuncia. La Comisión debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia expone hechos que caracterizan una violación de un derecho garantizado por la Convención y no para establecer la existencia de una violación. Tal examen es un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo[7].

69. La Comisión considera que de ser probados los hechos expuestos sobre presuntas irregularidades en el juzgamiento, así como sobre las supuestas deficiencias en diversas disposiciones contenidas en la Ley 1008 bajo la cual Marcela Porco fue procesada y la presunta ausencia de garantías y protección judiciales, podrían caracterizar una posible violación de los derechos consagrados en los artículos 7, 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

70. Igualmente considera que el alegado maltrato y abuso sexual padecido durante el periodo en el cual estuvo bajo custodia del Estado y la falta de provisión de tratamiento adecuado de salud por parte del Estado, podría caracterizar una posible violación a los artículos 5.1 y 11.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con los artículos 1.1. y 2 de dicho instrumento.

V. CONCLUSIÓN

71. Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, la Comisión Interamericana concluye que el presente caso satisface los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y en consecuencia,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE:

1. Declarar admisible la presente petición respecto de la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 7, 8.1, 11.1 y 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1. y 2 de dicho instrumento.

4. Notificar el presente informe al Estado y al peticionario.

5. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 4 días del mes de marzo de 2008. (Firmado): Paolo G. Carozza, Presidente; Luz Patricia Mejía Guerrero, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Sir Clare K. Roberts, Florentín Meléndez y Víctor E. Abramovich, Miembros de la Comisión.

[1] A partir de junio de 2001, la Comisión Interamericana sólo ha recibido comunicaciones de CEJIL.
[2] Los peticionarios citan: la Ley 1008, Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de Bolivia de 1988 que regula el régimen de la coca, el desarrollo alternativo y la sustitución de los cultivos de coca, las sustancias controladas, la prohibición y control, los delitos que sanciona la ley y las penas, la aplicación y el juzgamiento, las diligencias de la policía judicial, debates y sentencias, y los organismos competentes en la materia.
[3] Los peticionarios hacen referencia al Informe Oficial realizado por la Lic. Katya E. Talavera Pinto, Psicóloga, Santa Cruz, 22 de diciembre de 1994, que se encuentra en el folio 175 del expediente.
[4] CIDH, Informe Nº 32/05, Petición 642/03, Admisibilidad, Luis Rolando Cuscul Pivaral y otras personas afectadas por el VIH/SIDA, Guatemala, 7 de marzo de 2005, párrs. 33-35; Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Excepciones Preliminares, supra nota 3, párr. 53; Caso Durand y Ugarte. Excepciones Preliminares. Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C No. 50, párr. 33; y Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40, párr. 31.
[5] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 64.
[6] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 66.
[7] Ver CIDH, Informe Nº 128/01, Caso Nº 12.367, Herrera y Vargas ("La Nación"), Costa Rica, 3 de diciembre de 2001, párrafo 50; Informe N° 4/04, Petición 12.324, Rubén Luis Godoy, Argentina, 24 de febrero de 2004, párrafo 43 e Informe Nº 29/07, Petición 712-03, Elena Tellez Blanco, Costa Rica, 26 de abril de 2007, párrafo 58.

**INFORME Nº 42/08. ADMISIBILIDAD. PETICIÓN 1271-04. KAREN ATALA E HIJAS. CHILE[1]. 23 DE JULIO DE 2008.**

I. RESUMEN

1. El 24 de noviembre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la "Comisión Interamericana" o la "CIDH") recibió una denuncia en la que se alega la responsabilidad internacional del Estado chileno por violaciones cometidas mediante una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le revoca a la Sra. Karen Atala la tuición de sus tres hijas (5, 6 y 10 años de edad) fundándose exclusivamente en prejuicios discriminatorios basados en su orientación sexual. La petición fue presentada por la Sra. Karen Atala, abogada y jueza chilena, y los abogados Verónica Undurraga Valdés, Claudio Moraga Klenner, Felipe González Morales y Domingo Lovera Parmo, todos representantes de la Asociación Gremial, Libertades Públicas, la Clínica de Acciones de Interés Público de la Universidad Diego Portales y la Fundación Ideas ("los peticionarios")[2].

2. Los peticionarios sostienen que los hechos configuran la violación de los siguientes derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la "Convención Americana") en perjuicio de la Sra. Karen Atala y sus tres hijas: el derecho a la integridad personal (artículo 5.1); el derecho a las debidas garantías judiciales (artículo 8); la protección a la honra y la dignidad (artículo 11.1); la protección de la vida privada (artículo 11.2); la protección a la familia (artículos 17.1 y 17.4); los derechos del niño (artículo 19); la igualdad ante la ley (artículo 24); y el derecho a la protección judicial (artículo 25), conjuntamente con la violación de las obligaciones de respetar los derechos y adoptar medidas consagradas en los artículos 1(1) y 2 previstos en la Convención Americana; y los artículos 2, 5, 9 (incisos 2 y 3), 12 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (en adelante "Convención sobre los Derechos del Niño"). Los peticionarios aducen que todos los recursos internos han sido agotados mediante la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en donde alegadamente se le retiró a la Sra. Atala de forma discriminatoria, arbitraria y definitiva la custodia de sus tres hijas menores por su orientación sexual.

3. El Estado, por su parte, solicita que se declare inadmisible la petición, argumentando que el fallo se basó en el interés superior de las niñas y "según los elementos de convicción allegados al juicio, por el comportamiento de la madre que optó por iniciar una convivencia con una pareja del mismo sexo con quien pretendía criar a sus hijas, lo que se estimó inconveniente para la formación y riesgoso para el desarrollo de las menores en el actual contexto de la sociedad chilena"[3]. Asimismo, el Estado reitera que los recursos internos no han sido plenamente agotados porque la Sra. Atala puede interponer una nueva demanda de tuición de sus hijas bajo el derecho chileno.

4. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que la

petición es admisible, a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 8(1), 11(2), 17(1), 24 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento internacional, en perjuicio de la Sra. Atala y sus hijas; y la presunta violación de los derechos del niño protegidos por los artículos 19 y 17.4 de la Convención, en conexión con el artículo 1(1) de dicho instrumento, en relación a las hijas de la Sra. Karen Atala. La Comisión decide además, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

## II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. El 24 de noviembre de 2004, la Comisión recibió una denuncia presentada por la Sra. Karen Atala, representada por abogados de las Libertades Públicas, la Asociación Gremial, la Clínica de Acciones de Interés Público de la Universidad Diego Portales y la Fundación Ideas[4], de la cual acusó recibo el 6 de diciembre de 2004. El 24 de enero de 2005 la peticionaria envió una comunicación a la Comisión designando como su representante ante esta instancia a la abogada Macarena Sáez. El 23 de marzo de 2005, la Comisión trasladó la denuncia al Estado para que éste presentara su contestación dentro del plazo de dos meses. El 15 de junio de 2005, el Estado presentó sus observaciones a la petición, las cuales fueron trasladadas a los peticionarios el 22 de junio de 2005.

6. El 4 de agosto de 2005, la Comisión envió una comunicación a las partes indicando su decisión de aplicar el artículo 37(3) de su Reglamento, para agilizar el trámite de la petición teniendo en cuenta las edades de las tres hijas menores de la Sra. Karen Atala. En dicha comunicación, la Comisión solicitó a los peticionarios, de acuerdo a lo establecido por el artículo 38(1) de su Reglamento, que presentaran observaciones adicionales de fondo en el plazo de un mes. Los peticionarios respondieron ese mismo día confirmando que no tenían observaciones adicionales que agregar al fondo del asunto. El 5 de agosto de 2005, la Comisión trasladó las observaciones de los peticionarios al Estado y le solicitó presentar observaciones adicionales sobre el fondo del asunto en un periodo de dos meses. El 11 de octubre de 2005, el Estado confirmó que tampoco tenía observaciones adicionales sobre el fondo del asunto.

7. El 19 de septiembre de 2005, la Comisión remitió comunicaciones a ambas partes poniéndose a su disposición, en base al artículo 41(1) de su Reglamento, para alcanzar una solución amistosa y solicitando su respuesta en un periodo de 15 días sobre su interés de iniciar el procedimiento previsto en el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana. El 4 de octubre de 2005, el Estado respondió a la Comisión que "se reserva el derecho que le confiere el artículo 41 del Reglamento de la Comisión, para manifestarse al respecto, en cualquier estado de tramitación de la presente denuncia" y dicha comunicación fue remitida a los peticionarios el 12 de octubre de 2005.

8. Con fecha de 7 de marzo de 2006, se realizó en la sede de la CIDH en Washington D.C.

una audiencia sobre el caso en el contexto del 124º periodo de sesiones entre los peticionarios y el Estado de Chile. Producto de la audiencia, el Estado de Chile manifestó a los peticionarios su intención de iniciar un proceso de negociación para lograr una eventual solución amistosa del caso. Los peticionarios informaron a la CIDH el 31 de marzo de 2006 que durante una reunión de trabajo se discutieron los elementos generales que permitirían a ambas partes las bases para un acuerdo de solución amistosa y solicitaron a la CIDH el nombramiento de un representante para facilitar el proceso. Dicha carta fue trasladada al Estado el 11 de abril de 2006, informándole que la CIDH ha decidido ponerse a disposición de las partes con miras a alcanzar una solución amistosa del asunto. Los peticionarios, mediante comunicación dirigida a la CIDH de 9 de agosto de 2006, pusieron en su conocimiento los avances en el diálogo entre el Estado de Chile y los peticionarios con miras a obtener una solución amistosa favorable a ambas partes. En la comunicación, los peticionarios también reiteraron la solicitud de intervención activa de la CIDH en el desarrollo de una solución amistosa.

9. El 11 de agosto de 2006, la CIDH trasladó dicha comunicación al Estado, poniéndose a disposición de las partes, y otorgándole al Estado un plazo de diez días para que manifestara su interés en proceder con esta alternativa. Mediante comunicación de fecha 22 de agosto de 2006 el Estado chileno respondió y dicha comunicación fue transmitida por la CIDH a los peticionarios el 6 de septiembre de 2006. Las partes participaron en tres reuniones de trabajo convocadas por la CIDH en el marco de sus 126˚ (25 de octubre de 2006), 128˚ (5 de marzo de 2007) y 129˚ (19 de julio de 2007) periodos de sesiones para discutir posibles puntos de acuerdo para una eventual solución amistosa. El 11 de octubre de 2006, el 25 de octubre de 2006 y el 30 de enero de 2007, los peticionarios informaron a la CIDH sobre avances en el proceso de discusión con el Estado.

10. El 19 de julio de 2007, los peticionarios enviaron observaciones adicionales a la CIDH. El 11 de octubre de 2007, los peticionarios enviaron una comunicación a la CIDH confirmando la conclusión del proceso de negociación con miras a acordar una solución amistosa y solicitando que la CIDH avance con la tramitación de la petición y la aprobación del informe de admisibilidad. Ambas comunicaciones fueron trasladadas al Estado el 15 de noviembre de 2007 solicitando su respuesta en el plazo de un mes. El Estado remitió su respuesta el 19 de diciembre de 2007, la cual fue trasmitida a los peticionarios el 21 de diciembre de 2007, solicitando su respuesta dentro de un plazo de un mes.

11. El 10 de enero de 2008, la Comisión remitió una comunicación a ambas partes informando que dada la conclusión del trámite de solución amistosa, ha decidido proceder con la etapa de admisibilidad. Conforme al artículo 30.5 del Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Chile el presentar observaciones adicionales relacionadas a la admisibilidad del caso en un plazo de un mes. El Estado solicitó el 4 de febrero de 2008 una prórroga de 30 días para responder y el mismo día la Comisión le concedió una prórroga de 15 días. El 7 de febrero de 2008 los peticionarios presentaron observaciones adicionales, las cuales fueron remitidas al Estado el 20 de febrero de 2008 para su conocimiento. El 31 de marzo y el 16 de abril de 2008 el Estado presentó observaciones

adicionales a la Comisión, las cuales fueron trasladadas a los peticionarios el 18 de abril de 2008.

12. Durante el trámite del caso, se han recibido seis memoriales de Amicus Curiae, en apoyo a los alegatos de los peticionarios. El 27 de septiembre de 2005, la Asociación por los Derechos Civiles presentó un memorial de Amicus Curiae, el cual fue trasmitido a ambas partes el 12 de octubre de 2005. El 21 de octubre de 2005, la Comisión recibió un memorial de Amicus Curiae de la Red Iberoamericana de Jueces, el cual fue trasmitido a las partes el 10 de marzo de 2006. También la Comisión recibió un memorial del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)[5] el 19 de enero de 2006, el cual fue trasmitido a las partes el 24 de febrero de 2006. El 1 de marzo de 2006, la Comisión recibió un memorial de Amicus Curiae presentado por la Corporación Opción, el cual fue trasmitido a ambas partes el 20 de marzo de 2006. La Comisión recibió un quinto memorial de Amicus Curiae el 26 de octubre de 2006, presentado por la Clínica de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale en Estados Unidos, el cual fue trasladado a las partes el 9 de noviembre de 2006. Por último, la Comisión recibió un sexto memorial de Amicus Curiae el 28 de abril de 2008 presentado por LGTB Legal Perú, el cual fue trasladado a las partes el 15 de mayo de 2008.

## III. POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Posición de los peticionarios

13. Los peticionarios aducen que varios derechos de la Sra. Karen Atala y sus tres hijas fueron conculcados arbitraria y abusivamente cuando la Corte Suprema de Justicia de Chile revocó a la Sra. Atala la custodia de sus tres hijas, fundándose exclusivamente en prejuicios discriminatorios por su orientación sexual. Sostienen que la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia aplicó discriminatoriamente las normas sustantivas que regulan la tuición en Chile, las cuales se basan en el interés superior de los niños, al hacer una distinción arbitraria e injustificada entre la habilidad de padres heterosexuales y homosexuales de cuidar a sus hijos adecuadamente. Igualmente los peticionarios sostienen violaciones relacionadas al debido proceso porque mediante un recurso de queja, el cual en su naturaleza es disciplinario, los jueces de la Corte Suprema tomaron una decisión definitiva sobre el fondo del caso sin escuchar adecuadamente a las partes y sin nuevos peritajes que le permitieran tener bases sólidas para reconsiderar la decisión de custodia de dos tribunales inferiores.

14. En 1993, la Sra. Karen Atala, abogada y jueza chilena, contrajo matrimonio en Santiago de Chile, y de dicha unión matrimonial nacieron sus tres hijas, M. (10 años de edad), V. (6 años de edad) y R. (5 años de edad)[6]. En marzo de 2002, la pareja decidió separarse definitivamente y de mutuo acuerdo resolvió que la madre mantendría la tuición de las menores con un régimen de visita semanal a la casa del padre. Después de la separación, la Sra. Atala continuó con ayuda siquiátrica y sicológica para superar los dolores del fracaso del matrimonio y para asumir su "calidad de lesbiana", con el fin de

disponer de las mejores herramientas para relacionarse con sus hijas en esta nueva realidad.

15. En junio de 2002, la Sra. Atala afirma haber iniciado una relación de pareja con una persona de su mismo sexo y en noviembre de 2002, la pareja de la Sra. Atala se trasladó a vivir con ésta y sus hijas. La Sra. Atala aduce que en el proceso de adaptación de las niñas a la nueva situación, su pareja y ella asumieron todo el cuidado y delicadeza necesarios, y siguieron las orientaciones aportadas por una psiquiatra y psicóloga que atendía tanto a la madre como a las niñas. La relación de su pareja con las niñas fue alegadamente muy positiva desde el principio.

16. El 30 de enero de 2003, el padre de las menores interpuso una demanda de tuición ante el Juzgado de Menores de Villarrica aduciendo que el descuido y desamparo de la madre a través de su opción sexual distinta alejaba y afectaba a las menores de su normal y verdadero desarrollo, y destacaba el riesgo de las niñas de contraer enfermedades de transmisión sexual como el herpes y el SIDA. Debido al juicio de tuición, se publicaron una serie de artículos sobre el caso en diarios de circulación nacional y sensacionalistas en Chile como La Cuarta y Las Últimas Noticias[7].

17. El 2 de mayo de 2003, el Juez Titular de Menores de Villarrica concedió, a solicitud del padre, la tuición provisional de las menores al padre y reguló las visitas a la madre, a pesar de que el juez reconoció expresamente que no existían elementos que permitieran presumir causales de inhabilidad legal de la madre que ameritaran el cambio de la tuición existente. Más adelante, le correspondió dictar la sentencia definitiva a la Jueza Subrogante del Juzgado de Letras de Villarrica. El 29 de octubre de 2003, dicha Jueza rechazó la demanda de tuición al encontrar que:

la orientación sexual de la madre no constituye un impedimento para desarrollar una maternidad responsable…… la demandada no presenta ninguna contraindicación desde el punto de vista psicológico para el ejercicio del rol materno …..tampoco se han acreditado la existencia de hechos concretos que perjudiquen el bienestar de las menores derivados de la presencia de la pareja de la madre en el hogar ……analizada la prueba rendida no se encuentran antecedentes para estimar la existencia de malos ejemplos o peligros para la moralidad de las menores …..se concluye que las menores no han sido objeto de ninguna discriminación a la fecha y lo que los testigos y parientes de la parte demandante manifiestan es un temor a una posible discriminación futura. Con respecto a este punto es conveniente señalar que este tribunal debe fundar su resolución en hechos ciertos y probados en la causa y no en meras suposiciones o temores…. [8].

18. En consecuencia, el Tribunal ordenó la entrega de las niñas a la madre el 18 de diciembre de 2003. Sin embargo, en el ínterin, el 11 de noviembre de 2003, el padre de las menores interpuso un recurso de apelación en contra de la sentencia y una solicitud provisional de no innovar, argumentando que el cumplimiento de la sentencia implicaría un cambio radical y violento del status quo actual de las menores. El 24 de noviembre de 2003 la Corte de Apelaciones concedió la orden de no innovar. El 30 de marzo de 2004, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó por unanimidad la sentencia apelada,

compartiendo las consideraciones de la jueza de primera instancia.

19. El 5 de abril de 2004, el padre de las menores presentó ante la Corte Suprema un recurso de queja en contra de los Ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco. El recurrente argumentó que a través de la sentencia de apelación los jueces recurridos habían cometido una falta y un abuso grave y notorio. El padre de las hijas específicamente alegó que la decisión adoptada por la madre de hacer pública su orientación sexual provocaba daños en el desarrollo integral y psíquico y en el ambiente social de las niñas, y por tanto, solicitó que se mantuviera provisionalmente a las niñas bajo su cuidado. Dicha solicitud fue acogida por la Corte al dictar una orden de no innovar el 7 de abril de 2004.

20. El 31 de mayo de 2004, la Cuarta Sala de la Corte Suprema, en un fallo dividido de tres votos contra dos, acogió el recurso de queja, concediendo la tuición definitiva al padre. Los peticionarios aducen que la sentencia de la Corte Suprema establece que la Sra. Karen Atala antepuso sus intereses a los de sus hijas al tomar la decisión de manifestar su orientación sexual e iniciar una convivencia con una pareja del mismo sexo, y consideró en el fallo testimonios que indicaban que las niñas podían desarrollar confusión sobre sus roles sexuales y ser discriminadas socialmente en el futuro. Los peticionarios señalan que la sentencia de la Corte aduce:

Que en el juicio de tuición de las menores López Atala se hizo valer la opinión de diferentes psicólogos y asistentes sociales acerca de que la condición homosexual de la madre no vulneraría los derechos de sus hijas, ni la privaría de ejercer sus derechos de madre, pues se trata de una persona normal desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. En cambio, se ha prescindido de la prueba testimonial, producida tanto en el expediente de tuición definitiva como del cuaderno de tuición provisoria, que se han tenido a la vista, respecto al deterioro experimentado por el entorno social, familiar y educacional en que se desenvuelve la existencia de las menores, desde que la madre empezó a convivir en el hogar con su pareja homosexual y a que las niñas podrían ser objeto de discriminación social derivada de este hecho, pues las visitas de sus amigas al hogar común han disminuido y casi han cesado de un año a otro. Por su parte, el testimonio de las personas cercanas a las menores, como son las empleadas de la casa, hacen referencia a juegos y actitudes de las niñas demostrativas de confusión ante la sexualidad materna que no han podido menos que percibir en la convivencia en el hogar con su nueva pareja[9].

Que, aparte de los efectos que esa convivencia puede causar en el bienestar y desarrollo psíquico y emocional de las hijas, atendida sus edades, la eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino, configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores respecto de la cual deben ser protegidas[10].

21. La Corte consideró que las niñas se encontraban en una "situación de riesgo" que las ubicaba en un "estado de vulnerabilidad en su medio social, pues es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativamente del que tienen sus compañeros de colegios y relaciones de la vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de

aislamiento y discriminación que igualmente afectará a su desarrollo personal"[11]. Aduce que los dos jueces de la minoría de la Sala de la Corte Suprema establecieron en contraste que: "los dictámenes que obran en los autos agregados, tanto los sicólogos como las asistentes sociales, infieren que la homosexualidad de la madre no vulnera los derechos de las niñas"[12].

22. En relación al debido proceso, los peticionarios alegan que la Corte Suprema, utilizando el recurso de queja, un recurso exclusivamente disciplinario destinado a corregir las faltas o abusos graves cometidos en el dictamen de una resolución judicial, lo aplicó erróneamente para resolver cuestiones de hecho y de derecho planteadas en el juicio. Por tanto, terminó abriendo una tercera instancia que no existe en el sistema procesal chileno. Los peticionarios asimismo resaltan que el recurso de queja comporta sanciones administrativas para los jueces, lo cual afecta su independencia interna.

23. Sostienen asimismo que durante el proceso de tuición, el 17 de marzo de 2003, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco designó al Ministro Lenin Lillo, a fin de que efectuara una visita extraordinaria[13] en el tribunal penal de Villarrica en el que la Sra. Atala servía como jueza, para investigar discretamente los hechos que habían sido puestos en conocimiento por la opinión pública sobre su vida privada. La peticionaria alega que el informe dictado por el Ministro y aceptado por la Corte de Apelaciones de Temuco, invadió sus derechos a la intimidad y privacidad porque el mismo establece la incompatibilidad entre la imagen de la profesión legal y la orientación sexual de la víctima[14]. La Corte de Temuco resolvió no aplicarle a la Sra. Atala sanciones disciplinarias, no obstante que el Ministro visitador las había recomendado.

24. Los peticionarios alegan que en la orden de no innovar concedida por la Corte de Apelaciones de Temuco el 24 de noviembre de 2003 participaron dos Ministros que se encontraban inhabilitados para fallar sobre ella y que no eran imparciales. Uno de los jueces era el Ministro Lenin Lillo, el que había participado en la investigación ordenada por la Corte de Apelaciones de Temuco sobre la vida privada de la Sra. Atala y el otro juez, el Ministro Loyola López había exhortado previamente a la jueza a renunciar a sus hijas y se había manifestado en desacuerdo con las decisiones personales y familiares de la Sra. Atala. La Sra. Atala presentó una queja disciplinaria contra estos dos Ministros, la cual fue fallada por la Corte Suprema de Justicia el 2 de julio de 2004, declarando por mayoría que no existió falta o abuso de los Ministros.

25. La peticionaria alega que el régimen de tuición de los niños de padres separados es regulado en Chile por los artículos 225, 226 y 227 del Código Civil[15]. El artículo 225 por su parte estipula que: "Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos…..En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres…". Dicho artículo fue alegadamente objeto de una extensa revisión parlamentaria para proteger el interés superior del niño y destacar que el cuidado personal de los hijos corresponde a la madre, limitando las causales por las que la madre puede ser privada de la tuición[16].

26. Según los peticionarios, el fallo de la Corte Suprema se destaca por haberse enfocado exclusivamente en la orientación sexual de la señora Karen Atala, y no en otros fundamentos de inhabilidad legal para revocar la tuición de sus hijas, lo cual contraviene el principio de igualdad ante la ley, al ser una aplicación discriminatoria de las normas sustantivas de la tuición. La peticionaria alega que la homosexualidad no puede constituir una causa calificada para declarar su inhabilidad como madre, a menos que pudiera probarse concretamente que provocara daños a sus hijas, lo que la Corte no hizo. Según los peticionarios, la Corte Suprema reduce al interés superior de las niñas, a vivir en una familia tradicional heterosexual y "estructurada normalmente"[17].

27. Los peticionarios igualmente sostienen que estos argumentos de la Corte Suprema chilena son parecidos a los argumentos utilizados por la Corte de Apelaciones de Lisboa, que fuera impugnada ante la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso de Salgueiro a Silva Mouta v. Portugal[18]. Indican al respecto que la Corte Europea falló en contra del Estado por haber sido la homosexualidad del denunciante un factor decisivo en la decisión final de revocación de custodia, no encontró una proporcionalidad entre los medios empleados y los fines perseguidos. Por consiguiente, estableció violaciones del artículo 8 (respeto a la vida privada y familiar) y del artículo 14 (no discriminación en razón de sexo y otro status).

28. Adicionalmente, los peticionarios alegan que el Estado de Chile interfirió arbitraria y abusivamente en su vida familiar y privada porque existían medidas menos invasivas, como un régimen amplio de comunicación con el padre, que no fueron consideradas por la Corte Suprema, y en su lugar se optó por la medida más restrictiva, la total separación de las niñas de su madre. Aducen que el fallo de la Corte Suprema interfiere en su vida privada porque obliga a la Sra. Atala, innecesaria y arbitrariamente, a escoger entre el ejercicio de su orientación sexual y el mantener la tuición de sus hijas.

29. Igualmente los peticionarios sostienen que la decisión de la Corte vulnera la integridad psíquica y moral de la Sra. Atala, ya que partiendo de una concepción abstracta y estereotipada de la homosexualidad, la Corte Suprema margina a las personas homosexuales de uno de los aspectos más significativos de la experiencia humana: criar a sus propios hijos. El estereotipo respecto de la homosexualidad, el cual es alegadamente perpetuado por la Corte Suprema, consiste en creer que las personas homosexuales están en contra de los valores familiares, rechazan las formas de vida familiar tradicional y viven egoísticamente centrados en la relación de pareja, sin ser capaces de desarrollar otros vínculos afectivos.

30. Los peticionarios alegan que el fallo de la Corte Suprema, en lugar de proteger el interés superior de las niñas, no tomó debida consideración del deseo expreso de las niñas de permanecer con su madre, en función de su edad y madurez. En su lugar, el fallo promovió la estigmatización y humillación de las niñas en la prensa. Las niñas catalogan la separación como "traumática, abrupta e inesperada ……toda vez que ellas habían manifestado su deseo de quedarse con la madre" y el hecho que sintieron "rabia por no

haber sido escuchadas en el proceso de litigio, toda vez que se veían burladas dada la decisión de los jueces"[19].

31. Los peticionarios aducen que durante el tiempo transcurrido desde la sentencia definitiva que separó a la Sra. Karen Atala de sus hijas, las denunciantes han visto su relación familiar absolutamente deteriorada. La Sra. Atala no puede cumplir con el régimen de visitas quincenal porque su trabajo le requiere trabajar los fines de semana y el padre de las hijas impide que estas desarrollen una relación privada con su madre. Su padre toma la gran mayoría de las decisiones sin consultarle a la madre y la Sra. Atala no es informada del desarrollo de sus hijas en el colegio o de actividades que requieren la presencia de sus padres, como graduaciones y procedimientos médicos.

32. Sobre el agotamiento de recursos internos, la peticionaria alega que mediante la sentencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema se agotaron todos los recursos judiciales internos que podrían ejercerse en el juicio de tuición de sus hijas. La Sra. Atala asevera que si demanda nuevamente la tuición, sabe que ningún juez va a fallar a su favor dada la inexistencia de independencia judicial interna frente a este tipo de casos ante la Corte Suprema de Justicia[20].

B. Posición del Estado

33. El Estado solicita que la denuncia sea declarada inadmisible debido a que los hechos en ella descritos no caracterizan violaciones a los derechos protegidos por la Convención y los peticionarios recurren al sistema interamericano como si fuera "una suerte de cuarta instancia"[21], con competencia para revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales sin que éstos hayan actuado fuera de la esfera de su competencia y no hayan aplicado las debidas garantías judiciales. El Estado afirma que dado el carácter subsidiario de los órganos del sistema interamericano, tanto la Corte como la Comisión, han adoptado jurisprudencia en donde indican que dichos órganos sólo podrán entrar a revisar las decisiones judiciales internas cuando la petición se fundamente en una sentencia que haya sido dictada al margen del debido proceso o que viole aparentemente cualquier otro derecho garantizado en la Convención, situación que no ha ocurrido en el presente caso.

34. Según el Estado, la "carencia de asidero de las variadas denuncias planteadas en el extenso libelo de la reclamante debería quedar de manifiesto con la sola lectura de la sentencia en la que se habrían perpetrado los atropellos descritos"[22]. Por lo tanto, aduce el Estado, se puede entender que quien pierde un litigio no quede conforme con el fallo que le es adverso, pero "es sorprendente que si [esta persona] posee la calidad de Juez de la República, investida de potestad de conocer y juzgar conflictos ajenos, descalifique en los términos consignados en la aludida denuncia, una sentencia del más alto Tribunal de esa República y recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impugnar dicha resolución"[23].

35. La sentencia de la Corte Suprema, según el Estado, no viola los derechos de las niñas. Por el contrario, alega el Estado que el fallo se basó en "el imperativo de proteger el interés

superior de sus hijas, amagado, según los elementos de convicción allegados al juicio, por el comportamiento de la madre que optó por iniciar una convivencia con una pareja de su mismo sexo con quien pretendía criar a sus hijas, lo que se estimó inconveniente para la formación y riesgoso para el desarrollo de las menores en el actual contexto de la sociedad chilena"[24]. Igualmente el Estado asevera que en "materia de cuidado personal no es el derecho de los padres el que se ventila, sino que el del niño o niños afectados." Específicamente aduce que "en efecto, es así como en este tipo de materias tiene preeminencia el interés superior del niño, siendo este el principio guía del derecho nacional e internacional, aspecto que no considera la denunciante en su petición y que determinó la radicación de la crianza y cuidado de las tres niñas en su padre, y no en el simple hecho de su opción sexual, en la cual ella pone el acento como marco de una supuesta discriminación y trato desigual"[25].

36. Sobre los derechos de la madre, el Estado expresa que no existió una denegación de justicia para ella ya que "si bien aparentemente podría pensarse que la decisión tomada afecta los derechos de la madre, ello no es real, ya que lo que existe es la defensa de un bien o derecho superior en protección. En estos casos, el juez o jueza debe optar por preferir un derecho en primacía del otro, resultando preeminente los derechos de los niños por sobre el derecho de su madre" [26]. El Estado aduce que la decisión de la Corte Suprema se basó en una variedad de elementos incluyendo las circunstancias de las niñas, el mérito de la prueba considerada en el proceso, el deterioro social, familiar y educacional que experimentaron, y la discriminación que sufrieron por parte de sus propias amistades[27].

37. El Estado asimismo aduce que no se configura la alegada violación del derecho a vivir libre de injerencias arbitrarias y abusivas en la vida privada y familiar de la denunciante. Según el Estado, el fallo alegadamente violatorio de los derechos humanos tomó lugar en el contexto de un juicio de tuición iniciado por el ex cónyuge de la Sra. Atala, y por tanto, los tribunales chilenos no podían "sino conocer y resolver, en virtud del principio de inexcusabilidad que sancionan la Carta Política y el Código Orgánico de los Tribunales"[28]. Por tanto, cuando los tribunales de justicia deben intervenir, a solicitud de parte legitimada, para resolver un conflicto familiar generado por la incapacidad de los individuos de resolverlo por sí solos, no incurren en injerencia indebida ni abuso alguno, sino, precisamente, ejecutan su función propia de solucionar controversias en beneficio de la paz social, en el ejercicio de una potestad irrenunciable del Estado.

38. Igualmente, el Estado desestima los alegatos sobre la falta de respeto a la integridad psíquica y mental y a la honra y dignidad de la señora Sra. Atala al tener en consideración en el fallo su condición de homosexual y su convivencia con una persona del mismo sexo. Según el Estado, dichos factores fueron fundamentos tanto de la demanda del ex cónyuge, como de las defensas de la Sra. Atala, y por tanto, necesariamente debían ser analizados y ponderados al fallarse en el juicio.

39. El Estado también aduce que la entrega de la tuición de las niñas a su padre no fue producto de una discriminación proscrita por la Convención Americana. Según el Estado, el fallo no fue motivado por la homosexualidad de la Sra. Atala, sino por los efectos que su

convivencia con otra persona de su mismo sexo pudieran causar en el bienestar y el desarrollo psíquico y emocional de sus hijas. Dichas consideraciones fueron determinantes en el fallo cuestionado y no la decisión de la Sra. Atala de explicitar su condición de homosexual "cuya legitimidad en el plano del ejercicio de sus derechos personalísimos fue expresamente reconocida en la misma sentencia"[29]. El Estado por consiguiente aduce que fue la situación de las menores "que al menos, puede considerarse peculiar en el ámbito de la sociedad chilena presente, la que estimó causa calificada para la entrega de su tuición al padre, porque el interés superior de las menores lo hacía indispensable"[30].

40. En audiencia ante la CIDH, el Estado asimismo destaca que: "la sentencia de la Corte Suprema de Justicia se fija, al resolver, en el interés superior del niño. En uno de sus argumentos, la Corte Suprema señala que el contexto cultural de Chile es conservador. Por ejemplo, sólo hasta hace dos años se cuenta con la posibilidad de divorcio. Si a ello se suma la ventilación pública de la opción sexual de la madre, el Estado señala las dificultades que para las niñas generaba el caso"[31].

41. Con estos argumentos, el Estado concluye que dado que no se configura ninguna de las violaciones alegadas por los peticionarios, la Comisión debe declarar inadmisible la petición debido a que este órgano no tiene competencia para revisar una sentencia proferida por un tribunal nacional dentro de su esfera de competencias y con apego al debido proceso.

42. El Estado aduce que las niñas actualmente se encuentran en "óptimas condiciones afectivas y materiales" para desarrollar todas sus potencialidades y que se destacan en su rendimiento escolar[32]. El Estado asevera que durante los años trascurridos desde la decisión de la Corte Suprema, las niñas han contado con todas las condiciones y la estabilidad emocional para desarrollarse plenamente, "sobreponiéndose incluso al déficit atencional y otras dificultades que han debido enfrentar" [33]. Aduce que el padre de las niñas ha solicitado recientemente un aumento en la pensión alimenticia que recibe a favor de sus hijas por parte de la Sra. Atala dada la variación en las necesidades de las niñas y que las menores V. y R. padecen "déficit atencional, patología médica que obliga al Sr. López a mantener una periodicidad médica y farmacológica importante, lo que obviamente incide en el presupuesto familiar" [34]. El Estado asimismo informa que las reuniones de trabajo sobre políticas públicas y medidas contra la discriminación iniciadas por este caso, se han reanudado por parte de la Dirección de Derechos Humanos y en este contexto se han discutido interesantes antecedentes sobre diversos e importantes cambios que se están experimentado en las instituciones públicas, las cuales muestran una disposición a trabajar conjuntamente para superar visiones más tradicionales o prejuiciadas[35].

43. En cuanto al agotamiento de recursos internos, el Estado específicamente destaca que la "institución de la cosa juzgada formal"[36], que opera en los procesos de familia, permite la revisión de los fallos judiciales en la medida en que hayan variado las circunstancias fácticas que motivaron una determinada decisión. Si hasta la fecha la Sra. Atala no ha demandado nuevamente la tuición de sus hijas, se explica únicamente por circunstancias fácticas y no por existir un impedimento legal para ello[37]. El Estado resalta que la madre puede volver a demandar la tuición si las circunstancias psico-afectivas de las niñas han

cambiado, a partir de un informe psiquiátrico distinto[38]. Su posición es que los peticionarios todavía cuentan con recursos para revertir esta decisión en el ámbito interno.

## IV. ANÁLISIS SOBRE ADMISIBILIDAD

### A. Competencia ratione personae, ratione loci, ratione temporis y ratione materiae de la Comisión

44. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la Comisión. La petición señala como presuntas víctimas a la señora Karen Atala y a sus tres hijas, M., V. y R., respecto de quienes Chile se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Chile es un Estado parte en la Convención Americana desde el 21 de agosto de 1990, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

45. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de Chile, Estado parte de dicho tratado.

46. La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. La Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.

### B. Otros requisitos para la admisibilidad de la petición

#### 1. Agotamiento de los recursos internos

47. El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana establece que para que una petición pueda ser admitida, se requerirá "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". El artículo 46(2) de la Convención establece tres supuestos en los que no se aplica la regla del agotamiento de los recursos internos: a) que no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y c) que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

48. Cabe destacar que el requisito del agotamiento previo de los recursos internos se aplica sólo cuando son adecuados y efectivos para brindar una reparación de la violación alegada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado que los recursos internos, de acuerdo con los principios generalmente reconocidos del derecho internacional, deben ser

adecuados, en el sentido de que deben permitir la restauración del derecho violado, y efectivos, en el sentido de ser capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos[39]. Si bien en el sistema legal de todos los países existe una serie de recursos, la norma de su agotamiento no requiere invocar los que son inadecuados, ineficaces o no ofrecen posibilidades de éxito[40]. A los fines de la admisibilidad, la norma de análisis empleada para la evaluación prima facie de la adecuación y efectividad de los recursos del derecho interno no es tan rigurosa como la requerida para determinar si se ha cometido una violación de los derechos protegidos por la Convención[41].

49. En el presente caso, los peticionarios alegan que la resolución de la Corte Suprema chilena, con fecha 31 de mayo de 2004, la cual resolvió el recurso de queja y modificó las sentencias de primera y segunda instancia otorgando la custodia definitiva de las menores al padre, determinó el agotamiento de los recursos previstos en el derecho interno chileno.

50. El Estado, por su parte, alega que no todos los recursos internos han sido agotados ya que la "institución de la cosa juzgada formal"[42], que opera en los procesos de familia chilenos, permite la revisión de los fallos judiciales en la medida en que hayan variado las circunstancias fácticas que motivaron una determinada decisión. Por tanto, el Estado asevera que la Sra. Atala no tiene ningún impedimento legal para volver a demandar la tuición de sus hijas. En respuesta, los peticionarios sostienen que una demanda nueva de tuición no tiene posibilidades de éxito, dado el precedente establecido en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile relacionada a este caso, y la carencia de independencia judicial interna frente a casos en donde la madre es homosexual en la misma corte.

51. Cuando un Estado alega que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, tiene a su cargo señalar cuáles deben agotarse y demostrar su efectividad. En tal caso, pasa a los peticionarios la carga procesal de demostrar que dichos recursos fueron agotados, o que se configura alguna de las excepciones del artículo 46(2) de la Convención Americana.

52. En el asunto aquí analizado, el Estado chileno se limita a sostener que no se han agotado plenamente los recursos internos, porque la Sra. Atala no está impedida legalmente de volver a solicitar la tuición de sus hijas, en el caso que las circunstancias fácticas del caso hayan cambiado. Sin embargo, el Estado no presenta información específica que lleve a concluir que un nuevo juicio de tuición estará revestido de la idoneidad y efectividad requeridas por el derecho internacional de los derechos humanos para remediar las presuntas violaciones que la Sra. Atala alega. El Estado tampoco ha señalado cómo un nuevo juicio de tuición puede tener perspectivas razonables de éxito, dado el precedente ya establecido por la Corte Suprema de Justicia de Chile[43].

53. Igualmente la Comisión observa que la Sra. Atala impugna el proceso y la decisión emitida en el juicio de tuición, en el cual litigó por casi dos años. Alega que dentro de dicho proceso ella y sus hijas fueron víctimas de un número de violaciones de derechos humanos con consecuencias que persisten hasta la fecha. En este sentido, la Sra. Atala impugna ante la Comisión un proceso que pasó por todas sus etapas y un nuevo proceso no ofrecería la posibilidad de remediar las violaciones que ella alega.

54. La Comisión asimismo considera en su decisión que los hechos de este caso han sido objeto de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile, máxima instancia judicial y de apelaciones de dicho país, lo cual no ha sido controvertido por el Estado, y el Estado no ha indicado que la Sra. Atala invocó los recursos equivocados para sus reclamos a nivel interno.

55. Sobre la base de los factores señalados, la Comisión concluye que los peticionarios agotaron debidamente todos los recursos de los cuales disponían en el sistema legal de Chile, y por tanto, sus denuncias ante la Comisión no están impedidas de consideración por el requisito del agotamiento de los recursos previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana.

2. Plazo de presentación de la petición

56. El artículo 46(1)(b) de la Convención Americana establece que toda petición debe presentarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se haya notificado a los peticionarios de la sentencia definitiva que agota los recursos internos. La petición bajo estudio fue presentada el 24 de noviembre de 2004, dentro de los seis meses posteriores a la decisión de la Corte Suprema del 31 de mayo de 2004. Consecuentemente dicho requisito ha sido satisfecho.

3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

57. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 46(1)(c) de la Convención Americana.

4. Caracterización de los hechos alegados

58. En el presente caso, los peticionarios sostienen que varios derechos protegidos por la Convención Americana fueron violados mediante el fallo discriminatorio de la Corte Suprema de Justicia chilena en perjuicio de la Sra. Atala y sus hijas. Los peticionarios alegan específicamente violaciones a los derechos a las debidas garantías judiciales, a la integridad personal, la protección de la honra y la dignidad, la protección de la vida privada, la protección a la familia, la igualdad ante ley, y los derechos del niño. El Estado alega por su parte que la petición debe ser declarada inadmisible debido a que ésta no alega hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos.

59. El Estado considera, más específicamente, que la petición es inadmisible porque los peticionarios solicitan que la Comisión actúe como un tribunal de "cuarta instancia", para lo cual no es competente, ya que los peticionarios pretenden controvertir una decisión judicial dictada dentro del marco de las garantías mínimas del debido proceso. Con respecto a este alegato, la Comisión reitera lo establecido en su jurisprudencia afirmando

que no es competente para revisar las sentencias dictadas por tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y apliquen el debido proceso y las garantías judiciales[44]. La Comisión no puede actuar como un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales. No obstante, dentro de los límites de su mandato de garantizar la observancia de los derechos consagrados en la Convención Americana, la Comisión es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre el fondo cuando ésta se refiere a una sentencia judicial nacional dictada al margen del debido proceso o violatoria de cualquier otro derecho garantizado por la Convención[45].

60. De acuerdo a esta doctrina, la Comisión observa que al admitir esta petición no pretende suplantar la competencia de las autoridades judiciales domésticas para determinar asuntos de tuición y custodia, y examinar errores de hecho y de derecho que pudieron haber sido cometidos por los tribunales nacionales. La Comisión no se pronunciará sobre la cuestión de si los tribunales chilenos aplicaron adecuadamente el derecho procesal chileno ni sobre la apreciación probatoria, cuestión reservada en principio a los tribunales domésticos. La Comisión exclusivamente determinará en la etapa de fondo si la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile fue dictada al margen de las garantías del debido proceso y en violación de los derechos protegidos por la Convención Americana.

61. En esta etapa de admisibilidad, la Comisión considera que no corresponde determinar si se produjeron o no las violaciones alegadas. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver si los hechos expuestos tienden a caracterizar posibles violaciones a la Convención Americana, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana. El criterio de apreciación de estos extremos es diferente al requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión Interamericana debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado en la Convención Americana[46]. Este análisis tiene carácter sumario, y no implica un prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia. La distinción entre el estudio correspondiente a la declaración sobre la admisibilidad y el requerido para determinar una violación se refleja en el propio Reglamento de la CIDH, que establece de manera claramente diferenciada las etapas de admisibilidad y fondo[47].

62. Los alegatos de los peticionarios se refieren a hechos que, de ser comprobados, podrían caracterizar violaciones de varios derechos protegidos por la Convención Americana en sus artículos 8(1), 11(2), 17(1), 24 y 25, en conexión con los artículos 1(1) y 2, en perjuicio de la Sra. Karen Atala y sus hijas; y la presunta violación de los derechos del niño protegidos por los artículos 19 y 17(4), en conexión con el artículo 1(1), en relación a las hijas de la Sra. Atala.

63. La Comisión considera prima facie que los alegatos presentan cuestiones relacionadas al derecho a la igualdad protegido por el artículo 24, que corresponden a un análisis en la etapa de fondo. Los peticionarios alegan que la Corte Suprema de Justicia de Chile trató de manera diferenciada a la Sra. Atala y su ex cónyuge en el fallo de tuición de sus hijas, siendo la orientación sexual de la Sra. Atala el factor decisivo para otorgar la tuición

definitivamente al padre. Aducen que la distinción basada en la homosexualidad de la Sra. Atala careció de objetividad y razonabilidad en el juicio de tuición, y no cumplió con un fin legítimo, en contravención de los parámetros internacionales de derechos humanos[48]. Adicionalmente, sostienen que el fallo de la Corte tiene un impacto desproporcionado y limitante en el ejercicio de los derechos de los padres homosexuales, promoviendo que nunca puedan preservar la custodia de sus hijos, por concepciones estereotipadas de su habilidad para cuidarlos, y de crear un entorno saludable familiar para ellos.

64. La Comisión estima que los alegatos asimismo pueden configurar violaciones del derecho a la vida privada y familiar de las presuntas víctimas, protegidos por los artículos 11(2) y 17(1) de la Convención Americana, respectivamente. Los peticionarios sostienen que el Estado alegadamente interfirió arbitraria y abusivamente en la vida privada y familiar de la Sra. Karen Atala y sus hijas, al revocar la custodia exclusivamente en base a prejuicios discriminatorios basados en la orientación sexual de la Sra. Atala. Igualmente aducen que la medida de separación adoptada por la Corte Suprema no fue razonable ni proporcional porque existían medidas menos invasivas en la vida privada y familiar de las víctimas.

65. Por otra parte, la Comisión Interamericana analizará alegatos de los peticionarios referentes a los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre supuestas vulneraciones a las garantías del debido proceso durante el juicio de tuición. Los peticionarios aducen en especial que la Corte Suprema, a través de un recurso de queja exclusivamente disciplinario y destinado a corregir faltas o abusos cometidos por jueces en la tramitación de una resolución judicial, abrió una tercera instancia judicial inexistente en el sistema procesal chileno. Se alega que la Corte emitió injustificadamente una decisión sobre el fondo del asunto, e interfirió indebidamente en el principio de la independencia judicial.

66. Los alegatos igualmente pueden caracterizar violaciones a los derechos de las niñas protegidos por los artículos 19 y 17(4) de la Convención Americana dado que se sostiene que la Corte Suprema no tomó en cuenta el deseo de las niñas de permanecer con su madre, lo que sí hicieron tribunales inferiores. Asimismo, de conformidad con las normas de interpretación establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos[49], así como, los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la tendencia de integrar el sistema regional y el sistema universal[50], y respecto a la noción de corpus juris en materia de niñez[51], la Comisión decide que interpretará el alcance y el contenido de los derechos de la Convención Americana que se alega habrían sido violados en perjuicio de M., V. y R., a la luz de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño[52].

67. En respuesta a los alegatos de los peticionarios, el Estado sostiene que los hechos alegados no caracterizan violaciones a la Convención Americana y que la decisión de la Corte Suprema de Justicia se basó en el interés superior de las niñas. La CIDH analizará los alegatos del Estado y los peticionarios en la etapa de fondo y en base a ello determinará si los hechos alegados configuran violaciones a la Convención Americana.

68. En opinión de la Comisión, los alegatos en la petición no aportan suficientes fundamentos tendientes a establecer la violación de los derechos protegidos por el artículo 11(1) sobre la protección de la honra y la dignidad y el artículo 5(1) sobre la integridad personal.

V. CONCLUSIONES

69. La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en el presente informe, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1. Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos reconocidos por los artículos 8(1), 11(2), 17(1), 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1(1) y 2 de dicho instrumento, en perjuicio de la Sra. Karen Atala y sus hijas; y la presunta violación de los derechos del niño protegidos por los artículos 19 y 17(4), en conexión con el artículo 1(1), en relación a las hijas de la Sra. Karen Atala.

2. Declarar inadmisible la presente petición en cuanto se refiere a la presunta violación de los artículos 5(1) y 11(1) de la Convención Americana.

3. Notificar esta decisión a las partes.

4. Continuar con el análisis de fondo del asunto; y

5. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 23 días del mes de julio de 2008. (Firmado): Paolo G. Carozza, Presidente; Luz Patricia Mejía, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Clare K. Roberts, Florentín Meléndez y Víctor Abramovich Miembros de la Comisión.

[1] El Miembro de la Comisión, Dr. Felipe González, no participó en el análisis y la votación de este caso, de conformidad con el artículo 17(2) del Reglamento de la Comisión.
[2] El 24 de enero de 2005 la Sra. Karen Atala envió una comunicación a la Comisión designando como su representante ante esta instancia a la abogada Macarena Sáez.
[3] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 15 de junio de 2005.
[4] La peticionaria especifica que la Fundación Ideas es representada por Francisco Estévez

Valencia y nombra como sus representantes ante la CIDH a los abogados Verónica Undurraga Valdez, Claudia Moraga Klenner, Felipe González Morales y Domingo Lovera Parmo.
[5] El memorial de Amicus Curiae de CLADEM fue presentado con el patrocinio de las Dras. María Ysabel Cedano y Jeannette Llaja Villena.

[6] La Comisión mantiene en reserva los nombres de las tres hijas de Karen Atala porque se trata de menores de 18 años.
[7] Abogado Exige Tuición de sus Hijas porque Esposa Jueza sería Lesbiana, Periódico La Cuarta, 28 de febrero de 2003; Abogado Exige Tuición de Hijas porque su ex Mujer es Lesbiana, Diario Las Últimas Noticias, 1 de marzo de 2003. Estos artículos fueron presentados por los peticionarios en comunicación de fecha 24 de noviembre de 2004.
[8] Sentencia dictada por Viviana Cárdenas Beltrán, Jueza Subrogante, Juzgado de Letras de Villarrica, 29 de octubre de 2003, presentada por los peticionarios en comunicación de fecha 24 de noviembre de 2004.
[9] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, 31 de mayo de 2004, párr. 15, presentada por los peticionarios en comunicación de fecha 24 de noviembre de 2004.
[10] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, 31 de mayo de 2004, párr. 17, presentada por los peticionarios en comunicación de fecha 24 de noviembre de 2004.
[11] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, 31 de mayo de 2004, párr. 18, presentada por los peticionarios en comunicación de fecha 24 de noviembre de 2004.
[12] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, 31 de mayo de 2004, párr. 9, voto en contra de los Ministros José Benquis C. y Orlando Álvarez H., presentada por los peticionarios en comunicación de fecha 24 de noviembre de 2004.
[13] El Código Orgánico de Tribunales establece que radica en los Ministros de Cortes de Apelaciones la superintendencia directiva, correccional y económica de los tribunales bajo su jurisdicción, que se ejerce mediante visitas ordinarias y extraordinarias. Comunicación de los peticionarios de fecha 24 de noviembre de 2004.
[14] Informe preparado por el Ministro Lenin Lillo Hunzinker, Corte de Apelaciones de Temuco, 2 de abril de 2003.
[15] Estos artículos operan en relación con el artículo 242 del mismo Código y el artículo 42 de la Ley 16.618. Comunicación de los peticionarios de fecha 24 de noviembre de 2004.
[16] Igualmente la peticionaria asevera que la necesidad de que los hijos pequeños permanezcan con su madre ha sido reconocida por muchos países americanos en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y su artículo 16 estableciendo que: "todo niño tiene derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre…." . Comunicación de los peticionarios de fecha 24 de noviembre de 2004.
[17] La Corte Suprema aduce en su sentencia: "Que al no haberlo estimado así los jueces recurridos (…) y haber preterido el derecho preferente de las menores a vivir y desarrollarse en el seno de una familia estructurada normalmente y apreciada en el medio social, según el modelo tradicional que le es propio, han incurrido en falta o abuso grave, que debe ser corregido por la vía de acoger el presente recurso de queja." Sentencia de la Corte

Suprema de Justicia de Chile, 31 de mayo de 2004, párr. 20, presentada por los peticionarios en comunicación de fecha 24 de noviembre de 2004.
[18] Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, n°33290/96, de fecha 21 de diciembre de 1999. Comunicación de los peticionarios de fecha 24 de noviembre de 2004.
[19] CIDH, Audiencia, Caso 12.502, Karen Atala e Hijas, 124° Periodo de Sesiones, 7 de Marzo de 2006.
[20] CIDH, Audiencia, Caso 12.502, Karen Atala e Hijas, 124° Periodo de Sesiones, 7 de Marzo de 2006.
[21] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 15 de junio de 2005.
[22] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 15 de junio de 2005.
[23] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 15 de junio de 2005.
[24] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 15 de junio de 2005.
[25] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 31 de marzo de 2008.

[26] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 31 de marzo de 2008.

[27] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 31 de marzo de 2008.

[28] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 15 de junio de 2005.
[29] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 15 de junio de 2005.
[30] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 15 de junio de 2005.
[31] CIDH, Audiencia, Caso 12.502, Karen Atala e Hijas, 124° Periodo de Sesiones, 7 de marzo de 2006.
[32] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 16 de abril de 2008.
[33] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 16 de abril de 2008.
[34] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 16 de abril de 2008.
[35] Respuesta del Estado de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, 16 de abril de 2008.
[36] Notas del Estado recibidas por la CIDH el 19 de diciembre de 2007 y el 31 de marzo de 2008.
[37] Notas del Estado recibidas por la CIDH el 19 de diciembre de 2007 y el 31 de marzo de 2008.

[38] CIDH, Audiencia, Caso 12.502, Karen Atala e Hijas, 124° Periodo de Sesiones, 7 de marzo de 2006.
[39] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 64-66.
[40] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 64, 66 y 68.
[41] CIDH, Informe Nº 08/05, Petición 12.238, Miriam Larrea Pintado, Ecuador, 23 de febrero de 2005, párr. 31.
[42] Notas del Estado recibidas por la CIDH el 19 de diciembre de 2007 y el 31 de marzo de 2008.
[43] En su jurisprudencia, la Comisión ha compartido la opinión de la Corte Europea de Derechos Humanos de que el peticionario puede ser exceptuado de agotar los recursos internos respecto de una denuncia cuando surge con claridad de autos que ninguna acción tendría perspectivas razonables de éxito a la luz de la jurisprudencia de las máximas instancias judiciales del Estado. Véase, por ejemplo, CIDH, Petición 1490-05, Informe 52/07, Jessica González c. Estados Unidos (Admisibilidad), Informe Anual de la CIDH 2008, párr. 50; CIDH, Caso 11.193, Informe 51/00, Gary Graham c. Estados Unidos (Admisibilidad), Informe Anual de la CIDH 2000, párr. 60, donde se cita Corte Europea de Derechos Humanos, Casos De Wilde, Oomas y Versyp, 10 de junio de 1971, Publ. E.C.H.R. Ser. A, Vol.12, pág. 34, párrs. 37 y 62; Corte Europea de Derechos Humanos, Avan Oosterwijck c. Bélgica, Sentencia (Objeciones Preliminares), 6 de noviembre de 1980, Caso Nº 7654/76, párr. 37. Véase también CIDH, Caso 11.753, Informe 108/00, Ramón Martínez Villareal c. Estados Unidos (Admisibilidad), Informe Anual de la CIDH 2000, párr. 70.
[44] Ver CIDH, Informe No. 52/02, Caso 11.753, Fondo, Ramón Martínez Villareal, Estados Unidos, 10 de octubre de 2002, párr. 53; CIDH, Informe No. 39/96, Santiago Marzioni v. Argentina, Informe Anual de la CIDH 1996, párrs. 48 – 51.
[45] Ver CIDH, Informe No. 52/02, Caso 11.753, Fondo, Ramón Martínez Villareal, Estados Unidos, 10 de octubre de 2002, párr. 53; CIDH, Informe No. 39/96, Caso 11.673, Santiago Marzioni v. Argentina, Informe Anual de la CIDH 1996, párrs. 48 – 51.
[46] Ver CIDH, Informe No. 128/01, Caso 12.367, Herrera y Vargas ("La Nación"), Costa Rica, 3 de diciembre de 2001, párr. 50.
[47] Ver CIDH, Informe No. 31/03, Caso 12.195, Mario Alberto Jara Oñate y otros, Chile, 7 de marzo de 2003.
[48] Ver Corte Europea de Derechos Humanos, Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, Aplicación No. 33290/96, 21 de diciembre de 1999 (en donde la Corte decide que una diferencia de trato entre los padres dentro de un proceso de tuición en base a la orientación sexual de uno de ellos constituye una violación del artículo 8 (respeto a la vida privada y familiar) en relación con el artículo 14 (no discriminación en razón de sexo y género) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales); Corte Europea de Derechos Humanos, E.B. v. Francia, Aplicación No. 43546/02, 22 de enero de 2008 (en donde la Corte decide que una diferencia de trato en base a la orientación sexual en casos de adopción viola el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en relación con el artículo 8 de dicho instrumento).

[49] El artículo 29 (Normas de Interpretación) establece que: "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: (…) b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; (…)".
[50] Corte I.D.H., "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 41.
[51] Corte I.D.H., Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 194; Corte I.D.H., Caso "Instituto de Reeducación del Menor". Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 148; Corte I.D.H., Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 166; Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs 24, 37 y 53.
[52] Esta Convención fue adoptada el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 12 de septiembre de 1990.

**INFORME NO. 3/09. PETICIÓN 4408-02. ADMISIBILIDAD. V.R.P. Y V.P.C.[1]. NICARAGUA. 11 DE FEBRERO DE 2009.**

I. RESUMEN

1. El 28 de octubre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión", "la CIDH" o "la Comisión Interamericana") recibió una denuncia presentada por la señora V.P.C. (en adelante "la peticionaria" o "V.P.C."), madre de V.R.P. (en adelante "la presunta víctima" o "V.R.P."), en la que se alega la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua (en adelante "el Estado", "Estado de Nicaragua" o "el Estado nicaragüense") por las irregularidades y la ausencia de decisión definitiva en el marco del proceso penal iniciado el 20 de noviembre de 2001 por el presunto delito de violación sexual de la niña V.R.P[2], de 9 años de edad.

2. La peticionaria alega que los hechos denunciados configuran la violación de los artículos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XVIII, XXIV y XXX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante "la Declaración Americana"); de los artículos 1, 2, 5 (1 y 2), 7.1, 8.1, 11, 12 (1 y 2), 13.1, 17.1, 19, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención"); de los artículos 2.c, 3, 4 (b, c, d, e, f, g), 5, 6.a, 7 (a, b, e, f, h), 8 (b y f), 9 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante "Convención Belém do Pará") y de los artículos 1, 2 (1 y 2), 3 (1 y 2), 5, 6, 12.2, 14.3, 15, 16 (1 y 2), 17, 19 (1 y 2), 20.1, 24 (1 y 2) y 27 (1 y 2) de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (en adelante "Convención sobre los Derechos del Niño"), en perjuicio de V.R.P y su madre V.P.C. La peticionaria sostiene que existieron irregularidades en el proceso penal iniciado el 20 de noviembre de 2001 por la violación sexual de la niña V.R.P. que han resultado en la impunidad de los hechos denunciados porque hasta la fecha, el Poder Judicial nicaragüense no ha emitido una sentencia definitiva.

3. El Estado controvierte los alegatos sobre irregularidades en el proceso, argumentando que el Ministerio Público ha tenido una amplia y activa participación en el proceso penal, como representante de la víctima y de la sociedad. Aduce que todas las instancias a las que recurrió la peticionaria le dieron respuesta, pero no siempre a su favor por no asistirle derecho y que la duración del proceso se debe a los múltiples incidentes de nulidad, recursos de apelación, recusaciones y reposiciones de autos que ambas partes han interpuesto ante los juzgados.

4. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, y tras analizar la información disponible y verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad consagrados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, así como en los artículos 30 y 37 de su Reglamento, la CIDH concluye en este informe que la petición es admisible en cuanto a la presunta

violación de los derechos establecidos en los artículos 5.1, 8.1, 11, 19, 24 y 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, así como la presunta violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en relación con V.R.P. y de los artículos 5.1, 8 y 25 de la Convención Americana en conexión del artículo 1.1 de dicho instrumento respecto de V.P.C. La Comisión decide notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

## II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. La denuncia fue recibida el 28 de octubre de 2002 y registrada bajo el número P-4408-02[3]. El 7 de diciembre de 2004, la Comisión trasladó las partes pertinentes de la petición al Estado, solicitándole que dentro del plazo de dos meses, presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante el "Reglamento"). La respuesta del Estado fue recibida el 9 de febrero de 2005 y el 14 de febrero de 2005, presentó un addendum a su respuesta.

6. Además, la CIDH recibió información de la peticionaria en las siguientes fechas: 27 de septiembre de 2005, 7 de marzo de 2006, 17 de octubre de 2006, 25 de abril de 2007 y 11 de septiembre de 2007. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado.

7. Por otra parte, la CIDH recibió observaciones del Estado en las siguientes fechas: 22 de abril de 2005, 4 de noviembre de 2005 y 2 de julio de 2007. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a los peticionarios.

## III. POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Posición de la peticionaria

8. La peticionaria aduce que su hija V.R.P. de 9 años de edad, fue abusada sexualmente por su padre H.R.A., en dos ocasiones. Sostiene que el 16 de octubre de 2001 acudieron a una clínica debido a que la niña no podía contener sus esfínteres y el pediatra le manifestó que la niña tenía pólipos cerca de la vía anal, determinándose posteriormente mediante una biopsia que V.R.P. padecía la infección del Virus del Papiloma Humano[4].

9. Informa la peticionaria que en esa ocasión la niña contó que el 14 de septiembre de 2000, su padre la llevó a la finca "Las Flores", le dio café, la ubicó en el monte, y que después no supo que hacía su padre con ella porque se quedó dormida y el 1 de octubre de 2000, su padre la volvió a llevar a "Las Flores", esta vez a una casa en construcción, le dio de tomar café, se sintió mareada y se quedó dormida. Al despertarse notaba que su papá se arreglaba la faja, la parte anterior del pantalón, se subía el "zipper" y le limpiaba la zona anal, además de alegar sentirse muy adolorida[5]. La peticionaria manifiesta que la niña no le había comentado estos hechos, por temor a que la regañaran.

10. Al conocer los hechos relatados por su hija, la peticionaria sostiene que el 20 de noviembre de 2001 interpuso denuncia por delito de violación en contra de H.R.A ante el Juzgado de Distrito Penal de Jinotega. Respecto del procedimiento interno, informa que el 30 de noviembre de 2001, se dictó auto de cárcel en contra de H.R.A y que el 3 de diciembre de 2001, los representantes de H.R.A. apelaron esta decisión. El 13 de abril de 2002, el Tribunal de Jurado emitió el veredicto Nº 33, declarando inocente a H.R.A y el 14 de abril de 2002 la peticionaria interpuso incidente de nulidad sustancial en contra de esta sentencia. El 13 de mayo de 2002 se declaró la nulidad de la misma[6] y al día siguiente, la defensa de H.R.A. interpuso recurso de apelación en contra de esta última decisión.

11. La peticionaria indica que el 13 de enero de 2003, el Tribunal de Apelaciones mediante sentencia No. 001, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por H.R.A., declaró la nulidad sustancial y absoluta del proceso a partir del auto interlocutorio del 13 de mayo de 2002, y ordenó al juez a quo subrogante que pusiera en libertad al procesado y que abriese a pruebas el incidente de nulidad[7]. Aduce que en esta misma sentencia, el Tribunal de Apelaciones hizo "un fuerte llamado de atención" a la Jueza "por haber actuado en forma notoriamente anómala"[8] y ordenó que la causa fuera conocida por el juez subrogante. Indica que luego de la sentencia No. 001, se inhibieron 5 jueces de conocer el incidente de nulidad, y después de múltiples gestiones realizadas por la peticionaria, el 13 de enero de 2005, un juez asumió la competencia.

12. Informa que el 9 de agosto de 2005, que el Juzgado de Distrito para lo Penal de Juicio de Jinotega, mediante sentencia Nº 176, falló señalando "no ha lugar" al incidente de nulidad sustancial que había sido interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Jurado de Jinotega que declaraba inocente a H.R.A (veredicto Nº 33)[9]. La peticionaria alega que tanto ella como la Fiscal Auxiliar de Jinotega apelaron de esta sentencia el 26 de agosto de 2005 sin que hasta la fecha se haya resuelto el recurso.

13. La peticionaria sostiene que en el proceso penal seguido en contra de H.R.A. se ha cometido una serie de irregularidades, omisiones y retrasos que constituyen violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana; no se ha tomado en cuenta el interés superior de la niña, en contravención de lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia[10] y ha habido retardación de justicia en el caso, porque no se ha emitido una decisión definitiva en el proceso que se inició con su denuncia el 20 de noviembre de 2001.

14. En este sentido, sostiene que el Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua investigó el caso y estableció que "el delito que se cometió en contra de la niña V.R.P. (…) prácticamente ha quedado en la impunidad, a pesar de que ella de manera indubitable y fehaciente, ha declarado quién es su victimario"[11]. Agrega que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos investigó el caso, determinó que se habían cometido irregularidades en el proceso, y concluyó que el veredicto Nº 33 dictado por el Tribunal de Jurado de Jinotega, el cual declaró inocente al Sr. H.R.A., "bajo cualquier óptica es injusto y vulnera los derechos humanos de la niña en cuanto al respeto a su integridad física, psíquica y sexual, protección ante la ley y protección especial (…) así

como también se violentaron todos los derechos contenidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia (…) [y] no se tomó en cuenta el INTERES (sic) SUPERIOR de la niña"[12].

15. En relación con las diligencias ordenadas durante el juicio, la peticionaria informa que en la reconstrucción de los hechos en la finca "Las Flores", no estuvo presente la Fiscalía. Agrega que V.R.P. fue llevada al lugar de los hechos en presencia de H.R.A. y la jueza le ordenó que señalara el lugar donde fue violada, además de la posición en que la puso en dicha ocasión el acusado, mientras era fotografiada, lo que provocó el llanto de la niña.

16. La peticionaria alega que a pesar de que el Dictamen Médico Legal N° 16273/01 respecto de V.R.P. concluyó que "la presencia de PAPILOMA VIRUS HUMANO más CONDILOMATOSIS ACUMINADO, nos indican que son enfermedades transmitidas exclusivamente por vía sexual. En las cuales el sujeto portador puede ser ASINTOMATICO y la persona receptora (en este caso la menor) ser la que desarrolle la enfermedad"[13], las autoridades judiciales no adoptaron medidas para establecer con precisión cómo la niña contrajo la enunciada enfermedad. Adiciona que no se realizó el examen de penescopía en el acusado, el cual era el indicado para demostrar su alegada infección del Virus del Papiloma Humano para determinar su culpabilidad, a pesar de las diversas solicitudes presentadas a la Jueza.

17. Asimismo, la peticionaria sostiene que a pesar de haberse presentado los testimonios y diagnósticos de los doctores que intervinieron quirúrgicamente dos veces a la niña V.R.P. para tratar el Virus del Papiloma Humano en la vía vaginal y reconstruirle el ano, la jueza ordenó otros exámenes que, por la forma en que se realizaron, ocasionaron graves daños a la niña. En este sentido, la peticionaria acompaña un informe psicológico realizado por el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, dirigido a la Jueza con fecha 27 de noviembre de 2001, en el cual se señala que "se evidencia signo emocional de angustia, intento de llanto, preocupación y temor ante la realización del examen médico"[14].

18. En este sentido, la peticionaria alega que se realizaron tres exámenes a la niña los días 21, 24 y 27 de noviembre de 2001. Respecto del primer examen, ante la negativa de la niña de examinarse, la peticionaria sostiene que el médico forense del Departamento de Jinotega le dijo "si vaginalmente no te dejas, ya me parece ver cuando tenga que examinarte el ano"[15]. El segundo examen fue realizado con la presencia de más de 11 personas y que la Fiscal Auxiliar, a pesar de ver que la niña no quería que la tocaran, no suspendió el examen. Alega que el tercer examen se realizó en el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, y que a la niña V.R.P. no se le administró ningún sedante, contrariando lo recomendado por la psiquiatra. Asimismo, sostiene que no había para ese momento, autoridad judicial o de la Procuraduría Departamental de Justicia que tutelara los derechos de la niña como parte del proceso.

19. La peticionaria alega que el 22 de noviembre de 2001 envió una carta al SILAIS (Sistemas de Atención Integral de Salud) del Departamento de Jinotega, denunciando la forma como se realizaron estos exámenes, pero que esta entidad declaró que el órgano

competente era la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia, por ser el médico forense miembro del Poder Judicial[16]. En virtud de ello, señala que interpuso denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia el 30 de abril de 2002 (queja No. 357-2002) solicitando que se enviara un inspector judicial, pero que no recibió respuesta.

20. La peticionaria señala que la niña sufre severos traumas no sólo por el delito del cual fue víctima, sino también por las arbitrariedades que sufrió por parte de las autoridades. En este sentido, alega que la niña V.R.P. ha estado recibiendo asistencia sicológica y psiquiátrica desde octubre de 2003 y que sus síntomas son depresión, ansiedad, vigilancia excesiva, y conducta de auto-mutilación debido a que continúa teniendo recuerdos relacionados con el abuso sexual[17]. Asimismo, sostiene que la psiquiatra que evaluó a V.R.P -a solicitud del Juez suplente de Distrito Penal de Jinotega- estimó que V.R.P. "necesitará, casi siempre, (…) ayuda de sicoterapeuta, (…) [por] el daño recibido en su esfera física y síquica. (…) Por lo tanto, por precaución a no hacer más daño en su persona, se indica evitar la revictimización de la paciente, no permitiendo que ella siga estando presente en los recuerdos del hecho acaecido o de perjuicio que le haya sucedido o interrogándosele al respecto"[18].

21. Asimismo, la peticionaria alega violaciones a las garantías judiciales y el debido proceso por la actuación de la Fiscal Auxiliar, porque no estuvo presente en la diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos en garantía de los derechos de la niña como víctima y testigo en el proceso; no refutó la forma en que se realizaron los exámenes médico-forenses y no se apersonó en la apelación del auto de noviembre de 2001 ni en la apelación de la nulidad del veredicto de Jurado de inocencia de mayo de 2002[19]. Sostiene que ha presentado quejas y recursos por violaciones a las garantías constitucionales de su hija en contra de la Fiscal Auxiliar ante la Inspectoría General del Ministerio Público (el 21 de octubre de 2002) y ante el Fiscal General de la República (el 29 de julio de 2002); así como, quejas en contra de varios funcionarios estatales, incluyendo la Jueza y la Fiscal Auxiliar, ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia (el 8 de noviembre de 2002).

22. Finalmente, la peticionaria expresa que los funcionarios que administran la justicia en Nicaragua tienen grandes perjuicios discriminatorios en contra de las mujeres y poco conocimiento sobre las leyes que amparan a los niños y las mujeres. Asimismo, alega que no existen especialistas para tratar a las víctimas de violaciones y que las personas que integran los jurados no están capacitados en esta materia y sostiene que la mayoría de los delitos de violencia sexual contra menores quedan impunes en Nicaragua.

B. Posición del Estado

23. El Estado niega los alegatos presentados por la peticionaria en relación con las irregularidades en el proceso y la denegación de justicia. Asimismo, señala que la peticionaria no aporta elementos objetivos de convicción sobre la alegada violación a los derechos humanos de la niña V.R.P. En relación con los alegatos de retardo procesal, el

Estado indica que el Código de Instrucción Criminal que estaba vigente para esa época establecía el proceso inquisitivo, en el cual el poder dispositivo de las partes era muy restringido y que establecía un procedimiento escrito que era muy lento, lo cual explica la retardación en el fallo del Tribunal Colegiado.

24. Asimismo, el Estado señala que no hubo violación del derecho a la integridad personal de la niña V.R.P. por parte de las autoridades, debido a que "existe una realidad social que implica que toda víctima de delito sexual al enfrentarse a un proceso en contra de su agresor sufre de revictimización", ya que "estas personas han pasado por una situación traumática que deja profundas secuelas psicológicas y al enfrentarse al proceso penal, la víctima pasa por una serie de situaciones que contribuyen a aumentar su pena y las secuelas que provoca cualquier delito de orden sexual"[20]. En este sentido, señala que en casos como éste, es indispensable que se compruebe la existencia de una violación sexual, y que por lo tanto "no existe violación deliberada a ningún derechos humano (sic), cuando se somete a la víctima a la práctica de tal pericia necesaria para el juzgamiento del presunto delincuente y necesaria para la defensa de los derechos, en este caso de la menor [V.R.P.]"[21].

25. El Estado aduce que el juicio bajo el cual se procesó a H.R.A., acusado de violación, estuvo apegado a los procedimientos de ley. Para ello sostiene que se recibió la denuncia de la peticionaria y la declaración de la niña, se tomaron 21 testimonios, entre los que se encuentran los testimonios de los médicos que trataron a la niña antes de la denuncia, se giró orden de captura y allanamiento de morada en contra de H.R.A., se le nombró abogado defensor y se le recibió su declaración.

26. Asimismo, expresa que la Fiscal Departamental de Jinotega, se apersonó a la causa y solicitó en la etapa instructiva los medios pertinentes para demostrar la responsabilidad penal del acusado. Para ello, el Estado alega que se practicó el examen médico de la niña en el Instituto de Medicina Legal, se practicó inspección ocular y reconstrucción de los hechos en dos etapas, en presencia del acusado y la segunda en presencia de la niña, se ilustró la inspección con foto tabla en el lugar de los hechos, se adjuntaron los documentos médicos, y se practicó el reconocimiento médico legal al acusado, para verificar vestigios de la presencia del Virus de Papiloma Humano.

27. El Estado sostiene que hubiera sido ideal que otro fiscal llevase el caso debido a problemas personales con la peticionaria y para evitar las suspicacias que se vienen dando, señala que "hay que tomar en cuenta el poco personal con el que cuenta el Ministerio Público, máxime en los departamentos alejado de la capital como Jinotega"[22]. Asimismo, el Estado menciona que la fiscal señaló que a pesar de haber tenido problemas personales con la madre de la menor, esto no iba a impedir que acusara al procesado durante el proceso. En este sentido, alega que en ningún momento la Procuraduría Especial de la Niñez y Adolescencia, en sus pronunciamientos, ha dejado sentada alguna mala actuación de la fiscal, y mucho menos que el caso se haya perdido por causa de mal actuar de ésta, aunque no haya asistido a un trámite como fue la contestación de agravios ante el Tribunal de Apelaciones, pues esto "no es indicativo de parcialidad ni abandono de su labor en el

caso"[23].

28. El Estado sostiene que se actuó de acuerdo a derecho y que se gestionó diligentemente la toma principal de la prueba en el caso, como es el examen médico legal con las providencias necesarias a fin de evitar efectos negativos en la menor. Alega que en el caso de una violación, "la comprobación debe ser a través del dictamen del médico especialista en la materia; de aquí, que no existe violación deliberada a ningún derecho humano, cuando se somete a la víctima a la práctica de tal pericia necesaria"[24]. En este sentido, afirma que los exámenes aportados al proceso y realizados con anterioridad provienen de médicos particulares, contratados por una de las partes, y que por lo tanto no tienen valor legal, según lo establecido por la legislación nicaragüense, lo que hacía necesaria la valoración del médico forense que es el único facultado para emitir dictámenes legales, con valor de prueba.

29. El Estado alega que se hicieron infructuosos esfuerzos por examinar a la menor y que ante la negativa de la niña se suspendió el procedimiento; situación que escapa a la voluntad de los funcionarios. Ante esta situación, manifiesta que V.R.P. fue trasladada el Instituto Médico Legal de Managua debido a que éste cuenta con mejores medios para realizar tal examen. Informa que dicho examen se realizó bajo sedación de la niña, y siguiendo el debido procedimiento, con la finalidad de garantizar la obtención de la prueba del delito cometido en contra de la niña y tratando de no presionarla, ni causarle mayores efectos y traumas de orden psicológico y moral. Asimismo, sostiene que durante los exámenes médicos realizados se corroboraron vestigios o rastros que indicaron padecimiento de enfermedad de transmisión sexual "compatible al que la niña presentó, producto del acceso carnal vía vaginal y anal al que fue sometida"[25]. Con relación al supuesto maltrato por parte del médico forense, el Estado sostiene que el dictamen forense emitido por el Instituto de Medicina Legal no hace alusión a maltrato alguno, sino que señala que la niña se quejaba de mucho dolor y no se dejaba valorar por lo que decidió realizar el examen médico bajo efecto anestésico. El Estado niega el alegato de la peticionaria de que la niña no hubiese estado sedada en la realización de los exámenes médicos.

30. Sobre la falta de tutela de los derechos de la niña por parte del Ministerio Público, el Estado sostiene que "esta afirmación es altamente subjetiva"[26], ya que del expediente se desprende que a lo largo de todo el proceso, la Fiscal tuvo una amplia y activa participación en el papel que le correspondía como representante de la víctima y de la sociedad. Asimismo, el Ministerio Público no puede convertirse en acusador a ultranza, es decir, no está obligado a apegarse a todas las actuaciones de la víctima en el proceso[27]. Igualmente alega que la víctima también fue representada por su acusador particular quien actuó de acuerdo a su criterio, lo que no significa que se estuviesen violentado los derechos humanos de la niña. El Estado expresa que ha cumplido con su función de brindar protección a los derechos de la niña, ya que cuando la peticionaria recurrió en búsqueda de la defensa de los derechos humanos de su hija, éstas dieron respuesta a sus peticiones aunque no todas fueron a su favor por no asistirle razones de derecho.

31. En relación con el alegato de la peticionaria sobre la actuación de la Jueza, el Estado señala que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos le envió una comunicación a la jueza el 14 de mayo de 2002, reconociendo su labor en el caso. De igual manera, señala que no existen pruebas para fundamentar el alegato de la peticionaria que la jueza haya sido destituida por actos de corrupción o por su actuación en este proceso.

32. Asimismo, alega que se les ha brindado a la peticionaria y a la niña V.R.P., a través de las distintas instituciones involucradas, la protección judicial que establece el artículo 25 de la Convención Americana, así como el acceso a recursos y a un juicio justo. Con respecto a la duración del proceso manifestó que "se debe a los múltiples Incidentes de Nulidad, recursos de apelación, recusaciones, reposiciones de autos, promovidos en los juzgados por ambas partes (...), así como también a la excusa de algunos jueces para conocer y pronunciarse sobre este proceso, por considerar que no existen nulidades ni implicancias en las actuaciones procesales".[28]

33. Por otro lado, el Estado señala que no ha habido injerencia abusiva en la vida privada de V.R.P., ni ha habido ningún otro ataque por parte del Estado a su honra o dignidad como ser humano. Asimismo, expresa que no hubo acto discriminatorio que pudiese afectar los intereses de V.R.P. Con relación a la alegada violación de los artículos 17 y 19 de la Convención Americana, sostiene que

el Estado no ha tenido injerencia alguna en el núcleo familiar de la señora V.P.C., más bien sus derechos han sido respetados y se les ha brindado protección, el Estado ha incidido solo (sic) en lo necesariamente concerniente al delito que se ventiló en el proceso, en el que estuvo en juego el núcleo familiar, y todo esto en atención al ejercicio de los derechos de la menor y la peticionaria[29].

34. En comunicación de 16 de febrero de 2005, el Estado alega que la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia estudió la queja interpuesta por la peticionaria en contra de la Fiscal y del Médico Forense, pero que de conformidad con lo establecido en el artículo 72.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Corte Suprema decidió rechazarla, a pesar de que la peticionaria señale que no obtuvo respuesta de este recurso de queja. Posteriormente, en fecha 29 de junio de 2007, el Estado sostiene que las supuestas acusaciones o denuncias que según V.P.C. ha interpuesto en contra de la Fiscal Departamental de Jinotega o del Médico Forense que atendieron el caso de la menor V.R.P., "no existen o al menos no lo fueron ante la autoridad competente"[30].

35. En relación al agotamiento de los recursos internos, en sus observaciones iniciales a la petición, el Estado señaló que la peticionaria había agotado los recursos, por haber solicitado la nulidad del veredicto del Tribunal de Jurado, que tuvo su trámite legal y sentencia de no ha lugar[31]. No obstante, en comunicación posterior de fecha 14 de febrero de 2005, el Estado sostiene que los recursos internos no han sido agotados porque la nulidad del veredicto del Tribunal de Jurado que absolvió al acusado, se encuentra en curso. Agrega que si el caso es resuelto desfavorablemente para V.R.P., el Estado procederá a apelar como corresponde de acuerdo a los recursos que brinda la legislación.

## IV. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

### A. Competencia de la Comisión ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci

36. La peticionaria se encuentra facultada por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a la niña V.R.P. y su madre V.P.C., respecto de quienes Nicaragua se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, Nicaragua es parte de la Convención Americana desde el 25 de septiembre de 1979, fecha en que se depositó el respectivo instrumento de ratificación y es igualmente parte de la Convención de Belém do Pará desde el 12 de diciembre de 1995. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

37. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará que habrían tenido lugar dentro del territorio de Nicaragua, Estado parte en dichos tratados. Asimismo, la Comisión Interamericana tiene competencia ratione temporis puesto que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana y en la Convención de Belém do Pará ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición.

38. Finalmente, la Comisión es competente ratione materiae, debido a que la petición hace referencia a presuntas violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. En relación a la Declaración Americana, la Comisión Interamericana ha señalado que, una vez que la Convención Americana entra en vigor en un Estado, la fuente primaria de derecho aplicable será ese tratado y no la Declaración Americana[32], siempre que la petición se refiera a la violación de derechos básicamente idénticos consagrados en ambos instrumentos[33], y que no implique una situación de violación continua[34]. En el caso bajo análisis, los artículos de la Declaración Americana invocados por la peticionaria se encuentran incorporados en los artículos de la Convención Americana invocados.

### B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

#### 1. Agotamiento de los recursos internos

39. El artículo 46, numerales (1)(a) y (2) de la Convención dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos, salvo que (a) no exista en la legislación interna el debido proceso legal para la protección del derecho en cuestión; (b) si la presunta víctima no tuvo acceso a los recursos de la jurisdicción interna; o (c) si hay retardo injustificado en la decisión sobre dichos recursos. En su jurisprudencia, la Corte Interamericana se ha

pronunciado reiteradamente en el sentido de que "el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad"[35].

40. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado que los recursos internos, de acuerdo con los principios generalmente reconocidos del Derecho Internacional, deben ser adecuados, en el sentido de que deben permitir la restauración del derecho violado, y deben ser efectivos, en el sentido de ser capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos[36].

41. En el presente caso, la peticionaria alega retardación de justicia, porque hasta la fecha no hay una decisión definitiva en el proceso penal iniciado con su denuncia el 21 de noviembre de 2001 y sostiene que las autoridades estatales cometieron una serie de irregularidades en el proceso penal, las cuales han impedido el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad penal.

42. Por su parte, el Estado sostiene que los recursos internos no han sido agotados y que el retardo en el proceso se ha debido a las múltiples diligencias promovidas por ambas partes. Indica que el proceso penal estuvo apegado a la ley y que las autoridades judiciales actuaron de acuerdo a derecho.

43. La Comisión observa que de conformidad con los documentos aportados por la peticionaria y el Estado, se encuentra acreditado que la peticionaria ha intentado todos los recursos que la legislación interna le permite para impulsar el proceso penal. Sobre este punto, la legislación penal interna vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, establecía que le corresponde a la Procuraduría General de la República la promoción de la acción penal en el delito de violación cuando la víctima es menor de dieciséis años de edad sin perjuicio de la denuncia o acusación que haya interpuesto la parte ofendida o sus representantes[37]. La Comisión ha establecido reiteradamente que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal hasta sus últimas consecuencias[38]. Tanto la Corte Interamericana como la Comisión han reafirmado el deber del Estado de investigar toda violación de los derechos humanos, juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y evitar la impunidad[39]. En este sentido, la Comisión observa que la Convención de Belém do Pará afirma que la obligación de actuar con la debida diligencia, adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, este instrumento estipula que el Estado, al actuar con la debida diligencia frente a actos violentos, debe tomar especial cuenta de la particular exposición a la violencia y la discriminación que puede sufrir una mujer por su minoría de edad, entre otras condiciones de riesgo[40].

44. La Comisión observa que en el presente caso han transcurrido más de 6 años de ocurrido el alegado abuso sexual en contra de una niña de 9 años, sin que se haya concluido el proceso que investiga el delito. De igual manera, la CIDH observa que el recurso de apelación interpuesto por la peticionaria el 29 de agosto de 2005, se encuentra sin resolver por los tribunales de justicia nicaragüenses. Asimismo, se observa que el Estado

se limita a sostener que no se han agotado los recursos internos, pero no presenta información específica que lleve a concluir que el recurso está revestido de la idoneidad y efectividad que requieren los parámetros internacionales en materia de derechos humanos para solucionar en forma oportuna la situación denunciada.

45. A la luz de lo expresado anteriormente, y de la información que consta en el expediente, la Comisión Interamericana establece a efectos de la admisibilidad que se ha verificado un retardo injustificado en la decisión definitiva de los órganos jurisdiccionales y que los recursos internos han resultado ineficaces para solucionar en forma oportuna la situación denunciada. En consecuencia, la CIDH aplica al presente asunto la excepción al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana.

2. Plazo de presentación

46. El artículo 46.1.b de la Convención Americana dispone que para que una petición sea admitida deberá ser "presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva". En este caso, aún no se ha adoptado una decisión definitiva a partir de cuya notificación se pueda contar el plazo de seis meses. Teniendo presente que en el ámbito interno la peticionaria interpuso una denuncia el 20 de noviembre de 2001, considerando la evolución de la investigación sobre los derechos que la presunta víctima alega fueron violados durante la mencionada investigación que continua pendiente y, la fecha de presentación de la petición ante la CIDH, la Comisión estima que la denuncia se ha presentado dentro de un plazo razonable. Por lo tanto, el requisito relativo al plazo de presentación se cumple conforme a lo establecido en el artículo 32 de su Reglamento.

3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

47. El artículo 46.1.b de la Convención Americana dispone que la admisión de las peticiones está sujeta al requisito respecto a que la materia "no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional" y el artículo 47(d) estipula que la Comisión no admitirá una petición que "sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada" por la Comisión o por otro organismo internacional. En el presente caso, las partes no han esgrimido la existencia de esas circunstancias de inadmisibilidad, ni se deducen de los procedimientos.

4. Caracterización de los hechos alegados

48. A los efectos de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos alegados pueden caracterizar una violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47.b de la Convención Americana, o si la petición es "manifiestamente infundada" o es "evidente su total improcedencia", conforme al inciso (c) de dicho artículo. El criterio de evaluación de esos requisitos difiere del que se utiliza para pronunciarse sobre el fondo de una petición; la Comisión debe realizar una evaluación prima facie para determinar si la petición establece

el fundamento de la violación, posible o potencial, de un derecho garantizado por la Convención, pero no para establecer la existencia de una violación de derechos. Esta determinación constituye un análisis primario, que no implica prejuzgar sobre el fundamento del asunto.

49. La peticionaria alega una serie de presuntas irregularidades por parte de las autoridades judiciales, en la investigación de un grave delito cometido en perjuicio de V.R.P., en especial: a) trato inadecuado de la niña en su condición de víctima de un delito sexual y, b) actuar negligente de las autoridades respectivas favoreciendo en consecuencia una situación de impunidad. El Estado, por su parte, controvierte los hechos denunciados.

50. En el presente caso, la Comisión observa que, en cuanto a la actuación de las autoridades, la denuncia refiere a la investigación judicial de un grave delito de carácter sexual cometido en perjuicio de una niña de 9 años, quien habría sido tratada en forma inadecuada por las autoridades judiciales.

51. Los hechos denunciados de ser probados, podrían caracterizar una presunta violación de los artículos 5.1, 8.1, 11, 19 y 25 de la Convención Americana en conexión con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento y al artículo 7 de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de V.R.P. La peticionaria alega que la niña V.R.P. fue sujeta a un tratamiento discriminatorio durante el proceso penal con base en su sexo y edad, y la Comisión también analizará dichos alegatos y la información presentada por las dos partes, a la luz de la posible aplicación del artículo 24 de la Convención Americana.

52. Asimismo, la Comisión observa que en relación con V.P.C., en su calidad de madre de V.R.P. y querellante en el proceso penal, los hechos alegados tienden a caracterizar una posible violación de los artículos 5.1, 8 y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento.

53. La CIDH considera que de la información no se desprenden fundamentos suficientes que caractericen una violación a los derechos garantizados en los artículos 5.2, 7.1, 12 (1 y 2), 13.1 y 17.1 de la Convención Americana.

54. En consideración de todo lo anterior, la CIDH concluye que los peticionarios han acreditado prima facie los extremos requeridos en el artículo 47.b de la Convención Americana.

V. CONCLUSIONES

55. Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y sin constituir prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión, la Comisión concluye que el presente caso satisface los requisitos de admisibilidad enunciados en el artículo 46 de la Convención Americana.

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1. Declarar admisible la petición bajo estudio, en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 5.1, 8.1, 11, 19, 24 y 25 de la Convención Americana en conexión con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento; y del artículo 7 de la Convención Belém do Pará respecto de V.R.P. y de los artículos 5.1, 8 y 25 de la Convención en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento en relación con V.P.C.

2. Declarar inadmisible el caso con relación a los artículos 5.2, 7.1, 12 (1 y 2), 13.1 y 17.1 de la Convención Americana.

3. Notificar esta decisión al Estado y a la peticionaria.

4. Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual, a ser presentado a la Asamblea General de la OEA.

Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los 11 días del mes de febrero de 2009. (Firmado): Paolo G. Carozza, Presidente; Luz Patricia Mejía, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Clare K. Roberts, y Víctor Abramovich Miembros de la Comisión.

[1] A pesar de no haber sido solicitado explícitamente por la peticionaria, la CIDH se reserva la identidad de la presunta víctima, por ser ésta menor de 18 años y por tratarse de un caso de una presunta violación sexual. Con el objetivo de brindar mayor protección a la presunta víctima, la CIDH se reserva igualmente los nombres de la peticionaria, madre de la presunta víctima y del padre. En este sentido, la CIDH se refiere a la presunta víctima de 9 años de edad como "V.R.P.", a la peticionaria y madre de la presunta víctima como "V.P.C.", y al padre de la presunta víctima como "H.R.A.".
[2] La Convención Americana sobre Derechos Humanos no define quienes son niños y niñas. Por tanto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aplica el concepto establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que define como niño o niña a "todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad".
[3] Mediante comunicación recibida el 28 de abril de 2003, la peticionaria informó a la CIDH que sería representada por la Sra. Haydee Marín y el 2 de enero de 2004 informó que revocaba dicha representación.
[4] Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Virus de Papiloma Humano o VPH es un virus que infecta las células epiteliales (células mucosas o de la piel) y es mayoritariamente una infección de transmisión sexual que puede no manifestar síntomas, y que puede ocasionar cáncer cervical y de cuello uterino. La OMS señala que la incidencia de cáncer relacionado con la infección por VPH es mayor en niñas que en niños y que el cáncer cervical constituye la segunda causa de mortalidad por cáncer en las mujeres a nivel mundial. Véase página en Internet de la OMS http://www.who.int/es/index.html.
[5] La peticionaria adjunta copia de valoración mental efectuada en el Hospital Victoria de Jinotega, el 26 de noviembre de 2001. Informe de Medicina Legal Nº 16275/01 de 27 de

noviembre de 2001.
[6] En copia de sentencia de fecha 13 de mayo de 2002, la Jueza declaró la nulidad del veredicto Nº 33, con base a lo dispuesto en el artículo 444, numeral 8 del Código de Instrucción Criminal, el cual señala: "Son nulidades sustanciales, peculiares al veredicto o declaración del jurado: (…) 8.- Si los jurados han sido cohechados".
[7] En copia de sentencia Nº 001 de fecha 13 de enero de 2003, dictada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte, Sala de lo Penal, Matagalpa.
[8] En copia de sentencia Nº 001 de fecha 13 de enero de 2003, dictada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte, Sala de lo Penal, Matagalpa (original del texto en letras mayúsculas).
[9] En copia de sentencia Nº 176 de fecha 9 de agosto de 2005, dictada por el Juzgado de Distrito para lo Penal de Juicio de Jinotega (original del texto en letras mayúsculas).
[10] La norma que cita la peticionaria expresa: "se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural, social, en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su máximo grado". El Código de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua (Ley Nº 287 del 27 de mayo de 1998), artículo 10.
[11] La peticionaria adjunta comunicación de fecha 8 de septiembre de 2003 del ex Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia, Carlos Emilio López Hurtado dirigida a la peticionaria.
[12] En documento adjuntado por la peticionaria sobre pronunciamiento del 25 de abril de 2002 del Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
[13] En documento adjuntado por la peticionaria sobre Instituto de Medicina Legal, Corte Suprema de Justicia Dictamen Médico Legal, Delito Sexual, conclusión 2.
[14] En documento adjuntado por la peticionaria sobre Informe psicológico No. 16275/01 de 27 de noviembre de 2001, Instituto de Medicina Legal, Corte Suprema de Justicia.
[15] Comunicación de la peticionaria recibida en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 16 de marzo de 2005.
[16] Comunicación de la peticionaria de fecha 11 de febrero de 2005, recibida en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH en fecha 16 de marzo de 2005.
[17] Comunicación de la peticionaria de fecha 10 de enero de 2005, en la cual anexa una comunicación de la organización que alega presta ayuda psicológica a V.R.P. de fecha 3 de enero de 2005.
[18] Véase en documento remitido por la peticionaria sobre Informe de seguimiento de 21 de febrero de 2002, elaborado por la Dra. María Delma Terán Caldera del Hospital Victoria Motta de Jinotega, en comunicación dirigida al Juez suplente de Distrito Penal de Jinotega.
[19] Documento anexo a comunicación de la peticionaria, recibida el 16 de marzo de 2005 por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
[20] Nota del Estado de fecha 29 de junio de 2007, MRE/DGO/1570/06/07.
[21] Nota del Estado de fecha 14 de febrero de 2005, MRE/DM-DGOI/218/02/05.
[22] Nota del Estado de fecha 15 de diciembre de 2005, MIRE/SREC-DGOI/842/12/05.
[23] Nota del Estado de fecha 15 de diciembre de 2005, MIRE/SREC-DGOI/842/12/05.
[24] Nota del Estado de fecha 9 de febrero de 2005, MRE/DM-DGOI/196/02/05.

[25] Nota del Estado de fecha 14 de febrero de 2005, MRE/DM-DGOI/218/02/05.
[26] Nota del Estado de fecha 15 de diciembre de 2005, MRE/SREC-DGOI/842/12/05.
[27] En este sentido, señala el Estado que los fiscales del Ministerio Público deben regirse por el principio de objetividad en el ejercicio de sus actuaciones, velando únicamente por la correcta aplicación del Derecho, ausente de interés parcial.
[28] Nota del Estado de fecha 15 de diciembre de 2005, MRE/SREC-DGOI/842/12/05.
[29] Nota del Estado de fecha 15 de diciembre de 2005, MRE/SREC-DGOI/842/12/05.
[30] Nota del Estado de fecha 29 de junio de 2007, MRE/DGOI/1570/06/07.
[31] Nota del Estado de fecha 9 de febrero de 2005, MRE/DM-DGOI/196/02/05.
[32] Véase CIDH, Informe N° 03/01, Caso 11.670, Amilcar Menéndez, Juan Manuel Caride Y Otros (Sistema Previsional), Argentina, 19 de enero de 2001, párr. 41.
[33] Corte I.D.H., Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 46.
[34] Véanse, por ejemplo, CIDH, Informe Nº 1/01, CASO 12.085, Ana Elena Townsend Diez-Canseco y otros, (Interceptación Telefónica), Perú, 19 de enero de 2001, párr. 23 y CIDH, Informe Anual 1998, Informe N° 38/99, Argentina, 11 de marzo de 1999, párr. 13.
[35] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 88; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párr. 8; Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párr. 90; Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No.12, párr. 38; Caso Neira Alegría y Otros, Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie C No.13, párr. 30; Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996, Serie C No. 24, párr. 40; Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares. Sentencia de 31 de enero de 1996, Serie C No. 25, párr. 40; Corte I.D.H., Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11.
[36] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 64-66.
[37] Artículo 205, Ley No.150, Reformas al Código Penal de la República de Nicaragua (L.G., 9 de septiembre de 1992).
[38] Véanse por ejemplo CIDH, Informe Nº 94/06, Petición 540-04, Admisibilidad, Inés Fernández Ortega y Otros, México, 21 de octubre de 2006, párr. 23; CIDH, Informe Nº 93/06, Petición 972-03, Admisibilidad, Valentina Rosendo Cantú y Otros, México, 21 de octubre de 2006, párr. 27; CIDH, Informe Nº 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Nicaragua, Informe Anual de la CIDH 1997, párrs. 96 y 97; CIDH, Informe N° 55/97, Caso 11.137, Argentina, Informe Anual de la CIDH 1997, párr. 392.
[39] CIDH, Informe Nº 94/06, Petición 540-04, Admisibilidad, Inés Fernández Ortega y Otros, México, 21 de octubre de 2006, párr. 23; CIDH, Informe Nº 93/06, Petición 972-03, Admisibilidad, Valentina Rosendo Cantú y Otros, México, 21 de octubre de 2006, párr. 27; CIDH, Informe N° 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandes, Brasil, 16 Abril

2001, párr. 43, citando Corte I.D.H, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4., párr. 176 y Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 175; CIDH, Informe de Fondo, N° 53/01, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, México, 4 Abril 2001, párr. 84.
[40] Artículo 9, Convención de Belém do Pará.

**INFORME NO. 93/09. ADMISIBILIDAD. PETICIÓN 337-03. SAMANTA NUNES DA SILVA[1]. BRASIL*. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009.**

I. RESUMEN

1. El 25 de abril de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la "Comisión Interamericana" o la "CIDH") recibió una denuncia por correo postal en donde se alega la responsabilidad internacional del Estado de Brasil por irregularidades y violaciones al debido proceso presuntamente cometidas en el marco de la investigación penal de la agresión sexual denunciada por Samanta Nunes da Silva, una niña de 16 años de edad. La petición fue presentada por la organización Themis (en adelante "la peticionaria").

2. La peticionaria sostiene que los hechos configuran la violación de los siguientes derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la "Convención Americana") en perjuicio de Samanta Nunes da Silva; el derecho a la integridad personal (artículo 5.1); el derecho a la libertad personal (artículo 7); la protección a la honra y a la dignidad (artículo 11.1); los derechos del niño (artículo 19); la igualdad ante la ley (artículo 24); y el derecho a la protección judicial (artículo 25), conjuntamente con la violación de las obligaciones de respetar los derechos y adoptar medidas consagradas en el artículo 1(1) de la Convención Americana. La peticionaria igualmente sostiene la violación de los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (la "Convención Belém do Pará").

3. El Estado, por su parte, solicita que se declare inadmisible la petición dado que no cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad presentes en la Convención Americana. Específicamente considera que el admitir esta petición obligaría a la CIDH a actuar como un tribunal de "cuarta instancia" para reexaminar el acervo probatorio de los procedimientos judiciales internos relacionado con los hechos del presente caso.

4. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que la petición es admisible, a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 8(1), 19, 24 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos prevista en el artículo 1(1) de dicho instrumento internacional, y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de Samanta Nunes da Silva. Respecto de la supuesta violación de los artículos 5(1), 7 y 11(1) de la Convención Americana la Comisión considera que la petición es inadmisible. Con respecto a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Convención de Belém do Pará, la Comisión tomará estos en cuenta en la medida relevante, en su interpretación del artículo 7 de la misma Convención durante la etapa de fondo. Además, decide notificar a las partes y ordenar la publicación

de su decisión en el Informe Anual.

## II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. La petición fue recibida vía correo postal por la CIDH el 25 de abril de 2003 y fue registrada bajo el número P 337-03. El 22 de marzo de 2005, la CIDH trasmitió copia de las partes pertinentes de la petición al Estado, con un plazo de dos meses para presentar información de conformidad con el artículo 30 (incisos 2 y 3) del Reglamento. El 12 de julio de 2005, el Estado solicitó una prórroga para presentar sus observaciones hasta el 1º de agosto de 2005. La CIDH le notificó al Estado el 4 de agosto de 2005 su imposibilidad de conceder la prórroga de acuerdo al artículo 30 (inciso 3) del Reglamento. Las observaciones del Estado fueron presentadas el 18 de enero de 2006, las cuales fueron debidamente trasladas a la peticionaria el 1º de febrero de 2006.

6. El 16 de marzo de 2006, la CIDH recibió observaciones adicionales de la peticionaria, las cuales fueron trasladadas al Estado el 19 de abril de 2006. La CIDH recibió observaciones adicionales del Estado el 7 de julio de 2006, las cuales fueron trasladadas a la peticionaria el 26 de julio de 2006.

7. El 15 de agosto de 2008, la Comisión solicitó al Estado el presentar en un plazo de un mes copia del expediente penal relacionado a los hechos. El 16 de septiembre de 2008, el Estado solicitó a la CIDH una prórroga de un mes para presentar copia completa del expediente penal, la cual fue concedida por la CIDH el 22 de septiembre de 2008. El 26 de septiembre de 2008, el Estado presentó ante la CIDH copias de la acción penal, el recurso de apelación y el recurso extraordinario referentes a esta petición, información que fue trasladada a la peticionaria el 7 de octubre de 2008 con un plazo de un mes para presentar sus observaciones. El 7 de noviembre de 2008, el Estado presentó ante la CIDH copia del Agravo de Instrumento referente a la petición, el cual fue trasladado a la peticionaria el 17 de noviembre de 2008. La peticionaria presentó sus observaciones el 3 de diciembre de 2008, las cuales fueron trasladadas al Estado el 9 de diciembre de 2008. El Estado presentó observaciones adicionales ante la CIDH el 24 de diciembre de 2008, las cuales fueron trasladadas a los peticionarios el 13 de enero de 2009.

## III. POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Antecedentes

8. En este asunto, las partes sostienen una controversia sobre la existencia de irregularidades y violaciones al debido proceso que presuntamente fueron cometidas en el marco de la investigación penal de la agresión sexual denunciada por Samanta Nunes da Silva, una niña de 16 años de edad. Considerando que no hay controversia entre las partes respecto de las etapas del proceso criminal interno impulsado por el Ministerio Público en contra del médico, la Comisión resume el mismo antes de entrar a las posiciones de las partes.

9. La peticionaria denunció los presuntos hechos de violencia sexual el mismo día en que alegadamente ocurrieron, el 15 de octubre de 1997. El Ministerio Público presentó denuncia el 16 de diciembre de 1997 en contra del médico por atentado contra el pudor mediante fraude, en base a un acto libidinoso distinto de la conjunción carnal, delito sancionado por el artículo 216 del Código Penal de Brasil vigente para la época de los hechos. Durante el proceso a nivel de primera instancia, los intereses de Samanta Nunes da Silva fueron representados por el Ministerio Público y su asistente de acusación. El tribunal de primera instancia condenó inicialmente al médico a dos años y seis meses de prisión, pena que fue sustituida por una multa y la prestación de servicios comunitarios. El acusado apeló esta decisión el 19 de enero de 2001.

10. A nivel de segunda instancia, la 7ª Cámara del Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul solicitó el parecer del acusado y del Ministerio Público. En una sesión efectuada el día 24 de septiembre de 2001, los jueces integrantes de la 7ª Cámara del Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul absolvieron al acusado por unanimidad.

11. Samanta Nunes da Silva presentó dos recursos ante tribunales internos para denunciar violaciones a garantías constitucionales que ocurrieron durante el proceso criminal. La víctima presentó primeramente un Recurso Extraordinario ante el Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul el 5 de noviembre de 2001, el cual fue declarado inadmisible por el mismo tribunal el 17 de abril de 2002. Posteriormente, la víctima interpuso un Agravo de Instrumento ante el Supremo Tribunal Federal, el cual fue declarado como improcedente el 3 de octubre de 2002.

B. Posición de la peticionaria

12. La peticionaria sostiene que Samanta Nunes da Silva arregló una cita médica con un médico ortopeda privado el 15 de octubre de 1997, para atender dolores de espalda que sufría. Sostiene que durante la cita el doctor abusó sexualmente de Samanta mediante "fraude y amenazas" [2]. Aduce que el doctor le ordenó a Samanta que se quitara la ropa y acarició sus senos y partes íntimas – incluyendo el ano y la vagina – haciéndole elogios y preguntas absurdas.

13. La peticionaria centra sus alegaciones ante la CIDH en la falta de un debido acceso a la justicia y en la desigual protección de la ley por su condición de género, su raza, edad y situación económica. En dicho marco, la peticionaria sostiene que durante la acción penal emprendida en contra del médico ortopeda no se respetaron estándares mínimos del debido proceso y se discriminó contra ella. Estas fallas fueron particularmente graves considerando el sexo, la raza, la minoría de edad y la situación económica de Samanta Nunes da Silva, lo que demandaba del Estado una protección especial y un deber reforzado de actuar con la debida diligencia requerida para juzgar y sancionar los hechos. Según la peticionaria, varias fallas en el proceso resultaron en la absolución del médico, mediante una decisión infundada y parcializada a favor del presunto agresor por parte de la 7ª Cámara del Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul. Entre las fallas que identifica la

peticionaria durante el proceso se encuentran: que Samanta Nunes da Silva no fue debidamente escuchada como víctima; que los operadores judiciales − incluyendo el Ministerio Público y jueces - a nivel de segunda instancia no fueron imparciales, siendo influenciados por prejuicios discriminatorios contra las mujeres víctimas de violencia sexual; que el sistema judicial brasileño no está debidamente preparado para recopilar las pruebas necesarias en casos de violencia sexual, lo que afectó la conformación de la prueba necesaria en este caso; y que las deficiencias mencionadas forman parte de un patrón discriminatorio en la investigación y el juzgamiento de crímenes sexuales.

14. La peticionaria afirma que no busca que la CIDH reexamine las pruebas consideradas en el proceso penal como un tribunal de cuarta instancia como sugiere el Estado brasileño. Al contrario, la peticionaria busca un reconocimiento de que el Estado de Brasil, mediante sus agentes públicos, el Ministerio Público y el Supremo Tribunal Federal, violó los principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante "CEDAW"). La peticionaria sostiene que no se puede confundir la autonomía de decisiones judiciales con la total libertad para reafirmar tratamientos discriminatorios y violadores de los derechos humanos de las mujeres basados en papeles sociales y comportamientos morales y sexuales de las mismas.

15. La peticionaria sostiene que varios patrones socioculturales discriminatorios contra las mujeres víctimas de violencia sexual influyeron negativamente en las actuaciones judiciales en el proceso penal emprendido en contra del médico. La peticionaria considera que este caso es paradigmático del tratamiento diferenciado que funcionarios judiciales en Brasil prestan a los casos de mujeres víctimas de violencia sexual en comparación con otros delitos, como resultado de la discriminación histórica que han sufrido las mujeres y la percepción de estos crímenes como pertenecientes al ámbito privado[3]. La peticionaria asimismo identifica una serie de factores que hacían a Samanta Nunes da Silva más vulnerable a la violación de sus derechos, que no fueron considerados por los funcionarios judiciales durante el proceso. Samanta era una niña, afrodescendiente y de bajos recursos económicos, mientras que el agresor era hombre, blanco y de considerables recursos económicos, lo cual los situaba en una situación de desigualdad ante las autoridades, y lo que por lo tanto ameritaba que Samanta gozara de una protección especial durante el proceso penal.

16. En cuanto a ejemplos concretos, la peticionaria aduce que como ocurre frecuentemente en procesos penales relacionados a delitos sexuales contra las mujeres, la palabra de Samanta Nunes da Silva fue desacreditada durante el proceso penal y su credibilidad valorada en base a su comportamiento sexual. Como parte de su petición, la peticionaria presenta la denuncia interpuesta por el Ministerio Público, en donde se especifica que la víctima era virgen, no tenía novio y que era una mujer honesta con miras a fundamentar el delito[4]. Durante el interrogatorio de Samanta Nunes da Silva por el tribunal de primera instancia, se le hicieron una serie de preguntas, entre otras, si tenía experiencia sexual, si tenía novio y si se recordaba la ropa que llevaba puesta durante la consulta médica[5].

17. Igualmente la peticionaria aduce que el Estado de Brasil no está debidamente preparado para recopilar las pruebas necesarias en casos de violencia sexual, sobretodo en casos como este, en donde no hay evidencia de resistencia física, lo que impide la sanción debida de los victimarios y promueve la tolerancia social de estos actos. La peticionaria sostiene que a nivel de primera instancia esto fue ilustrado por no existir un examen psiquiátrico centrado en analizar las secuelas de actos de violencia sexual. Por lo tanto, Samanta Nunes da Silva fue alegadamente sometida a un examen que sólo verificó que no padecía problemas mentales.

18. En el marco del proceso penal a nivel de segunda instancia, la peticionaria se refiere asimismo a una opinión del Ministerio Público[6], presentada tanto por ella como por el Estado, en donde se concluye que la víctima "apunta a un trastorno histriónico de personalidad en desarrollo. Justamente, la patología más asociada a acusaciones falsas de abusos sexuales[7]". Según la peticionaria, a diferencia de su postura en el proceso a nivel de primera instancia, el Ministerio Público inclusive cuestionó en su opinión el razonamiento de una niña en denunciar hechos de violencia sexual: "¿Cuál sería la razón para que una niña, estando tan traumatizada con lo ocurrido, quiera pasar por un proceso en donde estaría obligada a revivir estos eventos? ¿Sería el tumulto del proceso un deseo subconsciente?"[8].

19. La peticionaria aduce que el Ministerio Público finalmente concluye que pese a que el agresor cometió una serie de errores en la consulta médica con Samanta Nunes da Silva, esto no significa que debe ser sancionado criminalmente:

Sin duda el doctor cometió sus errores. Aceptó trabajar en una clínica sin disponibilidad de enfermeras, chalecos y biombos para proteger la privacidad de los pacientes. Fue excesivamente confiado en recibir a una adolescente no acompañada de sus padres y en llevar a cabo un examen invasivo despreciando la privacidad de la niña. Más aún, al notar su nerviosismo, darle seguimiento o tratar de calmarla con observaciones sobre su profesionalismo, quizás acariciándola. Tal vez haya sido poco cuidadoso al punto de elogiar su belleza antes de ella desvestirse para el examen. Y no es del todo improbable que se haya excitado por la presencia de una niña en la mejor etapa de su vida. De ahí a decir que se satisfizo mediante fraude y por los modos alegados hay una larga brecha. Si cometió todos o apenas algunos de esos errores, ya pagó con la existencia del juicio y la condena y continuará a pagar por largo tiempo, porque en estos delitos, aunque sean absueltos o condenados, siempre quedan las sospechas, las miradas y los chismes. El que tiende a creer en lo absurdo de la conducta sexual es precisamente el mismo que es capaz de dichas prácticas, el que más la condena está tratando de cerrar las siete llaves de los gigantes que atormentan su propia alma. Uno debe ser cuidadoso, entonces, de no juzgar a los otros, sea en el plano moral, sea en el plano jurídico"[9].

20. La peticionaria indica que el Ministerio Público no evaluó el testimonio del acusado con los mismos criterios que con los de la víctima. Por ejemplo, la capacidad del agresor de inventar y/o contradecirse no fue evaluada, pero la de la víctima sí. Entiende que los

criterios empleados por el Ministerio Público para evaluar la prueba fueron distintos para Samanta Nunes da Silva que para el doctor, por ser una mujer víctima de violencia sexual y además niña, afrodescendiente y de bajos recursos económicos, mientras que el agresor era hombre, blanco y pudiente:

De un lado, ese testimonio, y de otro, la negativa del acusado. ¿Un médico relativamente joven y muy exitoso, siendo casado, porqué el acusado tendría necesidad de satisfacer su lujuria de modo tan inconsecuente? Nunca había estado envuelto en alguna denuncia de abuso. ¿Pondría en riesgo su nombre y respetabilidad por "rozar su bigote" en la espalda de una adolescente? No vemos cómo pudo haber certeza incriminatoria[10].

21. Refiriéndose a la opinión del Ministerio Público, los jueces integrantes de la 7ª Cámara del Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul consideraron al emitir su sentencia absolutoria el hecho de que la víctima había visto reportajes ficticios sobre hechos similares, la falta de testigos, y que la declaración de la víctima ante la policía había sido menos detallada que la tomada durante el juicio.

22. Según la petición, Samanta Nunes da Silva presentó dos recursos ante tribunales internos para denunciar actos de discriminación, la falta de medidas de protección especial y fallas en el debido proceso durante la acción penal contra el médico ortopeda. Primeramente, presentó un Recurso Extraordinario[11] el 5 de noviembre de 2001, el cual fue declarado inadmisible por el Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul el 17 de abril de 2002. La peticionaria aduce que Samanta basó el recurso en los artículos 1 (III y IV)[12] y 5 (I, X, XLI, párrs. 1 y 2[13] de la Constitución Federal de Brasil, los artículos 2, 3, y 5 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (la "CEDAW") y los artículos 1, 2, 3, 4 y 6 de la Convención de Belém do Pará.

23. La petición indica que Samanta Nunes Da Silva alegó en el Recurso Extraordinario que prejuicios discriminatorios contra víctimas de violencia sexual afectaron las actuaciones judiciales durante el proceso, incluyendo la ausencia de un examen psiquiátrico que demostrara las secuelas psicológicas de los delitos sexuales. Indicó más específicamente en el texto del recurso que el Tribunal de segunda instancia sólo consideró en su decisión el parecer del presunto agresor y del Ministerio Público, pero no el de su asistente de acusación, ya que no fue invitada a presentar sus contra-argumentos. Sobre la opinión del Ministerio Público, Samanta destacó que:

la divergencia de concepciones dentro del propio Ministerio Público entre la primera y la segunda instancia, ya que en la primera se opina a favor de la condena y en la segunda por la absolución. ¿Será este un criterio legal o ideológico? Es realmente impresionante el rumbo que puede tomar una decisión judicial de acuerdo a concepciones e ideologías de los operadores de derecho, especialmente cuando son crímenes sexuales. Cuando una mujer no da margen, usando ropas provocantes o teniendo un comportamiento provocante, o no siendo honesta, ella inventa o confunde porque vio algo ficticio[14].

24. El Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul declaró inadmisible el recurso interpuesto por Samanta Nunes da Silva por alegadamente no indicar con "precisión y objetividad"[15] cuáles eran los dispositivos constitucionales que habían sido violados durante el proceso penal y sin ser fundamentado adecuadamente. Adicionalmente, el Tribunal estimó que las alegaciones se centraban en un mero reexamen de la prueba, para lo cual el recurso extraordinario no era el adecuado. Por lo tanto, el Tribunal decidió que el recurso no reunía las condiciones mínimas para ser admitido.

25. En respuesta a esta decisión, la víctima interpuso un Agravo de Instrumento[16] ante el Supremo Tribunal Federal, el cual fue declarado como improcedente el 3 de octubre de 2002. En el Agravo de Instrumento, Samanta Nunes da Silva reiteró las alegaciones que fundamentaron el recurso extraordinario y clarificó que el objetivo de interponer un recurso extraordinario no fue el solicitar un reexamen de la prueba o de obtener una decisión a nivel de tercera instancia. El Supremo Tribunal Federal concordó con el Tribunal del Estado de Rio Grande do Sul y declaró el Agravo de Instrumento como improcedente.

26. Sobre los requisitos de admisibilidad, la peticionaria alega que presentó la petición dentro del plazo razonable de acuerdo al artículo 46.1.b de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 32.1 del Reglamento de la CIDH. La peticionaria alega que envió su denuncia por correo exactamente al final del plazo de seis meses que expiraba el 18 de abril de 2003, lo cual se puede comprobar por el sello de correspondencia. Entiende que el plazo vencía el 18 de abril de 2003, dado que la decisión de declarar improcedente el Agravo de Instrumento del Supremo Tribunal Federal fue publicada el 18 de octubre de 2002. La petición se envió por correo postal, de acuerdo con la práctica de procesamiento establecida por la Secretaría Ejecutiva lo cual resultó en que la petición fuese registrada el 25 de abril de 2003. Aduce que la interpretación de los plazos debe ser siempre la más favorable para la efectividad de los derechos humanos, o sea, que el registro de recepción no necesariamente significa la fecha que marca el cierre del plazo, porque diversos problemas pueden ocurrir con los envíos internacionales. Sobre el agotamiento de recursos internos, la peticionaria aduce que con la interposición del Recurso Extraordinario y del Agravo de Instrumento y su negación, la víctima agotó todos los recursos disponibles en el sistema judicial de Brasil para obtener un remedio judicial ante los hechos.

C. Posición del Estado

27. El Estado solicita que la denuncia sea declarada inadmisible dado que no cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad presentes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado igualmente considera que el admitir esta petición obligaría a la CIDH a actuar como un tribunal de "cuarta instancia" para reexaminar el acervo probatorio de los procedimientos judiciales internos relacionados con la presente petición. El Estado aduce que dado el carácter subsidiario de los órganos del sistema interamericano, tanto la Corte como la Comisión, han adoptado jurisprudencia en donde indican que dichos órganos sólo podrán entrar a revisar las decisiones judiciales internas cuando la petición se fundamente en una sentencia que haya sido dictada al margen del debido

proceso o que viole aparentemente cualquier otro derecho garantizado en la Convención, situación que no ha ocurrido en el presente caso.

28. El Estado aduce específicamente que la petición fue presentada extemporáneamente y que por tanto debe ser declarada inadmisible. Indica que la denuncia fue presentada el 25 de abril de 2003 a las 2:40 p.m. de la tarde, de acuerdo al registro de la CIDH, una semana después del vencimiento del plazo. El Estado sostiene que la fecha de la publicación de la decisión definitiva de declarar el Agravo de Instrumento improcedente fue el 18 de octubre de 2002, por tanto, el periodo para presentar la petición ante la CIDH cerró el 18 de abril de 2003, de acuerdo al artículo 46(1)(b) de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 32(1) del Reglamento de la Comisión.

29. El Estado estima que el Reglamento de la CIDH en su artículo 29(1)(a) provee que la fecha determinante para contar el plazo del artículo 46(1)(b) de la Convención Americana es la fecha en que la petición fue presentada ante la CIDH, fecha que es confirmada por el sello de recibo. El Estado asimismo no tiene acceso al sello postal que probaría que la denuncia fue enviada el 18 de abril de 2003, como los peticionarios alegan. El requisito presente en el artículo 29(1)(a) del Reglamento de la Comisión existe justamente para garantizar a los Estados certeza y seguridad jurídica sobre el cumplimiento o no del plazo establecido por la Convención Americana[17].

30. Sobre el agotamiento de recursos internos, el Estado entiende que la víctima es en parte responsable por la decisión del Supremo Tribunal Federal sobre el Agravo de Instrumento que agotó los recursos internos, porque no fundamentó adecuadamente su pedido y se basó sólo en solicitar un mero reexamen de la prueba. En el Agravo de Instrumento el Supremo Tribunal Federal determinó que la víctima no indicó qué disposiciones constitucionales estimaba que habían sido violadas o cuál tratado o ley federal habían sido declaradas inconstitucionales por la decisión impugnada. La fundamentación deficiente de la víctima del Recurso Extraordinario y la presentación extemporánea de la víctima de la petición ante la CIDH, deben servir "para que esta Comisión demuestre claramente que los objetivos elevados del sistema interamericano de derechos humanos no afectan el viejo decir, corolario de la seguridad jurídica, por el cual el derecho no ampara a los que duermen!"[18].

31. El Estado asimismo aduce que la peticionaria busca que la Comisión otorgue un valor probatorio superior a ciertos elementos de prueba, aquellos que benefician a la supuesta víctima, en contraste con la lectura de los órganos jurisdiccionales internos competentes al examinar todo el acervo probatorio en segunda instancia. El Estado también aduce que la Comisión no debe funcionar como un tribunal de alzada para examinar errores de derecho o de hecho que puedan haber sido cometidos por tribunales nacionales dentro de los límites de su competencia. Las decisiones desfavorables pero justamente fundamentadas no pueden ser consideradas como violatorias de los derechos humanos.

32. El Estado alega que la autonomía de los órganos judiciales en la adecuada apreciación de la prueba es un principio general del derecho de todos los Estados Americanos, además

de ser expresamente reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ejercicio de su propia función contenciosa[19]. El Estado aduce que la decisión de la 7ª Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul, por unanimidad de sus miembros, representó únicamente un ejercicio de autonomía de los órganos jurisdiccionales en la apreciación de las pruebas, con base a un examen del acervo probatorio en base al marco legal pertinente, de acuerdo a los principios del debido proceso legal y de la presunción de inocencia.

## IV. ANÁLISIS SOBRE ADMISIBILIDAD

### A. Competencia ratione personae, ratione loci, ratione temporis y ratione materiae de la Comisión

33. La peticionaria se encuentra facultada por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a Samanta Nunes da Silva, respecto de quien Brasil se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Brasil es un Estado parte en la Convención Americana desde el 25 de septiembre de 1992, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo, y es igualmente parte de la Convención de Belém do Pará desde el 27 de noviembre de 1995. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

34. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará que habrían tenido lugar dentro del territorio de Brasil, Estado parte de dicho tratado.

35. La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana y de la Convención de Belém do Pará ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. La Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. La Comisión no tiene competencia ratione materiae para examinar las violaciones a los artículos de la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Sin embargo, de acuerdo con los términos del artículo 29 de la Convención Americana, así como con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados[20], en determinadas circunstancias, la Comisión debe hacer referencia a otras obligaciones bajo el derecho internacional con el fin de interpretar y aplicar las de los tratados del sistema interamericano de derechos humanos.

### B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

#### 1. Agotamiento de los recursos internos

36. El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana establece que para que una petición pueda ser admitida, se requerirá "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Ese requisito se estableció para garantizar al Estado en cuestión la posibilidad de resolver controversias dentro de su propio marco jurídico.

37. Las partes sostienen una controversia sobre el debido agotamiento de los recursos internos. La peticionaria alega que ante la sentencia absolutoria de segunda instancia, Samanta Nunes da Silva interpuso ante el Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul el 5 de noviembre de 2001 un Recurso Extraordinario, debidamente fundamentado, sosteniendo la violación de varias garantías constitucionales en base a actos discriminatorios, la carencia de medidas de protección especial, y fallas procesales durante la acción penal que resultaron en la absolución del agresor por el mismo tribunal. Sin embargo, dicho recurso fue declarado inadmisible por el Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul el 17 de abril de 2002. En respuesta, Samanta presentó un Agravo de Instrumento ante el Supremo Tribunal Federal reiterando sus alegaciones y este fue declarado por el mismo tribunal como improcedente el 3 de octubre de 2002.

38. El Estado por su parte sostiene que la víctima es en parte responsable por la decisión del Supremo Tribunal Federal que declaró como improcedente el Agravo de Instrumento, la cual agotó los recursos internos, porque Samanta Nunes da Silva no fundamentó adecuadamente su pedido y se basó sólo en solicitar un mero reexamen de la prueba. El Estado asimismo aduce que tanto en el Recurso Extraordinario como en el Agravo de Instrumento los tribunales determinaron que la víctima no identificó las disposiciones constitucionales que habían sido violadas y tampoco hizo referencia a cuál tratado o ley federal habían sido declaradas inconstitucionales por la decisión emitida.

39. Las partes concuerdan en que la presunta víctima invocó los recursos disponibles a nivel nacional, y que estos recursos eran los apropiados para sus alegaciones y el proceso judicial relevante en cuestión. El Estado no alega que Samanta Nunes da Silva invocó recursos que no eran apropiados, sino que ella interpuso los recursos disponibles con una fundamentación deficiente. En esta etapa procesal, la Comisión debe determinar si la víctima interpuso los recursos adecuados y apropiados, y si el Estado ha sido debidamente notificado de los reclamos para tener la oportunidad de resolverlos a nivel nacional en la medida pertinente.

40. El Supremo Tribunal Federal consideró en su análisis del recurso extraordinario y del Agravo de Instrumento que Samanta Nunes da Silva solicitaba meramente un reexamen de la prueba. De las presentaciones de las partes se desprende que Samanta Nunes da Silva en el texto de los recursos invocó las disposiciones constitucionales que considera violadas, describiendo y fundamentando en detalle actos de discriminación, la falta de medidas de protección especial, y fallas en el debido proceso que alegadamente ocurrieron durante la acción penal. Por lo tanto, la Comisión considera que la presunta víctima invocó los recursos disponibles y que el Estado fue notificado de la sustancia de sus alegatos.

41. Sobre la base de los factores señalados, la Comisión concluye que los recursos relativos a los reclamos de la peticionaria han sido debidamente agotados en conformidad con el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana.

2. Plazo de presentación de la petición

42. El artículo 46(1)(b) de la Convención Americana establece que toda petición debe presentarse dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que se haya notificado a los peticionarios de la sentencia definitiva que agota los recursos internos.

43. Las partes sostienen una controversia sobre el cumplimiento de este requisito. La peticionaria alega que la petición fue presentada por correo postal dentro del plazo de seis meses requerido, de lo cual existe constancia en el expediente. Indica que la víctima tomó conocimiento de la resolución del Supremo Tribunal Federal sobre el Agravo de Instrumento el 18 de octubre de 2002, mediante la publicación de la decisión, y por consiguiente, enviaron la petición por correo postal a la Comisión el 18 de abril de 2003. El Estado en contraste alega que la petición fue recibida extemporáneamente ya que fue registrada por la CIDH como recibida el 25 de abril de 2003, una semana después del cierre del plazo, y que no existe constancia en el expediente de que haya sido enviada por la peticionaria el 18 de abril de 2003.

44. En este caso, la petición data de 18 de abril de 2003 y fue registrada como recibida en la Comisión por correo postal el 25 de abril de 2003. De acuerdo a la práctica de la CIDH en la materia[21], presumiendo los días que transcurrieron mientras la petición estuvo en el correo postal, la Comisión considera que la petición fue presentada de forma oportuna.

3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

45. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 46(1)(c) de la Convención Americana.

4. Caracterización de los hechos alegados

46. La peticionaria alega que una serie de derechos de Samanta Nunes da Silva fueron conculcados durante la acción penal emprendida contra un médico ortopeda que presuntamente la abusó sexualmente durante una consulta médica. La peticionaria aduce específicamente la violación de los derechos de Samanta Nunes da Silva a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección de la honra y dignidad, a la igualdad ante la ley, a los derechos del niño, a la protección judicial, y a vivir libre de violencia. El Estado por su parte aduce que la petición no cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad.

47. El Estado considera, más específicamente, que la petición es inadmisible porque la peticionaria solicita que la Comisión actúe como un tribunal de "cuarta instancia", para lo

cual no es competente, ya que la peticionaria pretende que la CIDH reexamine el acervo probatorio de los procedimientos judiciales internos que resultaron en la absolución del presunto agresor. Con respecto a este alegato, la Comisión reitera lo establecido en su jurisprudencia afirmando que no es competente para revisar las sentencias dictadas por tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y apliquen el debido proceso y las garantías judiciales[22]. La Comisión no puede actuar como un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales. No obstante, dentro del marco de su mandato de garantizar la observancia de los derechos consagrados en la Convención Americana y otros instrumentos interamericanos de derechos humanos, la Comisión es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre el fondo cuando ésta se refiere a procesos internos que podrían ser violatorios de derechos garantizados por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará[23].

48. De acuerdo a esta doctrina, la Comisión observa que al admitir esta petición no pretende suplantar la competencia de las autoridades judiciales domésticas para apreciar la prueba en casos de violencia sexual, y examinar errores de apreciación que pudieron haber sido cometidos por los tribunales nacionales, cuestiones que corresponden en principio a los tribunales domésticos. La Comisión en la etapa de fondo determinará si el proceso judicial interno[24] cumplió con las garantías del debido proceso y el derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación y violencia en concordancia con los derechos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.

49. En esta etapa de admisibilidad, la Comisión considera que no corresponde determinar si se produjeron o no las violaciones alegadas. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver si los hechos expuestos tienden a caracterizar posibles violaciones a la Convención Americana, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana. El criterio de apreciación de estos extremos es distinto al requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión Interamericana debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado en la Convención Americana[25]. Este análisis tiene carácter sumario, y no implica un prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia. La distinción entre el estudio correspondiente a la declaración sobre la admisibilidad y el requerido para determinar una violación se refleja en el propio Reglamento de la CIDH, que establece de manera claramente diferenciada las etapas de admisibilidad y fondo[26].

50. Los alegatos de la peticionaria se refieren a hechos que, de ser comprobados, podrían caracterizar violaciones de varios derechos protegidos por la Convención Americana en los artículos 19, 24, y 25, en conexión con el artículo 1(1) de dicho instrumento, en perjuicio de Samanta Nunes da Silva, y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.

51. Los alegatos de la peticionaria se refieren a asuntos relacionados con la falta de protección judicial y la discriminación que alegadamente sufrió Samanta Nunes da Silva durante el proceso penal, en base a su sexo, raza y clase social, que de ser comprobados, podrían caracterizar violaciones de los artículos 24 y 25 de la Convención Americana. De

igual forma, la peticionaria alega una presunta falta de imparcialidad de las instancias judiciales, así como una falta de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, lo cual puede caracterizar violaciones de estos artículos. La peticionaria asimismo alega que Samanta Nunes da Silva careció de una protección especial durante el proceso penal como niña, lo cual podría configurar una violación del artículo 19 de la Convención Americana.

52. La Comisión asimismo considera que los hechos pueden caracterizar una violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, dado que la peticionaria sostiene que el sistema judicial brasileño cometió irregularidades y fallas en el debido proceso en un caso de violencia sexual, por tanto, alegaciones pertinentes al deber del Estado de actuar con la debida diligencia requerida para debidamente juzgar y sancionar actos de violencia contra las mujeres. Con respecto a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Convención de Belém do Pará, estos no constituyen fundamentos jurídicos para admitir la petición pero la Comisión los tomará en cuenta en la medida relevante, en su interpretación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en la etapa de fondo. La Comisión aclara que su revisión en la etapa de fondo no tiene como objeto revisar cuestiones de interpretación o aplicación del derecho interno, sino analizar si Samanta Nunes da Silva tuvo un debido acceso a la justicia en condiciones de igualdad y libre de toda forma de discriminación.

53. Por otro lado, aunque la peticionaria no haya invocado el artículo 8(1) de la Convención Americana, en virtud del principio iure novit curia la Comisión analizará alegatos a presuntas violaciones de dicho artículo.

54. En opinión de la Comisión, los alegatos en la petición no aportan suficientes fundamentos tendientes a establecer la violación de los derechos protegidos por el artículo 5(1) sobre la integridad personal, el artículo 11(1) sobre la honra y la dignidad y el artículo 7 sobre la libertad personal.

## V. CONCLUSIONES

55. La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en el presente informe, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1. Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos reconocidos por los artículos 8(1), 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1(1) de dicho instrumento, y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, interpretado a la luz de los artículos 1, 2, 3 y 4 de dicha Convención, en perjuicio de Samanta Nunes da Silva,

2. Declarar inadmisible la presente petición en cuanto se refiere a la presunta violación de los artículos 5(1), 7 y 11(1) de la Convención Americana.

3. Notificar esta decisión a las partes.

4. Continuar con el análisis de fondo del asunto; y

5. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Buenos aires, Argentina, a los 7 días del mes de septiembre de 2009. (Firmado): Luz Patricia Mejía Guerrero, Presidenta; Víctor Abramovich, Primer Vicepresidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Sir Clare Roberts, Paolo G. Carozza y Florentín Meléndez, miembros.

* Conforme a lo establecido en el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la CIDH, el Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, de nacionalidad brasileña, no participó en la discusión sobre esta petición.

[1] La Comisión utiliza el nombre completo de la presunta víctima a solicitud expresa de la peticionaria, de acuerdo con la carta recibida el 16 de octubre que denota la autorización de la presunta víctima al respecto.

[2] Petición original de fecha 25 de abril de 2003.

[3] Como parte de su denuncia, la peticionaria presenta los resultados de investigaciones del procesamiento de casos de violencia sexual en Brasil que presuntamente ilustran como la gran mayoría de los agresores tienen una posición de autoridad hacia la víctima y evidencian la poca credibilidad que se le otorga a la palabra de la víctima en tribunales de segunda instancia, a diferencia de en primera instancia. La peticionaria presenta los resultados de una investigación emprendida por el Programa de la Fundación Carlos Chagas - Género, Reproducción, Acción y Liderato - para el año 2001-2002, relacionada con los procesos criminales de violencia sexual contra niñas y adolescentes en Brasil. En dicha investigación, 10 procesos sobre violencia sexual fueron analizados, en donde solamente uno tuvo condena en segunda instancia y la víctima era de sexo masculino (el único niño incluido en el análisis). En siete procesos los agresores fueron absueltos, siendo las víctimas niñas entre 11 y 14 años. La peticionaria presenta una segunda investigación en donde se analizaron 24 procesos criminales de violencia sexual y la relación de la prueba pericial con la condena y la absolución, demostrando que en el 58% de los procesos el acusado conocía a la víctima, en 42.9% las víctimas eran niñas y en 60% los agresores tenían una posición de autoridad sobre la víctima y/o el delito había ocurrido en un lugar público.

[4] La peticionaria presenta con su petición original copia de la denuncia interpuesta por el Ministerio Público el 16 de diciembre de 1997.

[5] Interrogatorio de Samanta Nunes da Silva por el juez de la causa ante la 7ª Cámara Criminal, Poder Judicial, Estado de Rio Grande do Sul, 29 de abril de 1999.

[6] Parecer del Ministerio Público, Tribunal de Justicia, Cámara Especial Criminal,

Apelación de Delito Nº 70-002-059-764, Porto Alegre, 23 de marzo de 2001.
[7] Parecer del Ministerio Público, Tribunal de Justicia, Cámara Especial Criminal, Apelación de Delito Nº 70-002-059-764, Porto Alegre, 23 de marzo de 2001, párr. 5.1.
[8] Parecer del Ministerio Público, Tribunal de Justicia, Cámara Especial Criminal, Apelación de Delito Nº 70-002-059-764, Porto Alegre, 23 de marzo de 2001, párr. 9.
[9] Parecer del Ministerio Público, Tribunal de Justicia, Cámara Especial Criminal, Apelación de Delito Nº 70-002-059-764, Porto Alegre, 23 de marzo de 2001, párr. 12.
[10] Parecer del Ministerio Público, Tribunal de Justicia, Cámara Especial Criminal, Apelación de Delito Nº 70-002-059-764, Porto Alegre, 23 de marzo de 2001, párr. 11.
[11] De acuerdo a la Ley 8.038 de 28 de mayo de 1990, artículo 26, "un recurso extraordinario y especial, en casos previstos en la Constitución Federal, serán interpuestos en un plazo común de 15 días, ante el Presidente del Tribunal recorrido que cuente con: I – exposición de hecho o de derecho; II – demostración de relevancia del recurso interpuesto; III – las razones del pedido de reforma de la decisión recorrida." De acuerdo al artículo 27.1 el Tribunal emitirá la decisión de admitir o no admitir el recurso.
[12] En el recurso extraordinario interpuesto por Samanta Nunes da Silva se cita el inciso III del artículo 1 de la Constitución Federal de Brasil el cual protege la dignidad de la persona y el inciso IV del mismo artículo el cual promueve el bien de todos "sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de discriminación". (Traducción del portugués de la Secretaría).
[13] En el recurso extraordinario interpuesto por Samanta Nunes da Silva se cita el artículo 5 de la Constitución Federal y los incisos mencionados los cuales protegen la igualdad ante la ley, la intimidad y la vida privada de las personas, y prohíben la discriminación contra todas las personas.
[14] Recurso extraordinario interpuesto por Samanta Nunes da Silva ante el Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul el 5 de noviembre de 2001.
[15] La peticionaria presenta con su petición original la decisión del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul de no admitir el Recurso Extraordinario interpuesto por Samanta Nunes da Silvia, 17 de abril de 2002.
[16] De acuerdo a la Ley 8.038 de 28 de mayo de 1990, artículo 28, "si el recurso extraordinario o especial es denegado se podrá presentar un Agravo de Instrumento, en el plazo de cinco días, ante el Supremo Tribunal Federal o ante el Superior Tribunal de Justicia, conforme al caso."
[17] El Estado cita un número de casos que no han sido admitidos por la Comisión por no cumplir con el requisito de plazo razonable, incluyendo, CIDH, Informe No. 32/98, Caso 11.507, Anselmo Ríos Aguilar (México), 5 de mayo de 1998; CIDH, Informe No. 70/00, Caso 11.707, Gladis Cardozo Andrade (Venezuela), 30 de octubre de 2000; CIDH, Informe No. 95/01, Caso 12.203, Liliana Zambrano Pacheco (Perú), 10 de octubre de 2001, entre otros.
[18] Observaciones del Estado del 18 de enero de 2006.
[19] El Estado asevera que "esa autonomía es garantía inseparable de la independencia de los órganos jurisdiccionales, cuya competencia jurisdiccional, en un mundo de pruebas preevaluadas y separadas de su conjunto probatorio, sería reducida a un mero ejercicio matemático y difícilmente de verdadera justicia". Observaciones del Estado del 18 de enero de 2006.

[20] Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entrada en vigor, 27 de enero de 1980, artículo 31.
[21] Véase CIDH, Informe de Admisibilidad No. 69/08, Petición 681-00, Guillermo Patricio Lynn (Argentina), 16 de octubre de 2008, párrs. 44-46 (En el presente caso, la petición era de fecha de 12 de diciembre de 2000, fue enviada por correo postal y fue recibida en la Comisión el 29 de diciembre de 2000. La Comisión, presumiendo los días en que la petición estuvo en el correo postal, consideró que la petición había sido presentada de forma oportuna).
[22] Ver CIDH, Informe No. 52/02, Caso 11.753, Fondo, Ramón Martínez Villareal, Estados Unidos, 10 de octubre de 2002, párr. 53; CIDH, Informe No. 39/96, Santiago Marzioni (Argentina), Informe Anual de la CIDH 1996, párrs. 48 – 51.
[23] Ver CIDH, Informe Nº 42/08, Petición 1271-04, Karen Atala e Hijas (Chile), 23 de julio de 2008, párr. 59; CIDH, Informe No. 52/02, Caso 11.753, Fondo, Ramón Martínez Villareal (Estados Unidos), 10 de octubre de 2002, párr. 53; CIDH, Informe No. 39/96, Caso 11.673, Santiago Marzioni (Argentina), Informe Anual de la CIDH 1996, párrs. 48–51; CIDH, Informe No. 54/01, Caso 12.051, Maria da Penha Maia Fernandes (Brasil), 16 de abril 2001, párr. 28.
[24] La Corte Interamericana ha establecido que el "esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos, para establecer su compatibilidad con la Convención Americana…..A la luz de lo anterior se deben considerar los procedimientos internos como un todo. La función del tribunal es determinar si el procedimiento, considerado integralmente, se ajustó a la Convención". Corte I.D.H. Caso Escher y otros, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 199, párr. 44; Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros). Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 222.
[25] Ver CIDH, Informe No. 128/01, Caso 12.367, Herrera y Vargas ("La Nación"), Costa Rica, 3 de diciembre de 2001, párr. 50.
[26] Ver CIDH, Informe No. 31/03, Caso 12.195, Mario Alberto Jara Oñate y otros (Chile), 7 de marzo de 2003.

**INFORME No. 7/10[1]. PETICIÓN 12.378. ADMISIBILIDAD. FÁTIMA REGINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA Y MAURA TATIANE FERREIRA ALVES. BRASIL. 15 DE MARZO DE 2010.**

## I. RESUMEN

1. El 22 de marzo de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una petición en la que se alega la responsabilidad internacional de la República Federativa de Brasil ("el Estado" o "Brasil") por la presunta discriminación contra la madre adoptiva Fátima Regina Nascimento de Oliveira y su hija adoptiva Maura Tatiane Ferreira Alves ("las presuntas víctimas"), en razón de la denegación de su derecho a la licencia de maternidad. Se alega que el Estado es responsable por violaciones del derecho a las garantías judiciales, de la protección a la familia, de los derechos del niño, y de la igualdad ante la ley. La petición fue presentada por THEMIS – *Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero*; *Justiça Global*; *Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul*; *Subcomissão da Criança e do Adolescente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul*; e *Instituto Amigos de Luca* (en adelante "los peticionarios").

2. Los peticionarios alegan que la funcionaria pública Fátima Regina Nascimento de Oliveira adoptó a su hija Maura Tatiane Ferreira Alves, nacida el 23 de julio de 1989, ese mismo día, conforme a la decisión del Juez de Menores de la Comarca de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul. Inmediatamente, la señora Oliveira habría solicitado por vía administrativa su licencia de maternidad al Hospital Militar de Santa Maria, un establecimiento de salud público; sin embargo, según los peticionarios, su solicitud fue rechazada por dicha institución del Estado. Los peticionarios informan que la señora Oliveira interpuso una acción cautelar ante la Justicia Laboral y que luego de varias decisiones en su favor emitidas por los jueces y tribunales laborales a partir del año 1990, el Supremo Tribunal Federal habría establecido que ella no tenía derecho a la licencia de maternidad a través de una decisión emitida el 30 de mayo de 2000. En consecuencia, sostienen que el Estado brasileño ha violado los artículos 8 (garantías judiciales), 17 (protección a la familia), 19 (derechos del niño) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("la Convención Americana"); y que ha incumplido igualmente con su obligación general prevista en el artículo 1.1 del mismo instrumento.

3. El Estado no contestó la denuncia, pese a haber sido notificado de acuerdo a las disposiciones reglamentarias y convencionales.

4. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 46

[1]El Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, de nacionalidad brasileña, no participó en las deliberaciones ni en la decisión de la presente petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión.

y 47 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana decide declarar la petición admisible respecto de la presunta violación de los artículos 8.1, 17, 19 y 24 de dicho instrumento internacional, todos ellos en concordancia con la obligación general prevista en su artículo 1.1. Adicionalmente, conforme al principio *iura novit curia*, la CIDH declara admisible la petición respecto de la presunta violación del artículo 25.1 de la Convención Americana. La Comisión Interamericana decide asimismo publicar el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

## II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA

5. La denuncia fue recibida el 22 de marzo de 2001. El 24 de abril de 2001 la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado y fijó un plazo de tres meses[2] para que presentara sus observaciones. Desde el 24 de abril de 2001 hasta la fecha de adopción del presente informe el Estado no ha presentado una respuesta por escrito a la petición.

6. El 15 de octubre de 2002, durante el 116° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana, se llevó a cabo una reunión de trabajo sobre el presente asunto, con la participación de las dos partes.

## III. POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Los peticionarios

7. Los peticionarios alegan que la funcionaria pública Fátima Regina Nascimento de Oliveira adoptó a su hija Maura Tatiane Ferreira Alves, nacida el 23 de julio de 1989, ese mismo día, conforme a la decisión del Juez de Menores de la Comarca de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul. Acto seguido, la señora Oliveira habría solicitado administrativamente su "licencia para la embarazada" al Hospital Militar de Santa Maria, establecimiento público de salud, de conformidad con el artículo 7, XVIII de la Constitución brasileña, que establece que "son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que se destinen a la mejora de su condición social: licencia a la embarazada, sin perjuicio al empleo y al salario, por un período de ciento y veinte días".[3] Sin embargo, su solicitud fue rechazada por dicha institución estatal. Asimismo, según los peticionarios, fue amenazada de despido por justa causa en caso de no volver al trabajo dentro de treinta días.

8. En virtud de lo anterior, los peticionarios informan que la Sra. Oliveira interpuso una acción cautelar a favor de ella misma y de su hija ante la Justicia Laboral (Acción Cautelar 4056/89), y que el 15 de junio de 1990 obtuvo una medida cautelar y una decisión favorable de primera instancia en el proceso correspondiente (Proceso 4405/89).

[2] Conforme al artículo 34 del Reglamento de la CIDH vigente para esa época.

[3] Traducción libre del portugués original: "*São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias*".

Conforme a los peticionarios, en virtud de que la parte reclamada (Hospital Público Santa Maria) era una institución del Estado, el caso fue sometido automáticamente a la segunda instancia. El Tribunal Regional Laboral confirmó la anterior decisión a favor de las presuntas víctimas el 19 de noviembre de 1991. Los peticionarios alegan que el Gobierno de Rio Grande do Sul recurrió contra esa decisión a través de un *Agravo Regimental* (AC. 5ª T – 4628/93) ante el Tribunal Superior Laboral, que no obstante confirmó la decisión favorable a las presuntas víctimas el 2 de noviembre de 1993. Según los peticionarios, el Gobierno de Rio Grande do Sul interpuso un recurso de *Embargos de Declaração* (AC. 5ª T – 953/94), que fue rechazado el 24 de marzo de 1994.

9. Finalmente, informan los peticionarios que el Gobierno de Rio Grande do Sul intentó un recurso extraordinario (TST – RE – ED – AG – AI – 53.462/92.4), que fue rechazado por el Tribunal Superior Laboral el 20 de julio de 1994; no obstante, el recurso extraordinario interpuesto ante el Supremo Tribunal Federal (RE 197.807-04, RS) --última instancia del país-- resultó en una sentencia contraria a las presuntas víctimas, dictada el 30 de mayo de 2000. Los peticionarios señalan que el Supremo Tribunal Federal rechazó el derecho de las presuntas víctimas a la licencia de maternidad, en virtud de que la señora Oliveira era madre adoptiva, y que la referida sentencia expresó que "no se extiende a la madre adoptiva el derecho a licencia, establecido por el artículo 7, XVIII, de la Constitución Federal, en beneficio de la empleada embarazada, siendo competencia del legislador ordinario el tratamiento de la materia". Según los peticionarios, dicha decisión fue publicada el 24 de septiembre de 2000 con carácter de cosa juzgada, es decir que se transformó en una decisión definitiva sin posibilidad de recurso alguno, con lo que se agotaron los recursos de jurisdicción interna.

10. En relación a la decisión del Supremo Tribunal Federal, los peticionarios alegan primeramente que por haber sido emitida más de 10 años después de la adopción de Maura Tatiane Ferreira Alves, efectivamente denegó a las presuntas víctimas el acceso a la justicia y el derecho a las garantías judiciales dentro de un plazo razonable. Asimismo, los peticionarios argumentan que la decisión del Supremo Tribunal Federal violó el derecho a la igualdad ante la ley. Alegan al respecto que la distinción hecha por el Tribunal entre madres adoptivas y madres naturales es sustancialmente discriminatoria. Los peticionarios sostienen que dicha decisión judicial incumple el deber de protección de la maternidad, de la familia y, particularmente, de los derechos del niño; y que por tanto, es violatoria de la Convención Americana.

11. Según los peticionarios, la expresión "licencia para la embarazada" contenida en la Constitución brasileña no puede ser entendida de manera abstracta, sino que debe corresponder al objetivo de la norma, que es la protección del desarrollo saludable de los niños infantes. Por lo tanto, no debería ser interpretada restrictivamente en relación con la maternidad biológica, en violación de las disposiciones de la Convención Americana sobre protección de la familia y de los niños.

12. Por tanto, los peticionarios sostienen que el Estado brasileño ha violado los artículos 8

(garantías judiciales), 17 (protección a la familia)[4], 19 (derechos del niño)[5] y 24 (igualdad ante la ley)[6] de la Convención Americana; y que ha incumplido igualmente su obligación general prevista en el artículo 1.1 del mismo instrumento.

13. Por último, durante la reunión de trabajo realizada el 15 de octubre de 2002, los peticionarios reconocieron que hubo avance en la legislación brasileña respecto de la licencia de maternidad, tras la aprobación de la Ley No. 10.421 del 15 de abril de 2002, que extendió a las madres adoptivas el derecho a la licencia de maternidad. Sin perjuicio de lo anterior, los peticionarios resaltaron que la reforma legislativa no alcanzaba retroactivamente a las presuntas víctimas, ni significaba una reparación integral a las mismas.

### B. El Estado

14. El Estado no contestó la denuncia por escrito hasta la fecha de adopción del presente informe, pese a que fue notificado debidamente, y se le fijó el plazo de tres meses previsto en el Reglamento entonces vigente para que presentara sus observaciones sobre la petición.

15. Durante la reunión de trabajo realizada el 15 de octubre de 2002, el Estado solicitó que la CIDH archivara la presente petición, en virtud de que la legislación interna ya había sido modificada; y debido a que la nueva ley no puede ser aplicada retroactivamente para beneficiar a las presuntas víctimas.

## IV. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

### A. Competencia *ratione personae, ratione materiae, ratione temporis* y *ratione loci*

16. Los peticionarios tienen *locus standi* para presentar denuncias ante la CIDH, conforme al artículo 44 de la Convención Americana. La petición indica como presuntas víctimas a Fátima Regina Nascimento de Oliveira y Maura Tatiane Ferreira Alves, respecto a quienes el Estado brasileño se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en dicho instrumento internacional. En lo concerniente al Estado, la República Federativa del Brasil ratificó la Convención Americana el 25 de septiembre de 1992, por tanto la Comisión Interamericana tiene competencia *ratione personae* para examinar la petición.

---

[4] Los peticionarios utilizan también lo dispuesto en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a fin de interpretar la norma de protección a la familia de la Convención Americana (artículo 17).

[5] Los peticionarios utilizan también lo dispuesto en el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en los artículos 3, 5, 18 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de interpretar la norma de protección a los niños de la Convención Americana (artículo 19).

[6] Los peticionarios utilizan también lo dispuesto en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a fin de interpretar las normas de no discriminación de la Convención Americana (artículos 1.1 y 24).

17. La CIDH tiene competencia *ratione loci* para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos humanos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro de la jurisdicción de Brasil, Estado parte en dicho tratado.

18. Asimismo, la Comisión Interamericana tiene competencia *ratione temporis* puesto que se denuncian violaciones a derechos protegidos en la Convención Americana ocurridas en virtud de la decisión del Supremo Tribunal Federal del 30 de mayo de 2000, fecha en la cual la Convención Americana ya se encontraba vigente para Brasil. Por último, la CIDH también tiene competencia *ratione materiae*, toda vez que los peticionarios denuncian presuntas violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana.

**B. Otros requisitos para la admisibilidad de la petición**

**1. Agotamiento de los recursos internos**

19. De conformidad con el artículo 46.1 de la Convención Americana, a efectos de que una petición sea admitida por la Comisión Interamericana, es necesario que se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna de acuerdo con los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.

20. La CIDH observa que es un hecho no controvertido que el 30 de mayo de 2000 fue rechazado en última instancia el reclamo de las presuntas víctimas sobre la licencia de maternidad, a través de la decisión emitida por el Supremo Tribunal Federal. Igualmente, es un hecho no controvertido que dicha decisión hizo cosa juzgada y que fue notificada el 24 de septiembre de 2000.

**2. Plazo de presentación**

21. El artículo 46.1.b de la Convención Americana exige que las peticiones sean presentadas dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de la decisión definitiva. Conforme a lo mencionado *supra*, la decisión definitiva fue notificada el 24 de septiembre de 2000. La petición fue recibida por la CIDH el 22 de marzo de 2001, dentro del plazo de seis meses al que se refiere el artículo 46.1.b de la Convención Americana.

**3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada**

22. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por este u otro órgano internacional. Por ello, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención Americana.

**4. Caracterización de los hechos alegados**

23. El artículo 47.b de la Convención Americana establece que la CIDH declarará

inadmisible toda petición o comunicación presentada cuando "no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención". El criterio de evaluación de esos requisitos difiere del que la Comisión Interamericana utiliza para pronunciarse sobre el fondo de un caso. En efecto, la evaluación se encuentra dirigida a determinar, *prima facie,* si la petición comprende el fundamento de la violación, posible o potencial, de un derecho garantizado por la Convención Americana, y no a establecer la existencia efectiva de una violación de derechos. En otras palabras, esta determinación constituye un análisis primario, que no implica prejuzgar sobre los méritos del asunto[7].

24. La CIDH observa que los peticionarios han denunciado hechos de supuesta discriminación expresada a través de la sentencia del Supremo Tribunal Federal, que habría establecido una distinción sustancial e injustificada entre madres naturales y madres adoptivas. Han alegado asimismo que se ha denegado a la madre adoptiva y a su hija adoptiva el derecho a la licencia de maternidad, lo que vulneraría el derecho a la igualdad ante la ley, la protección a la maternidad y la protección a la niñez. Los hechos denunciados, de ser probados en la etapa de fondo, podrían caracterizar violaciones del artículo 24 de la Convención Americana en perjuicio de las presuntas víctimas.

25. Asimismo, respecto de la presunta violación de la protección a la familia y de los derechos del niño, la Comisión Interamericana considera que, de ser ciertos, los hechos referentes a la presuntamente injustificada distinción efectuada entre familia adoptiva y familia natural para la concesión de la licencia de embarazo, así como entre hijos adoptivos e hijos nacidos de una gestación, podrían caracterizar violaciones de los derechos consagrados en los artículos 17 y 19 de la Convención Americana en perjuicio de las presuntas víctimas.

26. Por último, de ser cierto que la referida decisión del Supremo Tribunal Federal denegó a las presuntas víctimas el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, es decir, el derecho a un recurso efectivo dentro de un plazo razonable, la CIDH considera que lo anterior podría caracterizar violaciones del artículo 8.1 y --en aplicación del principio *iura novit curia*-- del artículo 25.1, ambos de la Convención Americana. Todos los anteriores artículos de la Convención Americana deben ser analizados en relación con la obligación de respetar los derechos, consagrada en el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional.

27. Por lo tanto, la CIDH decide que los peticionarios han acreditado *prima facie* los extremos requeridos en el artículo 47.b. de la Convención Americana.

## V. CONCLUSIONES

28. La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la

7 CIDH, Informe No. 21/04, Petición 12.190, Admisibilidad, José Luís Tapia González y otros (Chile), 24 de febrero de 2004, párrafo. 33.

Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

**LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,**

**DECIDE:**

1. Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 8.1, 17, 19, 24 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general consagrada en el artículo 1.1 de dicho tratado;

2. Notificar la presente decisión a las partes;

3. Continuar con el análisis de fondo del asunto; y

4. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 15 días del mes de marzo de 2010. (Firmado): Felipe González, Presidente; Dinah Shelton, Segunda Vicepresidenta; María Silvia Guillén, José de Jesús Orozco Henríquez y Rodrigo Escobar Gil, Miembros de la Comisión.

**INFORME No. 110/10. PETICIÓN 1560-07. ADMISIBILIDAD. CLAUDINA ISABEL VELASQUEZ PAIZ Y OTROS. GUATEMALA. 4 de octubre de 2010.**

## I. RESUMEN

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Comisión", "Comisión Interamericana" o "CIDH") recibió el 10 de diciembre de 2007 una petición presentada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y Jorge Rolando Velásquez Durán (en adelante "los peticionarios"), en representación de Claudina Isabel Velásquez Paiz, Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velásquez y Pablo Andrés Velásquez Paiz (en adelante "presuntas víctimas"). La petición se presentó en contra del Estado de Guatemala (en adelante "Estado", "Estado guatemalteco" o "Guatemala"), por la falta de investigación del asesinato de Claudina Isabel Velásquez en agosto de 2005 en la ciudad de Guatemala, cometido alegadamente en un contexto de violencia sistemática contra las mujeres.

2. Los peticionarios alegan que el Estado guatemalteco es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección a la honra y dignidad), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "Convención" o "Convención Americana"), en concordancia con la obligación general del artículo 1.1 del citado instrumento internacional y la violación de los artículos 1, 3 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante "Convención de Belém do Pará), en perjuicio de Claudina Isabel Velásquez Paiz. Asimismo alegan la violación de los derechos consagrados en los artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección a la honra y dignidad), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "Convención" o "Convención Americana"), en concordancia con la obligación general del artículo 1.1 del citado instrumento internacional, en perjuicio de los familiares de Claudina Isabel Velásquez, Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velásquez y Pablo Andrés Velásquez Paiz.

3. Por su parte, el Estado sostiene que no se han interpuesto ni agotado los recursos internos idóneos y por tanto la petición debería ser declarada inadmisible. Asimismo, sostiene que la investigación no está concluida, que el Ministerio Público continúa con las acciones de investigación y que se tiene información de presuntos sospechosos para la presentación de una posible acusación.

4. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención

Americana, la Comisión decide declarar el caso admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 11 y 24, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado, así como del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, respecto de Claudina Isabel Velásquez Paiz. Asimismo, decide declarar el caso admisible sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 8.1 y 25, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado respecto de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velásquez y Pablo Andrés Velásquez Paiz. En cuanto a los artículos 11 y 24 de la Convención Americana respecto de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velásquez y Pablo Andrés Velásquez Paiz, la CIDH los declaró inadmisibles. La Comisión decide además, notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

5.

## II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

6. El 10 de diciembre de 2007 la Comisión recibió la petición y le asignó el número 1560-07. El 16 de marzo de 2010, la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado de Guatemala, solicitándole que dentro del plazo de dos meses, presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento de la CIDH. La respuesta del Estado fue recibida el 19 de mayo de 2010. Dicha comunicación fue debidamente trasladada a los peticionarios.

7. Además, la CIDH recibió información de los peticionarios el 19 de marzo de 2010. Dicha comunicación fue debidamente trasladada al Estado.

## III. POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Los peticionarios

8. Los peticionarios alegan que el Estado de Guatemala ha faltado a su deber de investigar con debida diligencia el asesinato de Claudina Isabel Velásquez, estudiante de derecho de 19 años de edad y sostienen que el caso continúa en la impunidad. Indican que el asesinato de la presunta víctima se enmarca dentro del contexto general de impunidad y denegación de justicia que enfrentan las mujeres víctimas de violencia en Guatemala y que ha sido documentado tanto nacional como internacionalmente.

9. Indican que Claudina Isabel Velásquez, desapareció el 12 de agosto de 2005. Informan que la última vez que se comunicó con su familia fue ese día a las 11.45 p.m. cuando avisó que estaba en una fiesta y que llegaría a su casa después de medianoche. Al no llegar a la casa, sostienen que los padres de Claudina Isabel Velásquez iniciaron su búsqueda. Intentaron presentar una denuncia a las 3 am y a las 5 am del 13 de agosto, pero representantes de la Policía Nacional Civil se negaron a recibirlas, indicando que se requería que transcurrieran 24 horas desde la desaparición. Asimismo, les habrían comentado a los padres que seguramente se había ido con su traído (novio). Las autoridades aceptaron recibir la denuncia a las 8.30 am, pero sin iniciar la búsqueda de Claudina Isabel

Velásquez.

10.Según los peticionarios, los padres, familiares y amigos continuaban buscando a Claudina Isabel Velásquez, cuando a las 10.30 am del mismo día los familiares recibieron la llamada de un amigo que indicó que en la morgue del Servicio Médico Forense del Organismo Judicial había un cuerpo no identificado con las características de Claudina Isabel Velásquez. Los familiares se apersonaron a la morgue, identificaron a su hija y retiraron el cadáver para hacer los ritos funerarios con la autorización de funcionarios del Servicio Médico Forense, quienes les indicaron que ya no había más diligencias de investigación que realizar. Alegan que la presunta víctima habría sido golpeada, violada y asesinada de un disparo en la frente.

11.Informan que durante el velatorio del cuerpo, se presentaron funcionarios del Ministerio Público pertenecientes al Grupo de Especialistas de la Escena del Crimen, para tomarle las huellas dactilares al cadáver. Indican que frente a dicha situación, la familia se sintió ofendida y humillada porque dichas pruebas deberían haberse practicado previamente.

12.Respecto de la investigación de los hechos, indican la ausencia de medidas de averiguación durante las primeras cuarenta y ocho horas. Sostienen que el Ministerio Público entrevistó a los padres de la presunta víctima cuarenta días después del suceso y no identificó de inmediato a personas que estuvieron o que se comunicaron con Claudina Isabel Velásquez la noche en que ocurrieron los hechos. Asimismo, sostienen que el proceso de investigación fue lento e impulsado por presión del padre de Claudina Isabel, que en su calidad de querellante adhesivo, ha exigido la realización de investigaciones y señalado los errores cometidos durante la misma.

13.Aducen una serie de irregularidades en la investigación del caso en que han incurrido los organismos estatales y que han propiciado que el caso siga en la impunidad. Sostienen que el cadáver fue localizado el 13 de agosto de 2005 a las 5.30 am en la zona 11 de la ciudad de Guatemala por agentes de la Policía Nacional Civil, que acudieron en respuesta a una llamada telefónica anónima. En el procesamiento de la escena del crimen, el cuerpo fue levantado como XX, sin que si hiciera un esfuerzo por identificar a la víctima. A una hora no precisada, sostienen que el cuerpo fue trasladado a la morgue del Servicio Médico Forense del Organismo Judicial, en una unidad común y no en un vehículo refrigerado. Asimismo, indican que hubo imprecisión sobre la duración del procedimiento en la investigación de la escena del crimen y omisión de tomar testimonio a los agentes que accedieron al cadáver. Igualmente, indican la falta de recolección, aseguramiento y búsqueda de evidencias ya que sólo se recabó como evidencia el suéter y no toda la ropa que llevaba puesta.

14.Agregan que el informe del médico forense, presentado 17 días después de ocurridos los hechos, tuvo una serie de deficiencias entre las que destacan: indeterminación de la hora de la muerte, falta de consignación de manchas de sangre y de las heridas reportadas en el álbum fotográfico, indeterminación de la posición del cadáver, falta de recolección de evidencia. Igualmente sostienen que se habrían constatado deficiencias similares en el

examen e informe médico forense del Organismo Judicial como: falta de identificación de los funcionarios que participaron en la necropsia, falta de identificación del cadáver, errores en la determinación de la hora aproximada de muerte, entre otras. Sostienen que asimismo hubo deficiencias en el tratamiento de la evidencia para peritajes científicos y que hubo error en las fechas del dictamen balístico.

15. Destacan que gran parte de las deficiencias obedecen a que los responsables de levantar la escena del crimen consideraron que no se debía profundizar en la investigación porque a su criterio, la presunta víctima –por el barrio de clase media baja donde apareció el cuerpo, por llevar sandalias, una gargantilla y arete en el ombligo - encuadraba en el perfil de una persona que había provocado, propiciado o inducido su muerte. De esta forma discriminatoria, sostienen que se etiquetó a la presunta víctima como posible integrante de una pandilla juvenil o una sexo-servidora y por ello el desinterés por realizar una investigación seria y profesional.

16. Argumentan que el asesinato de la presunta víctima no es un hecho aislado, porque existe un patrón de violencia contra las mujeres en el Estado de Guatemala, que en los últimos años ha derivado en un aumento dramático del número de asesinatos por razón de género. Indican que desde el 2001, más de 3.000 mujeres y niñas han sido asesinadas y la tasa de asesinatos sigue en aumento. Explican que muchos de los asesinatos se han caracterizado por una brutalidad excepcional, siendo numerosas víctimas objeto de violencia sexual, mutilación y descuartizamientos. Señalan que a pesar de que esta situación ha suscitado gran preocupación a nivel nacional e internacional, en Guatemala se siguen asesinando mujeres y niñas con total impunidad.

17. Sostienen que las irregularidades en la investigación del asesinato de Claudina Isabel fueron denunciadas ante la Supervisión del Ministerio Público, organismo que en mayo de 2006 emitió un informe reconociendo que se dio un tratamiento inadecuado a la víctima, a sus padres y a sus familiares. Indican que estas falencias también fueron señaladas por un informe que hizo el Procurador de Derechos Humanos sobre las deficiencias de investigación encontradas en este caso, emitido el 24 de octubre de 2006.

18. En cuanto a la familia de Claudina Isabel, sostienen que han enfrentado un sistema de justicia que ha tratado por todos los medios de hacerlos desistir en su búsqueda por encontrar a los culpables. Desde el inicio de la investigación, expresan que la familia de la presunta víctima ha sido sometida a una revictimización secundaria. Primero, cuando funcionarios del Ministerio Público acudieron a la capilla funeraria cuando estaban velando los restos de Claudina Isabel Velásquez para efectuar el levantamiento de la ficha dactilar. Posteriormente, han tenido que sufrir la indiferencia, desprecio y falta de interés de los fiscales y funcionarios que han conocido el caso, lo que los ha obligado a relatar el mismo hecho innumerables veces.

19. Respecto del agotamiento de los recursos internos, indican que han pasado varios años desde el asesinato de Claudina Isabel Velásquez y el caso sigue en la etapa de investigación. A pesar de los esfuerzos de la familia, particularmente el padre que se constituyó en

querellante adhesivo, indican que no existe interés en investigar, ni en determinar la responsabilidad de los autores y por ello sostienen que la regla del previo agotamiento de los recursos internos no tiene aplicación en virtud del artículo 46.2 de la Convención Americana.

## B. El Estado

20. El Estado alega que la muerte de Claudina Isabel Velásquez ocurrió el sábado 13 de agosto de 2005 entre las 02:12 y 05:00 horas, en base a una llamada realizada al número 110 de la Policía Nacional Civil en donde se reportó una posible violación, así como la declaración de la Sra. Concepción de María Méndez, quien indicó haber escuchado un disparo fuera de su residencia, frente a la cual se localizó el cadáver que posteriormente fue identificado como Claudina Isabel Velásquez Paiz. A las 05.00 horas fue encontrado su cuerpo sin vida a causa de un disparo producido por proyecto de arma de fuego en la región frontal izquierda del cráneo, en la 10ª Avenida frente al 8-87 "A" colonia Roosevelt zona 11 de la Ciudad Capital.

21. Desde la desaparición y muerte de Claudina Velásquez hasta la presente fecha, el Estado indica que el Ministerio Público ha realizado diversas diligencias y se han seguido diferentes líneas de investigación. Sostiene que desde el momento en que tuvo conocimiento de la muerte de Claudina Isabel Velásquez, el Ministerio Público ha actuado conforme a su mandato. Los auxiliares de justicia que conocieron del hecho en 2005, realizaron acciones de urgencia para recabar evidencia, acciones "que fueron mal vistas por la familia Velásquez Paiz, por lo que los auxiliares de justicia tuvieron las sanciones correspondientes".

22. Dentro de las acciones realizadas por la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, COPREDEH, indica que se tuvo reunión con la fiscal de sección encargada del caso y se establecieron las diligencias realizadas, cotejando los documentos enviados como prueba del Sr. Velásquez, haciendo constar la fiscal, que desde que se tuvo conocimiento de la muerte, la investigación no ha dejado de tener movimiento y que se encuentra en una etapa medular respecto de la presentación de la acusación correspondiente dentro del proceso penal interno[8].

23. Alega que hay acciones de la investigación que no se pueden mencionar, en virtud de que entorpecería la investigación que realiza la Fiscalía. Sin embargo, las acciones que ha realizado el Ministerio Público a la fecha, muestran el interés y la línea de investigación del Estado de identificar a los principales culpables de la muerte de Claudina Isabel Velásquez, acciones que son informadas mensualmente al Sr. Jorge Rolando Velásquez.

24. Respecto del agotamiento de los recursos internos, el Estado sostiene que no se han agotado los recursos internos y por tanto la petición debería ser declarada inadmisible. El Estado argumenta que la investigación penal se encuentra en marcha.

[8] Comunicación del Estado de fecha 17 de mayo de 2010.

## IV. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

### A. Competencia de la Comisión *ratione personæ, ratione loci, ratione temporis* y *ratione materiæ*

25. Los peticionarios se encuentran facultados, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a cuatro personas individuales, respecto de quienes el Estado de Guatemala se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Guatemala es un Estado parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Además, Guatemala es parte de la Convención de Belém do Pará desde el 4 de abril de 1995. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia *ratione personae* para examinar la petición. Asimismo, la Comisión tiene competencia *ratione loci* para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará que habrían tenido lugar dentro del territorio de Guatemala, Estado Parte en dicho tratado.

26. La Comisión tiene competencia *ratione temporis* por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana y en la Convención de Belém do Pará ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia *ratione materiae*, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.

### B. Otros requisitos para la admisibilidad de la petición

#### 1. Agotamiento de los recursos internos

27. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, tener la oportunidad de solucionarla antes de que sea conocida por una instancia internacional. El artículo 46.2 de la Convención por su parte establece tres supuestos en los que no se aplica la regla del agotamiento de los recursos internos: a) que no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y c) que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Estos supuestos no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también que estos sean adecuados y efectivos.

28. En el presente caso, el Estado sostiene que no se han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna y que la investigación penal se encuentra en marcha. Ahora bien, cuando un Estado alega que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, tiene a su cargo señalar cuáles deben agotarse y demostrar su efectividad. En tal caso, pasa a los peticionarios la carga procesal de demostrar que dichos recursos fueron agotados o que se configura alguna de las excepciones del artículo 46.2 de la Convención Americana.

29. Los peticionarios señalan que han pasado cinco años desde el asesinato de Claudina Isabel Velásquez y el caso sigue en la etapa de investigación. Ello, a pesar de los esfuerzos de la familia, particularmente el padre que se constituyó en querellante adhesivo para impulsar la investigación. Sin embargo, indican que no ha sido suficiente para lograr un interés en investigar y determinar la responsabilidad de los autores. Por ello, sostienen que se aplica una excepción a la regla del previo agotamiento de los recursos internos en virtud del artículo 46.2 de la Convención Americana.

30. Sin entrar a analizar los argumentos desarrollados por las partes acerca de la presunta violación de las garantías judiciales y protección judicial, la Comisión observa que han pasado cinco años desde que Claudina Isabel Velásquez fue hallada muerta, sin que a la fecha de la elaboración del presente informe los representantes del Estado hayan proporcionado información concreta sobre la conclusión del proceso o sobre las medidas dispuestas para que avance más allá de la etapa inicial de investigación. El Estado tampoco ha informado a la Comisión acerca de diligencias recientes llevadas a cabo por el Estado o avances que conducirían a esclarecer los hechos y a sancionar a los responsables. El Estado guatemalteco se limita a mencionar que se encuentra en una etapa medular en la línea de investigación, más no presenta información específica que permita concluir que la investigación está revestida de la idoneidad y efectividad en el presente análisis del requerimiento de agotamiento previo.

31. Igualmente, la Comisión Interamericana observa que los peticionarios alegan que los hechos del presente caso se dan en un contexto de numerosos homicidios y desapariciones de mujeres en Guatemala, de los cuales la mayoría son casos no resueltos por las autoridades del Estado, perpetuando la impunidad de actos de violencia contra las mujeres.

32. En consecuencia, la Comisión Interamericana establece –a efectos de la admisibilidad– que se ha verificado un retardo injustificado por parte de los órganos jurisdiccionales guatemaltecos respecto a los hechos denunciados. En consecuencia, la CIDH aplica al presente asunto la excepción al agotamiento de los recursos internos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana.

**2. Plazo para presentar la petición**

33. Con relación al requisito contemplado en el artículo 46.1.b de la Convención, conforme al cual la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos, la

Comisión considera que tampoco resulta aplicable el cumplimiento de tal plazo, toda vez que la petición fue presentada dentro del plazo razonable mencionado en el artículo 32.2 de su Reglamento para los casos en los cuales no se ha dictado sentencia firme con anterioridad a la presentación de la petición.

### 3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

34. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.

### 4. Caracterización de los hechos alegados

35. La Comisión considera que no corresponde en esta etapa del procedimiento decidir si se produjeron o no las alegadas violaciones en perjuicio de las presuntas víctimas. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver en este momento únicamente si se exponen hechos que, de ser probados, caracterizarían violaciones a la Convención Americana, como lo estipula el artículo 47.b de la misma, y si la petición es "manifiestamente infundada" o si es "evidente su total improcedencia", según el inciso (c) del mismo artículo.

36. El criterio para la apreciación de estos extremos es diferente al requerido para pronunciarse sobre los méritos de una denuncia. La CIDH debe realizar una evaluación *prima facie* y determinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención Americana, mas no establecer la existencia de dicha violación[9]. En la presente etapa corresponde efectuar un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo. El propio Reglamento de la Comisión Interamericana, al establecer una fase de admisibilidad y otra de fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión Interamericana a fin de declarar una petición admisible y la requerida para establecer si se ha cometido una violación imputable al Estado[10].

37. En este sentido, la CIDH considera que los hechos alegados respecto de Claudina Isabel Velásquez Paiz, en caso de resultar probados, caracterizarían presuntas violaciones de los derechos garantizados en los artículos 5, 11 y 24 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1(1) de dicho instrumento internacional. Asimismo, la CIDH considera que los hechos expuestos podrían caracterizar una violación del artículo 4 de la Convención

---

[9] Ver CIDH, Informe No. 128/01, Caso 12.367, *Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser del Diario "La Nación"* (Costa Rica), 3 de diciembre de 2001, párr. 50; Informe No. 4/04, Petición 12.324, *Rubén Luis Godoy* (Argentina), 24 de febrero de 2004, pár. 43; Informe No. 32/07, Petición 429-05, *Juan Patricio Marileo Saravia y Otros* (Chile), 23 de abril de 2007, párr. 54.

[10] Ver CIDH, Informe No. 31/03, Caso 12.195, *Mario Alberto Jara Oñate y otros* (Chile), 7 de marzo de 2003, párr. 41; Informe No. 4/04, Petición 12.324, *Rubén Luis Godoy* (Argentina), 24 de febrero de 2004, párr. 43; Petición 429-05, *Juan Patricio Marileo Saravia y Otros* (Chile), 23 de abril de 2007, párr. 54; Petición 581-05, *Víctor Manuel Ancalaf LLaupe* (Chile), 2 de mayo de 2007, párr 46.

Americana, respecto a los deberes de prevención y protección del Estado, y a la luz de las obligaciones generales de garantía de la Convención Americana y de la Convención de Belém do Pará. Igualmente, la CIDH considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.

38. La CIDH decide además declarar el caso admisible sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 8.1 y 25, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado respecto de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velásquez y Pablo Andrés Velásquez Paiz. La CIDH observa que la información presentada no ofrece elementos suficientes que caractericen una violación a los derechos protegidos en los artículos 11 y 24 de la Convención Americana, respecto de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velásquez y Pablo Andrés Velásquez Paiz.

## V. CONCLUSIONES

39. La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y decide continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 4, 5, 11 y 24, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado, así como del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará respecto de Claudina Isabel Velásquez Paiz. Asimismo, decide declarar el caso admisible sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 8.1 y 25, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado respecto de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velásquez y Pablo Andrés Velásquez Paiz.

40. Asimismo concluye que la presente petición es inadmisible en cuanto se refiere a presuntas violaciones a los derechos reconocidos en los artículos 11 y 24 de la Convención Americana, respecto de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velásquez y Pablo Andrés Velásquez Paiz.

41. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,

**LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,**

**DECIDE:**

1. Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 4, 5, 11 y 24, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado, así como del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará respecto de Claudina Isabel Velásquez Paiz. Asimismo, decide declarar el caso admisible sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 8.1 y 25, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado respecto de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velásquez y Pablo Andrés Velásquez Paiz.

2. Declarar inadmisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones a

los derechos reconocidos en los artículos 11 y 24 de la Convención Americana, respecto de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velásquez y Pablo Andrés Velásquez Paiz.

3. Notificar esta decisión a las partes.

4. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Aprobado a los 4 días del mes de octubre de 2010. (Firmado): Felipe González, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Dinah Shelton, Segunda Vicepresidenta; María Silvia Guillén, José de Jesús Orozco Henríquez y Rodrigo Escobar Gil, Miembros de la Comisión.

**INFORME NO. 149/10. ADMISIBILIDAD. PETICIÓN 1147-05. M.P.C. Y FAMILIARES. PERÚ. 1 DE NOVIEMBRE DE 2010.**

## RESUMEN


1. El 14 de diciembre de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la "Comisión Interamericana" o la "CIDH") recibió una denuncia por fax en la cual se alega la responsabilidad internacional del Estado de Perú por irregularidades y violaciones a las garantías judiciales y al debido proceso en la investigación penal de la agresión sexual perpetrada contra M.P.C. (en adelante también "la presunta víctima")[11], una niña de 13 años de edad, por un particular, en la provincia de Sicuani. La petición fue presentada por F.P.C., la hermana de M.P.C., y por la organización Manuela Ramos (en adelante "las peticionarias").

2. Las peticionarias sostienen que los hechos configuran la violación de los siguientes derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la "Convención Americana"): el derecho a las debidas garantías judiciales (artículo 8), el derecho a la protección judicial (artículo 25) y los derechos del niño (artículo 19), establecidos en la Convención Americana. Las peticionarias igualmente sostienen la violación de los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (la "Convención Belém do Pará"), y la violación general de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ("CEDAW").

3. El Estado, por su parte, solicita que se declare inadmisible la petición dado que no cumple con los requisitos de admisibilidad presentes en la Convención Americana. Igualmente considera improcedente la petición dado que los hechos no caracterizan violaciones de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana. En este sentido, el Estado alega que durante el proceso penal emprendido en contra del presunto agresor de M.P.C. se respetaron todas las garantías del debido proceso, la presunta víctima tuvo la oportunidad de hacer uso de todos los recursos disponibles, y se le otorgó la debida protección especial en virtud de su condición de menor. Asimismo, considera que el admitir esta petición obligaría a la CIDH a actuar como un tribunal de "cuarta instancia" para revertir un fallo no favorable a las peticionarias.

4. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que la petición es admisible, a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide continuar con el análisis de fondo relativo a la


[11] La CIDH reserva la identidad de la presunta víctima en base a la solicitud expresa de las peticionarias. Véase, Observaciones adicionales de las peticionarias, recibidas el 12 de abril de 2006.

presunta violación de los artículos 2, 8(1), 24 y 25(1) de la Convención Americana, todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos prevista en el artículo 1(1) en perjuicio de M.P.C. y F.P.C. Asimismo, analizará en la etapa de fondo la presunta violación del artículo 19 de la Convención Americana y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de M.P.C. Finalmente, revisará en la etapa de fondo la presunta violación del artículo 5(1) de la Convención Americana en perjuicio de M.P.C. y sus familiares. Con respecto a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Convención de Belém do Pará, la Comisión tomará estos en cuenta en la medida relevante, en su interpretación del artículo 7 de la misma Convención durante la etapa de fondo, y analizará en el mismo sentido el artículo 9 de dicha Convención. Además, decide notificar a las partes y ordenar la publicación de su decisión en el Informe a la Asamblea General de la OEA.

## 1. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. La petición fue recibida por la CIDH por fax el 14 de diciembre de 2005 y fue registrada bajo el número P-1147-05. La CIDH recibió observaciones adicionales de las peticionarias el 12 de abril de 2006. El 7 de julio de 2009, la CIDH trasmitió copia de las partes pertinentes de la petición al Estado, con un plazo de dos meses para presentar información de conformidad con el artículo 30 del Reglamento. La respuesta del Estado fue recibida el 4 de septiembre de 2009.

6. Asimismo, la CIDH recibió observaciones adicionales de las peticionarias el 29 de diciembre de 2009 y el 27 de mayo de 2010, las cuales fueron debidamente trasladadas al Estado.

7. El Estado presentó sus observaciones adicionales el 4 de marzo y el 16 de julio de 2010, las cuales fueron debidamente trasladadas a las peticionarias.

## 2. POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Posición de las peticionarias

8. Las peticionarias alegan que varios derechos de M.P.C. fueron violados durante el proceso penal relacionado al abuso sexual que M.P.C. presuntamente sufrió cuando tenía 13 años de edad. Aducen especialmente que las autoridades a cargo fallaron en su deber de actuar con la debida diligencia requerida para investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia sexual sufridos por M.P.C., lo cual fue particularmente grave en este caso en razón de la minoría de edad de la víctima y el haber quedado embarazada como consecuencia de los hechos. En especial, sostienen que las autoridades no investigaron debidamente los hechos conforme a lo establecido en la legislación penal; que fueron negligentes en la realización y valoración de las pruebas necesarias para acreditar el delito de violación sexual; que las autoridades judiciales no fueron imparciales durante el proceso; y que el Estado no cumplió con su deber de protección especial de M.P.C. como niña a lo largo del proceso penal. Asimismo, arguyen que la hermana de M.P.C y su madre F.C.C. han sido víctimas de amenazas por parte del agresor que significan un riesgo para su

integridad personal, y que han solicitado la protección del Estado sin haber obtenido una respuesta al respecto.

9. Las peticionarias sostienen en específico que F.U.H., de 37 años de edad, violó a M.P.C. en dos ocasiones, la primera cuando ella tenía 13 años de edad, y la segunda cuando tenía 14. Al conocer de los hechos, F.P.C., hermana de M.P.C. y de 23 años de edad, interpuso una denuncia el 16 de febrero de 2005 ante la Comisaría de Torocoma de la provincia de Sicuani (en adelante "Comisaría"), alegando que el abuso sexual ocurrió el 13 de abril y el 20 de mayo de 2004 cuando M.P.C. se encontraba durmiendo, y que quedó embarazada como resultado. F.P.C. asimismo informó que el presunto agresor era amigo de la familia y ayudaba a los padres de M.P.C. con labores agrícolas. Los intereses de M.P.C. durante el proceso penal fueron representados por F.P.C., quien se constituyó como parte civil en el proceso.

10. En su declaración inicial ante la Comisaría, la presunta víctima M.P.C. manifestó que fue abusada sexualmente en dos ocasiones mientras estaba durmiendo, que los hechos ocurrieron sin su consentimiento, y que no contó lo sucedido por tener vergüenza y por las amenazas del denunciado hacia ella y a sus familiares. También comunicó que después de los hechos el presunto agresor le dio dinero, golosinas, y galletas para que no les comunicara los hechos a sus padres. F.U.H. por su parte reconoció ante la Comisaría el haber tenido relaciones sexuales con M.P.C. en dos oportunidades – a finales de abril y a finales de mayo de 2004 - en su domicilio mientras M.P.C. dormía. También confirmó que la niña que dio a luz M.P.C. el 20 de febrero de 2005 es su hija, y que le dio dinero, golosinas, galletas y frutas a M.P.C. Reconoció asimismo que el tener relaciones sexuales con una menor es un delito. Al conocer del embarazo de la presunta víctima en noviembre de 2004, F.U.H. constató que llegó a un acuerdo con los padres de M.P.C. para hacerse cargo de los gastos asociados con la crianza de la niña, y les suplicó que no lo denunciaran ante las autoridades.

11. Las peticionarias indican que posteriormente a la denuncia, la policía no investigó los hechos de violencia sexual de forma exhaustiva, a pesar de que el inculpado reconoció haber tenido relaciones sexuales con M.P.C. en su declaración inicial ante la Comisaría. Sostienen que sólo se le practicó un examen médico legal a M.P.C. el 17 de febrero de 2005, el cual no demostró evidencia de lesiones físicas, sin realizarse ningún otro peritaje psicológico o psiquiátrico que pudiera verificar otras posibles secuelas del presunto abuso sexual.

12. Informan que la Comisaría el 24 de febrero de 2005 remitió los resultados de dicha investigación a la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Canchis (en adelante "Segunda Fiscalía"), quien de forma deficiente formuló la denuncia penal por los hechos de violencia sexual cometidos contra M.P.C. en base al artículo 170 del Código Penal de Perú. Alegan que el artículo 170 contempla la sanción de la violación sexual de personas mayores de 14 años y establece como elementos del tipo penal la utilización de violencia o grave amenaza para la configuración del delito. Entienden que dado que el primer acto de violencia sexual ocurrió cuando la presunta víctima tenía 13 años, se debió haber iniciado un proceso penal

con base en el artículo 173, el cual no requiere dichos elementos para probar el delito. Indican que F.P.C. presentó una solicitud de ampliación de la instrucción del proceso confirmando que la primera violación ocurrió el 13 de abril de 2004, cuando la víctima aún tenía 13 años de edad, pero que dicha solicitud fue negada por la Segunda Fiscalía por no existir suficiente prueba.

13. En consecuencia, las peticionarias aducen que el 10 de junio de 2005, la Segunda Fiscalía emitió un dictamen en el que opinó por el archivo definitivo de la causa, con fundamento en el artículo 170 del Código Penal considerando que no existían medios probatorios contundentes que acreditaran la violación sexual. La Segunda Fiscalía consideró que no se había probado de forma fehaciente que el procesado hubiera utilizado la violencia o la grave amenaza para tener relaciones sexuales con M.P.C. Indicó que las declaraciones de los familiares de la víctima sólo se referían al hecho que M.P.C. no tenía una relación sentimental con el presunto agresor, y el certificado médico legal practicado a M.P.C. concluyó únicamente que tenía "himen complaciente, no signos de acto contra natura, gestación aproximada de 39 semanas". La Fiscalía alegadamente otorgó mayor peso a la declaración del presunto agresor en el marco del proceso penal en donde asevera que tenía una relación sentimental y sexual consentida con M.P.C., de la cual sus padres conocían y que convivía con ella, y a los testimonios aportados por miembros de la comunidad confirmando esta versión de los hechos. Durante el proceso penal, M.P.C. rindió declaración judicial, en donde ratificó su declaración ante la Comisaría, además indicando que nunca tuvo una relación sentimental con F.U.H., y que fue sedada por el presunto agresor para facilitar el abuso sexual.

14. En virtud del archivo de la causa, las peticionarias indican que se solicitó al Juez del Segundo Juzgado Penal de Canchis que emitiera una discrepancia[12], por lo que se remitió el asunto a la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Sicuani (en adelante "Fiscalía Superior"). La peticionaria indica que el 14 de julio del 2005, la Fiscalía Superior, consideró que no existían pruebas fehacientes que demostraran de forma objetiva que el acusado hubiera tenido relacionales sexuales con la presunta víctima empleando violencia o grave amenaza, y se pronunció de igual forma por el archivo de la causa. Por lo tanto, el Segundo Juzgado Penal de Canchis emitió un auto de archivamiento definitivo del caso, que dejó el delito en la impunidad. Señalan que ante esta decisión, se interpuso un recurso de apelación que fue resuelto por la Sala Mixta Descentralizada de Sicuani. El 27 de septiembre de 2005, la Sala Mixta confirmó la resolución apelada que dispuso el archivo de la causa penal, estableciendo que la acción penal era de titularidad exclusiva del Ministerio Público y que el órgano judicial no podía modificar las determinaciones de aquel.

15. Asimismo, informan que el 6 de julio de 2005 fue presentada una solicitud de garantías personales por la hermana y madre de M.P.C., debido a que al presunto responsable lo

[12] De acuerdo con el artículo 220 inciso c) del Código de Procedimientos Penales de Perú vigente en la época de los hechos, en caso de discrepancia del Juez respecto de la opinión del Fiscal del archivamiento de la causa, se debe solicitar la opinión de la Fiscalía Superior. Véase, Petición inicial recibida el 14 de diciembre de 2005. Anexos. Auto de Discrepancia, Resolución Nro. 20, de fecha 28 de junio de 2005.

dejaron en libertad y comenzó a amenazar a la familia. Indican que no les fue notificada una resolución sobre dicha solicitud.

16. En general, las peticionarias consideran que el Estado violó tanto las garantías judiciales como el deber de protección especial de M.P.C. por su condición de niña, al no realizar las diligencias necesarias para investigar y sancionar los hechos de violencia sexual denunciados. Sostienen que el proceso penal culminó sin la recopilación de los medios probatorios indispensables para el esclarecimiento de este tipo de delitos, lo cual resultó en el archivo de la causa. Indican que como sucede en delitos de violación sexual contra las niñas en Perú, las investigaciones "siempre están de lado del inculpado" y los jueces exigen pruebas de las víctimas "imposibles de actuar en esta clase de delitos", como pruebas de violencia física o resistencia de las víctimas ante la agresión.

17. Finalmente, las peticionarias señalan que el Estado no garantizó un trato igualitario a M.P.C. en su acceso a las instancias de justicia, en contravención de la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. Aducen que las autoridades ministeriales y judiciales carecieron de imparcialidad y objetividad en la investigación y juzgamiento de los hechos de violencia sexual, en contravención de los parámetros internacionales de derechos humanos. Sostienen que como ocurre usualmente en los delitos de violencia sexual, las declaraciones de M.P.C. fueron desacreditadas durante el proceso penal y su credibilidad fue valorada en base a estereotipos de género discriminatorios hacia las mujeres.

**B. Posición del Estado**

18. El Estado solicita que la petición sea declarada inadmisible dado que no cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad establecidos en el artículo 47 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 34 del Reglamento, y que los hechos descritos no caracterizan violaciones a los derechos humanos. El Estado igualmente considera que el admitir esta petición obligaría a la CIDH a actuar como un tribunal de "cuarta instancia" para revertir un fallo desfavorable a las peticionarias dictado en la jurisdicción interna.

19. En primer lugar, el Estado aduce que los hechos fueron denunciados ante las autoridades competentes quienes realizaron la investigación correspondiente y ordenaron la detención del acusado para asegurar su presencia en el proceso. Sostiene que luego de llevarse a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía concluyó que las pruebas actuadas en el proceso no acreditaban la comisión del delito y la responsabilidad del procesado, ya que no se acreditó fehacientemente la violencia o grave amenaza. El Estado asimismo asevera que de las declaraciones testimoniales se desprende que el procesado y la menor agraviada se conducían frente a la comunidad como convivientes.

20. Como medio probatorio, el Estado presenta un informe de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, de fecha de 26 de febrero de 2010, sobre el presente reclamo, en donde

establece que todo el proceso penal referido se ha seguido con respeto a las garantías no sólo procesales sino constitucionales. El informe determina que:

Por lo que, consideramos que el Poder Judicial como ente autónomo encargado de impartir Justicia y ejerciendo el Control difuso que le encarga nuestra Constitución Política, ha realizado la investigación judicial durante su etapa de instrucción, la que oportunamente dio mérito a establecer que la conducta realizada por el agente − teniendo en cuenta la ubicación del espacio de la realización del hecho-, no constituía más que una conducta estereotipada o neutral, ya que es usual en las serranías peruanas la relación convivencial que existen entre personas de mayor edad con personas que − como este caso -, aun no adquieran la capacidad de goce y ejercicio[13].

21. El Estado señala asimismo que conforme al delito de violación sexual establecido en el artículo 170 del Código Penal, vigente para la fecha de los hechos, la violencia o grave amenaza constituían elementos normativos necesarios que debían acreditarse para la configuración de la comisión del delito. En el presente caso no existieron las pruebas idóneas y suficientes que demostraran que el inculpado hubiese tenido relaciones sexuales con la agraviada empleando "amenaza o violencia". En este sentido, el nexo causal entre el fenómeno delictual y el sujeto imputado debe quedar acreditado de forma irrefutable, lo que no aconteció en este caso.

22. Sostiene que el Ministerio Público es el único titular de la acción penal pública de acuerdo con la Constitución de Perú y la Ley Orgánica del Ministerio Público, y el Poder Judicial sólo puede resolver un asunto cuando existe ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, cuando no existe acción penal ni pretensión punitiva del Ministerio Público, "el Poder Judicial no puede compeler a aquel a sostener una pretensión como la aludida y menos arrogarse la calidad de sujeto procesal para modificar dicha determinación"[14]. Por lo tanto, el Estado sostiene que en dicho caso se respetaron todas las garantías de un debido proceso más aún si se toma en cuenta que la parte agraviada tuvo la oportunidad de recurrir a un superior jerárquico con la finalidad de revisar el fallo, haciendo uso de todos los recursos disponibles en el proceso.

23. En cuanto a las violaciones a las garantías judiciales alegadas por las peticionarias, el Estado entiende que el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente establecido en el artículo 8 de la Convención Americana, exige que "todo juez que interviene en un proceso se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de cualquier tipo de prejuicio"[15] y se ofrezcan garantías objetivas durante el proceso. En el presente caso, considera que no se han configurado violaciones al derecho a la protección judicial ya que las peticionarias han sido oídas en todo momento por jueces competentes, imparciales e independientes. De lo contrario, el Estado sostiene que hubieran operado mecanismos como la recusación establecida en el artículo 31 del Código Procesal Penal.

---

[13] Observaciones del Estado recibidas el 16 de julio de 2010, Anexo No. 1, Informe No. 209-2010-JUS/PPES, elaborado por la Procuraduría Pública Especializada Supranacional.
[14] Respuesta del Estado de Perú recibida el 4 de septiembre de 2009.
[15] Observaciones adicionales del Estado recibidas el 4 de marzo de 2010.

24. El Estado asimismo observa que en el proceso se actuaron las pruebas determinantes y que se consideraron pertinentes al caso concreto como el examen del médico legista. Respecto a la inspección judicial que las peticionarias alegan haber solicitado, el Estado aduce que ésta no llevaría a establecer "la dimensión del injusto, al menos para este tipo de delitos donde el examen médico y su ratificación son más oportunos"[16]. Por otra parte, las declaraciones de la presunta víctima como las de su familia fueron tomadas en cuenta, en confrontación con las de los testigos y las del procesado, no habiéndose demostrado que se haya tenido relaciones sexuales con la agraviada cuando tenía 13 años de edad por medio de violencia o amenazas. Por lo tanto, la Segunda Fiscalía emitió un dictamen el 10 de junio de 2005 en el que consideró que se debía archivar definitivamente el proceso por falta de acreditación de estos elementos (violencia o amenaza) en la práctica del acto sexual.

25. Asimismo, el Estado sostiene que el Juez realizó la conducción del proceso penal con respeto a las garantías procesales y constitucionales. En este sentido alega que el archivo definitivo del proceso que fue materia de la apelación demostró que el juez tomando en cuenta la garantía de la independencia judicial y el derecho a la presunción de inocencia, establecidos en al artículo 8(2) de la CADH y de la Constitución peruana, optó por sobreseer la acción penal y archivar la causa ya que no se acreditó fehacientemente la responsabilidad del presunto agresor en el hecho denunciado.

26. Respecto de la violación a los derechos del niño, el Estado condena toda forma de vulneración de los derechos de los niños pues su condición exige una protección especial estatal que debe ser entendida como derecho complementario de los demás derechos reconocidos a las personas en la Convención. Considera que el aparato estatal le brindó a las peticionarias el acceso a los recursos, al debido proceso y a tutela judicial debida, por lo que se brindó la atención requerida dentro del proceso penal en su condición de menor.

## 3. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD

### A. Competencia *ratione personae, ratione loci, ratione temporis* y *ratione materiae* de la Comisión

27. Las peticionarias se encuentran facultadas, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a M.P.C., respecto de quien el Estado de Perú se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Perú es un Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo, y es igualmente parte de la Convención de Belém do Pará desde el 4 de junio de 1996. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia *ratione personae* para examinar la petición. La Comisión tiene competencia *ratione loci* para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención

[16] Observaciones adicionales del Estado recibidas el 4 de marzo de 2010.

Americana y la Convención de Belém do Pará que habrían tenido lugar dentro del territorio de Perú, Estado parte de dicho tratado.

28. La Comisión tiene competencia *ratione temporis* por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana y de la Convención de Belém do Pará ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. La Comisión tiene competencia *ratione materiae*, porque en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.

29. La Comisión no tiene competencia *ratione materiae* para pronunciarse directamente sobre violaciones a los artículos de la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Sin embargo, de acuerdo con los términos del artículo 29 de la Convención Americana, así como con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados[17], en determinadas circunstancias, la Comisión debe hacer referencia a otras obligaciones bajo el derecho internacional con el fin de interpretar y aplicar las de los tratados del sistema interamericano de derechos humanos[18].

**B. Agotamiento de los recursos internos**

30. El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana establece que para que una petición pueda ser admitida, se requerirá "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Ese requisito se estableció para garantizar al Estado en cuestión la posibilidad de resolver controversias dentro de su propio marco jurídico.

31. Las peticionarias indican que el 27 de septiembre de 2005, la Sala Mixta Descentralizada de la provincia de Sicuani resolvió el recurso de apelación interpuesto, en contra del archivo definitivo del proceso penal seguido en contra del presunto responsable F.U.H., por lo que se agotaron los recursos internos. El Estado no controvierte este alegato y no indica otros recursos aplicables. La Comisión observa que, de conformidad con los documentos aportados por las peticionarias, se encuentra acreditado que han interpuesto los recursos disponibles de acuerdo con la legislación interna.

32. Sobre la base de los factores señalados, la Comisión concluye que los recursos relativos a los reclamos de las peticionarias han sido debidamente agotados de conformidad con el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana.

**C. Plazo de presentación de la petición**

[17] Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entrada en vigor, 27 de enero de 1980, artículo 31.
[18] Ver CIDH, Informe de Admisibilidad No. 93/09, Samanta Nunes da Silva, Brasil, Petición 337-07, 7 de septiembre de 2009, párr. 35.

33. El artículo 46(1)(b) de la Convención Americana establece que toda petición debe presentarse dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que se haya notificado a los peticionarios de la sentencia definitiva que agota los recursos internos. Las peticionarias indican que el 2 de octubre de 2005 fue notificada la resolución del recurso de apelación, que constituía el último recurso a agotar en la jurisdicción interna. El Estado no controvierte los alegatos de las peticionarias. La Comisión observa que la petición fue presentada el 14 de diciembre de 2005, por lo que se encuentra dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de la sentencia definitiva a la víctima, como lo establece la Convención Americana.

**D. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales**

34. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 46(1)(c) de la Convención Americana.

**E. Caracterización de los hechos alegados**

35. Las peticionarias alegan una serie de omisiones e irregularidades por parte de las autoridades ministeriales y judiciales a cargo de la investigación y sanción de los hechos de violencia sexual en contra de M.P.C. El Estado, por su parte, considera que los alegatos de las peticionarias son infundados y tienen como pretensión que la Comisión actúe como un tribunal de "cuarta instancia", para lo cual no es competente, ya que las peticionarias pretenden que la CIDH revierta un fallo desfavorable a la víctima dictado en la jurisdicción interna.

36. Con respecto a los alegatos del Estado, la Comisión reitera lo establecido en su jurisprudencia afirmando que no es competente para revisar las sentencias dictadas por tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y apliquen el debido proceso y las garantías judiciales[19]. La Comisión no puede actuar como un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales. No obstante, dentro del marco de su mandato de garantizar la observancia de los derechos consagrados en la Convención Americana y otros instrumentos interamericanos de derechos humanos, la Comisión es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre el fondo cuando ésta se refiere a procesos internos que podrían ser violatorios de derechos garantizados por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará[20].

[19] Ver CIDH, Informe No. 52/02, Caso 11.753, Fondo, Ramón Martínez Villareal(Estados Unidos), 10 de octubre de 2002, párr. 53; CIDH, Informe No. 39/96, Santiago Marzioni (Argentina), Informe Anual de la CIDH 1996, párrs. 48 – 51.

[20] Ver CIDH, Informe Nº 42/08, Petición 1271-04, Karen Atala e Hijas (Chile), 23 de julio de 2008, párr. 59;CIDH, Informe No. 52/02, Caso 11.753, Fondo, Ramón Martínez Villareal(Estados Unidos), 10 de octubre de 2002, párr. 53; CIDH, Informe No. 39/96, Caso 11.673, Santiago Marzioni (Argentina), Informe Anual de la CIDH 1996, párrs. 48 – 51; CIDH, Informe No. 54/01, Caso 12.051, Maria da Penha Maia

37. De acuerdo a esta doctrina, la Comisión observa que al admitir esta petición no pretende suplantar la competencia de las autoridades judiciales domésticas para revertir un fallo desfavorable a una presunta víctima, y examinar errores de apreciación que pudieron haber sido cometidos por los tribunales nacionales, cuestiones que corresponden en principio a los tribunales domésticos. La Comisión en la etapa de fondo determinará si el proceso judicial interno[21] cumplió con las garantías del debido proceso y protección judicial, y el derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación y violencia en concordancia con los derechos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.

38. En esta etapa de admisibilidad, la Comisión considera que no corresponde determinar si se produjeron o no las violaciones alegadas. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver si los hechos expuestos tienden a caracterizar posibles violaciones a la Convención Americana, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana. El criterio de apreciación de estos extremos es distinto al requerido para decidir sobre el fondo de una sentencia dictada en un juicio penal. La Comisión Interamericana debe realizar una evaluación *prima facie* para examinar si los alegatos de las peticionarias fundamentan la aparente o potencial violación de un derecho garantizado en la Convención Americana[22]. Este análisis tiene carácter sumario, y no implica un prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia. La distinción entre el estudio correspondiente a la declaración sobre la admisibilidad y el requerido para determinar una violación se refleja en el propio Reglamento de la CIDH, que establece de manera claramente diferenciada las etapas de admisibilidad y fondo[23].

39. Frente a los elementos de hecho y de derecho presentados por las peticionarias y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH encuentra que en el presente caso corresponde establecer que las alegaciones de las peticionarias relativas a irregularidades y violaciones a las garantías judiciales y al debido proceso podrían caracterizar violaciones a los derechos protegidos en los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de M.P.C. y su hermana F.P.C. Las peticionarias

---

Fernandes (Brasil), 16 de abril 2001, párr. 28; CIDH, Informe de Admisibilidad No. 93/09, Samanta Nunes da Silva (Brasil), Petición 337-07, 7 de septiembre de 2009, párr. 47.

[21] La Corte Interamericana ha establecido que el "esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos, para establecer su compatibilidad con la Convención Americana […] A la luz de lo anterior se deben considerar los procedimientos internos como un todo. La función del tribunal es determinar si el procedimiento, considerado integralmente, se ajustó a la Convención". Corte I.D.H., Caso Escher y otros Vs. Brasil**.** Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 199, párr. 44; Corte I.D.H., Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 222.

[22]VerCIDH, Informe No. 128/01, Caso 12.367, Herrera y Vargas ("La Nación"),Costa Rica, 3 de diciembre de 2001, párr. 50; Informe de Admisibilidad No. 93/09, Samanta Nunes da Silva, Brasil, Petición 337-07, 7 de septiembre de 2009, párrs.49.

[23]VerCIDH, Informe No. 31/03, Caso 12.195, Mario Alberto Jara Oñate y otros, Chile, 7 de marzo de 2003.

asimismo alegan que el Estado falló en su deber de protección especial de M.P.C. por su condición de niña al no realizar las diligencias necesarias para investigar y sancionar los hechos de violencia sexual denunciados, lo cual podría configurar una violación del artículo 19 de la Convención Americana.

40. La Comisión asimismo considera que los hechos pueden caracterizar una violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, dado que las peticionarias sostienen que el sistema judicial peruano no actuó con la debida diligencia requerida para investigar y sancionar los alegados actos de violencia sexual. Aducen específicamente que el Ministerio Público archivó la causa en base a la ausencia de evidencia de "violencia o grave amenaza" para probar el delito de violación sexual, en contravención con los parámetros internacionales de derechos humanos, dejando el delito en impunidad. Sobre el particular, la Comisión también considerará *iura novit curia* en la etapa de fondo, el posible incumplimiento con las obligaciones establecidas en el artículo 2 de la Convención Americana, en relación a la inclusión de "violencia o grave amenaza" como elementos normativos necesarios para configurar el delito de violación sexual bajo el artículo 170 del Código Penal peruano.

41. Por otra parte, las peticionarias sostienen que la falta de debida diligencia del Estado de investigar y sancionar al presunto responsable de los actos de violencia sexual sufridos por M.P.C., constituyó una forma de discriminación y un menoscabo del deber del Estado de no discriminar y de garantizar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Por lo tanto, aunque las peticionarias no hayan invocado el artículo 24 de la Convención Americana, en virtud del principio *iura novit curia* la Comisión analizará alegatos referentes a presuntas violaciones de dicho artículo en la etapa de fondo.

42. Asimismo, la Comisión observa que corresponde analizar en la etapa de fondo de este asunto, en aplicación del principio *iura novit curia*, la posible responsabilidad del Estado por violaciones al artículo 5(1) con respecto a M.P.C. y sus familiares. En este análisis, la CIDH considerará las pretensiones de las peticionarias sobre fallas del Estado en actuar con la debida diligencia requerida para sancionar los presuntos actos de violencia sexual; en no responder debidamente a las amenazas recibidas por M.P.C. y sus familiares; y en los efectos a largo plazo en el entorno familiar de M.P.C. de los presuntos hechos de violencia sexual, y la correspondiente impunidad.

43. Con respecto a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Convención de Belém do Pará, estos no constituyen fundamentos jurídicos para admitir la petición, pero la Comisión los tomará en cuenta en la medida relevante, en su interpretación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en la etapa de fondo, y analizará en el mismo sentido el artículo 9 de la misma.

## V. CONCLUSIONES

44. La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la

Convención Americana. Con fundamento en los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en el presente informe, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto,

**LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,**

**DECIDE:**

1. Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos reconocidos por los artículos 2, 8(1), 24 y 25(1) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1(1), en perjuicio de M.P.C. y su hermana F.P.C.

2. Declarar admisible la presente petición en lo que concierne a presuntas violaciones del artículo 19 de la Convención Americana y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de M.P.C.

3. Declarar admisible la presente petición en lo que concierne a presuntas violaciones del artículo 5(1), en conexión con el artículo 1(1), en perjuicio de M.P.C. y sus familiares.

4. Notificar esta decisión a las partes;

5. Continuar con el análisis de fondo del asunto; y

6. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., al 1er. día del mes de noviembre de 2010. (Firmado): Felipe González, Presidente; Dinah Shelton, Segunda Vicepresidenta; María Silvia Guillén, José de Jesús Orozco Henríquez y Rodrigo Escobar Gil, Miembros de la Comisión.

**INFORME NO. 154/10. ADMISIBILIDAD. PETICIÓN 1462-07. LINDA LOAIZA LÓPEZ SOTO Y FAMILIARES. VENEZUELA*. 1º DE NOVIEMBRE DE 2010.**

## I.RESUMEN

1. El 12 de noviembre de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión Interamericana" o la "CIDH") recibió una denuncia presentada por Linda Loaiza López Soto y el señor Juan Bernardo Delgado, en calidad de representante de las víctimas (en adelante "los peticionarios"), en la que se alega la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por la falta de debida diligencia en sancionar delitos de violación sexual cometidos por un particular en perjuicio de la señora Linda Loaiza López Soto.

2. Los peticionarios sostienen que los hechos configuran la violación de los siguientes derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana") en perjuicio de la señora Linda Loaiza López Soto[24] y sus familiares[25]; el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2); el derecho a la vida (artículo 4.1); el derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2); el derecho a las debidas garantías judiciales (artículo 8.1); la protección a la honra y a la dignidad (artículo 11); la igualdad ante la ley (artículo 24); y el derecho a la protección judicial (artículo 25), en relación con el deber de garantía, conforme al artículo 1.1 de dicho instrumento; y el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (en adelante la "Convención Belém do Pará").

3. El Estado por su parte considera que la petición es inadmisible dado que "las violaciones a las garantías y derechos fundamentales de persona alguna, cometidas por otro particular sin la aprobación del Estado no constituyen, en modo alguno, responsabilidad para el Estado"[26]. Sostiene que los tribunales competentes actuaron en el presente caso con las debidas restricciones impuestas por la ley, teniendo como resultado la sanción de Luis Carrera Almoina, y que los peticionarios no agotaron los recursos internos idóneos previstos en su ordenamiento jurídico.

---

* Conforme a lo establecido en el artículo 17.2.a del Reglamento de la CIDH, la Comisionada Luz Patricia Mejía, de nacionalidad venezolana, no participó en la discusión sobre esta petición.

[24] La CIDH incluye el nombre completo de Linda Loaiza López Soto por solicitud expresa de la víctima presentada el 10 de agosto de 2010.

[25] La petición identifica a los siguientes familiares de la señora Linda Loaiza López Soto como presuntasvíctimas: su padre Nelson López Meza; su madre Luz Paulina Soto de López; sus hermanos Ana Cecilia, Diana Carolina, Anyi Karina, Nelson Enrique, Elith Johana, Gerson José, Yusmely del Valle, Luz Paulina, José Isidro y Emmanuel Adrián López Soto; Juan Bernardo Delgado Linares; y su hijo Juan Moisés Delgado García.

[26] Observaciones del Estado presentadas de fecha 15 de enero de 2009, pág. 1.

4. Tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento con los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decidió declarar el reclamo admisible a efectos del examen de las alegadas irregularidades en la respuesta judicial frente a los presuntos hechos bajo los artículos 2, 5.1, 5.2, 8.1, 11.1, 24 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos prevista en el artículo 1.1 de dicho instrumento internacional, y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de la señora Linda Loaiza López Soto. La Comisión asimismo decide declarar admisible la presente petición en lo que concierne a las presuntas violaciones de los derechos reconocidos por los artículos 5.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de los familiares de Linda Loaiza López Soto identificados en el párrafo dos, nota dos, del presente informe. Respecto de la supuesta violación del artículo 4.1, la Comisión considera que la petición es inadmisible.

5. Asimismo, decidió notificar el informe a las partes y ordenar su publicación en su Informe Anual.

## II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

6. La Comisión recibió la petición inicial el 11 de noviembre de 2007, la cual fue registrada con el número 1462-07. El 17 de junio de 2008, la Comisión transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado y le solicitó que presentara su respuesta en un plazo de dos meses. El 3 de septiembre de 2008, el Estado solicitó una prórroga para presentar sus observaciones. El 21 de enero de 2009, la Comisión reiteró su solicitud de observaciones al Estado. El 16 de enero de 2009, la Comisión recibió la respuesta del Estado, la cual fue trasladada a los peticionarios el 30 de marzo de 2010.

7. El 27 de mayo de 2009, la CIDH solicitó a los peticionarios que aporten diversos documentos con la finalidad de proseguir con el análisis de admisibilidad de la petición. El 15 de junio de 2009, los peticionarios solicitaron una prórroga de 20 días, la cual fue otorgada por la CIDH el 16 de junio de 2009. Los peticionarios presentaron dichos documentos el 14 de julio de 2009 y estos fueron trasladados al Estado el 22 de julio de 2009. El Estado presentó observaciones adicionales el 3 de septiembre de 2009, las cuales fueron transmitidas al peticionario el 30 de marzo de 2010. Los peticionarios presentaron observaciones adicionales el 3 de septiembre de 2010, las cuales fueron trasladadas al Estado el 22 de septiembre de 2010, con un plazo de un mes para presentar sus observaciones. La respuesta del Estado no ha sido recibida a la fecha de aprobación del presente informe.

## III. POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Posición de los peticionarios

8. Los peticionarios sostienen que Linda Loaiza López Soto (en adelante "Linda Loaiza López") fue secuestrada por Luis Carrera Almoina en Caracas el 27 de marzo de 2001,

quien la mantuvo privada de su libertad por un periodo de dos meses y medio. Indican que durante el secuestro fue gravemente abusada y agredida por el señor Carrera Almoina, sufriendo graves lesiones sexuales, físicas, y psicológicas. Los peticionarios centran sus alegaciones ante la CIDH en la investigación de los hechos y el proceso penal emprendido contra el presunto agresor, sosteniendo que se caracterizó por numerosas irregularidades, una falta de actuaciones judiciales, dilaciones injustificadas, la injerencia de personajes políticos, y los maltratos constantes de diversos funcionarios del poder judicial hacia Linda Loaiza López y sus familiares. Consideran que este patrón de abusos, irregularidades y negligencia judiciales resultó en la impunidad de los hechos de violencia sexual. Los peticionarios consideran que las fallas mencionadas fueron particularmente graves considerando el sexo y la situación económica precaria de Linda Loaiza López, lo que acarreaba una obligación reforzada del Estado de debidamente juzgar y sancionar los hechos.

9. Los peticionarios aducen que no solicitan que la CIDH examine los méritos de la sentencia de seis años, sino que examine los respectivos procesos internos para establecer su compatibilidad con la Convención Americana. Consideran que el hecho de que exista una sentencia parcialmente condenatoria no significa que el Estado haya cumplido con todas sus obligaciones bajo la Convención Americana.

10. Los peticionarios sostienen específicamente que el 27 de marzo de 2001, Luis Carrera Almoina - hijo del rector de la Universidad Nacional Abierta - secuestró a Linda Loaiza López cuando salía de su residencia y la llevó bajo amenaza de muerte al Hotel Aventura en la Urbanización San Bernardino de Caracas. Indican que el señor Almoina tuvo secuestrada a Linda Loaiza López hasta el 19 de julio de 2001 en Caracas y en el pueblo de Petare, en el Estado de Sucre.

11. Durante esos dos meses y medio, los peticionarios indican que el señor Carrera Almoina repetidamente victimizó a Linda Loaiza López, infligiendo en ella graves formas de abuso físico, psicológico y sexual. Indican que el presunto agresor golpeó a la víctima, fumó y apagó cigarrillos en su cuerpo, la quemó con un encendedor y la violó repetidamente. Indican que la obligó igualmente a consumir drogas y a ver películas pornográficas. La dejó frecuentemente amarrada, esposada y con la boca tapada, algunas veces metida en el baño o en el clóset, o atada a la cama. Aducen que el presunto agresor siempre se aseguró de que las cortinas y las puertas estuvieran bien cerradas y que la víctima no estuviera cerca del teléfono. Luis Carrera Almoina le indicó constantemente que había previamente matado a ocho mujeres y abandonado sus cuerpos en la carretera. Indican que durante el secuestro, el presunto agresor llevó a Linda Loaiza López a la casa de su padre, quien a pesar de presenciar el abuso sufrido por la víctima, no hizo nada al respecto.

12. Los peticionarios señalan que el 19 de julio de 2001, el señor Almoina contactó a su padre para informarle que Linda Loaiza López ya no le servía para lo que él quería, por lo cual buscaría unas bolsas negras para sacarla del Hotel Aventura. Aprovechando la salida del señor Carrera Almoina de la habitación, la presunta víctima se acercó a la ventana -

desnuda, herida y sólo cubierta por una sábana - a pedir auxilio, por lo cual los vecinos llamaron a la policía del municipio de Chacao, cuyos miembros la rescataron. Indican que posteriormente llegaron los bomberos, una funcionaria del Ministerio Público y el dueño del apartamento, quienes trasladaron a Linda Loaiza López en una ambulancia al hospital. Durante su rescate, Linda Loaiza López identificó a Luis Carrera Almoina como su victimario.

13. Aducen que cuando llegó al hospital, Linda Loaiza López fue llevada a la sala de cirugías dada la gravedad de su estado físico, permaneciendo en distintos centros hospitalarios por un periodo de 15 meses[27]. Sostienen que desde esa fecha, la presunta víctima ha sido sometida a 10 cirugías reconstructivas, sin que hasta el momento se encuentre plenamente recuperada físicamente. Según la petición, la señora López aún sufre dificultades auditivas, problemas de movilidad, serios problemas en el páncreas producto de los golpes recibidos, y bajas probabilidades de poder concebir hijos, entre otras secuelas tanto físicas como psicológicas.

14. Los peticionarios alegan que el proceso penal cuestionado comenzó formalmente con la intervención del Ministerio Público el 19 de julio de 2001; fecha en que se dio inicio a la averiguación penal correspondiente. El 22 de agosto de 2001, la Fiscal asignada al caso asimismo presentó un escrito en el cual identificó a Luis Carrera Almoina como autor de los delitos de ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, violación sexual y lesiones personales genéricas en perjuicio de Linda Loaiza López, y solicitó la privación de su libertad de forma preventiva. Linda Loaiza López igualmente presentó una acusación particular propia el 19 de noviembre de 2001 en contra del señor Carrera Almoina por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, violación sexual, privación ilegítima de la libertad y tortura.

15. Los peticionarios identifican una serie de abusos, irregularidades, omisiones y retrasos cometidos por diversos funcionarios judiciales que presuntamente afectaron la investigación y el proceso penal emprendido en contra de Luis Carrera Almoina; fallas que alegadamente resultaron en la impunidad de los hechos de violencia sexual.

16. En primer término sostienen que la Fiscal encargada del caso no llevó a cabo una investigación inicial seria y efectiva, maltrató constantemente a la víctima y sus familiares, y permitió "influencias impropias" durante el proceso penal dado que el acusado pertenecía a una familia conocida y de recursos económicos en Venezuela a diferencia de la víctima.

[27] Los peticionarios aducen que los análisis médicos realizados a Linda Loaiza López al ser trasladada al hospital tuvieron los siguientes resultados:
Examen ginecológico: Desfloración antigua y signos de traumatismo genital de más de 8 días de producida;
Examen extra-genital: Excoriación cubierta de costra hematina en dorso nasal, múltiples herida anfractuosas de tamaño variable en ambos labios, perdida de sustancia externa y con signos de infección en el pabellón auricular izquierdo, excoraciones pequeñas en la cara lateral derecha del cuello, contusión edematosa a nivel de rama vertical del maxilar inferior del lado izquierdo, vestigio de excoriación en ambas manos y columna dorso lumbar;
Politraumatismo: Traumatismo cráneo–encefálico complicado con fractura de maxilar inferior, traumatismo torácico, traumatismo abdominal cerrado complicado con un abdomen agudo.

Como ejemplo, los peticionarios señalan que la Fiscal encargada del caso siempre recibió la información suministrada por Linda Loaiza López con incredulidad y amenazas. Indican que la Fiscal también les comunicó a los familiares de la víctima que tenían que decir la verdad porque ella sabía que el hijo de un rector no era capaz de ser el autor de hechos tan atroces. Alegan que el día de la presentación de la acusación privada de la víctima, la Fiscal le hizo firmar una declaración bajo amenazas, sin que la pudiera leer.

17. Los peticionarios presentan con su petición tres denuncias que interpusieron ante la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y la Inspectoría General de Tribunales, el 14 y 21 de noviembre de 2001, y el 13 de diciembre de 2001 respectivamente, sobre las presuntas irregularidades cometidas por la Fiscal encargada, pero sostienen que ésta nunca fue sancionada ni retirada del caso.

18. Asimismo sostienen que se cometieron muchos errores y omisiones durante la fase de investigación y en la recopilación de pruebas relacionadas al abuso sexual sufrido por Linda Loaiza López citando pautas de la Organización Mundial de la Salud. Arguyen que nunca se efectuaron pruebas de ADN aún cuando existían elementos suficientes; que se perdieron materiales de interés criminalístico en el sitio de los hechos por el indebido resguardo de la prueba; que nunca se efectuaron pruebas con luminol para detectar residuos de sangre en todos los sitios de los hechos; y que los exámenes forenses no se realizaron hasta ocho días después del rescate de la presunta víctima, entre otras omisiones. Igualmente indican que nunca se siguió una línea de investigación dirigida a establecer la falta de consentimiento de la presunta víctima en las relaciones sexuales que tuvo con el presunto agresor.

19. Los peticionarios igualmente alegan irregularidades presuntamente cometidas por los jueces involucrados en las distintas etapas del proceso penal. Consideran inusual que se haya dictado una medida de arresto domiciliario el 2 de noviembre de 2001 por el Juez 18 de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas dada la gravedad de los delitos implicados en este caso. Informan que dicha medida resultó en un intento de fuga de Luis Carrera Almoina con el apoyo de su padre[28] y con el uso de bienes del Estado el 6 de noviembre de 2001. Indican que esta medida se dictó dado que la Fiscal encargada presentó su acusación extemporáneamente, con la única finalidad de que el detenido saliera en libertad condicional. Arguyen que el juez que dictó dicha medida de arresto domiciliario, la revocó el 6 de noviembre, ordenando la privación de libertad del imputado. En consecuencia, el mencionado juez fue desincorporado el 7 de noviembre de 2001 por el Presidente de la Comisión de Restructuración y Funcionamiento quien era amigo íntimo de la familia de Luis Carrera Almoina.

20. Los peticionarios también aducen que la Jueza Yakeline Herrera Soler injustificadamente desistió de la acusación privada presentada por Linda Loaiza López el 6 de junio de 2003, dado que la señora López no asistió a la audiencia de reconocimiento, aún habiéndose presentado un informe médico y constancia de su hospitalización. Ante

[28] Los peticionarios aducen que el padre del presunto agresor fue absuelto por el delito de peculado y obstrucción de la justicia.

esta decisión, los peticionarios interpusieron un recurso de reconsideración el 8 de julio de 2003, el cual fue declarado sin lugar, y un recurso de amparo constitucional el 23 de octubre de 2003, el cual fue declarado inadmisible[29].

21. Los peticionarios también detallan irregularidades relacionadas a la selección de escabinos, múltiples inhibiciones de jueces y un número elevado de diferimientos durante el juicio. Indican que el caso lo conocieron un total de 76 jueces como consecuencia de 59 inhibiciones solicitadas por diversos jueces. Durante el juicio, los peticionarios sostienen que las audiencias se difirieron en 38 oportunidades. Alegan que en varios casos los jueces se inhibieron como consecuencia de las amenazas recibidas y por el involucramiento en el caso de una familia pudiente y con influencia política. Indican que una de las juezas que tuvo conocimiento del caso manifestó en su solicitud de inhibición entre otras cosas la repulsión que le causaba tanto la ciudadana Linda Loaiza López como su hermana Ana Cecilia López. Los peticionarios señalan que efectuaron diversas diligencias para impugnar los múltiples diferimientos e inhibiciones ante la Inspectoría General de Tribunales el 15 de septiembre de 2004 y ante la Fiscalía General de la República el 31 de mayo de 2006, sin resultado.

22. Alegan que el 5 de noviembre de 2004, la Jueza Rosa Cádiz Randon, del Juzgado Unipersonal Vigésimo de Primera Instancia del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia absolutoria en el caso de las lesiones y otros actos cometidos en contra de Linda Loaiza López. Indican los peticionarios que en dicha sentencia la jueza declaró que tomó lugar el delito de violación sexual, pero que no habían pruebas suficientes para inculpar al acusado. Por lo tanto, los peticionarios consideran que las irregularidades cometidas en la etapa de investigación, en particular los errores y omisiones en la recopilación de pruebas destacados *supra* párr. 18, resultaron en la impunidad de los hechos de violación sexual. Los peticionarios asimismo destacan que la legislación venezolana relacionada con el delito de violación sexual es anticuada y no está conforme con los estándares internacionales en la materia, sólo configurándose el delito cuando hay evidencia de fuerza o amenazas.

23. Los peticionarios sostienen que la sentencia del 5 de noviembre de 2004 fue objeto de un pronunciamiento de repudio por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela. Señalan que presentaron un escrito ante la Comisión Judicial del Tribunal de Supremo de Justicia el 25 de octubre de 2004 denunciando irregularidades cometidas por la Jueza que dictó dicha sentencia, como haber dirigido insultos a la víctima y a su abogado, haber incorporado ilegalmente pruebas de hechos que no existen, y haber emitido una sentencia discriminatoria que convierte a la presunta víctima en victimaria, sin que ninguna medida fuera adoptada en respuesta.

24. Los peticionarios señalan que apelaron la sentencia del 5 de noviembre de 2004, ordenándose su anulación y la privación de libertad de Luis Carrera Almoina el 12 de abril

[29] Los peticionarios no presentan información indicando que la acusación privada de Linda Loaiza López Soto haya sido reestablecida en el marco del proceso penal.

de 2005. El 9 de marzo de 2006, el Tribunal Unipersonal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas condenó al señor Carrera Almoina a seis años de prisión, por los delitos de lesiones personales gravísimas y la privación ilegítima de la libertad, y lo absolvió del delito de violación sexual. Alegan que esta decisión quedó en firme el 11 de mayo de 2007, fecha en la cual se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el abogado de la presunta víctima.

25. Los peticionarios indican que el caso de Linda Loaiza López ha tenido un perfil en la sociedad venezolana, dada la gravedad de las lesiones físicas, psicológicas y sexuales que sufrió, y en su lucha persistente por conseguir justicia. Los peticionarios sostienen que "el manejo de influencias, el amiguismo, la compra de autoridades crea un clima de total impunidad" ante delitos de violencia sexual. Sostienen que el culpar de una violación sexual a la víctima es un fenómeno común, lo que refleja una mentalidad patriarcal inconsistente con los derechos de las mujeres. Implica que la víctima tiene la culpa por todo el trauma sufrido y expone negativamente a la víctima y a su familia al frente de toda la sociedad, atentando contra su honra y dignidad.

26. Finalmente los peticionarios sostienen que desde el comienzo del proceso penal en 2001, Linda Loaiza López, su familia y su abogado, han sido víctimas de una serie de amenazas y hostigamientos a nivel interno que atentaron contra su integridad física y psicológica. Identifican una serie de atentados entre el 2004 y el 2007, los cuales fueron denunciados ante las autoridades estatales. Alegan que fueron beneficiarios de medidas estatales de protección, pero que estas no han sido cumplidas efectivamente.

### B. Posición del Estado

27. El Estado sostiene que no es responsable por las violaciones alegadas ya que fueron cometidas por un particular y no por un funcionario público. Aclara asimismo que los hechos no fueron cometidos con el consentimiento o aprobación del Estado ya que al conocer de los mismos, se abrió una investigación que permitió juzgar y condenar a los responsables.

28. El Estado considera que durante el proceso en el que figuró como víctima Linda Loaiza López, todos los actos fueron sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal. Informa que el Ministerio Público inició de forma pronta, seria y efectiva las investigaciones tendientes a esclarecer los hechos durante los cuales resultara lesionada Linda Loaiza López. El Estado también asevera que en el marco de un proceso penal debe lograrse un equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías constitucionales del procesado. Alega que el hecho que el imputado, la víctima, o el Ministerio Público como partes del proceso resulten desfavorecidos de un fallo judicial no implica una violación a las garantías judiciales o una forma de discriminación.

29. Afirma que la víctima no ha agotado todos los recursos internos idóneos previstos en el ordenamiento jurídico de Venezuela. Al respecto, aduce que el recurso extraordinario de revisión constitucional es un recurso idóneo para impugnar la sentencia de casación

referida que declaró "manifiestamente infundado" el recurso interpuesto por el representante legal de la peticionaria el 16 de marzo de 2007 en contra de la decisión dictada por la Sala 6 de la Corte de Apelaciones[30]. El Estado considera que el recurso de revisión constitucional resulta adecuado y efectivo para determinar si ha ocurrido una violación a los derechos humanos y ofrece lo necesario para remediarla.

30. El Estado presenta con su respuesta una relación detallada de las actuaciones principales que tomaron lugar en el marco de la investigación y el proceso penal impugnado, y varias precisiones sobre las mismas.

31. Señala que para el conocimiento de la causa referida fue designada inicialmente la Fiscalía 33º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. La Fiscal encargada inició la averiguación penal correspondiente el 19 de julio de 2001 y presentó su acusación el 5 de noviembre de 2001 por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, violación sexual y privación ilegítima de la libertad. Sobre el particular, el Estado clarifica que dado el principio de presunción de inocencia, la investigación realizada por el Ministerio Público requiere un tiempo que puede o no satisfacer el lapso de dos meses establecido en el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo tanto, alega que la fase de investigación duró tres meses y diecisiete días, lo cual "difícilmente excede de un plazo razonable para la investigación de hechos punibles tan controvertidos y mediatizados como los que se estudiaron a nivel interno".

32. Asevera que la Fiscal encargada del caso solicitó la práctica de varias diligencias investigativas. Indica que, por ejemplo, el 29 de octubre de 2001, la Fiscal solicitó que se practicara una inspección ocular en el Hospital Clínico Universitario, en donde se encontraba hospitalizada la víctima, a fin de dejar constancia de su estado físico. El mismo día solicitó orden de allanamiento del inmueble en donde residía la víctima, con el fin de determinar si en el mismo se encontraban rastros de sangre.

33. Sobre la medida de arresto domiciliario del presunto agresor, dictada el 2 de noviembre de 2001, el Estado alega que esta medida no constituyó un beneficio exagerado. Clarifica que la medida de arresto domiciliario fue inicialmente otorgada al imputado el 10 de septiembre de 2001, pese a que la Fiscalía 33º del Ministerio Público había solicitado al Juzgado 18º de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (en adelante "Juzgado 18º") la privación judicial preventiva de libertad del presunto agresor el 22 de agosto de 2001. Indica que posteriormente la Sala 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó la privación judicial preventiva de libertad del presunto agresor y que este fue recluido en un centro de privación de libertad entre el 11 de octubre y el 2 de noviembre de 2001. El 2 de noviembre de 2001 el Juzgado 18º decretó nuevamente una medida de arresto domiciliario dado que la representación fiscal presentó su escrito de acusación a los tres días de vencido

[30] La Sala 6 de la Corte de Apelaciones declaró sin lugar el 19 de diciembre de 2006 el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante contra la sentencia condenatoria de Luis Carrera Almoina dictada el 9 de marzo de 2006.

el plazo referido en el artículo 240 del Código Orgánico Procesal. Según el Estado, el Juez presidente a cargo del Juzgado 18º fue suspendido el 7 de noviembre de 2001 por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial por anular de forma irregular el 6 de noviembre de 2001 la medida de arresto domiciliario dictada el 2 de noviembre de 2001.

34. El Estado reconoce que si bien es cierto que el presunto agresor se sustrajo de su sitio de detención domiciliaria el 6 de noviembre de 2001, este hecho fue investigado de inmediato, y el imputado fue detenido a las pocas horas. Al respecto, sostiene también que el 8 de noviembre de 2001 se dictó medida privativa de libertad al presunto agresor, su padre y a otras dos personas; se les imputó por los delitos de peculado de uso y facilitación de fuga; fueron acusados por las representaciones fiscales; y fueron posteriormente absueltos mediante sentencia debidamente motivada.

35. Como parte del proceso penal, el Estado asevera que se llevaron a cabo varios sorteos de escabinos entre el 11 de marzo y el 20 de junio de 2002 con el fin de conformar el tribunal mixto – incluyendo un juez profesional y dos escabinos - sin resultados concretos. En su defecto, el 22 de agosto de 2002, el Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (en adelante "Juez Trigésimo") constituyó un Tribunal Unipersonal de Juicio, por solicitud de Luis Carrera Almoina y su padre, y de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código Orgánico Procesal Penal. Señala que la institución del juez escabino en el derecho procesal venezolano tiene como fin que los hechos presentados en la Sala de Audiencia durante el debate oral y público no sólo sean analizados por un profesional de derecho, sino por un ciudadano que carezca de tal formación jurídica, asegurando que los ciudadanos puedan ser juzgados por sus iguales y que tengan el derecho de participar en el acto de administrar justicia. Alega que después de cinco convocatorias, el acusado podía renunciar a su derecho de ser juzgado por los escabinos. El Estado aclara que si bien el 22 de diciembre de 2003 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia vinculante considerando como dilación indebida el hecho de que un tribunal con escabinos no pueda constituirse después de dos convocatorias, dicha sentencia no era aplicable para la fecha de los hechos.

36. El Estado asimismo considera que la duración del proceso penal estuvo determinada por la abundancia de recusaciones e inasistencias de las partes, en las cuales la peticionaria jugó un papel importante. Señala que los peticionarios contribuyeron a retrasos en el proceso penal solicitando repetidamente el diferimiento de la audiencia oral entre el 29 de enero y el 4 de junio de 2003, por las condiciones de salud de la víctima. Alega que esto conllevó a que de forma justificada el 6 de junio de 2003, la Jueza Trigésima de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana declarara el desistimiento de la acusación particular propia de Linda Loaiza López por incomparecencia al Tribunal en diversas ocasiones. En todo caso, el 26 de enero de 2004 la Sala Accidental Tres de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal restituyó a Linda Loaiza López su calidad de parte querellante, subsanando así las violaciones de las cuales hubiera podido ser víctima la peticionaria.

37. El Estado observa que los peticionarios se refieren a las inhibiciones de los jueces y magistrados durante el proceso penal como si estas constituyeran en si mismas una irregularidad en la actuación de los tribunales, sin explicar que se encuentran perfectamente tramitadas en el expediente, y que apenas algunas fueron declaradas con lugar. Igualmente presenta una lista de cinco recusaciones efectuadas por Linda Loaiza López durante el proceso, las cuales constituyeron una herramienta de depuración procesal a su favor cuando consideró vulnerada la imparcialidad de los jueces y fiscales involucrados.

38. El Estado sostiene que el 5 de noviembre de 2004 se dictó sentencia absolutoria en el caso de las lesiones y otros actos cometidos en contra de Linda Loaiza López. Considera que la peticionaria omite esclarecer que esta disposición del tribunal estuvo precedida de una parte motiva.
El Estado asevera que en la sentencia el tribunal comprobó la configuración de los delitos de homicidio calificado en grado de frustración y violación, al afirmar las condiciones físicas y la gravedad de las lesiones que Linda Loaiza López presentó al momento del rescate. Sin embargo, el tribunal consideró que las aseveraciones de la víctima no fueron corroboradas con otros elementos de prueba que demostraran que las lesiones fueron infligidas dentro del departamento en donde ésta fue hallada, entre otras consideraciones.

39. El Estado señala que la plenaria de la Asamblea Nacional el 6 de noviembre de 2004 aprobó mediante acuerdo la conformación de un equipo de trabajo de parlamentarios en relación a la decisión judicial del 5 de noviembre de 2004. Posteriormente, la Asamblea emitió por unanimidad un comunicado público de repudio en contra de dicha sentencia, el 26 de noviembre de 2004.

40. Señala que el 9 de marzo de 2006, después de la apelación de la sentencia del 5 de noviembre de 2004, el Tribunal Séptimo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas condenó a Luis Carrera Almoina a seis años de prisión y a un mes de presidio, por los delitos de lesiones personales gravísimas y la privación ilegítima de libertad. Indica que dicha sentencia - publicada el 22 de mayo de 2006 - absolvió a Luis Carrera Almoina del delito de violación, entre otros. El 8 de mayo de 2008, el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decretó el cumplimiento total de la pena principal que le fuere impuesta al señor Carrera Almoina.

41. El Estado considera que los alegatos de la peticionaria sobre la falta de prevención y la efectiva sanción del delito de violación sexual no se encuentran ni medianamente respaldados por argumentos serios. Alega que las lesiones producidas a Linda Loaiza López no fueron perpetradas por funcionarios estatales, y por lo tanto, no son responsabilidad del Estado venezolano. El Estado coincide con la peticionaria en afirmar que el concepto internacional de la violación sexual ha cambiado en años recientes, lo cual se refleja tanto en la sociedad venezolana como en su legislación. El Estado indica que el Código Penal vigente en Venezuela en el año 2001, establecía con respecto del delito de violación en su artículo 375 que: "el que por medio de violencias o amenazas haya

constreñido a alguna persona, del uno o del otro sexo, a un acto carnal, será castigado con presidio de cinco a diez años…." Indica que la reforma del Código Penal del año 2005 constituyó un avance en la flexibilización de lo que se entendía en el sistema jurídico venezolano por el "delito de violación sexual".

42. El Estado controvierte lo afirmado por las supuestas víctimas respecto a las medidas de protección solicitadas por los peticionarios. Indica que el 29 de diciembre de 2006, Linda Loaiza López solicitó medidas de protección por lo que las Fiscalías Décima Novena del Ministerio Público a nivel nacional con competencia plena, y la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas requirieron al Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas tutela a favor de la misma que comprenda patrullaje continuo y apostamiento policial en el lugar de residencia de la víctima, para lo cual designó a los funcionarios adscritos a la policía metropolitana. Por lo que, el Estado venezolano concluye que no violó el artículo 7(d) de la Convención de Belém do Pará referente a la adopción de "medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad".

43. El Estado finalmente señala que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres como un derecho humano en el contenido del artículo 21 y otras disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Presenta información abundante sobre una serie de acciones emprendidas con el fin de mejorar las condiciones de vida de la mujer venezolana, como la creación del Instituto Nacional de la Mujer (en adelante "INAMUJER"), la adopción de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el 1999, y la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, entre otras medidas.

## IV. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD

### A. Competencia

44. Los peticionarios se encuentran facultados, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto de quienes el Estado de Venezuela se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Venezuela es un Estado parte en la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977, fecha en que depositó su instrumento de ratificación, respectivamente, y es igualmente parte de la Convención de Belém do Pará desde el 3 de febrero de 1995. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia *ratione personae* para examinar la petición.

45. Asimismo, la Comisión tiene competencia *ratione loci* para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará que habrían tenido lugar dentro del territorio de Venezuela, Estado parte en dichos tratados. Asimismo, la Comisión Interamericana tiene

competencia *ratione temporis* puesto que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana y en la Convención de Belém do Pará ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia *ratione materiae*, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.
46.

**B. Agotamiento de los recursos internos**

47. Conforme el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana, para que un caso sea admisible deben haberse "interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Este requisito tiene como fin el permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la presunta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional.

48. Las partes en el presente caso sostienen una controversia con respecto al agotamiento de recursos internos. El Estado alega que la petición es inadmisible porque el peticionario no interpuso ni agotó un recurso extraordinario, el Recurso Extraordinario de Revisión Constitucional, ante el Tribunal Supremo de Justicia. El Estado considera que si la peticionaria entiende que una norma constitucional fue violada, bien porque se incurrió en un error manifiesto en cuanto a la interpretación de la Constitución o bien porque se obvió completamente la interpretación y la aplicación de la norma referida, el Recurso Extraordinario de Revisión Constitucional es idóneo para impugnar la sentencia de casación que declaró "manifiestamente infundado" el recurso interpuesto por el representante legal de la víctima.

49. Los peticionarios alegan por su parte que agotaron el recurso penal a fin de lograr una debida sanción y un remedio ante los graves hechos de violencia sufridos por Linda Loaiza López. Sostienen que se abrió una investigación penal sobre los hechos el 19 de julio de 2001, la cual culminó el 9 de marzo de 2006 con la condena de Luis Carrera Almoina por el Tribunal Siete de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a seis años por el delito de lesiones personales gravísimas y la privación ilegítima de la libertad de Linda Loaiza López. Aducen que esta sentencia fue apelada ante la Corte de Apelaciones Superior y fue declarada sin lugar, y posteriormente interpusieron un recurso de casación penal ante el Tribunal Supremo de Justicia, el cual fue rechazado por ser "manifiestamente infundado", el 11 de mayo de 2007. Los peticionarios consideran que el recurso de revisión constitucional propuesto por el Estado es "extraordinario, excepcional, restringido y discrecional"[31], y no es adecuado para efectos del examen del agotamiento de los recursos internos.

50. En el presente caso, la Comisión debe determinar cuál es el recurso adecuado a agotarse según las circunstancias, entendiendo por tal, aquél que pueda solucionar la

[31]Observaciones de los peticionarios enviadas el 3 de septiembre de 2010.

situación jurídica infringida[32]. En el presente caso, que se relaciona con presuntos delitos de violación, lesiones y homicidio frustrado, el recurso adecuado es la vía penal para identificar y sancionar a los responsables; proceso que el Estado debe perseguir con acuciosidad y debida diligencia[33]. El proceso penal impulsado por el Ministerio Público el 19 de julio de 2001, en el marco del cual Linda Loaiza López presentó una acusación privada el 19 de noviembre de 2001, es el que debe ser considerado a efectos de determinar la admisibilidad del reclamo. Los peticionarios sostienen que dicho proceso penal pasó por todas sus etapas y culminó de manera definitiva el 11 de mayo de 2007 al declararse sin lugar el recurso de casación interpuesto por la parte peticionaria, lo cual no ha sido controvertido por el Estado.

51. La Comisión igualmente observa que los peticionarios presentan constancia de un número significativo de denuncias interpuestas por ellos ante diversas instancias del Estado como la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Supremo de Justicia, la Inspectoría General de Tribunales y la Comisión de Funcionamiento y Restructuración del Sistema Judicial, con miras a subsanar irregularidades presuntamente perpetradas por los fiscales y jueces involucrados en el proceso penal entre el 2001 y el 2007, sin resultados concretos, lo cual no ha sido controvertido por el Estado. Destacan en particular que ante la desestimación de la acusación particular de Linda Loaiza López el 6 de junio de 2003, los peticionarios interpusieron recursos de reconsideración y amparo el 8 de julio y el 23 de octubre de 2003, ambos declarados sin lugar. El Estado no presenta información indicando que alguno de los mencionados recursos se encuentre activamente en trámite o pendiente de resolver a nivel interno.

52. Sobre el Recurso Extraordinario de Revisión Constitucional mencionado por el Estado, la Comisión observa en primer lugar que dicho recurso es de naturaleza extraordinaria, mientras que, en principio, los peticionarios deben interponer y agotar los recursos ordinarios[34]. En segundo lugar, la Comisión ha establecido que cuando los peticionarios alegan irregularidades a lo largo de distintas etapas de un proceso penal, en principio no deben agotar un recurso extraordinario dado que no es el fin de dicho recurso el corregir supuestas irregularidades ocurridas en el marco de un proceso de esta naturaleza[35]. En el presente caso, los peticionarios alegan que la investigación y el proceso penal se vieron afectados por numerosas irregularidades, retrasos y omisiones, y el recurso extraordinario mencionado no tendría como propósito remediar las presuntas violaciones alegadas por los peticionarios.

---

[32]CIDH, Informe No. 22/09, Petición 908-04 (Admisibilidad), Igmar Alexander Landaeta Mejías, Venezuela, 20 de marzo de 2009, párr. 69; Corte I.D.H., *Caso Velásquez Rodríguez*. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. párr. 63.

[33] Ver, por ejemplo, CIDH, Informe Nº 54/01 (Admisibilidad y Fondo), Caso 12.051, *Maria da Penha Maia Fernandes*, Brasil, 16 de abril de 2001.

[34] CIDH, Informe No. 22/09, Petición 908-04 (Admisibilidad), Igmar Alexander Landaeta Mejías, Venezuela, 20 de marzo de 2009, párr. 47; CIDH, Informe No. 40/08 (Admisibilidad), I.V., Bolivia, 23 de julio de 2008, párr. 73.

[35] CIDH, Informe No. 22/09, Petición 908-04 (Admisibilidad), Igmar Alexander Landaeta Mejías, Venezuela, 20 de marzo de 2009, párr. 47

53. Sobre la base de los factores señalados, la Comisión concluye que los peticionarios han agotado los recursos ordinarios del sistema penal. Por lo tanto, sus reclamos satisfacen el requisito del previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana.

**C. Plazo de presentación de la petición**

54. El artículo 46(1)(b) de la Convención Americana establece que toda petición debe presentarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se haya notificado a los peticionarios de la sentencia definitiva que agota los recursos internos. La petición bajo estudio fue presentada el 11 de noviembre de 2007, dentro de los seis meses posteriores a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia por medio de la cual se rechazó el recurso de casación penal interpuesto por el abogado de la víctima del 11 de mayo de 2007. Consecuentemente dicho requisito ha sido satisfecho.

**D. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales**

55. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 46(1)(c) y 47(d) de la Convención Americana.

**E. Caracterización de los hechos alegados**

56. En esta etapa de admisibilidad, la Comisión considera que no corresponde determinar si se produjeron o no las violaciones alegadas. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver si los hechos expuestos tienden a caracterizar posibles violaciones a la Convención Americana, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana. El criterio de apreciación de estos extremos es diferente al requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión Interamericana debe realizar una evaluación *prima facie* para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado en la Convención Americana[36]. Este análisis tiene carácter sumario, y no implica un prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia. La distinción entre el análisis correspondiente a la declaración sobre la admisibilidad y el requerido para determinar una violación se refleja en el propio Reglamento de la CIDH, que establece de manera claramente diferenciada las etapas de admisibilidad y fondo[37].

57. Frente a los elementos de hecho y de derecho presentados por los peticionarios y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH encuentra que en el presente caso corresponde establecer que las alegaciones de los peticionarios relativas a la presunta violación de los derechos a la integridad personal, a las debidas garantías judiciales, a la

[36]VerCIDH, Informe No. 128/01, Caso 12.367, Herrera y Vargas ("La Nación"),Costa Rica, 3 de diciembre de 2001, párr. 50.
[37]VerCIDH, Informe No. 31/03, Caso 12.195, Mario Alberto Jara Oñate y otros, Chile, 7 de marzo de 2003.

protección de la honra y la dignidad, y a vivir una vida libre de violencia podrían caracterizar violaciones a los derechos protegidos en los artículos 5.1, 5.2, 8.1, 11.1, y 25 de la Convención Americana, todos ellos en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento, y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de Linda Loaiza López. La Comisión igualmente observa que los hechos pueden caracterizar una violación de los artículos 5.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares de Linda Loaiza López identificados en el párrafo 2, nota 2 del presente informe.

58. La Comisión asimismo considera que los reclamos presentan cuestiones relacionadas al derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, que corresponden a un análisis pormenorizado en la etapa de fondo. Los peticionarios sostienen que el caso de Linda Loaiza López es paradigmático de un contexto en donde actos de violencia sexual permanecen mayormente en la impunidad; problema que afecta desproporcionadamente a las mujeres como grupo, y propende la repetición de estos hechos. En dicho marco, los peticionarios asimismo arguyen que la falta de debida diligencia del Estado de investigar y sancionar al presunto responsable por los hechos de violencia sexual, constituyó una forma de discriminación, un menoscabo del deber del Estado de no discriminar, y de garantizar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

59. Por otra parte, la Comisión analizará en la etapa de fondo el posible incumplimiento del Estado con las obligaciones establecidas en el artículo 2 de la Convención Americana. Los peticionarios alegan que la legislación venezolana relacionada con el delito de violación sexual no se encuentra conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, lo cual resultó en la impunidad de los hechos de violación sexual sufridos por Linda Loaiza López.

60. La Comisión considera asimismo pertinente analizar bajo el artículo 5 y sus incisos 1 y 2 los reclamos de los peticionarios sobre supuestos abusos y maltratos dirigidos a Linda Loaiza López por parte de funcionarios del poder judicial durante la investigación de los hechos denunciados y el proceso penal emprendido; la presunta falta de debida diligencia en la investigación y tratamiento del aspecto de violencia sexual presentado ante las autoridades; y una supuesta ausencia de respuesta en cuanto a las amenazas contra Linda Loaiza López y sus familiares. En dicho marco, los peticionarios también alegan que funcionarios del poder judicial descalificaron, desacreditaron y culpabilizaron a la víctima por los hechos de violencia sexual durante la investigación y el proceso penal impugnado, atentando contra su honra y dignidad; reclamos que la Comisión considera pertinente analizar bajo el artículo 11.1 de la Convención Americana.

61. La Comisión considera que no cuenta con elementos suficientes para establecer la caracterización de una posible violación al artículo 4.1 de la Convención Americana, por lo que corresponde declarar dicha pretensión como inadmisible.

## V. CONCLUSIONES

62. La Comisión concluye que es competente para examinar los reclamos presentados por los peticionarios sobre la presunta violación de los artículos 2, 5.1, 5.2, 8.1, 11.1, 24 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento, y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, y que éstos son admisibles, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Asimismo, concluye que corresponde declarar inadmisible los reclamos sobre la presunta violación del artículo 4.1 de la Convención Americana.

63. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos y sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo del asunto,

**LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,**

**DECIDE:**

1. Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a las presuntas violaciones de los derechos reconocidos por los artículos 2, 5.1, 5.2, 8.1, 11.1, 24 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento, y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de Linda Loaiza López Soto.

2. Declarar admisible la presente petición en lo que concierne a las presuntas violaciones de los derechos reconocidos por los artículos 5.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de los familiares de Linda Loaiza López identificados en el párrafo dos, nota dos, del presente informe.

3. Declarar inadmisible la presente petición en cuanto se refiere a la presunta violación del artículo 4.1 de la Convención Americana.

4. Notificar esta decisión a las partes.

5. Continuar con el análisis de fondo del asunto; y

6. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., el día 1º del mes de noviembre de 2010. (Firmado): Felipe González, Presidente; Dinah Shelton, Segunda Vicepresidenta; María Silvia Guillén, José de Jesús Orozco Henríquez, y Rodrigo Escobar Gil, Miembros de la Comisión.

**INFORME NO. 156/10. PETICIÓN 1368-04. ADMISIBILIDAD. DANIEL GERARDO GOMEZ, AIDA MARCELA GARITA Y OTROS. COSTA RICA. 1º DE NOVIEMBRE DE 2010.**

## I. RESUMEN

42.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Comisión" o "Comisión Interamericana" o "CIDH") recibió cinco peticiones presentadas por Gerardo Trejos Salas (en adelante "el peticionario"), el 14 de diciembre de 2004 en nombre de Daniel Gerardo Gómez Murillo y Aída Marcela Garita Sánchez (P 1368-04); el 27 de diciembre de 2004 en nombre de Roberto Pérez Gutiérrez y Silvia María Sosa Ulate (P 16-05); el 28 de junio de 2006 en nombre de Luis Miguel Cruz Comparaz, Raquel Sanvicente Rojas, Randall Alberto Torres Quirós y Geanina Isela Marín Rankin (P 678-06); el 17 de octubre de 2006 en nombre de Carlos Edgardo López Vega y Albania Elizondo Rodríguez (P 1191-06); el 3 de mayo de 2007 en nombre de Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín (P 545-07) (en adelante las "presuntas víctimas"). Las peticiones se presentaron en contra del Estado de Costa Rica (en adelante "Estado" o "Estado costarricense" o "Costa Rica"), en relación con la alegada violación a los derechos humanos que se originó con la sentencia 2000-02306 de 15 de marzo de 2000, dictada por la Sala Constitucional de Costa Rica, que prohibió la práctica de la fecundación *in vitro*, al declarar la inconstitucionalidad del Decreto Presidencial 24029-S, del 3 de febrero de 1995.

43.El peticionario alega que como consecuencia de dicha decisión, se prohibió que las presuntas víctimas tengan acceso a la Fecundación *in vitro,* y por lo tanto, el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 1 (obligación de respetar los derechos), 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 11 (protección a la honra y dignidad), 17.2 (fundar una familia) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "Convención" o "Convención Americana"). En las peticiones 1191-06, 678-06 y 545-07, el peticionario también alega la presunta violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.2 (derecho a la integridad personal), y 26 (desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales) de la Convención Americana, así como los artículos 1, 2, 3, 10, 14.1.b y 18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante "Protocolo de San Salvador"). Respecto del agotamiento de los recursos de jurisdicción interna, sostiene que los recursos internos se encuentran agotados conforme al artículo 46.1.a de la Convención Americana.

44.Según el Estado, a nivel interno se determinó que las condiciones en las que se desarrollaba la técnica de la fecundación *in vitro*, atentaba contra la vida humana y este valor y derecho se superpone a cualquier otro. Respecto de los requisitos de admisibilidad, sostiene que las peticiones deberían ser declaradas inadmisibles porque los hechos alegados no caracterizan violación a los derechos humanos garantizados por la Convención Americana y porque fueron presentadas de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo de los seis meses que establece el artículo 46.1.b de la Convención Americana y el numeral 32.1 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante el "Reglamento de la CIDH").

45. Conforme a lo dispuesto por el artículo 29.d del Reglamento de la CIDH, las peticiones Nº 16-05, 678-06, 1191-06 fueron acumuladas el 11 de marzo de 2009 a la petición 1368-04, en atención a que versan sobre hechos y alegaciones similares. Igualmente fue acumulada la petición 545-07 el 22 de abril de 2010.

46. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la Comisión concluye en este informe que la petición es admisible, a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 5.1, 11.2, 17.2 y 24 de la Convención Americana, todos ellos en concordancia con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, prevista en los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento internacional. En cuanto a los artículos 4 y 26 invocados, la Comisión los declaró inadmisibles. La Comisión decide además, notificarla, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

## II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

### 1. Petición 1368-04 (Daniel Gerardo Gómez Murillo y Aída Marcela Garita Sánchez)

47. El 15 de diciembre de 2004 la Comisión recibió la petición y le asignó el número 1368-04. El 17 de julio del 2006, la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado de Costa Rica, solicitándole que dentro del plazo de dos meses, presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento de la CIDH. La respuesta del Estado fue recibida el 5 de agosto de 2005.

48. Además, la CIDH recibió información de los peticionarios en las siguientes fechas: 19 de junio de 2006, 7 de julio de 2006, 6 de septiembre de 2006, 19 de octubre de 2006, 15 de diciembre de 2006, 19 de enero de 2007, 12 de febrero de 2007, 26 de febrero de 2007, 3 de mayo de 2007, 11 de enero de 2008, 31 de marzo de 2008, 1 de abril de 2008, 7 de agosto de 2008, 8 de agosto de 2008, 21 de agosto de 2008, 30 de agosto de 2008, 28 de octubre de 2008, 24 de noviembre de 2008, 20 de enero de 2009, 5 de agosto de 2009, 19 de agosto de 2009, 18 de diciembre de 2009, 3 de enero de 2010, 13, 16 y 17 de febrero de 2010, 22 de febrero de 2010. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado.

49. Por otra parte, la CIDH recibió observaciones del Estado en las siguientes fechas: 20 de noviembre de 2006, 23 de marzo de 2007, 27 de febrero de 2007, 17 de mayo de 2007, 18 de julio de 2007, 16 de octubre de 2008, 17 de octubre de 2008 29 de octubre de 2008, 24 de noviembre de 2008, 30 de enero de 2009, 13 de marzo de 2009, 26 de mayo de 2009, 3 de junio de 2009, 22 de enero de 2010. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a los peticionarios.

50. El 28 de octubre de 2008, durante el 133º Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, se realizó una Audiencia Pública sobre las peticiones 1368-04, 16-05, 678-06 y 1196-06 y el caso 12.361. El caso 12.361 se refiere a las mismas alegaciones de esta petición, es decir la alegada violación a los derechos humanos que se originó con la sentencia 02306 de 15 de marzo de 2000, dictada por la Sala Constitucional de Costa Rica al declarar la inconstitucionalidad del Decreto Presidencial 24029-S del 3 de febrero de 1995, que regulaba la práctica de la Fecundación *in vitro* en el país. La audiencia contó con la presencia de las presuntas víctimas, el testimonio de una víctima del caso 12.361 y con representantes del Estado de Costa Rica.

**2. Petición 16-05 (Roberto Pérez Gutiérrez y Silvia María Sosa)**

51. El 21 de diciembre de 2004 la Comisión recibió la petición y le asignó el número 16-05. El 17 de julio de 2006, la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado de Costa Rica, solicitándole que dentro del plazo de dos meses, presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento de la CIDH.

52. Además, la CIDH recibió información de los peticionarios en las siguientes fechas: 19 de junio de 2006, 6 de septiembre de 2006, 19 de octubre de 2006, 15 de diciembre de 2006, 19 de enero de 2007, 12 de febrero de 2007, 26 de febrero de 2007, 3 de mayo de 2007, 11 de enero de 2008, 31 de marzo de 2008, 1 de abril de 2008, 7 de agosto de 2008, 8 de agosto de 2008, 21 de agosto de 2008, 30 de agosto de 2008, 1 de octubre de 2008, 28 de octubre de 2008, 24 de noviembre de 2008, 20 de enero de 2009. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado.

53. Por otra parte, la CIDH recibió observaciones del Estado en las siguientes fechas: 20 de noviembre de 2006, 23 de marzo de 2007, 27 de febrero de 2007, 17 de mayo de 2007, 16 de octubre de 2008, 29 de octubre de 2008, 24 de noviembre de 2008, 30 de enero de 2009. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a los peticionarios.

54. El 28 de octubre de 2008, durante el 133º Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, se realizó una Audiencia Pública sobre las peticiones 1368-04, 16-05, 678-06 y 1196-06 y el caso 12.361[38]. La audiencia contó con la presencia de las presuntas víctimas, el testimonio de una víctima del caso 12.361 y con representantes del Estado de Costa Rica.

**3. Petición 678-06 (Luis M. Cruz Comparaz, Raquel Sanvicente y Otros)**

55. El 28 de junio de 2006 la Comisión recibió la petición y le asignó el número 678-06. El 17 de julio del 2006, la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado de Costa Rica, solicitándole que dentro del plazo de dos meses, presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento de la CIDH. La respuesta del Estado fue recibida el 14 de mayo de 2007, mediante la cual indicó que envió sus observaciones mediante comunicación de fecha 16 de noviembre de 2006, cuando

[38] Véase párrafo 9 de la petición.

presentó observaciones al caso 12.361. La CIDH nota que el caso 12.361, que se encuentra en etapa de fondo, se refiere a los mismos hechos a los que se refiere esta petición.

56. Además, la CIDH recibió información de los peticionarios en las siguientes fechas: 6 de septiembre de 2006, 19 de octubre de 2006, 15 de diciembre de 2006, 19 de enero de 2007, 12 de febrero de 2007, 26 de febrero de 2007, 3 de mayo de 2007, 11 de enero de 2008, 31 de marzo de 2008, 1 de abril de 2008, 7 de agosto de 2008, 8 de agosto de 2008, 21 de agosto de 2008, 30 de agosto de 2008, 1 de octubre de 2008, 28 de octubre de 2008, 24 de noviembre de 2008, 20 de enero de 2009. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado.

57. Por otra parte, la CIDH recibió observaciones del Estado en las siguientes fechas: 20 denoviembre de 2006, 23 de marzo de 2007, 27 de febrero de 2007, 17 de mayo de 2007, 18 de julio de 2007, 16 de octubre de 2008, 29 de octubre de 2008, 24 de noviembre de 2008, 30 de enero de 2009. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a los peticionarios.

58. El 28 de octubre de 2008, durante el 133º Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, se realizó una Audiencia Pública sobre las peticiones 1368-04, 16-05, 678-06 y 1196-06 y el caso 12.361[39]. La audiencia contó con la presencia de las presuntas víctimas, el testimonio de una víctima del caso 12.361 y con representantes del Estado de Costa Rica.

**4. Petición 1191-06 (Carlos E. López y Albania Elizondo Rodríguez)**

59. El 11 de octubre de 2006 la Comisión recibió la petición y le asignó el número 1191-06. El 12 de febrero del 2007, la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado de Costa Rica, solicitándole que dentro del plazo de dos meses, presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento de la CIDH. La respuesta del Estado fue recibida el 11 de abril de 2007.

60. Además, la CIDH recibió información de los peticionarios en las siguientes fechas: 19 de enero de 2007, 26 de febrero de 2007, 3 de mayo de 2007, 3 de mayo de 2007, 11 de enero de 2008, 31 de marzo de 2008, 1 de abril de 2008, 7 de agosto de 2008, 8 de agosto de 2008, 21 de agosto de 2008, 30 de agosto de 2008, 28 de octubre de 2008, 24 de noviembre de 2008, 28 de octubre de 2008, 20 de enero de 2009. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado.

61. Por otra parte, la CIDH recibió observaciones del Estado en las siguientes fechas: 20 de noviembre de 2006, 23 de marzo de 2007, 27 de febrero de 2007, 17 de mayo de 2007, 17 de mayo de 2007, 16 de octubre de 2008, 29 de octubre de 2008, 24 de noviembre de 2008, 30 de enero de 2009. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a los peticionarios.

[39] Véase párrafo 9 de la petición.

62.El 28 de octubre de 2008, durante el 133º Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, se realizó una Audiencia Pública sobre las peticiones 1368-04, 16-05, 678-06 y 1196-06 y el caso 12.361[40]. La audiencia contó con la presencia de las presuntas víctimas, el testimonio de una víctima del caso 12.361 y con representantes del Estado de Costa Rica.

63.El 11 de marzo de 2009 se acumularon las peticiones Nº 16-05, 678-06, 1191-06 a la petición 1368-04.

### 5. Petición 545-07 (Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín)

64.El 3 de mayo de 2007, la Comisión recibió la petición y le asignó el número 545-07. El 30 de mayo de 2007, la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado de Costa Rica, solicitándole que dentro del plazo de dos meses, presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento de la CIDH. La respuesta del Estado fue recibida el 31 de julio de 2007. Dicha comunicación fue debidamente trasladada al peticionario.

65.Asimismo, el 28 de octubre de 2008, durante el 133º período ordinario de sesiones de la CIDH, se realizó una audiencia pública sobre la petición 1368-04 y sobre el caso 12.361 que se encuentra en etapa de fondo. La audiencia contó con la asistencia del representante de las presuntas víctimas, el testimonio de una presunta víctima del caso 12.361, Andrea Bianchi Bruno, y con representantes del Estado de Costa Rica.

66.Conforme a lo dispuesto por el artículo 29.d del Reglamento de la CIDH, la petición 545-07 fue acumulada a la petición 1368-04.

## III. POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. El peticionario

67.El peticionario alega violaciones de derechos humanos en contra de: Aída Marcela Garita Sánchez, maestra, Daniel Gerardo Gómez Murillo, químico, Luis Miguel Cruz Comparaz, guía de turismo, Raquel Sanvicente Rojas, ama de casa, Randall Alberto Torres, bachiller en inglés, Geanina Isela Marín Rankin, bachiller en ingeniería electrónica, Carlos Edgardo López Vega, microempresario, Albania Elizondo Rodríguez, microempresaria, Roberto Pérez Gutiérrez, asistente de gerencia, Silvia María Sosa Ulate, administradora, Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín.

68.Alega que la violación a los derechos humanos se origina en la sentencia 2000-02306 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el 15 de marzo de 2000, que prohibió la práctica de la fecundación *in vitro*, al declarar la inconstitucionalidad del Decreto Presidencial No. 24029-S del 3 de febrero de 1995 que regulaba su aplicación.

[40] Véase párrafo 9 de la petición.

69. Según el peticionario, las presuntas víctimas intentaron tener hijos biológicos, pero al no lograrlo buscaron asistencia médica y fueron diagnosticadas de infertilidad. Después de intentar diversos métodos de reproducción asistida, todos infructuosos, la única opción viable que tenían para procrear biológicamente era a través de la utilización de la técnica de la fecundación *in vitro*. De acuerdo a los testimonios que constan en el expediente, las presuntas víctimas fueron diagnosticadas de infertilidad con posterioridad al año 2000.

70. Menciona que esta técnica es utilizada para las mujeres con obstrucción, ausencia de o lesiones bilaterales e irreversibles de las trompas, sea de origen infeccioso o traumático, sin posibilidad de reparación quirúrgica. Asimismo, es utilizada para infertilidades inexplicadas, endometriosis, infertilidad inmunológica, infertilidad masculina, entre otras.

71. Agrega que las técnicas de reproducción asistida y entre ellas la fecundación *in vitro*, consisten en una amplia gama de procedimientos que tienen como finalidad aumentar las posibilidades de concepción a través de un acercamiento entre el óvulo y los espermatozoides por diversos medios. Informa que se ofrecen como una práctica médica para el legítimo ejercicio de los derechos a la reproducción humana y a la salud, implícitamente reconocidos en la Convención Americana, ya que derivan del derecho a la libertad y a la autodeterminación, a la intimidad familiar y personal, el derecho a fundar una familia y el derecho a la igualdad expresamente reconocido en la Convención Americana y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

72. Según el peticionario, la técnica de fecundación *in vitro* es una herramienta que el progreso científico ha puesto en manos de las parejas infértiles para que ejerzan su derecho a la salud, a la reproducción y a fundar una familia, valores protegidos por la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador. Agrega que el Protocolo de San Salvador reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico y en consecuencia, el Estado de Costa Rica debe abstenerse de imponer obstáculos jurídicos que imposibiliten a las parejas infértiles el acceso a dicho progreso.

73. Alega que el artículo 11 de la Convención Americana ha sido violado en la medida en que ese derecho protege a las personas de la influencia estatal en sus vidas privadas. Indica que la prohibición de la fecundación *in vitro* vulnera el derecho a la protección de la toma de decisiones libres y responsables relacionadas con la vida sexual y reproductiva de las personas, tales como las decisiones de fundar una familia y de someterse a tratamientos terapéuticos necesarios para tratar de tener hijos. Asimismo sostiene que el Estado lesiona el derecho a la intimidad de las presuntas víctimas, entendiendo ésta como "una esfera que nadie puede invadir, un campo de actividad que es absolutamente propio de cada individuo"[41].

74. Indica que la prohibición de la fecundación *in vitro* en Costa Rica viola el derecho a fundar una familia, la propia familia de las presuntas víctimas, consagrado en el artículo

[41] Comunicación del peticionario de fecha 19 de enero de 2007.

17.2 de la Convención Americana, así como el derecho a procrear que es el presupuesto necesario para ejercer el derecho a fundar una familia. Sostiene también que dicha prohibición que afecta a las parejas infértiles viola el deber general de no discriminación establecido en el artículo 1 de la Convención Americana.

75. Alega la violación del artículo 24 de la Convención Americana en la medida que lleva una discriminación contra personas discapacitadas. Así, afirma que hay una diferencia injusta de trato aplicada a una persona, grupo o categoría de personas (las estériles) en relación a otras (que no padecen esterilidad). Asimismo, sostiene que con la prohibición de la fecundación *in vitro*, se creó discriminación en razón de la posición económica ya que las parejas que tienen recursos económicos pueden ir al extranjero, mientras que las parejas que carecen de recursos económicos no tienen esa opción.

76. Afirma que el derecho a la vida de la persona humana no tiene carácter absoluto, sino que está sujeto a excepciones y condiciones. Asimismo, expresa que la Convención Americana dictó el principio de la relatividad al establecer en su artículo 4 que la vida se protege, en general, desde el momento de la concepción. Además, cuestiona la personalidad jurídica del embrión debido a que el nacimiento determina la existencia de la persona humana y el reconocimiento de su personalidad jurídica y expresa que toda persona que viene a este mundo es sujeto de derecho si reúne las dos condiciones de nacer y nacer con vida.

77. El peticionario indica que la Sra. Ileana Henchoz Bolaños (víctima del caso 12.361), promovió un proceso contencioso en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social (expediente No. 089-000178-1027-CA) para que se le practique la fecundación *in vitro*. El Tribunal Superior de lo Contencioso y Civil de Hacienda, el 14 de octubre de 2008 ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social que practique la fecundación *in vitro* a la Sra. Henchoz, en vista de que la misma no estaba prohibida según la legislación interna, siempre y cuando no se incurran en los vicios señalados por la Sala Constitucional en su sentencia 2000-02306 de 15 de marzo de 2000.

78. La sentencia fue apelada por la Caja Costarricense de Seguro Social y el 19 de agosto de 2009 los magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia anularon dicho fallo y declararon sin lugar la demanda. Sostiene que el argumento principal de la Sala fue que no le asistía interés a la demandante en el proceso porque debido a su edad, ya no podía practicarse dicha técnica.

79. Respecto del agotamiento de los recursos de jurisdicción interna, sostiene que el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica dispone que las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional son irrecurribles. En consecuencia, no procede interponer ningún recurso y se aplica el artículo 46.1.a de la Convención Americana.

80. Con respecto al plazo de presentación, el peticionario sostiene que la vigencia de una norma jurisprudencial de derecho interno, definitiva y vinculante para todos los órganos

judiciales, administrativos y legislativos de Costa Rica crea *per se* una situación legal que afecta los derechos protegidos por la Convención Americana. En consecuencia, se configura una violación continuada de la Convención.

**B. El Estado**

81. El Estado sostiene que ha velado por crear las condiciones necesarias para cumplir con el derecho a la protección de la familia, sin embargo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 17.2, en el cumplimiento del derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, se requiere que se cumplan las condiciones que exigen las leyes internas de los Estados. En ese sentido, indica que si bien "los padres deben ostentar el derecho a tener descendencia, esto no pareciera lícito si para lograrlo se priva a otros seres humanos de su vida"[42].

82. Alega que independientemente de la interpretación que se le de a la calificación "en general" del artículo 4.1 de la Convención Americana, lo importante es que el artículo establece la protección de la vida desde el momento de la concepción y que el Estado ha escogido esa última posibilidad.

83. Afirma que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en su sentencia 2000-0236 de fecha 15 de marzo de 2000, no declaró inconstitucional la fecundación *in vitro* como método de reproducción asistida como tal, sino que en realidad lo que previamente determinó la jurisdicción constitucional en interpretación de la normativa nacional e internacional, "es que la práctica que se desarrollaba en el año 2000, […] colocaba más allá de cualquier duda a los embriones en un riesgo desproporcionado de muerte"[43]. Es decir, bajo las condiciones en las que se aplicaba la técnica para el momento de la resolución de la Sala Constitucional, que permitía la inseminación de hasta seis óvulos, se estimó que la técnica violaba el derecho a la vida. En consecuencia, la técnica no era acorde con la Constitución ni con el artículo 4 de la Convención Americana. Según el Estado, la Sala Constitucional consideró que "… los avances de la ciencia y la biotecnología son tan vertiginosos que la técnica podría llegar a ser mejorada de tal manera, que los reparos señalados aquí desaparezcan"[44].

84. En consecuencia, el Estado manifiesta que los hechos alegados no caracterizan violación a derechos garantizados por la Convención Americana.

85. En cuanto a los requisitos de admisibilidad, sostiene que las presuntas víctimas no agotaron los recursos internos. Señala que tal afirmación fue legitimada por la sentencia emitida el 15 de octubre de 2008 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, referente al proceso judicial presentado por Ileana Henchoz Bolaños (víctima del caso 12.361 ante la CIDH), contra la Caja Costarricense de Seguro Social (expediente

[42] Comunicación del Estado de fecha 16 de noviembre de 2006.
[43] Comunicación del Estado de fecha 29 de enero de 2009.
[44] Comunicación del Estado de fecha 24 de noviembre de 2008 en la que citan parte de la sentencia No. 2000-2306 emitida por la Sala Constitucional el 15 de marzo de 2000.

No. 089-000178-1027-CA). En este caso, la Sra. Henchoz solicitó a la Caja Costarricense de Seguro Social que le practique la Fecundación *in vitro*. En primera instancia, indica que el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda reconoció la firmeza de la Sentencia de la Sala Constitucional porque estableció que la Fecundación *in vitro* no estaba prohibida en Costa Rica en tanto no se incurriera en los vicios señalados por la Sala Constitucional. El Tribunal adujo que el desarrollo actual de dicho procedimiento médico posibilita en un ciclo femenino reproductivo, la fecundación de un solo óvulo para su posterior transferencia al útero de la madre. Seguidamente la Caja Costarricense de Seguro Social apeló la sentencia emitida por el Tribunal Superior y el 19 de agosto de 2009 los magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, anularon dicho fallo y declararon sin lugar la demanda.

86. Por otro lado, en audiencia pública realizada el 28 de octubre de 2008, durante el 133º periodo ordinario de sesiones[45] sobre el caso 12.361 y las peticiones 16-05, 678-06, 1191-06 y 545-07, que fueron acumuladas posteriormente a la petición 1368-04, el Estado afirmó ante la CIDH que la probabilidad de éxito con la fecundación de un solo embrión reseñada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en su sentencia de primera instancia de fecha 15 de octubre de 2008 era muy baja y en consecuencia habría que practicar el procedimiento múltiples veces para lograr un embarazo. Igualmente indicó que el procedimiento que estableció el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda es poco realizable y tiene una alta cantidad de pérdida embrionaria[46].

87. El Estado sostiene que todas las peticiones acumuladas fueron presentadas en forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de los seis meses, por haber sido presentadas ante la CIDH en los años, 2004, 2005, 2006 y 2007, lo que corresponde en su orden a varios años después de que se conoció el fallo definitivo en esta materia[47], que fue emitido el 15 de marzo de 2000, mediante sentencia 2000-02306 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

## IV. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

### C. Competencia de la Comisión *ratione personæ, ratione loci, ratione temporis* y *ratione materiæ*

88. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presuntas víctimas a doce personas físicas, respecto de las cuales, el Estado costarricense se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. Costa Rica es

[45] CIDH, audiencia pública ante la CIDH sobre las peticiones y el caso 12.361, realizada el 28 de octubre de 2008, durante el 133º periodo ordinario de sesiones. Ver en: http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/advanced.aspx?Lang=ES

[46] CIDH, audiencia pública ante la CIDH sobre las peticiones y el caso 12.361, realizada el 28 de octubre de 2008, durante el 133º periodo ordinario de sesiones. Ver en: http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/advanced.aspx?Lang=ES.

[47] Comunicación del Estado de fecha 14 de mayo de 2007.

un Estado parte en la Convención Americana desde el 8 de abril de 1970, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto la Comisión tiene competencia *ratione personæ* para examinar la petición.

89. Asimismo, la Comisión tiene competencia *ratione loci* para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar bajo la jurisdicción del Estado parte. La Comisión tiene competencia *ratione temporis* para estudiar el reclamo por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia *ratione materiæ*, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.

90. Si bien la CIDH carece de competencia *ratione materiae* bajo su sistema de peticiones individuales para pronunciarse en un caso individual respecto a violaciones de los artículos 1, 2, 3, 10, 14.1.b y 18 del Protocolo de San Salvador alegados por el peticionario, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 26 y 29 de la Convención Americana, la CIDH puede considerar las disposiciones contenidas en dicho Protocolo en la interpretación de otras disposiciones aplicables de la Convención Americana y de otros tratados sobre los que sí tiene competencia *ratione materiae*[48]. En consecuencia la Comisión Interamericana interpretará los artículos del Protocolo de San Salvador en la medida que sea relevante para su aplicación de la Convención Americana[49].

### D. Otros requisitos para la admisibilidad de la petición

### 2. Agotamiento de los recursos internos

91. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, tener la oportunidad de solucionarla antes de que sea conocida por una instancia internacional.

---

[48] Ver CIDH, Informe No. 44/04, Laura Tena Colunga y otros (Inadmisibilidad), México, 13 de octubre de 2004. párrs. 33-40; CIDH, Jorge Odir Miranda Cortez y otros (Admisibilidad), El Salvador, Caso 12.249, Informe No. 29/01, párr. 36.

[49] El artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador establece lo siguiente: En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

92.Respecto del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, el peticionario sostiene que los recursos internos se encontraban agotados conforme al artículo 46.1.a de la Convención Americana y por tanto ninguna de las presuntas víctimas interpuso recurso a nivel interno. Indica que frente a la decisión de la Sala Constitucional tuvo como efecto la prohibición en Costa Rica la práctica de la fecundación *in vitro*, no se podía interponer ningún recurso conforme al artículo 11.2 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, que establece que las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional, son irrecurribles.

93.El Estado por su parte sostiene que el peticionario no agotó los recursos internos, conforme lo demuestra el hecho que la Sra. Ileana Henchoz Bolaños, víctima del caso 12.361 ante la CIDH, interpuso un proceso de conocimiento contra la Caja Costarricense de Seguro Social ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que fue resuelto, favorablemente para la demandante en primera instancia. En consecuencia, alega que al momento que se interpusieron las peticiones ante la CIDH, habían recursos internos que no se habían agotado.

94.A fin de determinar el cumplimiento del requisito del agotamiento de los recursos internos, corresponde a la CIDH establecer cuál es el recurso adecuado según cada caso concreto, entendiendo como tal, aquél, que pueda solucionar la situación jurídica infringida.

95.El objeto de la controversia en el presente caso es la sentencia emitida por la Sala Constitucional de fecha 15 de marzo de 2000 que declaró inconstitucional el Decreto Presidencial 24029-S del 3 de febrero de 1995 que regulaba la fecundación *in vitro* en Costa Rica. Es decir, una decisión definitiva y vinculante de la más alta instancia judicial de Costa Rica.

96.La Comisión observa que el artículo 11 de la Ley de Jurisdicción Constitucional señala expresamente que, "no habrá recurso contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional". En consecuencia, conforme a dicho artículo, cualquier recurso interpuesto frente a una sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, hubiera sido rechazado. Asimismo, la CIDH observa que, según la petición, las presuntas víctimas no sabían en el año 2000 que la fecundación *in vitro* representaría su única alternativa para procrear biológicamente. Como consecuencia, no tenían necesidad de disputar sus intereses frente a la resolución emitida por la Sala Constitucional. En virtud de que el tema materia de controversia fue decidido en forma definitiva en el año 2000, al momento en que las presuntas víctimas se vieron afectados por las consecuencias de dicha sentencia, ya no contaban con recursos idóneos disponibles para presentar su situación personal.

97.Por otro lado, LA CIDH nota que Ileana Henchoz Bolaños (presunta víctima del caso 12.361) intentó un recurso de inconstitucionalidad y un proceso de conocimiento. Respecto del recurso de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de la Sala Constitucional, la Sala Constitucional, mediante sentencia de fecha 11 de junio de 2008, rechazó de plano dicho recurso.

98. Respecto del proceso de conocimiento interpuesto, señalado tanto por el peticionario y por el Estado, la Comisión considera que dicho procedimiento no representaba un recurso idóneo para las presuntas víctimas. El proceso de conocimiento fue interpuesto por Ileana Henchoz contra la Caja Costarricense de Seguro Social, con la finalidad de que se le practicara el procedimiento médico que como consecuencia de la decisión emitida por la Sala Constitucional de Costa Rica, se encontraba prohibido en Costa Rica desde el 2000. Si bien el recurso fue resuelto a favor de la demandante en primera instancia, en apelación los magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, anularon dicho fallo y declararon sin lugar la demanda. Además, el Estado no ha demostrado cómo este recurso de conocimiento, que no es de orden constitucional, hubiera sido idóneo para solucionar la situación denunciada. Sobre el particular, las dos partes afirman que el objeto de controversia ha sido tratado como materia constitucional y por lo tanto, sólo correspondería abordarse la situación jurídica planteada a nivel constitucional. Conforme ya se analizó, la ley costarricense expresamente establece que no hay recursos disponibles frente a sentencias de la jurisdicción constitucional.

99. Por lo antes expuesto, la Comisión Interamericana considera que las presuntas víctimas en el presente caso se encontraban imposibilitadas de agotar otros recursos idóneos disponibles. En consecuencia, considera que en el presente caso, se configura la excepción al agotamiento de los recursos internos establecida en el artículo 46.2.a.

**2. Plazo para presentar la petición**

100. El artículo 46.1.b de la Convención establece que para que la petición pueda ser declarada admisible, es necesario que se haya presentado dentro del plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que el interesado fue notificado de la decisión final que agotó la jurisdicción interna. Esta regla no tiene aplicación cuando la Comisión encuentra que se ha configurado alguna de las excepciones al agotamiento de los recursos internos consagradas en el artículo 46.2 de la Convención. En tales casos, la Comisión debe determinar si la petición fue presentada en un tiempo razonable de conformidad con el artículo 32 de su Reglamento. De acuerdo con este artículo, en su análisis, la Comisión "considerará la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso".

101. Según el peticionario, la vigencia de una norma jurisprudencial de derecho interno, definitiva y vinculante para todos los órganos judiciales, administrativos y legislativos de Costa Rica y para toda persona, crea *per se* una situación legal que afecta los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso concreto, sostiene que se configura una violación continuada de la Convención. En consecuencia, alega que no resulta aplicable el inciso b del artículo 46 que exige que la demanda sea presentada dentro del plazo de 6 meses.

102. El Estado por su parte sostiene que las peticiones fueron presentadas en forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de los seis meses, por haber sido presentadas ante la

CIDH en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, lo que corresponde en su orden a varios años después de que se conoció el fallo definitivo en esta materia[50], que fue el 15 de marzo de 2000. Según el Estado, no sería razonable interpretar que exista una supuesta violación continuada pasados los años luego de que las personas interesadas hayan sido notificadas de una decisión definitiva, puesto que en esa línea de pensamiento la supuesta violación continuada habría sido aceptada tácitamente por las alegadas víctimas en razón de que el plazo razonable para elevar el conocimiento de la supuesta vulneración de derechos ante las instancias internacionales habría expirado mucho tiempo atrás. La norma de razonabilidad del plazo para interponer peticiones ante el sistema interamericano de derechos humanos debe ser analizada en cada caso, teniendo en cuenta la actividad procesal de los familiares de las presuntas víctimas, la conducta estatal, así como la situación y contexto en el que ocurrió la alegada violación[51].

103. Al respecto, la Comisión observa que las quejas planteadas se refieren a una condición de salud - la infertilidad – que es diagnosticada médicamente, situación de la que las presuntas víctimas no tenían por qué tener conocimiento al momento en que se emitió la sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica. Las presuntas víctimas se vieron afectadas con la sentencia al momento de requerir la técnica de la fecundación *in vitro* para procrear biológicamente.

104. Dada la índole de las quejas planteadas, que se refieren a los efectos de una sentencia emitida por la máxima autoridad judicial que sigue en vigor, aunada a una situación de salud de la que no tenían conocimiento al momento en que se emitió la sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica el 15 de marzo de 2000, y que les afectó al momento de conocer que la fecundación *in vitro* era la única opción para procrear biológicamente, y que según el análisis bajo el agotamiento de recursos internos, se dieron cuenta que no tenían recursos idóneos disponibles, la CIDH considera que la regla de los seis meses no es impedimento para la admisibilidad de este caso bajo las circunstancias aquí establecidas[52].

105. Frente a esta situación particular, la CIDH considera que a efectos del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, las peticiones fueron presentadas en un plazo razonable.

### 3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

106. Los peticionarios han expresado, y no surge del expediente, que la materia de la petición se encuentre pendiente de decisión en otro procedimiento o arreglo de carácter internacional (artículo 46.1.c de la Convención Americana), ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional (artículo 47.d de la Convención). En consecuencia, corresponde dar por cumplidos ambos requisitos establecidos en el citado instrumento.

---

[50] Comunicación del Estado de fecha 14 de mayo de 2007.
[51] CIDH, Informe No. 7/07, Petición 208-05 Admisibilidad, Florencio Chitay Nech y Otros (Guatemala), 27 de febrero de 2007.
[52] Ver CIDH, Informe No. 28/98, Caso 11.625, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), 6 de marzo de 1998, párr. 29.

## 4. Caracterización de los hechos alegados

107. A los fines de admisibilidad, la Comisión debe decidir si en la petición se exponen hechos que podrían caracterizar una violación, como estipula el artículo 47.b de la Convención Americana, si la petición es "manifiestamente infundada" o si es "evidente su total improcedencia", según el inciso (c) del mismo artículo. El criterio para la apreciación de estos extremos es diferente al requerido para pronunciarse sobre los méritos de una denuncia. La CIDH debe realizar una evaluación *prima facie* y determinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención Americana, mas no establecer la existencia de dicha violación[53]. En la presente etapa corresponde efectuar un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo. El propio Reglamento de la Comisión Interamericana, al establecer una fase de admisibilidad y otra de fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión Interamericana a fin de declarar una petición admisible y la requerida para establecer si se ha cometido una violación imputable al Estado[54].

108. La Comisión considera que los hechos alegados en caso de resultar probados, podrían caracterizar presuntas violaciones a los derechos de las presuntas víctimas a la vida privada y familiar, al derecho a fundar una familia y la integridad personal, consagrados en los artículos 11.2 y 17.2 y 5.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional. Asimismo, considera que los efectos de la prohibición de acceder a un procedimiento que hubiera podido contribuir a que las presuntas víctimas del caso tuvieran hijos biológicos, como era su deseo, resultante de la sentencia emitida por Sala Constitucional de Costa Rica de 15 de marzo de 2000, podría caracterizar una violación al artículo 24 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional.

109. La CIDH considera que la información presentada no ofrece elementos suficientes que caractericen una violación a los derechos protegidos en los artículos 4 y 26 de la Convención Americana.

## V. CONCLUSIONES

110. La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la

---

[53] Ver CIDH, Informe No. 128/01, Caso 12.367, Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser del Diario "La Nación" (Costa Rica), 3 de diciembre de 2001, párrafo 50; Informe No. 4/04, Petición 12.324, Rubén Luis Godoy (Argentina), 24 de febrero de 2004, párrafo 43; Informe No. 32/07, Petición 429-05, Juan Patricio Marileo Saravia y Otros (Chile), 23 de abril de 2007, párrafo 54.

[54] Ver CIDH, Informe No. 31/03, Caso 12.195, Mario Alberto Jara Oñate y otros (Chile), 7 de marzo de 2003, párrafo 41; Informe No. 4/04, Petición 12.324, Rubén Luis Godoy (Argentina), 24 de febrero de 2004, párrafo 43; Petición 429-05, Juan Patricio Marileo Saravia y Otros (Chile), 23 de abril de 2007, párrafo 54; Petición 581-05, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe (Chile), 2 de mayo de 2007, párrafo 46.

Convención Americana y decide continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 5.1, 11.2, 17.2 y 24 de la Convención Americana, todos ellos en concordancia con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, prevista en los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento internacional. Por otro lado, aunque carece de competencia para establecer violaciones de los artículos 1, 2, 3, 10, 14.1.b y 18 del Protocolo de San Salvador, la CIDH tomará en consideración las normas referentes a estos derechos en su análisis sobre el fondo de este caso, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Convención Americana.

111. Asimismo, concluye que la presente petición es inadmisible en cuanto se refiere a presuntas violaciones a los derechos reconocidos en los artículos 4 y 26 de la Convención Americana.

112. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,

**LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,**

**DECIDE:**

1. Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 5.1, 11.2, 17.2 y 24 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento internacional.

5. Declarar inadmisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones a los derechos reconocidos en los artículos 4 y 26 de la Convención Americana.

6. Notificar esta decisión a las partes.

7. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., al 1º día del mes de noviembre de 2010. (Firmado): Felipe González, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Dinah Shelton, Segunda Vicepresidenta; Luz Patricia Mejía Guerrero, María Silvia Guillén y José de Jesús Orozco Henríquez, Miembros de la Comisión.

**INFORME NO. 122/11 [55]. PETICIÓN 454-06. ADMISIBILIDAD. DIANORA MALENO. VENEZUELA. 19 DE OCTUBRE DE 2011.**

## I. RESUMEN

1. El 29 de mayo de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión", "la CIDH" o "la Comisión Interamericana") recibió una petición presentada por la organización Hogares sin Violencia (en adelante "los peticionarios") en la cual se alega la responsabilidad de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante también "el Estado"), por la violación sexual sufrida por la señora Dianora Maleno (en adelante "la presunta víctima" o "la señora Maleno"), mientras estuvo privada de libertad en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui de Barcelona, Estado de Anzoátegui, y por los perjuicios sufridos debido a las condiciones de detención en el Retén de la Policía Metropolitana de Lechería en la misma ciudad. Se aduce que el Estado mantuvo a la presunta víctima en condiciones de detención tales que quedó expuesta a que reclusos varones abusaran sexualmente de ella, y que este hecho ha permanecido en la impunidad debido a la falta de investigación diligente y de sanción de los presuntos responsables. Asimismo, se alegan presuntas violaciones al derecho al debido proceso en la causa penal seguida contra la señora Maleno.

2. Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial, establecidos respectivamente en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana"), en relación con los deberes generales de respeto y garantía establecidos en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado. Además, alegan el incumplimiento por parte del Estado de las obligaciones emanadas de los artículos 1, 2, 5 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y de los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".

3. El Estado, por su parte, alega en lo fundamental que el proceso penal seguido a la señora Dianora Maleno por el delito de homicidio calificado se ajustó a la normativa procesal penal vigente y que se le respetó su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Con respecto al proceso penal seguido con relación a los actos de violencia sexual a los que habría sido sometida la señora Maleno, el Estado adujo que el mismo se encontraba en fase de investigación, por lo que no se habrían agotado los recursos de la jurisdicción interna, solicitando así que la presente petición sea declarada inadmisible.

[55] Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, la Comisionada Luz Patricia Mejía Guerrero, de nacionalidad venezolana, no participó en el debate ni en la decisión de la presente petición.

4. Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decidió declarar la petición admisible a efecto del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 8, y 25 de la Convención Americana, todos en concordancia con su artículo 1.1 de dicho tratado; del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, la Comisión Interamericana declara que la petición es admisible respecto del artículo 11 de la Convención Americana. La Comisión decide además, notificar esta decisión a las partes, y publicarla e incluirla en su Informe Anual ante la Asamblea General de la OEA.

## II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. La Comisión Interamericana registró la petición bajo el número P-454-06 y transmitió al Estado sus partes pertinentes el 5 de julio de 2006, dándole un plazo de dos meses para presentar información, de conformidad con el artículo 30.3 del Reglamento de la CIDH.

6. El 11 de octubre de 2006 se recibió información adicional por parte de los peticionarios, la cual fue trasladada al Estado mediante nota del 23 de octubre de 2006 para que presentara sus observaciones. El 26 de febrero 2008 se recibieron las observaciones del Estado, las que fueron trasladadas a los peticionarios para sus observaciones.

7. El 10 de junio de 2009 se recibieron las observaciones de los peticionarios a la respuesta del Estado, de lo cual se le dio traslado al Estado el 11 de junio de 2009, dándosele el plazo de un mes para que presentara sus observaciones. Sin embargo, a la fecha de aprobación del presente informe aún no se ha recibido respuesta por parte del Estado.

8. En su escrito de observaciones a la respuesta del Estado los peticionarios solicitaron la incorporación en calidad de víctimas de otras cuatro mujeres respecto de las que se informa que también habrían sido sometidas a abusos sexuales por parte de los reclusos del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui mientras estuvieron recluidas en ese establecimiento[56]. Sin embargo, con respecto a estas personas los peticionarios solamente formulan alegatos genéricos y no presentan suficiente información que permita analizar la tramitabilidad de estos reclamos.

## III. POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Posición de los peticionarios

9. Los peticionarios señalan que la señora Dianora Maleno ha sido víctima de un conjunto interrelacionado de violaciones a sus derechos humanos, agravadas por su sexo y situación

[56] Escrito de los peticionarios de observaciones a la respuesta del Estado, recibido en la CIDH el 10 de junio de 2009, párrafos 54 – 59.

socioeconómica desfavorable. Según indican, es una mujer campesina en situación de pobreza extrema.

10. En primer lugar, los peticionarios aducen que la señora Dianora Maleno fue detenida el 18 de octubre de 2001 por la presunta comisión del delito de homicidio calificado (infanticidio/filicidio) y presentada por la Fiscalía 16º de la Circunscripción Judicial del Estado de Anzoátegui ante el Tribunal 4º de Control en funciones el 20 de octubre de 2001. Posteriormente, el 22 de octubre de 2001 la referida autoridad judicial dispuso la detención de la señora Maleno en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, sin que la defensa pública apelara esta decisión.

11. Alegan que al momento de su reclusión en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, el control interno de este establecimiento –incluyendo el anexo para mujeres– estaba totalmente en manos de los propios reclusos, quienes desde hacía varios años se habían tomado el penal y ejercían *de facto* el control del orden interno; por lo que las autoridades civiles casi no ingresaban a sus instalaciones y ni controlaban lo que ocurría intramuros. Por esta razón, según se alega, las autoridades civiles no ofrecían garantías mínimas para la seguridad de los reclusos y reclusas internados en ese establecimiento. Asimismo, los peticionarios subrayan que en dicho establecimiento no habría separación efectiva entre hombres y mujeres, ni entre procesados y condenados; que los niveles de violencia eran altos –reportándose un promedio de cuatro muertes violentas mensuales–; y que las mujeres allí recluidas eran permanentemente objeto de actos de violencia y servidumbre sexual por parte de reclusos varones. Se aduce que por regla general dichas agresiones sexuales permanecían impunes debido al temor de las víctimas de denunciar a los internos que las abusaban.

12. En este contexto, el 6 de enero de 2002 la señora Dianora Maleno habría sido amenazada y violada "salvajemente" durante dos horas por cinco reclusos armados que irrumpieron en el anexo de mujeres. Los peticionarios sostienen que la víctima fue "sometida a todo tipo de aberraciones sexuales y violación vaginal y anal por sus torturadores", sin que recibiera ningún tipo de ayuda, ni persona alguna se presentara en las instalaciones durante el tiempo que duró la agresión sexual. Horas después de estos hechos la presunta víctima fue llevada por las autoridades penitenciarias a un hospital público donde recibió atención médica de urgencia, tras lo cual fue traída de regreso al mismo centro penal. Sin embargo, la señora Maleno no habría recibido la atención requerida de tipo médico, físico y psicológico en casos de violencia sexual, ni se le realizaron pruebas de enfermedades venéreas o de VIH.

13. Los peticionarios sostienen que el día siguiente, la señora Maleno reportó la violación al Director del Centro Penal, y el 8 de enero de 2002 se constituyeron en el lugar de los hechos diversas autoridades judiciales, de instrucción y de la Defensoría del Pueblo. La presunta víctima denunció los hechos ocurridos a las autoridades presentes en esa diligencia y señaló con nombres y apodos a los cinco reclusos que la habrían violado.

14. No obstante, según se alega, el Estado incumplió su deber de investigar con la debida diligencia los hechos denunciados y de sancionar a los autores de la violación sexual de la señora Dianora Maleno. Los peticionarios indican que la única prueba practicada luego de los hechos fue una pericia médica realizada el 15 de enero de 2002 (nueve días después de los hechos), y cuyo contenido era extremadamente lacónico, al punto que el Fiscal de Ejecución y Sentencia –actuante en ese momento– tuvo que solicitar una ampliación del mismo, la cual fue expedida el 22 de febrero de 2002.

15. Los peticionarios manifiestan que a pesar de que la presunta víctima individualizó desde un principio a los cinco internos que la agredieron sexualmente, el proceso penal correspondiente aún se encuentra en su fase de investigación. Alegan, por ejemplo, que no se aseguraron a los posibles perpetradores, quienes por ser reclusos se encontraban a disposición de las autoridades, ni se tomaron declaraciones o se realizaron las pruebas correspondientes. Indican que resulta sumamente ilustrativo que en enero de 2008 la Fiscalía II a cargo de las investigaciones aún estaba esperando los resultados de algunas de las diligencias que solicitó seis años antes.

16. Con respecto a las condiciones de detención en las que se mantuvo a la señora Maleno –segundo punto de la petición–, se indica que después de los mencionados hechos de violencia sexual (los cuales tuvieron difusión en la prensa local) las autoridades correspondientes decidieron como medida temporal evacuar inmediatamente a todas las reclusas del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui. Así, las condenadas fueron trasladadas al Internado Judicial de Monagas "La Pica", y a las procesadas –entre las que se encontraba la señora Maleno– al Retén de la Policía Metropolitana de Lecherías.

17. Los peticionarios aducen que el Retén de la Policía Metropolitana de Lecherías era un establecimiento destinado únicamente a la detención transitoria de personas hasta por un máximo de 72 horas, y por lo tanto, carente de servicios regulares de alimentación, provisión de agua y alimentos, sin servicios higiénicos adecuados, ni vías de ventilación suficientes. Además, la señora Maleno se encontraba en un ambiente hostil, siendo víctima de amenazas y agresiones por parte de las otras detenidas, quienes en su mayoría resentían el haber tenido que ser trasladadas a esa estación policial y por lo tanto, veían a la señora Maleno como la responsable directa de tal situación. En razón de estos hechos, las autoridades policiales se vieron obligadas a ubicar a la presunta víctima en una celda aparte de las demás procesadas.

18. Este traslado habría implicado un agravamiento de la situación de la señora Maleno al quedar reducida a condiciones infrahumanas de detención mientras aún se recuperaba de los efectos físicos y psicológicos de la violación sexual sufrida. Aducen que la víctima no podía caminar ni sentarse, viéndose obligada a permanecer en el suelo por varios días, sin alimentos, medicinas, ni tratamiento médico o psicológico. Indican además los peticionarios que su celda carecía de cama o colchón; que debía bañarse con un gran número de personas dada la falta de instalaciones adecuadas; y que su alimentación era precaria ya que su familia carecía de recursos económicos y no podían llevarle alimentos.

En estas condiciones habría permanecido durante dos años hasta que el juez de la causa levantó la medida de prisión preventiva el 6 de noviembre de 2003.

19. Con respecto a las condiciones de detención de la señora Maleno en la referida dependencia judicial, los peticionarios interpusieron el 1 de julio de 2002 una acción de amparo constitucional en la que solicitaban *inter alia* que se dispusiera el traslado de la alegada víctima a un local "ad-hoc" y que se le proporcionara el tratamiento médico y psiquiátrico correspondiente a las lesiones que sufrió. Esta acción fue denegada por los tribunales correspondientes, y su decisión final fue adoptada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 11 de noviembre de 2005. En esta decisión, si bien la Sala Constitucional estableció que los peticionarios no presentaron en término el escrito donde fundamentan sus pretensiones, sí entró a conocer el recurso, denegándolo con fundamento en la doctrina local de la "inepta acumulación" (atribuir en una misma solicitud varios hechos lesivos que no le son dables conocer a un mismo tribunal).

20. Además, con relación a sus condiciones de detención, la defensa pública había solicitado en la audiencia preliminar celebrada el 13 de marzo de 2002 ante el Tribunal de Control No. 4 del Circuito Judicial Penal de Anzoátegui, el traslado de la señora Maleno a otro establecimiento; sin embargo, la referida autoridad judicial confirmó su permanencia en la Estación de Policía de Lecherías.

21. Finalmente, con relación al proceso penal seguido contra la señora Dianora Maleno por el supuesto delito de homicidio calificado –tercer punto de la petición–, los peticionarios alegan fundamentalmente que pese a que la Defensa Pública solicitó oportunamente en tres ocasiones un peritaje psiquiátrico sobre la señora Maleno (el 20 de octubre de 2001 cuando se puso a órdenes del Juzgado Penal de Primera Instancia de turno; el 22 de octubre de 2001 en la audiencia oral; y el 12 de marzo de 2002 en la audiencia preliminar) el mismo no se realizó. Según indican los peticionarios, la práctica de esta prueba era sumamente relevante dado que la señora Maleno se encontraba en fase puerperal, condición que, según aducen, se relaciona en muchos casos con diagnósticos psiquiátricos de tipo psicótico y conductas delictivas. En este sentido, alegan que el peritaje psiquiátrico era esencial para determinar las circunstancias en las que se encontraba la presunta víctima al momento de los hechos y que esto habría sido un elemento favorable para su defensa.

22. Asimismo, sostienen que la Defensa Pública no fue idónea, pues no habría apelado la decisión judicial que decretó la prisión preventiva de la presunta víctima, ni la ratificación de esta medida. Alegan que si se considera el proceso penal seguido contra la señora Maleno como un todo -desde el momento que fue detenida- el Estado habría incurrido en un "grave retardo procesal", pues a octubre de 2007 (seis años después de la aprehensión de la alegada víctima) aún no se había celebrado la audiencia de juicio oral.

23. En términos generales, los peticionarios informan sobre las severas condiciones de detención de las mujeres en las cárceles y su particular riesgo a ataques sexuales; situación enfrentada por las autoridades con "absoluta indeferencia". Señalan también los

peticionarios que el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui es uno de los centros penitenciarios en Venezuela en donde por más de 10 años se han mantenido condiciones inhumanas de internamiento y han tomado lugar formas de violación de la dignidad de las mujeres y de su libertad sexual, incluyendo violaciones sexuales, desde el momento en que los internos tomaron el penal y el control del anexo femenino sin que las autoridades adoptaran medidas adecuadas para resolver el problema. Entienden los peticionarios entonces que el caso de Dianora Maleno no es aislado y ejemplifica la inobservancia de las obligaciones del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los centros penitenciarios.

**B. Posición del Estado**

24. El Estado informó que el 8 de febrero de 2002 se ordenó el inicio de la averiguación penal correspondiente a la violación de la señora Dianora Maleno por parte de cinco internos del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, y que al 2 de enero de 2008 la causa se encontraría aún en "fase preparatoria del proceso penal", en la cual el Ministerio Público habría ordenado la práctica de todas las diligencias orientadas a establecer los hechos denunciados. En este sentido se habría ordenado, por ejemplo, la realización de inspecciones oculares al lugar de los hechos, recolección de prendas íntimas de la denunciante, y la ubicación y realización de pruebas hematológicas a los señalados.

25. A este respecto se indica que al 2 de enero de 2008, la Fiscalía Segunda del Ministerio Público se encontraba a la espera de los resultados de las diligencias ordenadas, con la finalidad de dictar el auto conclusivo correspondiente.

26. Con relación al proceso penal seguido contra la señora Dianora Maleno por la presunta comisión del homicidio de su hija recién nacida, el Estado informó que fue puesta a órdenes del Juzgado 4º de Primera Instancia en Funciones de Control el 20 de octubre de 2001; que el 11 de noviembre de 2001 el Ministerio Público interpuso la acusación penal correspondiente; que el 12 de marzo de 2002 se celebró la audiencia preliminar en la cual fue admitida la acusación, y que se dictó auto de apertura a juicio.

27. Según informa el Estado, el 4 de noviembre de 2002 el Juzgado 1º de Primera Instancia de Juicio, a solicitud de la defensa, ordenó la práctica de una evaluación psiquiátrica forense a la señora Dianora Maleno; y que ese mismo juzgado, mediante auto del 20 de agosto de 2003, acordó suspender el proceso hasta que fuera incorporada al expediente la evaluación psiquiátrica ordenada. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2003 decretó a favor de la imputada las medidas cautelares sustitutivas de la detención preventiva.

28. Posteriormente, el 15 de junio de 2007 habría celebrado la audiencia oral con el propósito de ventilar la situación de la causa y evaluar la reanudación del proceso. La señora Maleno manifestó al juez la imposibilidad de realizarse la pericia psiquiátrica por carecer de medios económicos para ello, por lo que aquél acordó librar nuevamente

comunicación a las autoridades médicas correspondientes, con el objeto de que se practicara dicha evaluación el 20 de junio de 2007.

29. Indica que el tribunal de juicio fijó la celebración de la audiencia del juicio oral público para el 17 de octubre de 2007, fecha que fue diferida para el 29 de noviembre de 2007 en virtud de la incomparecencia de la acusada, acordándose conducirla al proceso por medio de la fuerza pública; señalándose además que la misma aún no habría acudido a realizarse el peritaje mencionado.

30. En vista de las anteriores consideraciones, el Estado concluye que al estar ambos procesos pendientes de resolución final, la presente petición debe ser declarada inadmisible por falta de agotamiento de los recursos judiciales internos.

## IV. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD

### A. Competencia

31. Los peticionarios se encuentran facultados, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a la señora Dianora Maleno persona individual, respecto de quien el Estado venezolano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la República Bolivariana de Venezuela es Estado parte en la Convención Americana desde el 8 de septiembre de 1977, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia *ratione personae* y *ratione temporis* para examinar la petición.

32. Por otro lado, Venezuela ratificó la Convención de Belem do Pará el 3 de febrero de 1995 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 26 de agosto de 1991. Por consiguiente, la CIDH tiene competencia *ratione temporis* para analizar en la etapa de fondo los alegatos sobre presuntas violaciones de estos instrumentos internacionales.

33. La CIDH tiene competencia *ratione loci* y *ratione materiae* para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos humanos establecidos en la Convención Americana, la Convención de Belem do Pará y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que se habrían perpetrado dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, Estado parte de estos tratados.

### B. Agotamiento de los recursos internos

34. El artículo 46.1.a) de la Convención Americana exige el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de reclamos sobre la presunta violación de la Convención Americana.

35. El artículo 46.2 de la Convención prevé que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando: (a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; (b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y (c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

36. El requisito de agotamiento previo se aplica cuando en el sistema nacional están efectivamente disponibles recursos que son adecuados y eficaces para remediar la presunta violación. Esta condición de admisibilidad tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional.

37. Las partes en el presente caso sostienen una controversia con respecto al agotamiento de recursos internos. El Estado interpuso expresamente la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, sobre la base de que, tanto el proceso penal seguido por la alegada violación sexual de la señora Dianora Maleno, como el proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, se encontraban pendientes de resolución.

38. Con respecto al primero de sus reclamos, los peticionarios, por su parte, alegan que existe un retardo procesal injustificado en las investigaciones penales seguidas por la violación sexual sufrida por la presunta víctima. En este sentido, aducen que tal retardo es evidente, toda vez que el propio Estado reconoció que aún a febrero de 2008 la Fiscalía II a cargo de dicha investigación ni siquiera había recibido las pruebas que ordenó practicar seis años antes; por lo tanto, tal investigación, aún abierta, se había dilatado más allá de lo razonable. Esta alegada falta de diligencia en la práctica de dichas pruebas sería aun más evidente si se considera el hecho de que las personas señaladas por la señora Maleno como sus violadores, al ser reclusos, estaban ya a disposición de las autoridades.

39. A este respecto, la CIDH observa que el recurso idóneo en un caso como el presente, en el que se alega la violación al derecho a la integridad personal de una persona en custodia del Estado, es precisamente el proceso penal, el cual, como surge claramente del expediente, aún no ha concluido; evidenciándose así un retardo de casi una década en la resolución del mismo.

40. El Estado por su parte informó que las diligencias correspondientes no habían sido practicadas por más de seis años y no ha explicado las posibles razones que pudiesen sustentar tal dilación en el proceso. El Estado tampoco informó con posterioridad a su respuesta del 26 de febrero de 2008 sobre avances concretos o progresos significativos en las investigaciones seguidas por la agresión sufrida a la presunta víctima. La Comisión Interamericana considera con respecto a este extremo que surge del expediente la existencia de un retardo injustificado en las investigaciones penales adelantadas con respecto a la alegada violación sexual de la presunta víctima.

41. En atención a las consideraciones anteriores, la CIDH considera que con relación a este primer reclamo de los peticionarios, que se produjo un retardo injustificado en la sustanciación del remedio idóneo a las violaciones alegadas; por lo tanto, se configura la excepción prevista en el artículo 46.2.c) de la Convención Americana.

42. Con respecto a las condiciones de detención –segundo punto de la petición–, los peticionarios interpusieron una acción de amparo constitucional el 1º de julio de 2002, en la que se informaba a las autoridades judiciales competentes acerca de la situación de la señora Dianora Maleno como víctima de actos de agresión sexual y de sus condiciones personales y de detención posteriores a estos hechos, concretamente durante su estancia en el Retén de la Policía Metropolitana de Lechería. Por esta vía, los peticionarios solicitaron, *inter alia*, que la presunta víctima fuera trasladada a un local distinto de la referida estación de policía y que se le brindara la atención médica y psicológica correspondiente. Esta acción de amparo fue denegada finalmente mediante sentencia del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión del 11 de noviembre del 2005.

43. Asimismo, la CIDH observa que en la audiencia preliminar celebrada el 12 de marzo de 2002 la Defensa Pública solicitó la revisión de la medida de detención preventiva o en su lugar su traslado hacia otro centro policial, al considerar que su integridad física corría peligro en la estación policial donde se encontraba. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada expresamente por el Tribunal de Control No. 4 del Estado de Anzoátegui en el auto que admite la acusación penal contra la señora Maleno. Con lo cual, a juicio de la CIDH, la situación de la señora Maleno durante su detención fue puesta oportunamente en conocimiento de las autoridades competentes por las vías legales correspondientes, por lo que el Estado tuvo oportunidad de remediarla.

44. Por lo tanto, con respecto a los reclamos relativos a las violaciones derivadas de las condiciones de detención en las que se colocó a la señora Maleno, luego de los actos de violencia sexual a los que alegadamente fue sometida, la CIDH considera que efectivamente se agotaron los recursos judiciales internos en los términos del artículo 46.1.a) de la Convención Americana. La CIDH nota además que el Estado no objetó el agotamiento de los recursos internos interpuestos con relación a este segundo reclamo.

45. Finalmente, con respecto al proceso penal del que la señora Maleno ha sido objeto por el presunto delito de homicidio calificado, la CIDH observa que el primer acto procesal tuvo lugar el 18 de octubre de 2001, día en que ésta fue detenida, y la última actuación de la que el Estado ha informado fue la celebración de la audiencia del juicio oral público el 29 de noviembre de 2007. En este sentido, la CIDH observa que el Estado alega que la demora en el trámite de este proceso se debe a que el tribunal de juicio ordenó la práctica de una pericia psicológica a la señora Maleno que no llegó a practicarse; sin embargo, el Estado no aporta información que permita establecer que dicha circunstancia le era atribuible a la señora Dianora Maleno.

46. En este sentido, la CIDH considera que la responsabilidad por la conducción de un proceso penal recae fundamentalmente en las autoridades judiciales competentes –quienes

debían iniciarlo de oficio y dirigirlo–, y que frente a un alegato sobre retardo injustificado en el mismo, en un caso como el presente en el que surge que dicho proceso se ha prolongado por más de seis años en las etapas previas a la sentencia de primera instancia, correspondía al Estado aportar la información necesaria para sustentar que dicha demora no le era atribuible.

47. La CIDH observa además que el Estado no ha presentado respuesta con posterioridad al 26 de febrero de 2008, con lo cual no ha utilizado la oportunidad procesal que le correspondía para informar acerca de lo actuado en el proceso penal seguido contra la señora Maleno y para presentar sus posibles alegatos con respecto a la inadmisibilidad del reclamo concreto de los peticionarios a ese respecto.

48. Por lo tanto, con respecto al tercer reclamo de los peticionarios, relativo a la alegada violación a las garantías judiciales en el proceso seguido contra la señora Maleno, la CIDH considera que se ha producido un retardo injustificado en la sustanciación del mismo, por lo que se configura la excepción establecida en el artículo 46.2. de la Convención Americana.

49. Finalmente, la Comisión reitera que las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos en ella consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46.2, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo *vis á vis* las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la posible violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.

### C. Plazo de presentación de la petición

50. La Convención Americana establece en su artículo 46.1.b) que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva. El artículo 32 del Reglamento de la Comisión establece que en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.

51. En el presente caso la CIDH ha establecido la aplicación de la excepción al agotamiento de los recursos internos estipulada en el artículo 46.2.c) de la Convención Americana, con respecto al primer y tercer reclamo presentado por los peticionarios, esto es, aquellos relativos respectivamente (a) a las alegadas agresiones sexuales a las que fue sometida la señora Dianora Maleno y a las investigaciones posteriores; (b) a los alegatos

sobre violaciones a las garantías judiciales en la causa penal seguida a la señora Maleno por el alegado delito de homicidio calificado.

52. Con relación a estos dos puntos, la CIDH observa que la petición fue recibida el 29 de mayo de 2006, y los hechos relativos a la falta de investigación de la alegada violación sexual cometida contra la señora Maleno habrían iniciado el 8 de enero de 2002 cuando ésta denunció lo ocurrido a las autoridades. De igual forma, las alegadas violaciones a las garantías judiciales cometidas en el proceso penal seguido contra la señora Maleno se habrían iniciado el 18 de octubre de 2001. Por lo cual, de acuerdo con la información aportada por las partes, ambos procesos se encuentran pendientes de resolución transcurridos casi 10 años de iniciados.

53. Por lo tanto, en vista del contexto y las características de estos dos reclamos, la Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable en los términos del artículo 46.1.b) del Reglamento de la CIDH y en consonancia con su práctica en casos similares.

54. Por otro lado, con respecto a las condiciones de detención a las que se sometió a la señora Dianora Maleno –segundo reclamo presentado en la petición–, la CIDH determinó que el agotamiento de los recursos judiciales idóneos se configuró con la decisión denegatoria de la acción de amparo emitida el 11 de noviembre de 2005 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, con lo cual, tomando en cuenta que la presente petición fue presentada el 29 de mayo de 2006, resulta claro que la misma fue recibida dentro del término de seis meses dispuesto por el artículo 46.1.b) de la Convención Americana.

### D. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional

55. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c) y 47.d) de la Convención.

### E. Caracterización de los hechos alegados

56. A los efectos de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos alegados pueden caracterizar una violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47.b) de la Convención Americana, o si la petición es "manifiestamente infundada" o es "evidente su total improcedencia", conforme al inciso (c) de dicho artículo. El criterio de evaluación de esos requisitos difiere del que se utiliza para pronunciarse sobre el fondo de una petición; la Comisión debe realizar una evaluación *prima facie* para determinar si la petición establece el fundamento de la violación, posible o potencial, de un derecho garantizado por la Convención, pero no para establecer la existencia de una violación de derechos. Esta

determinación constituye un análisis primario, que no implica prejuzgar sobre el fundamento del asunto[57].

57. Ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH exigen al peticionario identificar los derechos específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. En cambio, corresponde a la Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes de admisibilidad, qué disposición de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y podría concluirse que habría sido violada si los hechos alegados son probados mediante evidencia suficiente y argumentos legales.

58. En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH considera que los hechos alegados por los peticionarios podrían caracterizar posibles violaciones a los derechos protegidos en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de la señora Dianora Maleno, en concordancia con el artículo 1(1) de ese mismo tratado. De la misma manera, considera que los hechos expuestos caracterizarían posibles violaciones al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará; así como también de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

59. Asimismo, la Comisión observa que corresponde analizar en la etapa de fondo de este asunto la posible responsabilidad del Estado por la violación del artículo 11 de la Convención con respecto a la señora Maleno. En este análisis, la Comisión considerará los reclamos de la peticionaria sobre la violación sexual ocurrida bajo el control y la supuesta tolerancia de las autoridades penitenciarias; las condiciones infrahumanas y precarias de detención; y la falta de separación entre reclusos hombres y mujeres en el internado judicial José Antonio Anzoátegui; todos resultando en hechos presuntamente atentando contra su honra, dignidad y vida privada.

60. La Comisión asimismo considera que los reclamos presentan cuestiones relacionadas al derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, que corresponden a un análisis pormenorizado en la etapa de fondo. En este análisis, la CIDH considerará las pretensiones de la peticionaria sobre fallas del Estado de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir y sancionar los presuntos actos de violencia sexual y otras agresiones, lo cual puede constituir una forma de discriminación contra la mujer; y la presunta tolerancia e inacción del Estado frente a prácticas discriminatorias contra las mujeres internadas y sus efectos, como la falta de separación entre reclusos hombres y mujeres en el internado judicial José Antonio Anzoátegui. Por lo tanto, la Comisión analizará alegatos referentes a presuntas violaciones de dicho artículo en la etapa de fondo.

[57] Véase en general: CIDH, Informe No. 12/10, Caso 12.106, Admisibilidad, Enrique Hermann Pfister Frías y Lucrecia Pfister Frías, Argentina, 16 de marzo de 2010. Párr. 46; CIDH, Informe No. 10/10, Petición No. 214-08, Admisibilidad, Koempai y otros, Suriname, 16 de marzo de 2010, párr. 43.

61. Finalmente, la CIDH observa que los peticionarios invocan el incumplimiento por parte del Estado de los deberes generales establecidos en el artículo 2 de la Convención Americana; sin embargo, no aportan elementos que permitan establecer *prima facie* la posible violación de esta norma.

V. CONCLUSIONES

62. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos y sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo del asunto,

**LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,**
**DECIDE:**

1. Declarar admisible la presente petición con respecto a las alegadas violaciones, en perjuicio de la señora Dianora Maleno, de sus derechos protegidos en los artículos 5, 8, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones generales consagradas en el artículo 1.1 de dicho tratado, además del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y de los artículos 1,6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

2. Notificar esta decisión al Estado venezolano y los peticionarios.

3. Continuar con el análisis del fondo de la cuestión.

4. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 19 días del mes de octubre de 2011. (Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González, y María Silvia Guillén, miembros de la Comisión.

**INFORME NO. 158/11 . PETICIÓN 512-08. ADMISIBILIDAD. MARIANA SELVAS GÓMEZ Y OTRAS. MÉXICO. 2 DE NOVIEMBRE DE 2011.**

I. RESUMEN

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Comisión", "Comisión Interamericana" o "CIDH") recibió el 29 de abril de 2008 una petición presentada por el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (PRODH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), (en adelante "peticionarios"), en representación de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo (en adelante "presuntas víctimas"). La petición es contra los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "Estado" o "Estado mexicano" o "México"), por la presunta violación y tortura perpetrada por agentes estatales en contra de las presuntas víctimas durante una represión violenta de un conflicto social en los municipios de Texcoco y San Salvador de Atenco, así como la posterior falta de investigación y sanción de los hechos.

2. Los peticionarios alegan que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección a la honra y dignidad), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "Convención" o "Convención Americana"), en concordancia con la obligación general establecida en los artículos 1.1 y 2 del citado instrumento internacional y la violación de los artículos 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante "Convención de Belém do Pará"), en perjuicio de las presuntas víctimas. Asimismo, alegan la violación de los deberes consagrados en los artículos 1, 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de las presuntas víctimas.

3. Por su parte, el Estado sostiene que no se han agotado los recursos internos porque los hechos denunciados son materia de investigación. Alega que las autoridades investigadoras han realizado diversas diligencias para determinar los responsables de los hechos, y que las demoras producidas en el proceso se deben a la complejidad del caso y no a la inacción de la autoridad investigadora o judicial. En consecuencia, afirma que la petición debe ser declarada inadmisible.

4. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decide declarar el caso admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 11, 24 y 25, en

concordancia con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, así como del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, respecto de las presuntas víctimas. Asimismo, decide declarar admisible la petición respecto de la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La Comisión decide además, notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

## II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. El 29 de abril de 2008 la Comisión recibió la petición y le asignó el número 512-08. El 10 de diciembre de 2009, transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado de México, solicitándole que dentro del plazo de dos meses, presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento de la CIDH. El Estado solicitó una prórroga inicial el 17 de febrero de 2010 que fue concedida el 26 de febrero de 2010. La respuesta del Estado fue recibida el 27 de julio de 2010. Dicha comunicación fue debidamente trasladada a los peticionarios.

6. Además, la CIDH recibió información de los peticionarios mediante comunicaciones de fecha 19 de mayo de 2010, 30 de septiembre de 2010, 17 de diciembre de 2010 y 4 de mayo de 2011. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado. Asimismo, recibió información del Estado el 30 de diciembre de 2010, siendo debidamente trasladada a los peticionarios.

## III. POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. Los peticionarios

7. Los peticionarios alegan que durante el 3 y 4 de mayo de 2006 fuerzas de seguridad del Estado habrían desalojado a floricultores de un mercado local en el municipio Texcoco, con uso excesivo de la fuerza pública. Esta acción habría generado en Texcoco y en San Salvador de Atenco una serie de acciones de apoyo de la comunidad, incluyendo el bloqueo de una carretera federal. En este contexto, habrían surgido algunos enfrentamientos entre policías, comerciantes y sectores de la población que apoyaban a los comerciantes, así como allanamientos y detenciones masivas. Sostienen que en los dos días, más de 200 personas habrían sido detenidas, dos civiles perdieron la vida y 67 policías federales resultaron heridos.

8. Entre las personas detenidas hubo 47 mujeres, siendo 11 las presuntas víctimas de este caso, quienes reportaron haber sufrido diversas formas de violencia física y/o verbal y/o psicológica por parte de policías y agresiones de tipo sexual como pellizcos, mordidas en los senos, tocamientos en los genitales; violación por vía oral y vaginal con dedos y otros objetos. Sostienen que la violencia sexual de la que fueron víctimas constituye en sí misma una forma de discriminación. Indican además que la naturaleza discriminatoria de la violencia sexual ejercida en contra de las presuntas víctimas es notoria en el trato distinto que recibieron éstas en comparación con los hombres detenidos.

9. Informan que las presuntas víctimas coinciden en señalar que las vejaciones más graves ocurrieron durante el trayecto hacia el Centro de Prevención y Readaptación Social "Santiaguito" en Almolaya, Estado de México, donde fueron ilegalmente confinadas. El traslado se habría realizado en vehículos oficiales y no oficiales y habría durado cuatro horas aproximadamente, cuando en condiciones normales no debería durar más de dos horas. Señalan que en el interior de los transportes también habían varones detenidos, quienes junto con las mujeres fueron apilados uno encima de otro, lo que en algunos casos les habría ocasionado una sensación de asfixia. Fueron obligadas a cubrirse los rostros con su propia ropa. Indican que a algunas de las presuntas víctimas se les removió la ropa por completo de forma violenta y cuando el vehículo llegó al Centro penitenciario, se les habría obligado a ponerse su vestimenta. Asimismo sostienen que a algunas de las presuntas víctimas les sustrajeron sus objetos personales. Al momento de ingresar al centro penitenciario sostienen que sufrieron golpes.

10. Respecto de las presuntas víctimas detenidas el 3 de mayo de 2006 en Texcoco, los peticionarios alegan que María Patricia Romero Hernández, y Cristina Sánchez Hernández, ambas comerciantes, habrían sufrido actos de violencia física, verbal y psicológica por parte de los policías. Agregan que Yolanda Muñoz Diosdada, empleada de un establecimiento comercial, habría sufrido actos de violencia física, verbal, psicológica y agresiones de tipo sexual. Afirman que Ana María Velasco Rodríguez, comerciante, habría sufrido diversas formas de violencia física, verbal, psicológica, agresiones de tipo sexual, violación por vía oral y violación por vía vaginal con dedos, por parte de policías.

11. Respecto de las presuntas víctimas detenidas el 4 de mayo de 2006 en San Salvador de Atenco, los peticionarios alegan que todas fueron detenidas en forma arbitraria e informan que Mariana Selvas Gómez, estudiante de Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Georgina Edith Rosales Gutiérrez, empleada del Instituto Mexicano de Seguridad Social, habrían sufrido diversas formas de violencia física, verbal, psicológica y agresiones de tipo sexual por parte de los policías. Además, Claudia Hernández Martínez, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México; Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, estudiante de periodismo en la Universidad del Valle de México, Patricia Torres Linares, estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y Norma Aidé Jiménez Osorio, estudiante; habrían sufrido diversas formas de violencia física, verbal, psicológica, agresiones de tipo sexual y violación por vía vaginal con dedos, por parte de policías. Asimismo, Bárbara Italia Méndez Moreno, trabajadora de la organización "Fundación Nueva Vida", habría sufrido diversas formas de violencia física, verbal y psicológica, agresiones de tipo sexual, violación por vía vaginal con dedos y otros objetos por parte de policías.

12. Con motivo de los hechos ocurridos, se habrían iniciado procedimientos internos a nivel federal y a nivel estatal. Según los peticionarios, las investigaciones reflejan deficiencias; dilación e; indebida calificación de los hechos delictivos en cuanto a los tipos penales "que aminoran las violaciones a los derechos humanos" de las presuntas víctimas,

perpetrándose con ello la impunidad. Sostienen que este caso, la falta de investigación y sanción de los responsables ejemplifica la falta de debida de diligencia que prevalece en casos de violencia contra las mujeres.

13. Indican que en el fuero federal, el 16 de mayo de 2006, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, que desde el 2008 se denomina Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) (en adelante "FEVIM"), inició de oficio una investigación (AP/FEVIM/03/05-2006) por "tratarse de hechos públicos y notorios", con el fin de indagar sobre los presuntos abusos cometidos en contra de las mujeres en Texcoco y San Salvador de Atenco, entre el 3 y 4 de mayo de 2006. Afirman que el 17 de mayo del mismo año, el centro PRODH presentó a la Fiscalía Especial una denuncia de los hechos, constituyéndose en representantes de la coadyuvancia y que todas las presuntas víctimas presentaron y ratificaron su denuncia penal ante la FEVIM. Informan que el 13 de julio de 2009 la FEVIM declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (en adelante "Procuraduría del Estado de México"), a pesar según los peticionarios, de que reconoció la existencia de tortura y la participación de policías en los hechos, asuntos que son de ámbito federal.

14. Respecto de las investigaciones en el fuero estatal, señalan que el 10 de mayo de 2006, la Mesa Primera de la Dirección de Responsabilidades de la Procuraduría del Estado de México abrió de oficio la averiguación previa TOL/DR/I/466/2006 en contra de quienes resultasen responsables por los hechos ocurridos en Texcoco y San Salvador de Atenco los días 3 y 4 de mayo, abarcando a todas las personas que resultaren víctimas de los sucesos. A dicha averiguación se acumuló la averiguación previa TOL/DR/I/470/2006 iniciada el 11 de mayo de 2006, producto de la denuncia de oficio presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante "CNDH").

15. Respecto de las diligencias realizadas, informan que el 12 de mayo de 2006 personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado acudió al Centro de Readaptación Social "Santiaguito", donde se encontraban recluidas 5 de las presuntas víctimas, con el objeto de que ratificaran las denuncias por agresiones sexuales. De acuerdo a los peticionarios, exámenes médicos practicados no habrían sido realizados por peritos capacitados para atender a mujeres víctimas de violencia sexual. El 13 de junio de 2006, algunas de las presuntas víctimas que se encontraban en libertad fueron citadas a la Mesa Primera de Responsabilidades de Servidores Públicos para que ratificaran su denuncia y al comparecer se les presentó un álbum con fotos de agentes que habrían participado en los operativos. Se alega que dos de las presuntas víctimas, Ana María Velasco Rodríguez y María Patricia Romero Hernández, pudieron reconocer a sus agresores.

16. Informan que el 4 de abril de 2007 en la averiguación estatal TOL/DR/I/466/2006 se dictó auto de reserva y archivo hasta que se encuentren nuevos elementos que comprueben la existencia de tortura, según los peticionarios, a pesar de los hallazgos de la CNDH, los certificados médicos, las declaraciones, entre otros.

17. Los peticionarios indican que a pesar de haber presentado diversas solicitudes, no pudieron acceder al expediente judicial respecto de la averiguación previa en el fuero común, sólo accedieron a un "expedientillo" derivado de la averiguación previa TOL/DR/1/466/06 anexo al principal porque según sostienen, el Ministerio Público les informó que el resto de los tomos o bien se encontraban en el archivo, o ante la Comisión Investigadora de la Suprema Corte, etc.

18. Señalan que el expediente de averiguación previa proveniente de la FEVIM (fuero federal), fue recibido en el fuero estatal por la Procuraduría del Estado de México el 15 de julio de 2009 y recién el 10 de marzo de 2010, la Subprocuraduría General envió a la Dirección General de Visitadurías la indagatoria para su "prosecución" y "determinación conforme a derecho". A pesar del tiempo transcurrido, indican que las investigaciones continúan estáticas y sin avance. Asimismo, afirman que a pesar de haber sido autorizados como representantes de la coadyuvancia, tampoco se les permitió acceder a las investigaciones.

19. Por otro lado, indican que las presuntas víctimas también interpusieron denuncias individuales que, sostienen, a la fecha han sido ineficaces. Sólo en 2 de los 11 casos las autoridades estatales habrían ejercido acción penal. Específicamente, en el caso de Ana María Velasco Rodríguez se abrió proceso penal contra un policía que ella identificó como uno de sus agresores. Al respecto, manifiestan que para la legislación penal aplicable en el Estado de México, coaccionar a alguien para que realice una felación no era una conducta constitutiva del delito de violación al momento de los hechos, por lo que el policía fue procesado por el delito de "Actos libidinosos". Afirman que el presunto agresor fue absuelto de todos los cargos el 19 de febrero de 2009, mediante una resolución de amparo que dejó sin efecto la sentencia y la resolución de segunda instancia que lo condenaba, bajo el argumento que no se acreditaba plenamente la responsabilidad penal del policía, a pesar, según los peticionarios, de haber sido identificado por la presunta víctima.

20. En cuanto al caso de María Patricia Romero Hernández, sostienen que el 15 de junio de 2006 se consignó a 21 policías del Estado de México por el delito de abuso de autoridad (causa penal 59/06 en el Juzgado Penal de Tenango del Valle) y no por el delito de tortura. Indican que el agente del ministerio público en este caso consideró en diversas ocasiones a la presunta víctima como denunciante y no como víctima, lo cual limitó su participación en el proceso. Según los peticionarios, a la mayoría se les exculpó durante el proceso y el 19 de febrero de 2010, el juez de primera instancia dictó sentencia absolutoria a favor de todos los procesados. Asimismo, indican que no se permitió a la denunciante y la coadyuvancia intervenir en el procedimiento.

21. Los peticionarios manifiestan que a pesar de que la tortura como delito se encuentra tipificado tanto a nivel federal como estatal, las averiguaciones fueron abiertas para investigar actos de "abuso de autoridad" o "actos libidinosos". De acuerdo a los peticionarios, las autoridades no investigan hechos denunciados como tortura y a título de información señalan que la Procuraduría General de la República, entre enero de 1994 y

julio de 2010, reportó 2 sentencias condenatorias por tortura y 81 sentencias de abuso de autoridad.

22. Los peticionarios indican que la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigó los hechos de este caso a través de una Comisión Investigadora y emitió una resolución no vinculante, señalando violaciones a los derechos humanos, sin determinar responsabilidades penales ni sanción a responsables de manera individual. Según los peticionarios, su intervención fue de carácter extraordinario y ajeno a su función jurisdiccional. Informan además que la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una queja de oficio sobre los hechos y que el 16 de octubre de 2006 emitió la Recomendación 38/2006, en el que dio por acreditadas diversas violaciones a los derechos humanos, incluidas las agresiones sexuales que padecieron las presuntas víctimas.

23. Respecto del agotamiento de los recursos internos, indican que se aplican las excepciones al agotamiento debido a que existe un retardo injustificado en los mismos, y a que no existe proceso legal que permita avanzar en investigaciones adecuadas e imparciales. Respecto del retardo injustificado, alegan que el Estado pretende justificar el retardo aduciendo la complejidad de las investigaciones. Sin embargo, los peticionarios indican que los procedimientos iniciados a nivel estatal fueron por delitos menores y archivados en abril de 2007. En el ámbito federal, la Fiscalía Especial no consignó a los presuntos responsables y declinó competencia a favor del Estado de México el 13 de julio de 2009. Después de un largo periodo de inacción, indican que la Subprocuraduría General, recién el 10 de marzo de 2010 remitió a la Dirección General de Visitadurías las actuaciones para su prosecución. Es decir, sostienen que luego de más de cuatro años desde que ocurrieron los hechos, las investigaciones no han arrojado resultados y las autoridades han actuado negligentemente.

24. Cuestionan la imparcialidad en la investigación por declaraciones públicas de autoridades mexicanas, quienes habrían descalificado a las presuntas víctimas. Sostienen que la falta de debida diligencia de las autoridades en el proceso y la tipificación errónea de las conductas denunciadas, genera un cuadro "ilusorio" para brindar justicia y reparación a las presuntas víctimas.

25. Por otro lado, sostienen que el recurso de amparo que el Estado alega debe ser agotado, es un recurso de naturaleza extraordinaria que no requiere ser agotado debido a que las presuntas víctimas habían intentado un proceso penal, que el propio Estado debe impulsar. Sin perjuicio de ello, afirman que respecto de la interposición de un recurso de amparo por la declinación de competencia del fuero federal al fuero estatal, la jurisprudencia prevaleciente de la Suprema Corte indica que la declinación de competencia no violenta garantías individuales. Igualmente, alegan que no procede el amparo frente a la decisión de reserva de una investigación, debido a que el artículo 158 de la Ley de Amparo establece que sólo procede el amparo directo contra sentencias o laudos definitivos. En cuanto a la interposición del recurso de amparo por las víctimas en un proceso penal, afirman que son supuestos limitados relativos a la reparación del daño o a la responsabilidad civil y a resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o

desistimiento de la acción penal y no procede respecto de una sentencia considerada desfavorable.

26. Agregan que las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia antes referidas, no son vinculantes ni son recursos adecuados para remediar las violaciones a los derechos humanos denunciadas. Indican que la Suprema Corte intervino a través de una investigación de carácter extraordinario y ajeno a su función jurisdiccional.

B. El Estado

27. El Estado alega que la petición no debe ser admitida porque los peticionarios no han agotado los recursos internos disponibles, ya que la indagatoria continúa abierta. Asimismo, manifiesta que no se han configurado las excepciones para el no agotamiento de recursos internos.

28. Según el Estado, el 3 y 4 de mayo de 2006 hubo enfrentamientos entre la fuerza pública del Estado de México y la policía federal preventiva con comerciantes, pobladores y miembros de organizaciones civiles, por el desalojo de floricultores que se instalaron sin permiso en las afueras del mercado de Texcoco, Estado de México, lo que dio lugar a bloqueos de carreteras. Durante el enfrentamiento, 11 policías municipales y 6 civiles resultaron heridos, 207 civiles fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales.

29. Con motivo de los hechos, sostiene que se iniciaron investigaciones ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Estado de México. Según el Estado, a nivel federal, las investigaciones estuvieron a cargo de la FEVIM, que realizó 350 diligencias, entre declaraciones y ratificaciones de denuncias de las presuntas víctimas, dictámenes médicos-psicológicos, entre otros. Asimismo, manifiesta que se realizaron diligencias para determinar la presunta comisión del delito de tortura. Debido a que se determinó la probable responsabilidad de agentes estatales del ámbito local, el 15 de julio de 2009 se remitió a la Procuraduría del Estado de México, la totalidad de las constancias que conformaban la averiguación PGR/FEVIM/03/05-2006 y se acumuló en una misma averiguación en el fuero estatal (TOL/DR/I/466/2006). Esta averiguación en el fuero estatal fue abierta para investigar la probable comisión del delito de abuso de autoridad que pudiera ser atribuible a agentes del Estado. Paralelamente, la Procuraduría del Estado de México había dado inicio a otra averiguación TOL/DR/I/470/2006 en contra de quienes resulten responsables por los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo en Texcoco y San Salvador Atenco, que fue también acumulada a la averiguación TOL/DR/I/466/2006 por tratarse de hechos relacionados entre sí.

30. El Estado indica que se han desahogado diversas diligencias pero la complejidad del asunto ha retrasado el proceso penal. Asimismo, debido a falta de elementos para determinar la responsabilidad penal, la autoridad ministerial estatal acordó la reserva de la investigación el 8 de marzo de 2007. Posteriormente, señala que el 11 de febrero de 2008,

el agente del Ministerio Público habilitado para integrar las averiguaciones previas derivadas de los hechos ocurridos en Texcoco y San Salvador de Atenco volvió a acordar la reserva. El 1 de junio de 2010, se presentó un estudio jurídico de la indagatoria por la Dirección General de Visitadurías, en el que se ordenó su inmediata reapertura. Para ello se determinó sacar de la reserva la investigación reactivando el proceso penal, a fin de esclarecer la participación de los responsables. A partir de la reactivación, la Procuraduría del Estado de México ha tomado las declaraciones de 25 de los 30 elementos policíacos que iban en los tres autobuses donde se reportaron posibles abusos sexuales. Asimismo, detalla una serie de diligencias que se han sugerido practicar para avanzar en las investigaciones.

31. En cuanto al proceso penal instaurado contra un policía estatal por su probable responsabilidad por el delito de actos libidinosos en agravio de Ana María Velasco Rodríguez, informa que culminó con una sentencia absolutoria emitida por la Segunda Sala Unitaria Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

32. Igualmente se instauró un proceso penal contra diversos funcionarios estatales por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad en agravio de la administración pública (causa penal 59/2006). En este caso, sostiene que el 27 de noviembre de 2009 se declaró cerrada la instrucción y posteriormente (sin indicar fecha) se dictó sentencia absolutoria por falta de certeza jurídica respecto de la presunta comisión de los delitos imputados.

33. Según el Estado, no se ha obstaculizado la participación de los peticionarios en el proceso penal. Indica que si bien los peticionarios coadyuvaron en las investigaciones no siempre han colaborado. Específicamente, refiere a la negativa de algunas presuntas víctimas a someterse a la práctica del Dictamen psicológico para casos de posible tortura en aplicación del Protocolo de Estambul, lo que ha contribuido al retraso de las investigaciones.

34. Asimismo, manifiesta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en uso de sus facultades de investigación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizaron investigaciones con la finalidad de determinar posibles violaciones a los derechos humanos. Respecto de la investigación de la Suprema Corte, indica que se concluyó que existieron violaciones a la garantías individuales durante los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador de Atenco, pero dichas violaciones no fueron resultado del cumplimiento de instrucciones deliberadas de autoridades estatales, sino de una situación de facto que salió de su control.

35. En cuanto a la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indica que la CNDH envió a visitadores adjuntos y a peritos médicos adscritos a la Comisión al lugar de los hechos y al centro "Santiaguito" para realizar estudios valorativos, aplicando el Protocolo de Estambul. Señala que realizaron fichas individuales de las personas que fueron detenidas, incluidas las presuntas víctimas. Indica que en su informe preliminar de 22 de mayo de 2006 la CNDH documentó la existencia de posibles violaciones a los derechos humanos y en su recomendación 38/2006 emitió

recomendaciones a las autoridades del Estado de México y a otras autoridades. Afirma que posteriormente la CNDH reconoció que las autoridades estatales llevaron a cabo acciones suficientes para el seguimiento de las recomendaciones y las dio por cumplidas.

36. Respecto del agotamiento de los recursos internos, sostiene que no se han agotado los recursos internos y por tanto la petición debería ser declarada inadmisible. Específicamente, hace referencia a que los peticionarios no interpusieron el juicio de amparo indirecto y posteriormente el recurso de revisión en caso de no haber obtenido resultados favorables en la sentencia de amparo indirecto. Adicionalmente, en caso que se admitiera el amparo indirecto y se ordenara la reposición del procedimiento, si el juez dictara una sentencia definitiva desfavorable para los peticionarios procedería el amparo directo. Argumenta que la investigación penal se encuentra en marcha y reafirma su compromiso para continuar con las investigaciones hasta llegar a la verdad de los hechos, determinar responsabilidades individuales y sancionar a los responsables.

37. Respecto de la alegada falta de imparcialidad, aduce que se basa en declaraciones a medios de comunicación. Sobre la tipificación penal, manifiesta que el delito de tortura se encuentra tipificado en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de México promulgada en 1994. En cuanto al retardo injustificado, manifiesta que el caso en particular representa un desafío por las dificultades para establecer identidades específicas de probables responsables y vincularlos con actos determinados.

## IV. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD

### A. Competencia

38. Los peticionarios se encuentran facultados, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto de quienes el Estado de México se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que México es un Estado parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación, respectivamente. Asimismo, México ratificó la Convención de Belem do Pará el 12 de noviembre de 1998 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 22 de junio de 1987. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que habrían tenido lugar dentro del territorio de México, Estado Parte en dichos tratados.

39. La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura ya se encontraban en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos

alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

B. Requisitos de Admisibilidad

1. Agotamiento de los recursos internos

40. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, tener la oportunidad de solucionarla antes de que sea conocida por una instancia internacional. El artículo 46.2 de la Convención por su parte establece tres supuestos en los que no se aplica la regla del agotamiento de los recursos internos: a) que no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y c) que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Estos supuestos no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también que estos sean adecuados y efectivos.

41. En el presente caso, el Estado sostiene que la investigación de los hechos se encuentra pendiente, no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna y los peticionarios no interpusieron un juicio de amparo indirecto. Por su parte, los peticionarios argumentan que se aplica la excepción al agotamiento de los recursos de jurisdicción interna porque que existe un retardo injustificado.

42. La Comisión observa que han pasado cinco años desde que los hechos denunciados ocurrieron sin que a la fecha de la elaboración del presente informe, el Estado haya presentado información concreta sobre las medidas dispuestas para el avance de las investigaciones. A nivel federal, ambas partes han indicado que la FEVIMTRA declinó su competencia a favor del fuero estatal el 13 de julio de 2009, es decir, tres años después desde que se dio inicio a la investigación. Desde esa fecha hasta el 10 de marzo de 2010, cuando se remiten las actuaciones a la Dirección General de Visitadurías, la CIDH nota que según la información disponible la investigación estuvo inactiva. Paralelamente, en el ámbito estatal, la CIDH nota que la Mesa Primera de la Dirección de Responsabilidades de la Procuraduría del Estado de México abrió dos averiguaciones que fueron posteriormente acumuladas en la averiguación TOL/DR/I/466/2006 el 11 de mayo de 2006. Sin embargo, debido a la falta de elementos para determinar la responsabilidad penal así como tipificar el delito de tortura, el 8 de marzo de 2007, la autoridad ministerial acordó la reserva de la investigación.

43. Respecto de avances a partir del 10 de marzo de 2010 que conducirían a esclarecer los hechos y a sancionar a los responsables, el Estado sólo ha informado sobre la toma de declaración de 25 de los 30 elementos policíacos que iban en los autobuses donde se reportaron varias de las presuntas agresiones sexuales. Asimismo, se limita a mencionar algunas diligencias que se encuentran pendientes de realización, más no presenta información específica que permita concluir que la investigación esté tramitada oportunamente.

44. Por otro lado, la CIDH observa que sólo en 2 de las 11 denuncias presentadas en este caso, las autoridades han ejercido acción penal. En el caso de Ana María Velasco Rodríguez, el presunto agresor fue absuelto del cargo de "delitos libidinosos" mediante resolución de amparo de fecha 19 de febrero de 2009 que dejó sin efecto la sentencia y la resolución de segunda instancia que lo condenaba. Esta información no ha sido controvertida por el Estado. En el caso de María Patricia Romero, se abrió investigación por el delito de abuso de autoridad, pero no en agravio de la presunta víctima, sino de la administración pública, y el 15 de junio de 2006 se consignaron a 21 policías del Estado de México que fueron absueltos mediante sentencia de primera instancia del 19 de febrero de 2010. Esta información no ha sido controvertida por el Estado.

45. Sobre el particular, la CIDH observa que, en los casos en los que se alega tortura, que es un delito penal procesable de oficio en México, el recurso adecuado y efectivo es normalmente una investigación y proceso penal y el Estado tiene la obligación de promover e impulsar los mismos. En este caso ninguno de los procesos que se iniciaron fueron por el delito de "tortura" sino más bien por el delito "abuso de autoridad" o "actos libidinosos". Asimismo, observa que cuando se determinó la reserva de la investigación en el fuero estatal el 8 de marzo de 2007 se señaló la falta de elementos para tipificar el delito de tortura.

46. Respecto de la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CIDH observa que su intervención no fue de carácter jurisdiccional. Sobre la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CIDH nota que dicho organismo no es una instancia jurisdiccional y por tanto no constituye un recurso judicial en el sentido del artículo 46 de la Convención Americana.

47. La Comisión observa que, a más de 5 años de ocurridos los hechos materia de este caso, aún están siendo realizadas diversas diligencias de investigación a efectos de determinar responsabilidades. Considera la CIDH que dicho lapso es suficientemente extenso como para aplicar la excepción al agotamiento de los recursos domésticos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.2.c. de la Convención.

48. Sólo resta señalar que la invocación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos allí consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46.2, por su naturaleza y

objeto, es una norma con contenido autónomo, vis á vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cabe aclarar que las causas y los efectos que han impedido el agotamiento de los recursos internos en el presente caso serán analizados, en lo pertinente, en el informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente configuran violaciones a la Convención.

2. Plazo de presentación de la petición

49. Con relación al requisito contemplado en el artículo 46.1.b de la Convención, conforme al cual la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos, la Comisión considera que tampoco resulta aplicable el cumplimiento de tal plazo, toda vez que la petición fue presentada dentro del plazo razonable mencionado en el artículo 32.2 de su Reglamento para los casos en los cuales no se ha dictado sentencia firme con anterioridad a la presentación de la petición.

3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional

50. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.

4. Caracterización de los hechos alegados

51. La Comisión considera que no corresponde en esta etapa del procedimiento decidir si se produjeron o no las alegadas violaciones en perjuicio de las presuntas víctimas. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver en este momento únicamente si se exponen hechos que, de ser probados, caracterizarían violaciones a la Convención Americana, como lo estipula el artículo 47.b de la misma, y si la petición es "manifiestamente infundada" o si es “evidente su total improcedencia”, según el inciso (c) del mismo artículo.

52. El criterio para la apreciación de estos extremos es diferente al requerido para pronunciarse sobre los méritos de una denuncia. La CIDH debe realizar una evaluación prima facie y determinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención Americana, mas no establecer la existencia de dicha violación . En la presente etapa corresponde efectuar un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo. El propio Reglamento de la Comisión Interamericana, al establecer una fase de admisibilidad y otra de fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión Interamericana a fin de

declarar una petición admisible y la requerida para establecer si se ha cometido una violación imputable al Estado .

53. Asimismo, ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH exigen al peticionario identificar los derechos específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. Corresponde a la Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes de admisibilidad, qué disposición de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y podría establecerse su violación si los hechos alegados son probados mediante elementos suficientes.

54. En este caso, la CIDH considera que los hechos alegados respecto de las presuntas víctimas, en caso de resultar probados, podrían caracterizar presuntas violaciones de los derechos garantizados en los artículos 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento. Asimismo, considera que los hechos expuestos respecto de la naturaleza discriminatoria de la violencia sexual alegadamente ejercida contra las presuntas víctimas, así como el tratamiento que recibieron durante las detenciones y después como denunciantes, podría caracterizar una presunta violación al artículo 24 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Igualmente, la CIDH considera que los hechos expuestos podrían caracterizar posibles violaciones al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. La CIDH decide además declarar el caso admisible sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

V. CONCLUSIONES

55. La Comisión concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y decide continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 5, 7, 8, 11, 24 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, así como del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará respecto de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. La CIDH decide además declarar el caso admisible sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

56. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

2. Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 5, 7, 8, 11, 24 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, así como del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará respecto de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Asimismo, decide declarar el caso admisible sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

3. Notificar esta decisión a las partes.

4. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 2 días del mes de noviembre de 2011. (Firmado): Dinah Shelton, Presidenta; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González, Luz Patricia Mejía Guerrero y María Silvia Guillén, Miembros de la Comisión.

**INFORME NO. 20/12. PETICIÓN 1119-02. ADMISIBILIDAD. AURA DE LAS MERCEDES PACHECO BRICEÑO Y BALBINA FRANCISCA RODRÍGUEZ PACHECO. VENEZUELA. 20 DE MARZO DE 2012.**

I. RESUMEN

1. El 6 de mayo de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") recibió una petición presentada por la señora Aura de las Mercedes Pacheco Briceño (en adelante "la peticionaria") en la cual se alega la responsabilidad de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante "el Estado") por la denegación de justicia para remediar la mala praxis médica realizada en la clínica privada Centro Materno Infantil Policlínica La Concepción C.A. (en adelante "la Clínica") en la ciudad de Barquisimeto del Estado Lara, en perjuicio de su hija, la señora Balbina Francisca Rodríguez (en adelante "la presunta víctima" o "la señora Balbina Rodríguez").

2. La peticionaria sostiene que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial consagrados en los artículos 4, 5, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana"), en concordancia con los deberes de garantía y adoptar disposiciones de derecho interno, conforme a los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Por su parte, el Estado solicitó a la Comisión que declarara el caso inadmisible indicando que la causa se encontraba dentro del lapso legal para dictar el correspondiente acto conclusivo.

3. Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento con los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decidió declarar el caso admisible a efectos del examen del reclamo sobre la presunta violación de los artículos 5, 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Asimismo, decidió declarar inadmisible la petición respecto de la presunta violación de los artículos 4 y 24 del mismo instrumento, notificar a las partes y ordenar la publicación del informe.

II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4. La CIDH registró la petición bajo el número 1119-02 y, tras efectuar un análisis preliminar, el 14 de abril de 2005, transmitió las partes pertinentes al Estado para sus observaciones . El 17 de agosto de 2005, el Estado presentó su respuesta la cual fue trasladada a la peticionaria para sus observaciones. El 28 de septiembre de 2005, la peticionaria presentó su respuesta la cual fue trasladada al Estado para sus observaciones.

5. Mediante comunicación de 8 de agosto de 2006, la CIDH solicitó a las partes remitir información actualizada sobre el asunto de referencia. El 12 de octubre y 14 de diciembre

de 2006, la peticionaria presentó información actualizada, la cual fue trasladada al Estado para sus observaciones. El 10 de enero de 2007 el Estado presentó su respuesta la cual fue remitida a la peticionaria para su conocimiento.
6. El 16 de julio de 2007 la peticionaria presentó información adicional y manifestó su interés de buscar una solución amistosa. Mediante comunicación de 20 de agosto de 2007, la CIDH transmitió la información presentada al Estado e informó a ambas partes que, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de su Reglamento entonces vigente, había decidido ponerse a disposición de las partes con miras a alcanzar una solución amistosa del asunto y otorgándoles un mes para presentar sus observaciones. Mediante comunicación recibida el 29 de noviembre de 2007, la peticionaria reiteró su interés de buscar una solución amistosa y presentó información adicional, escrito que fue remitido al Estado para sus observaciones.

7. El 24 de septiembre de 2009, la peticionaria reiteró su interés en seguir el procedimiento de solución amistosa y presentó información adicional la cual fue trasladada al Estado para sus observaciones. El 2 diciembre de 2009, el Estado solicitó una prórroga para presentar su respuesta, la cual fue otorgada por la CIDH. El 3 de diciembre de 2010 y 15 de junio de 2011, se recibieron escritos de observaciones de la peticionaria los cuales fueron respectivamente trasladados al Estado para sus observaciones.

## III. POSICIÓN DE LAS PARTES

### A. La peticionaria

8. La peticionaria alega que su hija, la señora Balbina Rodríguez, quien para el momento de los hechos tenía 32 años de edad y ejercía la profesión de médico cirujano; habría sido víctima de tres actos de mala praxis médica practicados en el Centro Materno Infantil Policlínica La Concepción C.A . Indica que el primero de éstos consistió en una cesárea realizada el 13 de agosto de 1998, durante la cual presentó complicaciones ya que "la placenta no se desprendió espontáneamente" y los médicos procedieron a extraérsela "a tirones, rota y a pedazos", lo que le produjo una "intensa hemorragia", por lo que su hija quedó en "estado agonizante". Indica que el segundo acto se realizó el mismo día en horas de la tarde, al practicársele una "histerectomía parcial", luego de la cual la señora Balbina fue llevada a la Unidad de Terapia Intensiva "en sumo estado de gravedad" ya que presentó "hemorragia interna […..] ligadura y perforación de ambos uréteres", por lo que tuvo que ser sometida a una tercera operación en horas de la madrugada del 14 de agosto, en la que se le realizó "resección de cuello uterino […], desligamiento de ambos uréteres, ureterotomía con paso de catéteres uretrales y ligadura de ambas arterias hipogástricas".

9. Manifiesta que el tercer acto se realizó el día 19 de agosto de 1998, cuando se procedió a retirarle los catéteres uretrales que le habían sido previamente colocados, sin que hubiese transcurrido el tiempo necesario para que "el tejido uretral dañado se regenerara". La peticionaria indica que, como consecuencia de este último acto, el 20 de agosto de 1998, la señora Balbina tuvo que ser sometida a una cuarta intervención para colocarle nuevos catéteres uretrales, sin embargo el tejido uretral "no logr[ó] regenerarse en su totalidad",

por lo que fue sometida a una quinta operación el día 8 de febrero de 1999, en la cual se le practicó una "aplasia", reconstrucción de los uréteres, cierre de fístula en un riñón y fijación de la vejiga a músculo PSOAS de la pierna izquierda.

10. Alega que los hechos descritos provocaron consecuencias permanentes en la vida diaria de su hija, que implicaron varias intervenciones quirúrgicas y constante atención médica. Señala que la señora Balbina Rodríguez tuvo que permanecer "casi un año completamente inválida y reducida a silla de ruedas", y que si bien había recobrado la habilidad de caminar, debido a las "secuelas gravísimas, tanto físicas como psicológicas" que sufrió, su capacidad laboral se habría limitado de forma permanente.

11. Indica que por estos hechos, el 28 de enero de 1999, la señora Balbina Rodríguez interpuso una denuncia contra el doctor Julio César Zumeta, iniciándose de esta forma el proceso penal a nivel interno por las lesiones ocasionadas . Señala que pese a que el 28 de junio de 1999, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal del Estado Lara había dictado auto de sometimiento a juicio al doctor Zumeta por el delito de "lesiones culposas gravísimas", con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (en adelante "el COPP") en julio de 1999, la causa fue posteriormente remitida a conocimiento del Ministerio Público, tras lo cual alega que el proceso se habría retrotraído al inicio de la investigación, pese a que la misma ya había concluido, y se habría paralizado en la etapa inicial ("fase preparatoria") .

12. La peticionaria señala que en el curso de dicho proceso, actuó como apoderada judicial de su hija tratando, sin éxito, de impulsarlo, frente a presuntas dilaciones cometidas por las autoridades del sistema de administración de justicia . En ese sentido, alega que el Ministerio Público dejó transcurrir el tiempo a favor de que la acción penal prescribiera ya que no procedió a dictar, en un tiempo razonable, el acto conclusivo de la fase preparatoria . Alega que el resultado final del proceso penal dependía de la celeridad de su sustanciación por parte del Ministerio Público y los jueces, pero que al haberse presentado un retardo injustificado, los hechos habrían quedado impunes, y se le habría denegado el acceso a la justicia.

13. Señala que la Fiscalía presentó un primer acto conclusivo el 19 de octubre de 2001, mediante acusación proferida respecto de uno de los doctores sindicados, por el delito de "lesiones culposas gravísimas" y que la misma fue admitida por el Tribunal Séptimo de Control el 24 de septiembre de 2002, el cual procedió además a sobreseer a los otros tres doctores sindicados en el proceso. Indica que procedió a impugnar esta decisión presentando un recurso de apelación el 30 de septiembre de 2002. Señala que el 29 de septiembre de 2003, procedió a interponer un nuevo recurso de apelación sobrevenido, dado que hasta esa fecha la primera apelación presentada no había sido decidida. Sostiene que ambos recursos continuaron sin ser resueltos, por lo que el 18 de noviembre y 1 de diciembre de 2003, interpuso ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (en adelante "AMC"), acción de amparo constitucional y solicitud de medida cautelar innominada, respectivamente. Señala que el recurso terminó siendo decidido el 8 de diciembre de 2003 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial

Penal del AMC, la cual ordenó remitir la causa a la Fiscalía Superior del AMC para que se dictara un nuevo acto conclusivo respecto a todos los imputados en el proceso.

14. Señala que el acto conclusivo se presentó nuevamente el 21 de septiembre de 2006, por solicitud de sobreseimiento presentada por el Ministerio Público a favor de todos los imputados, que fue acordada por el Tribunal de Control en fecha 4 de junio de 2010. Indica que presentó un recurso de apelación contra dicho fallo, que fue anulado mediante decisión de alzada de 22 de noviembre de 2010. Sin embargo señala que, hasta junio de 2011, se encontraba pendiente la realización de la audiencia para que un nuevo Tribunal de Control se pronunciara sobre la solicitud de sobreseimiento .

15. La peticionaria alega que, a pesar de los distintos recursos que interpuso a lo largo del proceso penal, éstos eran decididos de forma tardía y no resultaron en la práctica un mecanismo efectivo para remediar los "actos de negligencia" cometidos, y para que los operadores del sistema de justicia cumplieran con los plazos y etapas procesales establecidas en la legislación. En ese sentido, señala que además de haber impugnado las referidas decisiones, ante la "inminente amenaza de denegación de justicia" y para evitar que la acción penal prescribiera, el 19 de junio de 2001 presentó también una acción de amparo constitucional, que alega no habría sido conocida de forma oportuna por la autoridad judicial competente. Aduce que el 9 de julio de 2001, interpuso ante el Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, nueva acción de amparo constitucional sobrevenido "solicitando que se rescatase la acción de amparo y fuese enviada directamente al juez competente" .

16. Señala que el recurso de amparo fue posteriormente declarado inadmisible por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión de 28 de mayo de 2003. Sostiene que si bien esta decisión resolvió que los actos realizados por la peticionaria constituían actos que interrumpían la prescripción de la acción penal, conforme a lo establecido en el artículo 110 del Código Penal venezolano, cuando el proceso se extiende por un tiempo igual al de la prescripción aplicable – que en el caso era de tres años-, más la mitad del mismo, sin que haya sido causado por culpa del imputado, opera la prescripción de la acción penal. En ese sentido, manifiesta que desde el 13 de agosto de 2006, habría operado la prescripción del delito, por lo que cualquier pronunciamiento judicial tendría "necesariamente [y] por seguridad jurídica", que pronunciarse en ese sentido, con lo cual ya no habría posibilidad de "obtener justicia" a nivel interno.

17. En consecuencia, la peticionaria alega que al haber quedado excluida la posibilidad de juzgamiento de los responsables de las lesiones ocasionadas, la señora Balbina Rodríguez también ha perdido la posibilidad de interponer una eventual acción civil de indemnización por daños y perjuicios, dada la prejudicialidad que exige la legislación venezolana para establecer responsabilidad civil derivada del delito.

18. De igual forma, la peticionaria plantea que conforme a lo establecido en el COPP, para este tipo de casos el tiempo que el Ministerio Público tenía para dictar el acto conclusivo de la fase preparatoria, era un "lapso discrecional", por lo que no habría

contado con un mecanismo idóneo para lograr que la Fiscalía cumpliera con el mandato establecido en la ley, de ejercer la acción penal respecto de la cual posee la titularidad. Indica que por su parte, el Código de Enjuiciamiento Criminal establecía que "en toda causa iniciable de oficio, cualquier particular, agraviado o no pod[ía] constituirse acusador ante cualquier Tribunal competente para la instrucción del sumario respectivo". En ese sentido, sostiene que con la entrada en vigencia del COPP, se habría causado un perjuicio al haber "despojado" a la presunta víctima de la posibilidad de ejercer e impulsar la acción penal, frente a la inactividad procesal de las autoridades del sistema de administración de justicia en el caso. Aduce que la celeridad del proceso quedó sujeta a la sustanciación que le diera el Ministerio Público y las autoridades judiciales, pero que particularmente por no haber existido "ninguna disposición legal que permi[tiera] obligar al Ministerio Público a ejercer la acción penal", la presunta víctima habría visto afectado su derecho a una efectiva protección judicial .

19. Finalmente, alega que con este nuevo sistema procesal, el Ministerio Público "solamente ejerce [la] acción penal" en ciertos casos, por lo que alega que no habría recibido un trato de igual protección ante la ley frente a la causa iniciada por las lesiones causadas a su hija.

B. El Estado

20. En respuesta al reclamo de la peticionaria, el Estado sostiene que la petición debe ser declarada inadmisible, sin embargo no presenta argumentos concretos al respecto.

21. En su escrito inicial el Estado realizó un recuento de las actuaciones realizadas por las autoridades judiciales internas. Señaló que el 18 de enero de 1999 fue iniciado el proceso a nivel interno por la denuncia presentada por la señora Balbina Rodríguez, por el delito de "lesiones culposas gravísimas" y bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, posteriormente derogado por el Código Orgánico Procesal Penal. Indicó que el 2 de julio de 2005, la Fiscalía Octava y Trigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, había dictado el acto de imputación a los doctores Grover Castellón Céspedes, Marlene Ramírez Mujica, Manuel Alfredo Alvarado y Alexis Manuel Lamus, por el delito de "lesiones personales gravísimas", y que la causa se encontraba "dentro del lapso legal" para que el Ministerio Público dictara el acto conclusivo correspondiente.

22. Posteriormente informó que el 21 de septiembre de 2006, los referidos Fiscales del Ministerio Público habían solicitado el sobreseimiento a favor de los doctores Julio César Zumeta y Alexis Manuel Lamus, dado que la acción penal "se encontraba evidentemente prescrita"; y respecto de los doctores Grover Castellón Céspedes, Marlene Ramírez Mujica y Manuel Alfredo Alvarado, en vista de no habérseles podido atribuir la comisión del hecho punible. Indicó que el proceso se encontraba a la espera de la decisión que debía dictar la autoridad jurisdiccional competente sobre el sobreseimiento presentado.

IV. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

A. Competencia de la Comisión ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci

23. La peticionaria se encuentra facultada, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto de quien el Estado venezolano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la República Bolivariana de Venezuela es Estado parte en la Convención Americana desde el 8 de septiembre de 1977, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae y ratione temporis para examinar la petición.

24. La CIDH tiene competencia ratione loci y ratione materiae para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos humanos establecidos en la Convención Americana, que se habrían perpetrado dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, Estado parte de dicho tratado.

B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

1. Agotamiento de los recursos internos

25. El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana exige el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de reclamos sobre la presunta violación de la Convención Americana. Por su parte, el artículo 46(2) de la Convención prevé que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando (i) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; (ii) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; o (iii) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

26. En el presente caso, el Estado indicó en su respuesta inicial que, tras haberse presentado la solicitud de sobreseimiento por parte del Ministerio Público el 21 de septiembre de 2006, respecto de todos los sindicados en el proceso penal iniciado a nivel interno, la causa se encontraba pendiente de la decisión que debía dictar la autoridad judicial correspondiente. Por su parte, la peticionaria indicó que la referida solicitud de sobreseimiento fue acordada por el respectivo Tribunal de Control, y que en fecha 22 de noviembre de 2010, se declaró la nulidad absoluta de dicha actuación y se ordenó remitir la causa a otro juzgado, encontrándose para el mes de junio de 2011, aún pendiente la celebración de la respectiva audiencia para que el Tribunal se pronunciara sobre la solicitud de sobreseimiento.

27. A efectos de la admisibilidad del presente caso y según la información disponible, la Comisión observa que el proceso penal iniciado era un recurso idóneo, y que no existe controversia entre las partes al respecto. La legislación venezolana tipifica el delito de lesiones personales en su Código Penal, y se exige que dicha acción, al ser de carácter público, debe ser perseguida de oficio. Al respecto, la peticionaria alega que el proceso penal entablado en representación de su hija, prescribió trascurrido el tiempo establecido en la ley. Durante ese período, la demandante presentó una serie de recursos destinados por una parte, a evitar que operara la prescripción de la acción penal y por la otra, a remediar la falta de celeridad procesal por parte de las autoridades que conocían la causa a nivel interno.

28. La CIDH observa que el reclamo de la peticionaria sobre el fondo gira en torno a la presunta falta de garantía del deber de protección judicial mediante el acceso a recursos rápidos y efectivos. Concretamente, se refiere al alegado retardo injustificado en la resolución del proceso por las lesiones personales causadas a su hija por los actos de mala práctica médica, iniciado el 28 de enero de 1999, el cual alega, habría prescrito el 13 de agosto de 2006, por la falta de actividad de la administración de justicia. La Comisión observa que, de la información aportada por las partes, a la fecha de elaboración del presente informe, no existiría a nivel interno una decisión firme sobre el resultado del referido proceso penal. En ese sentido, la Comisión considera que el alegato de la peticionaria se enmarca dentro de la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46.2.c de la Convención el cual establece dicha excepción se aplica cuando "haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos".

29. Por otra parte, la Comisión nota que el Estado no ha presentado información para desvirtuar los alegatos de la peticionaria en cuanto al presunto retardo injustificado en el proceso penal interno.

30. Por lo tanto, dadas las características del presente caso, el lapso transcurrido desde los hechos materia de la petición, y que no exista una decisión firme en el referido proceso penal iniciado en el año 1999, la Comisión considera que resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana respecto del retardo en el desarrollo del proceso penal interno, por lo cual el requisito previsto en materia de agotamiento de recursos internos no resulta exigible.

31. La invocación de las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos en ella consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46.2, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo vis à vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos resultan aplicables al caso debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la posible violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.

2. Plazo para presentar la petición

32. La Convención Americana establece que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva. En el reclamo bajo análisis, la CIDH ha establecido la aplicación de las excepciones al agotamiento de los recursos internos conforme al artículo 46(2)(c) de la Convención Americana. Al respecto, el artículo 32 del Reglamento de la Comisión establece que en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.

33. En el presente caso, los hechos materia del reclamo se iniciaron en el mes de agosto de 1998 y la petición fue recibida el 6 de mayo de 2002, cuando dentro del proceso penal, aún estaba pendiente que el Ministerio Público presentara el acto conclusivo de la fase preparatoria establecido en la legislación venezolana, habiendo tenido conocimiento de la causa desde el mes de julio de 1999. Asimismo se encontraba pendiente la resolución del recurso de amparo presentado por la peticionaria el 9 de julio de 2001, y respecto del cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia había avocado conocimiento desde el 6 de enero de 2002. Por lo tanto, teniendo en cuenta las circunstancias del caso en cuestión, en particular el curso del proceso penal interno y los argumentos sobre una presunta demora indebida y la denegación de justicia, la Comisión Interamericana concluye que la petición fue presentada dentro de un período razonable, con lo cual se satisface el requisito dispuesto en el artículo 32.2 de su Reglamento.

3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales

34. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención.

4. Caracterización de los hechos alegados

35. Frente a los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la Comisión encuentra que en el presente caso corresponde establecer que las alegaciones de la peticionaria podrían caracterizar

violaciones a los derechos protegidos en los artículos 5, 8 y 25 en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de la señora Balbina Rodríguez y de su madre, la señora Aura de las Mercedes Pacheco Briceño.

36. Asimismo, la Comisión observa que los alegatos expuestos por la peticionaria en cuanto al deber de adoptar disposiciones de derecho interno en los términos del artículo 2 de la Convención Americana, específicamente lo relacionado con el contenido del Código Orgánico Procesal Penal venezolano sobre las normas que rigen la actuación del Ministerio Público, requieren de un análisis de fondo, dado que plantean cuestiones relacionadas con el alcance de la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención, en relación con los derechos contenidos en los artículos 8.1 y 25 del mismo instrumento.

37. Finalmente, la Comisión considera que la peticionaria no ha presentado elementos básicos que establezcan prima facie sus reclamos por una potencial violación de los derechos a la vida y de igual protección ante la ley, protegidos por los artículos 4 y 24 de la Convención Americana, respectivamente. En consecuencia, la CIDH declara que esta alegación es inadmisible respecto de dichos alegatos, de conformidad con el artículo 47.b de la Convención Americana.

## V. CONCLUSIONES

38. La Comisión concluye que es competente para examinar los reclamos presentados por el peticionario sobre la presunta violación de los artículos 5, 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y que éstos son admisibles, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Asimismo, concluye que corresponde declarar inadmisibles los reclamos respecto de la presunta violación de los artículos 4 y 24 de la Convención Americana.

39. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos y sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo del asunto,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1. Declarar admisible el presente caso respecto de los artículos 5, 8 y 25, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana.

2. Declarar inadmisible el presente caso con relación a los artículos 4 y 24 de la Convención Americana.

3. Notificar esta decisión al Estado venezolano y a la peticionaria.

4. Continuar con el análisis del fondo de la cuestión.

5. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 20 días del mes de marzo de 2012. A favor: José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente, Rodrigo Escobar Gil, Rosa María Ortiz; y Rose-Marie Belle Antoine (en disidencia), Miembros de la Comisión.

## SOBRE LOS COMPILADORES Y EDITORES

**José Israel Herrera**

El autor de esta compilación es Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán Posee un PhD por la Universidad de Ámsterdam. Es Maestro en Ciencias Antropológicas (2006) y Licenciado en Derecho (2000) ambos por la Universidad Autónoma de Yucatán .Ha sido Perito en materia de Antropología en el Estado de Yucatán a nivel federal. Ha recibido diversos premios por sus actividades de investigación y difusión por instituciones como el Premio Youth Action Network de la International Youth Foundation (Londres, 2005). Es ganador del Premio Estatal de la Juventud del Estado de Yucatán por actividades académicas (Mérida, 2005). Ha sido director y colaborador de diversos proyectos de investigación para Manejo Cultural AC, en materia de legislación, patrimonio cultural, desastres naturales, desarrollo sustentable y medio ambiente. Asimismo es autor de diversos artículos en materia de derechos indígena y desarrollo cultural. Entre estas destaca el libro Peritaje Antropológico: sus realidades e imaginarios como prueba judicial federal.
Puede ser contactado en: israel.herrera@uady.mx

**Rina Basora Trejo**

Es profesora de carrera asociado “C” tiempo completo de la Facultad de Derecho de la universidad autónoma de Yucatán. Ha impartido las materias de derecho y administración municipal en los cursos con opción a titulación de la licenciatura de la facultad de derecho de la universidad autónoma de Yucatán; profesora de las materias técnicas de la investigación, lógica jurídica, teoría general del derecho y técnica jurídica en la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán; profesora de metodología jurídica de las especializaciones en derecho con opciones en civil y fiscal; profesora de metodología de la investigación jurídica y seminario de tesis I, II y III en la Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pertenece a la asociacion de mujeres Profesionales del Derecho de Yucatán “Antonia Jimenez Trava” A.C. (asociada fundadora).

**Geofredo Angulo López**

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Modelo de Mérida, es Doctor en Derechos Fundamentales Cum Lauden por la Universidad de Jaén Andalucía España, tiene un Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, por la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. Tres cursos de especialización en Derechos Humanos del Programa Regional de Apoyo a la Defensoría del Pueblo en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha recibido el Primer lugar del Concurso estatal de Ensayo Jurídico «La impartición de Justicia en el Nuevo Contexto Constitucional». 2012. Ha participado en Conferencias, Maestrías, Diplomados, Seminarios, talleres, Congresos, Jornadas, y cursos formativos sobre temas actuales de Derechos Humanos. En la actualidad es Asesor Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y Profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.

